

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Eclesiástico



TESIS DOCTORAL

Régimen jurídico de los ministros de culto en la Argentina

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Juan Gregorio Navarro Floria

Director

Javier Martínez-Torrón

Madrid, 2018

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO ECLESIAÍSTICO DEL ESTADO



TESIS DOCTORAL

Régimen jurídico de los ministros de culto en la Argentina

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Juan Gregorio NAVARRO FLORIA

Director
Javier MARTÍNEZ-TORRÓN

Madrid, 2017

Tabla de contenido

LISTA DE ABREVIATURAS	9
RESUMEN	11
Capítulo 1. Introducción	13
Capítulo 2. Concepto jurídico de ministro religioso o de culto.....	19
2.1. Doctrina.....	21
2.2 Legislación	25
2.3 Proyectos de ley.....	26
2.4 Jurisprudencia.....	28
2.5 Derecho comparado.....	31
2.6 Conclusiones.....	37
Capítulo 3. Los ministros de culto en las diferentes confesiones	41
3.1 Iglesia Católica	41
3.1.1. Clérigos	42
3.1.2 Religiosos.....	46
3.1.3 “Ministerios laicales”	47
3.1.4 Seminaristas	48
3.2 Iglesia Ortodoxa.....	49
3.3 Iglesias protestantes y evangélicas	51
3.3.1 Iglesia anglicana.....	52
3.3.2 Iglesias luteranas y protestantes europeas	53
3.3.3 Iglesia metodista	54
3.3.4 Iglesias bautistas.....	55
3.3.5 Iglesias evangélicas y pentecostales.....	56
3.4 Judaísmo	57
3.4.1 Sacerdocio y ministerio en la Biblia.....	57
3.4.2 Ministerio en los tiempos modernos.....	59
3.5 Islam.....	61
3.6 Otras confesiones religiosas	63
3.6.1 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones).....	63
3.6.2 Iglesia adventista	67
3.6.3 Testigos de Jehová.....	68
3.6.4 Ciencia Cristiana	69
3.6.5 Budismo.....	69
3.6.6 Hinduismo	71
3.6.7 Religiones afroamericanas	72
3.6.8 Religiones de pueblos originarios.....	73
3.7 Conclusiones.....	77
Capítulo 4. Derechos políticos de los ministros de culto.....	81
4.1 Ciudadanía.....	82

4.2 Restricciones al acceso a cargos públicos.....	84
4.2.1 Prohibición a los eclesiásticos regulares de ser miembros del Congreso	86
4.2.2. Prohibiciones en constituciones provinciales	90
4.2.3. Derecho canónico.....	91
4.3 Derechos y deberes electorales. Participación en partidos políticos.	94
4.4 Derecho comparado	98
4.5 Participación como magistrado o jurado judicial.....	104
4.5.1 Jueces o magistrados	104
4.5.2 Jurados	105
4.6 Ejercicio del notariado	110
4.7 Otras inhabilidades o restricciones profesionales	112
4.8 Conclusiones	113
<i>Capítulo 5. Los ministros de culto ante el derecho privado.</i>	<i>115</i>
5.1 Restricciones a la capacidad civil	116
5.1.1 Incapacidad genérica de los religiosos para contratar	117
5.1.2. Otras incapacidades civiles específicas de los religiosos.....	122
5.1.3. Ejercicio del comercio	123
5.1.4 Incapacidades en el derecho sucesorio.....	127
5.1.5 Otras incapacidades civiles.....	136
5.2 Ministros de culto y derecho de familia	138
5.2.1 Matrimonio de los ministros de culto	138
5.2.2 Filiación y responsabilidad parental.....	140
5.2.3 Adopción	144
5.2.4. Tutela y curatela.....	146
5.3 Responsabilidad civil de los ministros de culto	147
5.4 Domicilio de los eclesiásticos.	152
5.5 Conclusiones	153
<i>Capítulo 6. Los ministros de culto en el derecho penal.....</i>	<i>155</i>
6.1 Protección penal al ejercicio del ministerio.....	156
6.1.1. Derecho comparado.....	157
6.1.2. Antecedentes nacionales	159
6.1.3. Legislación vigente	160
6.2 Agravantes y delitos específicos.....	162
6.2.1. Delitos contra la integridad sexual:.....	163
6.2.2. Violación de secreto religioso:	172
6.2.3 Trata de personas y promoción de la prostitución	174
6.2.4 Otros delitos cometidos por clérigos: matrimonios ilegales.	176
6.2.5 Derecho comparado.....	177
6.3 Normas contravencionales.....	180
6.3.1. Obstáculos al ejercicio del ministerio religioso	181
6.3.2. Uso indebido de hábitos, insignias o títulos religiosos.....	182

6.3.3. Explotación de la credulidad pública.....	184
6.4. Juzgamiento de ministros de culto y ejecución de las penas	186
6.5 Obligación de denunciar delitos.....	186
6.6 Conclusiones	188
<i>Capítulo 7. Régimen laboral, previsional y fiscal de los ministros de culto</i>	<i>191</i>
7.1 Situación laboral de los ministros de culto	191
7.1.1 En relación con la propia confesión religiosa	191
7.1.2 En relación con terceros	196
7.1.3 Derecho comparado:	197
7.2 El caso de los religiosos (católicos)	200
7.3. Situación previsional de los ministros religiosos	203
7.3.1. Régimen ordinario de jubilación estatal.....	205
7.3.2. Regímenes especiales no contributivos	208
7.3.3. Pérdida de derechos previsionales por el estado religioso	215
7.3.4. Derecho comparado	217
7.4 Situación fiscal de los ministros de culto	218
7.5 Conclusiones	220
<i>Capítulo 8. Los ministros de culto ante el Derecho Procesal. Secreto religioso y secreto de confesión.</i>	<i>223</i>
8.1 Juzgamiento de los ministros religiosos.....	224
8.1.1 Inexistencia del “fuero eclesiástico”	225
8.1.2 Cumplimiento de condenas.....	229
8.2 El secreto religioso y de confesión y su incidencia en el proceso judicial.....	230
8.3 Declaración en juicio del ministro religioso. Obligación de declarar.	235
8.3.1 Procedimiento penal	237
8.3.2 Procedimiento civil	239
8.4 Alcance del secreto religioso.....	242
8.5 Protección del secreto religioso y de confesión.	245
8.5.1 Procedimiento penal	245
8.5.2 Procedimiento civil	254
8.6 Derecho internacional y comparado	256
8.7 Obligación de denunciar delitos cometidos por ministros de cultos	259
8.8. Conclusiones	262
<i>Capítulo 9. Obligaciones militares y ministros de culto.....</i>	<i>265</i>
9.1 Servicio militar	265
9.1.1. Excepción al servicio militar	266
9.1.2. Caso de movilización general:	271
9.1.3. Clérigos católicos: Acuerdo con la Santa Sede:	272
9.1.4. Servicio militar voluntario	273

9.2 Capellanías castrenses	274
9.2.1 Capellanes castrenses católicos. El Obispado Castrense.	275
9.2.2 Ministros de culto no católicos	283
9.2.3 Derecho comparado.....	283
9.3 Código de Justicia Militar	286
9.4 Ministros religiosos en tiempo de guerra.....	288
9.5 Conclusiones	293
<i>Capítulo 10. Ejercicio del ministerio religioso en situaciones de especial sujeción</i>	<i>295</i>
10.1 Atención de enfermos y capellanías hospitalarias	298
10.2 Asistencia religiosa a personas privadas de libertad	303
10.2.1 Normas federales	305
10.2.2 Legislación provincial argentina	308
10.3 Bomberos voluntarios.....	321
10.4 Lugares de enseñanza	322
10.5 Conclusiones	325
<i>Capítulo 11. Los ministros de culto en relación a sus confesiones de pertenencia</i>	<i>329</i>
11.1 Selección y designación de ministros de culto.....	330
11.2 Derechos y obligaciones de los ministros religiosos	335
11.3 Inexistencia de relación laboral: remisión.....	337
11.4 Autonomía y jurisdicción interna de las confesiones. Régimen disciplinario..	337
11.5 Responsabilidad civil de las comunidades religiosas por actos de sus ministros de culto	344
11.5.1 Diócesis de la Iglesia Católica y sus clérigos	350
11.5.2 Parroquias de la Iglesia Católica	353
11.5.3 Institutos de Vida Consagrada de la Iglesia Católica	353
11.5.4 Confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica	355
11.6 Formación de los ministros religiosos: seminarios y seminaristas	356
11.6.1. Concepto o definición de “seminarista”	357
11.6.2. Servicio militar de seminaristas.....	358
11.6.3. Registro de seminaristas por parte de la autoridad pública	358
11.6.4. Aporte económico estatal a la formación del clero	359
11.6.5. Seminaristas y régimen migratorio	361
11.6.6 Los estudios de los seminaristas	362
11.7. Sindicalización de ministros de culto	362
11.8 Conclusiones	363
<i>Capítulo 12. Los ministros de culto ante la Administración Pública.</i>	<i>367</i>

12.1 Intervención del Estado en la designación o elección de los ministros de culto	368
12.1.2 El caso de las restantes confesiones religiosas.....	479
12.1.1 El caso de los obispos de la Iglesia Católica	376
12.2 Remoción de ministros religiosos.....	494
12.3 Identificación de los ministros religiosos	496
12.3.1 Pasaportes oficiales	501
12.4 Remuneraciones y otorgamiento de otras facilidades para el ministerio	502
12.4.1 Asignación para los obispos católicos	502
12.4.2 Asignación para "párrocos de frontera"	504
12.4.3 Otras asignaciones y facilidades	505
12.5 Régimen migratorio de los ministros de culto.....	507
12.5.1 Régimen migratorio de los ministros de culto católicos en particular	515
12.5.2. Ministros de culto no católicos.....	520
12.6 Ubicación protocolar de los ministros de culto	403
12.7 Los ministros de culto al servicio de la Administración Pública.....	407
12.7.1 Antecedente: el Patronato nacional.....	527
12.7.2 Los capellanes en la Administración Pública.	531
12.7.3 Capellanes policiales.....	413
12.7.4 Ejercicio de funciones públicas por los capellanes: los testamentos militares	416
12.8 Ejercicio de funciones públicas por parte de ministros de culto.....	419
12.9 Integración de comisiones asesoras o consultivas.....	421
12.10 Conclusiones	554
Capítulo 13. Ministros de culto y medios de comunicación	557
Capítulo 14. Conclusiones generales	563
BIBLIOGRAFIA.....	575
JURISPRUDENCIA CITADA.....	587
I. TRIBUNALES INTERNACIONALES	587
II. TRIBUNALES NACIONALES	587
ELENCO DE NORMAS LEGALES CITADAS.....	593
I. NORMAS NACIONALES	593
II. NORMAS INTERNACIONALES.....	- 604 -

LISTA DE ABREVIATURAS

AADC	Anuario Argentino de Derecho Canónico
ADEE	Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado
ADLA	Anales de Legislación Argentina
AFIP	Administración Federal de Ingresos Públicos
Art./art.	Artículo/artículo
AyS	Revista Acuerdos y Sentencias
BM	Boletín Municipal
BO	Boletín Oficial
BOCBA	Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Bs.As.	Buenos Aires
c./cc.	canon/cánones
C1ªApCrimParaná	Cámara Primera de Apelación en lo Criminal de Paraná
CABA	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CCAyT	Cámara Contencioso Administrativo y Tributario
CCasPen	Cámara de Casación Penal
CCiv	Cámara Civil
CCiv.Com	Cámara Civil y Comercial
CEA	Conferencia Episcopal Argentina
CFed	Cámara Federal
CIC	Código de Derecho Canónico
CN	Constitución Nacional
CNFedContAdm	Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo
CNFedCrim.yCorr	Cámara Federal en lo Criminal y Correccional
CFedSegSoc	Cámara Federal de la Seguridad Social
CNCiv	Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
CNCrim.Corr.	Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional
CNElec	Cámara Nacional Electoral
CNSegSoc.	Cámara Nacional de la Seguridad Social
CNTrab	Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CS	Corte Suprema
DJ	Revista Doctrina Judicial
DJBA	Revista Doctrina Judicial de la Provincia de Buenos Aires
ED	Revista El Derecho
EDCO	Revista El Derecho - Derecho Constitucional
EDLA	Revista El Derecho - Legislación Argentina
ElDial	Revista Electrónica El Dial
Exp./exp.	Expediente/expediente
FALLOS	Colección de Fallos de la Corte Suprema de Justicia
Fed	Federal

GCBA	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
inc.	Inciso
Infojus	Portal de información jurídica INFOJUS
JA	Revista Jurisprudencia Argentina
JNFedContAdm	Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
JFedSegSoc	Juzgado Federal de la Seguridad Social
LL	Revista Jurídica Argentina La Ley
LLBA	Revista Jurídica La Ley - Provincia de Buenos Aires
LLNOA	Revista Jurídica La Ley – Nor Oeste
LL Litoral	Revista Jurídica La Ley - Litoral
LT	Revista Legislación del Trabajo
OJLR	Oxford Journal of Law and Religion
QDPE	Revista Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica
REDC	Revista Española de Derecho Canónico
RGDCEE	Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado
RN	Registro Nacional
Res.	Resolución
SCJ	Suprema Corte de Justicia
STJ	Superior Tribunal de Justicia
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
T.O./t.o.	Texto ordenado
TOC	Tribunal Oral en lo Criminal
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
TySS	Revista Trabajo y Seguridad Social

RESUMEN

La presente tesis indaga acerca del concepto de ministro religioso o ministro de culto en el Derecho de la República Argentina, en una perspectiva comparada especialmente con el Derecho de los países de la región. Para ello se ha investigado tanto la legislación federal o nacional, como la legislación provincial, y la jurisprudencia existente en la materia. Y en la medida de lo posible, también se examina y da cuenta de la legislación vigente en otros países de la región. La hipótesis, que ha podido ser verificada, es que el concepto de ministro de culto es central en la construcción del Derecho Eclesiástico del Estado, dado que prácticamente todas las ramas del Derecho presentan alguna consideración respecto de las personas comprendidas en ese concepto.

La pregunta es entonces si ese concepto está suficientemente definido en el Derecho argentino. La conclusión es ambigua. Se advierte en la normativa más antigua una atención casi exclusiva a los clérigos y religiosos católicos, erigidos en paradigma del ministro de culto. Con el correr del tiempo, el ordenamiento jurídico ha ido tomando razón de manera progresiva de la existencia de una variedad extensa de ministros de culto, que no solamente difieren en sus denominaciones sino en sus modos de acceder a esa condición y en su forma de relación con las confesiones religiosas a las que pertenecen. Esa verificación obliga a la construcción de un concepto abstracto de ministro de culto por parte del Derecho estatal, que es una tarea aún en desarrollo y que se ha dado con mayor eficacia en unas ramas del Derecho que en otras.

La atención a la diversidad de ministros de culto, como consecuencia de la diversidad y pluralidad religiosa existente en la sociedad, se presenta como una exigencia del respeto debido a la libertad religiosa, y específicamente a la autonomía de las confesiones religiosas, que son las únicas que pueden delimitar el concepto de sus propios ministros de culto.

ABSTRACT

This thesis deals with the concept or “religious minister”, or “minister of worship”, in the Law of the Argentine Republic in a comparative perspective, regarding mainly the countries of Latin America. For this purpose, has been investigated both the federal or national Law, as the provincial legislation and the existing jurisprudence in both levels. And to the extent possible, also discusses and give a notice of the legislation in force in the countries of the region. The hypothesis that has been verified, it is that the

concept itself of Religious Minister is crucial for the construction of the Ecclesiastical Law of the State, given that virtually all branches of the Law give some kind of consideration to the persons covered by that concept.

The question then is whether this concept is sufficiently defined in Argentine law. The conclusion is ambiguous. We can find in the oldest legislation almost exclusive attention to clergy and Catholics religious, erected in paradigm of the Minister of worship. Along the time, the legal system has been taking reason in a progressive way of the existence of a vast variety of Ministers of worship, which not only differ in their denominations but in their ways of access to this condition, and in its relationship with the religious denominations to which they belong. This verification requires the construction of an abstract concept of Minister of worship by the State law, which is still on progress and which has been given more effectively in some branches of the law than in others.

Attention to the diversity of Ministers of worship, as a result of the diversity and religious plurality existing in society, emerges as a requirement of respect that religious freedom deserves. Religious denominations are the only ones which can delimit the concept of their own Ministers of worship, within the frame of their autonomy.

Capítulo 1. Introducción

El presente trabajo está dirigido a indagar, y presentar ordenadamente, qué es lo que el ordenamiento jurídico dice acerca de un grupo de personas, a quienes denominamos genéricamente "ministros religiosos", o "ministros de culto". Ese rótulo corresponde a un conjunto relativamente heterogéneo, en el que encontraremos a sacerdotes, obispos y cardenales, pastores, rabinos, imames, monjes de diverso tipo, y en general personas (varones y mujeres) que cumplen tareas relevantes y específicas en el seno de las iglesias y comunidades religiosas, y por lo tanto, de la sociedad. Se trata de perfilar cual puede ser el estatuto jurídico de tales ministros de culto, particularmente en el Derecho argentino.

Los ministros de culto, con sus funciones específicas en el interior de sus propias confesiones religiosas, pero también por el rol externo que les corresponde de cara al resto de la sociedad, constituyen una de las varias formas de presencia de "lo religioso" en el ámbito público y en la vida social. Esa presencia es notable no solamente porque a veces usen vestimentas especiales y llamativas (lo que al fin y al cabo no pasaría de lo anecdótico), sino porque su sola existencia y acción hacen presente esa dimensión de la vida, que es la religiosa. "Lo religioso" aflora también en lugares (como los templos o espacios dedicados al culto), tiempos (como determinadas fiestas, o días especialmente destinados al culto o al descanso), signos y símbolos, costumbres, normas de conducta... El Derecho, como ordenador y regulador de la actividad humana, no puede dejar de prestar atención a estas múltiples presencias y manifestaciones de una dimensión particularmente significativa de la vida de las personas. Lo puede hacer para prohibirlas o restringirlas (en cuyo caso, seguramente se estaría violando una libertad esencial de las personas, nacida de la dignidad propia del ser humano, como es la libertad religiosa), o para favorecerlas. La rama o parcela del Derecho que se ocupa del tratamiento jurídico de este fenómeno, se ha llamado en los países de nuestro ámbito cultural "Derecho Eclesiástico", "Derecho Eclesiástico del Estado", o "Derecho de las religiones".

El Derecho Eclesiástico es una disciplina jurídica poco desarrollada y consolidada en la República Argentina (y en general en América Latina), a diferencia de lo que ocurre en otros países, como España, Italia o Alemania. Eso no quiere decir que no exista, sino que existe de modo

fragmentado y poco evidente. Sus distintos capítulos son estudiados desde puntos de vista diferentes (y parciales) por otras ramas del Derecho: desde el derecho constitucional hasta el derecho civil, pasando por el derecho laboral, el administrativo, el militar, el previsional, el tributario, el internacional... La hoy tan popular “transversalidad” es una característica del Derecho Eclesiástico, ya que sus normas e instituciones afloran en las diversas ramas y disciplinas jurídicas. Lo que ordinariamente falta es por una parte una legislación coherente, y por otra un estudio sistemático, con cierta autonomía académica.

Tal estudio sistemático, que incluye cuando es preciso el recurso al derecho comparado, tiene una ventaja, o al menos una potencialidad: que esos fragmentos se iluminen unos a otros, y al relacionarse, permitan dar respuestas más homogéneas y más respetuosas de algunos principios rectores que suelen invocarse en esta área del Derecho, ya sea por imperativo constitucional, ya por exigencia del derecho internacional de los derechos humanos, ya por ambas razones. Esto, aunque tales principios no hayan sido explicitados como tales, como ocurre en el Derecho argentino. Esos principios son el respeto de la libertad religiosa, la neutralidad del Estado, la no discriminación por razones religiosas, la cooperación del Estado con las confesiones religiosas. No es éste el lugar de desarrollarlos, pero no es ocioso mencionarlos¹.

La exposición conjunta de las normas vigentes referidas a los ministros de culto, y de su interpretación y aplicación por parte de la jurisprudencia, permite también advertir las inconsistencias y lagunas del ordenamiento jurídico estatal. En pocos temas como en el que aquí nos ocupa, se advierte con tanta claridad la “conformación aluvional” del Derecho Eclesiástico del Estado en la Argentina y en América Latina. En efecto, notaremos cómo coexisten regulaciones formuladas un siglo y medio atrás (y con raíces aún más antiguas), con otras muy recientes. En ese lapso, han ocurrido modificaciones sustanciales en el marco institucional, y también en la sociedad, que sin embargo no siempre se ven reflejadas de modo adecuado en las normas inferiores.

¹ Ver al respecto NAVARRO FLORIA, Juan G, PADILLA, Norberto y LO PRETE, Octavio, “Derecho y religión. Derecho Eclesiástico Argentino”, Buenos Aires, EDUCA, 2014, p.38 ss.; MARTÍNEZ TORRON, Javier, “Religión, derecho y sociedad”, Granada, Comares, 1999, pp. 172 ss.. El tema fue elaborado por VILADRICH, Pedro Juan, en su obra “Derecho Eclesiástico del Estado Español”, Pamplona, Eunsa, 1980, pp. 211 ss., y desarrollado entre otros por FERRER ORTIZ, Javier, “Los principios constitucionales del Derecho eclesiástico como sistema”, en “Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en Memoria de Pedro Lombardía”, Madrid, Edersa, 1989, pp. 309 ss.

En el siglo XIX, cuando Dalmacio VÉLEZ SARSFIELD escribió el Código Civil que se mantuvo vigente desde 1871 hasta 2015, en la práctica no había en la Argentina otros ministros de culto distintos de los católicos, y algunos pastores protestantes. Y como regía en todo su esplendor la doctrina del Patronato nacional, esos sacerdotes católicos eran considerados funcionarios del Estado, a todos los efectos. Véase como botón de muestra el artículo 90 de ese código civil. Hoy día, no solamente se ha operado una sustancial separación entre la Iglesia (Católica) y el Estado, de suerte que para una y otro resulta hasta ofensivo postular que los sacerdotes y obispos sean empleados públicos, sino que la pluralidad religiosa que exhibe la sociedad reclama la atención a una gran diversidad de ministros de culto, en los que el codificador no habría soñado siquiera. El legislador argentino ha tomado razón de este cambio, de alguna manera, en el nuevo Código Civil y Comercial vigente desde el mes de agosto de 2015.

Ese cambio sustancial en el Derecho Privado argentino ha ocurrido mientras la presente investigación estaba en curso. Ello por una parte ha obligado a su revisión y reformulación, pero por la otra al mismo tiempo ha permitido dar cuenta de una evolución que sirve para comprender mejor las normas ahora vigentes, al compararlas con las derogadas².

No existe hasta ahora en la Argentina –y hasta donde podemos saber, en América Latina- un estudio sistemático y más o menos completo sobre el régimen jurídico de los ministros de culto. Al mismo tiempo, transitamos un momento de cambios legislativos radicales, acaso el más importante en su extensión desde el momento de la codificación a final del s. XIX. Me refiero no sólo a la sanción ya operada de un nuevo código Civil y Comercial, sino también a la proyectada de un nuevo Código Penal, además de otras leyes ya sancionadas o en proyecto, entre ellas el Digesto Jurídico Argentino (que supone la revisión de absolutamente todas las leyes hasta ahora en vigor)³. Muchas de esas novedades legislativas quieren ser la traducción en el

² Sobre esos cambios: NAVARRO FLORIA, Juan G., "El Derecho Eclesiástico en el nuevo Código Civil y Comercial Argentino", ADEE, vol. XXXII (2016), p.501.

³ El Digesto Jurídico Argentino fue aprobado casi simultáneamente con el nuevo Código Civil y Comercial (lo que provoca una serie de inconsistencias entre ambos: ver NAVARRO FLORIA, Juan G., "*Digesto Jurídico y nuevo Código Civil y Comercial: algunas perplejidades*", ED 261-837) por ley 26939 del año 2014. Esa ley ha clasificado la totalidad de las leyes (y muchas otras normas de jerarquía similar, como decretos-leyes o decretos de necesidad y urgencia) dictadas desde 1853 en adelante en "vigentes" y "no vigentes"; y a su vez ha distribuido las leyes vigentes en categorías, les ha asignado una nueva numeración y ha revisado sus textos. El Digesto está

derecho interno de principios que derivan de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que en la Argentina han alcanzado jerarquía constitucional en 1994.

Frente a ese proceso, resulta oportuno preguntarse cuáles de todas las normas acumuladas a lo largo de dos siglos de vida independiente, conservan hoy sentido y justificación. Y cuáles deberían ser reformuladas teniendo a la vista una sociedad que ha crecido en pluralismo y complejidad, y que además ha puesto a la libertad religiosa como principio cardinal en lo referido a la consideración jurídica del fenómeno religioso.

En esa línea, la elaboración de conceptos genéricos como el de “ministros de culto” y la búsqueda de su adecuado perfil, parece un servicio útil para los tiempos que corren.

El objeto de análisis ha sido el derecho argentino. En primer y principal lugar, el derecho federal o nacional. En la medida de lo posible, he procurado hacer presente también la legislación y la jurisprudencia provinciales. La estructura federal de nuestro país lo hace indispensable, dado que muchos capítulos del Derecho Eclesiástico son competencia directa (o al menos concurrente con el Gobierno Federal) de las provincias en materia legislativa y, en mayor medida aún, judicial. El acceso a las fuentes y la determinación de cuál es el derecho efectivamente vigente en cada una de las provincias, es una tarea ardua, que seguramente merecerá profundizaciones ulteriores para ser exhaustivo.

Donde ha parecido pertinente hemos tratado de hacer breves referencias al derecho comparado, principalmente la legislación, con la intención de ofrecer una perspectiva más amplia y de contextualizar el análisis del Derecho argentino, en el que se centra este trabajo. Por razones fácilmente comprensibles, tales referencias se hacen principalmente a los ordenamientos jurídicos de Iberoamérica. Incluyendo por lo tanto a los países latinoamericanos,

teóricamente vigente, a pesar de que faltó una última publicación que estaba prevista en su ley de aprobación, y de que antes de que tal publicación ocurriese se puso en marcha un proceso de revisión del Digesto por parte del Congreso, que ha quedado inconcluso hasta la fecha. En la práctica, los tribunales y los operadores jurídicos en su mayoría han seguido utilizando la vieja numeración de las leyes e ignorado los cambios operados por el Digesto. Por esta razón, en la presente publicación optaremos por seguir ese mismo camino, conscientes sin embargo de esta anomalía. Sobre la implicancia del Digesto Jurídico Argentino para el Derecho Eclesiástico, ver NAVARRO FLORIA, Juan G., "El Derecho Eclesiástico en el Digesto Jurídico Argentino", ED 260-615 y EDLA 2014-B-951.

pero también en alguna medida a Italia, Portugal y especialmente España, cuya legislación, doctrina jurídica y experiencia en materia de Derecho Eclesiástico viene siendo particularmente inspiradora para nuestros países en sus procesos legislativos.

Ciertamente, la ley positiva no agota ni mucho menos el Derecho. Esto es cierto en todas las latitudes, pero especialmente en América Latina, donde demasiado a menudo la realidad discurre al margen y aún en contra de lo que dispone la norma escrita. Por eso ha sido necesario atender a las decisiones jurisprudenciales (en este caso sí, salvo alguna excepción, sólo a las dictadas en la República Argentina, tanto a nivel federal como provincial).

Como es sabido, todavía no existe una jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la específica materia del Derecho Eclesiástico, lo que contrasta fuertemente con lo que ocurre en Europa. Pero al mismo tiempo, los tribunales internacionales prestan creciente atención a la jurisprudencia emanada de sus homólogos de otras latitudes. Por eso, en algunos temas he considerado pertinente atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,) teniendo también en cuenta la autoridad que ha alcanzado más allá de su ámbito específico, o de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América (tradicionalmente tomada en cuenta por la Corte Suprema de la Argentina.

El objeto de esta investigación es el Derecho estatal. Ello excluye en principio a los ordenamientos internos de las confesiones religiosas. Sin embargo, en esta particular materia es indispensable en ocasiones hacer referencia a ellos para comprender mejor el objeto de estudio. En el caso argentino, y en general latinoamericano, es forzoso prestar particular atención al ordenamiento interno de la Iglesia Católica (el Derecho Canónico), por su carácter mayoritario y por el peso histórico que ha tenido, incluso en la conformación del Derecho estatal. Los ordenamientos confesionales merecen atención por dos razones: la primera por su importancia a la hora de las calificaciones (es decir, la definición de los conceptos que son tomados y utilizados por el Derecho estatal); la segunda, por la remisión que eventualmente hace a ellos ese mismo Derecho estatal.

Capítulo 2. Concepto jurídico de ministro religioso o de culto.

Aunque pueda parecer ocioso, la primera tarea que debemos emprender, es justificar el porqué de una denominación. ¿Por qué hablamos de “ministro religioso”, o “ministro de culto”? ¿Son las mismas personas en ambos casos?

En este capítulo, intentaremos responder a esas preguntas desde el punto de vista jurídico, y lo haremos desde el Derecho del Estado. En el siguiente, intentaremos algunas precisiones desde el punto de vista de los ordenamientos jurídicos de las principales confesiones religiosas, necesariamente teñidos de conceptos teológicos.

El orden podría ser el inverso. El elegido, supone que es posible elaborar un concepto autónomo desde el Derecho del Estado, que naturalmente tomará en cuenta los ordenamientos confesionales, pero buscará un denominador común.

Desde esa búsqueda, el primer paso es la discusión terminológica. El Derecho Eclesiástico del Estado no puede adoptar, sin más, la terminología de una confesión religiosa determinada, ni siquiera de aquella que sea mayoritaria. Naturalmente, estará influido por esa terminología. Pero es necesario hacer el esfuerzo de hallar términos suficientemente abarcadores como para incluir a todos quienes deben ser incluidos. Por eso debemos descartar como denominaciones genéricas, a las que se identifican con una iglesia o confesión religiosa, pero no se acomodan a las demás (como por ejemplo, “clérigo”, o “sacerdote”, o “pastor”). Del mismo modo que no se puede llamar “iglesia” a cualquier comunidad religiosa, tampoco se puede llamar “sacerdote” a cualquier ministro de culto. Esto parece evidente a cualquier cultor de la disciplina, pero no lo es para la generalidad de los operadores jurídicos.

El término “ministro”, significa en castellano “Persona que ejerce algún oficio, empleo o ministerio”, según la segunda acepción que trae de él el Diccionario de la Lengua Española; aunque luego varias acepciones particulares refieren ese ministerio a lo sagrado o a lo religioso.

¿Por qué “ministro de culto”? Porque, como se ha observado bien,

“el denominador común de la normativa del Estado en torno a las personas investidas de funciones sacras en las confesiones, [...] es la dedicación al culto. El ejercicio del culto, acto central en todas las

religiones, es considerado como una manifestación externa del derecho a la libertad religiosa reconocido a toda persona y a toda iglesia, confesión y comunidad”⁴.

Dicho en otros términos, no hay religión sin culto, y las personas de quienes hablaremos, son las encargadas (al menos en general y de modo ordinario, y sin perjuicio eventualmente de otras funciones o responsabilidades), de oficiar, guiar o conducir ese culto. Entendiendo el concepto de “culto” en un sentido muy amplio, que incluye la oración colectiva o realizada en común, tal como la practicada en mezquitas o sinagogas.

¿Por qué “ministro religioso”? Pues por la misma razón. Se trata de personas que no están al servicio, o al frente, de un grupo cualquiera de personas, sino específica y precisamente de un grupo religioso. Desde luego, decir esto nos lleva al problema de definir qué es “lo religioso”. Se trata de una larga discusión que no es del caso dirimir aquí⁵. Baste por ahora remitir de manera genérica y sin perjuicio de los matices que se harán en su momento, a la noción que se adquiere por experiencia común, que genera en las sociedades occidentales un amplio consenso social al respecto y que cubre la gran mayoría de los supuestos concretos, dejando entre interrogantes solamente su posible aplicación a un número residual de grupos o comunidades.

A lo largo de esta tesis, usaremos en forma indistinta ambas expresiones: “ministro de culto” y “ministro religioso”. No vemos necesario optar por una de ellas, y además veremos que tanto en las normas como en el uso jurídico aparecen ambas de modo prácticamente intercambiable⁶.

La existencia de ministros de culto, y la necesidad de organizar un estatuto jurídico que les sea propio, obedece a varias razones.

En primer lugar, el dato de la experiencia según el cual toda comunidad o confesión religiosa, otorga a algunas personas dentro de ellas una función específica, que es la que venimos aludiendo. Y esto a su vez es consecuencia de una característica tradicionalmente considerada esencial de la religión, que es su carácter comunitario o colectivo. En efecto, la libertad religiosa no es un derecho

⁴ MOTILLA, Agustín, “Ministros y lugares de culto”, en IVÁN, Ibán, PRIETO SANCHIS, Luis y MOTILLA, Agustín, “Manual de Derecho Eclesiástico”, Ed. Trotta, Madrid, 2004, p.189.

⁵ Ver al respecto PALOMINO, Rafael, “Religión y Derecho Comparado”, Madrid, Iustel, 2007, donde, desde una perspectiva de derecho comparado, se analizan las dificultades que presenta precisar jurídicamente la noción de religión.

⁶ Posiblemente la cuestión sea más controvertida o equívoca en otros idiomas, como el inglés. En esa lengua lo que en español denominamos culto se traduce como “worship”, mientras que la palabra “cult” (que luce semejante a “culto”) hace referencia a lo que en castellano denominamos “sectas”.

reconocido exclusivamente a individuos aislados, sino reunidos en comunidad. Todas las formulaciones de ese reconocimiento en los principales instrumentos internacionales protección de los derechos humanos⁷ incluyen el derecho a practicar individual y *colectivamente*, en privado y *en público*, la religión. Esa práctica colectiva y pública del culto, demanda la existencia de quienes la dirijan y organicen. Esa no es la única, pero sí es la más visible de las funciones del ministro de culto.

Por otra parte, hay una exigencia específica de la libertad religiosa, que consiste en el reconocimiento de un cierto nivel de autonomía a las confesiones religiosas. Y uno de los campos en que esa autonomía es evidente, es en la designación o elección de los ministros de culto, que como veremos, en la generalidad de los casos (aunque no necesariamente) son los llamados a ejercer funciones de gobierno al interior de las comunidades. En tanto no se pongan en peligro otros bienes fundamentales (por ejemplo, ofensas a la moral o al orden público), no cabe al Estado injerencia ninguna en los procesos internos que llevan a determinar los ministros de culto en una concreta confesión.

Esto es algo que con toda lógica exigen las propias confesiones religiosas. Por ejemplo, ya el Concilio Vaticano II declaraba que *"corresponde a las comunidades religiosas el derecho a no ser obstaculizadas por medios legales, o por la acción administrativa del poder civil, en la selección, educación, nombramientos y traslado de sus propios ministros"*⁸.

Por último, es también un dato que cada una de las confesiones religiosas tiene reglas internas propias que caracterizan a quienes ejercen dentro de la comunidad funciones ministeriales, y el ordenamiento jurídico estatal no puede sino dar cuenta de esa realidad.

2.1. Doctrina

¿De qué o de quién estamos hablando, cuando decimos "ministro de culto" o "ministro religioso"?

En principio, hacemos referencia a aquellas personas a quienes cada confesión religiosa considera tales. Es a las iglesias y comunidades religiosas, a quienes compete determinar los modos de elección o constitución en el

⁷ Entre ellas, el art.18 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el art.12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), además de las Declaraciones que fueron sus antecedentes (instrumentos todos que en la Argentina tienen jerarquía constitucional, según el art.75 inc.22 de la Constitución Nacional).

⁸ Declaración *Dignitatis Humanae*, # 4.

ministerio (ordenación, elección, “elevación”...), los requisitos para ello, los procedimientos, la formación previa exigible, los derechos y deberes internos derivados de ese acceso al ministerio, la denominación que ha de darles.

"El término ministro de culto es de creación estatal, y está ligado a la aparición del Estado liberal y al reconocimiento del pluralismo religioso. Se trata por tanto de un concepto civil omnicompreensivo que sirve para designar a quienes, en el seno de una confesión, tienen encomendadas específicas funciones religiosas. En los ordenamientos confesionales no existe este término, en ellos se habla de sacerdotes, ministros sagrados, rabinos, imanes, pastores, etc., para designar realidades distintas, con características diferentes"⁹.

La doctrina ha propuesto diversas definiciones del concepto “ministro de culto”, que en general coinciden en los elementos constitutivos de la noción. Por ejemplo:

“por ministros de culto se entienden las personas que dentro de una confesión religiosa tienen asignadas establemente determinadas funciones de carácter sacro, de enseñanza de la doctrina religiosa y el de dirección, más o menos extensa y más o menos vinculante, de los miembros de dicha confesión religiosa”¹⁰.

Ahora bien:

“la delimitación del concepto de ministro de culto, en cuanto supone saber qué personas poseen una cualificación ajena al ordenamiento estatal, pero con efectos en el mismo, no puede hacerse, pues, sino por referencia a las propias confesiones o grupos confesionales [...]”¹¹.

⁹ RAMÍREZ NAVALÓN, Rosa M., *Los ministros de culto*, en: VARIOS AUTORES, "Acuerdos del estado español con los judíos, musulmanes y protestantes", Publicaciones Universidad Pontificia : Caja Salamanca y Soria, Salamanca, 1994, P.139.

¹⁰ VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José María, "Los ministros de culto", en GARCÍA HERVÁS y otros, "Manual de Derecho Eclesiástico del Estado", Madrid, 1997, p.261. Para MOTILLA, lo que caracteriza al ministro de culto es precisamente "la dedicación al culto. El ejercicio del culto, acto central de todas las religiones, es considerado como una manifestación externa del derecho a la libertad religiosa reconocido a toda persona... y a toda iglesia, confesión y comunidad" (MOTILLA, Agustín, "Ministros y lugares de culto", en IBÁN, Iván, PRIETO SANCHÍS, Luis y MOTILLA, Agustín, "Manual de Derecho Eclesiástico", 2ª ed., Trotta, Madrid, 2016, p.179).

¹¹ ÁLVAREZ CORTINA, Andrés-Corsino, "Ministros de culto", en VV.AA., "Tratado de Derecho Eclesiástico", EUNSA, Pamplona, 1994, p.865. En casi idénticos términos, MARTÍNEZ SISTACH, Luis, "Libertad religiosa y actividad de culto", en "La libertad religiosa (memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico)", México, UNAM, 1996, p.331.

“El conjunto de estas propuestas basculan en torno a características como la responsabilidad en el ejercicio de los actos culturales, la enseñanza de la doctrina religiosa y la dirección espiritual de los fieles. Pero lo cierto es que la categoría de *ministro de culto* constituye un presupuesto de hecho para nuestro ordenamiento [...]. La técnica del presupuesto se aplica a los institutos jurídicos que surgen en un campo externo a la esfera jurídica del Estado [...]. No compete al Estado determinar lo que deba ser un ministro de culto, sino que debe limitarse a dictar una serie de disposiciones cuyo objeto será el de conferir un estatuto jurídico civil a esa categoría, sirviéndose para ello del concepto confesional que, de ministro de culto, adopten las iglesias o comunidades religiosas y que opera como presupuesto de hecho”¹².

Esta remisión a la normativa propia de cada comunidad, hace sin embargo presente el problema derivado de que, para algunas confesiones religiosas, todos sus fieles sean o puedan ser “ministros del culto”, al menos por un tiempo, lo que exigiría tomar en consideración otras características, tales como que estén “dedicados efectivamente a la confesión, o a una actividad específicamente espiritual, como la de proselitismo”, asignen una cantidad de tiempo al ejercicio del ministerio, o considerar

“el tipo de funciones desarrolladas en el grupo religioso de pertenencia, dentro del cual el ministro de culto debe estar investido de una potestad de magisterio sobre los otros fieles”¹³.

En definitiva parece ser inevitable la tensión entre una línea de pensamiento que deja la definición de quiénes son los ministros de culto exclusivamente a la decisión de cada comunidad religiosa (lo que hará casi imposible un concepto teórico general aplicable en todos los casos) y otra que postula que sea el Estado quien caracterice a la función, en eventual desmedro de la autonomía de las confesiones religiosas¹⁴.

¹² SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, Alex, “Autonomía confesional y designación de ministros de culto”, en ADEE, vol. XXI (2005), p.106.

¹³ Cfr. FERRARI, Silvio, “Ministri del culto”, en Digesto, IV ed., vol.IX Pubblicistico, UTET, Torino, 1994 (salvo que se indique lo contrario, todas las traducciones de idiomas distintas del español son del autor de este trabajo).

¹⁴ Advierte RODRIGUEZ BLANCO que bajo el nombre “ministros de culto”, “se incluyen los sujetos que están investidos de ciertas potestades sobre los fieles, pero a partir de ese elemento común las diferencias entre los titulares de la potestad ministerial son muy acentuadas. El ordenamiento estatal no puede recoger un régimen común a todos ellos, salvo que utilice como base una noción creada artificialmente por el Estado. El planteamiento, aparte de operar con una noción de igualdad

Conviene a esta altura adelantar una distinción necesaria.

Una cosa son los “ministros de culto”, o “ministros religiosos”, entendiendo por tales a las personas que en el seno de una comunidad o grupo religioso tienen una determinada función en orden al culto, la enseñanza y la guía de la comunidad, según precisaremos.

Y otra cosa son las autoridades propias de las comunidades religiosas. Puede ocurrir y muchas veces ocurre que las autoridades de la comunidad sean al mismo tiempo ministros de culto, o que la condición de ministro de culto sea una calificación necesaria para acceder a posiciones de autoridad. Pero también es posible que en un grupo religioso determinado las funciones estén disociadas, y por tanto la autoridad que preside la comunidad no sea al mismo tiempo ministro religioso o de culto. En estos casos, será necesario identificar si las normas que se aplican a los ministros de culto (o algunas de ellas) también son aplicables a la autoridad de la comunidad, o no. Para eso habrá que desentrañar si el legislador tenía en mente al ministro de culto propiamente por su función específica religiosa, a la autoridad de la comunidad religiosa por su rol de tal, o a ambos.

Finalmente, hay una tercera categoría de individuos, que son los “religiosos”, o “consagrados”. Ellos no son (al menos necesariamente y en primera instancia) ministros de culto, ni tampoco autoridad de la comunidad o grupo religioso; sino que son personas que optan por una consagración religiosa radical, una dedicación exclusiva a la oración y las obras de religión. Ellos pueden asumir una función de ministros de culto, o dedicarse simplemente a la vida religiosa personal sin un rol de servicio activo al culto y a la comunidad. En algunos casos compartirán el mismo estatuto jurídico que los ministros de culto, por cierta analogía que existe entre ambos; y en otros casos tendrán un estatuto propio y diferenciado.

próxima a la uniformidad, da lugar a un jurisdiccionalismo contrario a la autonomía de las confesiones" (RODRIGUEZ BLANCO, Miguel, "La relación entre el ministro de culto y su propia confesión. Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia inglesa", en ADEE, vol.XIX (2003), p.349).

2.2 Legislación

No existe en la Argentina ninguna norma legal genérica que defina a quién debe considerarse ministro religioso, ni fije pautas al respecto.

La legislación supone en muchos casos, como iremos viendo, el concepto de ministro religioso o ministro de culto, pero no lo define. En las más diversas normas, se los menciona, sea genéricamente, sea particularmente (muchas veces tomando la terminología propia de la confesión religiosa mayoritaria y paradigmática, como es la Iglesia Católica, al hablar de “sacerdotes”, por ejemplo). Otras veces las normas mencionan a los capellanes, a los párrocos, a los obispos, a los pastores, dando por conocido o por supuesto el significado de esos términos.

Estamos por lo tanto ante un problema de “calificaciones”, como se diría en el Derecho Internacional Privado, es decir, ante la necesidad de asignar un significado a un término equívoco, acudiendo al que suministran distintos ordenamientos posiblemente aplicables (el Derecho estatal, o los diversos ordenamientos jurídicos confesionales)¹⁵.

Dado que la ley argentina no contiene ni podría fácilmente contener una definición de ministros de culto o “ministros religiosos” aplicable a todos los supuestos y todas las confesiones religiosas, hay que entender que acepta y supone las definiciones contenidas en los ordenamientos de esas mismas confesiones. Lo que resulta por otra parte razonable en el marco de la debida autonomía de las confesiones religiosas en esta materia, dado que son justamente esos ordenamientos los llamados a perfilar, definir y regir los derechos y obligaciones propios de tales sujetos.

La Declaración Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 afirma que

“el derecho a la libertad de religión comprenderá, en particular, las libertades siguientes: ...g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción”¹⁶.

Esta declaración no es ley formal en la Argentina, pero por su valor interpretativo de los tratados internacionales con jerarquía constitucional

¹⁵ Ver sobre este tema GOLDSCHMIDT, Werner, “Derecho Internacional Privado”, Buenos Aires, Depalma, 1995, § 98 y siguientes.

¹⁶ Adoptada en Nueva York el 25/11/81. Texto completo en MANTECÓN SANCHO, Joaquín, “El derecho fundamental de libertad religiosa”, Pamplona, EUNSA, 1996, p.209.

referidos a la libertad religiosa (a los que nos referiremos en seguida), es un elemento importante para situar el tema que nos ocupa. Forma parte de lo que se llama “soft law”.

El Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede, del año 1966, únicamente dice en relación al tema que

“El Episcopado Argentino puede llamar al país a las órdenes, congregaciones religiosas masculinas y femeninas y sacerdotes seculares que estime útiles para el incremento de la asistencia espiritual y la educación cristiana del pueblo. A pedido del Ordinario del lugar, el Gobierno Argentino, siempre en armonía con las leyes pertinentes, facilitará al personal eclesiástico y religioso extranjero el permiso de residencia y la carta de ciudadanía” (art. V).

Es decir que ni siquiera en relación a los ministros de culto católico existe una definición legal, sino que las normas dan por supuestos los conceptos (de obispo, sacerdote secular, etcétera).

Veremos que lo mismo se repite en relación a los distintos temas y ramas del derecho que serán examinadas a lo largo de este estudio.

2.3 Proyectos de ley

Durante varias décadas, la República Argentina sufrió recurrentes alteraciones del orden constitucional por una sucesión de golpes y gobiernos militares, alternados con gobiernos civiles débiles. Esa inestabilidad institucional demoró la efectiva incorporación al ordenamiento jurídico nacional de los tratados internacionales de derechos humanos desarrollados por la comunidad internacional en la segunda parte del siglo XX, pero naturalmente poco atractivos para gobiernos dictatoriales.

Recién en diciembre de 1983 comenzó el ciclo democrático que felizmente se ha mantenido hasta hoy, tal y como en general ha venido ocurriendo en la misma época en toda América Latina. Una de las primeras medidas tomadas por el Congreso instalado en ese momento, fue la aprobación de los principales tratados internacionales de derechos humanos (señaladamente, la Convención Americana de Derechos Humanos, por medio de la ley 23054; y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respectivamente, ambos mediante la ley 23313). A esos y otros tratados de derechos humanos se les dio jerarquía constitucional en la reforma de la Constitución Nacional del año 1994.

La mención de esos hitos es relevante porque los tratados mencionados incluyen el reconocimiento, entre otros, del derecho a la libertad religiosa con una extensión y precisión que supera al genérico reconocimiento de la "libertad de culto", contenido en la constitución histórica (art.14). Esto ha hecho sentir la necesidad de adoptar una legislación interna específica, una "ley de libertad religiosa" que regule de modo orgánico los distintos aspectos que se derivan de aquel reconocimiento. Lo que es particularmente necesario para las confesiones religiosas minoritarias.

Desde el año 1991, se han sucedido diversos proyectos de ley que por diversos motivos que no es del caso explicar aquí, no han alcanzado hasta ahora sanción legislativa¹⁷. En ellos, que en general han seguido un esquema o patrón común, aparece el tema de los ministros de culto¹⁸.

El primer proyecto significativo fue elaborado por la Secretaría de Culto en el año 1991, y tuvo aprobación unánime del Senado en el año 1992, aunque luego perdió estado parlamentario sin haber sido aprobado por la Cámara de Diputados. Ese proyecto ha sido la base de casi todos los posteriores¹⁹.

Ese proyecto utilizaba en varias oportunidades el concepto de "ministro de culto", pero sin definirlo. Así por ejemplo, reconocía a las comunidades religiosas el derecho a "*designar, preparar y sostener a los ministros de su culto*" (art.3); requería para la inscripción en un registro de entidades religiosas que propiciaba crear, la explicitación "*de la estructura ministerial y el modo de acceder al ministerio*" (art.8).

En el año 2001, el entonces existente Consejo Asesor de la Secretaría de Culto de la Nación²⁰ presentó un nuevo proyecto, que en relación al tema que nos ocupa reconocía expresamente el derecho "*de las iglesias, comunidades y confesiones religiosas*", "*a designar, preparar, sostener y remover a los ministros de culto, y enviar misioneros al exterior y sostenerlos espiritual y*

¹⁷ Los textos de varios de esos proyectos, y algunos comentarios al respecto, pueden verse en www.calir.org/proyecto.htm

¹⁸ Nos hemos ocupado de algunos de esos proyectos en publicaciones previas: "*El nuevo proyecto de ley de cultos o de libertad religiosa*", *El Derecho Legislación Argentina*, 1997-A-1421; "*Un nuevo proyecto de ley de libertad religiosa*", *EDLA* 2001-B-1003; "*El Derecho Eclesiástico en la República Argentina: asignaturas pendientes*", en ADEE vol. XXV (2009), Madrid, 2009, p.513; entre otros. Ver también LO PRETE, Octavio, "*Una ley de libertad religiosa en la Argentina: asignatura pendiente*", *Derecho y Religión*, vol. VIII (2013).

¹⁹ Era Secretario de Culto el Dr. Ángel Centeno, y asesor de la Secretaría y redactor del Proyecto, el autor de este trabajo.

²⁰ Era Secretario de Culto el Dr. Norberto Padilla, y Jefe de Gabinete (y coordinador del Consejo Asesor) el autor de este trabajo.

económicamente" (art.3 inc.5), y el de todas las personas a *"recibir asistencia de los ministros de su propia confesión religiosa, en particular en los hospitales, asilos, cárceles o cuarteles"* (art.2 inc.9). El proyecto propiciaba la creación de un Registro Nacional de Confesiones Religiosas (del que estaba excluida la Iglesia Católica). Para la inscripción en él se pedía a las iglesias, comunidades o confesiones informar, entre otras cosas, *"la estructura ministerial y el modo de acceder al ministerio"* y *"en caso de no coincidir las autoridades administrativas y religiosas, normas de relación entre ambas"* (art.9). A las entidades inscriptas, se concederían, entre otros, los derechos *"a que se reconozca a sus ministros religiosos y se les facilite el ministerio"*; *"a que los ministros, seminaristas y religiosos con dedicación exclusiva sean eximidos del servicio militar"*, y *"al libre acceso para sus ministros a las cárceles, hospitales, asilos y cuarteles, para brindar asistencia espiritual regular a las personas que deseen recibirla"* (art.13)²¹. Pero tampoco encontramos en el texto del proyecto un concepto o definición de ministro religioso o ministro de culto.

Se espera que en el año 2017 el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un nuevo proyecto en esta materia, que hasta donde se conoce mantiene casi a la letra, lo previsto en el transcripto en el párrafo anterior. Y como en todos los casos anteriores, utiliza el concepto de "ministro de culto" sin ofrecer una definición de él.

2.4 Jurisprudencia

En la Argentina la cuestión referida al concepto de "ministro de culto" se planteó en relación a la excepción al servicio militar obligatorio que la ley 17.531²² prevé para *"los seminaristas y ministros de los cultos reconocidos*

²¹ Siguiendo casi a la letra lo previsto en el proyecto de 1991, se propiciaban también reformas al Código Civil (reemplazando el término "ministro protestante" por "ministro religioso no católico" en un artículo), y al Código Penal (castigando a "quien simulando ser ministro de una confesión religiosa determinada ejerciere actos considerados propios de ese ministerio", y a "quien agrediere de hecho o de palabra a un ministro de una confesión religiosa reconocida en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio, o por el hecho de serlo")

²² Esa ley es la más reciente que reguló la prestación del servicio militar obligatorio. En el año 1995 fue dictada la Ley 24.429, todavía vigente, que organizó el servicio militar voluntario pero, hay que señalar, no derogó a la anterior (e incluso prevé que en caso de necesidad es posible convocar al servicio de conscripción, lo que sin embargo no ha ocurrido desde entonces).

oficialmente" (art.32 inc.2º y 3º). La Corte Suprema debió decidir el tema en el caso "Lopardo"²³.

Se trataba de un miembro de los "Testigos de Jehová", quien aducía su condición de seminarista o ministro religioso para eludir el servicio militar. Dijo entonces la Corte que

"las circunstancias que invoca el recurrente para sustentar su tesis –dedicación a la lectura de textos sagrados y tarea de difundir lo que considera verdades de su religión- no resultan válidas para borrar toda distinción entre feligreses y ministros, habida cuenta que las mencionadas actitudes son comunes a todo creyente y en tanto los ministros gozan de facultades y poderes específicos de que aquellos no están investidos. Los vocablos "clérigos", "religiosos", "ministros" empleados en la citada ley federal no pueden tener otro alcance que el de designar a quienes, previa adecuada formación intelectual y espiritual, hacen del ministerio religioso su ocupación específica; y es precisamente, el elevado y especial carácter de ese estado el que funda la excepción; de lo contrario, todo creyente estaría exceptuado de prestar el servicio militar, lo que obviamente no ha sido el propósito de la ley. La extensión a los "novicios" y "seminaristas" se explica en cuanto incluye a quienes han iniciado ya una preparación que habrá de capacitarlos y destinarlos a aquella actividad".

De ese denso párrafo se extraen los requisitos exigidos por la Corte para quedar encuadrado en la condición de "ministro religioso":

a) una "preparación" o "formación" intelectual y espiritual especiales y distintas de las que recibe el común de los fieles. Naturalmente, es la propia confesión religiosa la que determina la extensión y alcance de esa preparación, pero se la supone mayor y diversa que la del conjunto de fieles.

b) unos "poderes" o "facultades" específicos de los que están investidos los ministros y no el resto de los fieles. No se trata aquí de saber si la autoridad es "poder" o es "servicio", sino de advertir que el ministro tiene una "función" distinta del resto de los fieles, dentro de la comunidad, como consecuencia de una "investidura" especial.

²³ Resuelto el 26/10/82, FALLOS 305-1525. Su doctrina fue reiterada en el caso "Falcón" (21/6/1983, LL 1984-A-132).

c) una “ocupación específica” consistente en el ejercicio del ministerio. No es necesario que sea una dedicación exclusiva, ni siquiera en todos los casos que sea la ocupación preponderante o principal, pero sí específica²⁴. Al respecto, cabe decir que en el caso “Glaser” (referido más adelante) la Corte había desechado que la dedicación exclusiva fuera un requisito para ser considerado seminarista, o ministro.

Por otra parte, e incidentalmente, la Corte también ha encuadrado el estatuto de los ministros de culto dentro del marco de la autonomía de las confesiones religiosas, cuestión sobre la cual luego volveremos. Al resolver el famoso caso “Bahamondez” (referido a la objeción de los testigos de Jehová a las transfusiones de sangre), analizando el contenido de la libertad religiosa, dijo:

“Que dicho derecho significa, en su faz negativa, la existencia de una esfera de inmunidad de coacción, tanto por parte de las personas particulares y los grupos, como de la autoridad pública. Ello excluye de un modo absoluto toda intromisión estatal de la que pueda resultar la elección forzada de una determinada creencia religiosa, coartando así la libre adhesión a los principios que en conciencia se consideran correctos o verdaderos. En su faz positiva, constituye un ámbito de autonomía jurídica que permite a los hombres actuar libremente en lo que se refiere a su religión, sin que exista interés estatal legítimo al respecto, mientras dicha actuación no ofenda, de modo apreciable, el bien común. Dicha autonomía se extiende a las agrupaciones religiosas, para las cuales importa también el derecho a regirse por sus propias normas y a no sufrir restricciones en la elección de sus autoridades ni prohibiciones en la profesión pública de su fe.” (voto de los Dres. Boggiano y Cavagna Martínez).

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, varios años antes, en un fallo luego confirmado por la

²⁴ En este aspecto el caso presenta similitud con el de otro testigo de Jeovah, resuelto por la Comisión Europea de Derechos Humanos en 1966, el caso “Grandrath” (http://www.wri-irg.org/en/system/files/Grandrath_v._Germany_-_Report_of_the_Commission.pdf), accedido el 17/3/2017). La Comisión consideró legítimo que Alemania no otorgase la exención del servicio militar, equiparándolo a ministros de culto católicos o evangélicos, a una persona cuya ocupación principal no era el ministerio religioso (cfr. MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, “La protección internacional de la libertad religiosa”, en “Tratado de Derecho Eclesiástico del Estado”, Pamplona, EUNSA, 1994, pp.208 y 235).

Corte Suprema, había por su parte definido (y también en relación al servicio militar) lo que debe entenderse por "seminarista":

"todos los que realizan estudios metódicos y disciplinados que los preparan para ejercer el magisterio sacerdotal, dentro de sus respectivas confesiones religiosas, bajo las directivas de sus respectivas autoridades y con sujeción a las normas por ellas impuestas", agregando "que no es aplicable a ellos la exigencia de dedicación exclusiva"²⁵.

2.5 Derecho comparado

En **España**, la doctrina apunta que no existe una definición jurídica de lo que se entiende por "ministro de culto", ni ella ha sido necesaria en relación a los ministros católicos, cuya designación específica (eclesiástico, clérigo) se tenía por suficiente, por corresponder a realidades bien conocidas. El concepto genérico aparece al momento de tener que englobar en él a los ministros religiosos no católicos. Puede entenderse que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que reconoce a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas autonomía de organización y régimen de su personal (art.6.1), considera implícitamente como ministros de culto a quienes las propias confesiones designen como tales, y de igual modo, corresponderá a la confesión establecer cuando los ministros de culto dejan de ostentar tal condición. Pero como se ha señalado,

"al establecerse que cualquier iglesia, confesión y comunidad religiosa podrá nombrar a sus ministros y no exigirse la inscripción hay que entender, por tanto, que cualquier miembro de un grupo religioso puede ser ministro de culto. De esta forma, la inexistencia de una definición normativa del concepto junto a la carencia de conocimiento por parte del Estado de cuáles son las confesiones no inscritas, hace complicado determinar quiénes realmente se benefician del estatuto civil que se confiere a los ministros de culto"²⁶.

²⁵ Sentencia del 6/9/65, publicada junto con la de la CS, 23/9/1966, "Glaser, Benjamín Abel s/int. recurso de inaplicabilidad de ley s/exc.militar", FALLOS 265-340. El concepto es interesante más allá de la indebida mención del "magisterio sacerdotal" cuando se estaba hablando de un seminarista judío.

²⁶ GONZÁLEZ, Marcos, "Los Ministros de Culto en el ordenamiento jurídico español", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, p.21 y ss.

El concepto ha sido precisado por los acuerdos firmados con las principales confesiones religiosas, de los que resulta que se entiende por ministros de culto a aquellas personas físicas que realicen de forma estable y permanente, las funciones religiosas señaladas en esos acuerdos. En el caso de los evangélicos, acreditados como tales por la respectiva Federación,

“son ministros de culto las personas físicas que estén dedicadas con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa”.

Las funciones de culto son las

“dirigidas directamente al ejercicio del culto, administración de sacramentos, cura de almas, predicación del Evangelio y magisterio religioso”²⁷.

En el caso judío,

“son ministros de culto ... las personas físicas que, hallándose en posesión de la titulación de Rabino, desempeñen sus funciones religiosas con carácter estable y permanente y acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la Comunidad a que pertenezcan”, siendo tales funciones *“las que se derivan de la función rabínica, del ejercicio del culto, de la prestación de servicios rituales, de la formación de rabinos, de la enseñanza de la religión judía y de la asistencia religiosa”* .

Por su parte,

“son dirigentes islámicos e imames de las Comunidades islámicas las personas físicas dedicadas con carácter estable... a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica y acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la Comunidad a la que pertenezcan”.

Destaca González que en el caso de los musulmanes el concepto de ministro de culto se amplía homologando a ellos a los “dirigentes religiosos islámicos”²⁸, mientras que en el caso de los judíos se restringe a quienes han obtenido titulación de rabinos.

²⁷ Ver SALCEDO HERNÁNDEZ, José Ramón, “Los ministros de culto en el acuerdo de cooperación con la FEREDE y ante el derecho del Estado”, en GARCÍA-GARCÍA, Ricardo y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos (coordinadores), “Aplicación y desarrollo del Acuerdo entre el Estado español y la FEREDE”, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2008, p.115.

²⁸ El Real Decreto 176, del 10 de febrero de 2006, referido a la inclusión en el régimen de la seguridad social de los dirigentes religiosos e imames islámicos, aclara: “se entenderá por dirigentes religiosos islámicos y por imames a las personas que, con carácter estable, se dediquen a la dirección de las comunidades islámicas... a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica,

En definitiva, son las propias confesiones las que determinan según su derecho interno a quien consideran ministro de culto, aunque se requiere que esa calidad se desarrolle en forma “estable” o “permanente”²⁹, y que exista una dedicación a las funciones de culto, asistencia religiosa o enseñanza religiosa³⁰.

En **México**, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que al igual que la constitución federal impone severas restricciones a los derechos políticos y aún civiles de los ministros religiosos, define que

“se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad³¹ a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de dirección, representación u organización” (art.12).

La ley, de conformidad con el actual art. 130 de la Constitución (que restringe por otra parte de modo severo los derechos políticos de los ministros de culto), ya no exige la nacionalidad mexicana para ejercer el ministerio religioso, como ocurría hasta 1992.

siempre que no desempeñen tales funciones a título gratuito. La acreditación de dichos requisitos se efectuará mediante certificación expedida por la comunidad respectiva, debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas”.

²⁹ Así, el Real Decreto 822/2005 relativo a la inclusión en el régimen de seguridad social de los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, establece que “a los efectos de lo previsto en este real decreto, la condición de clérigo se acreditará mediante certificación expedida por el Patriarcado de Moscú en España, en la que habrá de constar el carácter de su dedicación estable, exclusiva y remunerada a las funciones de culto o asistencia religiosa” (art.2).

³⁰ Sobre la cuestión en España, ver también MORENO BOTELLA, Gloria, “Los ministros de culto”, en MARTIN SANCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. (coordinadores), “La libertad religiosa en España y Argentina”, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006, p.139; ÁLVAREZ CORTINA, Andrés-Corsino “Ministros de Culto”, en “Tratado de Derecho Eclesiástico”, Instituto Martín de Azpilicueta, Pamplona, EUNSA, 1994, pp.865-895; y RODRIGUEZ BLANCO, Miguel, “La relación entre el ministro de culto y su propia confesión. Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia inglesa”, en ADEE, vol.XIX (2003), p.347.

³¹ La exigencia de la mayoría de edad luce arbitraria. ¿Por qué no podría una comunidad religiosa reconocer un rol ministerial a un menor de edad? Podría pensarse en casos tan relevantes como el Dalai Lama, reconocido como tal siendo niño.

El reglamento de la ley³² exige que los estatutos de las asociaciones religiosas contengan *“los requisitos que se deben cubrir para ostentar el carácter de ministro de culto y el procedimiento para su designación”* (art.14.V) e informar los datos personales de los designados como tales (art.13.II) y en particular su nacionalidad. Siendo extranjeros, se requiere un permiso previo del Gobierno *“a solicitud de la asociación religiosa interesada”* (art.18).

En **Colombia**, la ley de Libertad Religiosa³³ establece que *“La condición de Ministro de Culto se acreditará con documento expedido por la autoridad competente de la iglesia o confesión religiosa con personería jurídica a la que se pertenezca. El ejercicio de la función religiosa ministerial será garantizada por el Estado”* (art.16).

El concepto ha sido precisado en el Convenio firmado entre el Estado y un grupo de iglesias evangélicas³⁴, según el cual

*“son Ministros de culto de las entidades religiosas que suscriben el presente Convenio las personas físicas que estén dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la entidad religiosa, de conformidad con sus estatutos y reglamentos internos”*³⁵.

A su turno, el decreto reglamentario³⁶ (que permite la inscripción como personas jurídicas de “asociaciones de ministros”), manda que

³² Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2003.

³³ Ley 133 del 23 de mayo de 1994. Un decreto reglamentario (1319 del 13 de julio de 1998) establece que *“Las normas estatutarias de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, deben contener como mínimo”*, entre otras disposiciones, información acerca de los ministerios que desarrolla; cómo se le confiere las órdenes religiosas; y requisitos para la designación de cargos pastorales.

³⁴ Convenio de Derecho Público nº I de 1997, aprobado por Decreto 354 de 1998.

³⁵ Sobre el tratamiento de los ministros de culto en el derecho colombiano, y especialmente en la jurisprudencia, ver PRIETO, Vicente, *“Libertad religiosa y confesiones, Derecho Eclesiástico del Estado colombiano”*, Bogotá, Temis, 2008, p.143 y ss.

³⁶ Decreto 782 del 12 de mayo de 1995. Otro Decreto (1445 del 30 de mayo de 1997) aclara que *“El representante legal de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, que hayan celebrado Convenio de Derecho Público Interno con el Estado colombiano, expedirá certificación en la que conste números y fecha de la Personería Jurídica Especial y del convenio de Derecho Público Interno, nombre e identificación de los ministros de culto autorizados para celebrar matrimonios con efectos civiles y áreas de su jurisdicción.”*

sean “objeto de registro” en el Registro de entidades religiosas, “*Los ministros autorizados para celebrar matrimonios*”. Esta facultad la tienen los ministros de culto de confesiones inscriptas que hayan celebrado acuerdos al respecto con el Estado (hasta ahora, la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas).

En **Ecuador**, el Reglamento de Cultos Religiosos³⁷ del año 2000, dice que

“Para efecto de la legislación electoral, se entenderá que son “Ministros de cualquier culto” las siguientes personas: 1. Si se trata de católicos, únicamente quienes se encuentren en ejercicio legítimo de las funciones propias del sacerdocio ministerial, de lo cual dará certificación el respectivo ordinario; y 2. Para los miembros de otras iglesias cristianas o religiones, los que señalen los respectivos estatutos” (art.15).

Es llamativo que en el caso de la Iglesia Católica se limite el reconocimiento a los sacerdotes (lo que excluye a los diáconos), aunque también es cierto que el alcance material de la norma parece acotado a la cuestión electoral.

En **Chile**, cuya Ley de iglesias y organizaciones religiosas³⁸ habla de “*pastores, sacerdotes y ministros del culto*” (art. 6º), no hay definición de quienes son considerados tales, pero se dice que

“Los ministros de culto de una iglesia, confesión o institución religiosa acreditarán su calidad de tales mediante certificación expedida por su entidad religiosa, a través de la respectiva persona jurídica” (art.13)³⁹.

En **Brasil**, el proyecto de ley de Garantías y Derechos Fundamentales al libre Ejercicio de Creencia y de los Cultos Religiosos, tramitado en 2009 juntamente con la aprobación del Concordato con la Santa Sede, no define a quienes considera ministros de culto, aunque se refiere varias veces a ellos, por ejemplo para decir que

“el vínculo entre los ministros ordenados o fieles consagrados mediante votos y las instituciones religiosas y equiparadas es

³⁷ Decreto Ejecutivo 1682 del año 2000, R.O. 365 del 20/1/00 (tomado de BAQUERO DE LA CALLE RIVADENEIRA, Jaime, “Personas Jurídicas de Derecho Especial”, Quito, 2004, p.208).

³⁸ Ley 19.638, del 1 de octubre de 1999.

³⁹ Ver PIMSTEIN, Maria Elena, “Ministers of Religion in Chilean Law”, Brigham Young University Law Review, Vol 2008, nº 3, p.897.

de carácter religioso y no genera, por sí mismo, vínculo de empleo, salvo prueba en contrario o desvirtuación de la finalidad religiosa” (art.15)⁴⁰.

En **Bolivia**, el Reglamento de Culto⁴¹ (art.22) define a los “ministros y misioneros religiosos” como

“aquellos designados oficialmente por la asociación legalmente establecida, designación que debe ser puesta en conocimiento del despacho de Culto”.

Al momento de inscribir en el registro correspondiente a las asociaciones religiosas es obligatorio presentar *“documentación debidamente legalizada sobre la idoneidad de su obispo, pastor o representante consignando en su caso estudios realizados en teología y/o en materia religiosa, en instituciones legalmente reconocidas de acuerdo a su estructura orgánica”*. Es decir que, si bien el principio parece ser que es la comunidad religiosa la que determina quién es ministro de culto (y que hay una cierta exigencia de estudios especiales para ser reconocido como tal), hay alguna confusión acerca del rol del Estado en la materia y del efecto que tiene el reconocimiento de las asociaciones religiosas, y la inscripción ante el Estado de los ministros mismos. Estas inscripciones son obligatorias y condicionan la posibilidad de ejercer públicamente el culto⁴².

En **Perú** la Ley 29.635 de libertad religiosa⁴³ omite definir qué entiende por ministro de culto, pero enuncia entre los “derechos colectivos de las Entidades Religiosas” (art.6º) el de

“Formar, designar o elegir libremente a sus ministros de culto, dirigentes religiosos y establecer su propia jerarquía, según sus normas internas. La condición de ministro de culto se acredita con documento auténtico expedido por la autoridad competente de la entidad religiosa”.

En **Portugal** la “Ley de libertad religiosa” 16/2001 de 22 de junio de ese año, una de las más completas y mejor elaboradas de Europa, dice que

⁴⁰ El mismo proyecto de ley prevé la existencia de capellanes militares (art.9), de seminarios (art.10), del *“secreto del oficio sacerdotal reconocido en cada institución religiosa, inclusive el de la confesión sacramental”* (art.13), y la posibilidad de convocar a ministros de culto extranjeros (art.16).

⁴¹ Aprobado por Resolución Suprema 219172 del 21 de julio de 2000.

⁴² Decreto Supremo Nº 26.712 del 24 de julio de 2002.

⁴³ Publicada el 21.12.2010

"Ministros de culto son las personas consideradas como tales según las normas de la respectiva iglesia o comunidad religiosa. La calidad de ministro de culto es certificada por los órganos competentes de la respectiva iglesia o comunidad religiosa, que igualmente acredita a los respectivos ministros para la práctica de actos determinados. La autenticación de los certificados y las credenciales referidas... compete al registro de las personas colectivas religiosas" (art.14).

En el **Reino Unido** se utiliza el término *minister of religion* como categoría por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, pero no hay tampoco una definición genérica, sino que "el alcance del término se precisa en cada caso concreto en función del sector normativo objeto de regulación"⁴⁴. Así por ejemplo, para la ley migratoria "ministro de religión significa funcionario religioso cuyas principales funciones de carácter regular comprenden la conducción de fieles, realizando los ritos y rituales de la confesión, y la predicación de los puntos esenciales de la creencia"⁴⁵.

2.6 Conclusiones

Como ideas generales y que trataremos luego de demostrar y corroborar, a través del análisis más detallado de la legislación y la jurisprudencia en materias específicas, podemos afirmar hasta ahora que:

1) *No hay en la Argentina un estatuto orgánico de los ministros de culto*: No existe un cuerpo normativo ordenado que se refiera a ellos, ni que reglamente coherentemente su posición en la sociedad, derechos y obligaciones. Al contrario, veremos que hay normas dispersas, y eventualmente contradictorias, en muy distintos cuerpos legales. A su vez, esos cuerpos legales fueron sancionados en épocas distantes y en el marco de concepciones diversas en materia de relaciones Iglesia-Estado, o del lugar de lo religioso en el ámbito público.

2) *No hay un concepto único de ministros de culto*: ninguna norma ha definido qué se debe entender por ministro de culto, o por

⁴⁴ RODRIGUEZ BLANCO, Miguel, "La relación entre el ministro de culto y su propia confesión. Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia inglesa", en ADEE, vol.XIX (2003), p.352.

⁴⁵ Punto 169 de las reglas elaboradas por el Home Secretary para la aplicación de la Immigration Act 1971, citado por RODRÍGUEZ BLANCO, op. y loc. cit. en nota anterior.

ministro religioso. Ni siquiera existe uniformidad terminológica, ya que ocasionalmente las leyes hablarán de “ministros de culto”, de “ministros religiosos”, de alguna especie de ellos en particular (sacerdote, pastor) incluyendo eventualmente a todos en esa denominación, o incluso de “religiosos”, sustantivando el adjetivo⁴⁶. La carencia de un concepto único de ministro de culto se verifica también en el derecho comparado.

3) *El paradigma de ministro de culto, es el sacerdote católico*: así como la mayor parte de la población en la Argentina, espontáneamente, asocia el concepto de “ministro religioso” o de “ministro de culto” al sacerdote católico también la legislación, la jurisprudencia y la doctrina tienden a hacer lo propio⁴⁷. Así, muchas veces las normas hablan de “sacerdote”, y la doctrina o la jurisprudencia deben hacer una interpretación extensiva para aplicarlas también a ministros de otros credos. No estamos afirmando que esto deba ser siempre así, sino constatando una realidad. Precisamente, el esfuerzo por lograr una conceptualización y caracterización del ministro de culto, es el camino para poder prescindir de ese paradigma o minimizar el recurso a él, prefiriendo una noción más neutra, abarcadora y amplia.

En el mismo orden de ideas, muchas veces el legislador o el intérprete suponen que en todas las confesiones los ministros de culto cumplen las mismas funciones y juegan internamente los mismos roles que los clérigos en la Iglesia Católica. Y no se advierte que, por ejemplo, en algunas comunidades religiosas está disociado el rol de presidente de la comunidad, del rol de maestro de la fe y de director del culto.

4) *El derecho tiende a proteger a los ministros de culto y facilitar el ejercicio de sus funciones*: la visión de conjunto de las normas existentes y de su interpretación por parte de los tribunales, lleva a la convicción de que así como la religión merece una valoración positiva por parte del legislador, el ejercicio del ministerio religioso en general es visto con favor por el derecho, y se lo protege, rodeando a los ministros de consideraciones y garantías específicas que los

⁴⁶ Desde luego, existen los religiosos como categoría específica: los miembros de institutos de vida consagrada pertenecientes a la Iglesia Católica. A ellos el ordenamiento los llama alternativa “religiosos”, “religiosos profesos”, o alude a algunos de ellos (“regulares”, “clérigos regulares”). Lo que decimos aquí es que como veremos más adelante, a los ministros de culto, a veces se los denomina “religiosos”, sin que lo sean en sentido estricto, omitiendo el sustantivo “ministros”.

⁴⁷ Es semejante a lo que ocurre con “la Iglesia”: en la Argentina, esa denominación sin otro aditamento alude inequívocamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Quien a su vez sirve de paradigma para las restantes confesiones religiosas, muchas veces llamadas genéricamente “iglesias”, y englobando impropiaamente en ese rótulo a otras comunidades a las que no debería aplicarse el término (judía, islámica, budista...).

distinguen del resto de los ciudadanos. Como contrapartida, también existen eventualmente sanciones más severas para los ministros de culto que cometen determinados delitos, que las que se aplicarían a quienes no revistan esa calidad.

Tomando en cuenta las pautas jurisprudenciales antes referidas y los demás elementos hallados, podríamos aproximarnos a una definición de ministro religioso o ministro de culto, diciendo que es aquella persona humana a quien una iglesia, comunidad o confesión religiosa designa o reconoce como tal, de acuerdo a sus propias normas internas, dotada de una preparación específica para el ministerio que lo capacita para realizar actos de culto, orientación espiritual o enseñanza normalmente distintos de los que realiza el común de los fieles, y con una dedicación específica (pero no necesariamente exclusiva) a ellos.

Capítulo 3. Los ministros de culto en las diferentes confesiones

No intentamos en este capítulo una exposición completa y extensa de los ordenamientos jurídicos internos de cada confesión religiosa, tarea que por lo demás sería prácticamente imposible o requeriría de una extensión desproporcionada en el contexto de esta investigación. Simplemente, se tratará de dar una noticia breve y resumida de cómo han organizado el ministerio de culto las principales iglesias y confesiones religiosas presentes en el ámbito cultural hispanoamericano.

Este propósito tiene en mira lo expuesto en el capítulo anterior: que es cada confesión religiosa la que define a quienes constituye ministros de culto, y con qué requisitos, condiciones y alcances. Es también cada confesión religiosa la que elige las denominaciones con las que los identifica (que a veces se repiten de una a otra, pero con distinto significado y contenido), las jerarquías entre ellos, etcétera. El Derecho Eclesiástico del Estado, recibirá luego esas denominaciones, a veces de modo explícito, a veces de modo genérico con el rótulo de “ministros religiosos” o “ministros de culto”. Precisamente, el interrogante es, cuando el Derecho se refiere genéricamente a “ministros religiosos”, quiénes son los que quedan englobados en esa denominación⁴⁸.

Es imposible hacer un estudio detallado, o dar siquiera una noticia, de todas las iglesias y confesiones religiosas. Prestaremos atención a las más difundidas en el área hispanoamericana, dando alguna breve noticia respecto de otras que, siendo importantes en otras regiones, tienen escasa presencia numérica en la nuestra.

3.1 Iglesia Católica

El caso de la Iglesia Católica es el más importante a considerar en Hispanoamérica en general y en la Argentina en particular, por ser la confesión largamente mayoritaria, más antigua y arraigada. Pero al mismo

⁴⁸ Un interesante estudio sobre el tema puede verse en el Anuario de derecho comparado de las religiones, “Daimon”, 2003 (3), publicado por Il Mulino (Milán, 2003) bajo la dirección de Silvio FERRARI, con trabajos monográficos referidos al Islam, a las iglesias anglicana, valdense, adventista y luterana y al judaísmo.

tiempo es el más sencillo de conocer, dado que existe abundante y accesible bibliografía al respecto, y también un ordenamiento jurídico (el Derecho Canónico) detallado, preciso y también muy accesible⁴⁹. Por lo tanto, nos limitamos a una mínima exposición del tema.

En el Derecho Eclesiástico hispanoamericano, la mayor cantidad de referencias específicas a ministros religiosos se hace en relación a los de la Iglesia Católica, a veces para referirse sólo y específicamente a ellos, pero otras veces en una suerte de referencia genérica. Por eso, es necesario en cada caso discernir si lo que se dice, por ejemplo, de los “sacerdotes”, se aplica sólo a los sacerdotes católicos, o a los ministros de culto en general. Es incluso probable que en muchos casos el legislador haya tenido en mente al tiempo de emanar la norma sólo a los sacerdotes católicos, pero una interpretación dinámica a la luz del creciente pluralismo religioso, obligue a hacer su extensiva su aplicación a todos.

3.1.1. Clérigos

El ordenamiento jurídico interno de la Iglesia Católica, su Derecho Canónico, no habla de “ministros religiosos” o de “ministros de culto”, sino de “ministros sagrados”, o clérigos (canon 207 §1), denominando así a quienes han recibido órdenes sagradas en cualquier grado (obispos, sacerdotes y diáconos, incluso diáconos permanentes). Según la norma citada,

*“por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan también clérigos; los demás se denominan laicos”*⁵⁰

La noticia acerca de la existencia de estos ministros sagrados se encuentra ya en los comienzos de la iglesia. En las cartas de San Pablo se menciona varias veces a presbíteros, obispos y diáconos. Estos últimos, tienen su origen en la elección hecha por los mismos Apóstoles (He 6, 5-6).

Alguien llega a ser clérigo, o ministro sagrado, por la recepción de uno de los sacramentos de la Iglesia: el orden sagrado, que la

⁴⁹ Ver por ejemplo, entre la bibliografía argentina, BUSO, Ariel, "La fidelidad del apóstol. Visión canónica del ser y el obrar del clérigo", segunda edición corregida y aumentada, Buenos Aires, EDUCA, 2014.

⁵⁰ Sobre el régimen jurídico de los clérigos católicos, ver RINCÓN-PÉREZ, Tomás, "El orden de los clérigos o ministros sagrados", EUNSA, Pamplona, 2009. Salvo aclaración expresa nos referimos en este capítulo a la disciplina de la Iglesia latina (Código de Derecho Canónico de 1983). El Código de Cánones de las Iglesias Orientales se refiere a los clérigos a partir del c.323.

Iglesia considera instituido por el mismo Jesucristo (c.1008), y que se recibe mediante la imposición de las manos y las oraciones litúrgicas correspondientes (c.1009). En la Iglesia Católica hay una igualdad esencial entre todos los fieles, proveniente del bautismo común a todos, pero también un orden jerárquico (querido por Cristo) proveniente de ese sacramento del orden⁵¹, que es “indeleble” (“imprime carácter”, es decir, permanece para siempre).

En la medida en que se incluye entre los clérigos a los diáconos, no sólo los sacerdotes (presbíteros, y obispos) son ministros de culto, aunque entre sacerdotes y obispos por un lado, y diáconos por el otro, existen diferencias teológicas que el Derecho Canónico ha remarcado recientemente⁵².

En la Iglesia Católica, el estado clerical está reservado únicamente para los varones (canon 1024). La “ordenación” de mujeres no solamente es inválida, sino que quien atenta el acto (tanto el ordenante como la “ordenanda”) incurre en excomunión *latae sententiae* reservada a la Sede Apostólica, o en “excomunión mayor” si son personas de rito oriental⁵³.

Los obispos, los presbíteros (sacerdotes) y los diáconos ordenados como paso previo al presbiterado, están obligados en la Iglesia latina (occidental) al celibato. En la Iglesia Católica de rito oriental, la obligación del celibato es completa para los obispos, y para los monjes, pero se admite la ordenación al presbiterado (y por tanto también al diaconado) de hombres casados. Lo que da lugar a la existencia de obligaciones familiares de estos clérigos, y de obligaciones de la Iglesia hacia sus familias. También se han recibido en la Iglesia latina a clérigos casados provenientes del anglicanismo.

⁵¹ Enseña en Concilio Vaticano II que “*el sacerdocio común de los fieles, y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque difieren en la esencia y no sólo en el grado, se ordenan sin embargo el uno al otro; ambos según su modo propio participan del único sacerdocio de Cristo*” (Constitución *Lumen Gentium*, 10). El Catecismo de la Iglesia Católica aclara que “*el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos*” (# 1547).

⁵² Por el Motu Proprio *Omnium in mentem* del 26 de octubre de 2009, el Papa Benedicto XVI reformó los cánones 1008 y 1009, remarcando que sólo los sacerdotes y obispos actúan “in persona Christi”. Pero esto no modifica ni el estado clerical ni la calidad ministerial de los diáconos, “*habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad*” (c.1009 § 3).

⁵³ “Decreto general acerca del delito de atentada ordenación sagrada de una mujer”, Congregación para la Doctrina de la Fe, 19 de diciembre de 2007 (publicado en “*L’Osservatore Romano*”, 30/5/08). Recientemente, el Papa Francisco ha dispuesto que se vuelva a estudiar la posibilidad de ordenar “diaconisas” mujeres.

En la Iglesia latina, luego del Concilio Vaticano II fue restaurado el “diaconado permanente”, al que son llamados varones que no han de ser ordenados luego presbíteros (sacerdotes). Los diáconos permanentes pueden ser hombres casados⁵⁴.

Los clérigos deben “incardinarse” en una diócesis o circunscripción eclesiástica equivalente. Los ministros sagrados se ordenan para una iglesia particular concreta, a la que quedan unidos, según se dispuso ya desde el Concilio de Nicea (año 325). Actualmente, la incardinación se entiende como una relación de servicio del clérigo, que lo vincula no solamente con el obispo sino con toda la iglesia particular o estructura pastoral a la que sirve. La incardinación es tanto el acto jurídico de incorporación a una estructura eclesial, como el hecho de pertenecer a ella. En sentido estricto, un clérigo puede incardinarse en una diócesis o estructura similar (incluso de tipo personal y no territorial⁵⁵), o en un instituto de vida consagrada (c.588 y 266 #2) o sociedad clerical de vida apostólica (c.736) o algunos institutos seculares (c.266 #3). En ciertos casos, es posible también la “agregación” de un clérigo a otra diócesis (principalmente en lugares de misión), por traslado del mismo aceptado por su obispo (c.271).

La incardinación se produce de modo automático por la recepción del diaconado (c.266), pero también por acto expreso del obispo que incardina a un clérigo previamente excardinado de otra diócesis o instituto (c.267). No se admiten clérigos “vagos” (no incardinados).

Si bien la incardinación supone un vínculo del clérigo con el obispo y la diócesis (o estructura eclesial correspondiente), requerirá luego del encargo de un oficio específico, conferido mediante la *missio canonica*⁵⁶.

⁵⁴ Ver RETAMAL, Fernando, “Ministerios, con especial referencia a los ministerios laicales y diaconales”, en *Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Canónico*, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1995, p.45.

⁵⁵ Como es el caso, a estos efectos, de las prelaturas personales. También los ordinariatos u obispados castrenses pueden incardinar clérigos, según la Constitución Apostólica *Spirituali Militum Curae*, lo mismo que las administraciones apostólicas personales (como la “San Juan María Vianney” erigida en Brasil para los fieles tradicionalistas) o los ordinariatos erigidos según la Constitución Apostólica *Anglicanorum Coetibus* para fieles provenientes del anglicanismo. Las circunscripciones territoriales que pueden incardinar son las prelaturas territoriales, las abadías territoriales, los vicariatos apostólicos, las prefecturas apostólicas y las administraciones apostólicas erigidas de modo estable (cc.370 y 371),

⁵⁶ El CIC no dice expresamente que exista un derecho subjetivo del clérigo a obtener un oficio, como sí dice el Código de Cánones de las Iglesias Orientales: “los clérigos tienen derecho a

Desde el punto de vista sacramental, el orden sagrado “imprime carácter”: como el bautismo: es indeleble, permanece para siempre (por lo tanto, el clérigo ordenado siempre podrá realizar válidamente acciones sacramentales, aunque eventualmente sean ilícitas), y no puede ser reiterado. Pero si la condición sacerdotal no se pierde nunca, sí puede perderse la condición jurídica de clérigo. Es lo que antiguamente se llamaba “reducción al estado laical” y, ahora, “pérdida del estado clerical”⁵⁷.

Esta pérdida del estado clerical puede ocurrir de tres modos (c.290):

a) por sentencia judicial (canónica) o decreto administrativo (canónico) que declare la invalidez de la ordenación (por ejemplo, por un vicio grave de la voluntad, o porque el ministro ordenante no tenía la capacidad de hacerlo);

b) por la sanción penal (canónica) de expulsión o dimisión del estado clerical, que procede ante delitos particularmente graves (herejía, apostasía, cisma, delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo, violencia física contra el Papa, matrimonio atentado aunque sea sólo civil, etc.); o

c) por “rescripto de la Sede Apostólica” (dispensa concedida por el Papa, por causas gravísimas, como una gracia a pedido del clérigo). Esta dispensa está implícita en la dispensa del celibato, que también puede conceder el Papa a pedido del interesado y según un procedimiento específico.

La pérdida del estado clerical implica la pérdida de los derechos y obligaciones propios de ese estado, y por tanto quienes están en esa situación tienen prohibido ejercer la potestad de orden (salvo la posibilidad de dar la absolución en peligro de muerte, c.976), quedan privados de todos los oficios eclesiásticos, y pierden el derecho a una remuneración o sustentación (aunque el Ordinario debería brindarle alguna ayuda adecuada, c.1350 § 2), entre otras consecuencias.

obtener del propio obispo eparquial, supuestos los requisitos canónicos, algún oficio, ministerio o función al servicio de la iglesia” (c.371 # 1).

⁵⁷ Cfr. SALACHAS, Dimitrios y SABBARESE, Luigi, “Chierici e ministero sacro nel Codice Latino e Orientale”, Urbaniana University Press, Vaticano, 2004, p.92.

3.1.2 Religiosos

Los religiosos, varones o mujeres, (c.207 §2) no son estrictamente “ministros sagrados”, en el sentido canónico; ni “ministros de culto” en el sentido ordinario del término en Derecho Eclesiástico del Estado.

Sin embargo, en tanto personas consagradas que se dedican plenamente a la vida religiosa y, en muchos casos, también a la labor evangelizadora, eventualmente pueden llegar a ser considerados ministros de culto en el marco del derecho eclesiástico del Estado. Por ejemplo, si se trata de proveerles de una credencial o identificación específica, o facilitar su atención a enfermos o personas detenidas. Esto es porque concurren en ellos varias características propias de los ministros de culto: una formación específica, una dedicación exclusiva a tareas de índole religiosa, y una condición diferencial respecto del común de los fieles.

Esto sin perjuicio, naturalmente, de que los religiosos varones que son clérigos (porque también los hay laicos, es decir, que no han recibido el sacramento del orden, a veces llamados "hermanos legos"), son de suyo ministros de culto.

Una persona se convierte en "religioso" en el seno de la Iglesia Católica mediante la profesión religiosa, o emisión de votos por los que asume los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en el seno de un instituto de vida consagrada aprobado por la Iglesia, lo que genera un vínculo sacro. Esto acontece generalmente luego de un tiempo de discernimiento vocacional y de conocimiento del instituto por parte del candidato.

Por la profesión religiosa o votos la persona queda incorporada al instituto de vida consagrada, pero esa incorporación puede ser temporal o perpetua (c. 607 § 2, 723 y 735). Cuando la incorporación no es perpetua o definitiva, al finalizar la incorporación temporal el consagrado puede renovar la incorporación temporal o solicitar la incorporación definitiva, o bien dejar el instituto (cc. 657; 688 § 1; 723 § 3, 726 y 742), perdiendo su condición de religioso⁵⁸.

En la Argentina, la reglamentación de la ley 24.483⁵⁹ que referiremos más adelante, y que regula a los Institutos de Vida Consagrada y

⁵⁸ Sobre los religiosos y sus institutos, en el Derecho Canónico y en el Derecho argentino, ver NAVARRO FLORIA, Juan G. y Heredia, Carlos I., "Régimen jurídico de los religiosos y de los institutos de vida consagrada", Buenos Aires, EDUCA, 1997.

⁵⁹ Del año 1995, BO4/5/1995. La reglamentación es el Decreto 491/95 del 21/9/95 (BO 2/10/95).

Sociedades de Vida Apostólica, ha considerado oportuno definir algunos términos. Entre ellos (art.1 inc.h) define:

"MIEMBRO DE UN INSTITUTO DE VIDA CONSAGRADA: Es cada uno de los fieles católicos legítimamente admitido en el instituto por la autoridad competente del mismo según sus constituciones, quedando incluidos en esta denominación genérica los denominados en el derecho argentino "religiosos profesos", "religiosos" o "eclesiásticos regulares"."

3.1.3 “Ministerios laicales”

Un tema complejo en la Iglesia Católica es el de otros “ministros” laicos, así llamados a veces por el propio derecho canónico, o por el magisterio de la Iglesia, y con más frecuencia en la práctica pastoral. El c.230 §1 prevé que haya laicos investidos del ministerio del lectorado o acolitado; o ministros de la eucaristía (c.230 §3 y 910 §2); y también se menciona a quienes cooperan en el ministerio de la palabra y en la predicación (c. 759 y 766). Estos ministerios no convierten a quienes los reciben en clérigos (siguen siendo laicos), aunque a veces sean previos a la recepción del diaconado (cc. 1035 y 1050); y han reemplazado a lo que hasta el Concilio Vaticano II se denominaban “órdenes menores”⁶⁰. Los ministerios de lector y de acólito están también reservados – hasta ahora- a varones laicos, aunque en forma temporal y extraordinaria pueden ser ejercidos por mujeres. Cabe pensar en una futura evolución en esta materia.

A esos ministerios, principalmente destinados a la liturgia, podemos sumar al de los catequistas que deben desarrollar tareas en escuelas, hogares de niños, e incluso en parroquias; a los “ministros del alivio” que trabajan en hospitales o asilos; ministros extraordinarios de la eucaristía que deben acudir a esos mismos lugares; agentes de la pastoral carcelaria, etcétera.

Finalmente, existen casos de laicos a quienes les es confiada, por la escasez de clero, la animación o dirección de la asistencia

⁶⁰ Las órdenes menores subsisten en la Iglesia Católica de rito oriental, a tenor del canon 327 del Código de Cánones para las Iglesias Orientales, que a su vez remite al derecho particular de cada una de estas iglesias. Quienes las reciben son ministros de culto, “*generalmente llamados clérigos menores*”, y forman parte del clero de esas iglesias (SALACHAS, Dimitrios y SABBARESE, Luigi, “Chierici e ministero sacro nel Codice Latino e Orientale”, Urbaniana University Press, Vaticano, 2004, p.41).

espiritual en centros públicos, o incluso la coordinación de la labor pastoral de una parroquia⁶¹.

En todos estos casos, lo determinante no es la recepción del sacramento del orden sagrado (que no existe en ellos), sino la función desempeñada por mandato de la autoridad eclesiástica. De cara al ordenamiento jurídico del Estado, que es lo que aquí nos interesa, y más allá de cualquier disquisición canónica acerca de la naturaleza de estos “ministerios laicales”, será posible aplicar a quienes los ejercen al menos algunas de las previsiones del Derecho Eclesiástico estatal referidas a los ministros de culto en general. Especialmente si estas personas cumplen funciones que ordinariamente corresponden a ministros ordenados, y han sido puestas en ellas por la autoridad eclesiástica.

3.1.4 Seminaristas

Son “seminaristas” los varones que se preparan para recibir el sacramento del orden sagrado. No son todavía ministros sagrados en sentido estricto, pero están en vías de serlo, por lo que a menudo el ordenamiento jurídico les aplica por extensión aquello que está previsto para los ministros de culto en cuanto tales.

La denominación proviene del “seminario”, que es la escuela o instituto donde se forman los futuros sacerdotes. La obligatoriedad de los seminarios fue impuesta por el Concilio de Trento (1563) y subsiste hasta hoy, y a ellos dedicó un decreto el Concilio Vaticano II (*Optatam Totius*)⁶². El Código de Derecho Canónico se ocupa de ellos en los cc.232-264.

El acceso al seminario es completamente libre para aquellos laicos varones que aspiran al sacerdocio, pero requiere la admisión formal por parte del obispo o superior eclesiástico de quien dependa el seminario. Esa admisión supone un examen de la idoneidad del candidato (c.241) que toma en cuenta aspectos humanos de madurez personal, psíquicos, morales, intelectuales y de salud. La admisión al seminario es un acto jurídico que se realiza mediante una liturgia específica.

⁶¹ Cfr. ALBERCA DE CASTRO, Juan Antonio, “Régimen jurídico del ministro de culto en España y Francia”, Granada, Ed. Comares, 1999, p.19.

⁶² El Sínodo de los Obispos se ocupó del tema en el año 1990, y como resultado el Papa San Juan Pablo II produjo la exhortación apostólica *Pastores Dabo Vobis* del 25 de marzo de 1992.

Los seminaristas están sujetos a la autoridad del obispo. Ya durante su proceso formativo, pueden recibir encargos o tareas pastorales, que complementan su formación teórica, lo que refuerza su asimilación a los ministros de culto en sentido propio. Un hito fundamental de su proceso formativo es la admisión al diaconado, que es también un acto formal que realiza el obispo y que, previamente (y salvo en el caso de los diáconos permanentes) requiere en la Iglesia de rito latino el compromiso de guardar el celibato⁶³.

Quienes en cambio se preparan para la vida religiosa, se denominan durante el proceso formativo (en el que ordinariamente ya hacen vida en común en el seno del instituto de vida consagrada) genéricamente "novicios", y al lugar de formación, "noviciado". Esto se refiere tanto a mujeres como a varones⁶⁴.

3.2 Iglesia Ortodoxa

La Iglesia Ortodoxa, que como es sabido está conformada por un conjunto de Iglesias o patriarcados generalmente asociados a un territorio nacional⁶⁵. Ellas, lo mismo que las antiguas iglesias orientales⁶⁶, han conservado un ministerio religioso sustancialmente análogo al de la Iglesia Católica, estructurado en varios grados (episcopado, presbiterado, diaconado).

⁶³ Para un examen detallado de la organización de los seminarios, el proceso formativo, los criterios de admisión, etcétera, ver RINCÓN-PÉREZ, Tomás, "El orden de los clérigos o ministros sagrados", Pamplona, EUNSA, 2009, cap. V al X.

⁶⁴ Según las normas de cada instituto puede haber también otras denominaciones que reflejan distintas etapas del iter formativo: prenovicios, escolásticos, etcétera.

⁶⁵ Los cuatro Patriarcados antiguos son Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que han quedado reducidos en número de fieles pero conservan un primado de honor. Otras nueve iglesias ortodoxas autocéfalas son las de Rusia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Georgia, Chipre, Grecia, Polonia, Albania, República Checa y Eslovaquia (quienes encabezan las cuatro primeras son también llamados Patriarcas). La iglesia de Ucrania pretende ser autocéfala (separada de Rusia), y otras iglesias pretendidamente autocéfalas se han fundado en otros lugares, particularmente en Occidente, sin obtener reconocimiento de las antes nombradas. Ver para el tema de la ortodoxia WARE, Kallistos, "La Iglesia Ortodoxa" Ed. Ángela, Buenos Aires, 2006.

⁶⁶ Son iglesias que se separaron del tronco común antes de alguno de los primeros concilios (Calcedonia, Nicea...), y por lo tanto antes de la división de la separación entre la Iglesia Católica de Occidente y las iglesias ortodoxas de Oriente. Son antiguas iglesias orientales la Siriana, Armenia, Copta, etcétera.

Sin perjuicio de las reglas propias que cada una de ellas se haya dado en el tiempo, todas las iglesias ortodoxas comparten el conjunto de los Sagrados Cánones de los primeros siete concilios ecuménicos, comunes también a la Iglesia Católica Romana⁶⁷. Muchos de los patriarcados e iglesias autocéfalas, han establecido estructuras pastorales para la atención de los fieles de la diáspora, en América Latina.

La Iglesia Ortodoxa es esencialmente jerárquica. A la cabeza de cada una de ellas hay un Patriarca, un Metropolitano o un Arzobispo mayor. A la cabeza de cada circunscripción territorial (o ejerciendo otros oficios en la iglesia) hay arzobispos y obispos. En la elección de los obispos interviene en general el Sínodo de la iglesia (la iglesia ortodoxa conserva la estructura sinodal que se había dado la Iglesia cristiana en los primeros diez siglos de existencia, y que también conserva la Iglesia Católica de rito oriental), y la ordenación la reciben de al menos otros dos, o tres, obispos.

Los clérigos en la iglesia ortodoxa pueden ser célibes o casados: en este último caso, se trata de varones que se casan antes de recibir el diaconado (y obviamente el presbiterado). Si luego enviudan no pueden volver a contraer matrimonio estando ya ordenados, como tampoco puede casarse quien ha sido previamente ordenado. La ordenación es recibida por la imposición de las manos de un obispo según la liturgia y oraciones específicas para la ordenación. Entre los clérigos, a semejanza de la Iglesia Católica, se distinguen:

a) los obispos, sucesores de los apóstoles, que rigen las eparquías (diócesis) o eventualmente colaboran con el Patriarcado (obispos titulares), en quienes reside la plenitud de la autoridad eclesiástica y del orden sagrado. Los obispos Metropolitanos son los que tienen a su cargo las sedes más importantes (metrópolis). Los obispos con jurisdicción fuera del territorio canónico de la iglesia (como es en todo caso América Latina) suelen llevar el título de Exarcas (y sus diócesis ser llamadas exarcados)⁶⁸. Los clérigos casados no pueden ser obispos.

b) los presbíteros, que ejercen su ministerio en dependencia de la autoridad del obispo y administran los sacramentos, pudiendo ejercer múltiples oficios en el seno de la iglesia;

⁶⁷ Ver PAPASTATHIS, Charalambos, "Le autorità ecclesiastiche secondo il Diritto della Chiesa ortodossa orientale", Daimon 5 (2005) p.178.

⁶⁸ Estas mismas denominaciones son utilizadas también por la Iglesia Católica de rito oriental, en comunión con el Papa.

c) los diáconos, que colaboran en funciones litúrgicas y actividades eclesiales. En la ortodoxia el diaconado es un grado permanente, no sólo un paso hacia el sacerdocio, y al igual que el presbiterado está abierto a varones casados. El achidiácono es el colaborador personal del obispo.

Si bien en la antigüedad había diaconisas mujeres, y formalmente no se ha abolido la posibilidad de que las haya, hace siglos que esa posibilidad ha caído en desuso. Hoy día los clérigos son todos varones bautizados, que hayan recibido la conveniente formación⁶⁹.

La ortodoxia tiene una antigua y riquísima tradición de vida religiosa (monacato), cuyo exponente más importante es el monasterio del Monte Athos, en Grecia, dotado de un estatuto jurídico absolutamente singular. En Oriente existen numerosos monasterios, además de otras formas de vida religiosa (ermitaños, anacoretas), que se han expandido también a algunos lugares de Occidente. Pero no hay en la Argentina monasterios ortodoxos femeninos ni masculinos. Los monjes (varones) que además reciben la ordenación sacerdotal son clérigos (hieromonjes), y de entre ellos se selecciona a los futuros obispos.

3.3 Iglesias protestantes y evangélicas

Los ministros de culto de las iglesias protestantes y evangélicas se denominan genéricamente “pastores”, sin perjuicio de otras denominaciones muy variadas que puedan darse en algunas de ellas (obispos, ancianos, siervos, presbíteros, etcétera), o de los diversos oficios que puedan desempeñar dentro de la iglesia.

En general estas iglesias no han conservado el sacerdocio como sacramento y en los términos en que existe en la Iglesia Católica o las iglesias ortodoxas y orientales. Esto hace que la condición de pastor o ministro de culto pueda ser muchas veces temporal, o pueda perderse. En

⁶⁹ Sobre los distintos requisitos para la ordenación, sus derechos y obligaciones, ver PAPASTATHIS, *op.cit.* en nota anterior, p.188. En España, el Real Decreto 822/2005 del 8 de julio de 2005, referido a los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en España, dice que *"la condición de clérigo se acreditará mediante certificación expedida por el Patriarcado de Moscú en España, en la que deberá constar el carácter de su dedicación estable, exclusiva y remunerada a las funciones de culto o asistencia religiosa"*.

algunos casos el pastorado puede estar reservado para los varones, pero en muchas iglesias se admiten a él también mujeres. Salvo algún caso excepcional, no se exige el celibato a los ministros de culto: al contrario, muchas veces se prefiere y aún se exige que se trate de hombres o mujeres casados.

Hay que advertir también que en el amplio universo de iglesias protestantes y evangélicas existen diversos modelos eclesiales⁷⁰. Algunos son primordialmente jerárquicos. Pero otros son de naturaleza asamblearia, donde la autoridad no reside en los ministros ordenados sino en la comunidad misma. Hay iglesias que tienen una estructura nacional o incluso internacional, mientras que otras se estructuran en comunidades independientes unas de otras, aunque exista entre ellas diverso grado de comunión espiritual. Esta diversidad se traslada naturalmente a las exigencias para el acceso al ministerio, la formación de los pastores, las denominaciones utilizada para los ministros de culto, etcétera.

3.3.1 Iglesia anglicana

La Comunión anglicana está formada por un conjunto de iglesias independientes pero en comunión con la sede de Canterbury. El arzobispo de Canterbury y la Conferencia de Lambeth (que reúne a los obispos anglicanos del mundo) no tienen autoridad más que de tipo moral sobre el conjunto, y no hay un derecho canónico único para todas, aunque sí un “derecho común”⁷¹.

Luego de su separación de Roma en el cisma encabezado por Enrique VIII, la iglesia anglicana conservó el sacerdocio y sus tres órdenes (episcopado, presbiterado y diaconado), más allá de la controversia con la Iglesia Católica acerca de la validez de las ordenaciones producidas en el seno de aquella.

La admisión a las órdenes sagradas corresponde a los obispos. Durante largo tiempo sólo se admitía a varones (bautizados), solteros o casados, e incluso en tiempo más reciente a divorciados; pero actualmente muchas iglesias ordenan mujeres, y también personas que se declaran

⁷⁰ Sobre la tipología de las diversas iglesias protestantes y evangélicas en la Argentina y en América Latina, ver WYNARCZYK, Hilario, “Ciudadanos de dos mundos”, UNSAM, Buenos Aires, 2009.

⁷¹ Cfr. DOE, Norman y OMBRES, Robert, “Il ministero sacro nel diritto Della Comunione anglicana e Della Chiesa di Roma”, DAIMON 3/2003, p.67. En este apartado se sigue a estos autores.

homosexuales, lo que es resistido por otras y ha generado no pocas tensiones y rupturas en el seno de la comunión anglicana⁷². El primer grado del orden es el diaconado, y después de al menos un año se puede acceder al presbiterado. La ordenación está a cargo del obispo, mediante la imposición de las manos y el uso de las formas litúrgicas correspondientes.

Difiere según la iglesia de que se trate, dentro de la comunión anglicana, el modo en que se accede a los oficios o ministerios eclesiásticos concretos. En algunos casos es determinante la elección que haga el obispo, mientras que en otros es la comunidad la que elige a su pastor y lo comunica al obispo para que éste le otorgue o confirme la correspondiente investidura. En general se pide a los clérigos una dedicación completa al ministerio, que deben desempeñar como regla en la diócesis a la que pertenecen y bajo la dirección del obispo, a quien prometen obediencia.

A diferencia de la Iglesia Católica, en el anglicanismo es posible la renuncia al ministerio y la pérdida de la condición clerical.

3.3.2 Iglesias luteranas y protestantes europeas

Una de las definiciones esenciales de la reforma protestante es la unicidad del oficio pastoral, que borra las diferencias de grado entre los ministros ordenados⁷³. Las diferentes funciones que cumplen los pastores dentro de la iglesia, incluso los designados obispos, forman parte de un único ministerio espiritual. La ordenación pastoral o la consagración episcopal no son sacramentos, ni crean una distinción esencial entre quienes la reciben y el resto de los fieles; aunque a los pastores les compete la predicación pública y la administración de los sacramentos.

En la iglesia luterana el ministerio espiritual se distingue de la conducción eclesiástica, que puede estar en manos de pastores o de laicos. La iglesia no es jerárquica, sino que se gobierna a sí misma, por medio de consejos eclesiásticos. En su gobierno intervienen los poderes públicos,

⁷² Estas novedades han producido también un mayor distanciamiento respecto de la Iglesia Católica romana, y al mismo tiempo el "regreso" de algunas comunidades y personas (incluyendo obispos y otros clérigos) a la plena comunión con aquella, que en los países donde este fenómeno ha sido más importante ha creado estructuras específicas para esos fieles, que pueden conservar su liturgia. Sobre esta cuestión, ver GARCIA OLIVA, Javier, "Las consecuencias legales de la ordenación femenina en las iglesias de la comunión anglicana", RGDCEE, nº 36 (2014).

⁷³ Cfr., para este apartado, DE WALL, Heirich, "Autorità religiose nelle chiese luterane tedesche", en DAIMON 3/2003, p.195.

teniendo en cuenta que son iglesias territoriales (nacionales o regionales) autónomas entre sí más allá de su comunión espiritual.

Los pastores son a veces elegidos por la propia comunidad y otras veces con intervención, también, de algún órgano directivo de la iglesia. Además de la predicación pública y de la administración de los sacramentos, le corresponde presidir la liturgia, integrar el consejo eclesiástico, y cumplir algunas funciones administrativas.

La ordenación pastoral puede ser conferida a varones o a mujeres (y en tiempos recientes, también a personas que se hayan declarado homosexuales), lo mismo que la consagración episcopal. Supone una formación teológica específica, y no exige ninguna obligación de celibato (al contrario, se espera que los pastores contraigan matrimonio y sean un modelo en esa materia). La ordenación se otorga por única vez (es indeleble), confiere el derecho y el deber de predicar públicamente la Palabra y administrar los sacramentos, y sigue a ella normalmente la atribución de un oficio pastoral que en principio es permanente, salvo acuerdo en contrario, y rentada. Los pastores tienen gran libertad doctrinaria; y en los países donde la iglesia luterana es oficial o mayoritaria son prácticamente funcionarios públicos. Deben vivir en el territorio donde cumplen funciones.

Los obispos son pastores a quienes se confieren funciones en un territorio más amplio que la simple parroquia, es decir, que tienen la cura de almas sobre toda la iglesia regional, tienen el encargo de visitar a las comunidades, y la potestad de ordenar a otros pastores. El cargo es por tiempo indeterminado y supone la representación externa de la iglesia. Los obispos son elegidos por el Sínodo de la iglesia (integrado por pastores y por laicos).

3.3.3 Iglesia metodista

La iglesia metodista surgió en el seno de la iglesia anglicana en el s.XVIII a partir de la prédica de John Wesley. Llegó a Sudamérica (concretamente a Buenos Aires) en 1836, con tinte misionero y proselitista, y particular dedicación a la educación⁷⁴. La presencia metodista más importante hoy día en América Latina se da en Chile.

⁷⁴ Sobre los orígenes y desarrollo de la iglesia en la Argentina y América del sur, ver <http://iglesiametodista.org.ar/constitucion-y-reglamento-general-con-modificaciones-2007/> (accedido el 16 de enero de 2017).

La iglesia reconoce el doble orden de ministerio ordenado: presbíteros o pastores (ministros ordenados "para la proclamación de la Palabra, la dirección del culto y la administración de los sacramentos, y para capacitar, guiar y servir a la Iglesia en el cumplimiento de su misión en el mundo, mediante la enseñanza, el consejo y la conducción pastoral"), y diáconos (ministros ordenados "para alguna tarea particular, sea en el cuidado y edificación de la Iglesia o en el ejercicio del ministerio de ésta en el mundo")⁷⁵. Para ser ordenado se requiere ser "miembro confirmado activo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina que manifieste haber recibido el llamado divino, con la intención de ejercer su ministerio de por vida, y cuya vocación sea confirmada por el testimonio de la Iglesia", previa obtención de un grado en teología, aprobación por la Asamblea de la iglesia e imposición de las manos por parte del obispo, pastores y laicos. Pero también existen laicos con funciones pastorales asignadas por la iglesia, que a los fines que nos interesan se equiparan a los ministros de culto.

Los presbíteros o diáconos pierden su condición de tales por renuncia o por destitución; y pueden tener dedicación de tiempo completo o parcial.

De entre los presbíteros, cada cuatro años la Asamblea de la iglesia elige a un obispo, que al cesar en su cargo recibe el trato de obispo emérito. El obispo representa a la iglesia y tiene una importante cantidad de funciones, pero está subordinado a la Asamblea General que es la máxima autoridad.

3.3.4 Iglesias bautistas

Con algunos antecedentes ya a comienzos del siglo XIX, las iglesias bautistas están presentes en la Argentina desde el último tercio del mismo siglo, y están agrupadas en varias convenciones o asociaciones, además de otras iglesias libres. Su nombre deriva de la fuerte creencia y práctica de que el bautismo sólo es impartido a adultos que han hecho una opción personal por recibirlo, y no a niños.

Es un principio importante de estas iglesias la autonomía congregacional. Cada congregación es independiente, aunque mantenga lazos de comunión con otras.

⁷⁵ Arts. 701 y 702 del Reglamento de la Iglesia Metodista Argentina.

Sus ministros de culto se denominan pastores. Muchos de ellos han sido formados en el Seminario Internacional Teológico Bautista que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, luego de haber recibido el “llamado pastoral” en el seno de su congregación.. También hay, en las iglesias bautistas, diáconos.

Tanto pastores como diáconos son personas casadas, que pueden tener una profesión u ocupación civil juntamente con su ministerio religioso.

3.3.5 Iglesias evangélicas y pentecostales

Las iglesias evangélicas en general denominan "pastores" a sus ministros de culto, aunque a veces usan denominaciones como "obispos", "siervos", "obreros", "ancianos" u otras.

Algunas tienen denominaciones particulares. Así por ejemplo, el Ejército de Salvación (Salvation Army), que es una derivación de la iglesia metodista, llama a sus ministros "oficiales" (y a sus seminaristas, "cadetes"), a los que asigna rangos con denominación militar: general, coronel, mayor, capitán, comisionado...

En su conjunto, los fieles que integran los miles de denominaciones evangélicas conforman la más importante minoría religiosa en la Argentina y en América Latina, después de los católicos. No obstante, la gran fragmentación existente entre las iglesias que los agrupan hace imposible ofrecer un panorama completo.

En algunos casos los pastores reciben una formación relativamente rigurosa, de nivel terciario y con estudios serios de teología. Pero en otros, los pastores son elegidos por la propia comunidad, "elevados", designados por otros pastores, o incluso por uno sólo que elige a su sucesor o a sus colaboradores. Y no faltan casos de pastores autodesignados, que manifiestan haber recibido un llamado directo de Dios y, en tanto obtienen algún número de seguidores que los reconocen como tales, ejercen efectivamente el ministerio.

En general, las iglesias evangélicas y en especial las pentecostales⁷⁶ no ponen el acento en la formación académica, sino en el

⁷⁶ Las iglesias pentecostales son las más numerosas, y con mayor número de fieles, en la Argentina. Un indicio de esa relevancia es que, por ejemplo, en la provincia del **Chaco** se concede

"llamado", y en el cumplimiento de los requisitos "bíblicos", esto es, el cumplimiento de los estándares morales propuestos por diversos textos del Nuevo Testamento, en particular las cartas de Pablo.

Dentro de las iglesias pentecostales destacan por su tamaño y por su organización centralizada las Asambleas de Dios⁷⁷,

En definitiva es necesario estar a lo que resulta de los estatutos de cada una de las iglesias, si existen. En la Argentina para la inscripción en el Registro Nacional de Cultos creado por la ley 21.745 se exige manifestar cuales son los requisitos para el acceso al ministerio, lo que permite conocerlos al menos en el caso de las iglesias que han cumplido ese trámite (que distan de ser todas, pero suman varios miles).

3.4 Judaísmo

3.4.1 Sacerdocio y ministerio en la Biblia⁷⁸

La configuración del sacerdocio judío se fue dando lentamente a través de la historia de Israel. En los tiempos patriarcales no había sacerdotes, sino que los propios patriarcas oficiaban como tales. El sacerdocio aparece en el pueblo de Israel durante la travesía del desierto, luego de la salida de Egipto, siendo el primer sacerdote Aarón, hermano de Moisés. La tarea sacerdotal estuvo luego vinculada al cuidado de los santuarios, a la comunicación de la voluntad divina (Deuteronomio 33, 8-10) y a la enseñanza, antes de que esta última función fuera asumida por los levitas; pero la función característica y propia de los sacerdotes era ofrecer los sacrificios de animales, prescritos por el Pentateuco como "puros", y de otros elementos como por ejemplo harina, agua, también prescritos por la Ley.

El sacerdocio en el antiguo Israel era hereditario, porque había sido confiado por Dios a la familia de Aarón, perteneciente a la tribu de Leví (Números 1,50). Los varones eran sacerdotes por el hecho de pertenecer a ella, sin necesidad de alguna ceremonia de ordenación (que apareció recién

asunto administrativo a los empleados públicos "que profesen el culto evangélico" en el día de Pentecostés, que es feriado optativo en la actividad privada (Decreto 1059/2011)

⁷⁷ Ver GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos y SÁNCHEZ-BAYÓN, Antonio: "RIDE – Regulación Iberoamericana de Derecho Eclesiástico", Delta, Madrid, 2011, p.243.

⁷⁸ Se sigue en esta sección a CASTELOT SS, John J. "Instituciones religiosas en Israel", en "Comentario Bíblico "San Jerónimo" (dirigido por Raymond BROWN SS, Joseph FITZMYER SJ, y Ronland E. MURPHY o.carm, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1972, tº V, p. 528 y ss.).

tardíamente, luego del exilio en Babilonia). En tiempos antiguos había sacerdotes que no eran levitas, pero a partir del siglo VIII A.C. la función sacerdotal quedó en exclusividad para ellos (Deuteronomio 33, 8-11).

Sin embargo, al limitarse el culto al templo de Jerusalén, durante el reinado de Salomón gran cantidad de descendientes de Leví quedaron sin posibilidad práctica de ejercer el sacerdocio, aunque tuvieran derecho a ello (Deuteronomio 18,1), lo que condujo a la distinción entre sacerdotes y levitas (cfr. Ezequiel 40, 45-46). Durante la monarquía, desde que David se estableció en Jerusalén, el sacerdocio fue confiado a Sadoq y sus descendientes, hasta la destrucción del Templo en 587 a.C. De esta época parece datar la existencia de un Sumo Sacerdote (2 Reyes 12,11), un “segundo sacerdote” (2 Reyes 23.4) y otras jerarquías menores.

Luego de la crisis que supuso el exilio (587 a 538), el sacerdocio fue restablecido en Jerusalén, otorgándolo a descendientes de Sadoq, pero también a descendientes de Itamar y de Eleazar, hijos de Aarón. En la etapa postexílica, los sacerdotes asumieron también injerencia en el gobierno, o el gobierno civil mismo, en manos del Sumo Sacerdote. Este cargo llegó a ser tanto o más político que religioso. Mientras tanto, los levitas asumieron otras funciones también vinculadas al culto (cantores, porteros, etcétera). Mantener a sacerdotes y levitas era una carga que pesaba sobre todo el pueblo, obligado a pagar diezmos, primicias y otras ofrendas.

El sacerdocio israelita se extinguió con la destrucción del Templo de Jerusalén, y la diáspora, en el año 70. Muchos de los descendientes de la antigua casta sacerdotal aún se identifican con ese nombre (Cohen, o sus derivados, que significa sacerdote), pero no tienen ya ninguna función de ese tipo, si bien siguen vigentes algunas leyes específicas para los sacerdotes, tales como no ingresar a un cementerio salvo por el fallecimiento de parientes cercanos (esposa, hijos, hermanos, padres).

En el Antiguo Testamento no aparecen mencionadas las sinagogas, que sí se mencionan en el Nuevo Testamento. Las sinagogas no eran ni son templos, sino lugares de reunión, en los que no se ofrecen sacrificios sino que el pueblo se reúne para rezar, leer la Biblia y otros libros, y recibir enseñanza religiosa. Su origen se ubica en el tiempo postexílico, y ya estaban claramente establecidas en tiempos de Jesucristo.

3.4.2 Ministerio en los tiempos modernos

El judaísmo carece de una autoridad central o única, que pueda definir o identificar a quienes se considera ministros religiosos. En el Estado de Israel, existe un “Rabino Jefe” (en rigor dos, uno ashkenazi y otro sefardita, lo que da cuenta también de la diversidad de tradiciones en el seno del judaísmo), que ejerce una suerte de autoridad judicial religiosa, juntamente con un Consejo del Rabinato Central⁷⁹, reconocido por la legislación del Estado de Israel, pero que no tiene competencia directa sobre la diáspora judía. Este Consejo es el que –entre otras relevantes funciones- certifica la idoneidad de los rabinos, en Israel. Por otra parte los Rabinos en el Estado de Israel entienden en primera y segunda instancia en cuestiones de Derecho de familia para los matrimonios judíos (matrimonio, divorcio, conversiones al judaísmo).

El rol de ministro religioso es cumplido generalmente por el *rabino*, que no es un “sacerdote” (por lo dicho en el apartado anterior) sino un “maestro”, una persona versada en la Torá, la Mishná, el Talmud y la jurisprudencia rabínica⁸⁰. A partir de ese conocimiento, tiene a su cargo la enseñanza y la orientación de la vida del judío, que debe ordenarse según, precisamente, la ley; además de dirigir la oración y el culto, y constituirse en juez por ejemplo integrando los tribunales rabínicos que otorgan el divorcio religioso, tanto dentro como fuera de Israel⁸¹.

Los rabinos son “contratados” por las distintas comunidades judías, que se esfuerzan por obtener el servicio de rabinos prestigiosos. Su compromiso no es vitalicio, sino por tiempo determinado. Antiguamente, el rabinato era transmitido de maestro a discípulo: el maestro, cuando comprobaba que la preparación era suficiente, le daba la “*semijá*” (ordenación), en una suerte de cooptación. Después de la Revolución Francesa,

⁷⁹ Ver RABELLO, Alfredo Mordechai, “Il Rabbinate centrale di Erez Israel”, DAIMON, 2003 (3), p.115.

⁸⁰ “El rabino de la comunidad hebrea medieval no era el heredero de los rabinos de la época talmúdica, pero sí una persona devenida casi indispensable para el desarrollo de la comunidad. El rabino era al mismo tiempo juez, maestro, y en cierta medida guía de una comunidad que no habría podido vivir sin él. Su conocimiento talmúdico, su práctica de la jurisprudencia hebrea, su juicio, su piedad y su respetabilidad lo convertían en el hombre clave también para la solución de los conflictos... En un cierto sentido, el rabino se convirtió en garantía de convivencia tranquila y de equidad” (SCHWARZFUCHS, Simon, “La formazione dei rabbini dopo la Rivoluzione francese”, DAIMON 3/2003, p.139 –traducción libre).

⁸¹ Sobre la función judicial en el judaísmo, ver MINKOWICZ, Gabriel y GARCHTROM, Lydia, “Los orígenes de la figura del juez y de la función judicial en el derecho hebreo”, ED 242-817.

el Estado reglamentó en Francia tanto las funciones como la vía de acceso al rabinato, lo que dio paso a una Escuela Central Rabínica en ese país⁸². A lo largo del siglo XIX se establecieron otros seminarios rabínicos en varios países europeos, donde los aspirantes a rabinos pudieran estudiar la Toráh, el Talmud, la jurisprudencia rabínica y otras materias; y también en los Estados Unidos a partir de 1879.

La carencia de una autoridad religiosa única que pueda determinar quiénes son ministros de culto judíos se da también en cada uno de los países hispanoamericanos. Es cierto que en la Argentina funciona desde 1962 el prestigioso Seminario Rabínico Latinoamericano, que forma candidatos al rabinato para todos los países y comunidades de habla hispana⁸³. Pero no puede afirmarse en forma terminante que sea la única institución que otorga tal titulación. El tema fue discutido incluso judicialmente, llegando a afirmar la Corte Suprema argentina que

“aun cuando por hipótesis el prestigio de un rabino pudiese variar de acuerdo con el seminario en el cual hubiese obtenido su título, queda claro [...] que en nuestro país la aludida condición no es reconocida de manera absoluta por ninguna entidad en razón de la inexistencia de un plan de estudios común o de una academia central otorgante de títulos oficiales”⁸⁴.

Tradicionalmente el rabinato estaba reservado a los varones. Pero el judaísmo se ha desarrollado en varias corrientes, y simplícidamente puede distinguirse entre ortodoxos, conservadores y reformistas. Las dos últimas corrientes confieren la ordenación rabínica (*semijá*) también a mujeres. Como el Seminario Rabínico Latinoamericano adscribe a la línea conservadora, hay un buen número de “rabinas” de habla hispana (que no son reconocidas como tales por las comunidades ortodoxas). Lejos de imponer el celibato, el judaísmo espera que el rabino se case y forme su propia familia.

Además de los rabinos, hay en el judaísmo otros auxiliares de culto, con funciones específicas. Así por ejemplo, los *mohel*, que practican la circuncisión ritual, o los *hassán* o cantores litúrgicos. Aunque nada

⁸² SCHWARZFUCHS, Simon, “La formazione dei rabbini dopo la Rivoluzione francese”, DAIMON 3/2003, p.144.

⁸³ <http://www.seminariorabinico.org/>

⁸⁴ CS, “Horowitz, Israel c. Cuperstein, Peisah” (H.26.XXXV), 06/03/2001, (voto del Dr. Vázquez, coincidente con el voto mayoritario que remite al dictamen del Procurador General), FALLOS 324-144.

impide que el propio rabino pueda cumplir con estas funciones auxiliares en la medida de su conocimiento y condiciones personales.

3.5 Islam

El concepto de ministro de culto en el Islam es problemático, porque en esta religión una noción fundamental es la igualdad de todos los hombres ante Dios, con quien pueden y deben relacionarse en forma directa y sin intermediarios. Se trata de una organización no jerárquica, a diferencia de las iglesias cristianas⁸⁵. Para decirlo gráficamente, es una religión “sin un Papa y sin un clero”⁸⁶, que carece de algún procedimiento de “ordenación” de ministros religiosos.

Hay que considerar además que “el Islam” contiene en su interior una variedad de escuelas y corrientes religiosas, muchas veces en conflicto incluso violento entre sí, que es precisamente consecuencia de esa ausencia de una autoridad única.

Quien cumple el rol de ministro de culto en el Islam, y a quien le resulta aplicable en principio ese concepto, es el *imán* o *imam*. Literalmente, “imam” significa líder, “el que está en pie”, y es la persona que guía la oración; pero su figura no surge del Corán mismo.

“En el ordenamiento islámico, el *imam* forma parte del grupo de los *ulama*, los expertos en las ciencias religiosas, entre los que también están el *qadi* (que cumple funciones de juez y notario), el *muftí* (experto en emitir parecer jurídicos) y otras figuras de distinta importancia. El *imam* es la persona que dirige el culto público, realizando los gestos rituales que repiten los otros fieles alineados a sus espaldas; además de dirigir la oración tiene la función de predicar y, en general, educar a los fieles en el conocimiento del islam; también puede ser llamado para realizar los ritos y recitar las oraciones en ocasión de nacimientos, defunciones y matrimonios. Donde existe una mezquita, normalmente hay un *imam*, nombrado para realizar regularmente sus

⁸⁵ Cfr. GARCÍA PARDO, David, “Ministros de culto musulmanes”, en “Los musulmanes en España”, MOTILLA, Agustín (ed.), Madrid, Trotta, 2004, p.65.

⁸⁶ La expresión es de FIORITA, Nicola, “L’Islam spiegato ai miei studenti”, Firenze University Press, 2010, p.18.

funciones. Las modalidades para su nombramiento varían según los lugares, y la elección del *imam* puede corresponder a las autoridades seculares o religiosas, a una persona o a una comunidad⁸⁷. De hecho (sobre todo en grupos musulmanes emigrados a Europa), el *imam* se ha convertido con frecuencia en el punto de referencia de toda la comunidad⁸⁸.

El imam debe ser varón, y ser versado en teología y derecho islámico. Obviamente, debe conocer el Corán y hablar y leer árabe; por lo que normalmente en América Latina quienes ejercen esa función son enviados desde países árabes que sostienen económica y religiosamente a las mezquitas y comunidades de la emigración.

Otras figuras importantes en el Islam, a las que cabe asignar la calidad de ministros de culto, son el "mufti" y el "qadi". Son quienes cumplen el rol judicial o de solución de los conflictos aplicando la sharia o ley islámica⁸⁹.

Teóricamente, la máxima autoridad religiosa en el Islam es el Califa, sucesor del Profeta. El califato ha tenido diversas configuraciones históricas⁹⁰, y no existe hoy un califa reconocido por el conjunto de los musulmanes.

⁸⁷ "Las mezquitas designan generalmente un imam oficial. [...] En las mezquitas congregacionales u otras mantenidas por el califa, sus gobernadores, o en tiempos modernos, el Gobierno, el imam es nombrado por ellos. En las mezquitas privadas mantenidas por individuos o comunidades locales, el imam es elegido por el vecindario. Una vez elegido no puede ser removido excepto mediante un proceso" (MADELUNG, Wilfred, "Imamate", en Mircea Éliade (ed), "The Encyclopedia of Religion 7", New York, Macmillan, 1987, pp.118-119, cit. por FERRARI, Silvio, "El Espíritu...", p.264, nota 86).

⁸⁸ FERRARI, Silvio, "El espíritu de los derechos religiosos", Herder, Barcelona, 2004, p. 263-265. En España, el Real Decreto 176 del 10 de febrero de 2006, que reglamenta el acuerdo del estado español con la Comisión Islámica de España, define a los "*dirigentes religiosos islámicos e imames*", a "*las personas que, con carácter estable, se dediquen a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica*" (la norma está vinculada a su inclusión en el régimen de la seguridad social, y por lo tanto excluye a quienes realicen esas tareas a título gratuito, lo que sin embargo y a los demás efectos no debería privarlos de la condición de ministros de culto).

⁸⁹ Cfr. MESSICK, Brinkley, "The Judge and the Mufti", en PETERS, Rudolph and BEARMAN, Peri (editors), "The Ashgate Research Companion to Islamic Law", Ashgate, Surrey, 2014, p72.

⁹⁰ Cfr. ALUFFI BECK-PRECOZ, Roberta, "Il diritto islamico", en FERRARI, Silvio (a cura di), "Introduzione al diritto comparato delle religioni", Il Mulino, Bologna, 2008, p.203.

En los países occidentales donde hay comunidades islámicas, se ha tendido a equiparar al imam, a los sacerdotes o pastores⁹¹, sobre todo en donde los matrimonios religiosos tienen efectos civiles (siendo ellos quienes los presiden), en orden a la seguridad social, etcétera. El problema, sin embargo, es cuál es la autoridad interna de la comunidad religiosa que puede decidir quién tiene la calidad de imam⁹².

El Islam no sólo carece de una autoridad central, sino que además se divide en ramas o escuelas fuertemente enfrentadas entre sí. Algunas de ellas, sí han desarrollado algo similar a un "clero" o ministerio de culto profesional. En el chiísmo, el sufismo y otras escuelas islámicas, sí hay personas que cumplen funciones en cierta forma "clericales": guardianes de la tradición y de la ley islámica y dedicados a su enseñanza y divulgación.

"En la fracción chiíta del Islam, "Mullah" es el título dado al sucesor del Profeta que debe ser un descendiente de Alí y de Fátima (hija de Mahoma), y es igualmente el intérprete inspirado e infalible del Corán. El "mullah" es el enseñante autorizado, el responsable religioso de una ciudad o de un barrio. Los más venerables de los mullahs reciben el título de "Ayatollah" (que significa "signo de Alá", "palabras de Alá"). A los ayatollahs les es dado el derecho de interpretar la "sharia" y de promulgar las reglas religiosas. A veces, en nombre del Corán y de la tradición, ellos son llevados a intervenir en la vida económica, social y política"⁹³.

3.6 Otras confesiones religiosas

3.6.1 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones)

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos miembros son conocidos como "mormones", es una de las que

⁹¹ Así por ejemplo en España, el Acuerdo con la Comunidad Islámica les dispensa un trato semejante a los ministros de culto de otras confesiones, pero habla de "imanes" directamente, omitiendo darles aquella calificación (cfr. GARCÍA PARDO, op cit., p.66).

⁹² Respecto de esa situación en Francia, ver BASDEVANT-GAUDEMET, Brigitte, "Lo statuto giuridico dell'Islam in Francia", QDPE 1996/1, p.89.

⁹³ MOLLA, Claude, "L'Islam, c'est quoi?", Labor et Fides, Genève, 1989, p.41.

experimenta mayor crecimiento en América Latina. En ella hay diversos grados en el ministerio⁹⁴.

La autoridad máxima de la iglesia es el Profeta, elegido de por vida, que es el apóstol de mayor antigüedad. Junto a él, dos Consejeros forman la “primera presidencia” de la Iglesia.

Ellos son asistidos por otros doce Apóstoles, el “quórum de los Doce” (por lo tanto, los apóstoles son quince en total). Todos ellos son varones, y pueden casarse y tener su familia. Los apóstoles integran el grupo en forma vitalicia. El Quórum de los Doce Apóstoles se convierte en el grupo presidente de la Iglesia cuando se da el caso de que muere el profeta, y sigue siéndolo hasta que se escoge y ordena a un nuevo presidente de la Iglesia.

En un nivel siguiente se encuentran “los Setenta”, distribuidos en distintos lugares del mundo, con responsabilidades en la tarea misionera de la iglesia. Los Setenta, los Doce y la Primera Presidencia, conforman las “autoridades generales” de la iglesia.

Según la creencia de los mormones, el sacerdocio establecido por Jesucristo se extinguió con los doce apóstoles elegidos por Jesús. En 1830, José Smith, fundador de la iglesia y su primer Profeta, recibió y ejecutó el mandato de restaurar el sacerdocio.

La iglesia tiene un clero no profesional, “laico”, formado por individuos que son ordenados para ministrar a los miembros de la Iglesia pero para quienes el cargo en la Iglesia no representa una profesión ni es algo permanente, sino temporario. Los integrantes del clero no profesional se escogen de entre la gente y tienen profesiones de jornada completa que no se relacionan con sus responsabilidades religiosas.

El sacerdocio tiene dos divisiones⁹⁵. El sacerdocio menor es llamado el Sacerdocio Aarónico. Este sacerdocio incluye la autoridad para predicar el Evangelio de arrepentimiento y para bautizar. El sacerdocio mayor es llamado el Sacerdocio de Melquisedec. Posee la autoridad para presidir en la Iglesia y para llevar a cabo todas las ordenanzas, incluso la de conferir el don del Espíritu Santo.

Quienes reciben el Sacerdocio Aarónico son llamados obispos, presbíteros, maestros o diáconos. Un joven digno puede ser ordenado

⁹⁴ Sobre la iglesia, su historia, organización y doctrina, INTROVIGNE, Massimo, "I Mormoni", Interlogos, Vicenza, 1993.

⁹⁵ Ver <https://www.lds.org/manual/duties-and-blessings-of-the-priesthood-basic-manual-for-priesthood-holders-part-a?lang=spa> (accedido 16 de enero de 2017).

presbítero cuando cumple 16 o más años de edad. También se ordenan presbíteros a los varones adultos recién bautizados poco tiempo después de su bautismo. Algunas de las responsabilidades de un presbítero son administrar o bendecir la Santa Cena y predicar el Evangelio a los miembros. También el diaconado es un oficio del Sacerdocio Aarónico. Un joven usualmente es ordenado diácono cuando cumple 12 o más años de edad. Algunas de las responsabilidades del diácono son el repartir la Santa Cena y recolectar las ofrendas de ayuno de los miembros. Por lo general, se ordena al oficio de maestro a un joven digno cuando tiene 14 años. Entre las responsabilidades del maestro están preparar la Santa Cena y enseñar las verdades del Evangelio basándose en las Escrituras.

Los oficios o grados del Sacerdocio de Melquisedec son élder, setenta, sumo sacerdote, patriarca y apóstol.

Élder es un oficio del Sacerdocio de Melquisedec, pero también se usa como título para los misioneros varones o para las autoridades generales de la Iglesia. Los élderes tienen la autoridad de otorgar el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y de dar bendiciones del sacerdocio.

Un sumo sacerdote tiene el derecho de oficiar en la Iglesia. Son ordenados sumos sacerdotes los presidentes de estaca, presidentes de misión, miembros del sumo consejo, obispos y sus consejeros y otros líderes de la Iglesia. Doce sumos sacerdotes integran un consejo bajo la dirección de una presidencia de estaca; enseñan, capacitan y supervisan al personal de estaca y supervisan los programas de la estaca. El sumo consejo también se reúne en comité como consejo disciplinario para tratar los casos graves de transgresión personal.

Patriarca es una persona ordenada para dar bendiciones patriarcales especiales a los miembros de la Iglesia.

Todos los miembros varones de la Iglesia que están preparados reciben el sacerdocio a fin de ayudar a dirigir la Iglesia. Un hombre que posea el sacerdocio puede servir a los demás guiando congregaciones, efectuando “ordenanzas” (equivalente de los sacramentos), o bendiciendo a los enfermos.

Las mujeres no pueden ser ordenadas al sacerdocio, aunque pueden cumplir algunos servicios dentro de la iglesia, e incluso actuar como misioneras.

Los miembros de la Iglesia se organizan en congregaciones locales llamadas barrios o ramas. Dichas congregaciones se organizan de modo geográfico, y los miembros asisten a un barrio o a una rama que les quede cerca de casa. El líder de una congregación es el obispo o el presidente de rama. Es un oficio temporal, aunque su duración no está preestablecida, y no remunerado. El obispo, posee el sacerdocio aarónico, y el sacerdocio de Melquisedec en el grado de sumo sacerdote. Es asistido por dos consejeros, que normalmente también poseen el sumo sacerdocio. Es nombrado por el Quórum de los Doce, a propuesta de la presidencia de estaca (sección local de la iglesia, formada por cinco a diez congregaciones con un presidente de estaca).

La iglesia llama Seminario, a un programa de formación religiosa semanal para los miembros de la Iglesia en edad de asistir a la secundaria. Los seminaristas, por lo tanto, no son quienes se preparan para el ejercicio exclusivo del ministerio de culto, sino todos los jóvenes en edad de formación.

Resulta valioso, como antecedente, el acuerdo (“intesa”) firmado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con la República Italiana, el 4 de abril de 2007, que entre sus detalladas e interesantes normas incluye (artículo 3) un detalle de quienes son, “a todos los efectos”, ministros de culto. En la enumeración se indica:

*“a) los Presidentes de estaca y los Presidentes de distrito, los cuales son responsables de las congregaciones existentes en el interior de las subdivisiones geográficas denominadas estaca y distrito
b) los Obispos y los Presidentes de rama, los cuales son responsables de congregaciones individuales de menores dimensiones; c) los Presidentes del templo, los cuales son responsables de la actividad y de las ceremonias religiosas que se desarrollan en el templo; d) los Presidentes de misión, los cuales son responsables del trabajo desarrollado por los misioneros en Italia”⁹⁶.*

⁹⁶ La misma norma establece: “Estas personas son nominadas por la autoridad de la Iglesia jerárquicamente competente y desarrollan su propio servicio a título gratuito y sin recibir ninguna compensación. A los ministros de culto se les asegura el libre ejercicio del ministerio, así como el libre desarrollo de la actividad de la que se trata en el art.21 y la libre difusión del mensaje de la Iglesia a los fines de evangelización, sin límites territoriales. A los ministros de culto les es reconocido el derecho de mantener el secreto de oficio sobre cuanto conozcan por razón de su propio ministerio. A los fines de la aplicación del presente artículo y de los artículos 7, 8, 9 y 13 y atendiendo a la existencia de una pluralidad de ministerios, la Iglesia emite certificación apropiada de la calificación de ministro de culto”.

3.6.2 Iglesia adventista

La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, en el seno del movimiento evangélico pero con perfiles propios, y una vocación fuertemente proselitista. Reconoce como libro sagrado a la Biblia, y entre sus doctrinas centrales se encuentra la obligación de descanso sabático. Tiene una organización mundial jerárquica (desde las iglesias locales hasta la Asociación Generales, que reúnen a las Uniones de iglesias de cada país) con elección democrática de sus autoridades en los distintos niveles.

El ministerio religioso está a cargo de pastores, ancianos y diáconos; aunque no hay una distinción esencial entre “clérigos” y “laicos”, ya que todos están igualmente llamados a la predicación⁹⁷. Es una diversidad de funciones, pero no de *status*.

En las iglesias locales el oficio más importante es el de “anciano”, que puede ser único o formar parte de un grupo. Les corresponde presidir el culto, ejercer la predicación y la enseñanza. Los diáconos, se ocupan de las funciones administrativas y de asistencia de la iglesia. Son elegidos por el comité de la iglesia, y pueden ser voluntarios.

La iglesia tiene también “operarios” que ejercen un ministerio de tiempo completo, con funciones pastorales o administrativas en las distintas instituciones de la iglesia (sanitarias, educativas, de ayuda humanitaria, etc.). Los “misioneros” son quienes se ocupan de estas últimas tareas, incluso la enseñanza en todos los niveles y la administración de los bienes. Las funciones más específicas de ministros de culto, son cumplidas por los “pastores”, que no son sacerdotes, sino guías de la comunidad, predicadores, administradores de los ritos del bautismo y la santa cena. Los pastores son exclusivamente varones, a quienes se aconseja contraer matrimonio.

Los pastores no son elegidos por la iglesia a la que sirven, sino nominados por la autoridad de la iglesia, que los acredita como tales mediante el otorgamiento de una licencia ministerial, luego de un período de formación teológica, y otro de entrenamiento o práctica bajo la dirección de un pastor experto. Luego de algún tiempo de servicio a una comunidad (cuatro o cinco años), y de un examen realizado por el comité ejecutivo de la iglesia y por

⁹⁷ Para este apartado, ver RIMOLDI, Tiziano, “I ministri di culto nella Chiesa avventista e nella Chiesa valdese”, DAIMON 3/2003, p.171 y ss.

una comisión examinadora de pastores, ocurre la ceremonia de ordenación⁹⁸, mediante la imposición de manos. Esa ordenación es reconocida por todas las comunidades adventistas y expresa una llamada a servir a la iglesia universal. Pero la iglesia puede retirar la licencia y la credencial ministerial en caso de apostasía o graves faltas morales.

Los pastores pueden tener también asistentes pastorales o lectores bíblicos, que cumplen tareas ministeriales en el interior de la iglesia.

3.6.3 Testigos de Jehová

La Asociación de los Testigos de Jehová es también una iglesia originada en los Estados Unidos en el siglo XIX, de raíz cristiana. En la Argentina y en muchos países de América Latina es la confesión religiosa que individualmente reúne más cantidad de miembros luego de la Iglesia Católica, aunque es superada en número por el conjunto de las iglesias evangélicas. Por la peculiaridad de algunas de sus creencias –tales como su objeción a las transfusiones de sangre- y su posición de firme rechazo de muchas instituciones estatales, ha sido objeto de persecuciones y sus miembros han protagonizado sonados casos judiciales, lo que refuerza el interés en ella.

La Asociación está organizada en congregaciones o iglesias locales, que se reúnen en las capillas o "salones del Reino". Las congregaciones son atendidas por "siervos ministeriales" (diáconos), que son varones de más de 20 años de edad, y por "ancianos" (pastores) que se ocupan de transmitir las enseñanzas emanadas del Cuerpo Gobernante (radicado en Estados Unidos y formado por siete miembros) y de administrar la justicia interna y las normas disciplinarias de la iglesia.

Los ancianos o pastores ejercen su función en forma honorífica, sin recibir remuneración. Los testigos de Jehová rechazan en forma tajante la existencia de alguna clase o categoría clerical⁹⁹, niegan "que los líderes religiosos deban ostentar títulos que los engrandezcan" y consideran que todos los miembros bautizados son "ministros ordenados".

Por encima de los ancianos, se ubican los "siervos de circuito" que tienen a su cargo un grupo de iglesias o congregaciones locales a las

⁹⁸ El rito correspondiente y los pasos previos están especificados en el "Seventh-Day Adventist Minister's Manual".

⁹⁹ <https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/preguntas-frecuentes/ministros-no-cobran/> (accedido 16/01/17).

que visitan periódicamente, y supervisan los envíos de dinero de cada congregación a la Watch Tower, sede central de la iglesia.

Cada país está constituido como sucursal de la Watch Tower, a cargo de un comité nombrado por el cuerpo gobernante de los Estados Unidos, al que reporta.

3.6.4 Ciencia Cristiana

La "Iglesia de Cristo, Científico", o Ciencia Cristiana, es una peculiar comunidad religiosa, originada en los Estados Unidos y fundada por Mary Baker Eddy. Cuenta con varias congregaciones en la Argentina.

Se caracteriza por no tener en principio ministros de culto, probablemente porque no administra sacramentos (ni siquiera el bautismo) y sus actos de culto consisten en reuniones de estudio y oración¹⁰⁰.

Su metafísica está especialmente orientada a la sanación o curación por medio de la oración y la fe. Por ello existen personas dedicadas a la curación por medio de la fe, llamados "practitioners". Pero no son en sentido estricto ministros de culto, sino practicantes de la fe con una dedicación especial a esa actividad, reconocidos como tales por la iglesia luego de una especial dedicación al estudio. Ellos no sólo actúan en relación a los fieles, sino brindando también un servicio al exterior de la comunidad.

3.6.5 Budismo

El budismo ha sido comparado con un árbol, con raíces en la India, y ramas diversas surgidas de su trasplante a otros contextos culturales, donde sufrió "injertos" de las religiones o tradiciones propias de esos sitios, como China (confucianismo), Japón (shintoísmo), o el sudeste asiático¹⁰¹.

La comunidad originaria de los seguidores de Buda, estaba formada por personas que podríamos denominar "consagradas" y que llevaban una vida austera y mendicante¹⁰², una especie de monjes.

El budismo primitivo se expandió ampliamente, en primer lugar por el continente asiático, y más adelante, por el resto del mundo. En

¹⁰⁰ Cfr. DERICQUEBOURG, Régis, "La Christian Science", Elledici, Torino, 1999.

¹⁰¹ GIRA, Dennis, "Le Buddha et la naissance du Bouddhisme", en VV.AA., "Encyclopédie des religions", BAYard Editions, Paris, 1997, t.I, p.963.

¹⁰² GIRA, Dennis, op.cit. en nota anterior, p.979.

América Latina en general y en la Argentina en particular su presencia (fuera de algún individuo aislado) se registra recién entrado el siglo XX; y se trata en todos los casos de comunidades pequeñas.

En Asia, desde los primeros siglos de su existencia el budismo dio origen a monjes (personas dedicadas al estudio y la enseñanza del budismo), algunos mendicantes y que vivían en soledad, y otros agrupados en monasterios o lugares de vida en común¹⁰³. La asamblea de los monjes se denomina Sangha. También en los primeros tiempos eran habituales las monjas y los monasterios que las agrupaban, que luego desaparecieron en muchos lugares, pero reaparecieron en otros en tiempos recientes¹⁰⁴.

Las formas de organización de las diversas escuelas budistas varían bastante de una a otra y según los diferentes países donde el budismo ha arraigado¹⁰⁵. Algunas tienen una organización centralizada con una autoridad única, y un cuerpo clerical definido, formado por monjes que reciben una formación específica y tienen una dedicación exclusiva a la animación de la vida religiosa de la comunidad¹⁰⁶. A estos ministros de culto claramente identificables como tales se los suele llamar, precisamente, monjes. Pero a diferencia de lo que ocurre con el monacato cristiano, estos monjes no necesariamente hacen vida en común, ni están tampoco necesariamente obligados al celibato, sino que a veces pueden formar su propia familia (así ocurre en escuelas del budismo japonés o tibetano). En algunas escuelas budistas el monacato está reservado a los varones, mientras que en otras existen también monjas.

En muchos otros casos, los grupos budistas se forman en torno a un líder carismático, o maestro, que ha adquirido su formación como tal de otro maestro y es quien a su vez forma y elige a su sucesor. Este maestro o

¹⁰³ Cfr. DONIGER, Wendy (editor), "ENCYCLOPEDIA OF WORLD RELIGIONS", Merrian Webster, Springfield, 1999 (voz "Buddhism", p.148)

¹⁰⁴ SCHOPEN, Gregory, "On the legal and economic activities of Buddhist Nuns", en REDWOOD FRENCH, Rebeca and NATHAM, Mark, "Buddhism and Law", Cambridge University Press, New York, 2014, p.91.

¹⁰⁵ Ver distintos ejemplos en REDWOOD FRENCH, Rebeca and NATHAM, Mark, "Buddhism and Law", Cambridge University Press, New York, 2014.

¹⁰⁶ Es por ejemplo el caso del budismo japonés Nichiren (una de las escuelas budistas japonesas, que de todos modos reconoce algunos desprendimientos), y de la institución denominada "Nichiren Shoshu". Tiene un Supremo Prelado que reside en Japón (en Fujinomiya, sede del Templo principal y lugar además de formación de los monjes).

guía espiritual puede recibir diversos nombres o denominaciones, y cumple la función de lo que aquí consideramos ministro de culto¹⁰⁷.

El budismo no siempre se presenta a sí mismo como una religión en el sentido occidental. Muchos grupos o instituciones budistas se presentan como centros filosóficos, o de reflexión, que admiten la simultánea pertenencia de sus miembros a otras confesiones religiosas (pluripertenencia).

3.6.6 Hinduismo

El nombre "hinduismo" es la denominación occidental dada al conjunto de creencias y prácticas religiosas del subcontinente indio, de origen remoto en el tiempo¹⁰⁸. Dentro de ese universo hay muy distintas escuelas, creencias y prácticas, que carecen de autoridades centrales o unificadoras. En realidad es de la esencia del hinduismo que cada hindú esté legitimado para vivir su relación con la divinidad y el "dharma"¹⁰⁹ a su modo. Los principales textos sagrados de la religión están contenidos en los Vedas, elaborados aproximadamente a partir del siglo XIII antes de Cristo. Dentro del hinduismo hay una cantidad de escuelas y prácticas diversas.

El hinduismo se estructura mediante el antiquísimo sistema de castas, donde la casta superior es la de los brahmanes, la casta sacerdotal. La vida de los brahmanes tiene cuatro etapas: la de formación (brahmacarya), la de vida familiar (garhasthya), la de vida eremítica de distanciamiento gradual del mundo (vanaprasthya), y la completa separación del mundo (samnyasa).

La introducción del hinduismo en Occidente es reciente, y en América Latina y en la Argentina en particular hay sólo un pequeño número de practicantes. Muchas prácticas asociadas a esta religión, particularmente el yoga, no tienen en Occidente una connotación esencialmente religiosa y son

¹⁰⁷ LONG, Gianni, "Il buddhismo in Italia: note introduttive", DAIMON, 1/2001, P.228.

¹⁰⁸ Cfr.DONIGER, Wendy (editor), "ENCYCLOPEDIA OF WORLD RELIGIONS", Merrian Webster, Springfield, 1999 (voz "Hinduism", p.433 y ss.)

¹⁰⁹ "El término "dharma" tiene una notable amplitud semántica y puede ser traducido, según el contexto, como "religión", "derecho", "justicia", "prerrogativa"... Puede ser traducido como "derecho" si no nos limitamos a su restringida definición moderna como conjunto de leyes civiles y penales, sino que lo consideramos incluyendo todas las reglas de comportamiento, comprendido el comportamiento moral y religioso, que una comunidad reconoce como vinculante para sus miembros" (FRANCAVILLA, Domenico, "Il diritto indù", en FERRARI, Silvio (a cura di), "Introduzione al diritto comparato delle religioni", Il Mulino, Bologna, 2008, p.67).

realizadas por personas que mantienen su propia religión de origen, o bien ninguna.

Los pequeños grupos hinduistas en sentido estricto se reúnen en torno de algún maestro, denominado swami o gurú (o en sánscrito, genéricamente, ácárya, maestro o guía de la comunidad), que cumple el rol de ministro de culto y de autoridad inapelable del grupo al mismo tiempo.

Del hinduismo ha surgido un grupo religioso fundado en los Estados Unidos en 1966, los Hare Krishna, que han tenido momentos controversiales. sus devotos hacen, luego de un tiempo de noviciado, vida en común dedicada a la oración y la predicación, vistiendo llamativas ropas de estilo indio; pero entre ellos no todos son estrictamente ministros de culto, sino que tienen gurúes ("guru-ácárya") que ejercen roles directivos de la asociación¹¹⁰.

3.6.7 Religiones afroamericanas

Una de las particularidades de América Latina es la existencia de cultos religiosos sincréticos originados en la combinación de elementos de religiones africanas (llevadas al continente por los esclavos negros de ese origen durante la época colonial), con elementos del cristianismo. En el comienzo fue el modo que tuvieron los esclavos africanos de seguir practicando sus creencias, en general politeístas y animistas: identificar a sus deidades con figuras de santos católicos, o directamente de la Virgen María o de Jesucristo. De ese modo, bajo la apariencia de rendir culto a Cristo o a los santos, mantenían sus prácticas ancestrales.

Este fenómeno se dio en mayor medida, como es natural, donde hubo mayor concentración de esclavos. Concretamente, en el Brasil, y en el Caribe. Estas formas religiosas estuvieron prohibidas y fueron perseguidas durante la Colonia y en la primera época independiente, pero afloraron públicamente ya en el siglo XIX, para adquirir carta de ciudadanía plena en el siglo XX. Según los lugares adquiere diversas denominaciones, y también diversas formas dependiendo de la influencia de una u otra de las religiones africanas, lo que a su vez es función del lugar de origen mayoritario de los esclavos trasplantados a esa región.

En el Caribe se conoce a estas religiones sincréticas con el nombre genérico de "Santería", o "Vudú" (en Haití), aunque también hay otras

¹¹⁰ Cfr. FIZZOTTI, Eugenio y SQUARCINI, Federico, "Gli Hare Krishna", Elledici, Torino, 2000.

variantes que conservan más o menos puro el elemento africano, como el Palo Monte.

En el Brasil reciben el nombre genérico de "Macumba", también con diversas variantes, siendo las más importantes la Umbanda y la Kimbanda. La religión Umbanda, organizada recién a comienzos del siglo XX en Brasil, tiene la particularidad de añadir, a los elementos católicos y africanos, otros tomados de las religiones indígenas de Brasil, y del espiritismo de origen francés de Allan Kardec.

Se trata de religiones no organizadas jerárquicamente, que además tienen la característica de no ser exclusivistas: es frecuente que haya personas que las practican, y al mismo tiempo hayan sido bautizadas en la fe católica y practiquen también esta. Esa doble pertenencia es más difícil, si no imposible, cuando se trata de cristianos evangélicos.

Por su proximidad geográfica, son las religiones de origen brasileño las que se han afincado en mayor medida en la Argentina. Su auge se dio en la década de 1980, entre la población de estratos bajos o medios bajos. El culto más difundido es el umbanda, que se ha convertido en la denominación genérica de estas formas religiosas aunque también hay practicantes de algunas otras corrientes.

Más allá de haber formado federaciones que los agrupan, cada grupo tiene existencia y vida independiente.

Los ministros de culto, que son a la vez autoridad dentro de cada grupo, se denominan "pai de santo" o "mae de santo" (según se trate de varones o de mujeres). A algunos se les reconoce una mayor jerarquía por su antigüedad o predicamento, y se los denomina "babalorixá". La formación se da dentro del propio grupo, mediante un sistema de discipulado más o menos reglado por el que el aspirante va superando etapas hasta convertirse en pai o mae.

3.6.8 Religiones de pueblos originarios

El tratamiento jurídico de la cuestión de la religión de los pueblos aborígenes u originarios americanos es un tema arduo que no ha sido aún abordado con la necesaria profundidad en la Argentina y, en general, en América Latina.

Es claro que los pueblos americanos tenían, antes de la conquista hispano-portuguesa, sus propias religiones. Durante los tres siglos de

dominación española, ellas fueron sofocadas y ocultadas, sin desaparecer¹¹¹. Pero la mayor parte de los pueblos originarios adoptaron el catolicismo, incorporando a sus prácticas ritos y tradiciones preexistentes, lo que dio origen a la riquísima religiosidad popular latinoamericana.

De ese modo, la práctica de las religiones prehispánicas en su forma pura quedó en buena medida extinta o reducida a poblaciones marginales y aisladas. Sin embargo, en las últimas décadas se registran intentos de revivir al menos algunas de esas formas religiosas, a caballo de una revalorización ideológica de la cultura originaria.

Lo cierto es que en la mayor parte de los casos, más que de religiones estructuradas y practicadas como tales, de lo que es posible hablar es de una "espiritualidad" o una "cosmovisión" propia de los pueblos originarios, que inspira y alimenta una forma de vida que ha merecido una creciente protección. Los textos constitucionales más recientes de algunos países latinoamericanos lo reflejan de ese modo, como es el caso de **Ecuador**¹¹² o de **Bolivia**¹¹³.

En el caso de la Argentina, la reforma constitucional de 1994 incorporó una cláusula (art.75 inciso 17) según la cual corresponde al Congreso,

"Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

¹¹¹ Sobre el proceso vivido a partir de la llegada del cristianismo, ver FAZIO, Mariano, *Evangelio y culturas en América Latina*, ed. Promesa, Buenos Aires, 2010.

¹¹² El art.57 de la Constitución de 2008 dice: "*Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. ... 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales;... con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados...*".

¹¹³ El art.4 de la Constitución de 2009, dice: "*El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones*". El art.21, alterando la formulación usual en los tratados internacionales, dice que "*Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: [...] 3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos*". El art.30.II reconoce a "*las naciones y los pueblos indígena originario campesinos*", el derecho "*su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión*", y a "*que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados*".

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".

Como puede advertirse, no se hace referencia en ella a la religión propia de las comunidades originarias. El énfasis está puesto en las formas de organización comunitaria, y en la posesión y propiedad comunitaria de la tierra. Ahora bien, el vínculo de las comunidades originarias con el territorio y con los recursos naturales que allí se encuentran, tiene características propias difíciles de encerrar en los marcos conceptuales occidentales, que incluyen una connotación de tipo religioso.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios pronunciamientos que han construido la única línea jurisprudencial más o menos desarrollada por ese tribunal referida al derecho a la libertad religiosa.

El núcleo de esa doctrina se ha expresado así:

"La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituida a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural [...]. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado

constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas"¹¹⁴.

El desarrollo jurídico reciente más relevante en relación a los pueblos indígenas americanos, es la aprobación en 2016 de la "Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas"¹¹⁵. En ella no aparece ninguna referencia a los ministros de culto indígenas, pero sí a la religión de esos pueblos. Entre sus derechos colectivos se enuncia el de "*profesar y practicar sus creencias espirituales*" (art.VI), y como parte del derecho a la identidad e integridad cultural se explicita (art. XIII.3) que

"Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación...".

El respeto de la cosmovisión indígena aparece en relación al derecho a la educación (art. XV), al derecho a que se respete la jurisdicción y sistemas jurídicos propios (art. XXII), al derecho a la tierra (art. XXV), el derecho al desarrollo (art. XXIX), y en general al goce de todos los derechos (art. XXXI).

La Declaración formula de modo original lo que en los instrumentos internacionales normalmente se presenta como derecho a la libertad de conciencia y religión, llamándolo "espiritualidad indígena" (art. XVI):

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y a realizarlas tanto en público como en privado, individual y colectivamente.

2. Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o imposiciones, o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten o limiten su derecho a ejercer libremente su espiritualidad y creencias indígenas.

¹¹⁴ Corte IDH, "Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay", sentencia del 17-6-2005, Serie C n° 125, párrs. 135 y 154, entre otros. Un antecedente con las mismas ideas subyacentes es el "Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Ecuador", sentencia del 31/8/2001.

¹¹⁵ Aprobada por la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos el 14 de junio de 2016, AG/RES.2088 (XLVI-O/16)

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos sagrados y a recuperar sus restos humanos.

No hay allí referencia a ministros de culto, pero es evidente que alguien debe ser el encargado de transmitir y enseñar las tradiciones, o de presidir o dirigir las ceremonias.

Por otra parte, es necesario notar que la organización social propia de las comunidades indígenas no conoce una distinción clara entre la esfera política y la esfera religiosa. Los jefes de las tribus ("caciques", "loncos" para el pueblo Mapuche, etcétera) cumplen también funciones ceremoniales que en algún momento podrían asimilarlos a ministros de culto. Según las comunidades, hay también personas encargadas específicamente de ritos y ceremonias, como las "machi" en el pueblo Mapuche.

Un ejemplo de lo dicho, en la Argentina, es lo que ha ocurrido en la provincia de **Misiones**, que reconoció formalmente al

"Consejo de Ancianos Arandú y Guías Espirituales como institución representativa de la cultura y religiosidad de la nación mbyá guaraní"¹¹⁶.

3.7 Conclusiones

La rápida mirada a las distintas formas de organización de las diversas confesiones religiosas, confirma la gran variedad no solamente de denominaciones, sino de conceptos acerca de lo que podemos denominar ministros de culto o ministros religiosos.

Esa diversidad guarda estrecha relación con las muy distintas formas de organización interna, y aún de autopercepción, que tienen las confesiones religiosas. No son iguales las exigencias y necesidades de una

¹¹⁶ Decreto 917/2003 (BO 28/7/2003). Esta norma fue dictada porque "la permanente degradación cultural que han sufrido muchos de sus actuales caciques, ha llevado a los ancianos arandú y guías espirituales de la mayoría de las comunidades reconocidas de la Nación Mbya Guaraní, a constituirse en Consejo en resguardo de la cultura Mbya". Es decir, los "ministros de culto" sustituyeron a los caciques.

pequeña comunidad, que las de una organización de dimensión mundial. Pero también es decisiva la diferencia que existe entre una teología basada en una revelación rígida y que demanda una interpretación unívoca (y por tanto, un cuerpo organizado y vertical de intérpretes), que una teología basada en la vinculación directa de cada individuo con la divinidad y que admite la libre interpretación de las verdades reveladas.

Ese vasto mosaico puede parecer desalentador a primera vista. ¿Cómo lograr un concepto de ministro de culto que funcione como “mínimo común denominador” de semejante diversidad?

Pero al mismo tiempo, demuestra la necesidad de que el Estado articule algún concepto que permita abarcar esas múltiples concreciones y ofrecer un marco jurídico adecuado, que permita el desenvolvimiento de las variadas expresiones religiosas, respetando la identidad propia de cada una.

En todo caso, parece evidente que no puede aplicarse a todas, sin más, lo que en algún momento pudo pensarse para una confesión religiosa en particular. Dicho en otros términos y en concreto: durante los tres siglos de dominación española en América Latina, se impuso un modelo de religión única y prohibición de todas las demás. En ese modelo, era sencillo prever el estatuto jurídico de los ministros de culto, porque ellos eran únicamente los de la religión exclusivamente permitida, y "oficial" (en concreto, la Iglesia Católica).

En los primeros tiempos de los dos siglos que llevamos de vida independiente los países latinoamericanos, ese modelo pudo mantenerse porque la uniformidad religiosa tardó en quebrarse (en algunos países más que en otros), y porque en todo caso las grietas iniciales apenas si dieron paso a otras confesiones cristianas a las que podía aplicarse sin demasiado esfuerzo (aunque inadecuadamente) el esquema anterior (mientras que las religiones indígenas y afroamericanas, existentes desde los siglos anteriores, permanecían socialmente invisibilizadas y por lo tanto eran ignoradas o despreciadas por el Derecho).

El siglo XX trajo consigo dos cambios relevantes, uno de hecho y otro de derecho, que exigen el esfuerzo de elaborar el concepto de “ministro de culto” (entre otras necesidades jurídicas). En cuanto a la situación de hecho, la diversidad religiosa creciente que ya no admite los moldes antiguos. Y en el orden estrictamente jurídico, la adopción del principio de libertad religiosa como eje ordenador de las relaciones de los estados con las confesiones religiosas, que lleva ya varias décadas de vigencia formal y material. Ambas

realidades son las que hacen indispensable la elaboración de nuevos marcos jurídicos que contengan aquella diversidad.

Capítulo 4. Derechos políticos de los ministros de culto

En este capítulo analizaremos la incidencia que la condición de ministro religioso puede tener en la titularidad o el ejercicio de derechos políticos. Veremos que, en general, en la Argentina no hay limitaciones en esta materia. Es que, como corolario del principio de no discriminación por razones religiosas, no se advierte por qué el ser ministro religioso podría significar o implicar algún menoscabo o restricción a los derechos políticos. A la inversa, tampoco esa condición debería implicar alguna posición diferencial o de privilegio en relación al resto de los ciudadanos.

Analizaremos sucesivamente varias cuestiones. En primer lugar las referidas a la ciudadanía misma, a saber: ¿la condición de ministro religioso implica alguna restricción, o alguna ventaja, para el acceso de la ciudadanía? Por el contrario, ¿la ciudadanía argentina es exigible para el ejercicio del ministerio de culto?

Consideraremos luego las restricciones que pueden existir, derivadas de la condición de ministro de culto, para el acceso a determinados cargos públicos, sean vistas ellas como incapacidades o como inhabilidades. Estas restricciones existen desde antiguo tanto en el orden nacional como en el provincial, y en el caso concreto de la Argentina, son reflejo de disposiciones propias del derecho canónico (de la Iglesia Católica), aunque cabrá preguntarse si guardan razonabilidad actual. Son también una constante en otros países latinoamericanos.

La cuestión anterior se vincula al derecho electoral pasivo, es decir, la capacidad para ser elegido (o a veces designado) para ocupar determinadas posiciones. Pero también debe considerarse el derecho electoral activo, esto es, la incidencia que la condición de ministro de culto pudiera tener en el ejercicio del sufragio.

Veremos también las restricciones que puedan existir para el ejercicio de magistraturas judiciales, o funciones de índole jurisdiccional, para los ministros de culto.

Por último, y aunque no se trate estrictamente de derechos políticos, consideraremos la cuestión particular de las restricciones para el ejercicio del notariado. Ubicamos aquí esta cuestión, porque si bien el notariado es una profesión liberal (y desde ese punto de vista, podríamos

considerar el tema en el marco de las restricciones a la capacidad civil que afectan a los ministros de culto), su ejercicio requiere de una investidura pública que convierte a los escribanos públicos, según una visión difundida, en “funcionarios públicos impropios”.

4.1 Ciudadanía

La legislación argentina no limita en modo alguno el ejercicio de la ciudadanía a los ministros religiosos: ni los ciudadanos nativos ven afectada su condición por el acceso al ministerio religioso, ni la condición de ministro religioso es impedimento alguno para alcanzar la ciudadanía argentina que, como se sabe, es concedida con gran generosidad, siguiendo la invitación del Preámbulo de la Constitución Nacional a *“todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”*.

La ley de ciudadanía¹¹⁷, una de las leyes vigentes más antiguas, no contiene ninguna previsión específica respecto de ministros de culto, fuera de la norma general según la cual la ciudadanía no puede ser negada a nadie por razones religiosas (art.11), reiterada por la reglamentación, según la cual

“No podrá negarse la ciudadanía argentina por motivos fundados en razones [...] religiosas...”¹¹⁸.

Inversamente, la ley tampoco impone ningún requisito de ciudadanía, genéricamente, para ser ministro religioso. Por lo tanto, en la Argentina pueden ser ministros de culto tanto nacionales como extranjeros, a diferencia de lo que ocurre o ha ocurrido en otros países, donde sólo se reconoce o reconocía como ministros religiosos a los nacionales o ciudadanos del propio estado¹¹⁹. Esto en la Argentina es consecuencia necesaria de las normas

¹¹⁷ Ley 346, t.o. ley 24.533 (BO14/9/95). Cabe acotar que en el régimen argentino no hay distinción entre “nacionalidad” y “ciudadanía”, de manera que la naturalización (adquisición de la nacionalidad argentina) implica la ciudadanía plena, y viceversa.

¹¹⁸ Art.3 del decreto 3213/84, reglamentario de la ley de Ciudadanía nº 346.

¹¹⁹ En México, bajo el imperio de la Constitución de 1917, se exigía: *“Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por nacimiento”* (art.130). El mismo artículo luego de la reforma de 1992 autoriza también el ejercicio ministerial a los extranjeros. A su vez, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que *“Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Igualmente podrán hacerlo los extranjeros siempre que*

constitucionales que garantizan iguales derechos civiles para nacionales y extranjeros (art.20 CN).

Como excepción, hay que notar que los arzobispos, obispos residenciales y coadjutores con derecho a sucesión de la Iglesia Católica sí deben ser ciudadanos argentinos, por exigirlo así el Acuerdo de 1966 entre la Argentina y la Santa Sede, en su artículo 3º¹²⁰. Es una norma relativamente frecuente en los concordatos y acuerdos firmados por la Santa Sede con los estados¹²¹. No es sencillo saber la razón de esta exigencia, pero podría acaso pensarse en el deseo del Estado de asegurar una cierta y mínima “fidelidad” de los obispos a la Nación, que en otro tiempo se expresaba mediante la exigencia de jurar acatamiento a la Constitución Nacional.

Curiosamente esa exigencia no había sido prevista respecto del Vicario Castrense en el acuerdo de 1957 sobre atención religiosa a las Fuerzas Armadas, lo que fue subsanado en 1992¹²²: ahora, en el caso del Obispado Castrense, no solamente su titular sino también el obispo auxiliar si existe, y aunque no sea coadjutor, deben ser ciudadanos argentinos. La ciudadanía que exige el Acuerdo puede ser nativa o por naturalización, como de hecho se demuestra por la existencia de numerosos obispos católicos nacidos en el extranjero, que ejercen su ministerio en la Argentina previa obtención de la ciudadanía.

Como contrapartida y en virtud del mismo Acuerdo de 1966 (en este caso, el artículo 5), el Gobierno Nacional se ha obligado a facilitar la obtención de la ciudadanía argentina a los sacerdotes seculares y a los religiosos extranjeros que sean llamados por los obispos (“el Episcopado”, dice el Acuerdo) a prestar servicios en el país.

comprueben su legal internación y permanencia en el país y que su calidad migratoria no les impida la realización de actividades de tipo religioso, en los términos de la Ley General de Población” (art.13).

¹²⁰ Al tiempo del Acuerdo regía el Código de Derecho Canónico de 1917, y los obispos o arzobispos coadjutores podían tener o no derecho a sucesión. Según el vigente Código de 1983, el obispo coadjutor -a diferencia del simple auxiliar- tiene siempre derecho a sucesión (c.403 § 3)

¹²¹ Así por ejemplo, Concordato con Letonia del 2000, art.5; Concordato con Lituania del 2000, art.6; Acuerdo con Brasil de 1989 sobre el Obispado Militar, art.III; Concordato con Colombia de 1973, art.XIV (sin modificación en este aspecto en el Concordato de 1992); Acuerdo con Haití de 1984, art.4; Concordato con Italia de 1984, art.3.3; etcétera.

¹²² Por notas reversales de fecha 21 de abril de 1992 se actualizó el Acuerdo de 1957, a tenor de la constitución apostólica *Spirituali Militum Curae* que había convertido los antiguos vicariatos castrenses en ordinariatos.

4.2 Restricciones al acceso a cargos públicos

En una sociedad democrática, la regla es que el acceso a los cargos públicos (incluyendo el derecho electoral pasivo, o derecho a ser elegido) no debe ser cercenado o restringido por razones religiosas.

Sin embargo, esto no es así en todas partes. Un ejemplo notable en la materia es el que proporciona México, aun después de la reforma constitucional y legal de 1992 que ha aliviado notablemente la situación de las iglesias y de los ministros de culto. Todavía hoy en ese país el artículo 130 de la Constitución, dice:

“los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”¹²³.

Esta norma es, a nuestro entender, claramente discriminatoria y obedece a la singular historia de desencuentros entre el Estado y la Iglesia Católica que caracterizó a **México**, más allá de la profunda religiosidad de su pueblo, y de que abarca también a ministros de culto no católicos, por el modo en que está redactada. Es una disposición actualmente muy cuestionada en ese país, y se espera una no muy lejana revisión de ella¹²⁴, o al menos su morigeración¹²⁵.

Como veremos más adelante, hay restricciones similares también en las constituciones de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Panamá, y Venezuela. Lo que indica prácticamente una constante en la región.

¹²³ A su turno, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992, establece los ministros de cualquier culto *“no podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuanto menos cinco años en el primero y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán seis meses”* (art.14).

¹²⁴ Cfr. MEDINA GONZÁLEZ, María Concepción, “Tendencias actuales del derecho religioso mexicano”, en MEDINA GONZÁLEZ, M.C. (coordinadora), “Una puerta abierta a la libertad religiosa”, México, SEGOB, 2007, P.47.

¹²⁵ CASTRO ESTRADA, Álvaro, “El marco jurídico mexicano en materia religiosa”, en MEDINA GONZÁLEZ, M.C. (coordinadora), “Una puerta abierta a la libertad religiosa”, México, SEGOB, 2007, p.224.

Las restricciones a los ministros de culto para integrar cuerpos legislativos, contrastan no solamente con lo que ocurre en culturas distantes de la nuestra (como ciertos regímenes islámicos, donde Irán es el caso paradigmático), sino también en países occidentales. En Inglaterra hay obispos anglicanos que por derecho propio integran la Cámara de los Lores (lo que sin embargo está prohibido a los obispos católicos).

¿Se justifica esta desconfianza del Derecho Público latinoamericano frente a la participación de ministros de culto en la política? A primera vista, parece una discriminación injusta. Claro que pueden ensayarse algunas explicaciones, que no alcanzan hoy día a ser justificaciones.

Una, que la restricción es la consecuencia de abusos ocurridos en el pasado, en tiempos de fuerte imbricación entre la Iglesia (Católica, en ese caso) y el Estado. Las prohibiciones tendrían el sentido de afirmar la laicidad del Estado como algo deseable.

En segundo lugar, en una sociedad que tiene una cultura política muchas veces básica y poco desarrollada, y al mismo tiempo un fuerte componente religioso, el poder de convicción y arrastre de los ministros de culto puede ser desproporcionado, propiciando así una no deseable expansión del poder eclesiástico en áreas propias del poder civil, o una indebida injerencia de dirigentes religiosos en cuestiones políticas estrictamente seculares. Hay que notar que hoy día esa idea valdría no tanto, o no sólo, respecto de los sacerdotes católicos, sino también respecto de otros ministros, en primer lugar pastores evangélicos. En varios países de la región (como Brasil, por ejemplo) se ha visto cómo un número significativo de pastores llegan al Congreso como diputados de diversos partidos, para luego conformar un “bloque evangélico” que trabaja coordinadamente y adquiere peso significativo. Tal mezcla de religión y política no parece feliz.

Finalmente, puede argumentarse que las normas estatales solamente reflejan lo que ya disponen los ordenamientos confesionales. Esto es cierto en relación a la Iglesia Católica, tal como se explica más adelante, y seguramente es el origen histórico de algunas de esas normas, pero no lo es tanto en relación a otros grupos religiosos.

Por lo demás, una cosa es que la norma religiosa interna desaconseje o prohíba a los ministros de culto asumir una acción política directa (y probablemente, admitiendo la dispensa de esa limitación en caso de necesidad) y otra que sea el Estado quien imponga la prohibición.

4.2.1 Prohibición a los eclesiásticos regulares de ser miembros del Congreso

En la Argentina, como vimos, en principio la condición de ministro de culto no importa restricción a la capacidad política.

Sin embargo, la reforma constitucional de 1994 dejó subsistente la prohibición para los “eclesiásticos regulares”, de ser miembros del Congreso (art.73)¹²⁶, restricción que existía ya en la Constitución de 1853 (art. 65). El artículo fue tomado textualmente, en su momento, del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (art.48)¹²⁷.

Cuando el asunto fue discutido en la Convención Constituyente de 1853, el convencional Zenteno (que era sacerdote) pidió explicaciones sobre el punto, y el miembro informante (Gorostiaga) “contestó que la razón para excluirlos eran las mismas palabras que había dicho el señor Zenteno en la discusión de otros artículos constitucionales sobre la inmunidad de los sacerdotes y las funciones de su ministerio”. El convencional Zapata fundó la exclusión en “la obediencia pasiva a sus Prelados” a la que estaban sometidos los religiosos; y Seguí lo hizo “en que no tienen intereses que representar, desde que han renunciado al mundo”. No hubo más argumentos, y el artículo “se votó y aprobó por afirmativa por mayoría”¹²⁸.

La incapacidad, como toda norma restrictiva de derechos, debe ser objeto de interpretación estricta. Por ello no cabe duda de

¹²⁶ “Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando”.

¹²⁷ ALBERDI, Juan Bautista, “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”.

¹²⁸ RAVIGNANI, Emilio, “Asambleas Constituyentes Argentinas”, Bs.As., Peuser, 1937, tº IV, p.527, sesión del 27 de abril de 1853. En la misma sesión se discutió y desechó una iniciativa para exigir que todos los empleados públicos debiesen profesar la religión católica. La propuesta había sido del convencional Leiva, quien dijo: “que si como se había confesado, los altos Poderes de la Confederación debían ser católicos para que no faltase la asistencia que debían a los Ministros del culto; con más razón debería exigirse esta calidad en los empleados subalternos para que con su influencia concurren a que las masas que gobiernan presten el respeto debido al sacerdocio, proporcionándole otros auxilios que si bien son menores deben tenerse como de grande importancia desde que facilitan al Ministerio del altar el desempeño de su misión santa” (op.cit., p.524), a lo que se respondió que el sostenimiento del culto (previsto en el art.2 de la Constitución) se cumplía con los presupuestos para el culto. Fracasada esa propuesta por catorce votos contra cinco, el convencional Zenteno propuso que al menos los senadores debiesen ser católicos, también sin éxito.

que no involucra a los clérigos que no son religiosos (sacerdotes seculares)¹²⁹. Pareciera que tampoco abarca a las religiosas mujeres, porque el término “eclesiásticos” no resulta apropiado para referirse a ellas (no hay “eclesiásticas”).

La denominación “eclesiástico regular” se opone a la de “eclesiástico secular”, es decir, el clérigo incardinado en una diócesis (o su equivalente), y no en un instituto de vida consagrada¹³⁰. Por lo tanto puede pensarse también que la inhabilidad no alcanza siquiera a los religiosos que no son clérigos.

Más allá del juicio que pueda hacerse acerca de la conveniencia de que haya frailes en el Congreso (en una tarea que en principio no les es propia, ni les es permitida por el Derecho Canónico, como veremos), la norma vigente parece injusta por discriminatoria. Por eso, y si bien fue sin duda pensada para los religiosos católicos, algunos autores postulan que para mitigar la discriminación es menester aplicarla también a “religiosos de otros cultos con similares votos de obediencia, a fin de no violentar la igualdad”¹³¹. Pero esa parece una mala solución, ya que se extiende una injusticia y una norma antifuncional, en lugar de limitarla a su mínima expresión. Parece más razonable predicar que la restricción no afecta a los pastores o ministros de otros credos, o a los monjes o religiosos no católicos si los hubiese, y considerar su derogación tan pronto sea posible para eliminar la odiosa discriminación que comporta en perjuicio de los religiosos católicos cara a cara con aquellos.

A pesar de no haber sido éste un tema habilitado para la reforma, en la Convención reformadora de la Constitución de 1994 se presentaron tres proyectos de suprimir la mención a los eclesiásticos regulares, curiosamente provenientes de los extremos del arco político¹³². Pero no fueron

¹²⁹ De acuerdo: GENTILE, Jorge H., “Derecho parlamentario argentino”, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, p.101.

¹³⁰ Como curiosidad, puede apuntarse que en el año 1936 un grupo de diputados socialistas presentó un proyecto de ley para modificar el artículo entonces vigente de la Constitución (65), para “excluir del Congreso Nacional también a los eclesiásticos irregulares, y no sólo a los regulares” (sic) (Presidencia de la Nación, “La Reforma de la Constitución Nacional”, Buenos Aires, 1950, t.I, p. 55).

¹³¹ GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina Comentada y concordada”, 3ª Edición, La Ley, Bs.As., 2005, p.648, con cita de MIDÓN, Mario, “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, Plus Ultra, Buenos Aires, 1997, p.423.

¹³² Proyectos de Zaffaroni y otros (Frente Grande, “Proyectos Ingresados”, p. 1526); Míguez Bonino y otros (Frente Grande, ídem p.905) y de Marcone y otros (Fuerza Republicana, íd. p.1547).

considerados por la Convención, y quedó la cláusula en pie. Hay que decir sin embargo que ello no obedeció a un designio expreso de los constituyentes, sino simplemente a cierta desprolijidad en la labor de la Convención y al agotamiento de sus plazos, que obligó a dejar pendientes diversas cuestiones, ésta entre ellas.

En contraste, cabe recordar que de todas las normas constitucionales atinentes a la relación Iglesia-Estado, esta había sido la única suprimida en la anterior y efímera reforma integral de la Constitución, en 1949, con fundamento en la destacada actuación política de algunos regulares a lo largo de la historia¹³³.

Esa misma cláusula prohibitiva veda indirectamente a los “eclesiásticos regulares” acceder a los cargos de presidente o vicepresidente (art.89), y juez de la Corte Suprema (art.111), porque para ellos se requieren las calidades exigidas para ser senador, y no ser eclesiástico regular es una exigencia (negativa) para ejercer ese cargo.

En cambio, como la Constitución nada dice, no hay impedimento para que los eclesiásticos integren la Convención Reformadora de la propia Constitución. De hecho, un “eclesiástico regular” integró la Convención de 1994¹³⁴.

¹³³ La reforma fue fundamentada por el convencional Eduardo José Navarro en la sesión del 11 de marzo de 1949, diciendo que “Sabido es que esta clase de sacerdotes [los regulares] está sometida a una rigurosa disciplina; sabido es que los sacerdotes que pertenecen a esta organización del clero están sometidos a una rigurosa reglamentación de cumplimiento estricto que ellos observan con preferencia a cualesquiera otras obligaciones. Viven una vida de encierro enclaustrada y casi puede decirse ajena al mundo exterior, dedicados pura y exclusivamente a sus funciones específicas. No obstante, cuando han salido de su encierro para actuar en la vida pública han logrado sobresalir y triunfar en el campo de sus acciones, con sus ciencias y sus virtudes. En este sentido, nuestro pasado histórico nos ofrece una nutrida lista de esta clase de clérigos, que contribuyeron, con su sacrificio y su patriotismo, a forjar la gesta de nuestra Independencia. Tales los nombres ilustres y venerables, para no citar otros, de fray Luis Beltrán, fray Justo Santa María de Oro, reverendo padre franciscano José Cayetano Rodríguez, fray Mamerto Esquiú, autor del conocido y célebre discurso sobre nuestra Constitución. Teniendo en cuenta tan hermosos antecedentes, nada más justiciero entonces que reconocerles el derecho a ser elegidos y ser miembros del Congreso” (Presidencia de la Nación, “La reforma...”, cit., t.II, p.536).

¹³⁴ Se trató el obispo Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, salesiano. En una situación similar, en la provincia de Misiones otro religioso, el Padre Obispo Joaquín Piña Batllellé s.j., fue elegido convencional constituyente provincial encabezando una lista electoral (e identificado en las boletas como “padre obispo”). Ver sobre el caso PANCALLO D'AGOSTINO, Martín, “P. Obispo Joaquín Piña Batllellé, SJ. Un líder social ejemplar y providencial”, EDCO 2016 (diario del 16/6/2016).

Los eclesiásticos regulares están también impedidos de integrar en representación de la Argentina el Parlamento del MERCOSUR¹³⁵. En efecto, la norma constitutiva de ese órgano internacional dice que

“los candidatos a Parlamentarios deberán cumplir con los requisitos exigibles para ser diputado nacional según el derecho del Estado Parte respectivo” y que “serán aplicables, asimismo, las demás incompatibilidades para ser legislador, establecidas en la legislación nacional del Estado Parte correspondiente” (art.11, inc.1 y 3).

Ahora bien: el reconocimiento en esa sede internacional, de la incompatibilidad o prohibición contenida en la Constitución Nacional de la Argentina para los religiosos, choca frontalmente con las normas sobre prohibición de discriminación por motivos religiosos vigentes en el orden internacional, y con la norma del propio Protocolo que establece entre los “principios” del Parlamento del MERCOSUR, *“el repudio de todas las formas de discriminación, especialmente las relativas a género, color, etnia, religión, nacionalidad, edad y condición socioeconómica”* (art.3 inc.5). Si se presentara el caso, sería interesante ver cómo se pueden armonizar la prohibición discriminatoria del derecho argentino, con tales normas.

El fundamento de la prohibición constitucional, como se dijo en 1853 y repite hasta hoy la doctrina, es la supuesta falta de independencia de los religiosos, sometidos al voto de obediencia a sus superiores. Sin embargo, es notorio que hoy día los legisladores laicos raramente obran según su propio criterio sino que se someten a férreas disciplinas de bloque, obedeciendo los mandatos de los partidos que los han llevado a las bancas¹³⁶. Es más rígida la obediencia partidaria, que la que afecta a los religiosos, que muchas veces actúan con notable independencia.

No se justifica a esta altura de los tiempos y desde el punto de vista del derecho estatal, la norma constitucional restrictiva de la capacidad política de los religiosos, aunque coincida con restricciones que el

¹³⁵ Creado por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR suscripto en Montevideo el 9 de diciembre de 2005, y aprobado por la República Argentina por ley 26.146, BO 23/10/2006.

¹³⁶ De acuerdo: BIDART CAMPOS, Germán, “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, Ediar, Buenos Aires, 1979, p.532.

propio derecho canónico impone (cánones 672 y 285 CIC, a los que referiremos más adelante)¹³⁷.

Es claro, por lo tanto, que en una próxima reforma constitucional este artículo debería desaparecer.

4.2.2. Prohibiciones en constituciones provinciales

La misma prohibición presente en la Constitución Nacional, se ha trasladado, y muchas veces amplificado, a varias constituciones provinciales (actualmente, siete). Y eso a pesar de que todas ellas proclaman la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y la prohibición de discriminaciones por razones religiosas.

Se trata, según parece, de una copia irreflexiva del arcaico modelo nacional, sin que seguramente en muchos casos los constituyentes provinciales se hayan detenido a pensar en el contenido y la razón de lo que estaban copiando. Es un vicio reiterado al legislar. Aunque hay que decir que en varias de las constituciones provinciales, la restricción fue suprimida en reformas recientes.

Entre las que aún la mantienen, está la del **Chaco**, donde los eclesiásticos regulares no pueden ser legisladores (art.99) ni ministros (art.144)¹³⁸. En **La Pampa** no pueden ser diputados (art.64), gobernador o vicegobernador (art.78) ni ministros (art.86). En **Mendoza** no pueden ser legisladores (art.65) ni ministros (art.132). En **Salta** no pueden ser diputados (art.97), senadores (art.102), ni ministros (art.148). En **San Luis** no pueden ser diputados (art.105 inc.1), ni senadores (art.110) ni ministros (art.160).

En **Río Negro** los eclesiásticos regulares no pueden ser legisladores (art.126 inc.1), y por consiguiente tampoco convencionales constituyentes (art.114), gobernador o vicegobernador (art.172 inc.2), ni miembros del Tribunal de Cuentas (art.162), Fiscal de Investigaciones Administrativas (art.165), Fiscal de Estado (art.192), ministros (art.184) o

¹³⁷ De acuerdo: GARDELLA, Lorenzo, en "Enciclopedia Jurídica Omeba", voz "religiosos", p.649. La prohibición es obsoleta, según GENTILE, Jorge, "Derecho parlamentario argentino", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, p.101.

¹³⁸ La prohibición de ser ministros ha sido reiterada en el art.24 de la ley de Ministerios 6075 (BO21/12/2007), que dice que rigen para los ministros, pero también para los Secretarios y Subsecretarios, "*iguales incompatibilidades, inhabilidades e inmunidades establecidas en los artículos 99, 100, 101 y 102 de la constitución provincial*", siendo que el art.99 dice: "*No podrán ser diputados los eclesiásticos regulares*".

miembros del Poder Judicial (art.198 inc.1), Procurador General (art.216) o miembros de los gobiernos municipales (art.234).

En **Tierra del Fuego** los eclesiásticos regulares directamente *“están inhabilitados para desempeñar cargos públicos electivos”*, genéricamente (art.204).

Un caso singular era el de **Santiago del Estero**, que hasta la reforma constitucional de 2005 prohibía ser diputados a *“los eclesiásticos regulares y seculares”* (art.118), quienes por distintas remisiones tampoco podían ocupar los cargos de Defensor del Pueblo (art.136), Gobernador o vicegobernador (art.147), ministros (art.152), concejales (art.206), intendentes (art.207) ni convencionales constituyentes (art.226). No se conoce fundamento alguno para esta incapacidad puesta para los eclesiásticos seculares, que contradecía el principio establecido en la misma constitución provincial (art.18) de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación por razones religiosas. Esas prohibiciones fueron suprimidas al reformarse la Carta provincial en 2005.

Las demás provincias, en cambio, no tienen restricciones constitucionales de este tipo, y aquellas que las tuvieron, las han suprimido¹³⁹.

4.2.3. Derecho canónico

Decimos que la prohibición estatal de acceso a cargos públicos para los religiosos o los sacerdotes católicos importa una violación a los derechos de la libertad religiosa, y por eso sostenemos la necesidad de suprimir en el futuro esas normas prohibitivas

Sin embargo, eso no implica ignorar lo que dice al respecto el derecho canónico.

En efecto, establece el canon 285 § 3: *“se prohíbe a los clérigos asumir oficios públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”*, entendiendo por tal tanto la legislativa como la ejecutiva y la judicial¹⁴⁰. El canon 672, hace aplicable esa misma norma a los religiosos, tanto varones como mujeres, y en el caso de los varones, sean o no sacerdotes.

¹³⁹ La constitución de Neuquén de 1957, por ejemplo, prohibía a los eclesiásticos regulares “ser electos para cargos representativos” (69) y especialmente ser legisladores (74 inciso d), y ministros (126); pero la prohibición ha desaparecido en la reforma de 2006.

¹⁴⁰ BUSSO, Ariel, “La fidelidad del apóstol”, Bs.As., Educa, 2004, t.II, p.187.

Las razones del legislador eclesiástico para imponer esta prohibición son varias. La actividad política es considerada propia de los laicos, y extraña al estado de vida y al estado clerical o religioso. El clérigo debe ejercer su ministerio para todos los fieles sin distinción. La forma normal de acceso a los cargos políticos, en las democracias modernas, es a través de partidos políticos, lo que necesariamente implica alinearse con una parte de la sociedad, y enfrentarse acaso duramente con otra, constituida también por fieles a quienes el clérigo debe por su propio oficio servir.

Así lo ha expresado Benedicto XVI hablando precisamente a y en América Latina:

“Este trabajo político no es competencia inmediata de la Iglesia. El respeto de una sana laicidad – incluso con la pluralidad de las posiciones políticas – es esencial en la tradición cristiana auténtica. Si la Iglesia comenzara a transformarse directamente en sujeto político, no haría más por los pobres y por la justicia, sino que haría menos, porque perdería su independencia y su autoridad moral, identificándose con una única vía política y con posiciones parciales opinables. La Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres, precisamente al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido. Sólo siendo independiente puede enseñar los grandes criterios y los valores inderogables, orientar las conciencias y ofrecer una opción de vida que va más allá del ámbito político. Formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, educar en las virtudes individuales y políticas, es la vocación fundamental de la Iglesia en este sector. Y los laicos católicos deben ser conscientes de su responsabilidad en la vida pública; deben estar presentes en la formación de los consensos necesarios y en la oposición contra las injusticias”¹⁴¹.

Ocurre sin embargo que una cosa es que el clérigo o el religioso se autolimite en la actividad política, o se vea limitado por la normativa eclesiástica (que en todo caso está sujeta a dispensa por parte de los superiores en caso de necesidad o conveniencia), y otra distinta es que esa actividad le sea prohibida externamente por la ley civil. Máxime cuando la limitación o prohibición está acotada a los religiosos o sacerdotes católicos y no afecta a los de otros credos, según se ha visto.

¹⁴¹ Discurso inaugural de la Vª Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Aparecida (Brasil), 13 de mayo de 2007.

Además, la prohibición canónica no es absoluta, ya que puede ser objeto de dispensa por la autoridad eclesiástica. En la Argentina hubo varios casos de sacerdotes seculares, y aún de obispos, que por razones diversas y en casos específicos han participado de la actividad política y han resultado electos en cargos legislativos o ejecutivos.

Un caso sonado en esta materia, en Hispanoamérica, es el del obispo católico Fernando Lugo Méndez, elegido presidente de la República del Paraguay en 2008, a pesar de que la Constitución del país inhabilita a los ministros de cualquier culto a ser Presidente o Vicepresidente de la República. Para aceptar la candidatura, el obispo Lugo presentó al Papa su “renuncia al ministerio eclesial”; pero esa renuncia no fue aceptada por el Pontífice. En cambio de eso, la Congregación para los Obispos (de la Santa Sede) le impuso al obispo la pena de “suspensión *a divinis*” según el canon 1333, prohibiéndole ejercer cualquier acto de potestad de orden y de gobierno y el ejercicio de las funciones episcopales, aclarando que con la sanción, el obispo “permanece en el estado clerical y continúa obligado a los deberes a él inherentes, aunque suspendido en el ejercicio del ministerio sagrado”¹⁴².

Una carta del Prefecto de la Congregación para los Obispos, de fecha 4 de enero de 2007, había negado al obispo Lugo su petición de encuadrarse en la excepción del canon 287 § 2, alegando que

“Paraguay es de hecho una nación libre y democrática y la Iglesia –cuyos derechos se respetan- está presente con un laicado comprometido, serio y motivado, capaz de asumir las propias responsabilidades”, por lo que “la candidatura política de un obispo sería motivo de confusión y de división entre los fieles, una ofensa al laicado y una clericalización de la misión específica de los laicos y de la misma vida política”.

La misma carta recordó que la “reducción jurídica al estado laical” es otorgada por el Papa a los presbíteros por motivos gravísimos (c.290), “pero nunca a los Obispos”, por lo que a ellos no se les permite la dimisión del estado clerical.

No obstante ello, el obispo Lugo fue admitido como candidato por las autoridades civiles, y elegido presidente del Paraguay. En consecuencia y antes de que asumiera efectivamente el cargo, la Santa Sede revisó el caso y tuvo en cuenta que la situación

¹⁴² Decreto del 20 de enero de 2007 de la Congregación para los Obispos.

“exige volver a considerar, por el bien del País y para que se distinga claramente y de modo definitivo entre el cargo de Presidente de la República y el ejercicio del ministerio episcopal, la petición que presentó en su día para que le fuera concedida la pérdida del estado clerical. En efecto, su aceptación del cargo de Presidente de la República del Paraguay no es compatible con las obligaciones del ministerio episcopal y del estado clerical. Así pues, habiendo examinado cuidadosamente todas las circunstancias, Su Santidad Benedicto XVI ha concedido para él la pérdida del estado clerical, con la consiguiente pérdida de los derechos inherentes al mismo, dispensándolo al mismo tiempo de los votos religiosos hechos en la Sociedad del Verbo Divino, de la obligación del celibato (cf. CIC can. 291) y de las demás obligaciones que el estado clerical comporta (cf. CIC can. 292¹⁴³).

4.3 Derechos y deberes electorales. Participación en partidos políticos.

En el Código Electoral Nacional argentino¹⁴⁴, no existe ninguna restricción para el ejercicio del sufragio por parte de los ministros religiosos, ni figuran en cuanto tales entre los excluidos del cuerpo electoral (art.3).

Esto es así porque en la Argentina el sufragio es considerado no solamente un derecho sino un deber, de fuente constitucional, cuyo ejercicio es garantizado por los tratados internacionales de derechos humanos y sólo admite restricciones absolutamente excepcionales. El acceso al sufragio se ha ido ampliando en el tiempo, y su restricción por razones religiosas resulta totalmente inconcebible¹⁴⁵.

¹⁴³ Decreto del 30 de junio de 2008 de la Congregación para los Obispos.

¹⁴⁴ Ley 19945, t.o. por Decreto Nº 2.135, del 18 de Agosto de 1983 y sus modificatorias introducidas por las leyes N. 23.247, 23.476, 24.012, 24.444 y 24.904.

¹⁴⁵ Ha dicho al respecto la Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal en la materia fuera de la Corte Suprema de Justicia: "En el plano del derecho positivo, la Constitución Nacional "garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio" (cf. artículo 37). Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho al sufragio, además de un derecho de naturaleza política, es una función constitucional y su ejercicio un

poder de la comunidad nacional, es decir, una competencia constitucional dentro de los límites y bajo las condiciones que la misma Constitución ha determinado (cf. Fallos 312:2191, ... y Fallos 325:524). Toda vez que “el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes[*los cuales*] [...] cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les atribuye[*el sufragio*] [...] el sufragio adquier[e] carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad política, a través del cuerpo electoral (Fallos 310:819, considerando 10). O, en términos más cercanos a una síntesis, el sufragio es la base de la organización del poder; y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación” (cf. Fallos 325:524, voto de los jueces Fayt y Petracchi). La característica universal del sufragio “hace a la substancia del Estado constitucional contemporáneo”. En tal sentido, “todo otro sistema electoral niega la igualdad de los ciudadanos y, a diferencia del sufragio restringido, que clausura el acceso al poder al pueblo, su función es hacer posible el gobierno del pueblo o de una de sus mayorías, aproximando el ideal democrático a la realidad de la vida. La historia, la de nuestro país y la de muchos otros, muestra la lucha por su consagración plena y el sucesivo abandono de clasificaciones que reparaban en el sexo, estado o condición del elector, tal como disponía el artículo 2 de la Ley N° 8871. [...] El derecho a votar libremente por un candidato de su propia elección [...] es de la esencia de una sociedad democrática y toda restricción de ese derecho golpea el corazón del gobierno representativo (cf. voto del Chief Justice Warren 377 U.S. 533, Reynolds v. Sims 1964, punto II, primer párrafo, in fine)” (cf. Fallos 325:524 voto de los jueces Fayt y Petracchi). Al implementar el carácter universal del sufragio, la ley Sáenz Peña ha inspirado otras normas que extendieron luego la composición del cuerpo electoral (cf. Acordada CNE N° 23/12), como ocurrió –por ejemplo– con la participación de la mujer a partir de la incorporación del voto femenino en las elecciones del año 1951 (Ley N° 13.010); la inclusión al cuerpo electoral de los habitantes de los territorios nacionales; el voto de los argentinos residentes en el exterior (ley 24.007); el voto de los detenidos sin condena (Ley N° 25.858); y el voto de los menores a partir de los 16 años (Ley N° 26.774), entre otras acciones tendientes también a suprimir las barreras jurídicas y fácticas para continuar expandiendo –dentro de lo previsto por nuestra Constitución Nacional– la participación electoral (cf. Acordada Extraordinaria CNE N° 54/13). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “[t]odos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades[:] [...] [v]otar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (cf. artículo 25, inciso “b”). Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que “[t]odos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades[:] [...] de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (cf. artículo 23, inciso 1, “b”). A este respecto, bien se ha destacado la incidencia que “progresivamente” ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la legislación interna (cf. Nikken, Pedro, “La Protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Civitas, 1987), a tal punto que poco a poco y por su influencia se han ido modificando diversas instituciones locales de forma y de fondo para adaptarlas a este nuevo esquema sustancial (que nace de los tratados y del *ius cogens*) y adjetivo (con fuente en la Carta de la OEA, las Convenciones y en los Reglamentos)” (CN Elec, 24/5/16, “Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/Estado Nacional – Ministerio del Interior y Transporte s/amparo – Acción de Amparo Colectivo (Inconstitucionalidad arts. 12 y 19 inc. 2° C.P. y 3° inc. ‘e’, ‘f’ y ‘g’ C.E.N”, inédito).

Como contrapartida, los ministros de culto tampoco tienen el derecho o la posibilidad de excluirse o excusarse del deber del voto, por su condición de tales, ya que no aparecen en la lista taxativa de quienes sí podrían hacerlo (art.12); ni su condición es causal de excusación para cumplir funciones como autoridad de mesa electoral (art.75). El incumplimiento de este último deber es un delito pasible de pena de seis meses a dos años de prisión (art.132).

Puede plantearse algún conflicto práctico con respecto a las elecciones, habida cuenta de que ellas se celebran habitualmente en día domingo, que para muchas confesiones religiosas (y concretamente para los cristianos, que conforman la amplísima mayoría en la Argentina) es el día destinado al culto. Un sacerdote o pastor convocado como autoridad electoral, se verá impedido o al menos gravemente dificultado de presidir ese día las celebraciones litúrgicas. En tal supuesto, dado que las autoridades comiciales son colegiadas, debería en todo caso hacerse reemplazar por el tiempo indispensable para cumplir su función propia, por alguna de las otras personas que junto con él sean autoridad electoral en el mismo comicio.

La legislación argentina no establece ningún impedimento a la participación de ministros de culto en los partidos políticos, más allá de que no parezca lo más aconsejable. Los clérigos católicos tienen en principio prohibida esta participación, que corresponde específicamente a los laicos¹⁴⁶, pero no por imposición estatal sino propia de la Iglesia¹⁴⁷.

Sin embargo, sí se han puesto algunas limitaciones a la exhibición de la condición de ministro de culto en las lides electorales. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohibió en 2011 que en una boleta electoral un candidato figurase con su título de rabino¹⁴⁸. El

¹⁴⁶ “No corresponde a los Pastores de la Iglesia intervenir directamente en la acción política ni en la organización social. Esta tarea, de hecho, es parte de la vocación de los fieles laicos, quienes actúan por su propia iniciativa junto con sus conciudadanos” (Catecismo de la Iglesia Católica, # 2442)

¹⁴⁷ “No han de participar [los clérigos] activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común” (c.287 # 2).

¹⁴⁸ TSJ CABA, 13/6/2011, "Elecciones 2011 s/oficialización de boletas", LL CABA, 2011, p.413.

argumento fue que la ley manda que figure únicamente el nombre, o en su defecto el seudónimo, y que el hecho de que el interesado fuera públicamente conocido como "rabino Bergman",

"no convierte al atributo 'rabino' en un nombre propio, que es lo que la ley permite utilizar en la boleta electoral"; y que la mención del título no era necesaria para identificarlo, sino que "exalta una calidad positiva cuya mención, con arreglo a la ley, debe quedar reservada a modalidades de comunicación distintas de la boleta electoral"¹⁴⁹.

Sin embargo, poco antes (en 2006), en una elección de convencionales constituyentes provinciales en Misiones, un partido triunfó con una boleta cuyo primer candidato -obispo católico- estaba identificado en ella como "Padre obispo".

Conviene decir que si bien las cosas son así ahora, históricamente el Derecho Electoral argentino sí tomaba en cuenta a los ministros de culto.

La primera ley electoral de la Confederación, de 1857¹⁵⁰ identificaba a las circunscripciones electorales con las parroquias (art.1), siendo el atrio parroquial el lugar de votación (art.18), y el párroco era uno de los tres miembros de la junta electoral (art.4) y el encargado de conservar el registro de electores (art.12) y las urnas usadas en las votaciones (art.32). Producida la unión nacional, se mantuvo el uso electoral de las parroquias, pero los párrocos dejaron de cumplir funciones electorales, siendo reemplazados por los jueces de paz¹⁵¹. Las parroquias dejaron de ser mencionadas como circunscripciones electorales, siendo reemplazadas por otras puramente civiles, recién en 1912, por la llamada "ley Sáenz Peña" que estableció el sufragio secreto.

Por otra parte, bajo la ley electoral de la Confederación no podían ser inscriptos en el registro cívico (electoral), "*los eclesiásticos regulares*" (art.7º), disposición inconstitucional por exceder la restricción que la

¹⁴⁹ Otro juez añadió en su voto que la mención de la calidad ministerial "podría llevar a equívoco al electorado, si se interpretara que cierto culto religioso se ha expresado orgánicamente a favor de alguna lista política, situación que, aún si fuera posible, en la especie no se ha acreditado" (voto del juez Casás).

¹⁵⁰ Ley 140 del 16 de septiembre de 1857 (ADLA 1852-80, p.155). Las normas se mantuvieron en la Ley 207 del 1º de julio de 1859 (ADLA 1852-1880, p.185).

¹⁵¹ Ley 75 del año 1869 (ADLA 1852-1880, p.419). Lo mismo en la Ley 623 del año 1873 (ADLA 1852-1880, p.968); en la Ley 893 de 1877 (ADLA 1852-1880, p.1154).

Constitución imponía para ser elegidos (voto pasivo) pero no para elegir (voto activo)¹⁵². La ley electoral 4161, del año 1903, los incluyó en la categoría de los que "*no son electores nacionales*", junto con los incapaces de hecho, los mendigos y los soldados y policías (art.5º). La ley 8871 de 1912¹⁵³ declaró excluidos del padrón "*por razón de su estado y condición*" a "*los eclesiásticos regulares*" (art.2, inc.2) juntamente con los soldados, policías, presos, dementes y mendigos.

La Ley 11387, de 1926¹⁵⁴, para hacer efectiva la exclusión del padrón, impuso a "*las autoridades eclesiásticas*" la obligación de comunicar sesenta días antes de cada elección la nómina de "*eclesiásticos regulares*", "*que tuviesen bajo sus órdenes o custodia, o se encontrasen inscriptos en registros a su cargo*" (art.21)¹⁵⁵. La privación de derechos electorales a los "eclesiásticos regulares" desapareció de la ley argentina recién con la sanción de la Ley 14.032 (Régimen electoral nacional) de 1951¹⁵⁶.

4.4 Derecho comparado

La restricción a los derechos políticos de los ministros de culto, es frecuente en el Derecho latinoamericano (y especialmente, en América Central), tal como ya anticipamos. Tales restricciones a veces se originan en el deseo de dar eficacia civil a normas de la Iglesia Católica que limitan la participación política de los clérigos, pero más frecuentemente a la influencia de las políticas liberales que se impusieron a finales del siglo XIX, preñadas de un fuerte anticlericalismo, y del deseo de impedir que la Iglesia Católica influyese de modo decisivo en los procesos electorales, por medio de sus ministros, haciendo valer su indudable influencia social.

¹⁵² Esta exclusión se mantuvo en la Ley 75 del año 1869 (ADLA 1852-1880, p.419), artículo 6º; en la Ley 623 de 1873 (art.7); en la Ley 893 de 1877 (art.8); en la Ley 4161 de 1903 (ADLA 1889-1919, p.580).

¹⁵³ ADLA 1889-1919, p.844. Es la llamada "ley Sáenz Peña" antes mencionada, en homenaje al presidente de entonces que fue su propulsor.

¹⁵⁴ ADLA 1920-1940, P.212.

¹⁵⁵ La ley 11738, del año 1933 (ADLA 1920-1940, p.483) introdujo modificaciones al régimen electoral y amplió el elenco de excluidos agregando a condenados por determinados delitos, entre otros, pero sin modificar lo referido a los eclesiásticos.

¹⁵⁶ ADLA xi-a (1951), P.106. Es la ley que concedió el derecho de sufragio en el orden nacional a las mujeres, que hasta entonces estaban excluidas de él.

Naturalmente, las formulaciones actuales tienden a incluir a ministros de culto de todas las confesiones, aunque a veces la terminología sigue aludiendo claramente a los católicos (por ejemplo, al hablar de "clérigos" o "seglares").

Si revisamos únicamente las normas constitucionales vigentes en la región¹⁵⁷, encontraremos múltiples ejemplos.

La constitución de **Bolivia** del año 2009 contiene una restricción (art.238), que no estaba presente en el texto anterior:

"No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad: [...] 5. Los ministros de cualquier culto religioso que no hayan renunciado al menos tres meses antes del día de la elección"¹⁵⁸.

En **Costa Rica**, a pesar de ser el único país latinoamericano que aún mantiene la confesionalidad católica formal en su Constitución, esta misma norma restringe la actividad política de los clérigos:

"No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas" (art.28)¹⁵⁹.

Según el art.82 de la Constitución de **El Salvador**,

"Los ministros de cualquier culto religioso y los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada no podrán pertenecer a partidos políticos ni obtener cargos de elección popular. Tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma"

¹⁵⁷ Una transcripción completa de ellas puede verse en GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos y SÁNCHEZ-BAYÓN, Antonio: *El Derecho Eclesiástico de las Américas. Fundamentos socio-jurídicos y notas comparadas*, Delta, Madrid, 2009.

¹⁵⁸ Bajo la constitución anterior, vigente hasta el 2009, no podían ser legisladores, "los eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien y cesen en sus funciones y empleo por lo menos 60 días antes de verificativo de la elección" (art.50 inc.1).

¹⁵⁹ El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, ha interpretado que esa norma tiene por objeto "erradicar [...] cualquier pasión religiosa que pudiese afectar las voluntades de los ciudadanos en el ámbito político-electoral", pero no impide a la Iglesia, y por ende a los clérigos, "... tomar posición sobre los problemas sociales del país, así como predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer una misión terrenal sin traba alguna y dar juicio moral, incluso, en materias referentes al orden público y otras de su interés...". Lo que estaría vedado sería "que exista una orden expresa de los integrantes de la Conferencia Episcopal, en la que utilicen su autoridad eclesial, tendiente a influir en la determinación de los votantes católicos", pero no ofrecer criterios para decidir su voto. (Tribunal Supremo de Elecciones, 25/10/2013, causa nº 4732-E1-2013, en http://www.tse.go.cr/juris/electorales/4732-E1-2013.html?zoom_highlight=4732-E1-2013) (accedido 25/1+2017).

En **Guatemala**, por el art.186 de la Constitución,
"No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: ... f) Los ministros de cualquier religión o culto".

En **Honduras**, tanto para ser elegido diputado, como para ser elegido Presidente, se requiere *"ser del estado seglar"* (arts. 198 y 238 respectivamente). Como para ser Secretario o Subsecretario rigen las mismas condiciones que para ser Presidente (art.249) tampoco los clérigos pueden acceder a ese cargo. El art. 77 de la Constitución dice que

"Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión, o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo."

En **México**, donde como hemos visto todos los ministros de culto tuvieron por mucho tiempo vedado incluso el derecho de voto por norma constitucional (art.130), tanto la Constitución misma como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público les impiden hasta hoy integrar partidos políticos o hacer proselitismo¹⁶⁰, y los castiga penalmente en caso de que en ejercicio de su ministerio induzcan a votar a favor o en contra de algún candidato o a no votar¹⁶¹.

Esta restricción ha sido cuestionada, con razón, por ser violatoria de la libertad de expresión garantizada a todos los demás ciudadanos por normas constitucionales e internacionales vigentes en México¹⁶². A su turno, los partidos políticos tienen la obligación de *"no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político, propagandístico, proveniente de...*

¹⁶⁰ *"Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna"* (art.130 de la Constitución y 14 de la ley)

¹⁶¹ *"Se impondrán hasta 500 días de multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto"* (art.404 del Código Penal Federal).

¹⁶² DIEZ HIDALGO, Eugenia del Carmen, "Desafíos de la libertad religiosa en México a la luz de los derechos humanos", en MEDINA GONZÁLEZ, M.C. (coordinadora), "Una puerta abierta a la libertad religiosa", México, SEGOB, 2007, p.147; GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, "Mutación y reforma de la Constitución de 1917 en materia religiosa", en "V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa", México, SEGOB, 2005, p.288; PATIÑO REYES, Alberto, "Una revisión crítica del modelo separatista mexicano desde la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento", Derecho y Religión, Vol.VIII (2013), p.218.

*ministros de los cultos de cualquier religión*¹⁶³, quienes tienen prohibido realizar aportes o donativos a los partidos políticos o sus candidatos, *“en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia”*¹⁶⁴.

Superando la antigua restricción, actualmente los ministros de culto sí tienen en México derecho al sufragio activo, pero no pasivo. El actual art.130, dice:

*"d)... los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados*¹⁶⁵;

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios".

Se trata de una norma teñida de una enorme desconfianza y que sería inaceptable en cualquier otro país, pero que en México supuso un gran avance y alivio de la situación¹⁶⁶.

En **Nicaragua**, según los artículos 134 y 147 respectivamente de la Constitución,

¹⁶³ Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Art.25 inc.1.c).

¹⁶⁴ Ídem, art.77 inc.2.e.

¹⁶⁵ El art.14 de la Ley de Asociaciones Religiosas especifica: *"Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuanto menos cinco años antes en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán seis meses"*.

¹⁶⁶ Sobre el caso mexicano, ver entre otros GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, *Derecho Eclesiástico Mexicano*, México, Editorial Porrúa, 1997; PATIÑO REYES, Alberto, "Libertad religiosa y principio de cooperación en Hispanoamérica", UNAM, México, 2011; y VARIOS AUTORES: *Relaciones Estado-Iglesia, encuentros y desencuentros*, Secretaría de Gobernación, México 2001.

"...No podrán ser candidatos a diputados propietarios o suplentes: ...3. Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieren renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección

...No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: ...e) Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieren renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección".

En **Panamá** el art.42 de la Constitución impone una restricción por una parte más genérica, pero al mismo tiempo morigerada al admitir áreas en las que si se admite el acceso de los ministros de culto a la función pública:

"Los Ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, sólo podrán ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica."

En **Paraguay** el art.197 de la Constitución prohíbe ser candidatos a diputado o a senador a *"los ministros o religiosos de cualquier credo"*; y el art.235 dice que

"Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la República o Vicepresidente: ...5. Los ministros de cualquier religión o culto".

En el primer caso, los ministros religiosos que deseen aspirar a cargos legislativos,

"deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral"

En tanto, quienes aspiren a la presidencia o vicepresidencia,

"los afectados deben haber renunciado y dejado de ejercer sus respectivos cargos, cuanto menos seis meses antes del día de las elecciones"¹⁶⁷.

¹⁶⁷ La inhabilidad tal como está formulada parece referirse al ejercicio activo del ministerio religioso, más que a la condición de ministro de culto. Eso explica que como hemos visto, Fernando Lugo, obispo católico, haya podido ser elegido Presidente, por cuanto había renunciado al ejercicio de su cargo previamente. Una vez que fue elegido, el Papa le concedió la dimisión del estado clerical que anteriormente le había negado.

Por último, la constitución de **Venezuela** exige para ser elegido "Presidente o Presidenta de la República", "ser de estado seglar" (art.227), lo que excluye a los clérigos.

Al margen de las normas constitucionales, en **Ecuador**, el *modus vivendi* o acuerdo entre esa República y la Santa Sede, establece expresamente que

"la Santa Sede renueva sus órdenes precisas al Clero Ecuatoriano a fin de que se mantenga fuera de los Partidos y sea extraño a sus competiciones políticas" (art.4º).

También en Ecuador, existen severas restricciones de derecho penal a la libertad de expresión de los ministros de culto, especialmente en relación a la participación electoral, aunque también en materia política general¹⁶⁸.

Como vemos, a veces la restricción está referida a cualquier cargo público, y otras solamente a los electivos.

Sin entrar al análisis detallado de cada una de las normas mencionadas, hay que advertir que en algunas de ellas hay un matiz de diferencia no menor, ya que se habla de una incompatibilidad entre el ejercicio del funciones públicas electivas, con el ejercicio del ministerio religioso; mientras que en otros casos la incompatibilidad parece establecerse con la condición misma de ministro de culto, independientemente de las funciones que se ejerzan

¹⁶⁸ Según establece el código penal, "Los autores de lecciones pastorales, prédicas o sermones, sea cualquiera la forma en que se las diere al pueblo, si fueren encaminadas a desprestigiar a la autoridad, presentándola como contraria a los dogmas, o a la disciplina, o a los intereses religiosos de alguna iglesia o culto, aceptado o tolerado en la República, serán reprimidos con seis meses a dos años de prisión" (art.133). "Si el autor de las lecciones pastorales, prédicas o sermones a los que se refiere el artículo anterior, se propusiere con ellas inculcar la desobediencia a la Constitución, o a las leyes, o a las órdenes de la autoridad, la pena será de uno a cinco años de prisión. Si el fin que se propusiere el autor fuere sublevar al pueblo, o poner en armas a una parte de los ciudadanos contra la otra, la pena será de prisión de tres a cinco años. En este caso, si se efectúa la sublevación o la guerra civil, el culpado de haberlas provocado sufrirá la pena de reclusión menor de tres a seis años" (art.134). Además, "Los que perturbaren una elección popular alegando motivos religiosos, ya sea en favor de sus candidatos, recomendándolos; ya desprestigiarlos a los candidatos contrarios, serán reprimidos con prisión de treinta a noventa días" (art.171).

efectivamente en el seno de la comunidad religiosa. La distinción no es irrelevante¹⁶⁹.

4.5 Participación como magistrado o jurado judicial

Veamos ahora qué se ha previsto respecto del ejercicio de funciones judiciales por parte de ministros de culto. Nos referimos obviamente a las funciones judiciales en órganos estatales, porque es claro que en el interior de cada confesión religiosa, ella tiene o puede tener órganos jurisdiccionales, normalmente a cargo de ministros de culto, regidos por sus propias normas internas.

4.5.1 Jueces o magistrados

En el derecho federal argentino no está prevista expresamente ninguna incompatibilidad entre la calidad de ministro religioso, y la de juez o magistrado judicial.

La Constitución nada dice.

El decreto-ley 1285/58, de organización de la Justicia Nacional, no menciona el caso expresamente, pero dice que

“Es incompatible la magistratura judicial con [...] la realización de cualquier actividad profesional [...] y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario” (art.9, texto según ley 21.341).

¹⁶⁹ La cuestión fue examinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Seyidzade c. Azerbaiyán”, resuelto el 3 de septiembre de 2009. El reclamante era un clérigo musulmán, y en Azerbaiyán existe también una prohibición constitucional a los clérigos para participar en las elecciones (art.55: “may be subject by law to restrictions on their right to participate in elections”), pero que sin embargo la ley electoral parece restringir a quienes ejercen efectivamente el ministerio (“while they are engaged in professional religious activity”). La Corte hizo notar la falta de claridad en la definición acerca de quién debía ser considerado “clérigo” o persona que desarrollara “actividad religiosa profesional” (ver en [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22respondent%22:\[%22AZE%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%2201-96018%22\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22respondent%22:[%22AZE%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%2201-96018%22]})).

El ejercicio del ministerio religioso (pero no el estado mismo de ministro de culto o la profesión religiosa), podrían considerarse comprendidos en ese enunciado genérico.

En algún caso, como vimos (provincia de Río Negro), la función judicial está vedada a los religiosos católicos (no a los clérigos en general, ni a los ministros de culto de otras religiones) por la constitución provincial.

También algunas leyes provinciales contemplan el caso.

Así, en la provincia de **Formosa**, la Ley Orgánica del Poder Judicial¹⁷⁰ establece que

“es incompatible la magistratura y la función judicial con [...] la posesión de estado militar o religioso” (art.9).

No es sencillo determinar qué entiende la ley provincial por “estado religioso”, aunque parece referirse a la condición de religioso, es decir (de acuerdo al derecho vigente en la Argentina, ley 24.483 y su reglamentación), a los miembros de Institutos de Vida Consagrada de la Iglesia Católica. No estarían incluidos en la prohibición, entonces, los clérigos no religiosos, ni los ministros de culto de otras confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica (aunque sí, porque la ley no distingue y en homenaje a la igualdad, estarían afectados por la incompatibilidad los monjes o religiosos de otros credos distintos del católico).

En el derecho comparado, no es extraña la prohibición a los ministros de culto de ejercer funciones judiciales.

Así ocurre por ejemplo en **Colombia**¹⁷¹, o en **Chile**¹⁷².

4.5.2 Jurados

Una forma de participación en la potestad civil, por parte de los ministros de culto, es su intervención como jurados, en juicios penales.

¹⁷⁰ Ley 961 del 29/11/90 (BO 4/1/91).

¹⁷¹ Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, art.151.

¹⁷² El Código Orgánico de los Tribunales dice que *“No pueden ser jueces... 8º Los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores”* (art.256), implicando la recepción de tales órdenes la expiración de la calidad de juez (art.332). La norma parece referida únicamente a eclesiásticos católicos.

En el caso de los ministros católicos, semejante participación está prohibida para ellos por el canon 285, y para los religiosos católicos por los cánones 283 y 671, por considerarse esa función extraña al estado eclesiástico del mismo modo que el ejercicio de cargos electivos. Las razones que fundan esas disposiciones canónicas, son aplicables también a los ministros de otros credos, aunque su propio derecho estatutario no contenga prohibiciones de esa índole.

En reconocimiento de esa disposición canónica, algunos concordatos firmados por la Santa Sede con los estados prevén expresamente la exención de los clérigos de integrar jurados, como ocurre en el Concordato con Portugal, de 2004.

El establecimiento del juicio por jurados en la Argentina es un mandato constitucional expreso. Es la única institución que la Constitución Nacional, en 1853/60, mandó por tres veces que fuera establecida (en los artículos 24, 67 inciso 11 y 99), mandato que sigue vigente (artículos 24, 75 inciso 12 y 118), y que sin embargo nunca fue cumplido en el orden federal¹⁷³, pese a una gran cantidad de proyectos en tal sentido. La disposición se origina en los primeros proyectos constitucionales, desde el año 1812, y se mantuvo en casi todos los antecedentes de la Constitución vigente.

Recientemente, algunas provincias han retomado esa iniciativa, no sin algunas discusiones acerca de la viabilidad de que una ley provincial establezca el juicio por jurados antes de que una ley nacional así lo disponga. La primera fue **Córdoba**, que mediante la ley 9182, de 2004, lo impuso para el juzgamiento de algunos delitos.

La ley cordobesa instauro el juicio por jurados, en cumplimiento no solamente de la Constitución Nacional, sino también del art.162 de la Constitución Provincial, que así lo ordena. En el artículo 6º, entre las personas que no pueden ejercer la función de jurado por “incompatibilidad”, enuncia a “*los Ministros de los Cultos*” (inciso f).

Es de notar que el texto aprobado por la Legislatura hablaba de “los Ministros de los Cultos reconocidos”, pero la palabra “reconocidos” fue vetada por el Poder Ejecutivo, y el veto fue aceptado por el legislador. No está claro -porque no fue explicitado- el porqué del veto: si se trata de un cuestionamiento al sistema de “reconocimiento” de iglesias y

¹⁷³ Esas cláusulas fueron suprimidas en la reforma constitucional de 1949, pero reaparecieron cuando en 1956 se volvió a la constitución original de 1853/60; y fueron mantenidas, bien que con otra numeración, en la reforma de 1994.

comunidades religiosas, en cuyo caso por alguna razón se habría querido igualar a las reconocidas con las que no lo están; o si había otras razones. En todo caso, será más complejo para el ministro de un culto "no reconocido" como tal, hacerse reconocer a sí mismo en esa calidad. Si por error u otro motivo un ministro de culto aceptase su designación como jurado, podrá ser recusado¹⁷⁴.

En la provincia de **Buenos Aires** el juicio por jurados fue establecido en 2013 para algunos casos de delitos graves, por la Ley 14.543¹⁷⁵, que establece expresamente que

"No podrán ser miembros del jurado: ...los ministros de un culto religioso" (Art.338 bis, inciso 3.j del Código Procesal Penal de la provincia).

Cuando procede el juicio por jurados, el primer paso es una audiencia de selección, en la que se verificará si existe algún motivo de exclusión, y también si alguno de los jurados seleccionados tiene un

"impedimento o motivo legítimo de excusación, que será valorado por el juez con carácter restrictivo" (art.338 quáter)¹⁷⁶.

En la provincia de **Neuquén** el Código Procesal Penal ha previsto el juicio por jurados para los delitos más graves. Entre los impedimentos para integrarlo, establece que

"No podrán integrar el jurado... los ministros de un culto religioso" (art.44 inc.7).

Por su parte, la provincia del **Chaco** ha emitido en 2015 una ley con una regulación muy detallada del sistema de jurados¹⁷⁷ que también dispone que

"No podrán cumplir funciones como jurado: ... g) Los ministros de un culto reconocido" (art.13).

La ley lo enuncia como "incompatibilidad" para el ejercicio de la función.

¹⁷⁴ Art.23 de la ley 9182, pese a que esa misma norma prohíbe excluir a un jurado *"por razones de religión"*.

¹⁷⁵ BO 20/11/2013.

¹⁷⁶ La excusación no será necesaria para los ministros de culto, que están excluidos de pleno derecho, pero puede ser la ocasión para ejercer la objeción de conciencia.

¹⁷⁷ Ley Nº 7661 del 7 de septiembre de 2015 (BO 16/9/2015).

La provincia de **Río Negro** introdujo el juicio por jurados también en 2015, y ahora el Código Procesal Penal dispone tienen impedimento para integrar el jurado "*los ministros de un culto religioso*" (art.35)¹⁷⁸.

Si en algún caso una ley nacional o provincial estableciese el juicio por jurados, sin prever la excepción para los ministros de culto, ante una designación para ejercer esa función, que seguramente tendrá el carácter de carga pública¹⁷⁹, únicamente les quedaría el camino de hacer objeción de conciencia a la designación.

En el derecho comparado la incompatibilidad del ministerio de culto con la función de jurado ha sido prevista.

Así, la ley de Libertad Religiosa de **Portugal** prevé que

"Los ministros de culto, los miembros de institutos de vida consagrada y otras personas que ejerzan profesionalmente actividades religiosas de iglesias o de otras comunidades religiosas inscriptas pueden pedir ser excusados de intervenir como jurados" (art.17).

En ese mismo país, el concordato firmado con la Santa Sede ha previsto también el caso, para los ministros de culto católico en su art.6:

"Los eclesiásticos no tienen obligación de asumir los cargos de jurados, de miembros de tribunales u otros de la misma naturaleza, considerados por el Derecho Canónico como incompatibles con el estado eclesiástico"

En **España**, en cambio, la ley vigente no exime a los ministros de culto de ser jurados, pero alguna doctrina entiende que ellos pueden lograr tal exención¹⁸⁰ invocando la objeción de conciencia, que si bien no está expresamente prevista para el caso podría ejercerse por vía de la alegación genérica (que sí está prevista) de causas que dificulten en forma grave el desempeño de la función de jurado¹⁸¹. De suerte que no existe reconocido un

¹⁷⁸ Texto según Ley 5020 del 10/12/2014 (BO 12/01/2015, ADLA LXXV-A-900).

¹⁷⁹ Tal como establece el art.21 de la ley 9182 de la provincia de Córdoba.

¹⁸⁰ MORENO BOTELLA, Gloria, "Los ministros de culto", en MARTIN SANCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. (coordinadores), "La libertad religiosa en España y Argentina", Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006, p.147.

derecho subjetivo de los ministros de culto, sino que dependen de una concesión que haga el Tribunal.

En el **Reino Unido**, se considera no elegible para integrar un jurado al “*ministro regular de cualquier denominación religiosa*”, a quienes tienen órdenes sagradas, a los que han hecho votos religiosos¹⁸², o a los capellanes de establecimientos penales.

La exclusión de los ministros de culto de las funciones judiciales (sea como jueces, sea como miembros del jurado) es completamente lógica. Es la solución más respetuosa de la libertad religiosa, teniendo en cuenta que pueden existir –y de hecho existen- normas de las confesiones religiosas que les impiden ejercer esas funciones; y que además es la que permite distinguir adecuadamente los roles. Por otra parte, no existe interés público en obligar a un ministro de culto a desempeñar esa función, que puede ser perfectamente desempeñada por cualquier otro ciudadano.

Por lo tanto, lo más razonable parece ser excluir directamente a los ministros de culto de las listas de posibles jurados. Y en su defecto, prever al menos en forma expresa la posible objeción de conciencia a esa función (que en todo caso, podría ser invocada también por otras personas que sin ser ministros de culto, encuentren en su fe o convicciones un obstáculo insalvable a participar de funciones judiciales)¹⁸³.

¹⁸¹ MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, “La ley española del jurado y la objeción de conciencia de clérigos y religiosos”, IUS CANONICUM, XXXVII, Nº73, 1997, pp.295-310. El autor contrasta la omisión de la ley española con las normas de Bélgica, Italia, Portugal, Alemania, Austria, Irlanda y el Reino Unido que sí excluyen a los ministros de culto de esta función. Ver también MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, “La objeción de conciencia a formar parte de un jurado en la nueva legislación española”, en AA.VV., “La libertad religiosa. Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico”, México, UNAM, 1996, p.727.

¹⁸² “The clergy, etc.: A man in holy orders. A regular minister of any religious denomination. A vowed member of any religious order living in a monastery, convent or other religious community” (Juries Act 1974, Schedule 1, Group C).

¹⁸³ Sobre la objeción de conciencia a la integración de jurados en general, ver NAVARRO VALLS, Rafael y MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, “Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia”, IUSTEL, Madrid, 2011, p.443.

4.6 Ejercicio del notariado

En la Argentina, que adscribe al sistema del llamado “notariado latino”, el ejercicio de la función de notario o escribano ha sido definido como una “función pública impropia”. En efecto, el escribano público es un profesional liberal, pero al mismo tiempo es depositario de la “fe pública” e investido de esa calidad por el Estado, y sujeto a precisos deberes y obligaciones de naturaleza disciplinaria¹⁸⁴.

El ejercicio del notariado está regulado por normas del Código Civil y Comercial, y por leyes que dictan cada provincia, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de sus facultades propias. Estas leyes provinciales son las que fijan las condiciones para el ejercicio del notariado, las inhabilidades y las incompatibilidades para esa función.

En muchas de esas leyes –no en todas-, entre las diversas incompatibilidades que se establecen para el ejercicio del notariado, aparece (aunque en general expresado de modo inadecuado) la condición de ministro de culto. El origen presunto de esas normas puede hallarse en el art.7º de la ley nacional 12.990¹⁸⁵, que regulaba las funciones del notariado en la Capital Federal antes de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y declaraba incompatible el ejercicio de la escribanía con “*todo cargo o empleo militar o eclesiástico*”. Esa ley era del tiempo de vigencia del Patronato, cuando los “eclesiásticos” eran considerados funcionarios públicos.

Algunas de las leyes provinciales vigentes establecen que la “función notarial” es incompatible “*con la calidad de eclesiástico en actividad o en ejercicio*”, como dice la ley de **Jujuy**¹⁸⁶; o directamente “*con la calidad de eclesiástico*”, según las leyes de **Mendoza**¹⁸⁷, **Santiago del Estero**¹⁸⁸ y **San Juan**¹⁸⁹. En estos casos, donde el término “eclesiástico” está usado como

¹⁸⁴ Cfr. LLAMBÍAS, Jorge, Tratado de Derecho Civil – Parte General, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1978, t.II, § 1702.

¹⁸⁵ Del año 1947. BO25/7/47, ADLA VII-302. Esta ley perdió vigencia a partir de la sanción por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la ley 404.

¹⁸⁶ Ley 4884, art.6º.

¹⁸⁷ Ley 3058 del 13/10/64, art.6 inc. 5) (t.o. 17/3/2000).

¹⁸⁸ Ley 3662, art.6 inc.4º (BO 8/11/71).

¹⁸⁹ Ley 3718, art.6º.

sustantivo, la incompatibilidad afecta a quienes poseen calidad de tales, es decir, a quienes venimos denominando “ministros de culto”.

Otras leyes provinciales, con mayor latitud, declaran incompatible con el ejercicio del notariado “cualquier función o empleo eclesiástico” (**Entre Ríos**¹⁹⁰ y **Salta**¹⁹¹), “todo cargo o empleo eclesiástico” (**Córdoba**¹⁹², **Neuquén**¹⁹³, **Catamarca**¹⁹⁴, **Santa Cruz**¹⁹⁵, **Santa Fe**¹⁹⁶), “empleos o cargos eclesiásticos” (**Buenos Aires**¹⁹⁷, **Tucumán**¹⁹⁸ y **Tierra del Fuego**¹⁹⁹); “el desempeño de cualquier empleo, cargo judicial, función militar o eclesiástica” (**Ciudad de Buenos Aires**)²⁰⁰; “todo cargo o empleo militar o eclesiástico” (**La Rioja**²⁰¹, **La Pampa**²⁰²). En estos casos no es la condición de ministro de culto la que genera la incompatibilidad, sino el ejercicio simultáneo de un cargo, empleo o función, lo que se aplica tanto a ministros religiosos como a fieles laicos que puedan ejercer una función eclesiástica o religiosa, y mientras estén en ejercicio de ella.

La ley orgánica notarial de **San Luis**²⁰³ (y en términos muy similares, la del **Chubut**²⁰⁴ y la más reciente de **Río Negro**²⁰⁵), expone la incompatibilidad del siguiente modo:

¹⁹⁰ Ley 6200, art.35.

¹⁹¹ Ley 6486, BO 25/11/87.

¹⁹² Ley 4183 (t.o. Decreto 2252/75), art. 6 (BO17/6/75).

¹⁹³ Ley 1033, ART.7

¹⁹⁴ Ley 3843 (BO 5/11/82), art.4 inc. b). El art.5 aclara que quien incurra en incompatibilidad debe comunicarlo al Tribunal de Superintendencia Notarial y cesar de inmediato en el ejercicio de las funciones notariales, siendo falta grave incumplir la comunicación u ocultar la incompatibilidad.

¹⁹⁵ Ley 1749, art.6º.

¹⁹⁶ Ley 6898, art.7.

¹⁹⁷ Decreto-Ley 9020/78, art.33.

¹⁹⁸ Ley 5732, art.16.

¹⁹⁹ Ley 285 de 1996, art.10 (BOP 15/4/96).

²⁰⁰ Ley 404, art.17 (BOCBA 1034 del 25/9/00).

²⁰¹ Ley 6071, art. 10 (BO 25/8/95).

²⁰² Ley 49 (t.o. 1993), art.6º inc. .d) (BO 5/3/93).

²⁰³ Ley nº XIV-0360-2004 (5721), art.15 inc. a).

²⁰⁴ Ley 5055, art.12 inc.a) (BO 3/10/2003).

²⁰⁵ Ley 4193, art.14 inc. a) (BO 21/5/07, ADLA LXVII-C-3401).

“El desempeño de cualquier empleo, cargo judicial, administrativo, función militar o eclesiástica y toda otra actividad, pública o privada, que pudiere afectar la imparcialidad del escribano o la adecuada atención de sus tareas”.

Queda claro, que lo que la ley tiene en mira no es el estado eclesiástico en sí mismo, y ni siquiera el ejercicio de una función eclesiástica, sino por una parte la necesidad de que el notariado sea una tarea de tiempo completo, y por otra que esté garantizada una razonable imparcialidad de quien la ejerce. Este criterio debería ser tomado en cuenta también a la hora de interpretar el alcance de las normas existentes en las demás provincias.

Otras provincias, como **Corrientes, Formosa, Chaco**²⁰⁶ o **Misiones**, no contemplan ninguna incompatibilidad entre la función notarial y el ministerio de culto.

El uso del término “eclesiástico” (como sustantivo o como adjetivo) parece referir únicamente a la Iglesia Católica, y seguramente es lo que los distintos legisladores provinciales tenían en mente, pero no hay razón ninguna para esa limitación, por lo que debería aplicarse al ministro de culto de cualquier credo, o a quien ejerce un cargo, empleo o función en cualquier confesión religiosa, según sea el caso. La aplicación exclusivamente a los ministros de culto católicos entrañaría una discriminación inconstitucional e injustificada.

En la mayor parte de los casos citados, por la forma en que están redactadas las leyes, se trata de una incompatibilidad y no de una incapacidad. Lo que no se permite es el ejercicio simultáneo. Por lo tanto, bastará con cesar en el empleo o función para poder ejercer el notariado. Distinto es el caso en que es la condición de eclesiástico en cuanto tal la que genera la incompatibilidad, que no depende del ejercicio de un cargo concreto; aunque en ese caso cabe dudar de la constitucionalidad de las normas que están así redactadas, por la discriminación por razón religiosa que ellas implican.

4.7 Otras inhabilidades o restricciones profesionales

A medio camino entre las incapacidades o restricciones de tipo político, y las incapacidades o limitaciones a la capacidad civil, pueden

²⁰⁶ Ley 2212 y sus modificatorias.

hallarse otras limitaciones para el ejercicio de determinadas labores profesionales. Tales restricciones se suponen fundadas en algún tipo de incompatibilidad entre la condición de ministro de culto y la profesión de que se trate, aunque en general puede decirse que carecen de justificación y no resisten el análisis de su constitucionalidad. Son, en definitiva, discriminaciones impuestas por razones religiosas y carentes de fundamento.

A título de ejemplo, puede citarse el caso del ejercicio de la profesión de Licenciado en Producción de Bio-imágenes, Técnico universitario en Radiología o Técnico superior en Producción de Bio-imágenes. Tales profesiones han sido reglamentadas por ley en la provincia de **Córdoba**²⁰⁷. Sorprendentemente, entre las “incompatibilidades” para el ejercicio de ellas se incluye a *“los integrantes del clero u órdenes religiosas que se encuentren inhabilitados por legislación aplicable a sus funciones”* (art.28 inc.3).

En realidad se trata de una norma vacía de contenido, ya que inhabilita a quienes estén ya inhabilitados por “legislación aplicable a sus funciones”: tal legislación no existe o, en todo caso, no establece ninguna incompatibilidad o inhabilitación (salvo que se haya entendido por tal genéricamente a la del art.1160 del Código Civil, vigente al tiempo de la sanción de la ley provincial pero hoy derogado, que de todos modos parece claramente inaplicable al caso). La inocuidad de la norma no quita que sea injusta, y como tal impugnabile: no se advierte qué incompatibilidad puede existir entre ser ministro de culto y radiólogo a la vez (piénsese -dado que la norma incluye a los religiosos- en una religiosa o religioso miembro de algún instituto dedicado al cuidado de la salud, que posea esa capacitación profesional).

4.8 Conclusiones

El repaso de las inhabilidades, prohibiciones y restricciones a la capacidad política o para el ejercicio de funciones públicas, que algunas normas imponen a los ministros de culto (o en su caso, a los religiosos, o a algunos de ellos), genera una cierta perplejidad.

²⁰⁷ Ley 9765, aprobada el 31 de marzo de 2010 (ADLA LXX-C-2545).

En primer lugar, se advierte un uso confuso de los términos. Se habla según los casos de “eclesiásticos”, “eclesiásticos regulares”, “religiosos”, etcétera; y no queda claro a quienes se quiere aludir exactamente.

A veces se trata de normas antiguas, que tienen cierta explicación bajo el régimen del Patronato, pero no la conservan una vez desaparecido éste. Casi siempre, son normas pensadas exclusivamente en relación a clérigos o religiosos católicos. Pero hoy en día esa aplicación exclusiva es irritante y manifiestamente inconstitucional.

Con frecuencia se trata de normas antiguas, que han sido reproducidas por otras recientes únicamente por la comodidad de copiar irreflexivamente, sin que el legislador se haya preguntado qué sentido tienen hoy tales prohibiciones, ni cuál fue la razón de su introducción en el pasado.

Toda norma prohibitiva debe ser interpretada de manera restrictiva, siendo que el principio es la libertad (art.19 de la Constitución Nacional argentina). Pero al mismo tiempo, cuando hay un creciente reclamo de igualdad y no discriminación religiosa, resulta odioso, e incluso tendencialmente inconstitucional, imponer prohibiciones a miembros de una confesión religiosa en particular (la Iglesia Católica) y no a los de las restantes. La situación es dilemática: o se sostiene una discriminación que en principio debería estar vedada, o se amplifica una restricción de derechos por razones religiosas, que en principio no resulta aceptable o, al menos, deseable.

Así las cosas y *de lege ferendae*, urge una revisión de las normas expuestas en base a principios, de manera que sólo se mantengan las restricciones de derechos que tengan un fundamento claro. Ese fundamento no puede ser la discriminación religiosa, o la desconfianza irreflexiva hacia los ministros de culto

Donde pueda justificarse la subsistencia de la prohibición o limitación de derechos, si hubiera algún caso así, parece indispensable que se aplique de manera igualitaria a los ministros de culto de todas las confesiones.

Por supuesto, lo dicho no impide que el derecho interno de las confesiones religiosas limite o prohíba a los ministros de culto ejercer ciertas actividades, o postularse a ciertos cargos civiles. Pero en todo caso, esa es una prerrogativa de las propias confesiones, que podrán también establecer las reglas y las oportunas excepciones a su aplicación.

Capítulo 5. Los ministros de culto ante el derecho privado.

El 1 de agosto de 2015 entró en vigencia en la Argentina un nuevo Código Civil y Comercial, que reemplazó a los códigos separados que regían esas materias hasta entonces, vigentes desde el siglo XIX.

El código civil argentino (ley 340) databa del año 1870; y si bien había tenido diversas reformas, muchas normas (y en particular, varias que nos ocuparán aquí) permanecían intocadas. El código de comercio (ley 15), era todavía más antiguo.

Al tiempo del dictado de los códigos originales, no había prácticamente en la Argentina más que ministros de culto católicos, y algunos pastores protestantes de iglesias que hoy llamamos “históricas” (anglicana, luterana, calvinista). A su vez, los primeros estaban encuadrados en una concepción bastante rígida del Patronato Nacional, en cuya virtud eran prácticamente considerados funcionarios públicos²⁰⁸. Esto explica muchas de las normas hoy derogadas, y también el hecho mismo de su derogación, en virtud de la posterior evolución del derecho eclesiástico, y en particular la amplitud actual del derecho a la libertad religiosa (tutelado constitucional e internacionalmente), y la separación Iglesia-Estado y extinción del derecho de Patronato. Pero el conocimiento de esas normas derogadas mantiene interés al menos por dos motivos: uno, porque ellas siguen siendo aplicables a los hechos ocurridos durante su vigencia, que todavía y en los próximos años puedan ser objeto de juzgamiento. Y otro, para advertir la evolución sufrida por el Derecho en esta materia y comprender mejor así las normas ahora vigentes.

Examinaremos en primer lugar algunos problemas vinculados a la capacidad civil, comenzando por el caso de los religiosos profesos (por ser quienes mayores incapacidades poseían) y luego de los ministros de culto en general.

Veremos luego la incidencia de la condición de ministro de culto en el derecho de familia, y concretamente en el eventual matrimonio de ellos, el régimen de filiación y patria potestad (ahora denominada “responsabilidad parental”), la adopción y el ejercicio de la tutela y curatela.

²⁰⁸ De hecho, hasta varios años después de la vigencia del Código, los sacerdotes y por extensión los pastores, tenían a su cargo la celebración del matrimonio con efectos civiles, y el registro de nacimientos (bautismos) y defunciones, entre otras funciones.

Luego examinaremos brevemente los posibles supuestos de responsabilidad civil profesional específica de los ministros de culto; y finalmente, las previsiones hoy derogadas acerca del domicilio de los eclesiásticos.

5.1 Restricciones a la capacidad civil

La decisión del Estado de limitar o restringir la capacidad civil de los ministros de culto puede obedecer a distintas razones.

Una “buena” razón, sería la intención de dotar de eficacia civil a normas internas de las confesiones religiosas, que limiten determinadas actividades a sus ministros de culto. Claro que esa restricción civil, teóricamente comprensible en un régimen de “religión única” como el que existió en Hispanoamérica durante la dominación española, es casi imposible de llevar a la práctica ante una diversidad de confesiones religiosas, con la consiguiente diversidad de normas internas en la materia. Ello, aún en el caso de que la restricción externa de los derechos de los ministros de culto sea considerada razonable y acorde con la libertad religiosa.

Pero de esa “buena” razón es muy fácil deslizarse hacia una “mala” razón: la restricción de derechos como política persecutoria y restrictiva de una actividad que se considera no valiosa, como ocurría por ejemplo en México durante casi todo el siglo XX²⁰⁹. Obviamente, esta motivación es inaceptable en un régimen de libertad religiosa, lo mismo que sus concreciones prácticas.

Antes de considerar las restricciones impuestas en la Argentina a la capacidad civil de los ministros de culto en general, nos detendremos en las que afectaban a los religiosos profesos católicos. Si bien se trata de un caso particular, y de que ellos no son estrictamente “ministros de culto”, conviene comenzar por aquí por haber sido las más extensas.

²⁰⁹ El artículo 27.III de la Constitución de 1917, por ejemplo, disponía que “*En ningún caso las instituciones [de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito] podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de... ministros de cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquellos no estuvieren en ejercicio*”; castigando el Código Penal la violación de la prohibición con pena de prisión (art.21). La norma fue suprimida recién en 1992.

5.1.1 Incapacidad genérica de los religiosos para contratar

El artículo 103 del Código Civil de Vélez Sarsfield, al definir que la extinción de las personas físicas ocurría por su “muerte natural”, añadía:

“La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en las comunidades religiosas”.

En su nota a ese artículo, Vélez Sarsfield explicó el régimen que hasta entonces estaba vigente, proveniente de las Leyes de Partidas²¹⁰:

“los votos solemnes en comunidades religiosas causan incapacidad para todos los efectos civiles. Desde ese momento, la sucesión de los religiosos es deferida según su testamento, o se da a los parientes que se encuentran en grado de sucederles”.

Pero en seguida el codificador describió los problemas que planteaba la posible “vuelta a la vida” de los religiosos “civilmente muertos”, por la dispensa de sus votos, o porque un religioso fuera elevado al episcopado, o nombrado párroco, por ejemplo; razón por la que optó por suprimir del derecho civil argentino esa anacrónica institución²¹¹.

En definitiva Vélez Sarsfield no consideró incapaces de hecho a los religiosos²¹², aunque en algunas soluciones concretas del Código se podía suponer esa condición. Por ejemplo, siendo la profesión religiosa del menor de edad causa de extinción de la patria potestad (art. 306), se producía un

²¹⁰ Partida 4ª, título 18, y partida 1ª, Título 7, ley 2; según BUSSO, Eduardo, “Código Civil Anotado”, tº I, art.103, p.576.

²¹¹ La muerte civil en general ha desaparecido en todo el mundo. Sin embargo, en Chile estuvo vigente hasta 1943 en los artículos 95 al 97 de su código civil, derogados por ley 7612 de ese año (cfr. LAFAILLE, Héctor, “Derecho Civil”, Buenos Aires, Ediar, 1953, tº 8, cap.VI, # 162; PIMSTEIN, Maria Elena, “Ministers of Religion in Chilean Law”, Brigham Young University Law Review, Vol 2008, nº 3, p.900; y SALINAS ARANEDA, Carlos, “Lecciones de Derecho...” cit., p.315; y del mismo autor, “El régimen patrimonial y fiscal de las confesiones y entidades religiosas en el Derecho del Estado de Chile”, en “La financiación de la libertad religiosa”, Ministerio de Justicia de España, Madrid, 2002, p.128).

²¹² A diferencia de lo que disponía el art.1447 del Código Civil de Chile, casi contemporáneo, que incluía a “los religiosos” entre los incapaces relativos (cfr. SALINAS ARANEDA, “El régimen patrimonial y fiscal de las confesiones y entidades religiosas en el Derecho del Estado de Chile”, en “La financiación de la libertad religiosa”, Ministerio de Justicia de España, Madrid, 2002, p.134).

efecto anómalo al dejarlo privado de representación, que tácitamente se suponía asumida por los superiores religiosos²¹³.

A pesar de haberse suprimido la muerte civil y de la capacidad reconocida a los religiosos para adquirir bienes y para disponer de ellos para después de su muerte, subsistió sin embargo en el Código Civil argentino una importante restricción a su capacidad jurídica.

El artículo 1160 del código civil decía que

*“No pueden contratar... los religiosos profesos de uno y otro sexo, sino cuando comprasen bienes muebles a dinero de contado, o contratasen por sus conventos”*²¹⁴.

La prohibición era muy amplia y sólo admitía dos excepciones aparentes, aunque una sola real. Porque si el religioso o religiosa contrataba *“por su convento”*, no era él o ella quien contrataba, sino el convento, es decir, el Instituto (persona jurídica) al que pertenecía²¹⁵. De manera que el único contrato permitido a los religiosos, era la compraventa al contado y de bienes muebles²¹⁶.

Por lo tanto, en una interpretación estricta de la norma, los religiosos no podían comprar o vender a crédito, ni comprar o vender inmuebles ni siquiera al contado, ni ser inquilinos ni locadores, ni hacer

²¹³ En un caso bastante singular, y reciente, se discutió si la prescripción adquisitiva corría contra una religiosa profesa que había testado a favor de la congregación y abandonado la administración de sus bienes. Los jueces resolvieron que dado que la prescripción corre aún contra los incapaces (art. 3966 del Código Civil de 1870), "obvio resulta que también puede correr contra quien no es incapaz pero ingresó como novicia en una congregación religiosa, a pesar de que se haya obligado internamente a votos de pobreza y a no administrar bienes, cuestión que es inoponible a quien alegue ser poseedor" (CNCiv, sala L, 15/03/2010, inédito).

²¹⁴ Se ha explicado que el artículo tiene su fuente en el proyecto de Código Civil de Freitas (para el Brasil), que era coherente porque incluía a los religiosos profesos entre los incapaces relativos, sujetos a la representación de sus superiores (SPOTA, Alberto G., "Instituciones de derecho civil. Contratos", Depalma, 1979, Vol.II, # 327).

²¹⁵ En el código civil de Vélez, ese es el significado de "convento". En la ya recordada nota al art.103, Vélez dice: "El religioso, por conservar la vida civil, no deja de ser miembro de una persona jurídica, su convento, sujeto en un todo a los estatutos que lo rijan". Ver MAGE, Diego Mariano, "El Derecho Canónico, una alternativa de solución para la incapacidad del Art.1160 del Código civil", en Sociedad Argentina de Derecho Canónico (SADEC), Jornadas Anuales 3, Buenos Aires, 2010, p.107.

²¹⁶ Literalmente la excepción a la incapacidad se refería únicamente a la "compra" al contado, pero lógicamente debía considerarse también permitida la venta de esas mismas cosas muebles, lo que además contribuye a limitar una incapacidad de derecho injustificada (Cfr. BORDA, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil - Contratos", t.I, § 44, 9ª Edición Actualizada, La ley, Buenos Aires, 2008).

donaciones, ni dar mandatos, ni hacer o recibir préstamos, ni celebrar contratos de transporte, ni contratar los servicios educativos de una universidad o un instituto terciario, por poner sólo algunos ejemplos. Y por aplicación de otras normas concordantes, tampoco hacer novaciones, transacciones ni renunciaciones a título oneroso²¹⁷.

Esta incapacidad de derecho era muy llamativa, y claramente injustificada en la ley civil, más allá de lo que la legislación canónica pudiera imponer como derivación del voto de pobreza; aunque en su momento hubiera representado un progreso frente a la situación de muerte civil anterior.

Por eso, para algunos autores no era una verdadera incapacidad, sino “una imposibilidad a consecuencia de haber enajenado sus bienes y de sujetarse a la condición de indigentes”, en virtud del voto de pobreza²¹⁸. Pero no es cierto que los religiosos carecieran de bienes, porque aunque se hubieran desprendido de todos los que tenían al ingresar a la vida religiosa, pudieron adquirir otros después, especialmente por herencia. Y hay muchas personas que tienen un patrimonio exiguo, sin que eso los incapacite para contratar.

En general los autores coinciden en que esta era una verdadera incapacidad de derecho²¹⁹. Por lo tanto, no era remediable mediante la actuación por otro en nombre del religioso²²⁰; y su consecuencia era que el contrato celebrado por el religioso o religiosa fuese nulo (art.1043), en principio de nulidad absoluta²²¹, como resultaba también de la norma genérica del art.18 del código civil.

Vista la relevancia de esta incapacidad, resulta necesario precisar a quienes se aplicaba. Justamente por la severidad de la norma, la doctrina y la jurisprudencia se esforzaron por restringirla lo más posible.

²¹⁷ Artículos 805, 833 y 869 del antiguo Código Civil.

²¹⁸ LAFALLE, Héctor, *op.cit.*, # 163.

²¹⁹ Cfr. LLAMBÍAS, Jorge, “Tratado de Derecho Civil – parte general”, tº I, # 600, y cita de opiniones concordantes de ARAUZ CASTEX, BORDA, ORGAZ, LAFAILLE, SPOTA, SALVAT y jurisprudencia.

²²⁰ Cfr. BORDA, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil Argentino – parte general”, tº I, # 606; LLAMBÍAS, Jorge, “Tratado...”, # 568.

²²¹ LLAMBÍAS, Jorge, “Tratado...”, # 570; SPOTA, *op.cit.*, # 283. En contra: BORDA, Guillermo, “Contratos”, cit., § 45, donde considera que la nulidad era relativa y por lo tanto sólo invocable por el interesado y confirmable por él.

Así, se dijo que por “religioso profeso” debe entenderse exclusivamente al que le correspondía esa denominación en el derecho canónico vigente al tiempo de sanción del código civil, es decir, antes del Código de Derecho Canónico de 1917; y de tal modo, la norma se habría referido exclusivamente a “los que hubieren ingresado en una orden y emitido votos solemnes de obediencia, pobreza y castidad... Para que produjeran efectos en nuestro derecho, los votos, por consiguiente, debían ser solemnes, no bastando los simples”, es decir, eran solamente los votos perpetuos efectuados en órdenes religiosas en sentido estricto y con las condiciones necesarias para ser considerados solemnes. Borda, que expone esta opinión, concluye que

“de lo expresado se desprende que, en nuestro derecho, no deben considerarse religiosos profesos, y por consiguiente tienen plena capacidad civil, todos aquellos que hubieran emitido votos simples, los clérigos, los que viviesen en congregaciones, de igual modo los curas párrocos, obispos y cardenales”²²².

Alguna jurisprudencia²²³ y doctrina²²⁴ compartieron esa interpretación, que era razonable y, sobre todo, justa. Pero tiene el inconveniente de no ajustarse totalmente a la legislación posterior al Código Civil.

En efecto, la ley 24.483 no hace distinciones entre órdenes y congregaciones religiosas, e incluso equipara frente al Estado, a todos los Institutos de Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica con las “órdenes preconstitucionales”, es decir, las que existían en la Argentina antes de la sanción de la Constitución de 1860²²⁵.

Y la reglamentación de la misma ley, unificó bajo la denominación de “miembro de un instituto de vida consagrada” a “los

²²² BORDA, op.cit., # 603. En sentido coincidente. SPOTA, Alberto G., op.cit., # 327; y un antiguo fallo de la Cámara Civil de la Capital (“Esclavas del Corazón de Jesús”, JA 42-412). También el fallo de primera instancia en “Compañía Argentina Financiera S.A. c. Rosa, Silvio”, citado en la sentencia dictada en el mismo caso por la Corte Suprema de Santa Fe (22/6/2005, Tomo 208, p.056).

²²³ Tribunal del Trabajo nº 2 de La Plata, “Milin, Simica y otros c. Sociedad Protectora de Niños”, 15/2/50, LL 58-432.

²²⁴ VALOTTA, Marcelo Ricardo, “Incapacidad de los religiosos profesos”, LL 115-915; y sus citas.

²²⁵ Art. 4º de la ley, y art.1º inc. a) del Decreto 491/95.

denominados en el derecho argentino “religiosos profesos”, “religiosos” o “eclesiásticos regulares” (Decreto 491/95, art.1º inc.h)).

De esta manera, y siguiendo la idea general de la ley 24.483 de dar validez civil al derecho canónico vigente, por medio de ella se recibió la terminología actual del Código de Derecho Canónico, que no conserva explícitamente la distinción entre órdenes y congregaciones, ni entre votos solemnes y simples; y sobre todo, que llama genéricamente “religiosos” a quienes han emitido unos u otros.

Lo que ocurre es que en el proyecto de lo que fue luego la ley 24.483, que fue incluso aprobado de ese modo por el Senado, se incluía un artículo que derogaba la mención a los religiosos en el art.1160 del código civil, junto con otras normas limitativas de su capacidad. Pero ese artículo del proyecto fue luego suprimido en la Cámara de Diputados, porque se aspiraba a una modificación integral del código civil (que finalmente se produjo recién veinte años más tarde) y, por lo tanto, se prefería no hacer reformas parciales²²⁶.

De hecho, el proyecto de código civil unificado con el código de comercio de 1998, suprimía esta incapacidad²²⁷, aunque ello recién ocurrió efectivamente con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de 2014. Y no cabe duda de que la supresión sea correcta, entre otras razones porque la incapacidad era completamente inarmónica con el resto del ordenamiento jurídico. Repárese en el absurdo de que un religioso no pudiera celebrar un contrato de locación pero, al mismo tiempo, su estado no fuera impedimento (en el derecho civil) para contraer matrimonio o para adoptar niños.

Felizmente, en la práctica no se presentaban mayores dificultades, entre otras razones porque la mayor parte de las veces los religiosos cuando contratan no se identifican como tales, y porque quienes contratan con ellos, e incluso los abogados y escribanos que pueden intervenir en estos actos, ignoraban sin ningún rubor estas normas. Lo que no quiere decir que, de buena o de mala fe, no hubiera podido en algún caso hacerse algún planteo de nulidad que provocase un dolor de cabeza.

Ante un planteo tal, hay que afirmar sin duda que la norma del art.1160, en tanto limitaba excesiva e injustificadamente la capacidad jurídica de un grupo de personas exclusivamente por su condición religiosa,

²²⁶ Cfr. NAVARRO FLORIA, Juan G. y HEREDIA, Carlos, “Régimen Jurídico de los Religiosos y de los Institutos de Vida Consagrada”, Buenos Aires, EDUCA, 1997, P.40.

²²⁷ Del mismo modo, el código civil aprobado por ley 24.032 del 27/9/91, y vetado (por otras razones) por Decreto 2719/91, suprimía del art.1160 la incapacidad de los religiosos.

había devenido inconstitucional, según lo ha afirmado desde hace tiempo parte de la doctrina civilista²²⁸; especialmente a la luz de las normas con jerarquía constitucional que tutelan ampliamente la libertad religiosa. En efecto, su aplicación concreta supondría una discriminación por razón religiosa, prohibida por múltiples normas de jerarquía constitucional e infraconstitucional posteriores al código civil, pero que deben prevalecer.

La cuestión quedó resuelta con la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial en 2014, en el que no aparece esta incapacidad para los religiosos, ni nada similar.

5.1.2. Otras incapacidades civiles específicas de los religiosos

Además de la norma genérica del artículo 1160, el código civil de Vélez preveía otras incapacidades de derecho específicas para los religiosos.

Así, decía en su artículo 990 que

“no pueden ser testigos en los instrumentos públicos... los religiosos”.

Por lo tanto religiosos y religiosas no podían actuar como testigos en una escritura pública, ni en un acta de matrimonio o de nacimiento, por ejemplo.

Nada impedía en cambio, y no debe haber confusión en esto, que un religioso o religiosa fuera llamado como testigo en juicio. En este caso, el religioso debe concurrir a los tribunales, aunque sea sacerdote y salvo las limitaciones que examinaremos en el capítulo respectivo en relación al deber de comparecer, y a la tutela del secreto religioso y de confesión en su caso.

El artículo 398 del código civil establecía por su parte una prohibición para ejercer la tutela.

Todas estas restricciones desaparecieron en el Código Civil y Comercial de 2014.

La jurisprudencia resolvió que la condición de religioso o religiosa, y las restricciones civiles o canónicas a la capacidad de disponer o administrar bienes, no impedían que contra ellos corriese la prescripción y, por lo tanto, que los bienes que se hallen a nombre de un religioso puedan ser

²²⁸ SPOTA, Alberto, op. cit., # 283, con cita coincidente de BIBILONI.

adquiridos por terceras personas mediante prescripción adquisitiva; por lo que será carga del religioso tomar los recaudos necesarios para evitarlo²²⁹.

5.1.3. Ejercicio del comercio

Una incapacidad de alcance más general –y ésta sí, justificada–, es la que estaba presente en el antiguo Código de Comercio (art.22), que decía:

“Están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de estado: 1) Las corporaciones eclesiásticas; 2) Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical”.

Va de suyo que la limitación no estaba puesta en función de la vestimenta sino del estado, por lo que la norma debe leerse: “los clérigos de cualquier orden mientras conserven ese estado”. El artículo, como es evidente, no se refería literalmente a la totalidad de los religiosos, ni tampoco a la totalidad de los clérigos, porque:

a) no incluía a todos los clérigos, sino solamente a los que integrasen una “orden”. Por lo tanto, la incapacidad o prohibición no afectaba a los sacerdotes del clero secular (ni mucho menos en general a los ministros religiosos de cualquier credo, o a los ministros católicos que no fueran clérigos).

a) de entre los religiosos católicos, solamente afectaba a (algunos) religiosos varones. Probablemente por estar redactado en un tiempo donde no era frecuente que las mujeres ejercieran el comercio por sí solas, no comprendía a las religiosas mujeres;

b) tampoco incluía a todos “los religiosos”, sino solamente a “los clérigos de cualquier orden”, sin incluir a los religiosos varones que no hubieran recibido órdenes sagradas; y

c) en este caso sí se mencionaba explícitamente la palabra “orden” (religiosa), lo que en principio excluía a los clérigos religiosos que perteneciesen a otro tipo de instituto de vida consagrada (congregaciones, sociedades de vida apostólica, etcétera).

²²⁹ CNCiv, sala H, “Chelotti c. Ezquiaga y Laclau”, 15/03/2010, JA 2010-III, 63.

No obstante, es también claro que la “incompatibilidad de estado” a que se refería la norma en su encabezado y como fundamento, podía predicarse respecto de cualquier religioso, sin importar su sexo ni el tipo de instituto al que perteneciese.

De hecho, así resulta del derecho canónico. Éste, en efecto, en virtud del c.672, extiende a todos los clérigos seculares y a todos los religiosos (y no solamente a quienes son clérigos), las siguientes prohibiciones:

“sin licencia de su ordinario, no aceptarán la administración de bienes pertenecientes a laicos u oficios seculares que lleven consigo la carga de rendir cuentas; se les prohíbe salir fiadores, incluso con sus propios bienes, sin haber consultado al ordinario propio; igualmente, se abstendrán de firmar letras de cambio, en las que se asume la obligación de pagar una cantidad de dinero sin concretar la causa” (c.285, § 4)²³⁰.

Asimismo,

“sin licencia de la legítima autoridad eclesiástica, se prohíbe [...] ejercer la negociación o el comercio, tanto personalmente como por medio de otros, sea en provecho propio o de terceros” (c.286).

Se trata, por supuesto, del ejercicio habitual del comercio, y no de actos aislados.

Para que quede claro: las prohibiciones canónicas recién indicadas, rigen para los religiosos y religiosas, y también para los clérigos no religiosos o seculares, a quienes se refieren los cánones 285 y 286 citados, por ser algo que claramente no conviene al estado clerical²³¹.

Por lo tanto, lo que decía la ley del Estado no era más que una ratificación o reflejo de lo que ya dispone la ley canónica.

En cuanto al alcance de la prohibición, la doctrina considera que no se trataba estrictamente de una “incapacidad” para ejercer el comercio, sino de una restricción o prohibición. La consecuencia de ese alcance limitado era que, según la misma doctrina, la violación de la prohibición no implicaba la nulidad de los actos (aunque la interpretación contraria podría derivarse del art. 18 del viejo código civil). Es más, si un clérigo regular hubiera

²³⁰ El c.672 precisa que “en los institutos laicales de derecho pontificio, la licencia de la que trata el c.285 § 4, puede concederla el propio superior mayor”.

²³¹ BUSSO, Ariel, “La fidelidad del apóstol”, Buenos Aires, EDUCA, 2004, t.II, p.188.

ejercido de modo habitual el comercio, habría adquirido la calidad de comerciante²³².

La incapacidad (o prohibición) no abarcaba la prohibición de prestar dinero a interés, salvo que se hiciera con habitualidad (art.23, código de comercio); y sin perjuicio de que no parece ser una actividad propia de clérigos ni de religiosos.

Los religiosos a título individual podían ser accionistas de compañías mercantiles (art.23 código de comercio), por lo que podían poseer acciones de sociedades anónimas, o de sociedades en comandita por acciones. En cambio, por la extensión de la responsabilidad propia del tipo de sociedad, no hubieran podido ser socios de sociedades de capital e industria, en comandita simple, y colectivas.

Pero aunque pudieran ser accionistas, no podían ser directores ni gerentes de sociedades anónimas, puesto que el art.264 de la ley 19.550 lo impide a *“quienes no pueden ejercer el comercio”* (inc.1º)²³³.

La incapacidad para ejercer el comercio, tenía como consecuencia que los religiosos tuvieran también prohibido el ejercicio de diversas actividades y profesiones, muy variadas, y en las que claramente la inhabilidad carecía de cualquier justificativo razonable. Pero resultaba de leyes que impiden ciertas actividades a quienes no pueden ejercer el comercio. Estas restricciones aparecen tanto en leyes nacionales como locales.

Así por ejemplo, los religiosos no podían ser martilleros públicos (art.2, ley 20.266). En la **Ciudad de Buenos Aires**, no podían ser corredores inmobiliarios (art.7, ley 2340)²³⁴, en la provincia de **Buenos Aires** no podían ser agentes de propaganda médica²³⁵, y en **Salta** no podían ser martilleros, corredores públicos o corredores inmobiliarios²³⁶, lo mismo que en **Misiones**²³⁷.

²³² ANAYA, Jaime, “Código de Comercio y Leyes Complementarias”, vol.I, p.397; HALPERIN – BUTTY, “Curso de Derecho Comercial”, vol.I, p.202; ROUILLÓN, Adolfo, “Código de Comercio comentado y anotado”, vol.I, art.22, p.54.

²³³ Por ende tampoco podían ser directores ni gerentes de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (art.310 ley 19.550).

²³⁴ Sancionada el 17 de mayo de 2007 (BOCBA 25.6.07).

²³⁵ Ley 10851, art.5º.

²³⁶ Ley 7629 (BO nº 18440, ADLA LXX-E-4748), ART.63 inc.a).

²³⁷ Ley I- nº 152 (ADLA LXX-E-4633), art.5 inc.a).

En el orden nacional no podían ser promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores ni gerentes de entidades financieras (art.10, ley 21.526), ni tampoco promotores o asesores de seguros (art.8, ley 22.400). Tampoco podían ser prestadores de Sistemas de Tiempo Compartido (art.7, ley 26.356).

No había en cambio obstáculo para que fueran miembros, e incluso consejeros, de sociedades cooperativas (arts.17 y 64, ley 20.337).

La ley 26.053²³⁸, modificó el art.45 de la ley de Radiodifusión (22.285) permitiendo que fueran adjudicatarios de licencias de radio y televisión no solamente personas físicas sociedades anónimas, sino cualquier persona jurídica regularmente constituida en el país. Pero tanto para las personas físicas a título individual, como para *“los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas no comerciales o sin fines de lucro”*, y para estas mismas personas jurídicas (entre las que se contaba sin duda la Iglesia, y los institutos de vida consagrada), exigía *“no estar incapacitado o inhabilitado para contratar o ejercer el comercio”* (inc. d).

Por lo tanto, ni los institutos de vida consagrada, ni los religiosos a título personal, ni cualquier persona jurídica no comercial que tuviera religiosos en sus órganos de administración o control, podían ser adjudicatarios de licencias de radio o T.V.²³⁹. Ello no obstante, y como prueba de la confusión que reinaba en este tema, el Poder Ejecutivo había otorgado licencias de radiodifusión a institutos de vida consagrada, cuya dirección estaba naturalmente a cargo de religiosos que tenían prohibido ejercer el comercio²⁴⁰.

El Código Civil y Comercial de 2014, no solamente no tiene ninguna norma equivalente al artículo 22 del Código de Comercio, sino que incluso ha suprimido el estatuto mismo de los comerciantes, que parecen haber desaparecido como categoría jurídica. Por lo tanto, todo lo dicho hasta aquí

²³⁸ BO15/9/2005.

²³⁹ De este modo, los religiosos en la Argentina estaban en la misma criticada situación que los ministros de culto en general en México, que todavía hoy tienen prohibido *“poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier otro tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”*, salvo publicaciones impresas de carácter religioso (art.16, Ley de asociaciones religiosas y culto público).

²⁴⁰ A título de ejemplo, Decreto 931/2002 (BO 5/6/02).

respecto de las limitaciones que afectaban a los religiosos para diversas actividades (como consecuencia de su incapacidad para ser comerciantes) también ha perdido vigencia para el futuro.

Salvo, naturalmente, las restricciones que les impone el Derecho Canónico, que especialmente en lo referido al régimen jurídico de los religiosos ha sido recibido por el Derecho argentino según dispone la ley 24.483.

5.1.4 Incapacidades en el derecho sucesorio

Un tema largamente estudiado y considerado por el Derecho, es el referido a la influencia indebida que pueden ejercer los ministros de culto sobre los fieles a la hora de disponer estos de sus bienes mediante testamento (aunque la situación podría configurarse también en la realización de actos entre vivos)²⁴¹. Un modo práctico de despejar este problema, es la prohibición a los ministros de culto de ser beneficiarios directos o indirectos de los testamentos de fieles a los que presten asistencia.

En ese sentido, el art.3739 del código civil argentino de 1871, decía:

“Son incapaces de suceder y de recibir legados: los confesores del testador en su última enfermedad; los parientes de ellos dentro del cuarto grado, si no fuesen parientes del testador; las iglesias en que estuviesen empleados, con excepción de la iglesia parroquial del testador, y las comunidades [se entiende: comunidades religiosas] a que ellos perteneciesen”.

Explicaba el codificador Vélez Sarsfield en la nota a ese artículo, que la fuente de la disposición es el art.909 del código francés, y la Novísima Recopilación, lo que explica que la misma norma aparezca también en otros códigos latinoamericanos en términos muy similares²⁴², lo mismo que en el Código Civil español (art.752)²⁴³.

²⁴¹ Para la consideración de la cuestión en la jurisprudencia inglesa y australiana, con perfiles propios, ver HEDLUND, Richard, “Undue influence and the Religious Cases that Shaped the Law, OJLR, 2016, 5, pp.298-318.

²⁴² Ver SALINAS ARANEDA, Carlos, “El influjo del Derecho Canónico en el Código civil de la República de Chile”, Valparaíso, Ediciones Universitarias, 2006, pp.163 y ss.

²⁴³ Sobre los antecedentes, exégesis y aplicación de esta norma, ver TIRAPU MARTÍNEZ, Daniel y VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José M^a, “La incapacidad sucesoria del confesor en el artículo 752 del Código Civil”, Comares, Granada, 1996. Explican que la norma se hallaba ya en la Nueva

Es importante destacar que en virtud del art.3740 del código hoy derogado,

“Tiene la misma incapacidad el ministro protestante que asiste al testador en su última enfermedad.”.

Para justificarlo, Vélez transcribió en sus notas una opinión doctrinaria: “¿Qué importa que él no confiese? Le da socorros espirituales y dirige su conciencia; esto creemos que es lo bastante”.

El fundamento de la incompatibilidad, o incapacidad, es la protección de “la libertad psicológica de quienes adopten disposiciones de última voluntad”. Si fuera así, era razonable extenderla también a ministros de otras confesiones religiosas, ya que la limitación a “confesores” (católicos) y “ministros protestantes” encerraba una discriminación hoy inaceptable. Pero el casuismo del legislador, “ha consagrado una norma cuya apariencia dificulta enormemente su extensión a ministros de religiones que no sean precisamente las cristianas”²⁴⁴.

Según una interpretación, la aplicación extensiva a ministros de otras religiones era posible, considerando que la palabra “confesores” ha sido utilizada impropia, ya que

“no es la administración del sacramento de la confesión auricular, precisamente, lo que establece relaciones jerarquizantes, difíciles de crear en una sola audiencia, como tampoco la atención prestada a una dolencia accidental da, al respectivo profesional, el carácter de médico de la última enfermedad”. Así, “no habría confesor, con el carácter determinante de incompatibilidad testamentaria, si no hubiese llegado a crearse en poco o en mucho tiempo una vinculación de cierto grado: el suficiente para que el

Recopilación (Tomo III de Autos Acordados, Lib.V, Tít.X, Auto III: “No valgan las mandas hechas en la última enfermedad a los confesores, ni a sus deudos, Iglesias ni Religiones”), y fue ratificada por otras disposiciones en años posteriores y pasó a la Novísima. En términos similares aparece en el proyecto de García Goyena (art.613), que fue tenido a la vista por Vélez. El art.752 del Código Civil español, dice: “No producirán efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su última enfermedad a favor del sacerdote que en ella le hubiese confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, comunidad o instituto”. Sobre las aplicaciones recientes de esa norma, ver TIRAPU MARTÍNEZ, Daniel, “La incapacidad sucesoria del confesor; artículo 752 del código civil. Dos sentencias del Tribunal Supremo español relacionadas”, en RGDCCE, 42 (2016).

²⁴⁴ RÉBORA, Juan Carlos, “Derecho de las Sucesiones”, 2ª edición, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, tº.I, § 115.

ministro se establezca en la posición que corresponde a un director espiritual. Se alude, pues, al ministro que ha dirigido la conciencia del enfermo y lo ha preparado para la muerte”.

Por eso, la incapacidad “no se extendería al sacerdote que solamente hubiera dado el viático o la extremaunción”, pero sí a quien hubiera cumplido la función de “exhortar, instruir y consolar al enfermo”, que “puede ser prestada por otro sacerdote, y aún por el ministro de un culto donde la confesión no se admite”²⁴⁵.

Pero esa interpretación extensiva era rechazada por otros autores, aplicando la regla de que las prohibiciones y las excepciones deben ser de interpretación estricta²⁴⁶. Esta parecía ser, *de lege lata*, la interpretación correcta, que sin embargo resultaba consagratória de una desigualdad ante la ley fundada en motivos religiosos, lo que resultaba odioso.

En cambio, *de lege ferendae* y para el caso de subsistir la prohibición, parecía necesario hacerla extensiva al “ministro religioso” de cualquier religión, y no sólo al católico y al protestante²⁴⁷, tal como lo propusieron varios proyectos de ley²⁴⁸.

Era discutido también el concepto de “última enfermedad”: en principio debería considerarse tal la enfermedad que llevó a la muerte a la persona, y que ya existía al momento de hacer el testamento y de recibir la asistencia espiritual del ministro de culto²⁴⁹.

Si la enfermedad era una enfermedad crónica arrastrada por muchos años, y en algún momento de su decurso la persona recibió auxilio

²⁴⁵ RÉBORA, op.y loc.cit.; BORDA, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil – Sucesiones”, Buenos Aires, La Ley, 2007, tº.II, § 1120. La aplicación de la incapacidad a ministros de otros credos es postulada también por ZANNONI, Eduardo (“Manual de derecho de las sucesiones”, 5ª ed., Astrea, 2010, p.75).

²⁴⁶ MAFFÍA, Jorge, “Manual de Derecho Sucesorio”, tº.II, Buenos Aires, Depalma, 1980, § 546.

²⁴⁷ En el mismo sentido, para Chile, se pronuncia SALINAS ARANEDA (“El influjo...”, cit., p.173. En España, TIRAPU y VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA proponen en cambio la directa supresión de la norma (*op.cit.*, p.117).

²⁴⁸ Entre otros, el Anteproyecto elaborado por el Consejo Asesor de Libertad Religiosa de la Secretaría de Culto en el año 2001, hecho propio por el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa –CALIR–, publicado en <http://www.calir.org.ar/docs/Anteproyecto.de.ley.LR.doc>.

²⁴⁹ Así lo entiende en general la jurisprudencia española: se trata de “la enfermedad de la que uno muere”, y de la confesión habida teniendo en vista esa amenaza, y no la confesión habitual (cfr. TIRAPU y VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *op.cit.*, p.73).

espiritual del ministro religioso, pero el testamento fue previo, o fue muy posterior y no puede estar asociado a tal asistencia, habría que considerar válida la institución hereditaria o el legado²⁵⁰.

El código hablaba impropriamente de la iglesia “en que estuviesen empleados” los confesores, porque la relación del sacerdote con la parroquia o iglesia en la que ejerce el ministerio no es laboral, ni es él un “empleado” en el sentido actual del término. Por eso decimos que la referencia debía ser a “la iglesia en que ejerce el ministerio”.

En relación a las demás personas a las que la norma hacía extensiva la incapacidad, RÉBORA, con cita de GOYENA, señala que la interposición “se presume *juris et de jure*”²⁵¹. Sin embargo, dado que la institución o el legado eran válidos si la “iglesia” era la del propio testador, parece razonable interpretar que si se demuestra una relación tal que justifique la disposición testamentaria independientemente de la confesión sacramental o auxilio espiritual recibido del ministro que en ella sirve; o bien si se demuestra que el legado o la herencia eran efectivamente para la iglesia y no para el ministro, pareciera razonable salvar la manda.

Si el confesor había sido además designado albacea, podía ejercer el cargo, aunque el legado fuese ineficaz (art.3848).

Según una posición doctrinaria, no se trataba propiamente de una incapacidad, sino de una “incompatibilidad”, porque

“quien esté afectado de incompatibilidad en determinado testamento, podrá no estarlo en cuanto al testamento otorgado por otra persona, y tal vez no lo estaría en cuanto al testamento otorgado por la misma persona, cambiadas las circunstancias determinantes de la incompatibilidad”²⁵².

En el proyecto de código civil y comercial unificado de 1998, que fue fuente principal del Código aprobado en 2014, desaparecían directamente las incapacidades para suceder del confesor o del ministro religioso que asiste al testador en su última enfermedad, y sus conexas²⁵³.

²⁵⁰ Según BORDA, sin embargo, es indiferente que el testamento sea anterior o posterior a la confesión, en tanto ambos hechos hayan ocurrido durante la última enfermedad (op.cit., p.191).

²⁵¹ Op.cit., § 118.

²⁵² RÉBORA, Juan Carlos, op.cit., § 110.

²⁵³ En cambio, el art.2430, al regular los “casos especiales” de institución y sustitución de herederos y legatarios, establecía que “la institución a favor del alma del testador o de otras

El Código Civil y Comercial finalmente aprobado, y hoy vigente, ha mantenido en rasgos generales la incapacidad sucesoria del confesor, extendiéndola a los ministros de culto de todos los credos²⁵⁴, aunque la redacción dada a la norma no ha sido feliz²⁵⁵.

Dice el actual artículo 2482:

"No pueden suceder por testamento: ... c. los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad".

Los cambios son evidentes.

Ya no se habla de "confesor" y de "ministro protestante", sino genéricamente de "ministros de cualquier culto". Es éste uno de los casos más evidentes de sustitución de una referencia a un ministro religioso de una confesión determinada, por una denominación genérica que abarque a los de cualquier confesión. De esta manera, el legislador ha optado por mantener la inhabilidad sucesoria, pero haciéndola extensiva a todas las religiones y, por lo tanto, evitando la discriminación odiosa que contenía el Código derogado y que había sido objetada por esa razón por la doctrina.

personas se entiende hecha a la autoridad superior de la religión a la cual pertenecía el testador, con cargo de aplicar los bienes a sufragios y fines de asistencia social", precisando así la norma del art.3722 del Código histórico. Los Fundamentos de ese proyecto (nº 320) explicaban que "En un sólo artículo se incluye la interpretación legal del legado a favor de asociación religiosa o de asistencia social carente de personalidad jurídica, la institución a los pobres, la institución a favor del alma del testador". Es el mencionado art.2430. Sin embargo, su texto no era tan explícito como sugieren los redactores, ya que solamente decía en lo pertinente que "la institución a favor de simples asociaciones se entiende hecha a favor de las autoridades superiores respectivas del lugar del último domicilio del testador con cargo de aplicar los bienes a los fines indicados por el causante". Adviértase que en el articulado dedicado a las simples asociaciones (arts.175 a 182), igual que en referido a las asociaciones civiles (arts. 165 a 174) no se menciona nunca a las "asociaciones religiosas".

²⁵⁴ Algo semejante a lo ocurrido en Cataluña. Frente al ya mencionado art.752 del Código Civil Español, el 147 de la Ley 40/1991; y luego el ahora vigente art.412-5 de la ley 10/2008 que rige el proceso sucesorio, extendieron la incapacidad a los ministros de culto en general. La última norma citada, ahora vigente, dice: "1. Son inhábiles para suceder: [...] c) El religioso que ha asistido al testador durante su última enfermedad, así como el orden, la comunidad, la institución o la confesión religiosa a que aquel pertenece".

²⁵⁵ La subsistencia de la incapacidad del confesor ha merecido críticas de la doctrina, argumentando que es una restricción inconstitucional al derecho de propiedad, pero también preguntándose por qué la misma incapacidad no se extiende al psicólogo o psiquiatra que trata al testador y que puede ejercer tanta o mayor influencia que el confesor (CHIAPPINI, Julio, "Ocho posibles defectos del Código Civil y Comercial", ED 2/3/2017).

Otra novedad llamativa es la referencia a los "*líderes o conductores espirituales*", que resulta bastante original y sorprendente, además de imprecisa. No se ha dado ninguna explicación para esta expresión, que apareció en la última redacción del texto. Pero hay que decir que al menos es mejor que la contenida en el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, que hablaba de "conductores de sectas". La corrección fue hecha en el Congreso, por alguna mano anónima, dado que no hubo debate al respecto ni en la comisión bicameral que examinó el proyecto de Código, ni en el recinto²⁵⁶.

La norma mantiene el concepto de "última enfermedad", por lo que siguen siendo válidas las consideraciones hechas sobre él en relación al texto original.

En cambio, ha desaparecido la extensión de la incapacidad a los parientes del confesor (hoy diríamos, del ministro de culto), a su parroquia (hoy habría que decir, a su comunidad religiosa) o comunidad.

También ha desaparecido la referencia a la confesión. Esto es lógica consecuencia de la ampliación de los sujetos concernidos, porque la confesión sacramental es propia de la Iglesia Católica. Sin embargo, la desaparición del concepto hace presente otro problema, porque podría implicar una extensión imprevista de la incapacidad. En efecto, si ya no se exige que haya existido confesión en sentido estricto, quedaría afectado por ella el ministro de culto católico que haya prestado asistencia espiritual al causante, aún sin haberlo confesado (brindándole la unción de los enfermos, o simplemente consejo y acompañamiento).

²⁵⁶ Resulta necesario aclarar que el proceso de aprobación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fue sumamente criticable. El anteproyecto de Código fue encomendado por el Poder Ejecutivo a una comisión redactora integrada por dos jueces de la Corte Suprema (los Dres. Lorenzetti y Highton) y una ex jueza (la Dra. Kemelmajer de Carlucci). Ese anteproyecto recibió unas pocas pero importantes modificaciones por parte del Poder Ejecutivo dando así lugar al Proyecto que la Presidente Fernández de Kirchner envió al Congreso. En el Congreso se siguió un procedimiento anómalo porque fue creada una comisión especial, bicameral (integrada por senadores y diputados, con amplia mayoría del entonces partido del gobierno) llamada a dictaminar en tiempos apremiantes. La comisión recibió una gran cantidad de críticas y sugerencias, pero nunca se reunió ni las discutió, pública o privadamente. La mayoría gubernamental impuso un dictamen que fue presentado sin ninguna explicación, donde había una serie de cambios al proyecto (entre ellos, el que aquí analizamos). Ese dictamen fue aprobado "a libro cerrado" y sin admitir modificaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por la mayoría que entonces tenía el partido gobernante en ambas cámaras. En conclusión, hay muchas normas que carecen de autor conocido y de explicación.

La incapacidad sucesoria del confesor en la última enfermedad, con matices, es habitual en el derecho comparado.

En México,

*"los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a las que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado"*²⁵⁷.

En Chile,

"por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno, ni aún como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la misma enfermedad, o en los dos años anteriores al testamento; ni la orden, convento, o cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive" (art.965 del código civil), pero exceptuando *"a la iglesia parroquial del testador"* y *"a la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían heredado ab-intestato, si no hubiese habido testamento"*.

La doctrina no extiende la incapacidad a ministros de otros credos distintos del católico²⁵⁸; y la ley aclara que *"no obstará la calidad de eclesiástico secular, con tal que no se halle en el caso del artículo 965"*, para ser albacea (art.1312). En ese país se han presentado varios casos de aplicación de la norma, con diversa suerte.

En Colombia,

"Por testamento otorgado en la última enfermedad no puede recibir herencia o legado alguno, ni aún como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiese confesado al testador en la

²⁵⁷ Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, art.15. Cabe recordar que la constitución de 1917 (art.130) decía que *"Los ministros de cultos tienen incapacidad legal para ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado"*. La norma fue derogada en 1992.

²⁵⁸ SALINAS ARANEDA, Carlos, "Lecciones de Derecho eclesiástico del Estado de Chile", Universidad de Valparaíso, 2004, p.319; y del mismo autor, "La incapacidad de herencia y legado del último confesor: Desigualdad entre ministros de culto en el Derecho civil chileno contemporáneo", en Varios Autores, "Estudios de Derecho Civil VIII", Santiago de Chile, Thomson Reuters, 2013, p. 153 ss.

*misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento; ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos, por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado. Tal incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre la porción de bienes al que dicho eclesiástico, o sus deudos habría correspondido en sucesión intestada” (art.1022 del Código Civil)*²⁵⁹.

El confesor habitual y el que lo es en la última enfermedad no pueden ser tampoco testigos en el testamento (art.1068).

En **Uruguay**, no obstante el tradicional laicismo del país, el Código Civil ha previsto que

“El eclesiástico que ha confesado al testador en su última enfermedad, no puede recibir cosa alguna a virtud del testamento que haya hecho durante esa enfermedad. Esta prohibición alcanza a los parientes o afines del confesor, dentro del cuarto grado, a las personas que vivan en compañía del dicho confesor y a su iglesia, cabildo, comunidad o instituto. Exceptúase de las disposiciones precedentes el caso en que el confesor sea pariente o afín del testador dentro del cuarto grado” (art.839 del código civil).

La doctrina extiende la aplicación de la norma a los ministros de otras religiones (aunque no sean “confesores”) en similares condiciones²⁶⁰.

En **Bolivia**, el Art.1122 del Código Civil declara “incapaces para recibir por testamento”, entre otros a

“El médico o profesional y el ministro del culto que asistieron al testador durante su última enfermedad, si entonces hizo su testamento, y en iguales circunstancias la iglesia o comunidad a la que dicho ministro pertenezca, y los que vivan en su compañía; el abogado que lo asistió en su otorgamiento, y los parientes indicados en el artículo anterior, excepto si son herederos legales” (inciso 5).

²⁵⁹ Se discutió judicialmente la constitucionalidad (“exequibilidad”) de la norma, por considerársela discriminatoria contra los sacerdotes católicos, pero la Corte resolvió a favor de su vigencia (sentencia C-266 de 1994, ver PRIETO, Vicente, op.cit., p.147) haciéndola extensiva a quien ejerza la dirección espiritual del testador durante su última enfermedad, “cualquiera sea su credo”.

²⁶⁰ ASIAÍN PEREIRA, Carmen, “Chiesa e Stato in Uruguay”, en QDPE, 2007-1, p.101.

En **Guatemala**, son incapaces para suceder por testamento *"los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador"* (art.926 del Código Civil).

En **España**, según ya se ha visto, el art.752 del Código Civil establece que

"No producirán efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su última enfermedad a favor del sacerdote que en ella le hubiera confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, comunidad o instituto".

Volviendo a la Argentina, y en lo que se refiere a los religiosos, hay que recordar que la "muerte civil" provocaba la apertura de la sucesión del religioso profeso y la entrega de sus bienes a sus herederos; y también la incapacidad del religioso para ser heredero él mismo en el futuro. Con sensato criterio, Vélez explicó que suprimida la muerte civil, "si una sucesión es deferida a un religioso o religiosa, pueden estos hacer una abdicación voluntaria de ella con más conocimiento que las que hacen de las sucesiones futuras al profesar"²⁶¹. Es decir que nada impedía a un religioso o religiosa heredar, ni tampoco renunciar a la herencia a la que sea llamado, pero recién en ese momento.

Tampoco, como señalaba Vélez en la nota al art.3733, había cosa alguna que impidiera a los religiosos hacer testamento, por cualquiera de las formas admitidas por la ley civil, y en cualquier momento, incluso después de la profesión religiosa.

Conviene recordar que el derecho canónico pide que los religiosos

"antes al menos de la profesión perpetua, hagan testamento que sea válido también según el derecho civil" (canon 668, #1).

²⁶¹ Nota al art.103. En la Nota al artículo 3733, recordaba que "desde que por este Código las profesiones monásticas no causan la muerte civil (art.103) pueden adquirir por testamento los religiosos de las órdenes reconocidas", lo que considera un regreso a la legislación romana y de la Iglesia. Recuerda que "hasta el siglo IV los monjes tuvieron facultad de testar; pero Justiniano modificó esta capacidad, porque entrando ellos a un convento debían transmitir todos sus bienes y hacer voto de pobreza".

La experiencia indica que esta norma muchas veces queda incumplida, o se cumple mal (que es lo mismo), porque se hace sin respetar las formas que la ley civil exige, que pueden ser muy simples²⁶², pero son indispensables para la validez.

Es posible que el testamento se haga a favor del instituto al que pertenece el religioso o religiosa (es más: el art.3739 del derogado código civil expresamente admitía el testamento a favor de *“las comunidades a que ellos [los testadores] perteneciesen”*). Pero tampoco hay ni puede haber ninguna obligación de que así sea: el beneficiario del testamento puede ser cualquier otra persona. Para el derecho civil, testar es un acto personalísimo, para el que se adquiere capacidad a los 18 años. Ese carácter personalísimo, que quita valor a cualquier intervención de un tercero para complementar la voluntad del propio testador, plantea dificultades para la aplicación estricta del canon 668, # 2, que exige licencia del Superior competente para que el religioso pueda modificar el testamento previamente otorgado.

En el Código Civil y Comercial ahora vigente, no hay limitación alguna para la capacidad de los religiosos de testar, o de recibir por testamento (salvo lo que aplique al religioso que asista al testador en su última enfermedad).

5.1.5 Otras incapacidades civiles

Había en el código civil histórico de la Argentina, otras incapacidades de derecho, que afectaban a los ministros de culto.

Así, el art.2011 del código civil establecía una incapacidad de derecho para ser fiadores a

*“Los que tengan órdenes sagradas cualquiera que sea su jerarquía, a no ser por sus iglesias, por otros clérigos, o por personas desvalidas”*²⁶³.

Esta incapacidad afectaba a los sacerdotes católicos, tanto religiosos como del clero secular²⁶⁴, lo que incluye obviamente a los

²⁶² La forma más sencilla, que es la del testamento ológrafo, sólo requiere que sea “escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador”, sin necesidad de escribano, ni de testigos, ni de papeles especiales, ni de otras solemnidades. Pero las indicadas son indispensables. Por eso no tienen validez los testamentos escritos total o parcialmente a máquina.

²⁶³ Una incapacidad similar establecía el Código Civil de Chile, en su artículo 2342, suprimida en el año 1943.

obispos, y también a los diáconos, incluso a los diáconos permanentes casados, que “tienen órdenes sagradas”.

La prohibición coincide en general con la del canon 285 § 4, que prohíbe a los clérigos *“salir fiadores, incluso con sus propios bienes, sin haber consultado al Ordinario propio”*, aplicable también a los religiosos (canon 672)²⁶⁵. Sin embargo, como suele ocurrir, la prohibición canónica es dispensable por el Ordinario, mientras que la civil era absoluta. Además, la prohibición canónica no es aplicable a los diáconos permanentes (canon 288), y la civil si lo era.

Por ser una norma limitativa de derechos es de interpretación restrictiva, y no debería extenderse a ministros de otras confesiones. Por ser una incapacidad de derecho, su violación da lugar a una nulidad absoluta²⁶⁶.

Literalmente la incapacidad no incluía a los religiosos no sacerdotes, pero ellos estaban incursos en la incapacidad genérica del art.1160 referida a todos los contratos, incluso la fianza, que lo es.

Por su parte, el art.1442 del código civil, prohibía la cesión de créditos *“a los administradores de corporaciones religiosas, de créditos contra estos establecimientos”*. Por tanto, en la medida en que algún ministro de culto fuera administrador de una asociación religiosa, estaba impedido de ser cesionario de créditos contra ella. La incapacidad no era en tanto ministro de culto, sino en tanto administrador, y afectaba igualmente a los laicos que cumplan esas funciones. Si esa cesión de créditos se hubiera hecho de todas maneras, el contrato sería nulo, de nulidad absoluta²⁶⁷.

²⁶⁴ Guillermo BORDA opina, sin dar fundamento, que sólo los religiosos profesos estaban incursos en la incapacidad, opinión que no es compartida por Alejandro BORDA al actualizar el excelente tratado de derecho civil de su padre (Cfr. BORDA, op.cit., § 1843 y nota 3252 del actualizador en la 9ª edición).

²⁶⁵ El Código de Cánones de las Iglesias Orientales (c.385 § 3) contiene una prohibición idéntica para los clérigos de rito oriental.

²⁶⁶ Haciendo aplicación de la norma, ver CS Santa Fe, 22 de Junio de 2005, “Cia. Argentina Financiera S. A. C/ Rosa Silvio” (Exp.431/2004), Tº208, fº56. En el caso se invalidó un aval cambiario prestado por un sacerdote, equiparándolo correctamente a una fianza. El tribunal consideró no demostrada la excepción prevista en la norma (fianza dada a favor de “personas desvalidas”), señalando que “desvalido no es la persona en meras dificultades, sino alguien en situación muchísimo peor: desamparado, privado de ayuda y socorro”.

²⁶⁷ SPOTA, Alberto, “Instituciones de Derecho Civil – Contratos”, Buenos Aires, Depalma, 1979, tº.IV, § 901.

La ley hablaba de créditos “contra” los establecimientos o corporaciones religiosos, pero la doctrina ha interpretado que la incapacidad o prohibición se refería también a la cesión de créditos “a favor” de tales instituciones, lo que es de toda lógica²⁶⁸.

Las incapacidades aquí analizadas, desaparecieron en el Código Civil y Comercial de 2014. Por tanto, lo dicho sólo tiene relevancia para casos ocurridos antes de la aprobación de éste.

5.2 Ministros de culto y derecho de familia

¿De qué manera la condición de ministro de culto puede incidir en las relaciones de familia? Examinaremos el tema en relación a las principales instituciones de esta rama del Derecho, a saber: el matrimonio, la filiación y relación paterno filial, la adopción en particular, y la tutela y curatela de menores e incapaces.

5.2.1 Matrimonio de los ministros de culto

En el código civil de Vélez Sarsfield, que mantuvo en esta materia lo que disponía el derecho patrio²⁶⁹, y antes el derecho español y de Indias, el orden sagrado era impedimento para el matrimonio, dado que regían como impedimentos los establecidos por el derecho canónico (art.168). Consecuentemente, los hijos nacidos de quienes estaban sujetos a tal impedimento formaban la categoría de “hijos sacrílegos”. Ciertamente, los casos considerados eran únicamente los de los sacerdotes o religiosos católicos.

De todas maneras, esas normas fueron suprimidas por el art.112 de la ley 2393, del año 1888, que impuso el matrimonio civil obligatorio.

Desde entonces y hasta ahora, la condición de ministro de culto no constituye impedimento alguno, en sí misma, para el matrimonio civil (sin perjuicio, naturalmente, de poder serlo para el matrimonio religioso según las normas de cada confesión, como el canon 1087, o el 1088 para los religiosos católicos).

²⁶⁸ SPOTA, op.cit., tº. II, § 290.

²⁶⁹ Así se conoce a la legislación dictada a partir de la emancipación de España hasta el dictado de la Constitución de 1853/60 y la codificación que siguió a ella.

Sin embargo, cabe hacer una salvedad: el matrimonio (civil) de un ministro de culto puede resultar nulo si ha ocultado esa condición al otro contrayente (no necesariamente “la” contrayente, porque ministro de culto puede ser también una mujer en muchas confesiones religiosas; y porque en la Argentina no se exige la diversidad de sexos para contraer matrimonio civil). Esto ocurrirá cuando esa calidad pueda ser considerada una cualidad esencial, tal que habilite la declaración de nulidad del matrimonio por error en la persona.

El art. 409 inc.b) del Código Civil y Comercial²⁷⁰ establece que vicia el consentimiento, entre otros,

“el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega”

El matrimonio así viciado es nulo de nulidad relativa (art.425). La norma aclara que

“La nulidad sólo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio de error.... La nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de treinta días después de haber conocido el error.... El plazo para interponer la demanda es de un año desde que cesa la cohabitación.

El error debe ser excusable, o haber sido causado por dolo de la contraparte.

La doctrina tanto nacional como extranjera, ponen habitualmente como ejemplo de error sobre una cualidad esencial, el desconocimiento de la calidad de ministro de culto (generalmente, se alude a la condición de sacerdote católico) del contrayente, particularmente si la otra parte tiene una vida religiosa intensa y una formación y educación religiosas importantes que la tornen sensible a esa condición (todo lo cual hace a las “condiciones personales y circunstancias” que la norma exige valorar).

Un fallo judicial ha dicho al respecto, aunque mezclando de modo algo infeliz situaciones que no son equiparables, que

²⁷⁰ Que mantiene el texto del art.175 del Código Civil derogado, texto según ley 23.515, por lo que mantienen plena validez la doctrina y jurisprudencia elaboradas respecto de esa norma.

“negar la anulabilidad del matrimonio en caso de error sobre las cualidades esenciales de la persona, sin el cual el matrimonio no se habría ciertamente contraído; negar la anulabilidad del matrimonio cuando, por ejemplo, al tiempo en que fue contraído, la esposa ignoraba que el esposo era un sacerdote renegado o un fraile exclaustro, o un individuo ya tarado por graves conductas penales, o bien ciudadano de un estado que admite la poligamia, o bien cuando el esposo ignoraba que la esposa no era virgen, o pues todavía, que ella estaba encinta, o que era una ramera o una mujer ya condenada por graves penas, significa sacrificar completamente el interés del cónyuge que ha incurrido en error o imponerle una carga insoportable”²⁷¹.

El derecho argentino no contiene ninguna previsión especial en orden al divorcio del matrimonio celebrado por un ministro religioso. La posibilidad de que haya ministros de culto casados existe ciertamente en las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica, incluso en las más cercanas a ella (como las iglesias ortodoxas, o la comunión anglicana), y también en la propia Iglesia Católica (si se considera a los diáconos permanentes, que pueden ser varones casados, y también a los sacerdotes de rito oriental, que admite la ordenación de varones casados, o clérigos anglicanos casados recibidos en la Iglesia Católica).

5.2.2 Filiación y responsabilidad parental

Desde el punto de vista civil, resulta completamente indiferente la calidad de ministro de culto, en orden al ejercicio de los deberes y de los derechos paterno-filiales: si un ministro de culto tiene hijos, tendrá respecto de ellos -en principio- los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona que no revista esa condición²⁷².

²⁷¹ CNCiv, Sala A, 21/10/1982, “L., M. C. c. B., P.”, LL 1983-D, 14, con nota de María Cristina Fernández Abad.

²⁷² En el caso de la Iglesia Católica, donde los clérigos están obligados al celibato, la paternidad física constituye una grave perturbación, pero en tanto no vaya asociada a algún delito canónico (pecado contra el sexto mandamiento, concubinato o matrimonio atentado) no es en sí misma un impedimento absoluto para el ministerio, aunque requiera que el clérigo personalmente -no la diócesis o parroquia a la que sirve- asuma las obligaciones correspondientes (cfr. BUSSO, Ariel, “La fidelidad del apóstol”, cit, p.189).

Sin embargo, la ulterior profesión religiosa, sea del padre o del hijo, incide de modo determinante en el ejercicio de la patria potestad. Decía el código civil en el art. 306:

*“La patria potestad se acaba... por profesión de los padres, o de los hijos, con autorización de aquellos, en institutos monásticos”*²⁷³.

La norma tuvo en mira sin duda a las órdenes religiosas católicas, pero no hay razón para no aplicarla al caso de quienes se convierten en monjes de cualquier otra religión.

Ese artículo resultó modificado en 2009 por la ley 26.579, que fijó el acceso a la mayoría de edad a los dieciocho años, suprimiendo en consecuencia la previsión de la profesión religiosa de los hijos como causal de extinción de la patria potestad (pero dejando subsistente la causal para el caso de que quien emitiese profesión religiosa fuese el padre o madre)²⁷⁴.

Teniendo en cuenta que la edad canónica para la profesión temporal en comunidades religiosas católicas es de dieciocho años (c.656 § 1), y para la profesión perpetua de veintiún años y por lo menos tres de profesión temporal (c.658); y que la primera debe estar precedida del noviciado (c.656 § 2) que no puede comenzar en principio antes de los diecisiete años (c. 643, § 1), es comprensible que se haya suprimido de la ley el supuesto de la profesión religiosa del hijo menor, dado que esa calidad se pierde ahora al cumplirse los dieciocho años²⁷⁵.

²⁷³ Con cierta vinculación con esta norma, el art.287 inc.1º del Código Civil, en su versión original, excluía del usufructo de los padres *“los bienes que los hijos adquieran por sus servicios eclesiásticos”*. Pero la norma fue modificada en 1985 por la ley 23.264 eliminando esa referencia.

²⁷⁴ NAVARRO FLORIA, Juan G., “Algunas observaciones a la nueva ley de mayoría de edad”, *DJ*, año XXVI, nº 10, 10/3/10, p.607.

²⁷⁵ Cuando la hipótesis era teóricamente posible -aunque no frecuente- porque la mayoría de edad era a los veintiún años, se operaba una suerte de traslación de la patria potestad de los padres a los superiores religiosos, a quienes quedaba unido por el voto de obediencia, vínculo que de este modo recibía una suerte de reconocimiento por parte de la ley civil, aunque no había norma expresa en ese sentido. Pero como tampoco la profesión religiosa era un supuesto de emancipación civil (a diferencia del matrimonio), es forzoso reconocer que estábamos ante un supuesto implícito de reconocimiento de los vínculos sacros y de las normas canónicas que rigen al respecto. De lo contrario, el menor quedaría exento de la patria potestad (que se había extinguido), sin tutor, y sin haber adquirido él mismo la capacidad civil; de manera que se debe reconocer que su representación se trasladaba al superior religioso (más allá de que, por el hecho mismo de la profesión y como vemos en el capítulo pertinente, su capacidad de derecho se hubiera visto fuertemente limitada). Si más tarde se produjese la salida del instituto del hijo, siendo aún menor de edad, hay consenso en la doctrina respecto de que la patria potestad renace a favor de sus padres.

En el Código Civil y Comercial vigente la norma se ha mantenido en el artículo 699, referido a la "responsabilidad parental", que es el nuevo nombre dado a la patria potestad:

"La titularidad de la responsabilidad parental se extingue por: {...} b. profesión del progenitor en instituto monástico".

No se trata desde luego de una sanción, porque no estamos ante una circunstancia que implique "un juicio disvalioso respecto de la conducta de los padres, sino que simplemente significa que los hijos no se encuentran bajo la esfera de vigilancia y autoridad de sus padres"²⁷⁶. Se trata del reconocimiento de una circunstancia que objetivamente impide que el padre ejerza de modo eficaz la patria potestad, tanto sea que él mismo haya ingresado al "instituto monástico", como que quien haya hecho profesión religiosa sea el hijo.

La extinción de la responsabilidad parental no se produce por el mero ingreso en el postulante o en el noviciado (pasos iniciales y previos a la profesión misma), sino por la profesión religiosa en sentido estricto. Esto es porque el fundamento que se da a la norma es que el individuo por la profesión religiosa

"queda incorporado al instituto al que ingresa y sometido a la autoridad de los superiores que la orden o congregación le imponen. De este modo, si como consecuencia de los votos pronunciados el profeso queda sometido, para todos los efectos, a la autoridad de sus superiores, por una simple circunstancia de hecho, dicha autoridad no puede ser compartida con el padre natural, quien la pierde, en virtud de la situación en que él se encuentra"²⁷⁷.

Este fundamento dado por LLAMBÍAS era apropiado para el caso de profesión religiosa del hijo. Tratándose del padre, el fundamento sería que estando él mismo sujeto a obediencia y con contacto limitado con el exterior, se vería impedido de ejercer las atribuciones propias de la responsabilidad parental.

Hay que reconocer que se trata de un supuesto extremadamente improbable. Si bien el tener hijos menores a cargo no es de suyo un impedimento que el Derecho Canónico universal haya previsto

²⁷⁶ Bossert-Zannoni, op.cit., #571.

²⁷⁷ Llambías, op.cit. art.306, # 4.

explícitamente para la admisión a la vida religiosa (canon 643), sí se exige que quien ingrese a ella acredite ser “de estado libre” (canon 645), lo que se interpreta que incluye no tener responsabilidades derivadas de una unión matrimonial o extramatrimonial. Sería muy extraño que los superiores religiosos admitieran a un candidato en esas condiciones.

En el supuesto (poco habitual, hay que decir, pero teóricamente posible) de que quien profese sea el padre o la madre con hijos menores a su cargo, la responsabilidad parental se extingue porque en ese caso el padre o madre quedan sujetos ellos mismos a las exigencias de la vida religiosa y desligados en los hechos de la convivencia y atención de los hijos. En este supuesto, si el padre o madre dejan la vida religiosa y sus hijos son aún menores, se discute si la responsabilidad parental se reasume automáticamente o no. Quienes dicen que no, señalan que si el padre o madre abandonó a sus hijos menores para hacer profesión religiosa, ha perdido todo derecho sobre ellos. Otros en cambio señalan que la razón de la salida pudo ser precisamente la necesidad de ocuparse de los hijos (por ejemplo, porque el otro progenitor ha muerto), y en ese caso el interés de los menores reclama que la responsabilidad parental sea reasumida.

La ley habla de profesión en “institutos monásticos”. Puede quedar la duda de qué ocurre en caso de profesión religiosa en otro tipo de institutos de vida consagrada. Sin embargo, dado que el legislador civil no suele tener muy presentes los matices canónicos, podría pensarse que la norma es aplicable también a la profesión religiosa en institutos de vida consagrada no monásticos, pero que también presenten una exigencia y modalidad de vida incompatible con la subsistencia del ejercicio de la responsabilidad parental.

Es claro que en el origen el legislador tenía en mente exclusivamente a las órdenes religiosas católicas. Pero actualmente, resultaría discriminatorio que se prive de la responsabilidad parental (eventual y teóricamente) a quien emite profesión religiosa en una orden religiosa católica, y no a quien lo asume un compromiso de vida análogo en cualquier otra religión. Por lo tanto, en el supuesto de que el progenitor ingrese a alguna forma de vida religiosa de características analogables a la vida monástica, pero en una religión no católica, debería aplicarse la misma solución.

En cuanto al **ingreso en comunidad religiosa** por parte del menor (que sí es posible teóricamente antes de los dieciocho años en que se alcanza la mayor edad, si se considera en este caso tal como a mi juicio

corresponde el ingreso al postulante o noviciado, y no la profesión religiosa en sentido estricto), subsiste en el Código Civil y Comercial la exigencia de que la conformidad necesaria sea dada conjuntamente por ambos progenitores, si viven, aunque no convivan entre sí por separación, divorcio, nulidad de matrimonio o inexistencia de vínculo matrimonial entre ellos. Es lo que ya disponía el art.264 quáter del viejo Código Civil (según la ley 23.515), que no fue modificado por la ley 26.579, y hoy resulta del art. 645:

"Si el hijo tiene doble vínculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos: {...} b. autorizarlo {al hijo} para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad".

El ingreso a comunidad religiosa que el legislador ha previsto, es el ingreso a un instituto de vida consagrada de la Iglesia Católica, que no necesariamente es un "instituto monástico" como el mencionado en el art.699. Lo relevante en este caso, es la salida del menor de la casa familiar, del mismo modo que ocurre en otros supuestos previstos en la norma, como el ingreso en institutos militares.

Por lo tanto, la norma debe ser también aplicada en caso de ingreso a comunidades religiosas no católicas; y también al caso de ingreso a seminarios diocesanos católicos, aunque no sean "comunidades religiosas" en sentido estricto, por la evidente y sustancial analogía con el caso estudiado.

5.2.3 Adopción

La legislación argentina en materia de adopción, no contiene ningún impedimento o restricción para que un ministro de culto sea adoptante.

En la Argentina, la regla no es necesariamente la adopción por parte de matrimonios (como cabría esperar en beneficio de menores a quienes se desea integrar en una familia por estar "privados" de ella, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño), sino que es igualmente admisible por parte de personas solas (art. 599 del Código Civil y Comercial).

Por otra parte, así como entre las calidades requeridas para ser adoptante no hay ninguna que se vincule ni con la religión ni con la ocupación o profesión de quienes pretenden serlo, tampoco hay ninguna limitación puesta en ese sentido. Ello a pesar de que la propia Convención sobre

los Derechos del Niño indica la necesidad de que se respete la identidad, también la religiosa, de los niños dados en adopción²⁷⁸.

La jurisprudencia argentina tuvo ocasión de considerar el tema bajo la vigencia de una ley anterior (19.134), que no era diferente de la actual en este punto, concluyendo que dado que *“puede ser adoptante todo aquel a quien la ley no se lo prohíba”*, nada impide al sacerdote secular adoptar niños²⁷⁹.

Del mismo modo coincide la doctrina en que no hay impedimento para el sacerdote para adoptar, y que

“la adopción es perfectamente compatible con la dignidad y castidad propia del estado sacerdotal”²⁸⁰.

Desde el punto de vista del derecho canónico, no existe una prohibición expresa que impida al sacerdote secular adoptar hijos. No obstante, una interpretación comprensiva y amplia de lo que implica la obligación del celibato, no solamente como renuncia a la conyugalidad sino también a la paternidad humana para obrar con “amor indiviso” en el ministerio sacerdotal, lleva a la doctrina a considerar que esta adopción es altamente inconveniente²⁸¹. Prudencialmente, sin que ello sea obligatorio y sin que su omisión invalide civilmente la adopción otorgada, parece conveniente que el juez que proyecte acceder a una adopción solicitada por un sacerdote, requiera de éste que acredite la conformidad de su obispo, para asegurar que no vaya a sucederse luego un problema mayor que involucre indirectamente al menor adoptado, cuyo interés debe ser el punto de referencia para cualquier decisión.

Lo dicho hasta aquí no es extensivo a los sacerdotes regulares, y en general a los religiosos y religiosas. En este caso sí, aunque no esté explícito en la ley, pareciera derivarse un impedimento para la adopción de otras normas legales, y en particular las que se refieren al ejercicio de la responsabilidad parental recién analizadas. La jurisprudencia también ha hecho esta distinción²⁸².

²⁷⁸ Sobre el derecho a la identidad, y su aplicación en caso de adopción, ver NAVARRO FLORIA, Juan G., “Los derechos personalísimos”, Buenos Aires, EL DERECHO, 2016, cap.5.1.

²⁷⁹ Juzgado de Menores de 3ª Nominación, Córdoba, “B., O.L.”, 16/9/87, ED 136-695. Se trata de un fallo extenso y muy fundado, que analiza el caso tanto desde la óptica del derecho civil, como desde el derecho canónico.

²⁸⁰ BORDA, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil – Familia”, tº.II p.149.

²⁸¹ BUSSO, Ariel, “La fidelidad del apóstol”, Bs.As., EDUCA, 2014, tº.II, p.189.

²⁸² Caso “B., O.L.”, cit. en nota 279.

5.2.4. Tutela y curatela

El artículo 398 del antiguo código civil prohibía que fueran nombrados tutores, *“los que hubieren hecho profesión religiosa”* (inc.16). La razón era que su condición de vida les impedía asegurar una buena administración²⁸³, lo que es plenamente coherente con la norma que les impide incluso ejercer la patria potestad sobre los propios hijos (con más razón, ser tutores de otros).

En relación a los ministros religiosos católicos, la norma era coincidente con lo dispuesto por el derecho canónico, que establece que los clérigos

“sin licencia de su Ordinario, no han de aceptar la administración de bienes pertenecientes a laicos u oficios seculares que lleven consigo la obligación de rendir cuentas” (canon 285 § 4),

Esa norma es extensiva a los religiosos (canon 672), pero no a los diáconos permanentes (c.288)²⁸⁴. Nótese que la prohibición canónica por una parte es dispensable (cosa que no preveía el régimen civil), pero por otra abarca a los clérigos en general, y no solamente a los religiosos.

Un problema que suscitaba esta norma, es que el art.475 del viejo código civil hacía aplicables las reglas de la tutela, a la curatela, de manera que los religiosos estaban en principio impedidos también de ser curadores de incapaces mayores de edad (particularmente, insanos). Esta limitación era lógica en general, pero debería haber reconocido una excepción, no prevista en la ley, en el caso de que un religioso resulte insano mental, en cuyo caso, hubiera sido enteramente lógico que la curatela le fuera asignada a otro religioso de su misma comunidad, posiblemente su superior.

De todos modos, la prohibición a los religiosos para ser tutores ha desaparecido en el nuevo Código Civil y Comercial. Lo que no significa que sea aconsejable discernirla, salvo casos muy excepcionales.

La ley no ha previsto el efecto de la profesión religiosa, sea del menor o de su tutor, sobre la tutela ya discernida.

²⁸³ BOSSERT, Gustavo, y ZANNONI, Eduardo, op. cit., # 583; MAZZINGHI, Jorge, “Derecho de Familia”, 3ª ed., Buenos Aires, Abaco, 1998, tº 4, # 861.3.d).

²⁸⁴ Ver los antecedentes canónicos, y también de Derecho Indiano, en SALINAS ARANEDA, Carlos, “El influjo...”, cit., p.190 y ss.

Cuando era posible la profesión religiosa de menores, la jurisprudencia había establecido que ella extinguía la tutela:

“Aunque la ley no estatuya que se acabe la tutela por esa causa, esto ocurre porque militan iguales motivos. La extinción de la patria potestad o de la tutela permite al menor adulto cumplir las reglas de la orden en que profesa y adquirir una plena capacidad de hecho para ejecutar todos los actos jurídicos canónicos”²⁸⁵.

Pero si quien hace profesión religiosa es en cambio el tutor, habiendo desaparecido la prohibición a los religiosos de ser tutores, no parece que la tutela se extinga de pleno derecho.

En cualquier caso, si se hubiera perdido la tutela por profesión religiosa y luego se produce la salida del instituto de quien había profesado, será necesario que la tutela vuelva a ser discernida: no se reasume en forma automática.

En otros ordenamientos, en lugar de una incapacidad se ha previsto que los ministros de culto puedan excusarse de ejercer una tutela o curatela que les debiera ser deferida²⁸⁶. Parece una mejor solución.

5.3 Responsabilidad civil de los ministros de culto

Es innecesario decir, que el ministro de culto en tanto ciudadano y persona que actúa en la vida social, es civilmente responsable de sus actos en idéntica situación a cualquier otra persona.

No hay ninguna limitación al respecto, y por tanto, nada hay tampoco que decir en particular. Como cualquier ciudadano, el ministro de culto está sujeto a juzgamiento ante los tribunales ordinarios tanto por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuanto por la comisión de ilícitos civiles (o, en otros términos, del incumplimiento del deber genérico de no dañar a otro).

²⁸⁵ Cciv.1ª, JA 68-684, citado por Llambías, op. cit, art.306, B-2.

²⁸⁶ Así, el código civil de **Chile** prevé que “*Pueden excusarse de la tutela o curaduría: ...10º.- Los sacerdotes o ministros de cualquier religión*” (art.514).

La pregunta que sin embargo es posible hacerse es: ¿existe algún tipo de responsabilidad especial o “profesional” de los ministros de culto?

Cabe al respecto tener en cuenta la sensata observación de BORDA, cuando menciona:

“Aunque frecuentemente este problema de la naturaleza de la responsabilidad profesional ha sido tratado en conjunto, como si fuera un tema único cuyas soluciones fueran aplicables a cualquier profesión, pensamos, por nuestra parte, que se trata de una cuestión extremadamente compleja, que no se presta a una solución uniforme y que debe ser resuelta considerando cada profesión en particular. Sólo así se evita la tentación de formular sistemas generales, que pueden tener una gran armonía arquitectónica, pero que seguramente no se ajustarán a la naturaleza plástica y multiforme de las distintas actividades profesionales que se pretende encuadrar en fórmulas uniformes”²⁸⁷.

Conviene por lo tanto considerar el caso específico de los ministros de culto con cierta independencia de las consideraciones que la doctrina y jurisprudencia han hecho en relación a médicos, abogados u otros profesionales. Entre otras razones, porque los ministros de culto no son estrictamente “profesionales independientes”, sino en todo caso “funcionarios” (dicho esto sin pretender que lo sean en el sentido propio, sino de modo análogo) de un cuerpo mayor que es la iglesia o comunidad religiosa a la que sirven y a la que por hipótesis pertenece también el fiel al que asisten. Y la relación entre el ministro religioso, el fiel y la comunidad, no es una relación típica de locación de servicios o de obra profesional, sino una relación *sui generis* con un contenido ante todo de tipo religioso y con reglas propias a las que está subordinada.

Ello sin perjuicio de que existen algunas reglas generales en materia de responsabilidad profesional, que conviene tener en cuenta. Entre ellas, la que considera a las obligaciones profesionales como obligaciones “de medios” y no “de resultado”, lo que importa decir que el profesional (en el caso, el ministro de culto) no garantiza el resultado de su actividad, sino el cumplimiento de sus deberes de acuerdo con las “reglas del arte” y poniendo sus

²⁸⁷ BORDA, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil –Obligaciones”, Buenos Aires, La Ley 2008, tº.II §1653.

mejores esfuerzos en su desarrollo. Esta distinción entre obligaciones de medio y de resultado, es ahora explícita en el Derecho argentino (artículos 774 y 1723 del Código Civil y Comercial)²⁸⁸.

No existen casi antecedentes en la Argentina, en los que se haya juzgado la “mala praxis” de un ministro de culto, imputándole la consiguiente responsabilidad jurídica.

Un caso curioso fue protagonizado por un “mohel” judío (persona encargada de realizar la circuncisión ritual a los niños), que era además médico de profesión. Un niño circuncidado por él sufrió una infección que fue atribuida a una higiene deficiente en el acto, reveladora según los jueces de “un incumplimiento por parte del accionado de la obligación de seguridad que estaba a su cargo”. El caso no fue juzgado como mala praxis médica, aunque la condición de médico del mohel fue considerada una circunstancia agravante de su responsabilidad en los términos del art.902 del código civil entonces vigente, sino como un caso de mal cumplimiento de las obligaciones propias de su función ritual. La consecuencia fue la imposición de la obligación de indemnizar el daño moral sufrido por el niño²⁸⁹. Una situación semejante había sido juzgada muchos años antes desde el punto de vista penal, descartando entonces la sentencia que la circuncisión practicada por un mohel constituya el delito de lesiones²⁹⁰.

En el derecho comparado, en cambio, existen antecedentes de lo que en los Estados Unidos se denomina *clergy malpractice*, es decir, de responsabilidad civil atribuida a directores o asesores espirituales por daños ocasionados a los fieles en el ejercicio de esa actividad²⁹¹. Esta responsabilidad puede pensarse en varios supuestos, por ejemplo:

a) el caso de la persona que obra un acto objetivamente ilícito, pero que ha sido inducido o al menos justificado por quien

²⁸⁸ Cfr. MEZA, Jorge, “La responsabilidad profesional en el nuevo Código Civil”, ED 269-702.

²⁸⁹ CNCiv, sala A, 23-12-03, “D.C., M.L. y otro c. Spivak, G.J. s/ daños y perjuicios”, LL 2004-C, 147 y JA 2004-II, 602. Publicado parcialmente con comentario del autor en NAVARRO FLORIA, Juan G., “Jurisprudencia argentina reciente en materia de Derecho Eclesiástico” AADC 2004 (IX) p.257.

²⁹⁰ Ver detalles y análisis del caso en SCHIFFRIN, Leopoldo, “La libertad religiosa y el derecho penal”, en NAVARRO FLORIA y BOSCA, “La libertad...”, cit., p. 331-336.

²⁹¹ Ver el artículo de MONZÓN, José M. “Asesor espiritual”, en ALTERINI, Atilio y LÓPEZ CABANA, Roberto, “Enciclopedia de la Responsabilidad Civil”, tº.I, p. 593, Buenos Aries, ed. Abeledo-Perrot; y bibliografía allí citada.

actuaba como su director o asesor espiritual, quien mediante esa dirección pudo haber determinado la realización de la acción ilícita. Un caso posible es el de quien omite tratarse médicamente (o realizar un tratamiento médico necesario a un menor de edad o persona a su cargo), con la consecuencia de un daño en la vida o en la salud, esperando tener una curación por medios milagrosos o exclusivamente espirituales. Desde luego, la responsabilidad primaria en este caso es del agente, pero podría considerarse el caso de que se extienda a quien hubiera inducido con suficiente fuerza persuasiva a obrar o a dejar de hacerlo.

En este sentido, se debe considerar la situación de preeminencia o autoridad propia del asesor espiritual que puede facilitar la manipulación y disminuir la capacidad de análisis crítico del dirigido.

b) otro supuesto posible de mala praxis consiste en la violación del deber de confidencialidad o secreto por parte del ministro religioso, depositario de confidencias o informaciones personales que ha recibido en el curso de la dirección espiritual. Del mismo modo que el secreto religioso está protegido por la ley para eximir al ministro de tener que revelarlo, debe considerarse la posibilidad de que su revelación voluntaria cause un daño susceptible de ser civilmente indemnizado, más allá de la responsabilidad penal por violación de secretos. Como en cualquier caso de responsabilidad civil, será necesario demostrar la existencia de un daño causado por esa violación; pero tal daño no debe ser necesariamente material, ya que bien puede ser el daño moral producido por la publicidad misma de lo que se quería mantener en reserva.

c) el caso típico en el derecho comparado de “*clergy malpractice*” es el del ministro de culto que en la dirección o asesoría espiritual produce un daño a su asistido como consecuencia de sus consejos o enseñanzas, asimilable en cierto modo a la mala praxis médica (en particular, de los psiquiatras o psicólogos) e incluso de los abogados; aunque los tribunales son reacios a admitir esta responsabilidad.

En los **Estados Unidos**, en el caso “Nally c. Grace Community Church of the Valley”, resuelto por la Suprema Corte de California en noviembre de 1988, los padres de un joven de 24 años (Kenneth Nally) demandaron a los pastores de su iglesia luego de su suicidio, imputándoles haberlo inducido a no tratarse psiquiátricamente. En su defensa, los pastores argumentaron haber enseñado a Nally que el suicidio le impediría entrar al Cielo. Durante el juicio, cientos de otras iglesias y grupos religiosos se presentaron en

apoyo de la iglesia demandada, alegando que estaba en juego la libertad religiosa. La sentencia de la Corte resolvió que dado que los pastores no necesitaban ninguna licencia pública para actuar como consejeros, no podían ser enjuiciados con los mismos standards aplicables a otras profesiones.

Tampoco parece posible que un ministro de culto sea demandado civilmente por supuesta falta de preparación adecuada, o incompetencia en el ejercicio de su ministerio. Es que en semejante caso, el juzgamiento debería quedar reservado a la propia comunidad religiosa y formar parte de su ámbito de autonomía, ya que es solamente la propia confesión religiosa la que está en condiciones de determinar si el ministro de culto es idóneo en cuanto tal, posee la capacitación adecuada, y ejerce su ministerio de manera satisfactoria. Por otra parte, deferir el juzgamiento de estas cuestiones a los tribunales civiles, pondría al ministro de culto en la situación de tener que violar el secreto religioso y su deber de confidencialidad para poder defenderse, ya que tendría que revelar detalles de la dirección espiritual o de los actos ministeriales realizados en relación a su demandante o denunciante.

Un caso de este tipo fue juzgado en Illinois, Estados Unidos²⁹². La viuda de John Baumgartner demandó a la iglesia de la Ciencia Cristiana luego de la muerte de su marido, alegando que lo habían inducido a abandonar el tratamiento médico de su enfermedad y, en cambio, someterse únicamente a las prácticas establecidas por la iglesia para curarse (además de haberlo convencido de alterar su testamento dejando una herencia millonaria a la propia iglesia). La demandante alegaba una “mala praxis” por haberse desviado los pastores de la iglesia de los standards establecidos por la propia iglesia para la curación de esos casos. La Corte se negó a juzgar esta cuestión (desviación de los standards religiosos de la iglesia) por considerarla una cuestión no justiciable.

En definitiva, los casos conocidos de demandas por “mala praxis” de ministros religiosos en general han resultado desestimadas, por el riesgo que entraña reconocer esta responsabilidad específica para la libertad religiosa, al exigir una intromisión de los tribunales estatales en la esfera de autonomía de las confesiones, y tener que juzgar creencias y convicciones más que prácticas en sí mismas.

²⁹² “Baumgartner v. First Church of Christ, Scientist, 141 Ill. App. 3d 898, 96 Ill. Dec. 114, 490 N.E.2d 1319 (1986).

La ley argentina no contiene ninguna disposición que prevea específicamente y como caso especial la responsabilidad civil de los ministros de culto. En caso de ser ella juzgada, es claro que deberá serlo bajo los parámetros de la responsabilidad subjetiva, y no objetiva.

5.4 Domicilio de los eclesiásticos.

El código civil argentino de 1871 consideraba entre los supuestos de “domicilio legal” el de

“los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares” que “tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo estas temporales, periódicas, o de simple comisión” (art.90 inc.1).

Domicilio legal, en ese ordenamiento, era

“el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté presente allí” (art.90).

Es una de las clases de domicilio general, es decir, aquel que toda persona tiene (como atributo de la personalidad) y que resulta aplicable a todas sus relaciones jurídicas.

La norma no hablaba exactamente de “ministros de culto”, sino de “*funcionarios públicos eclesiásticos*”. Naturalmente, por la época de su redacción, el legislador pensaba únicamente en los eclesiásticos católicos. La fuente citada por Vélez Sarsfield en la nota (artículos 106 y 107 del Código Civil francés), no hace mención a “funcionarios eclesiásticos”.

El artículo debe ser comprendido en el contexto histórico de reivindicación del derecho de Patronato y en la comprensión regalista de las relaciones entre Iglesia y Estado, según la cual los sacerdotes eran considerados empleados o funcionarios públicos a cargo del presupuesto nacional, y designados por el poder civil.

La doctrina civilista nunca prestó especial atención a estos “funcionarios eclesiásticos” al tratar los casos de domicilio legal; y tampoco fue el tema motivo de tratamiento jurisprudencial.

En la medida en que el Acuerdo de 1966 entre la Argentina y la Santa Sede puso fin al régimen de Patronato, produciéndose de manera amistosa la separación entre Iglesia y Estado; y teniendo en cuenta que el pleno respeto de la libertad religiosa exige acentuar la recíproca autonomía entre ambas esferas, la mención a los “funcionarios públicos eclesiásticos” debía tenerse por superada. Dicho de otro modo: no existían ya eclesiásticos que pudieran o debieran ser considerados funcionarios públicos del Estado, y que como tales tuvieran un domicilio legal. En consecuencia, los ministros de culto, cualquiera sea la función que cumplieren en la Iglesia Católica (o en cualquier otra confesión religiosa) tenían el domicilio general que les correspondiese como a cualquier otro ciudadano.

En el nuevo Código Civil y Comercial argentino desapareció la previsión del domicilio legal para los funcionarios eclesiásticos.

Sin embargo, ella subsiste en el derecho comparado de la región, al menos en la letra de la ley.

Así, el Código Civil de **Chile**, dispone que

“Los obispos, curas y otros eclesiásticos obligados a una residencia determinada, tienen su domicilio en ella”²⁹³.

Se entiende que la obligación de residencia es la que impone el derecho canónico.

Casi en los mismos términos se expresa el código civil del **Uruguay**, no obstante el notorio laicismo de ese país:

“Los eclesiásticos obligados a una residencia determinada, tienen su domicilio en ella.” (art.29).

5.5 Conclusiones

La revisión del derecho privado argentino, en relación a las previsiones que contiene respecto de los ministros de culto, permite advertir una evolución notable.

²⁹³ Ver una explicación de los antecedentes e interpretación de la norma en SALINAS ARANEDA, Carlos, “El influjo del Derecho Canónico en el Código Civil de la República de Chile”, Valparaíso, Ediciones Universitarias, 2006, p.111 y ss.

Por una parte, la figura de los ministros de culto parece perder relevancia o, al menos, suscitar una menor atención de parte del legislador. Varios supuestos en los que la legislación decimonónica los había tomado en cuenta son actualmente ignorados: las restricciones a la capacidad civil de clérigos y de religiosos han prácticamente desaparecido, ya no interesa el domicilio de los "funcionarios eclesiásticos", la condición de ministro de culto en sí misma es irrelevante para el derecho de familia (con la salvedad del efecto de la profesión religiosa sobre el ejercicio de la responsabilidad parental, y de la necesidad de autorización de ambos progenitores para el ingreso de menores en comunidades religiosas).

Esta evolución parece responder por una parte a una mayor secularización de la sociedad. Pero también al definitivo abandono de resabios del régimen de Patronato que caracterizó la relación entre el Estado y la Iglesia Católica hasta mitad del siglo XX.

Por otra parte, en los casos en que el legislador sigue considerando necesario atender a la calidad de ministro de culto por alguna razón, se advierte el esfuerzo por construir un concepto amplio capaz de abarcar a los ministros religiosos de todas las confesiones, y no ya a los de una en particular. Es lo que acontece, señaladamente, en materia de incapacidades sucesorias. Se trata de un esfuerzo loable, aunque algo vacilante en cuanto a la búsqueda de las mejores formas de expresión. Es lo que ha ocurrido al momento de la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Finalmente, hay cuestiones que no han merecido la atención del legislador, pero que no es del todo improbable que lleguen a los tribunales. Es el caso del régimen de responsabilidad civil de los ministros de culto. Es cierto también que existen normas generales en la materia, que además han sido renovadas. Por lo tanto, será en todo caso la jurisprudencia la que deberá perfilar sus aplicaciones específicas a estos sujetos.

Capítulo 6. Los ministros de culto en el derecho penal

El derecho penal estatal puede considerar a los ministros de culto al menos en dos posibles situaciones.

Por una parte, en la medida en que los grupos y comunidades religiosos son considerados un elemento valioso para la sociedad, su adecuado funcionamiento y su libertad constituyen un bien jurídico a tutelar, incluso penalmente. Entre las normas penales de protección de la libertad religiosa y su ejercicio, cabe pensar en normas que específicamente *protejan* el ejercicio de las funciones propias de los ministros de culto. O dicho de otro modo, que castiguen aquellas conductas que impidan u obstaculicen ese ejercicio. El ministerio religioso se convierte así en *objeto de protección penal*, y quienes lo ejercen, en sujetos (pasivos) de esa tutela.

Esta protección penal al ministro religioso, no entiende tanto otorgarle personalmente a él un privilegio del que no gozan el común de los habitantes, sino proteger el bien jurídico de la libertad religiosa, de todas las personas y de las confesiones religiosas en cuanto tales, para lo cual uno de los elementos a cuidar, es la función que desempeñan los ministros de culto. Por lo tanto, el beneficiario último de la protección penal es la comunidad religiosa a la que sirve el ministro de culto, más que él mismo a título personal. Es una protección funcional.

Las convenciones de Ginebra de 1948 (y posteriores) referidas al derecho de la guerra, cuando consideran a los ministros de culto como personas especialmente protegidas, son un ejemplo en esta línea.

Desde otro punto de vista, los ministros de culto pueden ser considerados como posibles agentes (*sujetos activos*) de actos ilícitos. Y justamente en razón del lugar particular que ellos tienen en la sociedad y que los hace merecedores de ciertos beneficios y protección, y por la posición singular que tienen respecto de otras personas (concretamente, los fieles de las comunidades a las que sirven y sobre quienes tienen un especial ascendiente), en caso de cometer delitos pueden ser merecedores de una sanción agravada.

Es que si por una parte la sociedad les reconoce un lugar de relevancia en cuya virtud les otorga ciertas prerrogativas para el ejercicio de sus funciones, por la otra espera de ellos una conducta ejemplar. La comisión de

delitos por parte de una personas de estas características implica -además del daño al tejido social que todo delito supone- una traición a esa confianza que en ellos se deposita, merecedora eventualmente de un castigo mayor que si el mismo delito fuese cometido por un individuo desprovisto de tal dignidad. Naturalmente, este razonamiento no puede aplicarse a la comisión de cualquier delito, pero sí puede ser válido respecto de aquellos en que la condición personal del agente pueda ser determinante o haber facilitado tal comisión.

También este orden de ideas, se encuentran antecedentes importantes en el orden internacional. Así, en el año 2006 el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (establecido por las Naciones Unidas para juzgar los actos de genocidio ocurridos en ese país en el año 2000), condenó a un sacerdote católico a prisión por el delito de genocidio y exterminio, luego de haber sido acusado de permitir la matanza de cientos personas que se habían refugiado en una parroquia. El Tribunal consideró un factor agravante, el hecho de que el reo fuera un religioso muy conocido en su comunidad y en el que muchos feligreses confiaban. Otros sacerdotes católicos, anglicanos y pastores metodistas y presbiterianos también fueron acusados de crímenes similares.

Esta penalización de los ministros de culto, que así explicada es compatible con un régimen de protección y defensa de la libertad religiosa, podría también obedecer a otro esquema ideológico, en el que la existencia y presencia en la sociedad de individuos que tienen como “profesión” y ocupación principal el ministerio religioso, sea visto como algo sospechoso, o incluso negativo en sí mismo para la sociedad. Naturalmente, no es éste el piso ideológico de nuestro ordenamiento jurídico, pero esta posibilidad exige un cuidadoso escrutinio de las normas –vigentes, pasadas o proyectadas- que, acaso puedan responder abierta o solapadamente a esta tendencia persecutoria (y no protectoria) de la libertad religiosa.

6.1 Protección penal al ejercicio del ministerio

La primera aproximación, desde la valoración positiva del ministerio de culto, es entonces la que busca rodear de una especial protección al ejercicio de ese ministerio, castigando penalmente las conductas que lo impiden o dificultan. El bien jurídico tutelado, como queda dicho, no es la persona del ministro de culto, sino lo que ese ministro representa y sirve, su

función, y en definitiva, la libertad religiosa cuyo pleno desarrollo y garantía exige proteger a los ministros de culto en tanto operadores del ejercicio de esa libertad.

6.1.1. Derecho comparado

En el Derecho comparado, aparecen con cierta frecuencia normas de protección penal a los ministros de culto.

El código penal de **Italia** castiga con multas de 2000 a 6000 euros a

“quien ofende a una confesión religiosa, mediante vilipendio de un ministro de culto” (art.403).

Es una pena mayor que la que corresponde a quien vilipendia a “quien profesa” una determinada confesión, sin ser ministro de culto. El código contenía castigos diferenciados, con penas mayores si la confesión religiosa ofendida era la Iglesia Católica y menores si era un “culto admitido”, pero esa diferenciación (no la existencia del delito) fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, provocando la reforma del código para igualar los casos²⁹⁴.

Una figura similar existe en **Chile**, cuyo código penal (art.139) castiga con reclusión menor y multa a

“los que con acciones, palabras o amenazas ultrajaren al ministro de un culto en el ejercicio de su ministerio”.

La pena se agrava cuando *“la injuria fuere de hecho, poniendo manos violentas sobre la persona del ministro”*, y se agravan más si de la agresión resultan lesiones o la muerte del ministro (art.140)²⁹⁵.

En el derecho de **Ecuador**, el Reglamento de Cultos Religiosos²⁹⁶ dispone que serán sancionados penalmente

²⁹⁴ Ley nº 85 del 24 de febrero de 2006, en vigor desde el 28 de marzo de 2006 (Gazzetta Ufficiale 13/3/06). El mismo título, ahora llamado *“De los delitos contra las confesiones religiosas”*, castiga el vilipendio de objetos de culto o consagrados a él, o su destrucción o daño, entre otros delitos.

²⁹⁵ Ver SALINAS ARANEDA, Carlos, *“Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado de Chile”*, Valparaíso, Ediciones Universitarias, 2004, p.158.

²⁹⁶ Decreto 1682, R.O. 365 del 20-1-2000.

“quienes fingieren ser ministros sin serlo, o quienes realizaren ficción de actos de culto sin estar autorizados a celebrarlos”.

En **Grecia**, el código penal castiga con pena de un año de prisión (art.175.2) a quien

“usurpa las funciones de un abogado o de un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Griega u otra religión conocida”, y a “quien públicamente vista el uniforme o la insignia... de un sacerdote religioso de los mencionados en el art.175.2 sin tener derecho a ello” con prisión de hasta seis meses (art.176).

Una norma extraña aparece en la ley de **Argelia** que establece las “condiciones y reglas de ejercicio de cultos distintos del musulmán”²⁹⁷, en la que se castiga con prisión de uno a tres años, y multa, a quien

“predique en el interior de edificios destinados al ejercicio del culto, sin estar designado, aprobado o autorizado por la autoridad religiosa de su confesión, competente, debidamente aprobada en el territorio nacional y por las autoridades argelinas competentes” (art.13).

La misma ley prohíbe la actividad religiosa no musulmana fuera de los templos autorizados.

El concordato entre la Santa Sede y **Colombia** de 1973, preveía que

“el ejercicio ilegítimo de jurisdicción o funciones eclesiásticas por quienes carecen de misión canónica para desempeñarlas, oficialmente comunicado por la autoridad eclesiástica al competente funcionario del Estado, será considerado por éste como usurpación de funciones públicas” (art. XXII)

Pero esa es una de las normas que fue declarada inconstitucional (“inexequible”) por la Corte Constitucional de ese país²⁹⁸, por lo que se duda acerca de su vigencia efectiva.

²⁹⁷ Ley 06-09 del 17 de abril de 2006, que aprueba la previa Ordenanza 06-03 del 28 de febrero de 2006.

²⁹⁸ Sentencia C-027 de 1993.

Por otra parte, el Código Penal colombiano agrava la pena del delito de homicidio cuando sea cometido sobre un “dirigente religioso en razón de ello” (art.104), lo mismo que si se trata de los delitos de desaparición forzada (art.166), secuestro (art.170), tortura (art.179) o desplazamiento forzado (art.180).

En **Uruguay** el Código Penal, art.306, dispone:

“Ofensa al culto por el ultraje público a las personas que lo profesan o a los ministros del culto. El que de cualquier manera ofendiere alguno de los cultos tolerados en el país, ultrajando públicamente a sus ministros o a las personas que profesan dicho culto, será castigado con tres a doce meses de prisión”.

Es interesante notar que el bien protegido es “la libertad de cultos y el sentimiento religioso”, y que la agresión al ministro de culto se castiga en tanto ultraje a la confesión religiosa a la que sirve.

6.1.2. Antecedentes nacionales

El código penal de 1886, vigente hasta 1921²⁹⁹, establecía entre las circunstancias agravantes de las penas de cualquier delito,

“Verificarlo [el delito] en la persona o en desprecio de los ministros de una religión o en lugares destinados al culto” (art.84 inc.16).

Del mismo modo, uno de los casos tipificados como “injurias graves” consistía en

“Las palabras, dichos o acciones que importen falta de respeto a los padres o ascendientes, a los sacerdotes, maestros, superiores y personas constituidas en dignidad” (art.180, inc.3º).

El mismo código de 1886 contenía una previsión específica respecto de la “ocultación”, antecedente del actual delito autónomo de encubrimiento³⁰⁰, según la cual estaban exentos de pena por tal forma de colaboración con los delincuentes *“Los sacerdotes, médicos y abogados cuando el secreto les haya sido confiado en ejecución de sus funciones”* (art.44 inc.2º).

²⁹⁹ Ley 1920 (ADLA 1881-1889, p.378).

³⁰⁰ Art.277 del código penal vigente.

Es interesante notar como en algunas ocasiones se hace referencia al “sacerdote” (con las dificultades que veremos más adelante), mientras que en alguna otra se intenta un concepto más genérico de “ministro de una religión”, mostrando una incipiente conciencia de la necesidad de lograr normas generales y no pensadas para una sola religión.

6.1.3. Legislación vigente

Figuras penales como las recién descriptas, no fueron recibidas en el código penal argentino vigente, que es del año 1921 (con enorme cantidad de reformas posteriores) aunque sí existieron históricamente, como queda visto.

Tampoco el código de justicia militar, aprobado en 1951 por Ley 14.029³⁰¹ y derogado en 2008 por la ley 26.394³⁰², había contemplado una protección especial a los ministros de culto. Ello a pesar de que –a diferencia del código penal- sí contenía normas especiales de protección a los objetos con valor religioso (como los templos, conventos y objetos destinados al culto³⁰³).

El artículo 247 del código penal³⁰⁴, castiga con pena de multa a aquel

“que públicamente llevaré insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren”.

Se trata de una norma genérica que no hace alusión especial a los hábitos religiosos, ni a la usurpación de títulos u honores religiosos, pero que los podría comprender³⁰⁵, y podría ser por lo tanto una forma indirecta de protección del ejercicio del ministerio religioso, aunque la jurisprudencia ha sido reacia a aplicar esta figura, prefiriendo la de la estafa.

³⁰¹ BO 6/8/1951.

³⁰² BO 29/8/08.

³⁰³ Eran delitos especiales la destrucción de templos o conventos y el ataque a ellos sin necesidad (art. 746), y se agravaba la sanción del hurto o robo cuando recaía sobre objetos destinados al culto (art.871 inc.3). También había en el código normas especiales para la entrada y registro en templos o lugares religiosos (art.213). Todas esas normas han desaparecido ahora del ordenamiento jurídico argentino.

³⁰⁴ Texto según ley 24.527, y monto de la multa según ley 24.286.

³⁰⁵ Esta especificidad, como veremos luego, sí aparece en diversos códigos contravencionales o de faltas.

Según un fallo,

"ostentar falsamente la calidad de sacerdote no significa, según la interpretación tradicional del art.247 del CP, arrogarse ningún grado académico, título profesional u honor (distinción oficial), antes bien, ésta sería la calidad mentida, propia de la estafa, a que alude el art.172 del PC"³⁰⁶.

La configuración del delito requiere la atribución de un título o un honor indebido en forma específica.

A menudo aparecen personajes que se titulan "sacerdote" u "obispo", y se visten y presentan como tales, suscitando confusión entre los fieles, pero que si bien no pertenecen a la iglesia a la que parecen pertenecer (típicamente, en la Argentina, a la Iglesia Católica), sí son reconocidos como tales por otras "iglesias" o grupúsculos, a veces reconocidos por el Estado, que tienen ligerísimas diferencias de denominación y doctrinales con la Iglesia Católica. Estas personas eluden la sanción penal alegando que no dicen ser sacerdotes u obispos "de la Iglesia Católica Romana" sino de alguna otra de nombre similar que los cobija.

Como se ha dicho más arriba, desde el año 1991 se han sucedido en la Argentina diversos proyectos de ley "de libertad religiosa", que en muchos casos han incluido un capítulo dedicado a reformas en el Código Penal. Entre ellas, se ha propuesto tipificar como delitos algunas acciones, en protección de los ministros de culto. Otros proyectos estuvieron dedicados específicamente a la protección penal de bienes religiosos, y también hubo proyectos de modificación integral del Código Penal que incluyeron normas sobre la materia.

Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó aprobación legislativa³⁰⁷.

³⁰⁶ CNCrim.Corr., sala 4, 22/2/95, "Guedes, Carlos", Infojus FA95060088. El delito de estafa tiene una pena sensiblemente superior, pero requiere para su configuración un beneficio económico para el autor, que no se exige en la usurpación de títulos.

³⁰⁷ Sobre algunas de esas iniciativas, ver NAVARRO FLORIA, Juan G., "El tema religioso en el proyectado nuevo código penal", ED 140-887; "El nuevo proyecto de ley de cultos o de libertad religiosa", EDLA, 1997-A-1421; "Un nuevo proyecto de ley de libertad religiosa", EDLA 2001-B-1003; "La protección penal de la libertad religiosa y otras cuestiones conexas", ED 22/8/12.

6.2 Agravantes y delitos específicos

La condición de ministro de culto no está expresamente prevista como agravante genérica para la aplicación de penas por delitos cometidos, pero sí en los casos específicos que veremos luego.

Sin embargo, la contrapartida de la valoración social que conlleva esa calidad, y del aprecio que denota por ellos el ordenamiento jurídico, es el mayor reproche que conlleva la comisión de delitos por parte de quienes están llamados a ser de alguna manera modelo y ejemplo³⁰⁸.

Este concepto ha estado presente en algunos fallos judiciales. Así, al valorar si procedía una excarcelación, se dijo que

“es de importancia relevante la condición de sacerdote que detenta el procesado, que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 41 del Cód. Penal, tomaría más gravosa una eventual futura condena”³⁰⁹.

Así se ha sostenido también el sonado “caso von Wernich”³¹⁰, en el que un sacerdote católico y capellán policial resultó condenado por gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en ejercicio de esas funciones:

“Ahora bien, cuando el que llega después a dar esos consejos, es además un sacerdote que se maneja con autoridad ante los carceleros entrando y saliendo a su antojo de las celdas, no es un torturador cualquiera, es uno calificado.”

En el mismo fallo se dijo:

“su calidad de religioso le permitió tanto la utilización de los hábitos y símbolos característicos, como los conocimientos que la formación de su oficio, le brindaron. En ese sentido, el manejo de las implicancias profundas de los sacramentos, en su vinculación con las víctimas católicas, era indispensable. [...] Todo aquello hizo que su tarea no haya podido ser realizada por ejemplo por un “policía no-sacerdote”. [...] “se trataba de un cura con jinetas”. En

³⁰⁸ En Colombia, por ejemplo, el código penal (art.58) prevé en forma genérica que es una “circunstancia de mayor punibilidad”, “*La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio*”.

³⁰⁹ CNFedCrimyCorrec, Sala I, 23/03/1983, “Tapia, Lucas”, LL 1983-B, 585.

³¹⁰ TOC Fed. nº 1 de La Plata, causa 2506/07, sentencia de noviembre de 2007, <http://www.cij.gov.ar/adj/ADJ-0.803708001226937477.pdf> (accedido 5/2/2017).

ese sentido, la combinación de la imagen física de un sacerdote sin uniforme policial pero con los atributos religiosos -sotana o clerigman (sic) y cruz-, en un ámbito como el de los centros clandestinos, es irremplazable. El efecto de esa presencia -no casual- ante quienes acababan de ser torturados, y que surge de los relatos oídos en el juicio, nunca podía haber sido logrado por un policía disfrazado de cura. [...] Se valió además de su condición de sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana utilizando la vestimenta y símbolos alegóricos -clerigman (sic), sotana, cruz-, todo lo cual ha quedado plenamente acreditado como se desarrolló a lo largo del presente. [...], la presencia de un sacerdote católico en un centro de detención clandestino, pudo inducir al detenido a pensar que su prisión no era ilegal, como no podría serlo ningún delito cometido bajo la vista directa de un ministro religioso lo que, por fuerza, debía alentar su fe en su pronta liberación no estando bajo juicio; más aún, la palabra del capellán, incluso de consuelo, bien pudo encender en el detenido la esperanza de su salvación que nunca le llegó o lo hizo muy tarde o con enormes e insanables daños.”

En conclusión,

“No habiendo atenuante de ninguna especie para las conductas llevadas a cabo por el nombrado, se impone aplicar el máximo de la pena prevista por nuestra legislación dado que cualquier otra opción resultaría repugnante a nuestras convicciones”.

De suerte que la condición de sacerdote del delincuente, fue un elemento especialmente valorado para aplicarle el máximo de la pena.

6.2.1. Delitos contra la integridad sexual:

El Código Penal argentino de 1921, incluía un título dedicado a los “delitos contra la honestidad”, entre los que se tipificaban la violación, el estupro, el abuso deshonesto, la corrupción de menores, los ultrajes al pudor y el rapto (y, hasta su derogación en 1995 por la ley 24.453, el adulterio).

En los casos de violación o estupro, una de las condiciones de especial agravamiento de la pena, era que el autor fuese “sacerdote” (al igual que si fuese ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano o encargado de la educación o guarda de la víctima) (antiguo artículo

122). La misma agravante estaba prevista para el delito de abuso deshonesto (art.127)³¹¹.

Estas normas dieron lugar a algunas dudas y discusiones: ¿la agravante era aplicable por la condición misma de sacerdote del sujeto activo, o por su relación con la víctima, consecuencia de tal condición? ¿A quiénes se consideraba “sacerdote” a estos efectos?

En relación a la primera cuestión, Sebastián SOLER concluyó que

“la agravación no se funda en la calidad personal de sacerdote, sino en la relación de confianza y respeto que de tal calidad derive. Un sacerdote autor de violación de una mujer que no lo sabe sacerdote no comete violación agravada [...] Reducimos pues, esa situación a la de violación de deberes especiales de respeto o guarda [...] Lo importante es determinar si la persona se hallaba en esa situación de respeto, de influencia moral”³¹².

En definitiva, y esto es aplicable incluso a la ley vigente, la razón de ser de la agravante es la situación de mayor debilidad de la víctima frente a quien está para ella en una situación de superioridad jurídica o moral, de manera que puede disminuir su posibilidad de defensa o perturbar su juicio frente al avance del agresor. Por lo tanto, la mera condición de sacerdote (hoy diremos, ministro de culto), si no es conocida por la víctima, es en principio irrelevante.

La jurisprudencia ratifica esta interpretación. En un caso donde se perseguía a un sacerdote imputado de haber abusado sexualmente de jóvenes seminaristas, se hizo mérito de que el sujeto

“era miembro de una “organización de poder” como es la Iglesia Católica. JJI, en efecto, era sacerdote, ejercía la función de Prefecto de Disciplina y oficiaba de guía espiritual de sus víctimas dentro de la estructura con ciertas características particulares del Seminario Menor... y se habría valido de esa situación de preeminencia para incursionar en las conductas corruptoras prohibidas”³¹³.

³¹¹ En el código penal de 1886, solamente el estupro tenía pena agravada cuando era cometido “por sacerdote” (art.131), norma que fue fuente de las del código de 1921.

³¹² SOLER, Sebastián, “Derecho penal argentino”, 1ª ed., Buenos Aires, TEA, 1953, tº. III, § 97.XIII.

³¹³ C1ªApCrimParaná, Sala I, “Ilarraz s/promoción de la corrupción agravada”, 11/6/2014, LL Litoral 2014, 1243

En la misma sentencia, se dice:

“la razón de ser de la agravante es precisamente “la infracción de los deberes particulares inherentes al cargo del autor o las obligaciones que asumiera voluntariamente. Es decir, es la particular relación del agente con la víctima la que la ley ha tenido en cuenta para fundar la mayor punibilidad”

Y también más adelante:

“el Superior del Seminario Menor y Director Espiritual de los niños con su proceder habría vulnerado su deber de proteger a los niños que estaban a su cargo de todo tipo de abuso, incluido el sexual. Y no sólo habría incumplido con ese deber de garantía, sino que él mismo habría perpetrado los aberrantes hechos que se denunciaron, aprovechándose del poder de intimidación y coerción que podía ejercer sobre ellos debido al cargo y posición que ocupaba”

La segunda cuestión, se refería al alcance a dar al término “sacerdote”. La agravante resultaba aplicable inequívocamente si el autor era un sacerdote católico. También otras confesiones religiosas tienen ministros de culto denominados sacerdotes. Pero, ¿cabía una interpretación extensiva, que hiciera funcionar la agravante también respecto de un pastor protestante o un rabino judío, por ejemplo? Desde el punto de vista de la razón de ser de la norma, no había motivo para que así no fuera, máxime porque de lo contrario se estaría incurriendo en una verdadera discriminación religiosa. Sin embargo, la norma penal no puede ser aplicada extensivamente.

Así debió reconocerlo la jurisprudencia:

"Quebranta el principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, quien realiza, en el marco del artículo 122 del Código Penal (agravante reproducida en el vigente art. 119 inc. b del mismo Código, texto según ley 25087), una analogía in "malam partem" asimilando al sacerdote a un ayudante o colaborador de un pastor protestante evangélico"³¹⁴.

³¹⁴ CCasPen, Sala I, provincia de Buenos Aires, 5/12/2002, " Safenreiter, Esteban Enrique s/Recurso de casación", causa 4708, JUBA TC0001 LP.

La ley 25.087, del 14 de mayo de 1999, modificó sustancialmente el título en cuestión, definiendo que el bien jurídico protegido es otro: actualmente se denomina “*delitos contra la integridad sexual*”.

Al mismo tiempo, estableció el agravamiento de las penas de algunos de los delitos actualmente tipificados (abuso sexual gravemente ultrajante, y abuso sexual con “acceso carnal por cualquier vía”), entre otros casos, cuando son cometidos por “*ministro de algún culto reconocido o no*” (art.119, cuarto párrafo inc.b). Con lo que quedó zanjada la duda planteada más arriba.

Las normas vigentes textualmente dicen:

Artículo 119.- *Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si: [...] b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda [...] En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).*

Artículo 120.- *Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del art.119 con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultara un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de seis a diez*

años si mediar alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del art.119.

Artículo 124.- *Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años, cuando en los casos de los arts.119 y 120, resultare la muerte de la persona ofendida.*

Con la nueva redacción, ya no cabe discusión alguna acerca de si las personas comprendidas son sólo los sacerdotes en sentido estricto, o los ministros de culto en general, aunque se denominasen de otra forma. Incluso el legislador ha tomado la precaución de incluir a los ministros de “algún culto no reconocido”, lo que es de absoluta lógica: no tendría ningún sentido que estuviera en peor situación el ministro de culto que actúa como tal a la luz del día, que el que actúa en infracción a la ley (en la medida en que, como hasta ahora ocurre, la inscripción en el Registro Nacional de Cultos es obligatoria para todas las entidades religiosas, según dispone la ley *de facto* 21.745). Por cierto, en caso de un “culto no reconocido” puede haber alguna dificultad adicional para determinar quién es y quien no es ministro de culto, pero en todo caso será una situación de hecho y prueba.

Lo que no ha variado es el concepto de que la agravante funciona en la medida en que el ministro de culto actúe en cuanto tal o, mejor dicho, que sea conocido como tal por la víctima, o que por su calidad de ministro de culto haya visto facilitado el acceso a ella³¹⁵. Quien hubiese cometido un abuso sexual ocultando su condición de ministro de culto y sin obtener de ella ninguna “ventaja” en su accionar, más allá de lo repudiable del caso y del daño que ocasione a su investidura el posterior descubrimiento de aquella calidad, no parece que quede alcanzado por la agravante.

³¹⁵ En un caso resuelto por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, referido a un pastor evangélico (“Á, F.D. s/recurso de casación”, causa P 114.511, 26/12/12, INFOJUS 25/2/13) se dijo que “el liderazgo religioso destructivo y la manipulación efectuada por el Pastor, más la situación de fragilidad psíquica de las menores, conocida de antemano por Á. en razón de su labor pseudopastoral, acentuó el nivel de coerción espiritual, venciendo su libre determinismo para consentir los actos sexuales”. Se advirtió también que “la especial motivación del autor [que decía a sus víctimas que debían copular con él para obtener la salvación eterna] y la influencia perturbadora sobre el propio sistema de creencias de las menores, trascendieron la órbita sexual, instalándose en la esfera psíquica de las niñas, comprometiendo la natural y normal disposición a una vida sexual sana”. La conducta del abusador, en razón de su condición, fue calificada por los peritos psicólogos como “un proceso de seducción, un proceso de hechizo, proceso de captación o de penetración psíquica”.

La condición de ministro de culto (conocida por la víctima), puede resultar para ésta particularmente paralizante por la confusión que provoca y por el ascendiente natural que ejerce el delincuente sobre los fieles.

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, consideró configurado el delito de corrupción de menores en el caso de un pastor de una iglesia evangélica, que con el objeto de acceder carnalmente en forma reiterada a varias mujeres, algunas menores, a las que dejó embarazadas,

“inculcó en determinados fieles que eligió al efecto, la idea de que era inminente el fin del mundo que sólo se salvarían engendrando hijos de él, al punto que no pudieran negarse ello”³¹⁶.

En el caso se hizo notar que

“la naturaleza de esos actos vinculados a la especial motivación del autor y la influencia perturbadora sobre el propio sistema de creencias de las menores trascendieron la órbita sexual, instalándose en la esfera psíquica de las niñas, comprometiendo la natural y normal disposición a una vida sexual sana”.

En otro caso, se aplicó la agravante a quien

"sometió a las cinco víctimas ya mencionadas a tocamientos inverecundos invocando motivos religiosos en mérito a su calidad de Pastor (equiparable a la de sacerdote que establece la ley), aprovechándose de la confusión de los sujetos pasivos producido por el comportamiento de quien ostentaba semejante investidura, contexto al que debe agregarse la presión psíquica ejercida sobre las mismas cuando las amenazaba de que perderían sus bendiciones divinas si no accedían a sus exigencias", estimando que ello "imprescindiblemente debía surtir efecto en personas de naturaleza profundamente religiosa, que habían depositado toda su confianza en el Pastor de su Iglesia, es decir, en su guía espiritual, entorno arteramente elaborado y aprovechado por el victimario para lograr su objetivo criminal"³¹⁷.

³¹⁶ CS BsAs., 26/12/2012, “causa P.114.511 “Á., F.D. s/recurso de casación”, inédito.

³¹⁷ CS Santa Fe, 8/3/2066, “Giovine, Raúl Alejandro s/abuso deshonesto y exhibiciones obscenas”, Exp.157/05, Tº212, fº 156. En otro caso, también referido a un pastor evangélico, esa condición fue valorada para aumentar el monto de la pena “ya que la posición social que detenta y la confianza que debe suscitar en los creyentes del culto que profesa” lo justificaban (Tribunal Criminal 2 de Jujuy, 5/9/14, “T.N. s/abuso sexual con acceso carnal calificado por causar un grave daño a la salud y por la calidad del autor”, Infojus NV9289).

La situación inversa se plantea si alguien se presenta como ministro de culto, sin serlo realmente. La jurisprudencia ha entendido que también entonces es aplicable la agravante, si esa apariencia fue idónea para generar la confianza de la víctima³¹⁸.

La Ley 27206, de octubre de 2015³¹⁹, ha introducido dos modificaciones significativas en el tema que venimos estudiando. Por una parte, incorporó al Código Penal un agregado al artículo 20 bis, que impone la pena de inhabilitación especial perpetua como accesorio en los casos previstos en los artículos 119, 120, 124, entre otros³²⁰, "*cuando el autor se hubiera valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión*". Si bien no hay mención expresa del "estado", como sería lo más apropiado respecto de los ministros de culto, parece razonable considerarlos incluidos en la previsión.

Por otra parte y en relación a los mismos delitos, se modificó el artículo 67 del Código Penal a fin de establecer que la prescripción se suspende

"mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad".

Esta extensión de la prescripción es correlativa de la que también existe en materia civil, a partir del nuevo Código Civil y Comercial argentino. Según su artículo 2561, cuando se trata del reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces,

³¹⁸ CCasPen Provincia de Buenos Aires, sala V, 30/12/14, "Olivera Jesús María", causa 65556 (INFOJUS NV10313). Al condenado, que se presentaba como ministro de culto evangélico, "*nadie le había dado las credenciales de Pastor, sino que las confeccionó él mismo a los efectos de ser presentadas en distintos templos. De este modo, se advierte que la figura encuadra en los hechos descriptos... donde la confianza que recae sobre la persona que dice representar un culto, opera como un agravante*".

³¹⁹ BO 10/11/2015.

³²⁰ Incluyendo a los casos previstos por artículos 125 bis, 145 bis, 128 y 145 ter a los que nos referimos más adelante.

*"el cómputo del plazo de prescripción comienza a partir del cese de la incapacidad"*³²¹.

La cuestión de los abusos sexuales cometidos por clérigos o ministros de culto ha alcanzado, como es notorio, una inusual relevancia. En distintos países de Europa, y en los Estados Unidos, pero también en América Latina (incluyendo la Argentina), se han multiplicado denuncias de casos reales o presuntos, que han llevado a lo que los sociólogos denominan situación de "pánico moral". Si bien es cierto que solamente un pequeño número de clérigos incurren en estas detestables conductas, algunos casos han tenido una gran notoriedad³²², y merecen el más fuerte repudio de la sociedad y de las confesiones religiosas mismas.

En el caso de la Iglesia Católica, el tema ha sido afrontado ampliamente, en particular a partir del pontificado de Benedicto XVI. Entre los *"delitos más graves cometidos contra la moral"*, que como tales están reservados en su juzgamiento a la Congregación para la Doctrina de la Fe (con un procedimiento y unas sanciones notoriamente severos), se enuncia a *"el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años"* o con *"persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón"*; y *"la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento"*³²³. Se trata de un tema álgido y en constante evolución, en el que durante el pontificado del papa Francisco se han seguido emanando normas y creando organismos encargados de su seguimiento.

La Santa Sede ha dado precisas indicaciones a las Conferencias Episcopales, para la prevención y sanción de delitos de abuso

³²¹ Además, el plazo de prescripción es en este caso de diez años, y no de tres como es el plazo genérico en materia de responsabilidad civil. Esto significa que la acción civil para reclamar la indemnización del daño derivado de un abuso sexual sufrido por un niño de tres años, recién prescribirá veinticinco años después del hecho (dado que la mayoría de edad, punto de partida del plazo extendido de diez años, se alcanza a los 18 años).

³²² Incluso penosamente, en la Argentina, el caso de un arzobispo: CS Santa Fe, 26/12/13, "Storni, Edgardo Gabriel", Exp.367/03, Tº 194, fº 218.

³²³ Benedicto XVI, *"Normae de Gravioribus Delictis"*, 15/7/2010, art.6.

sexual cometido por clérigos³²⁴; y se han dictado numerosas normas canónicas para afrontar estas situaciones³²⁵. La Conferencia Episcopal Argentina adoptó en el año 2013, unas "Líneas-Guía de Actuación en el caso de denuncias de abusos sexuales en los que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas sean menores de edad (o personas a ellos equiparados)"³²⁶, que recibieron la pertinente aprobación de la Santa Sede, y que han sido puestas a prueba en varios penosos casos que se han conocido a partir de entonces.

Los clérigos que han cometido abusos sexuales padecían en muchos casos patologías como la pedofilia o la efebofilia, que han llevado a examinar incluso su grado de imputabilidad; aunque la conclusión en general es que esas desviaciones sexuales no afectan la comprensión del acto y, por lo tanto, la imputabilidad³²⁷.

El eco que esta clase de conductas tiene, explicablemente, en la opinión pública hace que convenga apuntar algunos matices en cuanto a los hechos. Así, cabe notar que los medios de comunicación han dado gran trascendencia a casos de sacerdotes católicos involucrados en estos detestables delitos, y sin embargo la lectura de los repertorios de jurisprudencia muestra la existencia de tantos o más casos protagonizados por pastores evangélicos, no obstante el tamaño mucho más reducido de esa confesión religiosa. Esa comprobación iría en contra de la frecuente tendencia mediática a insistir en una vinculación –que no parece exista en la realidad- entre los abusos sexuales y el celibato sacerdotal católico (sin contar, por otra parte, con que en la enorme mayoría de los casos los abusos se cometen en el ámbito de la propia familia).

Por otro lado, vale la pena también señalar otra diferencia entre los abusos sexuales cometidos por ministros de culto: aquellos de los que fueron responsables clérigos católicos normalmente han sido hechos vergonzantes y ocultos, mientras que en algunos casos donde el autor fue un pastor (o falso pastor) evangélico, su comisión fue presentada abiertamente

³²⁴ "Carta circular" de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 3 de mayo de 2011.

³²⁵ Ver DELLAFFERRERA, Nelson, "*Normas acerca de los delitos más graves reservadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe*", en Anuario Argentino de Derecho Canónico, vol.IX (2002), p.61; y MEDINA, Ricardo, "*Algunas consideraciones acerca de las modificaciones de las normas de los delitos más graves*", en Anuario Argentino de Derecho Canónico, vol. XVI (2009/10), p.121.

³²⁶ Publicadas en AADC XXI (2015), pp.13-34, con una presentación de Hugo von USTINOV.

³²⁷ MEDINA, Ricardo, "*Imputabilidad, eximentes, atenuantes y agravantes en los delitos sexuales de clérigos con menores (primera parte)*" AADC XIX (2013), p.105.

como una exigencia de tipo religioso, como resulta de los casos arriba mencionados.

6.2.2. Violación de secreto religioso:

Como veremos más adelante en un capítulo particular, existe una categoría particular dentro del “secreto” en general, que es el secreto religioso y, más específicamente, el secreto de confesión.

Sin perjuicio de lo que allí diremos, conviene recordar que el art. 156 del código Penal expresa:

“Será reprimido con multa de mil quinientos pesos a noventa mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.”³²⁸.

Como enseña SOLER,

“estado de una persona, en el sentido de este artículo, es una situación social en virtud de la cual ella tiene acceso legítimo a secretos, independientemente del ejercicio de una profesión y también prescindiendo de la naturaleza lucrativa o no lucrativa de la actividad que esa situación comporta, aunque, por regla, el lucro no entra en consideración”, poniéndose como ejemplo precisamente, al sacerdote e incluso a una monja³²⁹.

Continúa diciendo el mismo autor que

“la obligación jurídica del secreto sacerdotal suele ser considerada como más amplia que la obligación canónica referente al secreto de confesión, lo cual no es extraño, pues incluso comprende personas religiosas que nada tienen que ver con la confesión”.

Por lo tanto, si bien el código penal no menciona explícitamente a los ministros de culto como posibles sujetos activos de este delito, al mencionar a quienes “en razón de su estado” conocen y deben guardar secreto, los alude en forma implícita pero evidente. Desde luego, como viene

³²⁸ Texto según ley 24.286 Art.1 (BO29-12-93), que eleva los montos de multa.

³²⁹ SOLER, Sebastián, “Derecho penal argentino”, 1ª ed., Buenos Aires, TEA, 1953, tº. IV, § 107.VIII.

dicho, al no referirse exclusivamente al “secreto de confesión”, quedan implicados no solamente los sacerdotes católicos o quienes se equiparan a ellos en otras iglesias que mantienen el sacramento de la confesión o reconciliación, sino también todos y cada uno de los ministros de culto, de cualquier religión, que en razón de su estado accedan a secretos; e incluso quienes hayan perdido actualmente esa calidad, pero la tenían al momento de tomar conocimiento del secreto.

“No es necesario, por lo tanto, que el secreto haya sido conocido por comunicación verbal y con el pedido de reserva; basta que de ello se tenga conocimiento *por razón* del estado o cargo, esto es, que el ejercicio de la actividad correspondiente suponga el acceso a una esfera de secretos, aun no directamente consistentes en el *secreto* en el cual piensa el que reclama auxilio profesional. Puede tratarse, por lo tanto, ya de un secreto *comunicado*, ya de un secreto *advertido* [...]. Por otra parte, en el caso del secreto *comunicado*, no es necesario que el autor de la confidencia sea el mismo interesado en la reserva. Es necesario, sí, que se trate, en todo caso, de algo secreto, carácter que naturalmente se pierde cuando, ya sea por obra del interesado o por cualquier otra causa, ha trascendido al público”³³⁰.

Explica Soler que el secreto al que alude la ley se refiere a hechos de la vida privada de una persona, no necesariamente ilícitos o inmorales, sino no conocidos en general y sobre cuya reserva exista un interés expreso o presunto de la misma persona.

La ley no exige que la revelación cause efectivamente daño, sino que sea susceptible de causarlo. Y puede ser daño físico o daño moral. Por lo tanto, no se requiere la intención de causar daño, sino la virtualidad objetiva de la revelación de poder causarlo. La acción punible no consiste en divulgar el secreto, sino únicamente en revelarlo, así sea a una sola persona.

Otro elemento del delito es que el autor carezca de “justa causa” para la revelación. Este elemento es de difícil apreciación, especialmente en relación al secreto guardado por ministros de culto. Parece muy difícil en ese preciso caso, que exista una causa justa para revelar el secreto. Seguramente por eso, las leyes procesales (como veremos luego) no permiten relevar al ministro de culto del deber de guardarlo.

³³⁰ SOLER, Sebastián, op. y loc. cit.

6.2.3 Trata de personas y promoción de la prostitución

Una reforma al Código Penal del año 2008, ha incorporado en relación a otros delitos una agravante específica en el caso de ser cometidos por ministros de culto: la ley 26.364 de “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”³³¹, posteriormente modificada por la Ley 26.842 de diciembre de 2012³³².

Tomando como modelo las normas penales que reprimen delitos contra la integridad sexual (posiblemente porque la trata de personas suele estar asociada al ejercicio forzado de la prostitución, incluso infantil), ha introducido en relación a figuras específicas que se insertan en la ley penal nuevas referencias a la posible comisión de delitos por ministros religiosos.

En concreto, dispone ahora el código que

“El que promoviére o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro a seis años de prisión (sic), aunque mediare el consentimiento de la víctima” (art.125 bis, texto según ley 26.842)

La pena se aumenta a cinco a diez años de prisión, entre otras circunstancias, si

“el autor fuere... autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de al guarda de la víctima”

En tanto, el monto de la pena es de diez a quince años de prisión si adicionalmente la víctima fuese menor de dieciocho años (art.126, inciso 2). El sexo de la víctima es indiferente.

Es interesante que no solamente se incluya a los ministros de cultos “no reconocidos”, sino también y juntamente con los ministros de culto a quienes sean “autoridad” de cualquier culto. Se recoge así, a partir de la ley 26.842 que trajo esta novedad, la distinción que hicimos oportunamente, ya que no siempre las autoridades religiosas son al mismo tiempo ministros de culto (y viceversa).

³³¹ Sancionada el 9/4/08, promulgada el 29/4/08, BO 30/4/08.

³³² Sancionada el 19/12/2012, promulgada el 26/12/12, BO 27/12/12.

El artículo siguiente, 127, sanciona con prisión de cuatro a seis años a los proxenetas, caracterizados como

“el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediere el consentimiento de la víctima”

La pena aumenta a cinco a diez años de prisión en varias circunstancias, y entre ellas si

“el autor fuere... autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima”;

Y vuelve a aumentar, a diez a quince años de prisión, en caso de que la víctima fuese menor de dieciocho años. Vale lo dicho en el caso anterior.

Por otra parte, el artículo 145 bis del Código Penal (texto según ley 26.842) reprime con pena de prisión de cuatro a ocho años a quien

“ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediere el consentimiento de la víctima”.

La novedad principal de la ley 26.482 fue –además de elevar las penas-, sancionar incluso cuando la víctima hubiera consentido el hecho. Como en los casos anteriores, la pena se ve agravada (cinco a diez años de prisión) entre otras circunstancias si

“El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima” (art.145 ter, inc.6),

Hay un aumento adicional de pena (ocho a doce años de prisión)

“cuando se lograra consumir la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas”

Y otro si la víctima fuese menor de dieciocho años (diez a quince años de prisión).

En todos los casos, cabe la reducción de penas para quien en el transcurso del proceso o antes de él facilite información que permita

conocer el lugar donde está la víctima privada de libertad, identificar a otros partícipes del ilícito con responsabilidades mayores que el beneficiado por la reducción, o esclarecerlo de alguna manera (art.41 ter del código penal, texto según art.12 de la ley 26.364).

En verdad resulta algo sorprendente la inclusión de los ministros de culto como posibles autores de este tipo de delitos en particular, dado que no hay antecedentes conocidos al respecto. En todo caso, no se entiende bien por qué la pena se agrava para ellos en caso de comisión de estos delitos, y no de otros.

Sin embargo, es del caso recordar que en la época en que cundía la alarma por la actuación de “las sectas”, uno de los crímenes de los que se acusaba a esos grupos de difícil identificación, era la incitación a la prostitución de algunas personas, incluso menores. En realidad, esa perversa conducta solía atribuirse únicamente a algunos grupúsculos marginales, más concretamente a los llamados “Niños de Dios”, que posteriormente cambiaron su nombre a “La Familia”, una comunidad con una poco habitual concepción de las manifestaciones legítimas de afecto como modo de practicar el mandato divino del amor. Respecto de ese grupo hubo en la Argentina una causa penal de gran repercusión en los medios de comunicación, pero que culminó con el sobreseimiento de los acusados, a quienes no se les pudo probar la comisión de los delitos de los que ciertos periodistas o investigadores los acusaban.

Eventualmente, son aplicables también en este supuesto las consideraciones realizadas al tratar el tema de los delitos contra la integridad sexual, acerca del concepto de “ministro de algún culto reconocido o no” como posible autor de los hechos penados, así como de la relevancia del conocimiento que tenga la víctima de tal condición para que la agravante sea efectivamente aplicable.

6.2.4 Otros delitos cometidos por clérigos: matrimonios ilegales.

Antiguamente existieron otros delitos cuya comisión por parte de clérigos estaba expresamente prevista. Así, en el código penal de 1886 se disponía que

“El eclesiástico que a sabiendas autorice un matrimonio ilegal, sufrirá la pena de arresto de tres meses a un año.

Si autorizase un matrimonio ilegal sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber exigido los comprobantes de que los contrayentes están habilitados para el acto, la pena será de arresto hasta tres meses” (art.147).

Esa norma fue dictada cuando estaba vigente el texto original del código civil, que daba validez civil al matrimonio religioso; por lo tanto, estaba referida al matrimonio religioso (católico o no), y no al entonces inexistente matrimonio civil.

La posterior ley 2393, que estableció el matrimonio civil obligatorio, contuvo un artículo que –obviamente en relación a éste- decía:

“Los ministros, pastores y sacerdotes de cualquier religión o secta, que procedieran a la celebración de un matrimonio religioso sin tener a la vista el acta de la celebración del matrimonio [civil], estarán sujetos a las responsabilidades establecidas por el art.147 del código penal, y si desempeñasen oficio público, serán separados de él” (art.110).

La aplicación de esta norma dio lugar a un célebre fallo de la Corte Suprema, que confirmó la condena a prisión impuesta a Jacinto Correa, cura de Punilla, en Córdoba, por la celebración de matrimonios religiosos sin la celebración civil previa³³³, y rechazó la tacha de inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil.

El código penal de 1921 no contuvo ninguna norma equivalente al referido art.147, de modo que para la mayoría de la doctrina la sanción penal por la celebración del matrimonio religioso no precedido por el matrimonio civil desapareció. La cuestión quedó completamente superada cuando la ley 23.515, en 1987, deliberadamente, omitió cualquier norma equivalente al art.110 de la ley 2393.

6.2.5 Derecho comparado

En el Derecho comparado regional hay casos notables de delitos previstos para ministros de culto.

Así por ejemplo, el Código Penal de **Ecuador** amenaza con penas a los ministros de culto por el contenido de sus prédicas:

³³³ CS, “Correa, Jacinto”, 29/7/1893, FALLOS 53-188.

Art. 133.- Los autores de lecciones pastorales, prédicas o sermones, sea cualquiera la forma en que se las diere al pueblo, si fueren encaminadas a desprestigiar a la autoridad, presentándola como contraria a los dogmas, o a la disciplina, o a los intereses religiosos de alguna iglesia o culto, aceptado o tolerado en la República, serán reprimidos con seis meses a dos años de prisión.

Art. 134.- Si el autor de las lecciones pastorales, prédicas o sermones a los que se refiere el artículo anterior, se propusiere con ellas inculcar la desobediencia a la Constitución, o a las leyes, o a las órdenes de la autoridad, la pena será de uno a cinco años de prisión. Si el fin que se propusiere el autor fuere sublevar al pueblo, o poner en armas a una parte de los ciudadanos contra la otra, la pena será de prisión de tres a cinco años. En este caso, si se efectúa la sublevación o la guerra civil, el culpado de haberlas provocado sufrirá la pena de reclusión menor de tres a seis años.

También en **México**, los ministros de culto están amenazados penalmente por el contenido de sus prédicas. Dice el art.404 del Código Penal Federal:

“Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto”.

Sorprendentemente más explícito resulta el Código Penal de la **República Dominicana**:

Art. 201.- Los sacerdotes y ministros de cultos que, en el ejercicio de su ministerio, o en asambleas públicas, pronunciaren discursos vituperando o censurando las medidas del Gobierno, las leyes, decretos o mandamientos de los poderes constituidos, o cualquier otro acto de la autoridad pública, serán castigados con prisión correccional de tres meses a dos años.

Art. 202.- Si en el discurso se excitare de un modo directo a desacatar la ley u otros actos de la autoridad pública, o si sus tendencias fueren sublevar a los ciudadanos, o armarlos unos contra otros, el sacerdote o ministro culpable será castigado con prisión

correccional de seis meses a dos años, siempre que las excitaciones o provocaciones hubieren quedado sin resultado; pero si por el contrario, hubieren dado lugar a la desobediencia, sin llegar a la sedición o rebelión, se le impondrá la pena de destierro.

Art. 203.- Cuando de la provocación o excitación resultare una sedición o rebelión, cuya naturaleza sea tal, que uno o muchos de los culpables sean castigados con penas más graves que las del destierro, esa pena, sea cual fuere, se impondrá al sacerdote o ministro culpable de la provocación o sedición.

Art. 204.-Se impondrá la pena de destierro a todo ministro de un culto que, en cualquier escrito que contenga instrucciones pastorales, se ingiera de una manera cualquiera en vituperar o censurar al Gobierno, o un acto de la autoridad pública.

Art. 205.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Si el escrito contuviere provocaciones directas contrarias al respeto debido a la ley, o a los demás actos de la autoridad pública, o si sus tendencias fueren sublevar a los ciudadanos, o armarlos uno contra otros, se impondrá al ministro que lo publicare, la pena de la reclusión menor.

Art. 206.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Siempre que la excitación o provocación produzca una sedición o rebelión que deba castigarse con penas superiores a la reclusión menor, esas penas, sean cuales fueren, se impondrán al sacerdote o ministro culpable de la provocación.

Art. 207.- Los ministros de un culto que, en cuestiones o materias religiosas llevaren correspondencia con un Gobierno extranjero sin haber dado aviso y obtenido previamente del Secretario de Estado, encargado de la vigilancia de los cultos, la autorización competente, serán por este hecho castigados con una multa de veinte y cinco pesos a cien pesos, y prisión de un mes a dos años.

Art. 208.-Si a la correspondencia de que trata el artículo anterior, se han seguido actos contrarios a las leyes, decretos o disposiciones formales de los poderes del Estado, los culpables serán desterrados, a no ser que la pena señalada por la ley a

los actos que hubieren cometido los culpables, sea superior a la que establece este artículo; pues en este caso se impondrá la más grave.

6.3 Normas contravencionales

En Derecho Penal es un tema disputado el criterio de distinción entre los delitos y las contravenciones³³⁴. No es del caso entrar en esa discusión en este lugar, sino que basta registrar su existencia, y que también en el derecho positivo argentino se encuentra, junto a la legislación penal, una profusa legislación contravencional.

Si bien el dictado del código penal y la consiguiente tipificación de delitos es materia reservada a la Nación por expresa delegación constitucional al Congreso (art. 75 inc.12), las provincias conservan el poder de represión contravencional, esto es, de tipificación y sanción de aquellas conductas que sin llegar a ser delitos (y por tanto, sin merecer penas de la extensión o gravedad de las impuestas por la ley penal), constituyen alteraciones menores a la convivencia y caen dentro del “poder de policía” que genéricamente conservan las provincias³³⁵. Ellas son llamadas a veces contravenciones y otras veces “faltas”, y por eso lo que en alguna provincia se denomina “Código de Faltas” en otro se denomina “Código Contravencional” o “de Contravenciones” (o bien se usan ambos términos en forma simultánea).

El juzgamiento de estas contravenciones está a cargo, según los casos, de jueces locales, o a veces de la autoridad policial. Las sanciones previstas en general son penas de arresto de pocos días, o de multa; y también conllevan obviamente la intervención policial para hacer cesar la contravención.

Es así que las distintas provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han dado códigos o leyes de contravenciones, o de faltas, que eventualmente incluyen tanto normas de protección al ejercicio de la libertad religiosa (y dentro de ella, de protección al ministerio religioso), como la sanción de conductas desarrolladas por ministros de culto, o por quienes sin

³³⁴ Cfr. SOLER, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, tº.I, § 20; FONTÁN BALESTRA, Carlos, “Tratado de Derecho Penal, Parte General”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1977 tº.I, §21.

³³⁵ Sobre los límites y la constitucionalidad del ejercicio del poder contravencional por parte de las provincias, ver SOLER, op.cit., § 20, nº VI.

serlo pretenden pasar por tales. Veremos a continuación algunos ejemplos, que no agotan el elenco total de normas de las distintas provincias.

Conviene decir que en los últimos años la tendencia es a eliminar o reducir estos cuerpos normativos, y dentro de ella, en varios casos se han suprimido tipificaciones de contravenciones de las que aquí nos ocupan.

Claro que no todas las provincias, incluyen en sus códigos de contravenciones o de faltas normas que de alguna manera protejan a los ministros de culto³³⁶.

6.3.1. Obstáculos al ejercicio del ministerio religioso

El Código de Faltas de la Provincia de **Buenos Aires**³³⁷, en su artículo 70, sanciona con pena de multa al

“que con acto, palabra, dibujo o inscripción torpe u obscena ofendiera la decencia pública”, duplicando la pena si el hecho fuere cometido “contra personas del culto”.

Se entiende que “personas del culto” quiere decir ministros de culto o ministros religiosos.

El Código de Faltas de la Provincia de **Santiago del Estero**³³⁸, tipifica como falta sancionable con pena de arresto o multa al hecho de importunar *“a otras personas en lugar público o accesible al público, en forma ofensiva al pudor o al decoro personal”* (art.79)³³⁹, aumentando la pena cuando esos hechos *“se ejecutaren contra personas del culto”* (art.81).

³³⁶ No existen tales normas, por ejemplo, en el Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de **Córdoba** (ley 10326 del año 2015, BO 28/10/2016), que derogó al preexistente Código de Faltas (ley 8431 y modificatorias). Lo mismo ocurre con el Código Contravencional de la provincia de **Jujuy** (ley 5860, BO 20/2/2015) y el Código de Faltas de la misma provincia (ley 219), con el Código de Faltas de **Catamarca** (ley 5171) o con el Código Contravencional de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (ley 1472, BOCBA 24/10/2004) o el Código de Convivencia de **La Rioja** (Ley 9679, ADLA LXXV-D-4174), o el Código de Faltas de **Río Negro** (ley 532, BO 16/1/69).

³³⁷ Decreto Ley 8031/73, t.o. 1987 (BO17/3/87).

³³⁸ Ley 2425 (BO19/8/1953).

³³⁹ El art.80 considera incluida en la figura contravencional a los actos a: “a) El que, en los lugares expresados en él o en el interior de transportes colectivos de personas, se aprovechare de las aglomeraciones o del estrujamiento de pasajeros, para tocar en forma grosera, impúdica, vejaminosa o vulgar a otro; b) El que en lugar público se comporte irrespetuosamente con una mujer sin que ésta hubiere dado motivo para ello, o la siguiere o asediare con impertinencias de hecho, actitudes o palabras que no importen delito.

6.3.2. Uso indebido de hábitos, insignias o títulos religiosos

Hay algunas contravenciones específicamente tipificadas, consistentes en el uso indebido de hábitos religiosos.

Así, el Código de Faltas de la Provincia de **Buenos Aires**, castiga con pena de multa al *“que se vista con hábitos religiosos o uniformes que no le corresponda usar”* (art.92 inc.h). En los mismos términos se prevé esa contravención en el Código de Faltas del **Chaco** (art.59 inc.f)³⁴⁰.

El código contravencional de la provincia de **Chubut**³⁴¹, prevé –dentro de las contravenciones contra la fe y la confianza colectiva- una pena de arresto de quince a sesenta días, para el caso de

“Fingirse funcionario público, de banco oficial o privado, corredor o comisionista de valores o ministro de algún culto reconocido o usar en público hábitos religiosos que no le correspondan” (art.149).

El Código de Faltas de la provincia de **La Pampa**³⁴² castiga con multa o arresto de hasta veinte días, igual que el Código de Faltas de **Mendoza** (art.79)³⁴³ y el de **La Pampa** (art.82 inc.6)³⁴⁴, y en términos similares el de **Santa Cruz** (art.94)³⁴⁵,

“Al que se vista con hábitos religiosos que no le corresponda usar” (art.84 inc.c),

El Código de Faltas de **Santa Fe**³⁴⁶ sanciona con multa y arresto de hasta veinte días al que

“Fingiere ser sacerdote o ministro de alguna religión y causare molestias” (art.79)

³⁴⁰ Ley 4209.

³⁴¹ Ley 4145 (BO4/1/1996), actualizada por ley 4627.

³⁴² Ley 1123 (BO16/6/1989).

³⁴³ Ley 3365 y modificatorias (BO10.1.66).

³⁴⁴ Ley 1123, BO 16/6/89.

³⁴⁵ Ley 233 (t.o. por decreto 1380/61).

³⁴⁶ Ley 10703, t.o. por decreto 1283/2003 (BO 30/5/2003).

El Código Contravencional de **San Luis**³⁴⁷ castiga con arresto y multa tanto a quien *“finja ser ministro de algún culto reconocido”* (art.88.I), como a *“quien utilice en público hábitos religiosos que no le corresponden”* (art.88.II).

El Código de Faltas de **San Juan**³⁴⁸ castiga con multa y arresto de hasta 15 días (art.170) a quien use *“como disfraz vestimentas sacerdotales”* (art.169 inc.f), pero solamente si ello ocurre durante los festejos de Carnaval (art.168).

Al margen de la eventual falta o contravención consistente en el uso de hábitos o insignias a los que no se tenga derecho, esa situación ha sido valorada en la praxis administrativa de la Secretaría de Culto como un elemento para negar el reconocimiento, o cancelar el reconocimiento e inscripción previamente acordados, a grupos religiosos cuyos “ministros” suscitan confusión mediante esa acción. Esto es relativa y lamentablemente habitual por parte de falsos clérigos que se presentan como sacerdotes u obispos católicos, vistiendo como tales, sin serlo, y llevando a la confusión a los fieles³⁴⁹.

Se trata de una cuestión que tiene aristas muy delicadas. Porque una cosa es que una persona se presente como ministro de culto de una confesión determinada, que no lo reconoce como tal, y otra cosa diferente es que la persona tenga detrás de sí efectivamente a una comunidad o conjunto de personas que sí lo reconocen, conformando una comunidad disidente de otra que preexistía. En este caso, el Estado no debería tomar partido, porque se estaría erigiendo en juez de la ortodoxia, violentando la norma de la laicidad. En caso de rupturas o disidencias de comunidades religiosas, debería en principio habilitarse el funcionamiento de ambos grupos. El problema es cómo advertir a las personas para evitar que sean engañadas en su

³⁴⁷ Ley VI-0702-2009 (BO 11/01/2010, ADLA LXX-A-1154). Este código reemplazó al antes vigente por Ley VI-0155-2004 (5550), de abril de 2004, cuyo art.125 era muy similar al actual 88.

³⁴⁸ Ley 6141 (B.O.19/2/91), con modificatorias.

³⁴⁹ A modo de ejemplo, la Resolución 4106/97 de la Secretaría de Culto (BO 13/2/98) canceló la inscripción en el Registro Nacional de Cultos de una llamada “Congregación Misionera del Espíritu Santo”, haciendo mérito entre otras razones de lo siguiente: “Que esta Secretaría ha advertido a la entidad religiosa para que cese en el uso de hábitos o vestimentas religiosas que inducen reiteradamente a confusión con la de otro culto o religión, sin obtener respuesta positiva a las intimaciones formuladas”. Esta “congregación” estaba vinculada con otra (“Congregación agustiniana disidente”) cancelada por similares razones.

buena fe, por el grupo disidente que se presenta como el original sin dar cuenta de esa disidencia³⁵⁰.

6.3.3. Explotación de la credulidad pública

Si bien no se trata de contravenciones cometidas necesariamente por ministros de culto (o al menos, eso es de esperar), existen en varios códigos contravencionales previstas sanciones para quienes explotan indebidamente la credulidad o la fe religiosa de las personas. Se trata de una figura que presenta en sí misma muchas dudas, ya que en cierta forma erige al Estado en juez de las creencias y de su razonabilidad.

Así, el art. 92 del Código de Faltas de la Provincia de **Buenos Aires** sanciona con multa, y con clausura del local utilizado para la infracción, al que

“habitualmente y sin título habilitante con ánimo de lucro o no explote la credulidad pública o la fe religiosa interpretando sueños, formulando profecías o predicciones, invocando espíritus, atribuyéndose milagros o pretendiendo, en cualquier forma la posesión de poderes sobrenaturales”.

Una contravención concebida en iguales términos es castigada por el Código de Faltas del **Chaco** con arresto y multa (art. 59 inc.d), haciendo extensiva la sanción al

³⁵⁰ Se trata de una cuestión frecuente, que también se conoce en el Derecho comparado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos la ha afrontado en varias oportunidades, entre ellas en el caso "Agga v. Grecia", referido a la designación de un muftí de la comunidad islámica. Allí se dijo: "(...) los tribunales domésticos condenaron al actor con el único fundamento de que había dirigido mensajes de contenido religioso y los había firmado como Muftí of Xanthi. Sin embargo, no se discute que el actor tiene el apoyo de al menos una parte de la comunidad musulmana de Xanthi. Desde el punto de vista de la Corte, castigar a una persona meramente por presentarse a sí mismo como líder religioso de un grupo que voluntariamente lo sigue, difícilmente pueda considerarse compatible con las exigencias de libertad religiosa en una sociedad democrática. (...) Por otra parte, la Corte no considera que, en sociedades democráticas, el Estado necesite tomar medidas para asegurar que las comunidades religiosas permanezcan bajo un liderazgo unificado. (...)” (Agga v. Greece (no. 2), 17/10/2002, §§ 58-60). Con esas palabras se reafirmaba la jurisprudencia iniciada en algunas sentencias precedentes. Vid. al respecto, entre la bibliografía española reciente, MARTÍNEZ-TORRON, Javier, *La convivencia entre religiones en la jurisprudencia de Estrasburgo*, en el volumen colectivo "Da Costantino ad oggi: la libera convivenza delle religioni" (a cura di I. Zuanazzi), Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 165-192.

“librero o ambulante que exhiba o venda libros o folletos exclusivamente dedicados a la propaganda de las personas indicadas en el inciso anterior o a la predicción burda de hechos futuros” (art.59 inc.e).

Muy semejante y con sanción de hasta treinta días de arresto, es la infracción tipificada por el Código de Faltas de **Santa Fe** (art.81).

El Código de Faltas de **Santiago del Estero**, castiga con arresto de hasta treinta días, y multa, al

“que profesionalmente explote la credulidad pública o la fe religiosa, interpretando sueños, formulando profecías o predicciones; atribuyéndose milagros, tirando las cartas, evocando los espíritus, indicando tesoros ocultos o pretendiendo en cualquier forma, la posesión de un poder sobrenatural o el que públicamente ofreciere sus servicios como adivino” (art.75).

El Código de Faltas Provincial de **La Pampa**, sanciona con multa o arresto de hasta 20 días,

“Al que profesionalmente, sin título habilitante y con ánimo de lucro, explote la credibilidad pública o la fe religiosa, interpretando sueños, formulando profecías o predicciones, atribuyéndose milagros o pretendiendo, en cualquier forma, la posesión de un poder sobrenatural”, y “también a quienes le sirvan de agentes, comisionistas, o empresarios y en general, a todos los que maliciosamente y con propósito de lucro faciliten el engaño” (art. 84, inc.4 y 5).

En términos similares castigan la explotación de la credulidad, la adivinación y actividades análogas el Código de Faltas de **Mendoza** (art.75), el de **San Juan** (art.118 inc.d), el de **La Rioja**³⁵¹ (art.57), el de **Formosa** (art.87)³⁵² y el de **San Luis** (art.121, 122 y 123).

³⁵¹ Ley 7062, BO 23/2/2001.

³⁵² Decreto/Ley Nº 794/1979 y sus modificaciones.

6.4. Juzgamiento de ministros de culto y ejecución de las penas

Los ministros de culto están sujetos a juzgamiento por parte de los tribunales ordinarios del Estado, al igual que cualquier ciudadano. Volveremos sobre el particular en el capítulo 8.

Del mismo modo, no existe tampoco ninguna norma que prevea algún modo específico o distinto del aplicable a cualquier persona, para el cumplimiento o ejecución de las penas que eventualmente les sean impuestas.

La única relativa excepción en este sentido, está prevista en relación a los capellanes castrenses (católicos), en el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina del año 1957, que creó el entonces llamado Vicariato Castrense y reguló la atención religiosa de las Fuerzas Armadas. Su artículo 9º, primer párrafo, establece:

“Si algún Capellán debiere ser sometido a procedimiento penal o disciplinario de parte de la autoridad militar, ésta pondrá en conocimiento de todo el Vicario Castrense y dispondrá, de acuerdo con el mismo Vicario, que la sanción se cumpla en el lugar y forma más convenientes”.

Como se advierte, la norma no impide el juzgamiento penal o disciplinario (sólo requiere que su promoción sea comunicada al obispo castrense). Pero sí prevé que “el lugar y forma” de cumplimiento de la pena sean acordados entre la autoridad militar y la autoridad eclesiástica.

Volveremos sobre el tema en el capítulo 8.

6.5 Obligación de denunciar delitos.

En la República Argentina la condición de ministro de culto no impone ninguna obligación específica de denunciar delitos llegados al conocimiento de quien ejerce ese ministerio. Obviamente, no estamos hablando acá de la cuestión del secreto religioso o de confesión, sino del mero hecho de haber conocido la comisión de un delito. Sólo los funcionarios públicos -y los

ministros de culto no lo son³⁵³- están obligados a denunciar y promover la persecución del delito.

Una excepción, que no tiene en mira especialmente a los ministros de culto pero sí les puede ser de aplicación, es la que resulta del art.9 de la ley 26.061, de protección de niños, niñas y adolescentes, que dice:

"La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley".

Esta situación puede darse fácilmente en establecimientos escolares, pero también en parroquias, templos o lugares de reunión de grupos juveniles o de niños, de catequesis o formación religiosa, y similares. La denuncia debe hacerla la persona (el ministro de culto, en su caso) a la autoridad administrativa local encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, que será quien haga si corresponde la denuncia judicial.

Desde luego, no hay tampoco impedimento alguno para que el ministro de culto que conozca la comisión de un delito (sea la víctima mayor o menor de edad), haga la denuncia policial y judicial, y en algunos casos puede ser prudente y hasta muy conveniente hacerlo.

Cabe recordar que en el ámbito de la Iglesia Católica sí se ha impuesto la obligación de denunciar a las autoridades civiles, la sospecha de comisión de actos de abuso sexual de menores de edad (hayan sido cometidos por clérigos o por otras personas). Así lo ha expresado públicamente la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, de la Santa Sede³⁵⁴.

³⁵³ Una sentencia judicial claramente errónea en este punto, consideró que un docente de un establecimiento educativo de gestión privada (un seminario, en el caso), que recibía aportes del Estado nacional para el pago de sueldos, "puede o podría ser catalogado como funcionario público". En la misma sentencia se dice que "las autoridades eclesiásticas... estaban obligadas a realizar la denuncia ante las autoridades locales, por estar equiparados a los funcionarios públicos", invocando el art.2 de la Constitución Nacional, el art. 33 del entonces vigente Código Civil que reconocía a la Iglesia Católica como persona jurídica pública, y el art.250 del Código Procesal que exime a los obispos de prestar declaración testimonial en forma personal (C1ªApCrimParaná, Sala I, "Ibarraz s/promoción de la corrupción agravada", 11/6/2014, LL Litoral 2014, 1243). Se trata de un razonamiento claramente equivocado y que no se sostiene.

³⁵⁴ Comunicado del cardenal Sean O'Malley OFM, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, del 15 de febrero de 2016 (Vatican Information Service).

Este compromiso de denunciar tales hechos aberrantes, asumido por el Papa Francisco, supone una compleja situación. Porque más allá de poner en marcha la necesaria persecución penal de hechos que merecen ser castigados, puede implicar la inculpación de la propia Iglesia en el ámbito civil, por la responsabilidad civil derivada de tales hechos.

En otros países sí existe una obligación específica de denunciar, que parece responder a una cierta sospecha ideológica según la cual las iglesias o comunidades religiosas serían lugares propicios para el delito. Así por ejemplo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México, dispone:

"Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, {...} deberán informar de manera inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, {...} deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos" (art.12bis).

6.6 Conclusiones

En materia penal también se aprecia una doble tendencia en la legislación reciente, en relación a la consideración que merecen los ministros de culto.

Una de ellas coincide con la ya vista en materia civil: la preocupación del legislador de utilizar una terminología suficientemente neutra, amplia y abarcadora que permita aludir a todos los ministros de culto, cualquiera sea su confesión religiosa de pertenencia, abandonando otra terminología que parecía tener en mira exclusivamente a ministros del culto católico. Así, ya no se habla de "sacerdote", sino de "ministro de culto".

Por el principio de tipicidad estricta que rige en materia penal, es necesario ser especialmente cuidadoso con el lenguaje. Por ese motivo, el legislador se ha preocupado varias veces de aclarar que se refiere a ministros de cultos "reconocidos o no"; y también de incluir a autoridades o dirigentes de grupos religiosos, sean o no ministros de culto en sentido propio.

La otra tendencia, en este caso inversa a la que vimos en el derecho civil, es a aumentar las referencias a los ministros religiosos. No en cuanto sujetos especialmente protegidos, sino en cuanto posibles autores calificados de delitos. En esta línea, son cada vez más los delitos en los que se agravan las penas si el autor resulta ser un ministro de culto.

Aunque parezca paradójico, esta última tendencia refleja de alguna manera una valoración positiva del ministro de culto. Hay en ella un cierto presupuesto: los ministros religiosos son personas que se encuentran en una posición eminente y se espera de ellos una especial ejemplaridad. Es por eso que si traicionan esa expectativa que la sociedad pone en ellos, resultaría razonable un castigo más severo.

Es de esperar que esta línea de reflexión no se desvirtúe erigiendo a los ministros de culto en un grupo merecedor de una sospecha reforzada.

Capítulo 7. Régimen laboral, previsional y fiscal de los ministros de culto

7.1 Situación laboral de los ministros de culto

Está fuera de toda cuestión que una iglesia o comunidad religiosa puede ser empleador, y de hecho lo es con mucha frecuencia. Por lo tanto, también a las iglesias y comunidades religiosas les cabe la presunción del art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo argentina, según el cual la prestación de un servicio personal a su favor hace presumir la existencia de una relación laboral. Sin embargo, esa presunción no es absoluta, sino que reconoce excepciones.

La cuestión a dirimir es, por lo tanto, si la condición de ministro de culto configura en cuanto tal una de esas excepciones.

En relación al tema del epígrafe es necesario distinguir dos cuestiones diversas. La primera, determinar si la relación entre el ministro de culto y su confesión religiosa de pertenencia, es susceptible de ser encuadrada en el derecho laboral y ser regida por sus normas, o reclama un tratamiento especial. La segunda, comprobar si la condición de ministro de culto supone alguna restricción o particularidad en orden al establecimiento de vínculos laborales con terceros, distintos de la confesión religiosa misma.

7.1.1 En relación con la propia confesión religiosa

La primera cuestión, que no ha sido especialmente considerada por la ley argentina vigente, debe ser respondida en la mayoría de los casos en forma negativa: la relación entre el ministro de culto y su propia confesión religiosa, no es en sí misma una relación laboral, sino en principio una relación *sui generis* regida en primer lugar por las normas que la propia confesión religiosa dicte en ejercicio de su legítima autonomía y, en todo caso y subsidiariamente, por el derecho civil, y no el laboral.

Esta afirmación es plenamente válida en relación a la Iglesia Católica, que cuenta con un cuerpo normativo propio donde se establecen los derechos y obligaciones recíprocos entre Ella y sus ministros de culto.

Como principio, también es aplicable a las restantes confesiones religiosas, aunque será necesario considerar las normas propias de cada una para determinar la naturaleza y alcance de las relaciones que establecen con sus ministros de culto. Esto impide dar una respuesta unívoca y aplicable automáticamente en todos los supuestos. En algún caso los ministros de culto pueden estar orgánicamente integrados a la iglesia o confesión misma, en otros casos pueden ser claramente voluntarios que si bien trabajan para la iglesia o confesión no lo hacen en orden a una remuneración material sino en cumplimiento de un mandato estrictamente religioso; en otras puede encuadrarse el caso en una locación de obra intelectual, material o mixta; y en otras por fin puede ser que sí se apliquen normas laborales, por así determinarlo la estructura y organización propias de esa iglesia o comunidad religiosa o sus normas estatutarias y haberlo ella libremente elegido.

Pero esta última situación es excepcional. Por lo tanto, la regla es que el ministro de culto no es un empleado en relación de dependencia y regido por la ley laboral, pero excepcionalmente puede serlo si la confesión religiosa a la que pertenece decide libremente organizar así sus relaciones.

En todo caso, la figura del ministro de culto habitualmente se asemeja más a la de un profesional unido a la comunidad a la que sirve mediante un contrato de locación de obra, que a un empleado vinculado laboralmente. Y aún ese contrato, está teñido de elementos de tipo espiritual y debe ser interpretado en el marco de la autonomía de las confesiones religiosas.

Como dijimos, el tema no ha sido hasta ahora expresamente considerado por la ley argentina.

Existe algún precedente jurisprudencial, en el que un sacerdote (católico) se consideró “despedido” y demandó el pago de una indemnización laboral, encuadrando en esa rama del Derecho la relación que había mantenido con la parroquia a la que estaba destinado. El demandante celebraba misas, atendía a los fieles, y se desempeñaba como capellán. El Tribunal hizo mérito de las obligaciones propias del estado sacerdotal, que derivan del derecho canónico; que impone una subordinación distinta de la propia del ámbito laboral. Dijo:

“No acredita vinculación contractual de trabajo del capellán interno de una parroquia, su actividad en labores accesorias y complementarias de la sacerdotal, consistentes en las anotaciones en

los libros de bautismos, casamientos, ingresos y egresos y otras similares”³⁵⁵

En la sentencia mencionada, se cita otro precedente resuelto en el mismo sentido, pero referido a un “shogjet” de la religión judía³⁵⁶.

La jurisprudencia también ha desestimado la naturaleza laboral de la relación entre un pastor y la iglesia evangélica a la que pertenecía, resaltando que

“la vinculación que unió a las partes fue la vocación religiosa que llevó al demandante a cumplir los servicios que le fueron asignados, por lo que la provisión de vivienda y, en todo caso, de pago de un viático, no puede erigirse en remuneración, atento que la naturaleza de la relación generada como consecuencia de esa fe religiosa, relativiza la presunción del art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo”³⁵⁷.

Algo similar se resolvió en otro caso, referido a un “diácono”, “anciano” o “pastor” de otra iglesia evangélica, dedicado a “la formación o guía espiritual de quienes concurrían a dicho templo”, destacando el Tribunal que en el caso no existía “relación de subordinación técnica, económica y jurídica sino un trabajo religioso” de carácter voluntario y gratuito³⁵⁸.

Cuando la propia iglesia encuadra a sus ministros de culto como empleados, los registra como tales y los afilia a una obra social

³⁵⁵ CNTrab, sala IV, 20/9/1968, “Rivera, Juan J. c. Parroquia San Ignacio” ED 25-59, con nota de Rodolfo Rodríguez Saa (“La actividad sacerdotal no configura un contrato laboral”). En otro caso, no laboral sino penal, se dijo que “No puede asimilarse la tarea efectuada por el sacerdote (entre otras celebrar misa) con una actividad prestada en servicio o utilidad del principal, por cuanto es de la esencia de la función pastoral considerar a ella como de utilidad para aquellos que asisten al servicio religioso. Asimismo, no es posible medir solamente con términos jurídicos, un aspecto de la vida sacerdotal que está imbuido principalmente de contenido teológico, tal como lo es la ayuda espiritual de las personas, actividad que no es cubierta para satisfacer intereses del Obispado, sino constituye la razón misma de la Iglesia Católica, cual es la santificar almas a través del Evangelio” (STJ Santiago del Estero, 2/12/2002, “Hisse, Enrique”, INFOJUS SUZ0007367).

³⁵⁶ “Toper, Chaim Judel c. Spinelli, Ernesto s/ despido”.

³⁵⁷ CNTrab, sala IX, 30/7/2009, “Insfrán, Juan Carlos c. Asociación Civil Iglesia Jesús es mi Salvador y otros s/despido”, expediente 6924/08, inédito.

³⁵⁸ STJ Corrientes, 14/10/2011, “Gómez, Darío Alberto c. Asociación Evangélica Asamblea de Dios Filadelfia s/indemnización”. En otro caso, se calificó de “trabajo benévolo” hecho al margen de una relación laboral, al prestado a favor de una institución religiosa sin un horario, remuneración y subordinación típicos de un carácter dependiente, aunque la persona recibiese una ayuda económica de subsistencia (CNTrab, sala X, 17/9/2009, “Campos c. Asociación de Beneficencia Cristiana Promotora Desarrollo Integral”, El Dial sumario 16908).

sindical, la cuestión es más difícil. Pero aún en estos casos, la jurisprudencia ha dado relevancia a los compromisos de tipo religioso asumidos por el ministro de culto, como límite a la aplicación de las normas laborales³⁵⁹.

Similar línea de razonamiento siguieron la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y la Corte Suprema nacional, en el conocido caso "Rybar". Se trataba de un conflicto entre un sacerdote católico y su obispo por cuestiones disciplinarias, donde se concluyó que esa era una cuestión directamente excluida de la jurisdicción de los tribunales del Estado y reservada a la jurisdicción eclesiástica; lo que evidentemente descarta la aplicación del derecho laboral a tal relación.

Es cierto que alguna jurisprudencia más antigua reconoció una suerte de relación laboral en beneficio de un sacerdote, pero sólo en orden a permitirle acceder a un beneficio jubilatorio, acreditando servicios como "profesor de religión *ad honorem*" en escuelas públicas y en los términos del art. 8 de la ley 1420, mediante un certificado expedido por la autoridad eclesiástica³⁶⁰. Se trata de una decisión carente de fundamento jurídico, que se explica por la "magnanimidad" con que durante muchos años se repartieron jubilaciones pagadas por el Estado, sin que tuvieran la necesaria contrapartida de aportes previos del beneficiario.

La realización de algunas tareas propias del ministerio de culto en sentido estricto, sin embargo, no impide que pueda considerarse empleado sujeto a las reglas laborales a quien realice aquellas de modo accesorio, pero que como tarea principal cumpla tareas ajenas al culto y propias de una relación laboral.

Así lo ha resuelto la jurisprudencia en el caso de un empleado de la iglesia Apostólica Armenia³⁶¹, quien cumplía tareas de limpieza y mantenimiento de la catedral, limpieza de un salón de actos vecino, ayuda de

³⁵⁹ En un caso se hizo mérito de "una solicitud de ingreso y Órdenes y Reglamentos para Oficiales del Ejército de Salvación, firmado por el reclamante. De dicho reglamento surge que no se podrá mantener la calidad de oficial en casos de divorcio; disposición que la actora conoció al momento de inscribirse... y aceptó". Esa disposición no fue considerada discriminatoria en materia laboral (Juzgado del Trabajo 24 de la Ciudad de Buenos Aires, 10/6/2009, "Buffet de Molina, Juana c. Ejército de Salvación s/despido", Exp. 21265/2007, inédito).

³⁶⁰ CNTrab, sala IV, 28.2.74, "Mantovani, Juan A.", ED 57-406.

³⁶¹ CNTrab, Sala VI, "Grigoryan, Garegin c. Institución Administrativa de la Iglesia Armenia s/despido", exp. 1916/05, 15/5/2008, EIDial 17/7/2008.

cocina y mozo, portería y realización de trámites. La misma persona realizaba también tareas de “ayudante del oficiante en ceremonias religiosas” en calidad de “diácono”, cuidando y acondicionando elementos litúrgicos. En la sentencia de la Cámara del Trabajo, se valoró que “el vínculo que uniera a las partes, iba más allá de la propia liturgia y que excede la mera colaboración vocacional de un fiel a su iglesia”, ya que “el actor además de su colaboración en los actos litúrgicos, cumplía tareas de otra índole, tales como la limpieza, cuidado y conservación de las propias instalaciones del templo”. De donde se deduce que, *a contrario sensu*, si únicamente hubiera realizado tareas litúrgicas propias de la “colaboración vocacional de un fiel a su iglesia”, no le hubiera sido aplicable el estatuto propio de un trabajador empleado.

Es interesante el análisis que hace del tema el Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

“En la práctica de los Estados europeos, las relaciones entre las iglesias y el Estado se rigen por una variedad de modelos constitucionales. En la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa (Bosnia y Herzegovina, Estonia, Georgia, Hungría, República de Moldavia, Montenegro, Irlanda, “la antigua República Yugoslava de Macedonia”, Letonia, Lituania, Alemania, Grecia, España, Portugal, Italia, Polonia, Eslovenia, Francia y algunos cantones suizos), la ley en sí misma no define la naturaleza del estatus jurídico de las relaciones entre una comunidad religiosa y su clero. La comunidad religiosa puede utilizar un contrato de trabajo en las relaciones con su clero, pero no tiene la obligación de hacerlo, y en muchos casos no lo utiliza. Sin embargo, aunque no exista un contrato de trabajo, los miembros del clero normalmente tienen derecho a las prestaciones sociales en las mismas condiciones que otros beneficiarios del sistema de seguridad social. En la minoría de los Estados (Finlandia, Bulgaria, Eslovaquia, Ucrania, Bélgica, Austria, Rusia, Turquía, Luxemburgo, Suecia y algunos cantones suizos), las relaciones se rigen por el derecho laboral aplicable, aunque los miembros del clero están obligados a cumplir con un deber de lealtad de mayor entidad hacia la comunidad religiosa en la que trabajan. Finalmente, en otros Estados (Bélgica, Países Bajos, el Reino Unido), los tribunales nacionales determinan sobre la base de las

circunstancias concretas si la relación de trabajo puede ser clasificada como contractual”³⁶².

La conclusión es que no hay una solución unívoca, pero que la aplicación del Derecho del Trabajo al vínculo entre el ministro de culto y su confesión religiosa de pertenencia es por una parte minoritaria en el conjunto de los Estados, y aún en esos casos, sujeta a modalidades especiales en razón de la naturaleza de los deberes propios de esas personas.

7.1.2 En relación con terceros

Distinta es la cuestión referida a la posible relación laboral de un ministro de culto con un tercero, diverso de la confesión religiosa a la que pertenece en sí misma, y aunque ese tercero sea una persona física o jurídica que pertenezca a la misma confesión religiosa que él.

No existe ninguna restricción en el derecho estatal para que un ministro de culto sea al mismo tiempo empleado (o, en su caso, empleador) según las normas y principios del derecho laboral. Conviene recordar que según el concepto de ministro de culto que hemos aceptado, no es un requisito esencial para revestir tal condición la dedicación exclusiva al ministerio, aunque sí debe existir algún grado de dedicación a él (que en la generalidad de los casos, será al menos preponderante).

La eventual relación laboral mantenida con un tercero, podría acaso significar un conflicto con su comunidad de pertenencia, si produjera alguna incompatibilidad material (por el tiempo que una y otra demanden) o moral (según sea la naturaleza y materia de la actividad laboral paralela al ministerio). Pero en ese caso será la propia confesión religiosa la que deberá tomar una determinación al respecto, sin que pueda ella invalidar la relación laboral entre el ministro de culto y su empleador.

Desde luego, en la medida en que alguien que además y al mismo tiempo es ministro de culto, resulte ser empleado, estará sujeto a los derechos y obligaciones propios de cualquier empleado. Así, tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente al cargo, a las licencias, y demás

³⁶² Sentencia en el Caso Sindicatul “Păstorul Cel Bun” C. Rumanía (*Demanda nº 2330/09*), 9 de julio de 2013, § 61.

beneficios propios de su situación; y al mismo tiempo estará obligado a someterse al poder directivo de su empleador y cumplir las demás obligaciones propias de su condición laboral³⁶³.

7.1.3 Derecho comparado:

En el derecho **ecuatoriano**, se dispone expresamente que

*“no existe relación laboral alguna, entre una entidad religiosa, y sus miembros que desempeñen una actividad religiosa, como entre una diócesis y sus sacerdotes, o entre una orden o congregación religiosa y los miembros de la misma, que realicen actividades de culto, educación, promoción social, etc.”*³⁶⁴

En el derecho **brasileño**, la relación entre el ministro de culto y la circunscripción eclesiástica u organización religiosa a la que sirve no se consideran regidos por el derecho del trabajo; y su vínculo con sus superiores no es laboral o profesional, sino de tipo espiritual. Así lo ha reafirmado la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal:

“El trabajo religioso no configura un contrato de empleo. Las relaciones entre religiosos, no constituyen por lo tanto un contrato de trabajo. Ello se da porque el trabajo religioso no es considerado profesional en el sentido técnico del término. Sus propósitos son ideales, el ejercicio de una vocación. El fin al que se destina es de orden espiritual y no profesional. La actividad religiosa se

³⁶³ Sin embargo, un caso singular y pintoresco está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo de Obreros y Empleados de los Cementerios de la República Argentina. Entre las diversas categorías laborales previstas en el convenio está la “3ª Categoría, Lavador de Cadáveres: Es quien realiza el lavado y acondicionamiento de los difuntos, quedando exceptuados los ministros de culto salvo disposición eclesial en contrario”. Algunas religiones, como la judía o la islámica, tienen prescripciones específicas y estrictas para el lavado de cadáveres antes de su inhumación. Es notable que el convenio colectivo deje a decisión de la confesión religiosa (obviamente, está mal usado el término “eclesial”) la inclusión en el régimen laboral de los ministros de culto que hagan esa tarea, o su exclusión.

³⁶⁴ Decreto Ejecutivo 1682, R.O. 365 del 20/1/2000.

desenvuelve desinteresadamente y no como medio para la obtención de utilidad económica.”³⁶⁵

Es significativa la previsión del Acuerdo entre la Santa Sede y el Brasil, de 2008 (art.16):

“Dado el carácter peculiar religioso y benéfico de la Iglesia Católica y de sus instituciones: el vínculo entre los ministros ordenados y los fieles consagrados mediante votos y las Diócesis y los Institutos Religiosos y equiparados es de carácter religioso y por lo tanto, observado lo dispuesto en la legislación laboral brasileña, no genera, por sí mismo, vínculo de empleo, a no ser que se pruebe la desnaturalización de la institución eclesiástica”.

En **Gran Bretaña**, a partir de una decisión de la Cámara de los Lores del 2006³⁶⁶ la respuesta no es unívoca. En el caso de una ministro de la iglesia Metodista, despedida por su congregación, el Employment Appeal Tribunal decidió que una cosa es la ordenación y otra el nombramiento específico en un puesto, que tiene naturaleza contractual, dada la existencia de obligaciones en materia de remuneración, alojamiento, vacaciones, seguro de salud, procedimientos disciplinarios y pago de gastos, que caracterizan un “contrato de servicios”³⁶⁷. La jurisprudencia tradicional, parte de la presunción de que la relación entre el ministro de culto y su confesión de pertenencia es de naturaleza espiritual y, por lo tanto, no subsumible en el régimen laboral.

En **España**, se afirma que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha mantenido de forma invariable que la relación entre los ministros de culto y las confesiones a las que pertenecen no es de naturaleza laboral, aunque el fundamento de esa afirmación ha ido variando en el tiempo³⁶⁸. La relación laboral sí ha sido admitida, cuando es con terceros, fuera de la propia confesión.

³⁶⁵ Acórdão do Supremo Tribunal Federal, 28-VI-1988, relator Ministro Neri da Silveira, STF-RE-97817-RJ, 1ª Turma, cit. por CALLIOLI, Eugenio, “O estado e o fator religioso no Brasil Republica”, EDUSC, Roma, 2001, p.97 (traducción libre del autor).

³⁶⁶ “Percy v. Board of National Mission of the Church of Scotland [2006] ICR 134, citada en Ecclesiastical Law Journal, Cambridge University Press, Vol.13, nº 3, p.377.

³⁶⁷ Moore v. President of the Methodist Conference, loc. cit en nota anterior.

³⁶⁸ RODRIGUEZ BLANCO, Miguel, “La relación entre el ministro de culto y su propia confesión. Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia inglesa”, en ADEE, vol.XIX (2003), p.355.

Resulta interesante la Directiva de la **Unión Europea** en esta materia³⁶⁹:

"Los Estados miembros podrán mantener en su legislación nacional... disposiciones en virtud de las cuales en el caso de las actividades profesionales de iglesias y de o tras organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones de una persona, por lo que respecta a las actividades profesionales de estas organizaciones, no constituya discriminación una diferencia de trato basada en la religión o las convicciones de una persona cuando, por la naturaleza de esas actividades o el contexto en el que se desarrollen, dicha característica constituya un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de la organización".

La directiva no se refiere específicamente a los ministros de culto, pero los abarca, y legitima el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico estatal de normas internas de las iglesias o comunidades dictadas en ejercicio de su propia autonomía, y la aplicabilidad de esas normas internas para la incorporación y cese de ministros de culto.

En los **Estados Unidos**, también existe una consistente línea jurisprudencial a partir del caso "Watson vs. Jones"³⁷⁰, que sostiene lo que se ha llamado la "excepción ministerial", por la que las normas de derecho laboral no resultan aplicables a los ministros religiosos, sino que la relación entre estos y las iglesias o comunidades a las que pertenecen deben regirse por sus normas propias en el marco de la autonomía religiosa, y por ende quedan excluidas de la revisión de los tribunales civiles³⁷¹. Las cuestiones referidas a la legitimidad de los ministros de culto, son ajenas a los tribunales estatales y reservadas a las autoridades eclesiásticas³⁷².

³⁶⁹ Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

³⁷⁰ 80 U.S. (13 Wall.) 679 (1871)

³⁷¹ Ver al respecto SCHILTZ, Patrick y LAYCOCK, Douglas, "Employment in Religious Organizations", en SERRITELLA, James (ed), "Religious Organizations in the United States", Durham, Carolina Academic Press, 2006, p.527 ss.

³⁷² Ver por ejemplo, "Serbian Eastern Orthodox Diocese", 426 U.S. 696 (1976).

7.2 El caso de los religiosos (católicos)

En el caso de los religiosos (miembros de institutos de vida consagrada) católicos, sí existe en la Argentina una norma positiva expresa, que no ha hecho más que recoger la jurisprudencia previa y concordante en la materia. Se trata del art. 2, segundo párrafo, de la ley 24.483, que dice:

“las relaciones entre los institutos o sociedades inscriptos y sus miembros se regirán por sus reglas propias y por el derecho canónico y estarán sujetas a la jurisdicción eclesiástica”³⁷³.

Es una norma que puede aplicarse analógicamente a otros religiosos y ministros de culto, incluso no católicos.

Ese artículo define la cuestión referida a la relación entre el religioso y el instituto (orden o congregación religiosa, o similar) al que pertenece, excluyendo tal relación del marco laboral y sometiéndola a las normas propias del derecho canónico. El estado religioso impone a quien lo abraza determinadas obligaciones hacia su instituto, que pueden materialmente guardar semejanza con las tareas laborales, pero que no se identifican con ellas por ser radicalmente diferente la causa que las origina.

Antes de esa ley, la jurisprudencia argentina coincidía en que la relación de un religioso o religiosa con su congregación de pertenencia, aunque implique prestar servicios a favor y en beneficio de la congregación, no es una relación de tipo laboral, sino *sui generis*, fundada en el vínculo religioso existente entre ambos. Por lo tanto, el cese de tal relación por la salida del religioso o religiosa del instituto, no es equiparable a un despido ni a un distracto laboral, y no da derecho al ex religioso a ninguna indemnización de esa naturaleza³⁷⁴.

En un caso entre varios similares, se dijo:

“El religioso que ha efectuado votos y se integró a una comunidad religiosa, no se encuentra en relación de dependencia laboral respecto de ésta. No es óbice para esta solución la circunstancia

³⁷³ Para una explicación más extensa de esa ley, ver NAVARRO FLORIA, Juan G. y HEREDIA, Carlos, “Régimen jurídico de los religiosos”, Buenos Aires, Educa, 1997.

³⁷⁴ Entre otros: CNTrab, sala II, 15/9/87, “Pasini, Alicia c. Misioneras del Sagrado Corazón”, ED 127-305, con notas de Germán Bidart Campos y Hugo von Ustinov; CNTrab, sala I, “Quarato, Pabla c. Instituto María Auxiliadora”, 31/12/63, ED 9-5; CNSegSoc., sala II, “Ferrari c. CNPICyAC”, 20/2/92, TySS XX (1993)-62.

de haber prestado servicios docentes como consecuencia de aquella vinculación religiosa”³⁷⁵.

Se resolvió en ese caso que el voto de pobreza, con su esquema de comunidad de bienes, reemplaza a la dependencia económica propia de una relación laboral, mientras que el voto de obediencia lo hace respecto del requisito de dependencia jurídica personal del trabajador, por lo que la relación debe quedar regida por el Derecho Canónico.

Sin embargo, hubo varios casos en los que no se observó la misma regla: cuando no se trataba ya de un reclamo indemnizatorio, sino de un reconocimiento de servicios en orden a la obtención de una jubilación. En ellos, con distintos argumentos contruidos en torno a la igualdad ante la ley, la irrenunciabilidad de los derechos previsionales, y la necesidad de dotar de protección a la vejez, se reconoció el derecho jubilatorio con base en el trabajo prestado como religioso o religiosa³⁷⁶, aunque no se hubiesen pagado los aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

Desde luego, lo dicho acá no implica ninguna incapacidad específica de los religiosos para celebrar contratos de trabajo con terceros, incluso con otra congregación que no sea la propia. Podría haberse argumentado en contra a partir de la incapacidad genérica para contratar del art.1160 del antiguo código civil (que como vimos, ha desaparecido), y también de la necesidad de contar para ello con la autorización de sus superiores, pero ninguno de esos sería un impedimento absoluto³⁷⁷.

Podría darse incluso una relación asimilada al empleo público, aunque en general las normas administrativas que se ocupan de estos vínculos excluyen a los religiosos y clérigos del régimen general, justamente en atención a la particularidad de su condición, como hemos de ver. Nos referimos a los religiosos que trabajan en hospitales y cárceles.

³⁷⁵ CNTrab, sala IV, 23/3/77, “Granata, Mafalda c. Instituto Religiosas de San José”, TySS IV-580 y LT XXV-A-544;

³⁷⁶ CNTrab, sala V, “Ojeda, Ricardo c. Stern, Desiderio”, 23/4/64, ED 12-574; CNTrab, sala III, “Lascurain, Leónidas”, 30.8.73, ED 51-371; CNTrab, sala III, 24.12.75, “Díaz, María”, ED edición especial del 9.6.99; CNTrab, 16/2/76, “Giudizzi, Verónica s/jubilación”, Infojus SUE0003205; CNTrab, sala II, “Lagrange, Zulaica”, 31/10/1979, TySS VII (1980)-781.

³⁷⁷ Respecto del impedimento del art.1160 c.c., se argumentaba que el religioso no podría estar en peor situación que un menor de edad, y que por tanto podía admitirse el contrato de trabajo (SECO, Ricardo, “Personal docente de institutos privados adscriptos, reconocidos o incorporados a la enseñanza oficial”, en Infojus-Derecho del Trabajo, Año II, nº 4, p.206).

La doctrina se ha preguntado si cabe distinguir entre el trabajo realizado en beneficio de la congregación misma (de naturaleza claramente no laboral), del trabajo realizado para un tercero con el que el instituto religioso tiene alguna relación de tipo contractual en cuya virtud sus miembros prestan determinadas tareas (como por ejemplo, enfermería o docencia). Algunos consideran que al encuadrarse el religioso o religiosa en un marco laboral (en un organigrama impuesto por el empleador, con horarios, obligaciones, sometimiento a un poder de dirección...), se estaría en presencia de una relación laboral. Otros en cambio, consideran que aún a pesar de lo anterior, sigue prevaleciendo el hecho de que el religioso que se inserta de ese modo en una actividad de suyo laboral, no lo hace con la finalidad e intención de “vender” su trabajo a cambio de una remuneración, sino con la de colaborar con la misión evangelizadora del instituto al que pertenece³⁷⁸.

En definitiva, son tres las relaciones y situaciones posibles:

a) el religioso que trabaja para el propio instituto, o en las obras propias del instituto (colegios, asilos, hospitales...). La relación suya con el instituto no es laboral ni se rige por el derecho laboral, sino por el derecho canónico.

b) el religioso que trabaja para un tercero. No hay restricción en la ley que le impida hacerlo. El religioso debería contar con autorización de sus superiores, que sin embargo no es un requisito para la validez “civil” (es decir, que sea impuesto por el derecho estatal) del contrato. Lo que el religioso gane con su trabajo, a tenor del derecho canónico, “lo gana para el instituto”.

c) el religioso que trabaja en una institución pública o privada, en virtud de un acuerdo o contrato existente entre esa institución (por ejemplo, un hospital) y el instituto de vida consagrada al que pertenece el religioso. La relación estará regida por lo que diga el propio contrato, pero en principio no habría una relación laboral directa entre el religioso y el establecimiento en el que trabaja, sino que su situación encuadraría en el primero de los supuestos indicados (quien presta el servicio es el IVC, y el religioso se vincula con éste en el marco del derecho canónico, no laboral)³⁷⁹.

³⁷⁸ PERUGINI, Alejandro, “Relación de dependencia”, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, p.153.

³⁷⁹ Así fue resuelto en un caso jurisprudencial: Tribunal del Trabajo 2 de La Plata, 15/2/1950, “Milin, Simica y otras c. Sociedad Protectora de Niños, LL 58-432. Dijo el Tribunal que no había en

La relación jurídica *sui generis* existente entre los religiosos y su instituto, y el reconocimiento de que el trabajo realizado por aquellos en beneficio del instituto o de sus obras es *ratione religionis* y no regido por las normas laborales, es algo también entendido en la doctrina y la jurisprudencia en Italia³⁸⁰, España³⁸¹ e incluso Francia³⁸².

7.3. Situación previsional de los ministros religiosos

En las sociedades modernas, se procura que las personas al cabo de su vida laboral, esto es, en su vejez o cuando alguna situación de salud le impida trabajar para ganar su sustento, reciban un ingreso suficiente para subvenir a sus necesidades. El Estado toma normalmente a su cargo la organización del régimen previsional, que con diversas modalidades posibles asegura ese resultado para la mayor cantidad posible de personas.

También normalmente, la financiación del régimen previsional requiere de aportes de los trabajadores activos, sea para financiar las jubilaciones o retiros de quienes han entrado en la pasividad (régimen de reparto), sea para financiar en forma diferida su propio retiro cuando llegue el momento (régimen de capitalización). En cualquier caso, el derecho a la prestación previsional se adquiere como consecuencia de haber realizado aportes durante el tiempo de actividad laboral.

ese caso “una entidad empleadora y un grupo de dependientes asalariados”, sino dos personas jurídicas (la Congregación, y la institución con la que había celebrado un acuerdo para dar servicios educativos en un hogar de niños). “La labor de las Hermanas, incluida la Superiora, se ha desarrollado dentro del marco de la actividad propia de la Congregación a la que pertenecen... La tarea de las religiosas, efectuada –sin que importe el lugar– en el seno de su congregación, en cumplimiento de sus fines y bajo la dirección de la autoridad de la misma, se halla regida por el derecho canónico y no por el derecho del trabajo”.

³⁸⁰ Ver BOTTA, Raffaele, "Dieci anni di giurisprudenza su fattore religioso e diritto del lavoro", QDPE 2001/3, p.729 y sus citas.

³⁸¹ Cfr. Corte Constitucional española, Sala 1a., 28 de febrero de 1994, QDPE 1998/3, p.773.

³⁸² Cfr. Cour de Cassation française, Assemblée Plénière, 8 de enero de 1993, QDPE 1995/3, p.884.

En el caso de los ministros de culto se dan varias singularidades. En primer lugar, como queda dicho antes, ellos no son (salvo excepciones) empleados de las confesiones religiosas, sino que tienen con ellas un vínculo *sui generis*. Ese vínculo tiene una intensidad especial, que normalmente da lugar a una obligación por lo menos moral, y muchas veces jurídica a tenor del derecho interno de la propia comunidad religiosa, en cuya virtud ésta asume el deber de hacerse cargo de su manutención, y la de su familia si fuera el caso, aún después de terminada su vida activa.

Así por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, el derecho canónico impone a los obispos el deber de *“proveer a la conveniente sustentación y vivienda”* de los párrocos renunciando, y a la Conferencia Episcopal dictar normas al respecto (canon 538)³⁸³, y dispone que

“se ha de cuidar igualmente de que [los clérigos] gocen de asistencia social, mediante la que se provea adecuadamente a sus necesidades en caso de enfermedad, invalidez o vejez” (canon 281).

Corresponde a la Conferencia Episcopal cuidar

“que haya una institución que provea suficientemente a la seguridad social de los clérigos” cuando ella no esté convenientemente organizada por el Estado (canon 1274 § 2).

“la Conferencia Episcopal debe cuidar de que se disponga lo necesario para la conveniente y digna sustentación del Obispo dimisionario, teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la misma diócesis a la que sirvió” (canon 402), lo que es aplicable también a los obispos que integran institutos de vida consagrada (canon 707).

En la Argentina, la Iglesia Católica ha organizado la previsión social del clero mediante la creación de una mutual conocida como “FIDES” (Fondo Integral de Solidaridad) que funciona como un organismo interno de la Iglesia, dependiente de la Conferencia Episcopal. A ella deben contribuir obligatoriamente todos los sacerdotes del clero secular, y funciona como un

³⁸³ En el caso de la República Argentina, por Decreto General aprobado en la 58ª Asamblea Plenaria de la CEA, promulgado el 6 de marzo de 1990, se deja la cuestión en manos del obispo diocesano quien *“tendrá en cuenta también el aporte de previsión social (Fondo Integral de Solidaridad) u otra jubilación, o los ingresos, o los medios personales o familiares, que tenga el presbítero renunciante, así como las tareas ministeriales que eventualmente continúe realizando”*, y además recomienda *“crear en cada diócesis un fondo destinado a estas necesidades de vivienda y sustentación, como también cuidar con particular esmero todo lo referente a la asistencia social (mutual) de los ya renunciando”*.

régimen de reparto (no de capitalización), de manera que con los aportes de los sacerdotes activos se pagan los haberes de retiro (“subsidios por edad”) de los ancianos. La edad de retiro de los sacerdotes según este régimen (a partir de la cual dejan de contribuir y comienzan a cobrar el subsidio correspondiente), era de 65 años, pero a partir del año 2008 ha sido elevada a 68 años. Este es una especie de sistema de jubilación privada, que funciona al margen del estatal.

No es posible establecer una norma general aplicable a todas las demás confesiones religiosas, pero es de suponer que ellas se ocupan de alguna manera, de quienes han dedicado su vida al ministerio religioso, cuando por razones de edad o de salud no están ya en condiciones de sustentarse a sí mismos. En el caso de algunas iglesias evangélicas, han optado por inscribir a sus pastores como empleados, a fin de dotarlos de aportes previsionales y obra social (asistencia médica). Es una opción sin duda respetable, pero deberían verse con cuidado las consecuencias que ella trae aparejadas al desfigurarse la naturaleza del vínculo. Lo que puede hacerse patente en caso de conflicto de intereses o abandono del ministerio.

Desde otro punto de vista, en la medida en que los ministros de culto prestan un servicio que es considerado valioso por la comunidad, puede justificarse que sea ésta, por medio del Estado, quien al menos en alguna medida se haga cargo de su sustento en su etapa de vejez o incapacidad.

7.3.1. Régimen ordinario de jubilación estatal

En la Argentina el régimen previsional, desde su aparición en el curso del siglo XX y su posterior generalización, ha brindado a la situación de los ministros de culto cierta consideración particular.

La ley 24.241, que desde 1993 organizó el Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones prevé que *“los miembros del clero y de organizaciones religiosas pertenecientes al culto católico apostólico romano, u otros inscriptos en el Registro Nacional de cultos”*, aunque no realicen una labor remunerada que los obligue a aportar al sistema previsional, pueden incorporarse a él voluntariamente (art.3º). Esta norma es concordante con el

antiguo artículo 3 de la hoy derogada ley 18.038³⁸⁴, que por muchos años organizó el régimen provisional de los trabajadores autónomos.

Esta situación no ha variado por la profunda modificación impuesta al régimen mediante la ley 26.425, de diciembre de 2008, que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), eliminando el régimen de capitalización que había creado la mencionada ley 24.241.

Esto quiere decir que, a diferencia de la generalidad de las personas que realizan tareas remuneradas con o sin relación de dependencia, la cotización o aporte al régimen provisional no es obligatoria para los ministros de culto, sino voluntaria y optativa.

Naturalmente, si además de su tarea ministerial realizan otra actividad remunerada o ejercicio profesional, estarán obligados a hacer los aportes que correspondan a ella como cualquier otra persona, sin que su condición de ministros de culto los exima. La voluntariedad del aporte está referida únicamente a la actividad ministerial, sin que constituya una exención subjetiva de carácter general que les permita evitar el aporte en caso de actividades simultáneas o paralelas.

La opción por realizar aportes, y la responsabilidad de ingresarlos, es del propio ministro y no de su confesión de pertenencia, aunque nada impide que ésta asuma como propia esa responsabilidad y se ocupe de realizar los aportes. Esa sola situación no convierte al ministro de culto en empleado en relación de dependencia, sin perjuicio de que unida a otros indicios sí pueda ser indicativa de tal relación.

En el caso particular de los religiosos, religiosas o sacerdotes católicos (por definición, célibes y sin descendencia)³⁸⁵, tiene sentido hacer notar que hasta la ley 24.241, a su muerte normalmente los aportes jubilatorios que habían hecho se perdían, porque no quedaba ningún familiar

³⁸⁴ “La afiliación al presente régimen es voluntaria para: ... d) Los miembros del clero y de comunidades religiosas pertenecientes al culto católico o a otros cultos”. Según la jurisprudencia, “Los miembros del clero y de las comunidades religiosas pueden incorporarse a nuestro sistema previsional en forma voluntaria y dentro del esquema protectorio impuesto por la ley 18038 (art.3, inc.d, ley 18037), lo cual revela la intención legislativa de tutela, pero considerando dicha relación ajena al ámbito propio del derecho laboral” (CNSegSoc., sala II, 20/2/92, TySS XX-62).

³⁸⁵ En el caso español, el Real Decreto 1613/2007 modificó a uno anterior (2398/1977) previendo ciertas prestaciones de seguridad social en beneficio de familiares de clérigos católicos (cfr. VIDAL GALLARDO, M. M., *Comentarios a tres R.D. de 2007 sobre seguridad social de los ministros de culto*, en REDC, 64 (2007), pp. 819-44).

con derecho a pensión. En el régimen de esa ley, seguía ocurriendo lo mismo si el religioso o religiosa o sacerdote permanecía en el régimen de reparto. Pero si había optado por incorporarse a una Administradora de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), constituyendo una “cuenta de capitalización” en la que se acumularan sus aportes y las rentas que ellos dieran, si a la muerte del sacerdote, religioso o religiosa no existía (como ordinariamente ocurre) viudo, viuda, conviviente o hijos incapaces con derecho a pensión, la ley disponía que *“se abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente”* (art.36), que perfectamente podía ser un heredero testamentario designado por él, como podía ser el instituto religioso o la iglesia a la que pertenecía. Lo mismo ocurría si el sacerdote o religioso había accedido a un retiro por invalidez (art.105). Esta posibilidad se ha perdido a partir de la reforma previsional de 2008, que suprimió el régimen de capitalización.

Cabe recordar que una antigua pero reiterada jurisprudencia, otorgó a religiosos católicos el derecho a obtener una jubilación aún sin haber realizado aportes, y sin ser la relación de ellos con su instituto de naturaleza laboral³⁸⁶. Se trató de decisiones más fundadas en la equidad que en derecho estricto, que a partir de una consideración más ajustada a Derecho fue abandonada ya hace tiempo por los tribunales, negando el derecho a jubilación a quien eligió no hacer los aportes correspondientes³⁸⁷.

³⁸⁶ “Tiene derecho a la jubilación la monja que ha prestado servicios para una orden religiosa, como componente de la misma. Las normas del derecho canónico no pueden afectar los derechos irrenunciables que brinda el régimen previsional a todos los trabajadores” (CNTrab, sala III, 30/8/73, “Lacurain”, TySS, tºI, p.293). “La religiosa que integra la congregación de Carmelitas descalzas de clausura que subsiste gracias a la caridad pública y a pequeños ingresos provenientes de servicios que realiza a terceros como confección de guardapolvos, impresión de formularios para escuelas e iglesias, almidonado y planchado de delantales escolares, se encuentra comprendida dentro de ámbito de la ley 18.037” (CNTrab, sala II, “Lagrange, Zulaica”, 31/10/1979, TySS VII (1980)-781); “Es procedente el beneficio jubilatorios solicitado por una religiosa profesa, toda vez que cumpla tareas por cuenta ajena” (CNTrab, sala IV, “Guidizzi, Verónica”, 16/2/76, Infojus sumario E0003205).

³⁸⁷ CNSeg.Soc., sala II, 20/2/1992, “Ferrari c.CNPICyAC”, TySS XX (1993)-62.

7.3.2. Regímenes especiales no contributivos

Junto al régimen previsional general, existen en la Argentina algunos regímenes especiales, no contributivos, que benefician exclusivamente a algunos ministros de culto pertenecientes a la Iglesia Católica.

El fundamento de estos regímenes es la obligación genérica de “sostener al culto católico” impuesta al Gobierno Federal por el art.2 de la Constitución Nacional, que históricamente se ha concretado, entre otras prestaciones, en el sostén de determinados dignatarios de la Iglesia. Se trata de una obligación que había asumido el Estado cuando en el año 1821, privó a la Iglesia de muchos bienes y, fundamentalmente, de los ingresos y rentas que le eran propios³⁸⁸.

La subsistencia de estos regímenes no contributivos, que son “jubilaciones de privilegio”, resulta irritante para muchos no católicos. Es por eso que podría ser sustituida con ventaja por una asignación global para la Iglesia Católica, dejando a cargo de ella la atención concreta de las necesidades de sus obispos o ministros de culto retirados. Tal asignación global podría incluso preverse en beneficio de otras confesiones religiosas, guardando la debida proporcionalidad.

7.3.2.1 Asignación para los obispos eméritos

La ley 21.540³⁸⁹ establece una asignación especial para los arzobispos y obispos diocesanos católicos que cesen en sus cargos por razón de edad o de invalidez, u obispos eméritos. La norma textualmente dice:

“Los Arzobispos y Obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano, y el Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas, que cesen en dichos cargos por razones de edad o de invalidez, gozarán de una asignación mensual y vitalicia equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera

³⁸⁸ Sobre la génesis, interpretación y aplicación del artículo 2 de la Constitución Nacional, ver NAVARRO FLORIA, Juan G., *“El financiamiento de las confesiones religiosas en la República Argentina”*, en *“Il Diritto Ecclesiastico”*, Anno CXVII (2006), p.277, Milano.

³⁸⁹ BO 3/3/1977. Esta ley no fue sancionada por el Congreso sino por la última dictadura militar, pero ha mantenido su vigencia en forma indiscutida, y fue ratificada por el Congreso al incluirla entre las leyes vigentes en el Digesto Jurídico Argentino (ley 26.939). Lo mismo ocurre con las demás que regulan aportes directos del Estado a la Iglesia Católica.

Instancia en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional” (Artículo 1º).

“Los Obispos Auxiliares de Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano, el Pro-Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas con dignidad episcopal, y los Obispos Auxiliares para las Fuerzas Armadas, que cesen en dichos cargos por razones de edad o de invalidez, gozarán de una asignación mensual vitalicia equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”. (Artículo 2º).

“Gozarán de esta asignación los prelados mencionados en los artículos anteriores, que acrediten setenta y cinco (75) años de edad o incapacidad, y que hubiesen cesado en sus cargos por alguna de dichas causales”. (Artículo 3º).

La ley prevé en su artículo 5º que

“La asignación será móvil, y su reajuste se efectuará cada vez que se modifique la remuneración correspondiente al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia”,

Sin embargo, en la práctica el haber que perciben los obispos “jubilados” es inferior a ese, lo que se mantiene en el tiempo porque no hay reclamos de los beneficiarios. La ley también dispone (art.6º) que

“El goce de esta asignación será incompatible con toda jubilación, pensión, retiro, beneficio graciable o sueldo nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla o los otros beneficios, según les resulte más favorable”, y que “para tener derecho al goce de esas asignaciones es condición que el beneficiario resida en el país”.

El beneficio fue suprimido junto con la mayor parte de las jubilaciones de privilegio por la ley 23.966 (art.11), y restablecido casi inmediatamente por la ley 24.019, que dispuso que fuera atendido a partir de entonces con partidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto³⁹⁰.

³⁹⁰ Lo que implica la derogación del art.4º del texto original, en cuya virtud era el sistema previsional quien cargaba con el gasto de estas asignaciones; y pone de manifiesto el sentido y fundamento de la asignación, que no es un beneficio jubilatorio de privilegio para la persona de los obispos, sino una de las formas de cumplir el Estado la obligación de sostenimiento del culto

Se trata de "jubilaciones" o más apropiadamente asignaciones que no requieren ningún aporte previo (son las únicas que actualmente existen de este tipo, fuera de las pensiones graciabiles que otorga el Congreso, y las de los sacerdotes referidas más abajo). Para tener derecho a ellas, se requiere del cese por razón de edad o de invalidez (que normalmente es comunicado o certificado por la Nunciatura Apostólica, dado que es el Papa quien acepta la renuncia o dispone el cese de los obispos católicos). No se requiere, en cambio, que el obispo haya desempeñado su ministerio durante un tiempo determinado, por lo que basta con que lo haya hecho durante algunos días para adquirir el derecho al beneficio (a diferencia de lo que veremos luego en relación a los sacerdotes seculares).

Naturalmente, el goce de la asignación es voluntario, por lo que puede ser renunciado por el beneficiario, o directamente no ser solicitado por él, como ha sucedido en algunos casos.

Las condiciones de su otorgamiento, que es dispuesto por la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, no han sido objeto de reglamentación más allá de lo que surge de la propia ley. El pago también se realiza a través de ese ministerio y con fondos provenientes de su presupuesto, por intermedio de la Conferencia Episcopal Argentina, quien distribuye a los beneficiarios lo que a cada uno corresponde.

No existe ningún beneficio similar para dignatarios religiosos de otros credos. Esto se debe a que el fundamento de la asignación es la obligación constitucional de sostener el culto católico (art.2 de la Constitución Nacional), que más allá de la sensibilidad actual al respecto tiene sólidos fundamentos históricos que la justifican³⁹¹.

católico, en beneficio de la Iglesia misma, que por esta vía se ve aliviada de la carga de mantener a los obispos eméritos.

³⁹¹ Ciertamente, la obligación que pesa sobre el Gobierno Federal de "sostener el culto católico", y cuyo cumplimiento es mínimo o apenas simbólico, no obsta a que por vía legislativa o reglamentaria el Estado pueda, si lo quisiese, hacer aportes también a otras confesiones religiosas.

7.3.2.2. Jubilaciones para sacerdotes:

La ley 22.430³⁹² instituye unas asignaciones o jubilaciones graciabiles (sin ningún aporte previo) para “*sacerdotes seculares del Culto Católico*”, en los siguientes términos (artículo 1):

“Los sacerdotes seculares del Culto Católico, Apostólico Romano, que tuvieren cumplida la edad de sesenta y cinco (65) años o se hallaren incapacitados y que hubieran desempeñado su ministerio en el país por un lapso no inferior a cinco (5) años, no amparados por un régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva, tendrán derecho a una asignación mensual vitalicia equivalente al haber mínimo de jubilación de régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia”

Posteriormente, la ley 24.241 (art.163) elevó la edad para adquirir este beneficio a 70 años. Sigue diciendo la ley (artículo 2) que

“Esta asignación será compatible con cualesquiera otros ingresos que mensualmente no excedan del doble del haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia. Si dichos ingresos excedieran el monto indicado, la asignación se reducirá en la medida del exceso. Para tener derecho al goce de esas asignaciones es condición que el beneficiario resida en el país”

Este beneficio, que cobran unos pocos sacerdotes en todo el país, es equivalente a una jubilación mínima del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia (lo que, por supuesto, no implica considerar a los sacerdotes trabajadores de ese tipo). De ella están excluidos los religiosos, aunque sean sacerdotes, pues sólo está prevista para “sacerdotes seculares” (entre los que cabe incluir, porque la norma no distingue, a los de rito oriental).

El fundamento para la existencia de esta asignación, lo mismo que para la correspondiente a los obispos, es la obligación de “sostener el culto católico” impuesta al Gobierno Nacional por el art.2 de la Constitución Nacional; a la que podría añadirse el deber de gratitud de la comunidad hacia personas que han dedicado su vida al servicio de los demás, y llegan a la edad de

³⁹² También derogada por la ley 23.966, restablecida en su vigencia por la ley 24.019 y ratificada por la ley 26.939.

jubilación sin posibilidad de obtener otro beneficio más que el muy modesto que esta ley organiza.

En razón del fundamento recién apuntado, la ley 24.019 puso a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el otorgamiento y el pago de estos beneficios. Posteriormente, la Secretaría de Culto, competente para la ejecución de todo lo relativo al sostenimiento del culto católico, reglamentó la forma de acceder al beneficio, mediante la resolución 1661/2000³⁹³, que dispuso que:

a) El beneficio debe ser pedido por el propio interesado, directamente a la Dirección General de Culto Católico, presentando una certificación expedida por el obispo diocesano u ordinario propio donde conste la condición de sacerdote del peticionario, y el tiempo de ejercicio de ministerio en la diócesis. También debe presentar copia auténtica de su Documento Nacional de Identidad, y de su partida de nacimiento (esto para acreditar la edad requerida).

b) También debe presentarse una declaración jurada que contiene los datos de identidad y de ejercicio del ministerio por parte del peticionante, así como de sus ingresos regulares (lo que permite verificar el cumplimiento de los restantes requisitos legales, y determinar el monto que corresponda abonar). En ella el peticionante debe manifestar bajo juramento no hallarse comprendido en ninguna causal de incompatibilidad con el beneficio pedido.

c) Esa declaración debe estar certificada por el obispo o representante legal de la diócesis del peticionante, quien debe también asumir el compromiso de informar cualquier circunstancia que haga procedente la suspensión o baja del beneficio. Esto se debe a que anteriormente se habían encontrado varios casos de personas que cobraban este beneficio sin tener derecho a él y sin que los obispos diocesanos se hubiesen dado por enterados. Al asumir este compromiso, se espera que colaboren con el Estado en el control de los abusos que pudieran cometerse. La resolución (art.4º) impone a los obispos la obligación de informar dentro del mes calendario de ocurrido el fallecimiento de los beneficiarios, o cualquier otra circunstancia que de lugar a la baja del beneficio. La omisión de hacerlo hace responsable a la diócesis y la obliga a reintegrar las sumas indebidamente percibidas, que podrán ser descontadas de otras que la misma diócesis tenga a percibir en el futuro.

³⁹³ BO 17/10/2000.

d) La Secretaría de Culto es quien otorga el beneficio, y lo paga mensualmente por intermedio de la Conferencia Episcopal. Ésta a su vez lo paga al interesado directamente o por medio de la diócesis.

e) Sin perjuicio de la obligación de información de la diócesis ya mencionada antes, los interesados deben informar a la Secretaría de Culto antes del 31 de marzo de cada año, mediante declaración jurada con firma certificada por el obispo, que continúan comprendidos en las condiciones legales para recibir el beneficio. La omisión de presentarla determina la suspensión del pago del beneficio, hasta que ella se subsane (art.3º).

7.3.2.3 ¿Pensiones derivadas de estos beneficios?

Si bien este tipo de asignaciones, por su naturaleza específica, no deberían dar lugar a beneficios derivados, y ni la ley ni la reglamentación prevén que eso ocurra, en un extraño y único caso sí se ha reconocido una pensión derivada de una jubilación episcopal.

En tanto las asignaciones para obispos eméritos católicos, y para sacerdotes seculares católicos, tienen por fundamento la obligación constitucional del sostenimiento del culto, el legislador no ha previsto la posibilidad de que ellas (que no son en rigor jubilaciones, por más que así se las mencione a veces en forma coloquial), den origen a una pensión derivada a favor de causahabientes de sus titulares. Esto es, al fallecer el titular del beneficio, éste se extingue sin dar lugar a otro derivado.

Dado que sus beneficiarios son sacerdotes u obispos católicos alcanzados por la ley canónica del celibato, esto no debería dar lugar a dificultades, ya que estos clérigos no deberían dejar a su muerte esposa o hijos menores, ni normalmente por razones de edad padres que estén a su cargo. Sin embargo, hipotéticamente algo así podría ocurrir (incluso sin violentar las normas canónicas), si se tiene en cuenta que no es imposible la adopción de hijos por parte de los clérigos, e incluso que existen excepciones al celibato, como pueden ser los sacerdotes de rito oriental (aunque en la Argentina las eparquías o exarcados orientales no ordenan hombres casados, podría haber algún venido del extranjero); y también el caso de sacerdotes anglicanos casados recibidos en la Iglesia Católica, por ejemplo.

El caso se presentó con ocasión del fallecimiento del antiguo obispo de Avellaneda, Mons. Jerónimo Podestá, quien luego de cesar en su función y dejar el ministerio (aunque sin haber sido “reducido al estado laical”, situación en principio no prevista para obispos), contrajo matrimonio

civil. Su viuda, demandó a su fallecimiento el otorgamiento de la pensión derivada del beneficio que oportunamente se había dado al obispo según la ley 21.540³⁹⁴. Ante la negativa inicial del Estado, la viuda recurrió al Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), que apoyó su reclamo; y promovió una demanda judicial. El Estado Nacional se allanó a la demanda³⁹⁵, por lo que el juicio concluyó con una sentencia favorable a la recurrente que ordenó otorgarle la pensión solicitada³⁹⁶.

7.3.2.4 Regímenes provinciales

Algunas provincias, especialmente aquellas que por mandato constitucional deben cooperar al sostenimiento del culto católico, han establecido algunos beneficios adicionales en su propio territorio.

En la **Provincia de Buenos Aires**, la ley de facto 9273³⁹⁷, establece, a cargo del Instituto de Previsión Social de la provincia (art.8), un

“régimen especial de subsidios que habrán de otorgarse a las religiosas de las distintas congregaciones ordenadas por la Iglesia Católica, que presten servicios en instituciones oficiales de la provincia y cuya relación con ésta se mantenga al margen de los regímenes establecidos para los agentes de la administración general de la provincia” (art.1),

³⁹⁴ La “jubilación” misma había tenido sus particularidades. El obispo Podestá fue removido de su cargo por la Santa Sede en 1969 a raíz de su relación con la que luego fue su esposa, es decir, no cesó ni por edad ni por invalidez. No obstante, en 1980 y con aval de la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal accedió a la asignación de la ley 21.540 por hallarse “incapacitado” para el cargo (Resolución 142/81 de la Subsecretaría de Seguridad Social, del 24/6/81).

³⁹⁵ Resolución 209/05 del 22 de diciembre de 2005, expediente 44085/2000. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, interpretando que la asignación de la ley 21.540 se “asimila” a “una pensión de naturaleza asistencial comprendida dentro del instituto de la seguridad social”, y que las prestaciones de esta naturaleza deben interpretarse con amplitud, dispuso ese allanamiento.

³⁹⁶ La sentencia hizo lugar a la demanda reconociendo “el derecho a percibir la asignación mensual y vitalicia establecida en ley 21.540 en su carácter de cónyuge supérstite” del obispo fallecido (sentencia firme del 29/3/06 en autos “Luro Rivarola, Clelia Susana c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza”, Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nº4, sentencia 19.234, inédita). Finalmente, por Resolución 2594/06 del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se otorgó a la viuda la pensión vitalicia solicitada, con retroactividad a la fecha de fallecimiento del obispo y previa renuncia de ella a otra pensión graciable que le había sido anteriormente otorgada.

³⁹⁷ BO 20/3/79.

Como se ve no está destinado estrictamente a ministros de culto, sino a religiosas católicas (que la ley incorrectamente dice “ordenadas” como tales). Es otorgado a las religiosas que tengan como mínimo 55 años de edad, veinticinco o más de servicios efectivos, continuos o alternados, en ese tipo de funciones –por ejemplo, tareas en hospitales-, o sesenta años de edad y veinte de servicios continuos o alternados, y en todos los casos que estén prestando servicios al momento de solicitar el beneficio (art.2); o afectadas por incapacidad total, permanente y absoluta para el desempeño de esas tareas (art.5). Como tareas computables valen también las desarrolladas en “*instituciones oficiales nacionales, provinciales, municipales o de otras provincias*” (art.3).

El beneficio otorgado equivale a una jubilación mínima vigente en la provincia (art.4). También se prevé un subsidio extraordinario y por única vez, equivalente a diez haberes jubilatorios mínimos y acumulable a la jubilación por invalidez, para

“las religiosas que por enfermedad profesional o accidente sufrido en o por el desempeño de las tareas mencionadas en el art.1, resultaren incapacitadas en forma total, permanente y absoluta” (art.6).

7.3.3. Pérdida de derechos previsionales por el estado religioso

En algunos regímenes previsionales especiales, el “estado religioso” es causal de pérdida de derechos previsionales. Concretamente, del derecho a pensión que corresponde a determinados causahabientes de quienes hubieran tenido derecho a jubilación o retiro en tales regímenes (cónyuges o hijos solteros). Por “estado religioso” no debe entenderse la condición de ministro de culto, sino el que se adquiere por la profesión religiosa en un instituto de vida consagrada (obviamente, las leyes piensan únicamente en religiosos católicos, y por ser normas restrictivas de derechos deben ser interpretada en forma estricta).

La ley 21.965³⁹⁸, del año 1979, ley orgánica de la Policía Federal, dice en su artículo 108 que

³⁹⁸ BO 2/4/1979. El citado artículo 108 inc.i), recoge textualmente la norma del estatuto aprobado por Decreto ley 333/58 del 14 de enero de 1958, art.94 inc.9.

“El derecho a pensión se pierde en forma irrevocable por fallecimiento, y además... i) por tomar estado religioso”³⁹⁹.

La ley 19.101⁴⁰⁰ del año 1971, ley para el personal militar, dispone que

“El derecho a pensión se pierde en forma irrevocable por fallecimiento y, además: ...6º) por tomar estado religioso y mientras dure tal situación” (art.85)

La ley 19.349⁴⁰¹, del año 1972, que organiza la Gendarmería Nacional y el régimen de retiros para esa fuerza de seguridad, está redactada en idénticos términos (art.104 inc.f).

Hay que tener en cuenta que en estos regímenes especiales son muchas las personas que pueden tener derecho a pensión derivada del haber o retiro militar, incluyendo hijas solteras mayores de edad, nietos, etcétera.

La presunción de estas leyes, aparentemente, es que el “estado religioso” haría desaparecer la necesidad, porque la persona que gozaba de la pensión encontrará sostén económico en la comunidad religiosa a la que se integra. Las leyes no definen qué entienden por “tomar estado religioso”, de manera que teniendo en cuenta que los derechos previsionales deben ser en principio de interpretación extensiva, y las excepciones o normas que hacen perder tales derechos de interpretación estricta, debería entenderse que sólo se tiene por configurada esa situación con la profesión definitiva en un instituto de vida consagrada.

La ley 19.101 (y su igual 19.349) es incoherente cuando, por una parte, dice que el “estado religioso” implica la pérdida “irrevocable” del derecho a pensión, pero sólo “mientras dure tal situación”. Hay que entender que si la persona que gozaba del beneficio de pensión pierde el estado religioso por cualquier causa que sea, y subsisten las demás condiciones y requisitos que

³⁹⁹ El texto reproduce a la letra el que contenía la Ley Orgánica del Ejército aprobada por Decreto Ley 29.375/44 (del 26/10/1944, BO 20/11/44), en su artículo 215.

⁴⁰⁰ BO 19/7/1971. El texto es igual al de la precedente ley 14.777 (art.85 inc.7), y similar al de la anterior ley 13.966 (art. 112 inc.9, que simplemente decía “por tomar estado religioso”).

⁴⁰¹ BO 10.1.72; ADLA XXXI-C-4881.

le daban derecho a pensión, debería recuperar el beneficio. La ley policial no contiene esa salvedad, pero al menos por aplicación analógica de la otra norma analizada, podría hacerse valer el derecho a recuperar el beneficio previsional, si desaparece la causa por la que se había perdido.

En cualquier caso, la constitucionalidad de las normas transcritas es harto dudosa, en la medida en que introducen una discriminación por razón religiosa.

Cabe notar que la ley 12.992, que organiza el régimen de retiros y pensiones de la Prefectura Naval (equivalente en muchos aspectos a la Gendarmería nacional) no contiene ninguna norma similar o equivalente a las aquí analizadas.

Otra curiosidad es que las leyes mencionadas sancionan con la pérdida del derecho a pensión la adquisición de estado religioso por parte del pensionado, pero no prevén el mismo efecto para el caso de que quien tome estado religioso sea el mismo titular del retiro militar.

7.3.4. Derecho comparado

En España,

“La regulación básica de la Seguridad Social del clero católico y de los ministros de otras confesiones se recoge en el RD 2398/1977, de 27 de agosto, que permite asimilarlos a trabajadores por cuenta ajena para incluirlos en el ámbito de protección del régimen general de la Seguridad Social”⁴⁰².

Los acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias incluyen normas complementarias y reglamentarias. Por su parte, las diócesis católicas y las iglesias o comunidades a las que pertenezcan los ministros, asumen el rol de “empleadores” a estos efectos⁴⁰³.

En la doctrina española se ha observado que el régimen más favorable que existe para los ministros de culto (pensando en las obligaciones del “empleador”, en este caso la comunidad religiosa), puede alentar casos de fraude. Lo que conduce inmediatamente a la necesidad de delimitar quienes pueden acceder a ese régimen. Para evitarlo, se ha propuesto

⁴⁰² GONZÁLEZ DEL VALLE, José, “Ministros de culto”, cit., p. 238,

⁴⁰³ Varias normas específicas, como los Reales Decretos 487/98, 2665/98 y 432/2000, atendieron la situación de sacerdotes católicos y de religiosos y religiosas secularizados, reconociendo como cotizados a los períodos de su actividad sacerdotal o religiosa.

la creación de un registro de ministros de culto, que asegure la identificación de los beneficiarios de ese régimen⁴⁰⁴.

En **Brasil**, los sacerdotes y religiosos gozan de derechos previsionales, que son tramitados por medio de las curias diocesanas, a pesar de que no son considerados empleados, como ya se ha dicho⁴⁰⁵. La ley 6696 del 8/10/79 considera equiparados a los trabajadores autónomos a los fines previsionales, a

*“los ministros de confesiones religiosas, y los miembros de institutos de vida consagrada y de congregaciones y órdenes religiosas, estos cuando sean mantenidos por ellas, salvo si: a) afiliados obligatoriamente a la previsión social en razón de otra actividad; b) afiliados obligatoriamente a otro régimen de previsión social, militar o civil, aunque sea en condición de inactivo”*⁴⁰⁶.

7.4 Situación fiscal de los ministros de culto

Las leyes impositivas argentinas, tanto en el orden federal como hasta donde conocemos en el orden provincial, no han contemplado

⁴⁰⁴ "(U)na buena solución, prescindiendo de las nociones legales existentes, pasaría por la creación de un registro similar al que existe para las confesiones y entidades religiosas, al que pudieran acceder y acogerse las personas que según la confesión respectiva ostentaran la condición de ministro de culto al igual que sucede con el resto de los ciudadanos que deseen, por el cumplimiento de determinados requisitos legales, beneficiarse de los efectos jurídicos que determina la ley en cada caso (...). De esta manera, se garantiza por un lado el disfrute de los derechos que las leyes otorgan y por el tiempo que ostentaran dicha condición (cuya finalización, extinción o suspensión se comprobaría mediante la oportuna cancelación de tal estado), (...) y por último, se garantiza y salvaguarda la identidad y especificidad religiosa de cada confesión al ser ellas las que dieran fe de aquella condición mediante el oportuno certificado que así lo acreditara consiguiéndose al mismo tiempo una mayor garantía de neutralidad en la actual sociedad pluri-religiosa y multicultural en la que nos encontramos. Todo ello, evidentemente sin que el Estado tenga ni deba renunciar a sus facultades discrecionales en esta materia, estableciendo con su legislación (unilateral o bilateral) un mínimo que objetivice el factor religioso, la laicidad del Estado y la libertad de las confesiones" (MORENO BOTELLA, Gloria, "Ministro de culto adventista y autonomía confesional", en RGDCEE, nº 1 (2003)).

⁴⁰⁵ CALLIOLI, Eugenio, "O estado e o fator religioso no Brasil Republica", EDUSC, Roma, 2001, p.98.

⁴⁰⁶ Ver su texto y el de otras normas que toman en cuenta situaciones de aportantes voluntarios, o de quienes se hallaban ya registrados como aportantes a la previsión social en regímenes legales anteriores, incluso ex sacerdotes o religiosos, en CALLIOLI, op.cit. en nota previa, p.100 y ss.

específicamente la situación de los ministros de culto. Obviamente, están obligados a pagar los impuestos que correspondan como cualquier otro ciudadano.

Sin embargo, es posible preguntarse por el encuadre tributario de los ingresos que obtengan por el ejercicio específico del ministerio, es decir, el dinero que reciban de la iglesia o comunidad religiosa a la que sirvan.

El tema fue analizado en la Argentina por la autoridad fiscal⁴⁰⁷, que concluyó que esos ingresos están exentos del pago del impuesto a las ganancias. El razonamiento es algo confuso, ya que parece aplicar a los ministros de culto en general normas referidas a los religiosos católicos.

Pero en síntesis, se sostiene que "*no existe vínculo laboral dependiente*" entre los clérigos y la asociación a la que sirven, "*siendo los servicios que prestan accesorios a la actividad principal -religiosa- y que por tanto siguen su suerte*".

Es decir: dado que están exentos del impuesto a las ganancias los ingresos de las instituciones religiosas por sus actividades específicas (y esto es así respecto de todas ellas, sea la Iglesia Católica o cualquier otra), lo están también los de los ministros de culto que ejercen en ellas su función.

Dice también el mismo dictamen que

"si bien el religioso⁴⁰⁸ recibe un estipendio en dinero y en especie por su quehacer, es dable resaltar que el propósito de su labor no es obtener un salario con carácter retributivo, sino que su ocupación es lo accesorio de una finalidad que va más allá de lo material y que consiste en el perfeccionamiento moral y en el ejercicio de la caridad".

Considera la AFIP que

"no se vislumbra propósito de lucro en la actividad que realizan" (actividades referidas al culto), de manera que el dinero que reciben se encuentra "*fuera del objeto de la Ley de Impuesto a las Ganancias, atendiendo al propósito con que se realizan -actividades*

⁴⁰⁷ Dictamen nº 24/2000 de la Dirección de Asesoría Técnica Tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 31 de marzo de 2000, publicado en Boletín 38 del 1 de septiembre de 2000, página 1529.

⁴⁰⁸ En este caso el dictamen no habla de "religiosos", sino de "ministros de culto" o "ministros religiosos", sustantivando equivocada y equívocamente el adjetivo.

referidas al culto- y la relación de dependencia eclesiástica existente entre la Iglesia y el religioso".

Adicionalmente, concluye el mismo dictamen que tampoco las jubilaciones obtenidas por los ministros de culto están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, ya que no son consecuencia del trabajo personal (empleo) sino de una afiliación voluntaria.

Como excepción a lo dicho al comienzo, es decir, la inexistencia de exenciones impositivas subjetivas a favor de los ministros religiosos, puede traerse a colación el Código Fiscal de la provincia de **Santa Fe**⁴⁰⁹ que en su artículo 327 y en relación a la patente de vehículos y al impuesto a la transferencia de dominio de ellos, declara exentos a

"los vehículos de propiedad de Arzobispos, Obispos Diocesanos y Obispo Auxiliar con sedes en la Provincia" (sic, inciso b),

Esa exención otorgada a la persona de los prelados es independiente de una exención análoga que beneficia a las "entidades religiosas" (inciso f). Se trata de un extraño beneficio que únicamente favorece a los obispos, se supone que católicos (aunque la norma no lo especifica), a título personal.

7.5 Conclusiones

El Derecho Laboral, el Previsional y el Fiscal se muestran vacilantes ante la figura de los ministros religiosos, figura que no atrapan con la necesaria claridad.

Una posible explicación reside en que se trata de tres ámbitos donde es frecuente el fraude a la ley, y el legislador tiende a ser especialmente prudente, por no decir desconfiado.

En materia laboral la regla es que todo aquel que presta un servicio a favor de otro, se presume empleado. Ciertamente, hay excepciones. El caso de los ministros religiosos debería ser una de ellas, pero no está

⁴⁰⁹ Ley 3456 y modificatorias, texto ordenado por Decreto 4481/2014 (BO 22/12/2014).

explicitada. Y la diversidad ya varias veces apuntada de esquemas organizativos que asumen las comunidades religiosas no facilita las cosas.

Tampoco ayuda el recurrente empeño de quienes han sido ministros de culto pero han terminado de modo conflictivo su vinculación con la iglesia o comunidad religiosa de pertenencia, de demandar un encuadre laboral que les permita acceder a alguna indemnización o compensación a la que no tendrían derecho en el marco del ordenamiento jurídico confesional.

La situación es algo más clara en relación a los ministros de culto católicos, y a los religiosos católicos. Para estos últimos hay una norma expresa que los excluye del ámbito laboral, lo que fácilmente puede extenderse por analogía a los ministros de culto católico que no son religiosos. A partir de ese dato, y si se admite que no hay razón en una sociedad laica para una diferencia de trato sustancial entre ellos y los ministros de culto no católicos, debería poder llegarse a una solución satisfactoria en los casos que involucran a estos.

En definitiva, en la medida en que la decisión acerca de la selección y régimen de los ministros de culto (incluyendo los derechos y deberes recíprocos entre ellos y su comunidad de pertenencia) es algo que corresponde a la autonomía de cada confesión religiosa, es a las normas que ella dicte a las que habrá de estarse en cada caso.

Esto quiere decir que la relación entre el ministro de culto y su comunidad de pertenencia no está, de suyo, regida por el derecho laboral. Pero nada impide que una comunidad religiosa determinada decida encuadrar a sus ministros de culto como empleados, y aplicarles las leyes laborales. La aplicación de las leyes laborales a la relación de los ministros de culto con su confesión de pertenencia no es automática, no se presume (en todo caso, se presume que es de una naturaleza diferente), pero no se descarta en modo absoluto.

Fuera de la relación específica con su iglesia o confesión religiosa de pertenencia, los ministros de culto pueden realizar actividades laborales como cualquier ciudadano, y su condición no impide aplicarles (a esas relaciones ajenas a su labor ministerial específica) la normativa laboral.

En materia previsional las normas son más claras, pero las situaciones se confunden por prácticas inadecuadas de las propias confesiones religiosas, probablemente por querer favorecer a sus ministros. Hay que tener en

cuenta que las jubilaciones de los empleados en relación de dependencia, son mucho mejores que las que reciben los trabajadores autónomos (que son las que recibirían los ministros de culto que voluntariamente se sumen al sistema).

Finalmente, en materia fiscal hay un vacío normativo y un muy escaso, por no decir nulo, desarrollo jurisprudencial y doctrinario.

En cualquier caso, se echa en falta la existencia de un marco legal más claro, en todas las materias consideradas en este capítulo.

Capítulo 8. Los ministros de culto ante el Derecho Procesal. Secreto religioso y secreto de confesión.

Varias cuestiones rozan a los ministros de culto desde la consideración del Derecho Procesal.

En primer lugar, una cuestión general consiste en saber si ellos están sujetos a juzgamiento igual que cualquier otro ciudadano, o si su condición puede depararles un tratamiento diferenciado.

En segundo lugar, y más allá del juzgamiento de ellos mismos, aparece una cuestión muy relevante referida a su actuación en juicio, ya no como sujetos del proceso sino como partícipes en calidad de testigos. Esta cuestión se bifurca en dos, vinculadas pero diferentes. La primera es si los ministros de culto, o algunos de ellos, pueden estar eximidos en virtud de su condición de presentarse a declarar en juicio, o pueden hacerlo con alguna modalidad particular. La segunda, en el caso de tener efectivamente que declarar como testigos (cualquiera fuera el procedimiento para ello), es si lo que hubieran conocido en razón de su ministerio goza de alguna protección o tratamiento especial: la delicada cuestión del secreto religioso. Y dentro de ella, la situación específica del "secreto de confesión".

Durante el tiempo de la dominación española, y aún en los primeros tiempos de la existencia independiente de la Argentina, existió para los eclesiásticos católicos (clérigos y religiosos) el denominado "privilegio del fuero", es decir, la posibilidad de ser juzgados por tribunales eclesiásticos en lugar de los civiles⁴¹⁰.

Ese tipo de privilegios han ido desapareciendo en todas partes, y la Argentina no es la excepción. El art.16 de la Constitución Nacional proclamó en 1853 la igualdad ante la ley y la abolición de los fueros personales. Como expresa RODRÍGUEZ BLANCO, en relación a España pero en concepto aplicable perfectamente a la Argentina:

"En principio, la igualdad de los ciudadanos ante la ley impide que los miembros cualificados de las confesiones

⁴¹⁰ Sobre los antecedentes y evolución del fuero eclesiástico en España, ver GONZALEZ, Marcos, "Los Ministros de Culto en el ordenamiento jurídico español", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, cap.3 (donde también se desarrollan los demás temas abordados en este capítulo).

religiosas tengan un trato procesal particular. En consecuencia, se someten a los mismos órganos jurisdiccionales que el resto de los ciudadanos y se les aplica el Derecho común en la materia. En este sentido, la doctrina no acostumbra a realizar un análisis detenido del régimen procesal de los ministros de culto y religiosos, y se limita a señalar que su particular estatuto procesal ha quedado reducido a meras formalidades procedimentales"⁴¹¹.

Ese "estatuto" consiste básicamente en la exención, en algunos casos, de la obligación de comparecer a declarar como testigos en los juicios, pudiendo hacerlo por escrito.

Sin embargo, la declaración testimonial de los ministros de culto presenta otra singularidad y es la posibilidad que tienen de abstenerse de declarar cuando aquello que les es preguntado está alcanzado por el denominado "secreto religioso". Dentro de éste, una forma particular pero que no agota el género es el "secreto de confesión", vinculado con el sacramento de la reconciliación o confesión propio de la Iglesia Católica.

Ahora bien: esto es cierto en relación a las causas regidas por el derecho común o estatal. Sin embargo, también es cierto que hay causas que se rigen por el derecho propio de cada confesión religiosa. Ellas, como veremos más adelante, están excluidas de la competencia y jurisdicción de los tribunales estatales, para quedar reservadas a la competencia de los órganos jurisdiccionales internos de cada confesión. La aplicación del propio régimen disciplinario es parte integrante de la autonomía de las confesiones religiosas.

8.1 Juzgamiento de los ministros religiosos

Consideremos en primer lugar si la condición de ministro de culto supone alguna particularidad a la hora de someter a juicio (ante los tribunales del Estado) a quien reviste esa condición.

Y luego si, una vez juzgado el ministro de culto, su condición le depara algún trato especial a la hora de cumplir una eventual condena.

⁴¹¹ RODRIGUEZ BLANCO, Miguel, *Las actividades de los ministros de culto y de los religiosos ante los Tribunales*, en REDC, 59 (2002), pp. 197-246.

8.1.1 Inexistencia del “fuero eclesiástico”

En la Argentina no existe para los ministros de culto – tampoco para los clérigos católicos, y ni siquiera para los obispos- ningún privilegio o fuero especial. Cabe recordar que los fueros personales fueron suprimidos y prohibidos por el Art. 16 de la Constitución de 1853, que sigue vigente. El llamado “fuero eclesiástico” o “privilegio del fuero”, por lo demás, ha ido desapareciendo en casi todas partes.

.Antiguamente en muchos lugares –también en el actual territorio argentino- existía el llamado “privilegio del fuero”, por el que en esos casos la competencia se desplazaba a favor de tribunales u órganos eclesiásticos. Ese privilegio subsistió en alguna medida en España hasta el concordato de 1953 inclusive, hasta ser abolido recién en el concordato de 1976⁴¹².

Los concordatos o acuerdos más recientes firmados por la Santa Sede ya no incluyen en general ese privilegio⁴¹³ -que ni los estados están dispuestos a conceder, ni la Iglesia reclama ya- aunque a veces prevén que en caso de existir un proceso penal contra un clérigo deba ser notificado el obispo u ordinario correspondiente⁴¹⁴, y en algunos casos la Santa Sede cuando el sometido a proceso es un obispo⁴¹⁵. Esta previsión es todavía más frecuente en relación específicamente a los capellanes militares, caso en el que además

⁴¹² ALBERCA DE CASTRO, Juan Antonio, “Régimen jurídico del ministro de culto en España y Francia”, Granada, Comares, 1999, p.76. El Art.XVI del Concordato de 1953 regulaba detalladamente la cuestión y fue derogado por el Art.II del Acuerdo de 1976, dejando sólo subsistente la obligación de dar aviso del proceso a la autoridad eclesiástica.

⁴¹³ Una excepción es el Concordato con Colombia de 1973, exclusivamente en relación a los obispos, cuyo juzgamiento se remite a la Santa Sede (art.XIX), aunque la vigencia de esta norma está contestada, y de hecho desaparece en el Concordato de 1992 que no llegó a entrar en vigor.

⁴¹⁴ Así aparece en el acuerdo con Croacia (1996), art.8; con Bosnia-Herzegovina (2006), art.8; con Lituania (2000), art.8; con España (1976), art.II.2. El Concordato con República Dominicana (1954) añade que los clérigos condenados a prisión cumplirán su pena en un local separado del destinado a los laicos (art.XIII).

⁴¹⁵ Así en Italia (intercambio de notas reversales del 26 de julio de 2006, en relación al Concordato de 1984); Gabón (1997), art.8.

suele establecerse que las sanciones que reciban serán cumplidas según disponga el obispo castrense⁴¹⁶.

El tema del fuero eclesiástico en la Argentina debe ser analizado necesariamente a partir del Art.16 de la Constitución Nacional, que al proclamar la igualdad de todos ante la ley, expresamente prohíbe los fueros personales.

Cuando se discutió esa norma en la Convención Constituyente de 1853, hubo quien se opuso a la supresión del “fuero eclesiástico”⁴¹⁷. El miembro informante, diputado GOROSTIAGA, hizo la distinción entre los “fueros personales” y los “fueros reales o de causa” (como es el fuero militar), argumentando que los primeros eran inadmisibles, pero no así los segundos. El diputado y sacerdote LAVAYSSE, dijo que votaría la supresión del fuero eclesiástico

“porque estaba cierto de que la Religión no reprobaba estas máximas liberales, pues nada era más liberal que el Evangelio”, luego de explicar que mal podía considerarse “de origen divino” el fuero eclesiástico, “cuando podía ser allanado por una autoridad cualquiera eclesiástica y después de esto ser arrastrado ante un Juez un sacerdote criminal”.

El diputado ZAVALÍA explicó

“que así como el presente Congreso no podría dictar una ley que escudase al presidente de la República de la censura que mereciese un crimen cometido por él contra la Iglesia, así ésta no podía escudar tampoco a un sacerdote que cometa un crimen contra el Estado o la sociedad”, lo que “estaba perfectamente explicado con las palabras del Salvador: “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

En definitiva, la supresión del fuero eclesiástico fue expresamente aceptada por la mayoría.

⁴¹⁶ Así es en la Argentina, como hemos de ver, pero también en el Acuerdo sobre atención religiosa a las Fuerzas Armadas con Paraguay (2002), art.IX; con Eslovaquia (2002), art.IX; con Ecuador (1978), art. VI; y con Venezuela (1994), art.XIII, entre otros.

⁴¹⁷ Intervención del diputado Zenteno, en la sesión del 25 de abril de 1853 (ver en RAVIGNANI, Emilio, “Asambleas Constituyentes Argentinas”, Buenos Aires, 1937, tº IV, p.514), quien argumentó que los concilios de Trento y de Nicea reservaron a la autoridad eclesiástica el juzgamiento de los clérigos.

Cabe recordar que ya la “Ley sobre reforma del clero” del 21 de diciembre de 1822, la famosa “reforma de Rivadavia” que diera lugar a tantas polémicas, en su artículo 1º, decía sencillamente:

“El fuero personal del clero queda abolido”.

Cierto es que esa reforma no alcanzó vigencia en todo el territorio nacional, sino únicamente en Buenos Aires.

La cuestión se planteó en el célebre caso “Correa”⁴¹⁸, resuelto por la Corte Suprema en 1893. Se trataba del juzgamiento de un sacerdote católico, cura en Punilla (Córdoba) por infracción al art.110 de la entonces vigente ley 2393. El acusado reconoció los hechos imputados (celebración de matrimonios religiosos sin celebración previa del matrimonio civil) pero argumentó la incompetencia del tribunal del Estado para juzgarlo invocando normas de los concilios de Trento y de Letrán, y el Syllabus del Papa Pío IX. El juez de primera instancia, recordando al respecto la norma del art.16 de la Constitución Nacional, y el art.1 del código civil, sentó el principio de que

“no hay ley alguna de la República que consagre el principio del fuero para los clérigos, tratándose de la aplicación de las leyes de la Nación o de su infracción”.

La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones⁴¹⁹. A su turno, la mayoría de la Corte dijo que

“siendo innegable la preeminencia consignada en la Constitución Nacional a favor del culto católico, apostólico, romano al establecer la libertad de todos los cultos, no puede sostenerse, con su texto, que la Iglesia Católica constituye un poder político en nuestra organización, con potestad de dictar leyes de carácter civil”,

Por lo tanto reivindicó la facultad del Estado de legislar en materia matrimonial y de imponer sanciones a quienes vulneren ese régimen. La corte distinguió el ámbito sacramental o religioso (reservado a la Iglesia) del ámbito civil, reservado al Estado. Ni siquiera los dos jueces que votaron en disidencia proponiendo la inconstitucionalidad de la sanción penal al ministro

⁴¹⁸ CS, “Correa, Jacinto”, 29/7/1893, FALLOS 53-188.

⁴¹⁹ Que dijo “que todas las disposiciones de los Concilios, Breves y Syllabus, pueden ser muy buenas, muy morales, pero ellas no son ni pueden ser aplicables al territorio de la República, en cuanto rigen asuntos del orden temporal...; que no hay tratado o concordato alguno que haga obligatorio” el fuero eclesiástico, y que la Constitución no hacía excepción a la abolición de los fueros personales.

católico por celebrar el matrimonio religioso sin la constancia de la celebración civil previa, afirmaron que éste estuviera exento de la jurisdicción civil.

Mucho después, la cuestión volvió a plantearse a la luz del Art. I del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede de 1966, que garantiza a la Iglesia Católica el

“libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”.

A veces se ha querido dar a esa norma una inusitada extensión, según la cual, existiendo materia para un juzgamiento en sede canónica de alguna conducta de un clérigo, ese juzgamiento sería exclusivo y excluyente, aunque la misma conducta constituya también un ilícito civil o penal para la ley del Estado. Al respecto hay que decir que por encima de esa norma del Acuerdo, cuyos redactores por lo demás nunca pensaron en darle semejante alcance⁴²⁰, está la Constitución Nacional. Por lo tanto es necesario tener presente que el estado religioso o clerical, de ninguna manera exime del sometimiento a la jurisdicción estatal (“civil” en la terminología usual del derecho canónico, aunque en el caso sea penal y no civil en sentido estricto).

La autonomía de jurisdicción mentada en el Acuerdo, se refiere a las cuestiones exclusivamente eclesásticas, internas de la Iglesia. La jurisprudencia la ha reconocido, recordando de paso la eliminación de los “recursos de fuerza” propios del derecho indiano y presentes en el texto original de la Constitución de 1853, pero suprimidos en 1860, cuando se ha tratado de: a) cuestiones disciplinarias regidas por el derecho canónico⁴²¹; y b) cuestiones que no configuran delitos tipificados por el código penal, aunque hayan sido denunciadas inicialmente como tales, pero sí faltas disciplinarias en el marco del Derecho canónico.

La jurisprudencia ha reiterado, teniendo también en cuenta que el sólo hecho del procesamiento penal no implica impedimento para el ejercicio de las funciones sacerdotales

“la inexistencia en nuestro país de fueros personales, y [...] que la Iglesia Católica, en cuanto institución con

⁴²⁰ FRÍAS, Pedro J., “El acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina”, Córdoba, 1986 (separata del tomo XXV de “Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba).

⁴²¹ CS, “Rybar, Antonio c/ García, Rómulo y/u Obispado de Mar del Plata y/u quien corresponda s/ juicio sumarísimo (art. 321 CPCCN). 16/06/1992, ED 148-517, con nota de Carlos R. Sanz: “A Dios lo que es de Dios: dos consideraciones sobre un acertado fallo”.

recepción constitucional –artículo 2 de la Constitución Nacional- no resulta afectada por el sólo procesamiento de uno de sus miembros”⁴²².

Ese mismo criterio (según el cual el procesamiento penal de un clérigo no implica de suyo una afectación de la libertad de culto) ha sido aplicado por la jurisprudencia incluso en relación a un arzobispo sometido a proceso penal⁴²³.

8.1.2 Cumplimiento de condenas

La condición de ministro religioso de un imputado de un delito que, luego del pertinente proceso, reciba una condena a pena privativa de la libertad, tampoco es motivo ni da derecho a una forma de cumplimiento de la pena diversa de aquella a que está sujeto cualquier otro ciudadano.

La ley 24.660, sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, no contempla el caso particular de ministros de culto condenados, que como tales merezcan un trato especial. Sin embargo, prevé que

“el tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado” y “deberá atenderse a las condiciones personales, intereses y necesidades para el momento del egreso” de la persona (art.5).

Ello podría dar lugar a una consideración específica, también en caso de recurrirse al instituto de la “probation” para detener el juicio y evitar la condena. Esto no debería considerarse contradictorio o violatorio de la norma que la misma ley contiene, según la cual

“las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de religión, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado” (art.8º).

⁴²² CS Santa Fe, 26/12/03, “Mateo, Marcelo”, Expediente 366/03, Tº 194, fº 235. En los mismos términos, CS Santa Fe, 26/12/03, “Capello, Hugo Héctor”, Exp.365/03, Tº 194, fº 229.

⁴²³ CS Santa Fe, 26/12/03, “Storni, Edgardo”, Exp.367/03, Tº194, fº 218. Sin embargo, en el caso se hizo notar que en el caso no estaba “en consideración la Iglesia Católica dado que el pronunciamiento atañe a una persona que al momento ni siquiera ejercía el oficio de obispo, por voluntaria y pública renuncia”, lo que hace preguntarse si la solución hubiera sido distinta en caso de tratarse de un obispo en ejercicio.

Únicamente existe una norma para un caso específico: el de los capellanes castrenses católicos, que ya hemos mencionado⁴²⁴. De ella, sin embargo, se deriva claramente que la condición de capellán no impide ni el juzgamiento penal y disciplinar por parte de la autoridad militar, ni la imposición de la pena que corresponda. Simplemente existe el deber de comunicar la existencia del proceso al Obispo Castrense (quien podrá instruir sus propias actuaciones, y eventualmente imponer las sanciones canónicas que correspondan); y la indicación de acordar entre la autoridad militar y la eclesiástica la modalidad de cumplimiento de la pena.

A lo sumo, este antecedente puede servir para que la autoridad eclesiástica (en casos distintos de los capellanes castrenses), solicite a los jueces estatales competentes la posibilidad de sugerir alguna modalidad apropiada en el cumplimiento de la pena, especialmente cuando la ley penal autoriza el reemplazo de la pena de prisión por alguna otra medida compensatoria.

8.2 El secreto religioso y de confesión y su incidencia en el proceso judicial

La noción de “secreto” es relativamente evidente. Lo secreto es lo que está oculto, y debe permanecer en esa condición. El secreto supone “algo” (una información consistente en un hecho, una conducta, una situación jurídica) que es confiado por alguien llamado revelante, a otro alguien llamado confidente. Se ha dicho que el secreto entraña, al menos analógicamente, una relación real semejante a la que aparece cuando una cosa es depositada por alguien en poder de un tercero⁴²⁵.

Existen múltiples situaciones donde el secreto tiene relevancia jurídica, y existe obligación jurídica de guardarlo, incluso con sanciones de tipo penal para el caso de revelar lo que debía quedar secreto. Es el caso de los *"secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación"*

⁴²⁴ Ver el Capítulo 6.

⁴²⁵ PALOMINO, Rafael, “Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso”, Comares, Granada, 1999, p.13, con cita de GUASP, J., “Derecho”, Madrid, 1971, p.120.

(art. 222 del código penal, por ejemplo); pero también del secreto industrial o comercial (ley 24.766), el secreto epistolar que incluye también las comunicaciones electrónicas (arts.153 al 155 y 318 del código penal)⁴²⁶, y muy especialmente el secreto profesional y el secreto religioso y de confesión (art.156, código penal).

El tema del secreto religioso es vasto y es antiguo, pero actualmente presenta perfiles novedosos. Por un lado, por la existencia de medios tecnológicos nuevos para la comunicación y el almacenamiento de la información. Esta es una cuestión de hecho, a la que el Derecho busca dar respuestas yendo a la zaga de ese progreso tecnológico. Pero existe también una cuestión estrictamente jurídica, como es el desarrollo de la noción de “derecho a la información” en varios aspectos. Ese derecho a la información puede colisionar con el derecho a la protección del secreto religioso.

Por secreto religioso se entiende, tanto al secreto de confesión o sigilo sacramental en sentido estricto, presente únicamente en la Iglesia Católica y algunas otras iglesias cristianas que conservan el sacramento de la reconciliación o confesión, cuanto al secreto que rodea las comunicaciones entre fieles y ministros religiosos en el marco del ministerio de estos, haya o no confesión sacramental⁴²⁷. El Código Penal tipifica el delito de violación de secretos, que se configura entre otros casos cuando el autor es una persona que “*en razón de su estado*” tenga acceso a secretos, y esto se refiere en el caso de los ministros de culto a cualesquiera de ellos, más allá de la confesión sacramental.

Vemos así que confluyen diversas situaciones.

Por una parte, existe el derecho a la privacidad o intimidad de las personas, que entre otros aspectos protege en general el secreto de las comunicaciones. Entre ellas, las comunicaciones que el fiel o penitente mantiene con el ministro de culto. Si antiguamente la cuestión se planteaba en relación a las comunicaciones “cara a cara”, o en todo caso a la comunicación epistolar, hoy día el campo se ha ampliado de manera insospechada por la difusión de los medios electrónicos de comunicación, y las comunicaciones por vía telemática. El Derecho tiende a otorgar a esas comunicaciones la misma protección que tradicionalmente daba a la

⁴²⁶ Ver al respecto NAVARRO FLORIA, Juan G., "Los derechos personalísimos", Buenos Aires, El Derecho, 2016, cap.5.3.5.

⁴²⁷ Cfr. PALOMINO, R., “Derecho a la intimidad...”, p.23 y ss.

comunicación epistolar, aunque cabría hacer una distinción: eso es así si se trata de comunicaciones personales o directas, pero es más dudoso si se trata de comunicaciones dirigidas a receptores múltiples, por ejemplo por medio de un blog o una red social de acceso masivo⁴²⁸.

Hasta aquí, estamos ante un derecho subjetivo de la persona que confió el secreto, vinculado con su privacidad. Que puede predicarse respecto de la comunicación con cualquier persona.

Pero cuando la comunicación es con un ministro religioso que actúa en función de tal, al interés individual del fiel se añade el interés “institucional” de la confesión religiosa. El ministro religioso se convierte en confidente precisamente por el rol que cumple, y el interés en proteger el secreto pasa a ser no solamente del fiel o penitente sino de la confesión religiosa misma, porque hace a su función específica. El ministro de culto receptor de la confidencia no es una persona individual cualquiera, sino justamente un ministro u órgano de la comunidad religiosa.

Desde el punto de vista del ministro de culto, por lo tanto, existe un *derecho* subjetivo suyo a guardar el secreto que le ha sido confiado. Pero en verdad lo que existe al mismo tiempo, es un verdadero *deber* de guardar secreto, íntimamente asociado a su “estado” religioso⁴²⁹.

El problema se plantea en el marco de los procesos judiciales, donde existen

“valores rivales que son, por una parte, el deseo de la sociedad que quiere conocer la verdad, y por la otra la necesidad humana fundamental de preservar la intimidad personal en el marco de las comunicaciones religiosas confidenciales”⁴³⁰.

¿Es legítimo forzar a un ministro de culto a revelar lo que le ha sido confiado en confesión o en ejercicio de la dirección espiritual? ¿Quién podría hacerlo en ese caso: el juez, la persona que le confió el secreto, su propia confesión religiosa?

⁴²⁸ Cfr. MILANI, Daniela, “Segrego, libertà religiosa e autonomia confessionale”, Lugano, Eupress, 2008, p.61.

⁴²⁹ Cfr. PRECHT PIZARRO, Jorge, « Ministros de culto, secreto religioso y libertad religiosa », en « 15 Estudios sobre Libertad Religiosa en Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005, p.164.

⁴³⁰ ZUBACZ, Gregory, “Le secret sacramentel et le droit canadien”, Wilson y Lafleur, Québec, 2010, p.xxvi.

En la preservación del secreto religioso hay un interés público y no meramente privado, porque a la sociedad le interesa preservar ese ámbito de intimidad propio de la dirección espiritual que brindan los ministros de culto a los fieles, y proteger la confianza que ellos normalmente suscitan. Por eso es que, como veremos, en este caso particular se justifica que no se admita la dispensa del secreto ni siquiera por parte del supuesto propietario o beneficiario de él.

Dentro del “secreto ministerial” adquiere particular y singular relevancia, en la Iglesia Católica, el llamado “sigilo sacramental”. El sigilo sacramental es una institución propia del derecho canónico, desarrollada a partir del siglo IX e impuesta de modo claro y universal por el Concilio IV de Letrán⁴³¹.

Actualmente, lo regula en Código de Derecho Canónico de 1983 (cánones 983 y 984):

“El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. También están obligados a guardar secreto el intérprete, si lo hay, y todos aquellos que, de cualquier manera, hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión.”

“Está terminantemente prohibido al confesor hacer uso, con perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación. Quien está constituido en autoridad, no puede en modo alguno hacer uso, para el gobierno exterior, del conocimiento de pecados que haya adquirido por confesión en cualquier momento.”

Canónicamente, la violación del sigilo sacramental es castigada con excomunión *latae sententiae* reservada a la Sede Apostólica en los casos más graves (canon 1388). La “violación directa del sigilo sacramental” es uno de los “delitos más graves” (*delicta graviora*), cuyo juzgamiento está reservado al tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede⁴³².

⁴³¹ PALOMINO, R., “Derecho a la intimidad...”, p.29 y ss.

⁴³² Así resulta de la Epístola *Ad exsequendam ecclesiasticam legem* de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 18 de mayo de 2001, firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger.

El canon 1548 § 2, dispone que en los procesos canónicos,

“están exentos de la obligación de responder [cuando son llamados como testigos en un tribunal eclesiástico]: 1.º los clérigos, en lo que se les haya confiado por razón del ministerio sagrado; los magistrados civiles, médicos, comadronas, abogados, notarios y otros que están obligados a guardar secreto de oficio incluso por razón del consejo dado en lo que se refiere a los asuntos que caen bajo ese secreto”.

Pero además, a tenor del c.1550 § 2.2,

“Se consideran incapaces” (para ser testigos), “los sacerdotes, respecto a todo lo que conocen por confesión sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten; más aún, lo que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de confesión no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la verdad.”.

Se ve claramente en la regulación canónica católica, la relación de género a especie existente entre el “secreto religioso” (lo que haya sido confiado a los clérigos en razón del ministerio sagrado, incluso los consejos dados por ellos), y el sigilo sacramental; y cómo es mucho más intensa la protección en este caso, al punto de inhabilitar al confesor (y a quien sin serlo haya oído la confesión) como testigo, prohibiendo absolutamente su testimonio sin admitir en ningún caso ser relevado del secreto por el penitente.

Hay ordenamientos jurídicos de otras confesiones religiosas, que tienen previsiones análogas⁴³³. Así, la Iglesia Anglicana según el canon 113 de 1603, aplicable también en la iglesia episcopaliana; la iglesia de Irlanda, la iglesia Reformada de Francia (Sínodo de Figeac de 1579).

En el derecho comparado se encuentran ejemplos de protección del secreto religioso, y del secreto de confesión en particular, desde muy antiguo, y no solamente en países de tradición católica, sino también en otros, como los Estados Unidos⁴³⁴.

⁴³³ Cfr., PALOMINO, R., “Derecho a la intimidad...”, p.46 y ss.

⁴³⁴ Ver por ejemplo, el caso “El Pueblo v. Daniel Phillips”, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York del año 1843 (en NAVARRO VALLS, Rafael y PALOMINO, Rafael, “Estado y religión”, Barcelona, Ariel, 2003, p.332). También ZUBACZ, Gregory, *óp. cit.*, p.152 y ss, obra que examina la jurisprudencia y legislación de Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, favorables al respeto del secreto religioso y de confesión, aunque con fuertes limitaciones en el caso canadiense.

La ley de libertad religiosa de Portugal dispone que
*“Los ministros de culto no pueden ser
preguntados por los magistrados u otras autoridades sobre actos y cosas
de que hayan tenido conocimiento por motivos de su ministerio”*
(art.15.2)

La tutela del secreto ministerial (y en particular del
sigilo sacramental) ha sido materia de acuerdos firmados entre la Santa Sede y
algunos estados. Por ejemplo, el vigente con España, que establece que

*“en ningún caso los clérigos y los religiosos
podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar
información sobre personas o materias de que hayan tenido
conocimiento por razón de su ministerio”*⁴³⁵.

8.3 Declaración en juicio del ministro religioso. Obligación de declarar.

La situación en que un ministro de culto puede verse
constreñido a no respetar el secreto religioso, se presenta en caso de su citación
como testigo en juicio, que conlleva la obligación de comparecer y declarar todo
cuanto se conozca y sobre lo que el testigo sea interrogado. La negativa a hacerlo
constituye como regla un delito (art.275 del Código Penal argentino).

En ese sentido, el ministro de culto puede verse
atrapado entre dos obligaciones y entre dos posibles sanciones penales: la
obligación de guardar secreto con la sanción correspondiente al delito de
violación de secretos; y la obligación de testificar con la sanción correspondiente
al falso testimonio, que también se aplica al testigo reticente.

Nos detendremos en primer lugar en la cuestión
acerca de si el ministro de culto está obligado a comparecer como testigo en
juicio. Más adelante veremos si, en caso de hacerlo (o en caso de declarar como
testigo en forma no presencial) puede negarse a declarar aduciendo la existencia

⁴³⁵ Acuerdo de 28 de julio de 1976, Art.II.3. En los posteriores acuerdos entre el Estado español y
las comunidades protestantes, islámicas y judías, se han incluido provisiones similares (vid. Art.
3.2 de los respectivos acuerdos, todos ellos de 10 de noviembre de 1992). Además, la propia
legislación española en materia de proceso penal ya preveía esa exención con carácter general
desde el siglo XIX (cfr. Art. 417.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

de secreto religioso. Previamente, procuraremos delimitar el alcance de este secreto.

En caso de que algún ministro de culto sea citado como testigo a un juicio civil o penal, o por un fiscal o persona que legítimamente lleve adelante una investigación o instrucción judicial, tiene en principio obligación de comparecer. No puede excusarse alegando algún secreto de confesión o secreto profesional, porque *a priori* no sabe sobre qué será interrogado. Dicho en otros términos, la condición de ministro de culto no exime a nadie de ser testigo en juicio.

Es más: en ocasiones los jueces han valorado especialmente el testimonio brindado por ministros de culto (naturalmente, respecto de cuestiones ajenas al secreto religioso), atribuyéndoles una presunción de veracidad superior a la de otras personas, por esa misma condición. En el caso de un sacerdote católico, se lo llegó a denominar “testigo insospechable”⁴³⁶, y en otro caso “testigo calificado” a “un sacerdote que en ejercicio de su misión pastoral defiende a los desposeídos”⁴³⁷. Pero también ha dicho la jurisprudencia que la sola condición de ministro religioso (pastor) no es bastante para dar pleno valor probatorio a sus dichos como testigo⁴³⁸.

La condición de sacerdote o ministro de culto no exime tampoco de la obligación de prestar juramento o hacer promesa de decir verdad antes de declarar, según ha dicho la jurisprudencia⁴³⁹.

Pero más allá de la obligación de declarar como testigo, la condición de ministro de culto puede influir en la modalidad o forma de prestar tal declaración: determinadas “personas eclesásticas” están a veces exceptuadas de la obligación de comparecer personalmente, y pueden declarar por escrito, mediante oficio, según disponen las leyes procesales de varias jurisdicciones.

⁴³⁶ CNCiv, Sala A, 10/04/1979, “P., J. M. c. P. de P., I. A.”, LL 1979-C, 5 - R. DJ.

⁴³⁷ SCJ Mendoza, ElDial.com, MZ49C7.

⁴³⁸ Es decir: también un pastor puede mentir, por lo que sus declaraciones deben ser apreciadas en el conjunto del total de las pruebas rendidas (cfr. CNTrab, sala IX, 24/4/12, “Ortiz c. La Iglesia Universal del Reino de Dios s/despido”, exp.29046/2010, inédito).

⁴³⁹ “El juramento de decir verdad pese por igual para todos los testigos, por lo que la circunstancia de que el deponente sea un sacerdote y que la verdad sea su norma de vida, no puede influir sobre una objetiva apreciación de sus dichos” (CSBs.As., 16/8/94, “López de Miranda c. Benito s/nulidad de testamento”, DJBA 147-185 y JA 1995-II-629).

Conviene advertir aquí que en la Argentina, las normas procesales son dictadas por cada provincia, además de existir códigos procesales nacionales que se aplican en los tribunales federales y nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, hay códigos procesales diferentes en materia penal, civil, y a veces laboral y administrativa. Por lo que coexisten decenas de leyes procesales, que si bien guardan similitudes, también presentan diferencias a veces acentuadas.

8.3.1 Procedimiento penal

Comencemos por el ámbito penal, que es el más delicado.

El art.250 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984, texto según ley 26.394 del año 2008) dice que

*"No estarán obligados a comparecer... los altos dignatarios de la Iglesia Según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, aquellas personas declararán en su residencia oficial, donde aquél se trasladará, o por un informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo juramento. Los testigos enumerados podrán renunciar a este tratamiento especial"*⁴⁴⁰.

Un nuevo Código Procesal Penal⁴⁴¹ del año 2014, también autoriza a declarar por escrito y bajo juramento o promesa de decir verdad, a *"los altos dignatarios de la Iglesia"*.

"La Iglesia" a la que hace referencia la norma, es la Iglesia Católica. Es notable que se mantenga esa diferencia de trato entre miembros de la jerarquía católica y de las demás confesiones religiosas.

En términos similares se expresan muchos códigos procesales penales de las provincias, como los de **Salta** (art.239), **Formosa** (art.227), **Entre Ríos** (art.294), **Corrientes** (art.251), **Chubut** (art.194), **Catamarca**

⁴⁴⁰ El anterior Código de Procedimientos, del año 1888 (ley 2372) exceptuaba de comparecer como testigos a *"las dignidades del clero"* (art.290, inc.2º).

⁴⁴¹ Ley 27063 (BO 10/12/2014). Este Código aún no ha entrado plenamente en vigencia y coexiste con el anterior.

(art.238), **San Juan** (art.297) y **Santa Fe** (art.175)⁴⁴². Todos ellos, salvo el de Santa Fe, contienen la salvedad de que

“Los testigos enumerados podrán renunciar a este tratamiento especial”.

En los casos de **Santiago del Estero** (216), los exceptuados de comparecer son *“los altos dignatarios del clero”*.

Si bien las normas hablan de “la Iglesia” (se entiende que la Católica), no hay razón para no aplicarla a “altos dignatarios” de otras confesiones reconocidas. En cuanto al concepto de “alto dignatario”, es elástico y deberá estarse a lo que cada confesión religiosa considere como tal, prudentemente evaluado por el juez. Lo mismo cabe decir respecto de “el clero”.

El código procesal penal de **Jujuy** (art.259), en cambio, establece expresamente que

“no están obligados a concurrir a declarar ante la instrucción, pero deberán hacerlo por medio de informe, bajo juramento... los altos dignatarios de los cultos admitidos por el Estado”

En términos similares, el código procesal penal de **Mendoza**⁴⁴³, dice en su art.241 que

“No estarán obligados a comparecer: ... los altos dignatarios de las iglesias legalmente reconocidas por la República Argentina”

Otros, como el de **Tierra del Fuego** y el de **Río Negro**, no contienen excepción alguna.

Por su parte, el hoy derogado Código de Justicia Militar⁴⁴⁴, decía que

“Están obligados a declarar pero no están obligados a concurrir a la citación... las dignidades del clero y vicaría general castrense” (art.229).

⁴⁴² También lo decía el de Río Negro (art.234) pero la previsión ha desaparecido del nuevo Código aprobado por ley 5020 de diciembre de 2014 (BO 12/1/14), art.184.

⁴⁴³ Ley 6730, BO 30 de Noviembre de 1999.

⁴⁴⁴ Ley 14.029, modificada en este punto por ley 23.599 y derogado por ley 26.394.

De la redacción parecía deducirse que la excepción sólo aplicaba al clero castrense, y no a las “dignidades del clero” en general. Hasta el presente, sólo existe clero castrense católico en la Argentina.

El código procesal penal de la provincia de **Buenos Aires** (ley 11.922) prevé en el art. 241 que cuando por su rango y relevancia la persona que deba declarar ejerza funciones que pudieren resultar entorpecidas como consecuencia del desplazamiento para declarar como testigo, ésta así lo manifestará ante la autoridad que requiere su declaración. En definitiva será el juez el que decida si la persona (por ejemplo el obispo) debo o no comparecer.

El privilegio de no comparecer es un derecho pero no una obligación. Por tanto nada impide que el beneficiado por él pueda renunciarlo y por lo tanto comparecer personalmente ante el Tribunal, aunque no esté obligado a hacerlo, tal como varios códigos manifiestan expresamente⁴⁴⁵. Queda claro que de lo único que se exime a esas personas es de acudir en persona al tribunal, pero no de prestar testimonio (lo harán por escrito, o verbalmente en su propia sede, según los casos); ni tampoco de prestar juramento o promesa de decir verdad, como ya dijimos.

Algunos códigos de procedimiento, como el de **Jujuy** (art.286 inciso b), el de **Mendoza** (art.247) y el de **Santiago del Estero** (art.224 inciso 2), añaden que quienes deben abstenerse de declarar como testigos, también tienen prohibido actuar como peritos en el juicio. Es una prohibición que tiene cierta lógica, ya que el perito al igual que el testigo tiene que prestar juramento o promesa de decir verdad, y está expuesto a declarar como testigo para dar las explicaciones necesarias respecto de su labor, aunque podría haber matices, según veremos más adelante.

8.3.2 Procedimiento civil

En el procedimiento civil las normas son más ambiguas. El art.455 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, exceptúa

⁴⁴⁵ Cuando el Papa Francisco fue elegido, algunos medios recordaron los cuestionamientos que se habían hecho a su actuación durante la dictadura militar, antes de ser obispo y como superior de los jesuitas de la Argentina. Con ese motivo, se difundió ampliamente la grabación de su declaración testimonial brindada en forma personal, siendo ya obispo, en un juicio donde se investigaban hechos que había conocido en aquél carácter. Es uno entre muchos casos que pueden citarse de un obispo que declinó la posibilidad de declarar por escrito y aceptó hacerlo personalmente.

de la obligación de comparecer a “*los funcionarios*” que determine la Corte Suprema, autorizándolos a declarar por escrito.

La Corte ha elaborado una lista de los exceptuados de comparecer mediante la Acordada del 20 de diciembre de 1967, que menciona entre otros a “*obispos y prelados*”, obviamente católicos. Sin embargo, la doctrina extiende ese beneficio a “*prelados de distintos credos*”⁴⁴⁶.

Los códigos procesales civiles de las provincias sólo en algunos casos incluyen excepciones a la obligación de comparecer que beneficien a ministros de culto.

El Código Procesal Civil de **Entre Ríos**, exceptúa de la obligación de declarar en forma personal a los “obispos” (art.443)⁴⁴⁷, se entiende que católicos. Por la especificidad del término, no quedarían abarcados ministros de otras confesiones religiosas, ni tampoco otros clérigos católicos.

El Código Procesal Civil de **La Rioja** (art.204) autoriza a declarar por escrito a “*Las autoridades eclesiásticas, desde el obispo inclusive*”. Lo que no resulta demasiado claro.

El Código Procesal Civil de **Jujuy** (art.335 inc.5º) exime de comparecer a “*los Prelados*”, sin mayor precisión. Parece referirse sólo a los católicos.

El Código Procesal Civil y Comercial de **San Luis**⁴⁴⁸, por su parte, exceptúa de la declaración personal a “*las dignidades eclesiásticas*” (art.456), lo mismo que el Código Procesal Civil de **Mendoza**⁴⁴⁹ (art.195), lo que también parece haber tenido en cuenta sólo a los dignatarios católicos, aunque el texto de la ley no distingue.

El Código Procesal Civil y Comercial de **Tucumán**, no solamente exime de prestar declaración testimonial en forma personal, sino también de prestar declaración confesional a los “*prelados eclesiásticos*” (art.316). Ellos pueden sustituir la declaración presencial por una escrita, bajo

⁴⁴⁶ Ver SIRKIN, Eduardo, “Diferencias entre “revelar” y “relevar” secretos en la prueba testimonial en el CPCCN”, El Dial 2/12/2010, con varias citas de doctrina.

⁴⁴⁷ “*Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el juzgado, debiendo entenderse que no excederá de diez (10) días si no se lo hubiese indicado especialmente. La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio*”.

⁴⁴⁸ Ley N° N° VI-0150-2013.

⁴⁴⁹ Ley 2269 del año 1953 (BO 9/12/53).

juramento o promesa de decir verdad. También en este caso el legislador parece haberse referido exclusivamente a los prelados católicos, diferencia que no tiene justificación actualmente.

También el Código Procesal Civil y Comercial de **Santa Fe** (art.215) prevé la declaración por escrito y "bajo juramento o afirmación", de "*los prelados eclesiásticos*".

Los Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la provincia de **Buenos Aires** (art.455), **Neuquén** (art.457), **Salta** (art.457), **Santiago del Estero** (art.461)⁴⁵⁰ y **Río Negro** (art.455), **Corrientes**⁴⁵¹ (art.455), **San Juan** (art.418) y **Santa Cruz** (art.433) siguen el mismo criterio que el nacional, dejando a la reglamentación del Superior Tribunal provincial la decisión de quienes pueden ser exceptuados de comparecer⁴⁵². Lo mismo el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (art.361) que defiere el tema a la reglamentación que haga el Consejo de la Magistratura.

Otros códigos, como el Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de **Tierra del Fuego**, no contienen previsión alguna sobre este tema.

En cambio, el Código Procesal Civil y Comercial de **La Pampa**⁴⁵³ únicamente exime de la declaración presencial a "*los funcionarios cuyos cargos estén expresamente previstos en la Constitución Provincial*" (art.433), lo que no involucra a ningún ministro de culto en cuanto tal.

El derecho a declarar por escrito en lugar de hacerlo en forma personal es habitualmente concedido a los dignatarios religiosos en el derecho comparado. Así ocurre por ejemplo en **Colombia**⁴⁵⁴.

⁴⁵⁰ El Reglamento Interno del Poder Judicial, aprobado por el Superior Tribunal de la provincia el 11/12/1978, exime de comparecer a declarar como testigos a "*Los Prelados eclesiásticos*".

⁴⁵¹ Decreto-Ley 14/2000 (BO 23/3/00).

⁴⁵² En el caso de la provincia de Buenos Aires esa reglamentación fue dictada por la Acordada 760/1968 de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que en su art.9 admite la declaración por escrito de "obispos y prelados", sin mayor precisión, teniendo evidentemente en mente a los obispos católicos exclusivamente.

⁴⁵³ Ley 1828 del año 1999, y modificatorias.

⁴⁵⁴ Derecho concedido a los cardenales, obispos y ministros equiparables a ellos de otras religiones por el art.271 del Código de Procedimientos penal; y en el art.222 del Código de Procedimientos Civiles. Ver PRIETO, Vicente, op.cit., p.144.

8.4 Alcance del secreto religioso

Comparezca personalmente o declare por escrito o de otro modo, el ministro de culto puede verse enfrentado al dilema antes planteado: manifestar lo que puede estar amparado bajo el secreto religioso, o ampararse en ese secreto para no declarar.

El alcance del secreto religioso no es algo que haya sido delimitado por la ley en el orden federal, y ha sido raramente tratado por la jurisprudencia en la Argentina. En un sonado caso en que se planteó la cuestión, los jueces concluyeron que

“la única materia de ese secreto es lo expresado verbalmente por quien se confiesa” y “que no es materia del secreto de confesión ocultar pruebas de un delito confesado”⁴⁵⁵.

Se trataba de un sacerdote que había invocado el “secreto de confesión” para no revelar el origen de algunos elementos hallados en su poder, y utilizados para la comisión de un delito (la máquina de escribir utilizada por los secuestradores de una persona, para remitir comunicaciones relativas al secuestro). Es claro que, en todo caso, no se trataba de secreto de confesión, pero eventualmente podría haberse tratado de secreto religioso en sentido lato.

En otro caso, que involucraba a un ministro religioso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), la Suprema Corte de Mendoza resolvió que el secreto admitido

“es sobre los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento [del ministro] en razón de su propio estado; pero no alcanza a los consejos que pudieron emitir en razón del mismo”⁴⁵⁶.

Se trataba de un homicidio perpetrado por tres personas, una de las cuales se arrepintió y refirió el hecho a su madre, quien a su vez lo refirió a un obispo de la Iglesia, que acompañó a la mujer a denunciar el hecho a las autoridades, de resultas de lo cual se esclareció el caso. La defensa argumentó que la prueba era nula porque se había obtenido mediante violación

⁴⁵⁵ CNFed, sala Crim.y Corr., 16/12/70, “Maguid” (LL 140-643).

⁴⁵⁶ SCJMendoza, sala 2, “Fiscal c/Pavano Godoy”, 13/5/97, inédito.

del secreto de confesión, pero el tribunal juzgó que no había mediado confesión, sino pedido de consejo por parte de un tercero (la madre del delincuente) acerca de la denuncia a realizar.

Ciertamente, el secreto religioso incluye aquello que el ministro de culto ha conocido porque le fue revelado, dicho o comunicado por el fiel a quien asiste (sea el penitente en secreto de confesión, sea un fiel que acude en busca de orientación o consejo, fuera del sacramento en el caso de las iglesias que lo tienen, o en cualquier caso en las demás confesiones religiosas).

Pero también estaría protegido lo que el ministro de culto conoce no por comunicación verbal del fiel, sino por haberlo percibido en el ejercicio de su ministerio. Por ejemplo, la asistencia a determinados actos de culto o el cumplimiento de ciertas prácticas religiosas, en las que él haya intervenido como oficiante o testigo. Esto también pertenece a la intimidad religiosa de la persona, y debería estar protegido por el secreto.

En el nivel provincial, algún código procesal se ha hecho cargo de alguna manera de este tema. Así por ejemplo, el de **Río Negro** en materia penal⁴⁵⁷ dice expresamente que

"No podrán ser objeto de secuestro:1) Las comunicaciones entre el imputado y las personas obligadas a guardar secreto profesional. 2) Las notas que hayan tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre cualquier circunstancia a la cual se extienda el derecho o el deber de abstenerse de declarar.{...} La limitación sólo regirá cuando las comunicaciones u objetos estén en poder de aquellas personas que deban abstenerse de declarar, o en el caso de profesionales obligados por el secreto profesional, si están en su poder o archivadas en sus oficinas o en establecimientos hospitalarios." (art.144).

La misma norma se encuentra en el Código Procesal Penal de **Neuquén** (art.149).

Esta previsión legal se vincula con otra cuestión de gran interés, a saber: ¿es lícita la interceptación de comunicaciones entre el ministro de culto y el fiel que acude a él? Ya no se trataría en ese caso de forzar al ministro de culto a revelar lo que ha conocido en el ejercicio del ministerio, sino de que el Estado (o un tercero) tome conocimiento de la confidencia y

⁴⁵⁷ Ley 5020 (BO 12/1/2015).

eventualmente la divulgue, contra la voluntad o al menos sin conocimiento del ministro de culto y del fiel que la está comunicando.

Como regla es claro que semejante interceptación, hoy facilitada por los medios tecnológicos disponibles, es ilícita si la realiza un particular, e incluso el Estado sin una orden judicial. Pero, ¿podría ordenarla un juez en el curso de una investigación a su cargo? ¿Cederá el secreto religioso ante una necesidad pública por razones de seguridad?⁴⁵⁸

En la Argentina la ley no se ha planteado la cuestión⁴⁵⁹, ni se conocen antecedentes jurisprudenciales al respecto.

En materia de secreto profesional en sentido amplio -ya no religioso- la jurisprudencia es más abundante, y resulta aplicable al caso en la medida en que ambas especies de secreto coincidan (aunque, como veremos, la protección del secreto religioso es más férrea). En general se admite que pertenece a la conciencia del declarante el determinar qué es lo que queda amparado por el secreto profesional. Sin embargo, SOLER advierte que esa afirmación

“es exacta en un cierto sentido negativo; pero no puede significar que basta que el profesional se resuelva a hablar, para que el hecho deje de constituir un secreto protegido”⁴⁶⁰.

Dicho de otro modo: si interrogado el ministro de culto éste se ampara en el secreto religioso, ello debería bastar para detener el interrogatorio. Pero si no se ampara en él, e igualmente declara, y resulta luego que ha violado el secreto religioso, la prueba podrá ser invalidada por ese motivo, aunque no necesariamente habrá incurrido en el delito de violación de secretos, dado que la interrogación judicial podrá ser tenida como “justa causa” para la revelación.

La jurisprudencia ha establecido –en relación al secreto médico o profesional- que

⁴⁵⁸ Estas cuestiones son examinadas por MILANI, Daniela, “Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale”, cit., p.72.

⁴⁵⁹ Sí lo ha hecho el Derecho Canónico. Un Decreto General de la Congregación de la Doctrina de la Fe de fecha 23 de noviembre de 1988 (*Acta Apostolicae Sedis* 80, p.1367) castiga con excomunión *latae sententiae* a “cualquiera que capte, sirviéndose de cualquier instrumento técnico, o divulgue a través de un medio de comunicación social, lo dicho por el confesor o por el penitente en el sacramento de la confesión, tanto si la confesión es verdadera o simulada, propia o de un tercero”.

⁴⁶⁰ SOLER, Sebastián, Op.cit., § 107.IX.

“en nuestro sistema de garantías la regla es el secreto profesional y la excepción el deber de revelarlo por justa causa, la que nunca podrá ser la sola finalidad de exponer al necesitado a un proceso penal”⁴⁶¹.

La misma sentencia explica respecto de los casos de excepción al deber de confidencialidad que

“en todos ellos la finalidad es la de evitar o prevenir daños serios a otras personas, como el contagio de enfermedades o epidemias o situaciones de violencia familiar, pero nunca por el mero interés de la persecución penal”.

En **Chile**, la cuestión se planteó en tiempos de la dictadura militar respecto de la documentación conservada por la Iglesia Católica (la Vicaría de la Solidaridad del arzobispado de Santiago) referida a personas desaparecidas. La Iglesia defendió firmemente su derecho a no entregar esa documentación a las autoridades, amparándose en el secreto ministerial que cubría no solamente las informaciones orales recibidas, sino también las documentales⁴⁶².

8.5 Protección del secreto religioso y de confesión.

8.5.1 Procedimiento penal

Las leyes procesales argentinas, en general resguardan adecuadamente el secreto religioso, eximiendo al ministro de culto de la obligación legal de revelarlo. Generalmente, el secreto religioso es protegido en forma genérica, es decir: tanto el secreto de confesión en sentido estricto, como el secreto religioso en sentido lato; y tanto para los sacerdotes católicos como para los ministros religiosos en general.

Incluso dos constituciones provinciales tutelan el secreto religioso en forma específica. La de **Santiago del Estero**, en su texto reformado en 2005, dice que

“Queda garantizado el resguardo del secreto profesional y de la confesión religiosa” (art.53).

⁴⁶¹ CNFed.Crim.yCorr, Sala I, 30/4/09, causa 41557 “M., A.P. s/nulidad”, EIDial 14/5/09.

⁴⁶² PRECHT PIZARRO, Jorge, “15 Estudios sobre la Libertad Religiosa en Chile”, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005, p.178.

La de **San Luis**, expresa que

“Queda garantizado el resguardo al secreto profesional y a la confesión religiosa” (art.34).

La constitución de **Neuquén** preveía hasta su reforma en 2006 (en la que desapareció este texto) que

“El Estado garantiza el secreto profesional. Los jueces o magistrados no podrán exigir al defensor la violación del secreto profesional y serán castigados con las penas que la ley determine quienes violaren o incitaren a violar dicho secreto en perjuicio de terceros.” (art.34).

El Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984 (del año 1991)⁴⁶³, dispone en su artículo 244:

“Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad, los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores o escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el interesado, salvo las mencionadas en primer término. Si el testigo invocase erróneamente ese deber con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, el juez procederá sin más a interrogarlo.”

Esa norma es correlativa del artículo del código penal, que castiga la violación de secretos. En ella, como ya hemos visto, se menciona a los secretos conocidos en razón del “estado” de determinadas personas, sin especificar quienes son. En la norma procesal, en cambio, queda claro que el secreto religioso está vinculado en el “estado” de ministro de culto.

La norma no se limita al secreto de confesión, sino a “los hechos que hubieren llegado a su conocimiento” en razón de su estado. Naturalmente, no se refiere a los hechos que pudieran haber conocido por cualquier otra circunstancia, como ocurriría si un ministro de culto, transitando por la calle, es testigo de la comisión de un delito, o de cualquier otro hecho que

⁴⁶³ Este Código reemplazó al Código de Procedimientos en lo Criminal del año 1888 (ley 4372, ADLA 1881-88, p.462), que en su artículo 275 disponía: “No podrán ser admitidos como testigos: 1º) los eclesiásticos, sobre los hechos que les hayan sido revelados en la confesión”.

caiga bajo su conocimiento por alguna circunstancia ajena a su estado o condición.

Los sujetos amparados son “*los ministros de un culto admitido*”, cualquiera sea éste⁴⁶⁴, y no solamente los sacerdotes católicos, o de iglesias que admitan la confesión sacramental. Es lógico que así sea: lo contrario supondría una discriminación odiosa. En cambio, quedarían fuera de la protección de la norma los ministros de un “culto no admitido”, es decir, de un grupo religioso no reconocido por el Estado como tal. Cabe preguntarse si en este caso, más allá de la dificultad que para tales ministros podría tener la prueba de su condición de tales, no se estará lastimando la libertad religiosa, en la medida en que se entienda que ella incluye la posibilidad de que una comunidad religiosa exista y funcione como tal sin someterse al registro o control estatal.

Es importante advertir que, a diferencia de las otras personas amparadas por el secreto profesional, los ministros de culto no pueden ser relevados del secreto “por el interesado” (es decir, por quien le confiara el secreto), ni tampoco por el juez⁴⁶⁵.

En los demás casos, el deber de guardar secreto cede cuando existe “justa causa” para revelarlo; y en general se admite como tal a la autorización que brinde el “depositante” del secreto (quedando en tal caso librado a la conciencia y normas de ética profesional del depositario la revelación). Para algunos, la mera citación judicial e interrogatorio en juicio, sería también “justa causa” para limitar la obligación de guardar secreto, por el interés público comprometido en la averiguación de la verdad en sede judicial. Pero en el caso de los ministros de culto, se estima que es un bien superior la protección de la esfera de intimidad entre ministro de culto y confidente, y por eso no se admite el relajamiento de la obligación de guardar el secreto. Es que la protección de dicho secreto no está establecida como privilegio del penitente, sino de la libertad religiosa, que es un bien público.

⁴⁶⁴ Sobre el concepto de “culto admitido”, ver ley 21.745 y lo expuesto al respecto en NAVARRO FLORIA, Juan G., “El reconocimiento de las confesiones religiosas en la Argentina”, en Congreso Latinoamericano sobre Libertad Religiosa, IDEC, Lima, 2001; y del mismo autor, “Las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica en el derecho argentino”, ED 151-897.

⁴⁶⁵ El código procesal penal de **Santa Cruz**, art.228, que más abajo se cita, es el único que prevé en forma expresa que también el juez (y no solamente quien confió el secreto) puede, excepcionalmente, relevar del secreto profesional, pero no del secreto religioso.

En el nuevo Código Procesal Penal de la Nación del año 2014⁴⁶⁶, hay algún cambio en la redacción. Textualmente, dice que

"Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores, escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Estos últimos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados del deber de guardar secreto por el interesado" (art.153).

En el texto se mantiene la obligación de abstenerse de declarar impuesta a los ministros de culto acerca de *"los secretos que hubieran llegado a su conocimiento en razón del propio estado"*, lo que abarca al secreto religioso en sentido amplio, y no sólo al de confesión, y se aplica a todos los cultos "admitidos". La dificultad se presenta por la facultad otorgada a "el interesado" (se supone, el que confió el secreto) de liberar del secreto al depositario. La norma dice que quienes pueden ser liberados son "estos últimos", y lo expresa inmediatamente a continuación de otra oración que enumera a diez categorías de personas obligada a guardar secreto de distinta naturaleza. La interpretación literal debería ser que los que pueden ser liberados del secreto son los "últimos" de esa lista, es decir, los funcionarios públicos (y no todos los que la integran).

De cualquier manera, el artículo transcrito debe leerse conjuntamente con el artículo 151 del mismo cuerpo, que dice que

"El testigo no tendrá la obligación de declarar sobre hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal".

Como la revelación de secretos conocidos en razón del propio estado es un delito penal, aún en caso de ser liberado por el confidente, el ministro de culto llamado como testigo debería poder invocar esta excepción⁴⁶⁷.

⁴⁶⁶ Ley 27063 del 4 de diciembre de 2014 (BO 10/12/2014). Este código aún no resulta aplicable por estar pendiente la adaptación de los tribunales y del ministerio público fiscal a sus exigencias, y coexistirá durante algún tiempo con el anterior, que seguirá siendo aplicable a los procesos iniciados durante su vigencia.

⁴⁶⁷ En el caso de los sacerdotes católicos, además, la violación del sigilo sacramental es un delito penal canónico, que los expone a gravísimas penas. Por lo tanto, con más razón podrán invocar el derecho a no declarar para no incurrir en esa responsabilidad penal.

Encontramos normas idénticas a la del Código procesal penal nacional aprobado por ley 23.984 en los códigos procesales penales de las provincias del **Chaco** (art.220), **Córdoba** (art.221), **Corrientes** (art.245), **Formosa** (art.221), **Misiones** (art.229), **Mendoza** (art.234) y **Tierra del Fuego** (art.219). Con ligeras variantes de redacción pero idéntico concepto, en los códigos de **Entre Ríos** (art.289⁴⁶⁸), **Catamarca** (art.230⁴⁶⁹), **La Rioja** (art.283), **Salta** (art.233), **Santa Cruz** (art.228).

Los códigos procesales de **La Pampa** (art.216), **San Juan** (art.245), **Tucumán** (art.221)⁴⁷⁰ y **Santiago del Estero** (art.209)⁴⁷¹, agregan entre los secretos protegidos al periodístico, “*en relación a la identidad de sus informantes*”; admitiendo que el periodista o propietario del medio periodístico pueda ser relevado de él por “el interesado”, con lo que el único secreto que queda protegido en forma absoluta es el religioso.

En algún caso se añade que “*los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos*” –como es el caso de los ministros de un culto admitido-, “*no podrán ser peritos*” (Código Procesal Penal de **Catamarca**, art.244; en términos similares, **Jujuy**, art.286, y **Mendoza**). Esta extensión puede resultar problemática si, por hipótesis, fuera necesario en algún caso contar con un perito en teología o ciencias sagradas. Parece claro que la función pericial no tiene por qué ser restringida en orden a la protección del secreto religioso, puesto que se trata de brindar un informe objetivo al juez, y no de revelar lo que el ministro de culto ha conocido en ejercicio del ministerio.

La cuestión es regulada en forma parcialmente diversa por los códigos procesales en lo penal de otras provincias.

El de **Jujuy**⁴⁷² (art.254) dice que

⁴⁶⁸ El texto vigente, según la ley 9754 (BO 9/1/07, ADLA LXVII-B-2057) expresamente aclara que la excepción a la posibilidad de ser liberados del secreto se refiere a “*los ministros de culto admitido*”. Lo mismo decía el art.244 del anterior Código Procesal Penal (ley 4843, BO 15/12/1969), que tampoco admitía la dispensa del secreto a los ministros de culto.

⁴⁶⁹ Lo mismo que el caso citado en la nota anterior (texto según ley 5097).

⁴⁷⁰ Texto según ley 7383 de mayo de 2004 (BO 4/6/04, ADLA LXIV-C-4083).

⁴⁷¹ Texto según ley 6270 de 1996, ADLA 1996-D-6018.

⁴⁷² Ley 3584, de 1978 (BO 1/6/79).

“no podrán ser admitidos como testigos: 1) los ministros de cualquier culto aceptado por el Estado, sobre los hechos que hayan conocido por razón de su ministerio”.

Sin embargo, esas personas

“...no quedarán liberadas por ello de concurrir a la citación que se les haga⁴⁷³, ni podrán ampararse en el secreto, sino después de habérseles formulado la pregunta o preguntas a las que entiendan no deben responder. Si la excusa no fuere admitida, el testigo está obligado a responder en el acto del interrogatorio”.

El sistema es entonces análogo al nacional y de la mayor parte de las legislaciones provinciales, salvo que queda a criterio de juez admitir o no en el caso concreto la invocación del secreto, lo que de todos modos no se diferencia mucho de lo dispuesto en el último párrafo del artículo habitual en esta materia y transcripto más arriba.

La provincia de **San Luis**, una de las que garantiza el respeto del secreto de confesión en su constitución misma, tiene un código procesal penal antiguo, de 1908⁴⁷⁴, que exceptúa de la obligación genérica de comparecer ante los tribunales del art.176 a “*las dignidades del clero*” (art.177), y dispone que directamente

“no serán admitidos como testigos: 1) los eclesiásticos sobre los hechos que les hayan sido revelados en la confesión”.

En este caso, por una parte la protección parece limitarse a los ministros católicos, y por otra se limita al secreto de confesión en sentido estricto, y no al secreto religioso en general. De manera que los ministros de otros credos, y los sacerdotes católicos en cuanto exceda al secreto de confesión en sentido estricto, son potencialmente objetores de conciencia en caso de ser interrogados sobre lo que es materia de secreto religioso⁴⁷⁵.

Por lo demás, y al igual que en los casos anteriores, como hasta el momento de ser interrogado el ministro religioso no sabe sobre

⁴⁷³ Con excepción de “*los altos dignatarios de los cultos admitidos por el Estado*”, que están eximidos de la obligación de comparecer y declaran “*por medio de informe, bajo juramento*” (art.259).

⁴⁷⁴ Ley 355, BO 1/2/1909.

⁴⁷⁵ Significativamente, la provincia de San Luis ha legislado en forma expresa acerca del derecho a la objeción de conciencia, otorgándole una amplia protección (Ley I - 0650 - 2008).

qué se le ha de preguntar, es claro que debe concurrir a la citación y, recién frente a la pregunta concreta, invocar si procede la excepción.

Un caso más complicado para los ministros de culto, es el de la Provincia de **Buenos Aires**, imitado por la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**.

El antiguo código de procedimientos de la Provincia⁴⁷⁶, contenía una norma idéntica a la de San Luis (art.147). Sin embargo, el actual y vigente⁴⁷⁷, en su artículo 236 reproduce el texto del art.244 del código nacional, pero omitiendo la frase final que exceptúa de la posibilidad de ser relevados del secreto a los ministros de culto. Lo mismo ocurre con el Código Procesal Penal de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**⁴⁷⁸.

Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad homónima, en sede penal, si el ministro religioso es relevado del secreto acerca de lo que ha conocido en razón de su estado por quien se lo confiara (incluso si el sacerdote católico es “relevado del secreto de confesión” por el penitente), estaría legalmente obligado a declarar. Si así fuera, la única forma de preservar el ámbito de secreto sería recurrir a la objeción de conciencia.

En este caso con toda claridad se ve el conflicto entre la obligación legal de declarar lo que se sabe, que puede ser urgida por el juez, y la obligación de conciencia (y canónica en el caso del sacerdote católico) de guardar el secreto. Si el ministro religioso es relevado del secreto por el juez, está obligado a declarar, y si calla se expone a una pena de hasta diez años de prisión, según los casos (art.275 del código penal). Ni en la provincia ni en la ciudad de Buenos Aires la ley provee de escapatoria o alternativa. Ni siquiera para el sacerdote católico, para quien el silencio no sólo es aconsejado por su conciencia, sino que es imperado por una norma jurídica positiva (canónica), lo que produce un desgarramiento entre dos ordenamientos a los que se halla sometido.

Desde luego, no solamente por la protección genérica de la libertad de conciencia que brinda la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional, sino por el modo en que la cuestión es tratada tanto en el orden federal cuanto en la generalidad de las provincias, esta norma en particular es claramente anómala. El ministro que, en concreto, se

⁴⁷⁶ LEY 3.589 - Texto Ordenado por Decreto 1174/86, BO 18/4/86.

⁴⁷⁷ Ley 11.922.

⁴⁷⁸ Ley 2303, art.123.

encuentre en ese difícil trance, debería presentar formalmente la objeción de conciencia y obtener del juez la dispensa que la ley no parece otorgarle y, en caso de serle negada, recurrir a instancias judiciales superiores donde razonablemente debería hacerse lugar a la objeción de conciencia así formulada.

Además de los dos casos anteriores, tampoco está bien resuelta la cuestión en el Código Procesal Penal de la provincia de **Chubut**⁴⁷⁹. La norma aplicable dice, escuetamente:

“Deberán abstenerse de declarar quienes según la ley deban guardar secreto. Estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. Si el juez estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, le ordenará que preste su declaración mediante resolución fundada” (art.189).

Los problemas, como se ve, son múltiples:

a) en primer lugar, ninguna ley estatal impone expresamente a los ministros de culto el “deber de guardar secreto”, salvo en todo caso la norma genérica del Código Penal referida a la violación de secretos. El deber de guardar el secreto religioso resulta de su propio estado y, en muchos casos (como en el del secreto de confesión) de la legislación o normativa interna de las propias confesiones.

b) en segundo lugar, aún quienes tienen el derecho-deber de guardar secreto, según la ley chubutense podrían ser relevados de él en todos los casos “por el interesado”, que se supone será quien confió el secreto. No hay excepción alguna respecto de los ministros de culto, ni respecto del secreto de confesión específicamente. Vale al respecto lo dicho más arriba respecto de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

c) finalmente, la norma habilita que también a los ministros de culto, el juez pueda exigirles declaración si entiende que no les asiste la facultad de abstenerse o de guardar secreto.

El mismo problema se presenta en el caso de **Neuquén**, cuyo Código Procesal Penal de 2011 dice que

“Deberán abstenerse de declarar quienes según la ley deban guardar secreto. Estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar

⁴⁷⁹ Ley 5478, aprobada el 7 de abril de 2006 y vigente a partir del 31 de agosto de 2006 (art.424).

secreto. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente del imputado, ligado por especiales vínculos de afectos, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Las personas mencionadas serán informadas sobre su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración. Ellas podrán ejercerla aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas. Si el juez o tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará a pedido de parte su declaración mediante resolución fundada” (art.190).

Algo similar ocurre con el también relativamente reciente Código Procesal Penal de la Provincia de **Santa Fe**⁴⁸⁰, que dice que

“no podrán ser admitidas como testigos las personas que, respecto del objeto de su declaración, tuvieran el deber de guardar un secreto particular u oficial. En caso de ser citadas, deberán comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y abstenerse de declarar” (art.178).

La norma es clara y sin duda abarca a quienes están obligados al secreto religioso en general, y de confesión en particular.

Sin embargo, el art.179 del mismo cuerpo dice que

“La parte que considerara errónea la invocación del testigo respecto a la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, podrá solicitar al Tribunal que ordene su declaración”.

Va de suyo que según lo que venimos exponiendo, en el caso de los ministros de culto no procede tal orden y debe respetarse el secreto invocado.

Por su parte, el también reciente Código Procesal Penal de **Río Negro**⁴⁸¹ se limita a establecer que

“Deberán abstenerse de declarar quienes según la ley deban guardar secreto”,

La norma no hace mención explícita a los ministros de culto, ni tampoco autoriza a quien confió el secreto a liberarlos de esa obligación. Pero en cambio dice que

⁴⁸⁰ Ley 12.734, BO 31/8/07.

⁴⁸¹ Ley 5020 del 10 de diciembre de 2014 (BO 12/1/2015).

"si el Juez o tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse ordenará a pedido de parte su declaración mediante resolución fundada" (art.185).

Caben al respecto los mismos comentarios hechos respecto de los textos similares recién analizados.

8.5.2 Procedimiento civil

En materia de procedimiento civil las normas, tanto en el orden nacional como provincial, son de una mayor ambigüedad, y no suelen contener referencias específicas a los ministros de culto.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art.444) se limita a decir que

"El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: 1) Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor; 2) Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico o industrial".

Es notorio que el segundo supuesto es una especie del primero, por cuanto la revelación de secretos es un ilícito penal que expone a enjuiciamiento a su autor.

Los códigos procesales provinciales en materia civil, están concebidos en términos idénticos o al menos muy similares⁴⁸².

El código de **La Rioja** (art.212) agrega un párrafo en estos términos:

"En estos casos, el tribunal lo escuchará privadamente sobre los motivos y circunstancias de su negativa y le permitirá o no abstenerse de contestar. No podrá invocar el secreto profesional cuando el interesado exima al testigo del deber de guardar el secreto, salvo que el tribunal, por razones vinculadas al orden público, lo autorice a mantenerse en él."

⁴⁸² Así: Código Procesal Civil y Comercial de **Buenos Aires** (art.442), **Catamarca** (art.444), **Misiones** (art.444), **Chaco** (art.422), **Chubut** (art.444), **Córdoba** (art.308), **Entre Ríos** (art.430), **Formosa** (art.441), **Neuquén** (art.444), **Río Negro** (art.444), **Salta** (art.444), **Santiago del Estero** (art.448), **San Luis** (art.444), **Santa Cruz** (art.422), **San Juan** (art.407), **La Pampa** (art.422) y **Corrientes** (art.444), y el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (art.350).

El Código Procesal Civil de **Jujuy**⁴⁸³, por su parte, es similar al nacional pero omite mencionar al secreto profesional (sólo lo hace respecto del científico, industrial o militar).

Por su parte, el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de **Tierra del Fuego** (art.392.2) dice que:

"pueden rehusarse a contestar preguntas que violen su deber o facultad de reserva, aquéllos que están amparados por el secreto profesional o que por disposición de la ley deban guardar secreto".

Ha sido más específico el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de **Santa Fe**⁴⁸⁴, que en su art.216 dispone:

"Los abogados, procuradores, médicos, sacerdotes, farmacéuticos y parteras podrán rehusarse a prestar declaración sobre hechos que se les hubiere comunicado confidencialmente en el ejercicio de su profesión o ministerio".

Por su parte, el Código Procesal Civil de la provincia de **Mendoza**, en su art.199.IV, ha previsto la situación de un modo particular. Dice así:

"Si el testigo se negara a declarar invocando secreto profesional o inminencia de daño moral o material para él, su cónyuge, ascendientes o descendientes, el juzgador le escuchara privadamente sobre los motivos y circunstancias de su negativa y le permitirá o no abstenerse de contestar. No podrá invocar el secreto profesional cuando el interesado exima al testigo del deber de guardar el secreto, salvo que el juez, por razones vinculadas al orden público, lo autorice a mantenerse en él".

Creemos que en el respeto del secreto religioso, y más aún del secreto de confesión estricto, está involucrado el orden público, porque protege no solamente a la privacidad de las personas sino también a la libertad de la propia confesión religiosa. Por lo que sería uno de los casos en que el juez debería autorizar a mantener la reserva a pesar de la dispensa del penitente o del fiel que hubiera confiado el secreto al ministro de culto que lo invoca.

⁴⁸³ Ley 1967 y modificatorias.

⁴⁸⁴ Ley 5531 y modificatorias.

En cambio, el Código Procesal de **Tucumán** ha omitido el tema y no prevé la posibilidad de que el ministro de culto se exima de declarar.

Al no existir en la mayor parte de las leyes procesales civiles una consideración específica del secreto religioso (y menos aún del secreto de confesión), se lo debería considerar incluido en el concepto genérico de secreto profesional, aunque ya se ha visto que tiene características propias y específicas que merecerían su mención y regulación por separado.

8.6 Derecho internacional y comparado

PALOMINO hace notar, en relación a este tema, que

“la tendencia general ha sido la de establecer el privilegio del secreto religioso a través de la legislación, en la que la tendencia protectora ha sido claramente expansiva (tanto en el orden de los sujetos-ministros protegidos, como en cuanto a las confesiones o grupos que pueden acogerse a la protección”⁴⁸⁵.

Prueba de lo expuesto es la norma contenida en las “Reglas de Procedimiento y Prueba” de la Corte Penal Internacional⁴⁸⁶, que en su regla 73 dispone expresamente que

“las comunicaciones que tengan lugar en el contexto de una categoría de relación profesional u otra relación confidencial se considerarán privilegiadas y, en consecuencia, no estarán sujetas a divulgación”. “La Corte, [...] tendrá especialmente en cuenta la necesidad de reconocer el carácter privilegiado de las comunicaciones en el contexto de la relación profesional entre una persona y su médico, psiquiatra, psicólogo o consejero, en particular cuando se refieran a las víctimas o las involucren, o entre una persona y un miembro del clero; en este último caso, la Corte reconocerá el carácter privilegiado de las

⁴⁸⁵ PALOMINO, “Derecho a la intimidad...”, p.92.

⁴⁸⁶ U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000).

comunicaciones hechas en el contexto del sacramento de la confesión cuando ella forme parte de la práctica de esa religión”.

En los distintos países, se tutela de modos diversos este secreto. En algunos casos se lo hace bajo la forma de tutela a la objeción de conciencia del ministro.

La cuestión ha sido prevista con frecuencia en los concordatos firmados entre los estados y la Santa Sede, especialmente los más recientes. Un buen ejemplo es el muy completo concordato entre la Santa Sede y la **República Portuguesa** del año 2004⁴⁸⁷, que en su artículo 5 establece que

“los eclesiásticos no pueden ser preguntados por los magistrados u otras autoridades sobre hechos y cosas de que hayan tenido conocimiento con motivo de su ministerio”.

Por su parte, el Acuerdo entre la Santa Sede y la **República Federativa del Brasil**, del 13 de abril de 2008, establece que

“Está garantizado el secreto del oficio sacerdotal, especialmente el de la confesión sacramental” (art.14).

Se advierte que en estos casos no es sólo el secreto de confesión, sino el secreto religioso en sentido amplio el que queda protegido⁴⁸⁸.

⁴⁸⁷ Ver al respecto PRESAS BARROSA, Concepción, “El Concordato de 2004 entre la Santa Sede y la República Portuguesa”, en ADEE vol. XXI (2005), p.330.

⁴⁸⁸ También el Convenio entre la Santa Sede y Bosnia Herzegovina, del 19 de abril de 2006, establece que *“en cualquier caso, el sigilo de Confesión es inviolable”* (art.8.2), lo mismo que el Acuerdo con Croacia (1996), art.8.2. El Convenio entre la Santa Sede y la Libre Ciudad Hanseática de Bremen (Alemania), del 21 de septiembre de 2003, establece que *“Los eclesiásticos, y sus asistentes y las personas que en preparación a la profesión participan en su actividad profesional, tienen la facultad, incluso en procedimientos sujetos al derecho del Land, de negar el testimonio sobre aquello que ha sido confiado o ha llegado a conocimiento de ellos en el marco de su actividad pastoral”* (art.9). En análogos términos se expresan los Convenios con el Land de Brandemburgo (2003), art.9, Sajonia-Anhalt (1998), art.1.3, y Meclemburgo-Pomerania Anterior (1997), art.9; y en términos similares pero especificando además que *“el secreto de la confesión está garantizado”* (art.9), el Convenio con la Libre y Hanseática ciudad de Hamburgo, del 29 de noviembre de 2005, lo mismo que el Acuerdo con el Land de Schleswig-Holstein del 12 de enero de 2009 (art.9). El acuerdo entre la Santa Sede y Letonia, del 8 de noviembre de 2000, prevé que *“El sigilo del sacramento de confesión es reconocido e inviolable. Nadie puede nunca interrogar a un sacerdote católico sobre asuntos relacionados con el secreto de confesión, incluso si tal sacerdote apareciera como testigo de parte ante un tribunal civil”* (art.7). El Acuerdo entre la Santa Sede y Lituania sobre asuntos jurídicos, del año 2000, establece que *“La República de Lituania garantizará la inviolabilidad del secreto inherente a la confesión sacramental, incluso cuando un sacerdote sea llamado a dar testimonio o intervenir en procesos judiciales”* (art.8). Por su parte, el Acuerdo entre la Santa Sede y la República Eslovaca del 24 de noviembre de 2000, prevé que *“El secreto confesional es inviolable. La inviolabilidad del secreto confesional*

Lo mismo ocurre en el Concordato con **Italia** de 1984 (art.4.4):

“Los eclesiásticos no están obligados a dar a los magistrados o a otra autoridad informaciones sobre personas o materias de las que hayan tomado conocimiento por razón de su ministerio”.

Por su parte, un concordato más antiguo como es el firmado con la **República Dominicana** en 1954 (art.XI.2), prevé:

“Los eclesiásticos no podrán ser interrogados por jueces u otras autoridades sobre hechos o cosas cuya noticia les haya sido confiada en el ejercicio del sagrado ministerio y que por lo tanto caen bajo el secreto de su oficio espiritual”.

Si bien los concordatos citados se refieren, como es natural, a los clérigos católicos, el principio es susceptible de ser universalizado y aplicado a otros ministros religiosos.

En **Inglaterra**, luego de la Reforma, la protección del secreto de confesión parece haber desaparecido, aunque no hay jurisprudencia terminante al respecto⁴⁸⁹.

En los **Estados Unidos** existe una fuerte protección del secreto de confesión ("priest-penitent privilege"), afirmada por la Suprema Corte en numerosos precedentes⁴⁹⁰ y recogida en las leyes procesales⁴⁹¹. La jurisprudencia considera que el secreto ministerial, lo mismo que el privilegio entre abogado y cliente, o médico y paciente, está "arraigado en la necesidad

comprende el derecho de negar la deposición delante de los órganos estatales de la República Eslovaca. La República Eslovaca garantiza también la inviolabilidad del secreto de información, confiado oralmente o por escrito bajo condición de reserva a la persona encargada de la cura pastoral” (art.8). Según el Acuerdo con Gabón (1997), *“El secreto de la confesión es absoluto, y por lo tanto inviolable. No es por lo tanto nunca permitido interrogar a un clérigo sobre esta materia”* (art.8.3).

⁴⁸⁹ Cfr. ZUBACZ, Gregory, “Le secret sacramentel et le droit canadien », Gratianus, Quebec, 2010, p.142.

⁴⁹⁰ Así, "Totten vs. United States", 92 US 105, 107 (1875).

⁴⁹¹ Así por ejemplo, en el Estado de Oregon, Oregon Evidence Code, Sec.40.260, regla 506 ("member of clergy-penitent privilege"), que dispone que un "miembro del clero no será, sin el consentimiento de la persona que le hizo una comunicación, examinado acerca de cualquier comunicación confidencial hecha al clérigo en su calidad profesional de tal". Normas análogas existen en todos los estados.

imperativa de confidencia y confianza"⁴⁹². El privilegio es entendido en forma amplia y abarca cualquier confesión hecha por un penitente a un ministro en su calidad de tal, para obtener ayuda espiritual, y aplica no sólo a la confesión en la Iglesia Católica sino a otras confesiones.

En **España**, el secreto de confesión es objeto de tutela expresa por parte de la ley. El Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, del 28 de julio de 1976 (art.II.3), dispone que

"En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras Autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio".

Disposiciones similares aparecen en los acuerdos con las confesiones minoritarias: los artículos 3.2 de cada uno de los acuerdos con evangélicos, judíos y musulmanes, aprobados por ley el 10 de noviembre de 1992. Queda de ese modo en claro que el secreto religioso ni es privativo de la Iglesia Católica, ni se reduce al secreto de confesión.

8.7 Obligación de denunciar delitos cometidos por ministros de cultos

Cabe preguntarse si el obispo, el superior religioso, o la autoridad religiosa del credo de que se trate, que toma conocimiento por alguna vía de la posible comisión de un delito por parte de un ministro religioso, está obligado a hacer la denuncia judicial.

Hay que distinguir aquí lo que sea obligatoriedad jurídica, de la conveniencia o decisión prudencial. Si en algún momento se sabe que el superior religioso estuvo informado de la existencia de presuntos delitos (e incluso, que alguien, por caso una supuesta víctima, le hubiese requerido su intervención y las medidas apropiadas), y guardó silencio u omitió hacer la denuncia penal para la investigación del hecho, es altamente probable que merezca un fuerte reproche de la opinión pública. La pregunta, sin embargo, es si

⁴⁹² "Trammel vs. United States", 445 US 40, 51 (1980).

estaba jurídicamente obligado a hacer la denuncia, o tenía derecho a no hacerla, aun asumiendo el riesgo de ese reproche social⁴⁹³.

Por otra parte, hay que notar la relación que existe entre la eventual obligación (o la conveniencia) de denunciar delitos, con el secreto religioso que acabamos de analizar. Es muy probable que la persona que ejerce la autoridad religiosa de una comunidad determinada (por ejemplo, el obispo, o el pastor presidente) sea él mismo un ministro de culto. Y que el hecho ilícito que podría ser objeto de denuncia, haya llegado a su conocimiento en ejercicio del ministerio. En este caso, chocan dos obligaciones: la de guardar secreto, y la eventual de denunciar. La obligación del secreto religioso, funcionaría entonces como excepción a la obligación de denunciar⁴⁹⁴.

En la Argentina, las únicas personas que de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Nación (art.177) tienen obligación de denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento, son

“los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en ejercicio de sus funciones”.

Ni el obispo, ni el superior religioso, ni el párroco, ni la autoridad de alguna comunidad religiosa no católica, son funcionarios públicos⁴⁹⁵. Luego, no están en principio obligados legalmente a hacer ninguna denuncia.

Sin embargo, es necesario evitar que una omisión pueda en algún caso convertirse en alguna forma de encubrimiento. En principio, al no haber obligación de denunciar, no se incurre en el encubrimiento del

⁴⁹³ En el ámbito de la Iglesia Católica, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha emanado el 3 de mayo de 2011 una “Carta Circular” dirigida a las Conferencias Episcopales referida a los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, donde parece indicar (punto I.e) que se realice la denuncia ante la autoridad civil (*“es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias... siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades”*), aunque la indicación concreta (III. g) es *“tener en cuenta la legislación del Estado... en lo que se refiere a la eventual obligación de dar aviso a las autoridades civiles”*.

⁴⁹⁴ La cuestión se ha planteado con fuerza en **Francia**, donde en el año 2001 un obispo católico fue condenado penalmente por haber omitido la denuncia de delitos cometidos por un sacerdote, que él conoció en ejercicio de sus funciones (Tribunal de Grande Instance de Caen, 4/9/2001, “X.Y.”, en QPDE 2001-3, P.1007). Ver ECHAPPÉ, Olivier, “Le secret ‘professionnel’ des clercs devant les juridictions françaises”, QDPE 2001-3, p.992.

⁴⁹⁵ Según el art.77 del Código Penal, *“por los términos ‘funcionario público’ y ‘empleado público’... se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”*.

art.277 inc. d) del Código Penal, aplicable a funcionarios públicos obligados a la persecución de los delitos. Pero sí es delito

“ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse a la acción de ésta”, salvo que se haya obrado en favor del cónyuge, de un pariente consanguíneo hasta el 4º grado (o 2º de afinidad), “o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud”.

Hay que decir también que la regla general de respeto y protección al secreto profesional (en general) y religioso (en particular), y la regla de no obligatoriedad de denunciar para quienes no son funcionarios, puede ceder en algunos casos. Por ejemplo, cuando la víctima del delito es un niño (persona menor de 18 años), por aplicación de la regla del “interés superior del niño”. La ley 26.061 (art.9), dispone que

“La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley”

En este supuesto sí se configura una obligación de denunciar, no necesariamente en sede penal, pero sí al menos administrativamente (al organismo encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes, que será quien evalúe la necesidad de ejercer la acción penal).

Más específicamente, el art.30 de la misma ley (bajo la rúbrica “deber de denunciar”) dice:

“Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión”.

Esta norma tiene un ámbito específico de aplicación (los establecimientos educativos y de salud), pero en los que habitualmente actúan ministros de culto.

8.8. Conclusiones

El Derecho Procesal se presenta en la Argentina como una rama del Derecho en la que el concepto de ministro de culto, y las implicancias propias de su función y naturaleza, dista de estar adecuadamente perfilado.

Por cierto, la multiplicación de normas impide formular juicios terminantes. Las hay bien elaboradas, y también las hay sumamente defectuosas.

Lo primero que salta a la vista es la falta de un concepto comprensivo. Todavía son muchas las leyes procesales que tienen únicamente en mira a los ministros de culto católicos, ignorando la existencia de los de otras confesiones. Pero aún en ese caso, parece a veces considerarse más el aspecto protocolar, o el respeto debido a una investidura, que la naturaleza misma del ministerio religioso independientemente de las jerarquías. Muchas leyes parecen querer preservar a los dignatarios religiosos del “escándalo” de visitar los tribunales; pero en los tiempos actuales no parece tan relevante el hecho de que una persona tenga que asistir en persona a un Tribunal o pueda declarar por escrito. En cambio, sí resulta necesario que la ley sea clara respecto de qué puede serle preguntado y qué no al ministro de culto, cualquiera sea su jerarquía o confesión de pertenencia.

En relación a la tutela del secreto religioso, se percibe una cierta involución. No hay una visión clara de su alcance y naturaleza, de su peculiaridad en el marco de un concepto más amplio del secreto profesional, y de las especiales connotaciones del secreto de confesión dentro del concepto más amplio del secreto religioso. Pero además, hay una tendencia preocupante en las normas procesales más recientes a desconocer el carácter inviolable de ese secreto, y a habilitar a los jueces a allanarlo, incluso bajo amenaza de sancionar al ministro de culto reticente a revelarlo.

Estas modificaciones legales se han producido en general sin un debate suficiente. Al estar contenidas en códigos que abarcan múltiples cuestiones, pasan inadvertidas porque la atención pública se focaliza en otros aspectos de mayor espectacularidad (como puede ser el tránsito de procesos escritos a procesos orales, la implementación del juicio por jurados, el mayor o menor poder otorgado a los fiscales, y tantos otros). De ese modo, no puede saberse a ciencia cierta si el legislador ha hecho una opción deliberada por

limitar el alcance del secreto religioso o simplemente ese es un efecto de la copia irreflexiva de algún modelo anterior.

Algunas de estas reformas, como las apuntadas en el procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires y el de la ciudad homónima que parecen habilitar que el ministro de culto sea relevado del secreto (incluso el secreto de confesión) son recientes, y no han dado todavía lugar a que la jurisprudencia deba resolver en casos concretos acerca de su aplicación. De ahí la importancia de clarificar los principios que rigen la cuestión.

En última instancia, estas vacilaciones del legislador obedecen a un desconocimiento del fundamento del secreto religioso. No se trata de privilegios dados a ciertas personas (los ministros de culto) sino de la necesidad de respetar firmemente la libertad religiosa y de conciencia. Se trata de una cuestión de respeto a derechos humanos fundamentales. El santuario de la conciencia individual tiene un vínculo íntimo con la dignidad propia del ser humano. Al mismo tiempo, es de la esencia del vínculo religioso que existe entre los practicantes de una religión y los ministros del culto la posibilidad de abrir ese santuario a una comunicación que debe quedar celosamente resguardada y protegida de cualquier interferencia de terceros.

El derecho a la tutela del secreto religioso, se vincula así con un derecho fundamental y personalísimo, como es el derecho a la privacidad, o a la intimidad⁴⁹⁶. El derecho a la intimidad, que tiene en la Argentina raigambre constitucional (art.19 CN) al igual que la libertad religiosa, ha sido expresamente reconocido por la legislación, especialmente por el Código Civil y Comercial (arts.52 y 1779), pero antes que ello por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional⁴⁹⁷. Las confidencias hechas al ministro de culto deben recibir la protección debida a ese derecho, y así debería reflejarlo el Derecho Procesal.

Otra situación que merece una mayor reflexión y acaso una previsión normativa, es la de la interceptación de comunicaciones entre los ministros de culto y los fieles, particularmente por parte del Estado y en el marco de investigaciones judiciales o de procedimientos preventivos de delitos.

⁴⁹⁶ LÓPEZ ALARCÓN, Mariano, "Tutela de la libertad religiosa", § 3.1, en FERRER ORTIZ, Javier (coordinador), "Derecho Eclesiástico del Estado Español", 6ª edición, EUNSA, Pamplona, 2007.

⁴⁹⁷ Ver al respecto NAVARRO FLORIA, Juan G., "Los derechos personalísimos", Buenos Aires, El Derecho, 2016, cap.5.3.

En cuanto al juzgamiento de los ministros de culto, es claro que el Derecho estatal ha dejado enterrado en el pasado el concepto de fuero eclesiástico o cualquier otro privilegio a la hora de que un ministro religioso sea sometido a juicio. Naturalmente, esto se refiere al juzgamiento de hechos que caen bajo la jurisdicción estatal o, en otros términos, a la infracción a normas del Derecho estatal. Porque si se tratase del juzgamiento de hechos regidos por la normativa interna de las confesiones religiosas, es decir, el cumplimiento o incumplimiento de los deberes ministeriales a la luz de la normativa propia, no serán los tribunales del Estado los competentes para el juzgamiento, sino los internos de la propia confesión en ejercicio de su autonomía.

Esta última cuestión nos lleva al tema brevemente examinado de la obligatoriedad (o no) para las autoridades religiosas, de denunciar los posibles ilícitos que lleguen a su conocimiento, cometidos por ministros de culto o eventualmente por otras personas pero en ámbitos sometidos a su vigilancia. Hay en ello algo de dilemático, porque en cierta forma la denuncia puede implicar una autoincriminación al menos en orden a la responsabilidad civil, sino también en orden a la responsabilidad personal. Y es claro que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. La situación tiene un matiz particular en relación a la Iglesia Católica, por su reconocida calidad de persona jurídica pública. ¿Puede de eso deducirse que sus autoridades son “funcionarios públicos” y que como tales estén obligados a denunciar los delitos que conozcan? Ciertamente no. A estos efectos son funcionarios públicos los funcionarios estatales, y la Iglesia Católica, como las demás confesiones religiosas, debe ser considerada como parte del sector privado.

Capítulo 9. Obligaciones militares y ministros de culto

La relación de los ministros de culto con las Fuerzas Armadas, es antigua y compleja. Desde los orígenes mismos de lo que es hoy la República Argentina, los sucesivos gobiernos prestaron atención a la atención religiosa de las milicias. Ya durante las guerras de la independencia, fue necesario proveer a los ejércitos de una asistencia religiosa, a cargo en ese entonces de sacerdotes católicos, que fueron el germen de lo que aún hoy existe⁴⁹⁸.

Posteriormente, la introducción del servicio militar obligatorio hizo necesario prever la situación de los ministros de culto, y de los seminaristas, tanto católicos como no católicos, de cara a la prestación de ese servicio.

Los ministros de culto están presentes en las leyes militares. Tanto las dadas para tiempo de paz como las previstas para tiempo de guerra, y en este último caso tanto las normas de derecho interno como de modo muy especial las de Derecho Internacional humanitario.

9.1 Servicio militar

La ley nº 17.531⁴⁹⁹, define el servicio militar como una obligación de los argentinos, varones y mujeres, que pueden ser incorporados a las Fuerzas Armadas (art.1), mientras que el servicio de conscripción queda reservado sólo a los varones (art.4). A pesar de lo que suele creerse, la ley está vigente, porque no solamente no ha sido expresamente derogada, sino que la ley 24.429⁵⁰⁰ —que estableció el servicio militar voluntario en el año 1994— prevé la

⁴⁹⁸ Dos de las leyes dictadas por la Asamblea General Constituyente de 1813, de fecha 28 de junio y 23 de julio de ese año, organizaron la Vicaría Castrense, decisión que era necesaria porque hasta ese momento los capellanes de las tropas dependían del Vicario Castrense español. Pero incluso antes, los primeros gobiernos patrios a partir de 1810 habían provisto de capellanes a los ejércitos revolucionarios.

⁴⁹⁹ BO 16/11/1967; ADLA XXVII-C-2819.

⁵⁰⁰ BO 10/1/1995.

posibilidad en caso de necesidad de recurrir (previa decisión del Congreso) a la convocatoria al servicio de conscripción.

Por lo tanto, no solamente por razones históricas sino también por la eventualidad (indeseable pero posible) de que sea necesario el servicio de conscripción, tiene sentido revisar las disposiciones en la materia referidas a los ministros de culto.

Cabe hacer una advertencia previa. Es habitual en los países que prevén la existencia de servicio militar obligatorio, una excepción a tal obligatoriedad a favor de los ministros de culto. Sin embargo, esta excepción puede plantearse de dos maneras diferentes. Por un lado, como un supuesto práctico de objeción de conciencia (la objeción de conciencia al servicio militar es el caso paradigmático y más ampliamente reconocido de ese instituto⁵⁰¹). En tal caso, la excepción sería una suerte de privilegio individual, y la condición de ministro de culto un modo en principio suficiente para acreditar la sinceridad de la objeción.

Pero el otro modo de plantear y justificar la excepción es considerarla ya no un privilegio o beneficio personal del ministro religioso, sino una ventaja o derecho propio de la libertad religiosa colectiva, o dicho de otro modo, como una forma de garantizar a las comunidades religiosas que puedan llevar a cabo sus funciones con autonomía, al no privarlas de los servicios de sus ministros de culto por razón del servicio militar. Este es el enfoque correcto de la cuestión, más allá de que individualmente un ministro de culto pueda ser objetor de conciencia y de que su condición de tal facilite en ese caso el ejercicio de la objeción⁵⁰².

9.1.1. Excepción al servicio militar

Desde finales del siglo XIX se organizó el servicio militar en la Argentina, inicialmente coexistente con el sistema de “guardias nacionales”. Y ya entonces se tomó en consideración a los ministros de culto, en

⁵⁰¹ Para ampliar, ver al respecto NAVARRO VALLS, Rafael y MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, “Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia”, IUSTEL, Madrid, 2011; y para la Argentina, NAVARRO FLORIA, Juan G., “El derecho a la objeción de conciencia”, Buenos Aires, Ábaco, 2004.

⁵⁰² Así lo ha considerado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una serie de decisiones concernientes a ministros de varias confesiones religiosas y países (ver el comentario de ellas en *Annuaire Droit et Religions*, vol.5, 2010-2011, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille, 2011, p.494.

la que probablemente sea la primera mención genérica de ellos luego de la contenida en la ley 2393 de matrimonio civil.

La ley 3318 de organización del Ejército, del año 1895⁵⁰³, en su artículo 26, decía que

“Quedan igualmente exceptuados del servicio militar los miembros del clero regular, del clero secular y seminaristas, así como los ministros de todas las religiones”.

Poco después esa norma fue sustituida por la ley 4031, del año 1901⁵⁰⁴, que usó términos similares en su art.100:

“Exceptúase del servicio militar... g) a los miembros del clero regular y del clero secular y seminaristas, así como a los ministros de todas las religiones”.

El servicio militar obligatorio fue finalmente organizado por la ley 4707 de Organización del Ejército, de 1905⁵⁰⁵. En esa norma también se exceptuaba *“a los miembros del clero regular y seglar, seminaristas y ministros de todas las religiones”*, quienes en caso de abandonar *“la carrera eclesiástica”* antes de cumplir treinta años, debían cumplir con el servicio omitido. La norma fue mantenida en los mismos términos en las leyes posteriores que rigieron la materia⁵⁰⁶.

Vigente el Decreto Ley 29375/44 (ratificado por ley 12.913), que reemplazó a la ley 4707 manteniendo un texto idéntico, ante la interpretación restrictiva realizada por autoridades militares según la cual la excepción abarcaba a los “ministros de todas las religiones” pero no a los seminaristas de todas ellas, sino solamente a los católicos, la cuestión llegó a la Corte Suprema. Ésta, en el caso “Glaser”⁵⁰⁷ estableció la necesidad de extender la excepción a los seminaristas de los otros cultos distintos del católico, como por otra parte resultaba de una lectura de buena fe del texto de la norma, y de la mera aplicación del principio de igualdad ante la ley. Dijo la Corte que

“nada permite inferir que se haya pensado excluir a unos de lo que se acordaba a otros en igualdad de situaciones,

⁵⁰³ ADLA 1889-1919, p.355.

⁵⁰⁴ ADLA 1889-1919, p.524.

⁵⁰⁵ ADLA 1889-1919, p.660.

⁵⁰⁶ Decreto 29.375/44, art.41 inc. 7º (ADLA IV-619), ratificado por ley 12.913, y Decreto-Ley 5044/63, art.41 inc.7º (ADLA 1963-B-880).

⁵⁰⁷ Fallos 265-336. La Corte resolvió en contra de la opinión del Procurador Fiscal.

exclusión que por otra parte no sería compatible con las garantías constitucionales que amparan la libertad de conciencia y de culto y la igualdad ante la ley (arts.14 y 16 de la Constitución)".

La ley 17531 enumera entre los exceptuados de prestar el servicio militar, en el art.32 inc.2, a

"Los clérigos, los seminaristas, los religiosos, los miembros de asociaciones de vida en común oficialmente equiparados a estos últimos y los novicios del culto católico apostólico romano".

A continuación el mismo artículo (en el inc.3) prevé similar excepción para *"los seminaristas y ministros de los cultos reconocidos oficialmente"*.

La excepción se refiere al servicio militar en todas sus formas, y luego específicamente se la aplica al servicio de conscripción en el art.33. Pero aquellos

"que por cualquier motivo dejen de desempeñar las funciones allí expresadas antes de los 36 años de edad, quedarán obligados a prestar el servicio de conscripción que por sorteo les hubiere correspondido".

La condición de clérigo, seminarista, religioso o novicio católicos, debe acreditarse mediante una certificación expedida por la Dirección General de Culto Católico, de la Secretaría e Culto, previa solicitud del respectivo Ordinario (art.34).

En el caso de los seminaristas no católicos, la acreditación correspondiente también la expide la Secretaría de Culto, en este caso por medio de la Dirección General del Registro Nacional de Cultos, a pedido de la iglesia o comunidad religiosa correspondiente⁵⁰⁸.

La excepción concedida por la ley fue denegada durante el período de la última dictadura militar, a los miembros de la iglesia conocida como de los Testigos de Jehová. Como se sabe, los miembros de dicha religión repelen cualquier manifestación de pleitesía a la autoridad estatal, y entre ellas, rechazan el uso de uniformes, y el servicio militar. Para eludir la

⁵⁰⁸ "La forma en que debe realizarse el trámite se encuentra prevista en el decreto reglamentario de la ley 17.531 (decreto 6701/68, art. 133) que establece la obligación de adjuntar un certificado que acredite la condición de seminarista o ministro y otro certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que acredite el reconocimiento del culto que se trate." (JNFedCont.Adm 7, 12/03/1982, "Hermmingesen, Enrique H. c. Registro Nacional de Cultos y otro", LL 1983-B, 242).

convocatoria, muchos de ellos invocaban su condición de “seminaristas”, alegando asistir los días sábados a una escuela de formación religiosa, y realizar los días domingo tareas de proselitismo.

Como ya se ha visto, la Corte Suprema en el conocido caso “Lopardo”⁵⁰⁹, en doctrina reiterada en el caso “Falcón”⁵¹⁰, y seguida a partir de allí por muchos tribunales inferiores, descartó el argumento y les negó a los simples miembros de la asociación, la calidad de seminaristas. Un argumento coadyuvante para ello, era la imposibilidad de acreditar tal condición, por la prohibición que entonces pesaba sobre la mencionada asociación religiosa⁵¹¹. La cuestión sufrió un vuelco total en 1984, cuando luego del reconocimiento e inscripción en el Registro Nacional de Cultos de la asociación, el Ministerio de Defensa resolvió reconocer a los jóvenes testigos de Jehová la calidad de seminaristas que invocaban, y como consecuencia eximirlos masivamente del servicio militar, o de la condena por desertión en que incurrían cuando se negaban a hacerlo. Esta situación fue expresamente convalidada por la jurisprudencia⁵¹².

Un caso curioso se presentó en oportunidad en que un joven perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) pretendió eximirse del servicio militar invocando su condición de “sacerdote” (“elder”) de dicha iglesia. Significativamente, su propia iglesia se negó a tramitar el certificado estatal que lo reconocía como tal, por considerar que los “sacerdotes” de esa categoría no debían eximirse del servicio, sino solamente quienes efectivamente ejercían como ministros de culto. En ese caso, el juez que intervino señaló que

“la cuestión acerca si el hijo del actor está exceptuado, dado su carácter sacerdotal, de realizar el servicio militar,

⁵⁰⁹ Resuelto el 26/10/82, FALLOS 305-1525.

⁵¹⁰ 21/6/1983, LL 1984-A-132.

⁵¹¹ Durante la dictadura militar, la Asociación de los Testigos de Jehová había sido disuelta y prohibidas sus actividades, y sus miembros sufrieron una fuerte persecución que mereció la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso 2137 Argentina- Testigos de Jehová, Resolución del 18/11/1978). No obstante, la Corte Suprema de Justicia aún durante ese gobierno militar, brindó amparo a miembros de ese grupo religioso señalando que las medidas tomadas contra la asociación no podían cancelar los derechos civiles que les garantizaba la Constitución (así, en el caso “Carrizo Coito, Sergio v. Dirección Nacional de Migraciones”, Fallos 302:604, JA 1980-IV-113, del 26/6/1980 en materia migratoria, o “Barros”, del 6/3/79, ED 82-221 en materia de acceso a la educación).

⁵¹² CFedBahiaBlanca, 30/04/1984, “Peterseim, Gabriel A.”, LL 1985-C, 394.

es una cuestión que debe ser decidida en primer lugar por la autoridad militar y luego en caso de controversia por la Excma. Cámara Federal conforme a los términos de la ley 17.531. La Iglesia demandada no puede decidir la cuestión por sí, negándose a legalizar un diploma y no realizando el trámite ante el Ministerio para la obtención de un certificado. Ello significaría hacerse justicia por sí con desconocimiento de claros preceptos constitucionales que encomiendan al Poder Judicial la decisión de las controversias. Lo expuesto no significa que la opinión expresada por la codemandada Corporación del Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no tenga valor. Todo lo contrario la autoridad administrativa y en definitiva la justicia deberá determinar si la excepción del art. 32, inc. 3º de la ley 17.531 debe acordarse aun en los casos que la Iglesia a la cual pertenece el seminarista o ministro considera que debe hacer el servicio militar. Sin duda que se trata de una cuestión que obligará a interpretar los alcances de la ley 17.531 pero que no es objeto de la presente litis y por lo tanto no cabe efectuar afirmación alguna al respecto”⁵¹³.

Como concusión en el caso, se ordenó a la iglesia

“legalizar el certificado de ordenación sacerdotal en el que se dejará constancia que conforme a las normas de la iglesia mormona el sacerdocio que posee el actor no resulta incompatible con sus obligaciones cívicas, entre ellas la prestación del servicio militar. Asimismo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá expedir el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Cultos establecido por ley 21.745 y dec. 2037/79 para su presentación a la autoridad militar competente, sin perjuicio que a su vez si lo considera necesario informe acerca de la solicitud de excepción al servicio militar (art. 2º, inc. g, dec. 2037/79)”.

De tal modo se pretendió compatibilizar el derecho del joven a obtener la certificación de su condición religiosa, con el derecho de la iglesia de determinar los alcances de tal condición. Sin embargo, en la sentencia judicial se advierte un cierto desenfoque de la cuestión, dado que parece privilegiar el “derecho” de la persona a la excepción ministerial, por sobre el derecho del grupo religioso, que es en definitiva –como dijimos antes- aquel en cuyo beneficio se establece la excepción. Otra cosa hubiera sido, si se hubiese

⁵¹³ In re “Hemmingesen”, citado en nota 508.

considerado al candidato como objetor de conciencia, en cuyo caso la opinión formal y oficial de la confesión religiosa de pertenencia deja de ser determinante, como se vio claramente en el caso “Portillo”.

En el derecho comparado es frecuente la excepción al servicio militar otorgada a ministros de culto, religiosos y seminaristas. Así ocurre por ejemplo en **Guatemala**⁵¹⁴, en **Portugal**⁵¹⁵, e incluso en un país que es paradigma del laicismo en América Latina, como el **Uruguay**⁵¹⁶.

9.1.2. Caso de movilización general:

La ley 17.531 también prevé la situación de los ministros de culto en caso de movilización general, diciendo (art.32 inc.2):

“Los ordinarios, los párrocos, los rectores de iglesias abiertas al público, los superiores religiosos y el personal indispensable para las curias diocesanas y los seminarios, estarán comprendidos en la excepción, aún en caso de convocatoria para la movilización. En caso de tal convocatoria, los sacerdotes prestarán el servicio militar en forma de asistencia religiosa y los no comprendidos en la excepción prevista en el párrafo precedente serán destinados a juicio del Vicario Castrense para servicios auxiliares de los capellanes o a las organizaciones sanitarias”.

Si la movilización está motivada en un enfrentamiento bélico, quienes resulten movilizados, gozarán de la protección especial que como “personal religioso” les brinda el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales”, aprobado por la Argentina por ley nº 24.668, arts.8, 15, 18 y concordantes, que se estudia más adelante (Capítulo 9.4).

⁵¹⁴ Según la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (Decreto del Congreso 72-90), art.73, es una causa de excepción temporal al deber de prestar servicio militar el “ser ministro de cualquier religión”.

⁵¹⁵ Ley de Libertad Religiosa, art.16.

⁵¹⁶ La Ley 9943 de Instrucción Militar, del año 1940, que “da a los ciudadanos la obligación de defender la República, determinándose como deben prepararse”, exceptúa de la obligación de recibir instrucción militar y física y de formar parte de las reservas militares, a los “sacerdotes o seminaristas de cualquier profesión religiosa mientras conserven tal estado” (art.14).

Literalmente, la norma se refiere sólo a los ministros de culto católico. Tanto por la terminología que emplea, como por la sujeción de los ministros movilizados a la autoridad del "Vicario Castrense" (hoy, Obispo Castrense).

Pero el inciso 3º del mismo artículo, que como vimos exime de servicio militar a "*Los seminaristas y ministros de los cultos reconocidos oficialmente*", se completa también con un segundo párrafo:

"Las autoridades religiosas superiores de estos cultos que determine la reglamentación de esta ley, estarán comprendidas en la excepción, aún en caso de convocatoria para la movilización".

Como se advierte, la norma guarda paralelismo con la anterior referida a quienes ostentan cierta jerarquía en la Iglesia Católica. Se refiere a quienes son autoridad de las confesiones no católica, sean o no ministros de culto en sentido estricto. Su determinación depende de una reglamentación, que nunca fue dictada (y tampoco fue aplicada la norma, porque no se registraron casos de movilización general).

No hay una disposición semejante a la que existe respecto de los clérigos y religiosos católicos que, por no ser "autoridades", sí quedan sujetos a movilización. Esto se explica porque, como veremos más adelante, en la Argentina no hay todavía organizado un servicio religioso permanente para los no católicos en las Fuerzas Armadas, equivalente al Obispado castrense católico. Sin embargo, sería razonable que si un pastor, rabino o ministro de cualquier confesión resulta movilizado, se le permita prestar asistencia religiosa a los fieles de su religión, o ser adscripto a los servicios sanitarios, tal como ocurriría con los ministros de culto católico.

9.1.3. Clérigos católicos: Acuerdo con la Santa Sede:

En relación a los clérigos y religiosos católicos, además de la norma general de derecho interno recién vista, existe otra sustancialmente equivalente, pero de mayor rango.

El Acuerdo de 1957 entre la República Argentina y la Santa Sede, principalmente referido a la atención religiosa católica a las Fuerzas Armadas, también contiene previsiones sobre el tema de este capítulo. Dice su art.13:

“En tiempo de paz, los clérigos, los seminaristas, los religiosos y los novicios están exentos del servicio militar. En caso de movilización general, los sacerdotes prestarán el servicio militar en forma de asistencia religiosa; los demás clérigos y religiosos serán destinados, a juicio del Vicario Castrense, para servicios auxiliares de los Capellanes o a las organizaciones sanitarias. Estarán exentos del servicio militar, aun en el caso de movilización general, los Ordinarios, los párrocos, los rectores de iglesias abiertas al público, los superiores religiosos y el personal indispensable para las Curias diocesanas y los Seminarios”.

Esta norma es más limitada en su alcance y expresión que la contenida en la ley 17.531, pero tiene jerarquía normativa supralegal en función del art.75 inc.22 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, aún en caso de desaparecer o modificarse la ley interna, seguirá vigente como una obligación internacional para el Estado argentino. Y por analogía, y por aplicación del principio de igualdad ante la ley, según lo dicho por la Corte en el recordado caso “Glaser”, debería aplicarse también a los ministros de culto no católicos.

9.1.4. Servicio militar voluntario

En 1994, la ley 24.429⁵¹⁷ modificó substancialmente el régimen de servicio militar. La novedad consiste en la implementación de un servicio militar voluntario y rentado, prestado por varones y mujeres, que en principio sustituye al obligatorio. Sin embargo, como dijimos, si no fuera suficiente el número de voluntarios el Poder Ejecutivo podrá convocar al servicio militar obligatorio aplicándose la ley 17.531, que no ha sido derogada (art.19).

Una de las novedades relevantes de esta ley es la regulación de la objeción de conciencia al servicio militar, a la que naturalmente podrían también recurrir los ministros de culto si no estuviera, en la misma ley, la excepción ya estudiada⁵¹⁸.

Conviene recordar en relación a los clérigos católicos que en el c.289 # 1, el Derecho Canónico dispone que

⁵¹⁷ BO 10/1/95.

⁵¹⁸ Ver al respecto NAVARRO FLORIA, Juan G., “El derecho a la objeción de conciencia”, cit., pp.55/81.

“dado que el servicio militar es menos congruente con el estado clerical, los clérigos y asimismo los candidatos a las órdenes sagradas no se presenten voluntarios al servicio militar, si no es con licencia de su Ordinario”.

La misma disposición rige respecto de los religiosos (c.672), y de los diáconos permanentes⁵¹⁹. Como se advierte, no se trata de una prohibición absoluta, sino de una recomendación.

9.2 Capellanías castrenses

El rol de los ministros de culto como integrantes o acompañantes de los cuerpos militares, depende en buena medida del rol que en cada tiempo y lugar se asigne a las Fuerzas Armadas, y también de la concepción que se tenga desde las iglesias o comunidades religiosas de la guerra o del uso de la fuerza en general. En la medida en que se acepten conceptos del tipo de la “guerra santa”, admitida durante mucho tiempo por el cristianismo y todavía hoy, con todos los matices que se quiera, por el Islam, la presencia de ministros religiosos en los cuerpos armados es casi ineludible.

Pero incluso en contextos donde crece el rechazo a la guerra o al uso de la fuerza como recurso legítimo para dirimir conflictos, y dado que la existencia de ejércitos y cuerpos armados es un dato de la realidad, sigue siendo necesario afrontar el tema de la asistencia religiosa en ese particular ambiente. Acaso, resignificando el rol de los capellanes militares, llamados no tanto a bendecir las armas y alentar su uso “en nombre de Dios”, cuanto a orientar las conciencias, ayudar a la pacificación, y defender los derechos humanos de los propios militares, de las poblaciones civiles, de los prisioneros de guerra.

En esta línea, la participación de fuerzas militares en misiones de paz en muy diversas circunstancias, abre una muy interesante perspectiva⁵²⁰.

⁵¹⁹ BUSSO, Ariel, “La fidelidad del apóstol”, Buenos Aires, EDUCA, 2004, tº II, p.190.

⁵²⁰ Cfr. O'BRIEN, Edwin F., “El capellán militar católico en misión de paz: perspectivas ecuménicas e interreligiosas”, en PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, “El Derecho Humanitario y las religiones”, Librería Editrice Vaticana, Roma, 2009, p.107.

9.2.1 Capellanes castrenses católicos. El Obispado Castrense.

El servicio religioso católico a las fuerzas armadas existió en la Argentina desde los tiempos de las guerras de independencia. La propia Primera Junta de gobierno designó en 1810 a los primeros capellanes de las expediciones militares formadas para promover la Revolución en el resto del entonces Virreinato del Río de la Plata, y para cada uno de los regimientos y cuerpos armados que se formaron entonces, requiriendo las licencias correspondientes a los obispos diocesanos, mientras los hubo⁵²¹. La Asamblea General Constituyente de 1813, el 28 de junio de ese año decretó el cese de la autoridad del Vicario General Castrense residente en España, y creó una nueva Vicaría General Castrense cuyo titular debería ser designado por el Poder Ejecutivo⁵²².

Desde aquellos primeros tiempos, ese servicio religioso se mantuvo siempre, prestado inorgánicamente, por sacerdotes seculares o religiosos, que permanecían sujetos a sus respectivos obispos o superiores religiosos en lo eclesiástico, y a las autoridades civiles y militares en lo específico de estas.

En diversos países y a lo largo del tiempo, la Santa Sede había ido erigiendo vicariatos castrenses como estructuras específicas para esta atención pastoral, atendiendo a la movilidad propia de las tropas militares (que dificultaban su atención por los ordinarios del lugar) y al peculiar modo de vida de los militares, concentrados en lugares a veces alejados de las poblaciones civiles.

Esa jurisdicción castrense estaba regida por normas particulares, de creación de los distintos vicariatos castrenses⁵²³. El Código de

⁵²¹ Ver en detalle, lo mismo que la evolución posterior, en GARCÍA DE LOYDI, Ludovico, "Los capellanes del ejército. Ensayo histórico", Secretaría de Guerra, Buenos Aires, 1965.

⁵²² El primero designado en el cargo fue el Deán Diego Estanislao de Zavaleta, en ese momento provisor y gobernador del Obispado de Buenos Aires (que estaba vacante). El cargo fue sucesivamente ejercido por quienes fueron provisores, y luego ya como obispo de Buenos Aires por Mons. Mariano Medrano.

⁵²³ Así, el Breve de Clemente XIII del 27 de agosto de 1768, *Cum in exercitibus*, que otorgó la jurisdicción eclesiástica castrense en América al Patriarca de las Indias. En 1868 fue creado un vicariato castrense para Prusia, y en 1910 San Pío X creó el Vicariato Castrense de Chile, por el motu propio "*In hac Beatissimi Petri Cátedra*" (ver una amplísima explicación de él en GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, Juan Ignacio, "Iglesia y Fuerzas Armadas – Estudio canónico y jurídico sobre la asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas en Chile", Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 1994). Algunos otros siguieron en años posteriores.

Derecho Canónico de 1917, sin embargo, reflejó una organización de la Iglesia basada en circunscripciones territoriales -las diócesis, fundamentalmente-, y no incluyó ninguna referencia a los vicariatos castrenses⁵²⁴.

En 1951, durante el pontificado de Pío XII, se promulgó una Instrucción que se convirtió en ley general para los vicariatos castrenses, y que estaba vigente al crearse, en 1957, el de la Argentina⁵²⁵. En ella se aclaraba que los Vicarios Castrenses tenían jurisdicción ordinaria, especial y personal sobre sus súbditos, y no exclusiva, ya que ellos estaban también sujetos a la jurisdicción del ordinario (obispo) del lugar.

El Concilio Vaticano II, desde una eclesiología diversa, abrió la puerta a la creación de estructuras eclesísticas con jurisdicción personal, y no solamente territorial⁵²⁶. El posterior Código de Derecho Canónico, de 1983, sin embargo, si bien legisló sobre las prelaturas personales, omitió referirse a los vicariatos castrenses, que en los esquemas previos estaban propuestos justamente como ejemplo de tales prelaturas⁵²⁷.

La norma que actualmente rige la materia es una constitución apostólica de Juan Pablo II del año 1986, *Spirituali Militum Curae*⁵²⁸ (SMC), posterior al Código pero con la misma fuerza legal que él. Es una ley-marco, que según ella misma establece debe complementarse con el estatuto que se dicte para cada obispado castrense en particular, y con los acuerdos con los estados donde existan (§ I.1).

Los antiguos Vicariatos castrenses, pasaron a partir de la SMC a denominarse Ordinariatos (u Obispados) militares o castrenses⁵²⁹, normalmente a cargo de un obispo con los mismos derechos que un obispo diocesano (II.1), en principio con dedicación exclusiva a ese oficio (II.3). El obispo

⁵²⁴ El canon 451 § 3 trae una mención al paso de los capellanes militares, a los que sujeta a normas particulares dictadas por la Santa Sede.

⁵²⁵ Instrucción *Sollemne semper* de la Sagrada Congregación Consistorial, del 23 de abril de 1951.

⁵²⁶ V.Gr., Decreto *Presbyterorum ordinis*, § 10. Ver en general, ARRIETA, Juan Ignacio, "Le circoscrizioni personali" en *Fidelium Iura*, 1994 (4), p.207-243.

⁵²⁷ Ver los antecedentes de la redacción del CIC en la materia, en GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, op.cit., p.155-161.

⁵²⁸ Del 21/4/1986, AAS 78 (1986), pp.481-486.

⁵²⁹ Actualmente son treinta y cinco en todo el mundo, tanto en países de mayoría católica como Italia, España o los latinoamericanos, como en otros diversos como Estados Unidos, Australia, Indonesia o Uganda. En algunos casos han sido erigidos mediando acuerdos con los Estados, y en otros de modo unilateral por la Iglesia, con legislación interna concomitante de los estados sobre las capellanías militares (como en Estados Unidos, Francia o Chile, por ejemplo).

militar es nombrado libremente por el Papa (II.2), salvos naturalmente los acuerdos entre la Santa Sede y los estados; e integra la Conferencia Episcopal del país donde tiene su sede⁵³⁰ (III).

Siempre según las normas de la Iglesia Católica, el obispo militar tiene jurisdicción sobre *“los fieles que son militares así como otros que están adscriptos a las Fuerzas Armadas”*, los familiares de los militares que vivan en su misma casa, los que pertenecen a institutos militares, viven en residencias militares o están a su servicio, y las religiosas o religiosos y laicos que trabajen en el obispado militar (§ X)⁵³¹.

La Constitución Apostólica remite a lo que dispongan los estatutos de cada obispado, o los acuerdos con los estados, en varias materias, entre ellas la condición militar del obispo y los capellanes, la composición de la curia castrense, la designación y cese del obispo y los capellanes, y otras normas organizativas, incluso para el caso de sede vacante o impedida⁵³².

Los Estatutos del Obispado Castrense para la República Argentina, fueron aprobados en 1989 por la Santa Sede, sin intervención del Estado⁵³³. No agregan demasiadas precisiones al derecho universal, y a lo que resulta del Acuerdo de 1957 que mencionaremos luego. Entre las innovaciones que contiene, está la extensión de la jurisdicción castrense a la Prefectura Naval y la Gendarmería (a pesar de que no integran las Fuerzas Armadas), y a los militares en retiro y sus familias. En cuanto a la condición militar de los capellanes, remite a *“las leyes de la Nación”*. Distingue entre los capellanes incardinados en el obispado, y los que se adscriben temporalmente a él, sea con *“dedicación prevalente”*, sea como capellanes auxiliares (*“con dedicación de medio tiempo”*).

⁵³⁰ En algunos casos es exclusivamente obispo militar, en otros es obispo diocesano que une en su persona el oficio de obispo militar.

⁵³¹ En algunos casos se ha ampliado el alcance del ordinariato militar incluyendo en ellos a los estudiantes de centros docentes pertenecientes a las Fuerzas Armadas (Bolivia) o al personal civil del Ministerio de Defensa y sus familias (Bélgica) (ARRIETA, op. cit., p.238).

⁵³² Hay sede vacante cuando el obispo fallece, es trasladado o privado del oficio por el Papa, o ha sido aceptada su renuncia por el Papa (canon 416). *“Se considera impedida la sede episcopal cuando por cautiverio, relegación, destierro o incapacidad, el Obispo diocesano se encuentra totalmente imposibilitado para ejercer su acción pastoral en la diócesis, de suerte que ni aún por carta pueda comunicarse con sus diocesanos”* (canon 412).

⁵³³ Aprobados por Decreto 638/87 de la Congregación para los Obispos, el 21 de septiembre de 1989, y publicados en la Argentina en un folleto editado por el Obispado Castrense.

En el Acuerdo de 1957, se prevé la existencia de tres Capellanes Mayores, para las respectivas Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire; un Pro-Vicario designado por el Vicario, y capellanes (arts. II, V y VI). Los capellanes son nombrados por el Vicario, *“previa aceptación de los candidatos por el Ministerio respectivo”*, y designados en sus servicios por los Ministerios correspondientes⁵³⁴ a propuesta del Vicario (art. VII). Los capellanes auxiliares son sacerdotes diocesanos o religiosos que, sin dejar los oficios que tengan en su diócesis o instituto, ayuden en el servicio espiritual de las Fuerzas Armadas a las órdenes del Vicario (art. VIII).

En caso de procedimiento penal o disciplinario contra los capellanes, el modo de cumplimiento de la sanción debe ser acordado entre la autoridad militar y el Vicario, como ya hemos visto. Si en cambio es el Vicario quien por motivos canónicos suspende o destituye a un capellán militar, el Ministerio correspondiente está obligado a disponer su disponibilidad o baja (art. IX). Esta norma establece como regla que la autoridad militar (estatal) y la eclesiástica pueden juzgar y sancionar en su propio ámbito a los capellanes, pero la aplicación de sanciones requiere la coordinación de ambas. El Acuerdo incluye también normas de organización eclesiástica del Vicariato, de distribución de competencias entre él y los obispos diocesanos, y de exención del servicio militar a clérigos y religiosos (art. XIII), ya mencionadas. Finalmente, dispone que

“los Ministerios correspondientes acordarán con el Vicario Castrense los reglamentos concernientes a los respectivos Capellanes Militares en cuanto miembros de las Fuerzas Armadas” (art. XV).

El Acuerdo de 1957 fue actualizado en 1992 mediante un acuerdo formalizado mediante intercambio de notas reversales entre la Santa Sede y la República Argentina. En ellas, luego de ratificar la vigencia en general del Acuerdo de 1957, se modificó la designación del Vicariato por *“Obispado Castrense de la República Argentina”*, con carácter de ordinariato jurídicamente equiparado a diócesis⁵³⁵. Esta condición genera una anomalía jurídica, porque

⁵³⁴ Al firmarse el Acuerdo existían Ministerios de Guerra, de Marina y de Aeronáutica separados, por eso se utiliza el plural. Actualmente existe un único Ministerio de Defensa.

⁵³⁵ Lo mismo dice *“a los efectos civiles y administrativos”*, el posterior Decreto 1526/92, del 24-8-92 (BO 31-8-92) que reconoce al *“Obispado Castrense de la República Argentina”* con el rango y dignidad de Diócesis. Algunas voces han criticado el procedimiento de reforma cuestionando su validez, por la falta de intervención del Congreso. Sin embargo, el intercambio de notas reversales es una forma corriente de acuerdos diplomáticos internacionales, al tiempo que no todo acuerdo de esta naturaleza requiere la intervención del Congreso.

como consecuencia de ella, el obispado castrense es una persona jurídica pública, en los términos del artículo 146 del Código Civil y Comercial. Pero por otra parte, en el organigrama estatal es considerado un organismo centralizado de la Administración pública, carente como tal de personalidad jurídica propia⁵³⁶.

El acuerdo de 1992 dice que el obispado estará a cargo de un Obispo Castrense, designado según lo previsto en el Acuerdo de 1957 (es decir, por el Papa previo acuerdo del Presidente de la Nación), y podrá existir un obispo auxiliar, que en tal caso cumplirá las funciones que el Acuerdo asignaba al Pro-Vicario. Para ambos se exige que sean ciudadanos argentinos, exigencia no prevista en el Acuerdo de 1957, pero sí en el de 1966 para los obispos residenciales. Se hace expresa referencia a la vigencia y aplicación al obispado, del Código de Derecho Canónico de 1983, y de la Constitución *Spirituali Militum Curae* de 1986.

Finalmente, se indica que

“el Obispado Castrense tendrá la misma jurisdicción que hasta el presente ha tenido el Vicariato Castrense”.

Esa fórmula ambigua, quiso convalidar tácitamente una ampliación de aquella jurisdicción que se había producido *de facto* en años anteriores. En efecto, desde una época en que la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional habían estado bajo “control operacional” de la Armada y el Ejército respectivamente, sus respectivos capellanes habían sido absorbidos por el Vicariato Castrense, y a las tres capellanías generales previstas en el Acuerdo de 1957, se habían agregado otras dos para esas fuerzas de seguridad. La Prefectura⁵³⁷ y la Gendarmería no son Fuerzas Armadas, sino fuerzas de seguridad⁵³⁸, no obstante lo cual su servicio religioso sigue formando parte del obispado castrense. No ocurre lo mismo con el de la Policía Federal, encomendado al Arzobispado de Buenos Aires.

La designación de capellanes castrenses es un acto jurídico complejo a cuya formación concurren el Obispo castrense en ejercicio de

⁵³⁶ Un Decreto del año 1975 (Decreto 155/75, BO 31/3/1976) organiza la "Estructura orgánico funcional del Vicariato Castrense". Encomienda al Vicario *"el cuidado espiritual de los militares de tierra, mar y aire"* y la *"dirección superior del Servicio Religioso en las Fuerzas Armadas"*, que incluye el nombramiento de capellanes mayores, capellanes castrenses, capellanes auxiliares, entre otros. También asigna funciones al Pro-Vicario, y al Secretario General.

⁵³⁷ Cuyo “escalafón clero” está regido por el Decreto 146/95 (BO 7/2/95).

⁵³⁸ Así lo indican con claridad la ley de Defensa, 23554 (BO5-5-1998) y la Ley de Seguridad Interior, 24059 (BO 17-1-92) y lo demuestra su dependencia orgánica del Ministerio de Seguridad, y no del de Defensa.

facultades propias, y la autoridad estatal (Ministerio de Defensa, o de Seguridad, según el caso) a los fines administrativos. Según el Reglamento del Obispado, el nombramiento requiere de los siguientes pasos: 1) el Obispo Castrense obtiene la previa aceptación de la Fuerza en la que ha de servir el capellán; 2) el capellán es designado por el Obispo; y 3) la autoridad militar o de la fuerza de seguridad correspondiente hace la designación pertinente a los fines administrativos.

Los capellanes castrenses forman el “escalafón clero” dentro del escalafón profesional de las Fuerzas Armadas, y están sujetos a los reglamentos militares en materia de remuneraciones, ascensos⁵³⁹, etcétera.

Desde el punto de vista del Estado, no cabe duda de que los capellanes castrenses son empleados públicos.

En una muy medulosa sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que incluye un estudio exhaustivo de los antecedentes históricos y jurídicos del régimen del Obispado Castrense desde la independencia en adelante, se concluyó:

"el status de todo el clero castrense, ... es el de empleo público nacional. Los capellanes de cada Fuerza las integran como personal militar o civil, según los casos, y el mismo Obispo forma parte del personal de la Presidencia de la Nación o del Ministerio de Defensa.- La peculiaridad del desempeño del empleo estatal de los capellanes castrenses consiste en que no pueden cumplir la labor objeto de ese empleo sin una designación, o, al menos, autorización canónica emanada de autoridad eclesiástica competente"⁵⁴⁰.

Agreguemos que, del mismo modo que la designación conlleva la peculiaridad de requerir la intervención de la autoridad eclesiástica, también la permanencia en la función exige que se mantenga la conformidad oportunamente dada, y el retiro de ella tiene como inevitable consecuencia el cese en la función.

Una situación insólita y aún no resuelta, respecto del Obispado Castrense, se ha planteado con la aprobación mediante la Ley 26939, de 2014, del Digesto Jurídico Argentino.

⁵³⁹ Aunque se ha dado algún caso insólito de ascenso de capellanes dispuesto por ley, que además fue “Secreta” hasta su publicación dispuesta por ley 26134 (ley “de facto” 21504 de enero de 1977, publicada en el BO del 12/9/06).

⁵⁴⁰ CFed La Plata, sala II, 19/07/2007, "Folgueras, Ramón Carlos c/ Armada Argentina s/ indemnización por despido", TySS 2008-252.

Inexplicablemente, en el Anexo de esa ley que contiene el listado de leyes generales no vigentes, aparece en la categoría "O" - Derecho Internacional Público, bajo el número 339, el Decreto Ley 7823/57 del 5 de julio de 1957, aprobatorio del "Acuerdo sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas", que se menciona como "bilateral", al que el Digesto considera no vigente por "objeto cumplido". Aunque de modo contradictorio, al mismo tiempo sí aparece entre las leyes vigentes del Digesto otra, la Ley H-0466, cuyo título es precisamente "Obispado Castrense de la República Argentina", y que es una versión actualizada del Decreto Ley 12958/57, que es una norma interna de aplicación de aquel acuerdo bilateral, al que hace referencia expresa y nominal. Cuesta comprender cómo se considera vigente a esta ley, y no al Acuerdo que la sustenta y al que en última instancia intenta dar aplicación. En esa Ley, se han introducido cambios de redacción para adaptarla al Acuerdo de 1992, que actualizó al Acuerdo de 1957⁵⁴¹.

Una cuestión ardua, que no fue definida por el Acuerdo de 1957, ni tampoco -lamentablemente- por el de 1992, es la atinente al grado o estado militar de los capellanes castrenses. La tendencia actual parece ser que los capellanes militares no tengan estado y grado militar, sino que siendo civiles, tengan una equiparación protocolar y a los fines administrativos y de la remuneración⁵⁴².

Es de notar que si bien el Acuerdo de 1957 considera a los capellanes militares "miembros de las Fuerzas Armadas", no define su

⁵⁴¹ El texto de la Ley H-0466 es en general correcto, aunque tiene dos errores repetidos dos veces, en los artículos 4 y 5: menciona al "Obispo Emérito" en lugar de referir al "Obispo Auxiliar" (como resulta del Art.5 de las Notas Reversales arriba mencionadas); y sustituye indebidamente la referencia al "Secretario General" por otra al "Administrador Diocesano", que no corresponde.

⁵⁴² Así por ejemplo, el Acuerdo de la Santa Sede con el **Perú** de julio de 1980, tras establecer que "el presente Vicario Castrense, así como todos los capellanes actualmente en servicio, o en situación de retiro, conservan sus grados y prerrogativas" (art. XII), dispuso que "*En el futuro, ni el Vicario Castrense, ni los capellanes dependientes de él, tendrán asimilación a grado militar ni a la jerarquía policial. Al Vicario Castrense le serán reconocidas las prerrogativas propias de un General de Brigada...*" (art. XIII), de manera que los capellanes se asimilan al personal civil de las fuerzas armadas (art. XIV). Lo mismo dispone el Acuerdo entre la Santa Sede y **Bolivia** de 1986 (arts.VI al VIII). En cambio, el Acuerdo con **Ecuador** de 1978, que es sustancialmente igual al argentino de 1957, expresamente prevé que los capellanes militares serán "*oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía*" (art.9º). Y también el acuerdo entre la Santa Sede y **Paraguay** sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, de 2002, estipula que "*los capellanes tendrán grado militar o policial*" (art.VIII.4).

situación militar. El Estatuto del Obispado Castrense de la Argentina (art. XI) no define tampoco el tema, porque dispone que

“los sacerdotes y diáconos incardinados tendrán la condición militar que les asignen las leyes de la Nación”, mientras que “el clero no incardinado se regulará por las normas que establezcan los reglamentos respectivos”.

Naturalmente, la SMC nada dice, por cuanto esta cuestión depende de la decisión soberana de los estados o, en todo caso, de las normas concordatarias particulares.

En la Argentina, el Reglamento Orgánico de 1958⁵⁴³ había dispuesto que

“el personal del clero castrense no tendrá estado militar y su situación legal será similar a la del personal civil de las Fuerzas Armadas”,

A los fines protocolares se reconocía al Vicario Castrense la equivalencia al grado de general, a los Capellanes mayores al de coronel, y a los capellanes la de capitán (art.20). En las negociaciones previas al Acuerdo había existido consenso entre los militares y funcionarios argentinos en la inconveniencia de que los capellanes tuviesen estado y grado militar, con la sola voz disonante de los capellanes de la Armada que sí lo deseaban. Finalmente, lo obtuvieron por un decreto del presidente Lanusse de 1973⁵⁴⁴. En el Acuerdo de 1992 no hubo una definición al respecto. Pero poco antes de él, el 2 de enero de ese año, el Poder Ejecutivo facultó a los estados mayores del Ejército y la Fuerza Aérea a otorgar “estado militar” a los capellanes castrenses dependientes de ellos para

*“dotar al Clero Castrense de un plan de carrera conveniente que permita un haber mensual adecuado a la función, sucesivos y periódicos ascensos por mérito y antigüedad, como así también al finalizar los años de actividad, percibir un haber de retiro”*⁵⁴⁵.

⁵⁴³Decreto 5.924/58, BO 23/6/58.

⁵⁴⁴Decreto 2113/73, BO 20/3/73 y ADLA XXXIII-B-1763, dictado en los últimos días de su gobierno de facto. El régimen fue aprobado experimentalmente por cinco años, pero se mantuvo vigente hasta hoy.

⁵⁴⁵Decreto 5/92, BO 9/1/92. La Resolución 1170/92 del Ministro de Defensa, del 6/8/92, autorizó la incorporación de nuevos capellanes con grado de teniente primero o equivalente, y otorgó a los capellanes castrenses y capellanes auxiliares que no tuviesen estado militar la equivalencia protocolar de grado necesaria para la percepción de haberes y compensaciones.

Esa así que hoy conviven en el clero castrense, sacerdotes con y sin grado y estado militar.

9.2.2 Ministros de culto no católicos

En la Argentina sigue pendiente y sin solución satisfactoria, el tema de la atención religiosa de los militares no católicos.

Es una exigencia de la libertad religiosa, que a todos los miembros de las fuerzas armadas y seguridad se les reconozca en cuanto tales y también en el ámbito castrense, el derecho a ejercer las prerrogativas que fluyen de dicha libertad⁵⁴⁶. En la Argentina ha habido una tradicional reluctancia de la Iglesia Católica, y en particular de sus capellanes castrenses, a reconocer la necesidad de una atención religiosa a militares no católicos⁵⁴⁷, situación que hoy día no se sostiene, ante la evidencia de existir una cantidad apreciable de militares no católicos, particularmente evangélicos, y sobre todo entre los suboficiales y tropa.

La cuestión se planteó en oportunidad de la guerra de Malvinas (1982), cuando hubo pedidos de destinar al teatro de operaciones algún pastor evangélico e incluso algún rabino, pedidos que no fueron atendidos.

9.2.3 Derecho comparado

En muchos países, incluso con obispados castrenses católicos, existen también capellanes de otras confesiones que asisten a quienes lo desean⁵⁴⁸. Los modelos son diversos. En algunos casos existen cuerpos de capellanes donde conviven ministros de diversas religiones y confesiones, como en los Estados Unidos.

⁵⁴⁶ Para un planteo general del tema, ver ARRIETA, Juan Ignacio, "La asistencia religiosa con particular referencia a los centros de especial sujeción: fuerzas armadas, centros de detención, centros sanitarios", en "La Libertad Religiosa" (Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, pp.219-240.

⁵⁴⁷ Todavía al tiempo de ser negociadas las notas reversales de 1992 que actualizaron el Acuerdo de 1957, y contra toda evidencia, se argumentó que no era necesaria una previsión en ese sentido porque "todos" los militares eran católicos.

⁵⁴⁸ Por ejemplo en Francia, pese a su conocido laicismo, existen capellanes católicos, judíos, musulmanes y protestantes, con sus respectivos Capellanes en Jefe dependientes del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (cfr. Decreto 64-498 del 1/6/64 modificado por Decreto 248 del 16 de marzo de 2005 del Presidente de la República; Decreto 247 del 15 de marzo de 2005; y decisión del 16/3/2005 del Ministro de Defensa).

En **Brasil**, donde existe un Acuerdo con la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas firmado en 1989⁵⁴⁹, rige la ley 6923 del 29 de junio de 1981⁵⁵⁰ que organiza el servicio de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas,

“constituido por capellanes Militares, seleccionados entre sacerdotes, ministros religiosos o pastores, pertenecientes a cualquier religión que no atente contra la disciplina, la moral y las leyes en vigor” (art.4).

Estos capellanes son designados manteniendo *“la debida proporcionalidad entre los capellanes de las diversas religiones profesadas en la respectiva Fuerza”* (art.10). Ellos tienen grados militares y derecho al uso de uniforme (art.17), y son remunerados por el Estado (art.11); pero si la autoridad eclesiástica competente los priva de sus funciones religiosas deben ser dados de baja (art.14). Esa misma autoridad eclesiástica o religiosa debe haber dado su consentimiento para su incorporación⁵⁵¹.

En **España**, el servicio religioso católico a las Fuerzas Armadas existe desde el siglo XVI. Está vigente un acuerdo específico firmado con la Santa Sede en 1979 que regula el Vicariato General Castrense (hoy, Arzobispado Castrense), y normas internas que regulan el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas⁵⁵². Para los no católicos, hay previsiones que incluyen la designación de asistentes religiosos ("capellanes") en los acuerdos de cooperación firmados con evangélicos, judíos e islámicos⁵⁵³.

En **Chile** existe un Ordinariato Castrense católico, creado no por acuerdo con la Santa Sede sino por ley interna, que cuenta con un cuerpo de capellanes católicos integrados orgánicamente en las Fuerzas Armadas, incluyendo diáconos permanentes. En cambio, para los fieles militares

⁵⁴⁹ El Acuerdo crea un Ordinariato Castrense en los términos de la Constitución Apostólica *Spirituali Militum Curae*, a cargo de un arzobispo con dedicación exclusiva al cargo nombrado por la Santa Sede previa consulta al Gobierno. Algo semejante a lo que existe en la Argentina.

⁵⁵⁰ Su texto en CALLIOLI, Eugenio, op.cit., p.160.

⁵⁵¹ Sobre el régimen brasileño, ver GOMES, Evaldo Xavier, "Los acuerdos entre la Santa Sede y Brasil", en RGDCEE, nº 22 (2010).

⁵⁵² Cfr. PÉREZ-MADRID, Francisca, "Asistencia religiosa católica", en "Fuerzas Armadas y factor religioso" (Silvia MESEGUER VELASCO, Santiago CAÑAMARES ARRIBAS y María DOMINGO GUTIERREZ, Coordinadores), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.

⁵⁵³ Cfr. MANTECON SANCHO, Joaquín, "Asistencia religiosa de las confesiones minoritarias", en el libro citado en nota precedente.

no católicos, se aplica el "Reglamento de Asistencia Religiosa en Establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad Pública"⁵⁵⁴, que garantiza la asistencia religiosa en principio mediante un sistema de libre acceso de ministros de culto acreditados, pero también prevé la designación de Capellanes por parte de las distintas confesiones religiosas regidas por la Ley 19.638, a razón de un capellán nacional por cada confesión⁵⁵⁵.

En **Perú** el Obispado Castrense está previsto y regulado en lo principal por el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú del 19 de julio de 1980. Como consecuencia, existe un cuerpo de capellanes castrenses católicos, integrados orgánicamente a las Fuerzas Armadas aunque sin grado ni asimilación a la jerarquía militar (pero con ciertas prerrogativas propias que incluyen el cobro del salario correspondiente). El Obispado cuenta con un reglamento aprobado por el Estado que regula los derechos y deberes de los capellanes. No hay capellanes o ministros de culto no católicos al servicio de las Fuerzas Armadas⁵⁵⁶.

El convenio entre la Santa Sede y **Bolivia** sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas y policiales, establece que *"los capellanes tendrán derecho a promociones similares al que tienen los miembros de las fuerzas armadas y policiales"* (art.VIII), que a partir de la vigencia del acuerdo dejarán de tener grados militares, aunque sí una equiparación protocolar, y que en caso de ser sometidos a procedimientos penales o disciplinarios debe hacerse con consentimiento explícito del Ordinario, *"quien dispondrá se cumpla la sanción en el lugar y la forma que estime más adecuado"* (art.IX)⁵⁵⁷.

⁵⁵⁴ Decreto 155/2008 del 26 de mayo de 2008.

⁵⁵⁵ LOPEZ MANCINI, Valeria, "Asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública en Chile", en "Fuerzas Armadas y factor religioso" (Silvia MESEGUER VELASCO, Santiago CAÑAMARES ARRIBAS y María DOMINGO GUTIERREZ, Coordinadores), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015. Más ampliamente sobre los ministros de culto católicos, GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, Juan, "Iglesia y Fuerzas Armadas. Estudio canónico y jurídico sobre la asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas en Chile", Universidad de los Andes, Santiago, 1994.

⁵⁵⁶ Cfr. CALVI DEL RISCO, José Antonio, "Asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y policiales en el Perú", en "Fuerzas Armadas y factor religioso" (Silvia MESEGUER VELASCO, Santiago CAÑAMARES ARRIBAS y María DOMINGO GUTIERREZ, Coordinadores), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.

⁵⁵⁷ Cfr. GÓMEZ ROSALES, Miguel, "Legislación eclesiástica boliviana ante la nueva constitución", Ed. Verbo Divino, Cochabamba, 2010, p.146.

En **Colombia** existen además de capellanes castrenses católicos que forman parte del Obispado Castrense, capellanes de otras confesiones religiosas que tengan acuerdos con el Estado (en concreto, iglesias evangélicas), nombrados por ellas, para los que las fuerzas armadas deben disponer los medios necesarios para que cumplan su labor⁵⁵⁸.

9.3 Código de Justicia Militar

El Código de Justicia Militar⁵⁵⁹, era un ordenamiento de excepción, que había sido admitido como regulador de un fuero “real” o de materia, y no personal, que como tal estaría prohibido por el art.16 de la Constitución Nacional.

En él se contenían diversas disposiciones, aplicables a los capellanes militares, o a clérigos en general. Como durante su vigencia el único servicio religioso existente en las Fuerzas Armadas es el católico, suponía siempre que se trata de clérigos católicos.

El art.105 establecía que

⁵⁵⁸ Dice el reglamento respectivo: “ARTÍCULO 5o- La asistencia religiosa a los miembros de la Fuerza Pública dentro de las dependencias del Ministerio de Defensa y los Comandos de Fuerza y las Unidades Militares y de Policía, será prestada por Capellanes Castrenses o Ministros de Cultos de las Entidades Religiosas suscriptoras del convenio, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la ley 133 de 1994. ARTÍCULO 6°- Los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la Policía deberán exigir a las distintas Entidades Religiosas el listado de los Ministros de Culto que prestarán la asistencia espiritual según el área de su competencia. Tales listados deberán ser difundidos a los Comandos de Unidades Operativas y Tácticas del Ejército y sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea, y a los Comandos de Departamento de Policía. ARTÍCULO 7o- Los Comandos de Fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional, dispondrán lo pertinente para que los ministros del culto de las Entidades Religiosas puedan ejercer su función doctrinal en igualdad de condiciones frente a la Iglesia Católica o cualquier otra Entidad religiosa reconocida oficialmente por el Estado Colombiano, para lo cual garantizarán un lugar ecuménico para el ejercicio de la actividad cultica. De la misma manera se establecerán horarios que permitan el ejercicio de todo lo que implica la libertad religiosa; para el efecto los Comandantes de Unidades Operativas o sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea y los Comandos Policía, darán las órdenes a sus comandos subalternos para que coordinen con las autoridades de las Entidades Religiosas de sus guarniciones, y convengan con ellas la manera como prestarán la correspondiente asistencia espiritual a sus fieles. Una vez autorizado el Ministro de Culto deberá impartírseles en cada una de las Fuerzas orientación relacionada con la reglamentación interna de aquellas, a efectos de no contrariar las funciones propias de la Institución.” (Resolución Nº 03074 del 06 de agosto de 1998 del Ministro de Defensa, que reglamenta en el ámbito militar el Convenio de Derecho Público nº 1 de 1997).

⁵⁵⁹ Ley 14029, y sus modificatorias, derogado a partir de febrero de 2009 por ley 26394.

“No podrán ser obligados a desempeñar cargo alguno judicial... los que pertenecen al clero castrense”.

Adviértase que la norma no prohibía que lo hicieran, sino que fueran obligados a hacerlo. Es de suponer que un clérigo, por la imposición que al respecto existe en el derecho canónico, se abstendrá de integrar un tribunal militar, pero si lo hacía voluntariamente (y, cabe suponer, con la autorización de su Ordinario), ello era posible. La supresión de estos tribunales y la creación de tribunales de disciplina integrados exclusivamente por militares con título de abogado excluye ahora esta hipótesis, salvo el raro caso de un capellán que simultáneamente tuviese título de abogado y estado militar, para quien ahora no hay norma de exclusión.

El art.259 preveía el supuesto de quienes están exceptuados de concurrir personalmente a prestar declaración testimonial ante los tribunales militares, entre quienes se mencionaba a *“las dignidades del clero y vicaría general castrense”*. La norma concluía en que

“Todos estos funcionarios declararán por medio de oficio, a cuyo efecto se les transcribirá el correspondiente interrogatorio”.

En el caso particular del clero castrense, tiene cierta lógica considerar a sus miembros “funcionarios”, a diferencia de lo que ocurre con el clero en general. El Código no preveía, en cambio, la posibilidad de que se abstuvieran de declarar invocando el secreto religioso, ni el secreto de confesión. Ahora la cuestión se rige por las normas generales del Código Procesal Penal de la Nación que hemos visto en el capítulo anterior.

Finalmente, el artículo 474 se refería a la ejecución de la pena de muerte, que subsistió en el ámbito militar hasta la derogación del Código de Justicia Militar en 2008. La norma establecía que

“La sentencia que imponga la pena de muerte, no se notificará al condenado hasta el momento de ponerlo en capilla, y una vez en ella, se le concederán los auxilios que solicite y se permitirán las visitas que él desee recibir”.

Esta hipótesis es ya historia, y no cabe pensar en su reaparición por el obstáculo que supone el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional, que impide reimplantar esa pena cuando hubiera sido suprimida.

9.4 Ministros religiosos en tiempo de guerra

Las normas de derecho internacional humanitario previstas para tiempo de guerra, especialmente las varias Convenciones de Ginebra relativas a la especie, contienen gran cantidad de referencias a los ministros de culto y previsiones para ellos, además de otras muchas más generales que prohíben en forma terminante la discriminación religiosa en esa emergencia, o reconocen derechos vinculados con la libertad religiosa (como el de recibir asistencia religiosa, recibir sepultura según los ritos religiosos, el derecho de las organizaciones religiosas a acudir en auxilio de sus fieles, etcétera)⁵⁶⁰.

Entre las normas específicamente referidas a los ministros de culto en tiempo de guerra, contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949, y vigentes en la Argentina, podemos recordar:

1. *“Los miembros del personal sanitario y religioso retenidos en poder de la Potencia detenedora para asistir a los prisioneros de guerra no serán considerados como prisioneros de guerra. Sin embargo, disfrutarán, por lo menos, de todas las ventajas y de la protección del presente Convenio [sobre trato a prisioneros de guerra], así como de cuantas facilidades necesiten para prestar su asistencia médica y sus auxilios religiosos a los prisioneros de guerra”*⁵⁶¹.

Como se ve, hay una equiparación práctica entre personal sanitario y personal religioso, es decir, ministros de culto. Obviamente, esto vale para ministros religiosos de cualquier confesión. Esta primera categoría, de “ministros de culto retenidos”, se refiere a quienes eran previamente capellanes militares o personal religioso integrado en la organización militar de la potencia enemiga.

La misma norma antes transcripta continúa detallando el modo en que deben ejercer sus funciones, que es según las leyes y reglamentos militares de la potencia detenedora (la que tiene a los prisioneros a quienes sirven los ministros de culto, sin ser ellos mismos prisioneros como queda dicho), y *“de acuerdo con su conciencia profesional”*. Estos ministros deben servir

⁵⁶⁰ Ver sobre el tema VEUTHEY, Michel, “La protección del personal sanitario y religioso en el Derecho Internacional Humanitario”, en PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, “El Derecho Humanitario y los capellanes militares”, Librería Editrice Vaticana, Roma, 2005, p.72.

⁵⁶¹ Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra del 12 de agosto de 1949, aprobado por Ley 14.442 (BO 9/8/56) y ratificado el 18/9/1956, art.33.

“preferentemente, a las fuerzas armadas a las que ellos mismos pertenezcan”, pero también a otros prisioneros si es del caso, y para ello deben gozar de las siguientes facilidades:

- a) estar autorizados a visitar a prisioneros de guerra que estén en campamentos de trabajo u hospitales situados fuera del campamento de detención, para lo cual la potencia detenedora debe facilitarles medios de transporte;
- b) tener acceso directo a las autoridades del campamento de prisioneros;
- c) no ser obligados a realizar trabajo alguno ajeno a su misión religiosa.

2. *“Los capellanes que caigan en poder de la Potencia enemiga y que queden o sean retenidos para asistir a los prisioneros de guerra estarán autorizados a prestarles los auxilios de su ministerio y a ejercerlo libremente entre sus correligionarios, de conformidad a su conciencia religiosa. Estarán repartidos entre los diferentes campos o destacamentos de trabajo donde haya prisioneros de guerra pertenecientes a las mismas fuerzas armadas, que hablen el mismo idioma o pertenezcan a la misma religión. Disfrutarán de las facilidades necesarias, incluidos los medios de transporte previstos en el artículo 33, para visitar a los prisioneros de guerra en el exterior de su campamento. Tendrán, sometida a censura, libertad de correspondencia, para los actos religiosos de su ministerio, con las autoridades eclesiásticas del país donde estén detenidos y con las organizaciones religiosas internacionales”⁵⁶².*

La norma es suficientemente explícita. Se refiere, como resulta de ella y queda dicho, a quienes ya revisten la calidad de capellanes militares al tiempo de caer prisioneros.

3.- *“Los prisioneros de guerra que sean ministros de un culto sin haber sido capellanes del propio ejército recibirán autorización, cualquiera que fuera la denominación de su culto, para ejercer plenamente su ministerio entre sus correligionarios. Serán*

⁵⁶² Ídem, artículo 35.

*tratados, a este respecto, como capellanes retenidos por la Potencia detenedora. No se les obligará a realizar ningún otro trabajo*⁵⁶³.

En este caso no se trata de capellanes militares, sino de prisioneros de guerra que al mismo tiempo son ministros de culto, sin ser capellanes. Es interesante destacar que la consideración que se les dispensa no es por ser capellanes (porque no lo eran) sino por ser ministros de culto. No dejan de ser prisioneros de guerra, pero merecen el mismo trato que los capellanes retenidos (que como vimos, no son prisioneros).

4.- *“Cuando los prisioneros de guerra no dispongan de la asistencia de un capellán retenido o de un prisionero ministro de su culto, se nombrará, para desempeñar este cometido, tras solicitud de los prisioneros interesados, a un ministro perteneciente, sea a su confesión sea a otra similar o, a falta de estos, a un laico calificado, si resulta posible desde el punto de vista confesional. Esta designación, sometida a la aprobación de la Potencia detenedora, se hará de acuerdo con el conjunto de prisioneros interesados y, cuando sea necesario, con el asenso de la autoridad religiosa local de la misma confesión*⁵⁶⁴.

En este supuesto no hay ministros de culto retenidos, ni prisioneros, por lo que es la potencia adversaria u ocupante quien provee de ministros a los prisioneros. Se trata de garantizar así el derecho a la asistencia religiosa que tienen los prisioneros de guerra. La alternativa es investir como ministro de culto a un laico. Se trata de un curioso supuesto de alguien que deviene ministro de culto sin haberlo sido previamente, a falta de ministro idóneo. Naturalmente, depende de las normas de cada confesión religiosa que se pueda recurrir a este procedimiento, pero si ellas lo permiten, los estados signatarios de la Convención están obligados a respetarlo. Es importante notar la intervención que debe darse a la autoridad religiosa local de ser ello posible.

5.- Lo dicho hasta aquí se refiere a prisioneros de guerra, es decir, personal militar. Pero también se ha previsto el caso de ministros de culto que sirven a civiles internados en campos de detención a raíz de un conflicto bélico.

“Los internados tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina

⁵⁶³ Ídem, artículo 36.

⁵⁶⁴ Ídem, artículo 37.

*normales prescritas por las autoridades detenedoras. Los internados que sean ministros de un culto estarán autorizados a ejercer plenamente su ministerio entre sus correligionarios. A este respecto, la Potencia detenedora velará por que estén repartidos equitativamente entre los diferentes lugares de internamiento donde haya internados que hablen el mismo idioma y pertenezcan a la misma religión. Si no los hay en números suficiente, les otorgará las facilidades necesarias, entre otras los medios de transporte, para trasladarse de un lugar de internamiento a otro, y estarán autorizados a visitar a los internados que haya en hospitales. Los ministros de un culto tendrán, para los actos de su ministerio, la libertad de correspondencia con las autoridades religiosas del país de detención y, en la medida de lo posible, con las organizaciones internacionales de su confesión. [...]*⁵⁶⁵.

También en estos casos está prevista la designación de ministros de culto *ad hoc*, o de laicos calificados que cumplan esas funciones si las normas de la confesión de que se trate lo permite, a falta de ministros internados que cumplan esa tarea.

6.- Las mismas obligaciones respecto del personal religioso y ministros de culto que tienen los beligerantes, las tienen también las potencias neutrales respecto de los que sean recibidos o internados en su territorio⁵⁶⁶.

7.- Los derechos que los Convenios de Ginebra otorgan al personal religioso, son irrenunciables por parte de dicho personal⁵⁶⁷, seguramente para evitar que les sean negados alegando “renuncias” realizadas sin la suficiente libertad.

Normas posteriores a las de 1949, han aportado otras precisiones. Así, se ha definido que

“se entiende por “personal religioso” las personas, sean militares o civiles, tales como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas: i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; ii) a las unidades sanitarias o los

⁵⁶⁵ Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra, del 12/8/1949, aprobado por ley 14.442 (BO 20/8/56) y ratificado el 18/9/56, art.93.

⁵⁶⁶ Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar, del 12/8/1949, aprobada por ley 14442 (BO 12/8/1956) y ratificada el 18/9/56, art.5.

⁵⁶⁷ Ídem, art.7.

*medios de transporte sanitario de una Parte en conflicto, iii) a las unidades o medios de transporte sanitario..., iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto”*⁵⁶⁸.

La adscripción del personal religioso puede ser permanente o temporal, y también se protegen sus medios de transporte.

El personal religioso debe ser protegido y respetado, recibiendo *“toda clase de ayuda para que pueda desempeñar su misión humanitaria de la mejor manera”*⁵⁶⁹, y para eso debe ser identificado

*“en territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable que se desarrollen combates, ... por regla general, por medio del signo distintivo y de una tarjeta de identidad que certifique su condición”*⁵⁷⁰.

Las infracciones a estas normas se consideran graves (art.85).

La misma regla existe para el caso de conflictos armados internos (no internacionales), en los que

*“El personal... religioso será respetado y protegido. Se le proporcionará toda la ayuda disponible para el desempeño de sus funciones y no se le obligará a realizar tareas que no sean compatibles con su misión humanitaria”*⁵⁷¹.

En particular es un derecho de las personas privadas de libertad, internadas o detenidas, por motivos relacionados con el conflicto armado, recibir asistencia espiritual de capellanes o quienes ejerzan funciones religiosas⁵⁷².

⁵⁶⁸ Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), del 8/6/1977, aprobado por ley 23379 (BO 9/6/1988), al que adhirió la Argentina el 26/11/1986, art.8 inc. d). Una segunda ratificación ocurrió mediante la Ley 24.668,(29/7/96) que reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta en los términos del art.90 del Protocolo.

⁵⁶⁹ Ídem, art.15.

⁵⁷⁰ Ídem, art. 18.3.

⁵⁷¹ Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II), del 8/6/1977, aprobado por ley 23379 (BO 9/6/1988), al que adhirió la Argentina el 26/11/1986, art.9.

⁵⁷² Ídem, art.5 inc. d.

En resumen, la regla general es la obligación respeto y protección al personal religioso en sus distintas categorías, que se concreta en el reconocimiento para ellos de cuatro derechos básicos⁵⁷³:

- a) el derecho a prestar asistencia a los fieles de su propia confesión, y ejercer libremente sus funciones;
- b) el derecho a la libertad de correspondencia;
- c) el derecho a la confidencialidad; y
- d) el derecho a utilizar un signo distintivo.

Una cuestión particular que cabe anotar, en el derecho argentino, es la capacidad que tenían los capellanes militares, en tiempo de guerra, para actuar como oficial público receptor del testamento militar que otorgasen personas heridas o enfermas y que estaba prevista en el derogado Código Civil de 1870 (art.3673). El nuevo Código Civil y Comercial ha suprimido las formas especiales de testamento (entre ellas, el "testamento militar"), y por lo tanto esta atribución concedida a los capellanes militares.

9.5 Conclusiones

El Derecho Militar ofrece interesantes perspectivas para la elaboración del estatuto jurídico de los ministros de culto.

Es probablemente la rama del Derecho que más tempranamente incluyó en la Argentina una categoría genérica, de ministros religiosos y de seminaristas o candidatos al ministerio, aplicable a todas las confesiones religiosas. Lo hizo en relación a la prestación del servicio militar, y es digno de destacar que la jurisprudencia ha sido firme en la defensa de ese concepto amplio, evitando interpretaciones restrictivas o discriminatorias que en algún momento intentó la autoridad militar.

Al mismo tiempo, y como hemos visto desde el comienzo de este trabajo, ha sido precisamente éste el ámbito donde se manifestó la necesidad de delimitar el concepto de "ministro de culto", tal y como hizo nada menos que la Corte Suprema en el caso "Lopardo".

⁵⁷³ Un desarrollo de lo aquí expuesto, en CONTRERAS MAZARIO, José María, "El estatuto jurídico del personal religioso en el derecho internacional humanitario", en "La libertad religiosa – Memoria del IX congreso internacional de Derecho Canónico", México, UNAM, 1995, p.599.

El Derecho Militar para tiempo de guerra, o Derecho Internacional Humanitario, es por otra parte la rama del Derecho que más extensamente se ha ocupado de los ministros de culto, tanto en orden a su protección personal y funcional, como al énfasis de su necesidad instrumental para asegurar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad religiosa de las personas víctimas de conflictos armados, internacionales o internos, y sean ellos militares o civiles. Se trata en este caso de normas de fuente internacional, que necesariamente deben abarcar de modo igualitario a las diversas confesiones religiosas.

Pero al mismo tiempo, al haber sido incorporadas al Derecho argentino mediante la suscripción, aprobación y ratificación de los pertinentes tratados internacionales, esas normas proyectan una luz sobre el conjunto del Derecho interno, o deberían hacerlo. Y con la fuerza adicional que resulta de la jerarquía superior a las leyes que tienen todos los convenios y tratados internacionales (art.75 inc.22 de la Constitución Nacional). Esta proyección no parece haber sido suficientemente explorada hasta ahora.

Contrasta con esa amplitud la estrechez que subsiste en materia de atención religiosa a las Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Respecto de esta cuestión, hay que señalar al menos dos puntos:

a) la atención religiosa a los fieles católicos, mediante un cuerpo específico de ministros de culto católicos, está amplia y detalladamente reglamentada. Sin embargo, ese régimen está actualmente sometido a tensiones no resueltas. No en vano, el Obispado Castrense de la Argentina lleva muchos años de sede vacante, tras la conflictiva expulsión de su último titular en forma unilateral por el Poder Ejecutivo de la época. Todo indica que es necesaria alguna reformulación de su funcionamiento.

b) estrechamente vinculada con lo anterior está la ya insostenible omisión de prever algún tipo de atención religiosa a los militares no católicos, y por tanto la inserción en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por medio de algún mecanismo apropiado, de ministros de culto que presten tal asistencia. Se trata de una verdadera inconstitucionalidad por omisión que deberá ser afrontada por el legislador.

Capítulo 10. Ejercicio del ministerio religioso en situaciones de especial sujeción

El derecho fundamental de toda persona al ejercicio de su libertad religiosa permanece y se hace aún más acuciante en situaciones extremas donde otras libertades, como la ambulatoria, están restringidas por razones de hecho o de derecho.

Son las así llamadas situaciones “de especial sujeción”, es decir, aquellas en que por alguna razón el individuo no puede concurrir por sí mismo a recibir de los ministros religiosos de su confesión de pertenencia, la asistencia espiritual que necesite. Entre las principales situaciones de este tipo se encuentran: la privación de la libertad como pena o como medida de seguridad respecto de los autores comprobados o presuntos de delitos penales; la restricción ambulatoria de las personas internadas en establecimientos hospitalarios o de atención de la salud, o geriátricos; la limitación impuesta por la pertenencia a fuerzas armadas o de seguridad con la consiguiente obligación de morar en cuarteles o lugares similares. En alguna medida se les equipara también la situación de quienes tienen necesidad u obligación de permanecer durante tiempo prolongado en establecimientos educativos o de otra naturaleza.

Como se advierte, las restricciones a la libertad de acudir al encuentro del ministro de culto por parte de los fieles en algunos casos es de derecho (el privado de la libertad, o el sometido a un régimen militar), y en otras es de hecho (el internado en un establecimiento asistencial por razones de salud). En estos casos, la satisfacción de las necesidades de tipo religioso se obtiene mediante la presencia en esos lugares de ministros de culto al servicio de las personas allí retenidas

Para lograr ese acceso, como derivación del régimen especial de esos lugares, aparece la necesidad de establecer algún régimen de identificación de los ministros de culto, que lo haga posible.

En la República Argentina no hay normas generales en la materia, sino que debe analizarse cada situación por separado. Distinta es la situación en otros países.

Así por ejemplo, la Constitución de **Brasil** de 1998, establece:

“es asegurada, en los términos de la ley, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internación colectiva” (art.5º, VII).

Obviamente, se trata de una norma genérica que requiere ulteriores reglamentaciones.

Así por ejemplo, la ley 9982 del 14 de julio del 2000⁵⁷⁴, dispone que

“a los religiosos de todas las confesiones se les asegura el acceso a los hospitales de la red pública o privada, así como a los establecimientos de prisiones civiles o militares, para dar atención religiosa a los internados, de común acuerdo con ellos, o con sus familiares en caso de pacientes que no estén en gozo de sus facultades mentales” (art.1). “Los religiosos llamados a prestar asistencia en las entidades definidas en el art.1, deberán, en sus actividades, acatar las determinaciones legales y normas internas de cada institución hospitalaria o penal, a fin de poner en riesgo las condiciones del paciente o la seguridad del ambiente hospitalario o penitenciario” (art.2).

Por su parte, el Concordato de 2008 entre Brasil y la Santa Sede, en su art.8, establece:

“La Iglesia Católica, en vista del bien común de la sociedad brasileña, especialmente de los ciudadanos más necesitados, se compromete, observadas las exigencias de la ley, a dar asistencia espiritual a los fieles internados en establecimientos de salud, de asistencia social, de educación o similares, o detenidos en cárceles o lugares similares, siendo observadas las normas de cada establecimiento, y que, por esa razón, estén impedidos de ejercer en condiciones normales la práctica religiosa y la requieran. La República Federal del Brasil garantiza a la Iglesia Católica el derecho de ejercer este servicio, inherente a su propia misión”.

Volviendo a la Argentina, cabe mencionar que los distintos proyectos de ley de libertad religiosa discutidos desde 1991 han incluido el reconocimiento del derecho de las personas a recibir asistencia religiosa en situaciones de especial sujeción. En oportunidad de discutirse esos

⁵⁷⁴ Ley 9982. Ver en GUEDES SORIANO, Aldir, “Direitos humanos e liberdade religiosa”, Kit’s, Sao Paulo, 2012, p.234.

proyectos, muchas veces algunos grupos religiosos (especialmente las iglesias evangélicas) pretendieron formular la norma en el sentido de proclamar un "derecho a las capellanías", y no un derecho de las personas a requerir y recibir asistencia religiosa.

La diferencia no es irrelevante. Si se conceptualiza un derecho de la persona a recibir asistencia religiosa, va implícito el derecho de no recibirla. Si en cambio se formula un derecho del ministro de culto a presentarse en los establecimientos de salud a ejercer sus funciones, se podría estar habilitando una forma de proselitismo o de imposición de asistencia religiosa no deseada, que podría suscitar dificultades.

El derecho de las personas a recibir asistencia religiosa en las situaciones de especial sujeción determina la existencia del derecho de las confesiones religiosas a prestar tal asistencia por medio de sus ministros de culto. Esto a su vez genera el deber del Estado de facilitar esa asistencia, como forma de hacer efectivo el goce de la libertad religiosa de sus ciudadanos.

La doctrina identifica diversa formas en que el Estado puede dar cumplimiento a esa obligación. Una posibilidad es la "integración orgánica", por la que el Estado incorpora a su propia estructura a ministros de culto destinados a la asistencia religiosa (denominados habitualmente "capellanes"). En este sistema, el Estado se hace cargo de la remuneración de esa tarea. Es lo que ocurre por ejemplo en el caso de los capellanes militares que ya hemos examinado. Otra forma posible es que el Estado organice la asistencia mediante acuerdos o convenios con las confesiones religiosas, y que sean ellas quienes se hagan cargo total o parcialmente del costo del servicio. Una tercera posibilidad es que el Estado se limite a facilitar el ingreso de los ministros de culto a los lugares de residencia de los fieles que los requieren, aun en horarios o situaciones donde no se admite el ingreso de otras personas: esto supone alguna forma de identificación o acreditación de tales ministros. Finalmente, a veces (pero no siempre) es posible facilitar la salida de las personas que requieren asistencia religiosa de su lugar de internación, para acudir en búsqueda de la tal ayuda.

Naturalmente, esos diversos sistemas pueden también coexistir o complementarse.

Eventualmente podrían existir capellanes estables de la o las confesiones religiosas que por su número de fieles vayan a ser requeridos con seguridad por las personas internadas; y al mismo tiempo preverse un sistema de libre ingreso de los ministros de culto de otras confesiones para el

caso de ser llamados por algún practicante de su credo; o bien un sistema de libre egreso de las personas que no cuentan con ministros de su propia fe en el lugar, para buscarlos fuera.

La condición de país federal de la República Argentina hace que en muchas de estas situaciones sean las provincias (y a veces incluso los municipios) quienes deban reglamentar la forma de ejercicio del derecho de asistencia religiosa.

En el caso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya hemos visto que la normativa es federal. Pero también ocurre que cada provincia tiene su propia policía, y por ende organiza sus propias capellanías policiales que veremos más adelante. En materia penitenciaria ocurre algo semejante a lo que hemos visto en materia procesal: existe un Servicio Penitenciario Federal que administra cárceles nacionales repartidas a lo largo del territorio, pero también hay cárceles provinciales donde se presenta la misma necesidad de atención religiosa. En materia hospitalaria, la competencia primaria es de las provincias, y cada una organiza su propio sistema de asistencia religiosa, o debería hacerlo. Finalmente, veremos algunos otros casos particulares.

10.1 Atención de enfermos y capellanías hospitalarias

En los hospitales y centros asistenciales de la República Argentina, es habitual que de hecho o de derecho, existan capellanes católicos; y donde no los hay o no están presentes, a los ministros de culto católico, en general, se les franquea sin dificultad el acceso y ejercicio de sus funciones. En cambio, es una queja frecuente de los ministros de otros cultos la dificultad que encuentran para ejercer su ministerio fuera de los horarios habituales (y normalmente restringidos) de visita a los pacientes internados que los requieren. Situación que sin embargo se ha ido suavizando en tiempos recientes.

En este tipo de ámbitos públicos, la presencia de los ministros de culto es una necesidad para el goce de los derechos derivados de la libertad religiosa de los individuos, que se torna particularmente intensa en situaciones límites de enfermedad o agonía, tanto para los mismos enfermos, como para sus familiares inmediatos que los asisten en ese trance. Personas que no tienen una práctica religiosa habitual, en esos momentos demandan asistencia religiosa, que el Estado debería garantizarles permitiendo el acceso de

los ministros de culto idóneos para brindarla, según las convicciones del requirente. Ciertamente, sin imposición de ninguna índole.

En lo que se refiere a centros de salud, la legislación y el consiguiente poder de policía caen dentro de la esfera de los poderes no delegados en el Gobierno federal, y por lo tanto reservados a las provincias, como ya se ha dicho. Cabe notar que si bien el tema se plantea en relación a los hospitales, clínicas y centros de salud de propiedad estatal y por definición abiertos a personas de cualquier orientación religiosa, la situación no es diferente desde el punto de vista del derecho a la libertad religiosa en los establecimientos privados, e incluso en los confesionales, donde suelen recibirse pacientes que no necesariamente comparten la fe de la institución religiosa propietaria. En la medida en que se trata de establecimientos explícitamente confesionales (o que de hecho lo sean) estará seguramente prevista en ellos la presencia de ministros del culto al que adscribe la institución, pero debería habilitarse también el acceso de ministros de otras confesiones⁵⁷⁵.

No todas las provincias han legislado al respecto. En muchos casos, las situaciones se dan de hecho: hay capellanías católicas más o menos formales, y acceso más o menos libre de los ministros de culto de otras religiones.

En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, el Secretario de Salud dispuso en 1999 autorizar en forma expresa

*“a los representantes de los distintos cultos, a ingresar a los Establecimientos Asistenciales dependientes de esta Secretaría, fuera del horario de visita para la asistencia espiritual de los profesantes de su fe”*⁵⁷⁶.

Para ello dispuso pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto “el listado de cultos autorizados”, para posteriormente requerir a estos “la nómina de sus representantes en cada establecimiento”, que sería comunicada a las autoridades hospitalarias para hacer efectiva la asistencia. El problema fue que el Registro de Cultos nunca fue capaz de elaborar el listado pedido, y por ende tampoco fue posible al gobierno de la ciudad pedir a los

⁵⁷⁵ En la Argentina existen hospitales de propiedad de la comunidad israelita y gestionados por ella, como también evangélicos o adventistas, además naturalmente de centros católicos, propiedad de congregaciones religiosas y gestionados por ellas, o por diversas instituciones con una confesionalidad más o menos explícita.

⁵⁷⁶ Resolución 206 del 4 de marzo de 1999.

(cientos) de entidades religiosas inscriptas en el Registro el listado de ministros autorizados.

También en la Ciudad de Buenos Aires, está vigente un “Reglamento de las funciones de capellanes y religiosas de hospitales”, del año 1982⁵⁷⁷. Los capellanes (católicos) son empleados públicos, designados a propuesta de la autoridad eclesiástica, cuyos deberes (como el de celebrar misa, administrar sacramentos o proveer asistencia espiritual y cumplir determinados horarios de trabajo) son impuestos por la norma estatal, que también regula sus derechos (desde la remuneración y la vivienda, hasta el aseo y planchado de su ropa). Se trata de un régimen muy minucioso y detallado (se diría, "josefinista"), que comprende también a las religiosas (sugestivamente, no prevé la existencia de religiosos varones) que se desempeñan en el ámbito hospitalario, que también son empleadas públicas una vez que se las designa a propuesta de su congregación de pertenencia y quedan sujetas a un estricto régimen de derechos y obligaciones.

Ese régimen fue impugnado judicialmente en ocasión de un conflicto suscitado por la presunta intervención abusiva de un capellán católico en un caso de aborto (situación que al cabo no fue comprobada). La sentencia judicial⁵⁷⁸ convalidó la legalidad y constitucionalidad del sistema de integración orgánica de los capellanes católicos, por encontrar que no vulneraba derechos constitucionales, salvo en dos aspectos de la norma. Uno, la previsión de que cuando una persona requiriese la presencia de un ministro de culto no católico debiera hacerlo por intermedio del capellán católico (esto, a pesar de que la norma no es clara, y no parece que deba interpretarse como una restricción a los no católicos sino como una obligación impuesta al capellán católico de colaborar con la labor de los ministros de otros cultos). El otro aspecto objetado fue una previsión también ambigua de la ordenanza, que impone a las religiosas católicas la tarea de

“velar en el mantenimiento de la moral dentro del establecimiento, colaborando en tal sentido con la Dirección del mismo”.

⁵⁷⁷ Ordenanza 38397 del 10/11/82, BM 17/11/82.

⁵⁷⁸ CCAyT, CABA, Sala I “RACHID, MARÍA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO”, Exp: A20-2013/0, 9/5/2016. Publicada con nota de NAVARRO FLORIA, Juan G., "La asistencia religiosa en los hospitales", LL 2016-E (22/8/2016).

Esa curiosa norma fue interpretada -erróneamente- como una suerte de imposición de la moral católica a los pacientes no católicos, cosa que no se deduce del texto.

Como cuestión vinculada con la que tratamos, hay que decir que en la Ciudad de Buenos Aires la ley 525 exime de la prohibición de reservar espacios para libre estacionamiento de vehículos, a las sedes del servicio sacerdotal de urgencia (católico) y a los servicios similares de otros credos (art.2 inc. e), debiendo todos ellos requerir el permiso específico por medio de la Secretaria de Culto⁵⁷⁹.

En la **Provincia de Santa Fe**, el Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas⁵⁸⁰ crea, entre otros, el "Agrupamiento hospitalario-asistencial", compuesto a su vez por dos "subagrupamientos": hospitalario, y asistencial (art.23), éste último integrado por cinco especialidades (art.27). Una de ellas es la de "*ministros religiosos*", en la que

"se incluirán a los Ministros de cultos aprobados por el Estado Nacional, que cuenten con la autorización de sus superiores jerárquicos para ejercer esta función" (art.27 inc.2).

La ley prevé incluso que "*el personal religioso que cumpla simultáneamente tareas propias de otra especialidad del agrupamiento*" (por ejemplo, se nos ocurre, de enfermería) será escalafonado de acuerdo a estas últimas funciones.

Es interesante notar respecto de este régimen provincial, por una parte que la condición de ministro de culto se reconoce a quienes hayan sido previamente "autorizados" como tales por "sus superiores jerárquicos", y siempre que pertenezcan a alguna comunidad religiosa "aprobada por el Estado Nacional" (lo que parece remitir a la inscripción en el Registro Nacional de Cultos, además de incluir como es obvio a la Iglesia Católica). Por otra parte, no se excluye la presencia en este escalafón de ministros de cultos distintos del católico.

⁵⁷⁹ Decreto 1248 del 19/7/2004. Una antigua ordenanza municipal (47136 del 9/9/1993) autoriza "*la detención momentánea de vehículos conducidos por ... religiosos que realicen servicios de extremaunción, ayuda espiritual, etc. ... que se encuentren en el desempeño de sus funciones específicas ... en aquellos lugares que rija alguna prohibición de estacionamiento*". Llama la atención la específica mención de la "extremaunción" (antiguo nombre del sacramento católico de unción de los enfermos), aunque la norma no se limita a los ministros de culto católico sino que abarca a cualquiera que preste "ayuda espiritual", denominándolos genérica (y equivocadamente) como "religiosos".

⁵⁸⁰ Ley 9286, BO 25/10/83.

En la provincia de **Mendoza**, la ley provincial 8173 del año 2010⁵⁸¹ autoriza

"a los ministros pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas e inscriptas en el Registro Nacional de Cultos de la Nación y que acrediten tal condición, a acceder a los efectores de salud públicos o privados, estatales o no, para brindar asistencia espiritual a las personas que deseen recibirla".

La referencia al Registro Nacional de Cultos no abarca a los ministros del culto católico, probablemente porque su presencia en los hospitales se dé por supuesta. Lo notable de la norma es que se formula un derecho de los ministros de culto al acceso a los hospitales, y no un derecho de los pacientes a recibir su visita. Y que su ámbito de aplicación incluye a los establecimientos privados de salud y no solamente los públicos.

La provincia de **Santiago del Estero** cuenta con antiguo pero interesante reglamento de hospitales⁵⁸² que prevé en ellos una categoría de personal denominada "clero y religioso" (art.20). Respecto de las religiosas, que se sobreentiende son católicas, dice solamente (art.209):

"Las funciones de las religiosas de un servicio asistencial estarán regidos por las disposiciones contenidas en los convenios realizados o a realizarse con las Congregaciones Religiosas respectivas"

En cambio, en relación al capellán, que también se sobreentiende es el católico, dice (art.210):

"Las funciones del Capellán dentro del establecimiento se limitarán exclusivamente al campo espiritual y religioso y serán las siguientes: 1) Colaborar en estrecha unión con el cuerpo de religiosas del establecimiento; 2) Tendrá a su cargo los oficios religiosos; 3) Estará facultado para difundir dentro del establecimiento y en las horas que la Dirección establezca la doctrina cristiana y los preceptos morales; 4) Proveerá los auxilios religiosos a cuanto enfermo lo solicitare y acudirá cualesquiera fuere la hora a los pedidos de auxilio religioso que formulen los enfermos graves; 5) No interferirá dentro del

⁵⁸¹ BO 28/5/2010.

⁵⁸² Decreto 159/1959.

hospital la propaganda de predicadores de otras religiones que pudieran interesarse en difundir su fe".

Resulta notable la preocupación por acotar las funciones del capellán (que pareen subordinadas a las de las religiosas) y en especial por imponerle la "no interferencia" con los "predicadores de otras religiones".

En otros casos, las normas provinciales no han organizado un servicio religioso dentro de los establecimientos hospitalarios, pero sí se han preocupado por señalar el derecho que tienen las personas a recibir asistencia religiosa en ese ámbito por parte de ministros religiosos de su elección.

Así ocurre en la provincia de **Neuquén**⁵⁸³, que dispone:

"Todos los pacientes tienen derecho a recibir y rechazar asistencia religiosa, moral y espiritual, inclusive la de un representante de su religión, mientras recibe atención sanitaria".

Para hacer más complejo el panorama, en la Argentina no solamente las provincias se ocupan del tema, sino que también algunos municipios han legislado en la materia, ya que muchos hospitales y centros asistenciales les pertenecen. Así por ejemplo, la Municipalidad de Rosario, cuyo Concejo Municipal es particularmente activo en la materia, ha dictado una ordenanza⁵⁸⁴ que reconoce el

*"libre acceso de sus ministros [religiosos] a los hospitales públicos municipales cuando el enfermo o sus familiares así lo requieran" (art.1 inc. e)*⁵⁸⁵.

10.2 Asistencia religiosa a personas privadas de libertad

Antes de revisar la normativa argentina en esta materia, conviene recordar que en el ámbito internacional, existen desde hace

⁵⁸³ Ley 2611 del año 2008, BO 24/10/2008.

⁵⁸⁴ Ordenanza 7730 del 2/9/2004.

⁵⁸⁵ Al parecer las buenas intenciones de la Ordenanza han chocado con obstáculos prácticos, que hicieron necesario un Decreto del Consejo Municipal (Decreto 27151 del 3 de marzo de 2006), urgiendo al departamento ejecutivo municipal para hacer cumplir la ordenanza previa.

ya mucho tiempo unas "Normas mínimas para el trato de reclusos"⁵⁸⁶, que establecen como principio básico que no exista entre ellos discriminación de ningún tipo, y que sean respetadas sus creencias religiosas.

Desde el año 2015 a esas normas, revisadas, se las denomina "Reglas Mandela" en homenaje al gran líder sudafricano, que pasó buena parte de su vida en prisión⁵⁸⁷.

Establecen esas normas, en el capítulo titulado "Religión":

Regla 65 1. Si en el establecimiento penitenciario hay un número suficiente de reclusos de una misma religión, se nombrará o aprobará un representante calificado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique y las circunstancias lo permitan, dicho representante prestará servicios a tiempo completo.

2. El representante calificado que haya sido nombrado o aprobado conforme al párrafo 1 de esta regla estará autorizado a organizar periódicamente servicios religiosos y a efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales en privado a los reclusos de su religión.

3. Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión; y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar plenamente su actitud.

Regla 66 En la medida de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento penitenciario y tener en su poder libros de observancia e instrucción religiosas de su confesión".

⁵⁸⁶ "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977. Sobre el tema en general ver también SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, Àlex, "Prisiones y libertad religiosa", Thomson-Aranzadi, Pamplona (España), 2007. Para el caso español y específicamente en lo referido a ministros de culto no católicos, ver el Real Decreto 710/2006 de 9 de junio de 2006 (BOE 10.6.2006).

⁵⁸⁷ Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 17/12/2015, "70/175. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)", texto oficial en español en <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/175> (visitado 26/10/2016).

Como se ve, esas reglas mínimas por una parte imponen la presencia de ministros de culto en los lugares de detención, y por otro delimitan su ámbito de actuación, siempre privilegiando la libertad religiosa de los reclusos.

El tema de la asistencia religiosa en las cárceles es en sí mismo complejo y presenta muchos matices que son ajenos a la materia de este trabajo, por lo que nos ceñiremos exclusivamente a lo que tiene que ver con la presencia de los ministros de culto en este ámbito singular. Algunos de esos otros aspectos se vinculan a la peculiaridad del ámbito en análisis y a las exigencias de seguridad, que se manifiestan en controles que pueden llegar a ser excesivos sobre las personas que ingresan a tener contacto con los reclusos (incluso los ministros de culto) y agraviar algún aspecto de su libertad religiosa.

Otro aspecto que tan sólo mencionamos, y que hemos aludido antes en el Capítulo 8, es el referido a la confidencialidad de las comunicaciones entre los reclusos y los ministros de culto que los asisten. ¿Es legítima alguna interferencia o escucha de esas comunicaciones, cuando por ejemplo exista alguna sospecha de que el ministro de culto está aprovechando de su condición y posibilidad de contacto para ayudar a la perpetración de otros delitos o la comunicación del recluso con cómplices que permanecen en libertad?

En la Argentina, como ya se ha dicho, en materia penitenciaria coexisten normas federales con normas provinciales. Es que junto a las cárceles federales cada provincia tiene las suyas propias; y por lo tanto organiza su régimen, incluyendo la asistencia religiosa que se preste en ellas.

Veremos los distintos casos.

10.2.1 Normas federales

La ley argentina que -en el orden federal- reglamenta las formas de ejecución de las penas privativas de libertad⁵⁸⁸, reconoce (art.153) el derecho de todo interno, sin distinción de religión, a que

“se facilite la atención espiritual que requiera y el oportuno contacto personal y por otros medios autorizados con un

⁵⁸⁸ Ley 24660 del año 1996, BO 16/7/96.

representante del credo que profese, reconocido e inscrito en el Registro Nacional de Cultos”

La misma ley (art.155) dispone que para la práctica religiosa, en todos los establecimientos deba haber

“un local adecuado para celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos”

Al mismo tiempo, la ley ordena la celebración de actos de culto católico, de asistencia voluntaria (art.156)⁵⁸⁹.

Normas análogas existen para los procesados (todavía sin condena) privados de la libertad⁵⁹⁰. El derecho a recibir la visita diaria del capellán o del ministro del propio culto, asiste incluso a los castigados en un régimen de aislamiento.

Para garantizar la asistencia religiosa, la ley 24.660 (art.185)⁵⁹¹ prevé que

“los establecimientos destinados a la ejecución de penas privativas de la libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar como mínimo con los medios siguientes: ... f) Capellán nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento”.

Si bien la ley no lo dice explícitamente, se supone (y de hecho es así) que ese capellán es un sacerdote católico.

El ejercicio del derecho de los presos a recibir asistencia religiosa, y de las confesiones a brindarla, que reclama la presencia en el lugar de reclusión del ministro de culto, requiere que éste pueda acreditar esa condición.

En el orden federal, esa acreditación funciona teóricamente de modo diverso para los ministros de culto católicos y los de otras confesiones: a los católicos los acredita la propia autoridad eclesiástica, mientras que los demás deberían presentar un *“comprobante extendido por el Ministerio*

⁵⁸⁹ Esta norma reemplazó a otra anterior del año 1958, sustancialmente coincidente, pero que no preveía la existencia de un espacio físico para la celebración de otro culto que no fuese el católico (Decreto Ley 412/58).

⁵⁹⁰ Decreto 303/96, modificado por su similar 18/97.

⁵⁹¹ Texto según ley 26813 (BO 16/1/13).

*de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto*⁵⁹². Sin embargo, en la práctica ocurre lo inverso: al clero católico el Estado le extiende credenciales, mientras que el Registro Nacional de Cultos no cumple con la previsión de extender los comprobantes que se requiere a los no católicos, y que por tanto dependen para cumplir su ministerio de que las autoridades penitenciarias acepten como válidas las identificaciones dadas por sus propias iglesias o confesiones.

A veces, se ha dado el caso paradójico de que las autoridades penitenciarias pidan que sea el capellán católico quien autorice el ingreso de ministros de otras confesiones, para atender a reclusos que los requieren, con la consiguiente y justa ofensa de tales ministros.

El Servicio Penitenciario Federal, a cargo de la custodia de las cárceles dependientes de la autoridad nacional, cuenta entre su personal con capellanes, católicos. El personal penitenciario se reparte según la ley 20.416, en cuatro escalafones: cuerpo general, administrativo, profesional y auxiliar. Dentro del escalafón profesional, que *“desempeña funciones científicas, docentes, asistenciales y de asesoramiento técnico, que requieren título habilitante universitario, secundario o especial”* (art.41), existe el “sub-escalafón Clero”, que *“comprende a los capellanes afectados a los servicios de asistencia espiritual”* (inciso f).

En este caso, la ley prevé que además de los requisitos generales para el ingreso al servicio penitenciario,

“para el subescalafón Clero se solicitará a la autoridad eclesiástica pertinente la presentación de los candidatos” (art.64, párrafo III),

Estos deberán contar con *“título habilitante requerido para el ejercicio de la función”*. La presentación por parte de la autoridad eclesiástica, reemplaza en este caso al requisito normal de concurso de antecedentes u oposición.

Si bien no está previsto en la ley, del requisito de “presentación” por parte de la autoridad eclesiástica debe deducirse que en caso de solicitar ésta la exclusión del capellán, la autoridad penitenciaria debería

⁵⁹² Así lo dispone el Decreto 1136/97, que aprueba el “Reglamento de Comunicaciones de los Internos” (reglamentando la ley 24.660). Este reglamento garantiza el derecho de los internos a recibir visitas de al menos dos horas semanales del ministro de culto de su confesión, derecho que no puede ser suspendido por ninguna sanción disciplinaria.

disponerla, ya que no se concibe que ejerza esas funciones una persona que no cuente en el aval de su confesión de pertenencia.

Los capellanes penitenciarios en el orden nacional son exclusivamente sacerdotes católicos, que normalmente no tienen dedicación exclusiva a la tarea. Hay que decir sin embargo, que el texto de la ley no impide que existan capellanes de otros credos, y de hecho sería razonable que los hubiera⁵⁹³.

La misma ley 20.416 prevé también que

“el otorgamiento de estado penitenciario al personal de religiosas que se incorpore al Servicio Penitenciario Federal será objeto de una reglamentación especial” (art.51)⁵⁹⁴.

10.2.2 Legislación provincial argentina

Junto al régimen penitenciario nacional o federal, como se dijo antes, existen los creados y reglamentados por cada una de las provincias, que eventualmente prevén sus capellanías.

Algunas provincias han legislado de modo amplio en esta materia, mientras que otras no lo han hecho, y finalmente algunas se han limitado a adherir y dar validez en el ámbito provincial, a la ley nacional 24.660 ya mencionada, como **Córdoba**⁵⁹⁵ e inicialmente **Mendoza**⁵⁹⁶. Veremos que algunas provincias tienen un cuerpo especial dedicado a la custodia de las cárceles (que eventualmente incluye capellanes o ministros de culto), mientras que otras confían esa labor a la policía provincial (que tiene también eventualmente sus capellanes).

⁵⁹³ En la unidad penitenciaria de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, si bien el capellán es católico y hay en ella una capilla católica, existe también en su interior una sinagoga para las reuniones religiosas de los internos de religión judía.

⁵⁹⁴ Tal reglamentación no ha sido dictada hasta donde podemos saber, ni tampoco hay religiosas integradas orgánicamente al personal del Servicio Penitenciario.

⁵⁹⁵ Ley 8878. BO 19/9/2000.

⁵⁹⁶ Ley 6513 (BO 25/9/97). Esta provincia luego legisló detalladamente sobre el tema, como veremos. Desde el primer momento, dispuso que el Consejo correccional de cada establecimiento penal estuviese integrado, entre otros, por *“el capellán del establecimiento”* (Decreto 1166/98, BO 13/8/98, art.74).

En la provincia de **Buenos Aires** (la de mayor población carcelaria del país), la ley 12.256⁵⁹⁷ reconoce a los procesados y condenados, entre otros derechos, el “*ejercicio libre del culto religioso*” (art.9 inc.7). Pero esa misma ley derogó la anteriormente vigente ley 5619, que contemplaba expresamente la existencia de capellanes⁵⁹⁸. Tales capellanes (católicos) siguen existiendo de todos modos, e incluso con funciones de tipo administrativo⁵⁹⁹.

En la provincia de Buenos Aires, se ha organizado por parte de algunas iglesias un sistema de “capellanías evangélicas”, tendiente a que las autoridades penitenciarias admitan como ministros de culto autorizados a ingresar en las cárceles, a quienes a su vez son nominados por una especie de coordinador designado por las federaciones de iglesias evangélicas.

Los evangélicos (en conjunto) son la primera minoría religiosa, y son muy activos en las cárceles. En casi todas ellas, sus fieles han pedido y obtenido ser agrupados en pabellones exclusivos para ellos⁶⁰⁰. En muchas cárceles más de la mitad de los internos se declaran evangélicos, aunque el caso más notable es el de la Unidad 25, donde todos los presos, y también los guardiacárceles y hasta el director del penal son evangélicos⁶⁰¹. Para atender a la población carcelaria, la Facultad Internacional de Estudios Teológicos (evangélica interdenominacional) en la Argentina, ha organizado una carrera de pastores con

⁵⁹⁷ Ley de Ejecución Penal Bonaerense, modificada por la ley 12543.

⁵⁹⁸ La ley 3619 establecía que “*la educación a impartirse en los establecimientos [carcelarios] será lo más completa posible*”, abarcando “*hasta la enseñanza moral y religiosa*” (art. 110). Para ello en todo establecimiento debía haber un “*oratorio para el culto católico*” a cuyos servicios debían concurrir “*todos los internados que no manifiesten expresamente su disconformidad con la religión católica*” (art.118). Esta ley decía que “*Los capellanes de los establecimientos estarán encargados de la instrucción religiosa y de la asistencia espiritual de los reclusos, incluso de los no católicos que no la rechacen, y dependerán jerárquicamente de un Capellán Mayor*” (art.119). Es notable la previsión de pertenencia al culto católico y de instrucción católica “por defecto”, es decir, salvo rechazo expreso.

⁵⁹⁹ El Decreto 2889 del 26 de noviembre de 2004, reglamenta parcialmente a la ley 12256. Al crear en cada establecimiento penitenciario un “Grupo de Admisión y Seguimiento” prevé que esté integrado, entre otros muchos, por el “*capellán o representantes de otros cultos*”, quienes “*ponderarán la necesidad de asistencia espiritual a los internos*” (art.1º inc. k). La Ley 8183 los agrupa en el “Subescalafón Clero” dentro del “Escalafón profesional”.

⁶⁰⁰ No se trata de que haya muchos evangélicos delincuentes, cabe aclarar, sino de que en virtud del intenso trabajo proselitista hecho dentro de las cárceles, muchos reclusos anteriormente católicos nominales, se convierten al credo evangélico, lo que determina que la población carcelaria tenga un componente de ese credo muy superior al de la población en general.

⁶⁰¹ Ver “El avance de los evangélicos en las cárceles bonaerenses” y “Una cárcel que parece una iglesia” en diario Página 12, edición del 14 de marzo de 2004.

orientación penitenciaria, esperando el momento de poder contar con un cuerpo de capellanes propio reconocido por el Estado.

En la provincia de **San Luis**, a imagen del régimen nacional, la ley provincial 5664 organiza el sistema penitenciario provincial. Uno de los escalafones del personal penitenciario es el Profesional, que cuenta con un sub-escalafón Clero, que *“comprende a los Capellanes y Religiosos afectados a los servicios de asistencia espiritual”* (art.12, Inc. III.A. f)). Para el ingreso en ese sub-escalafón, además de las condiciones generales,

“se solicitará a la autoridad eclesiástica pertinente, la presentación de los candidatos”.

En la provincia de **San Juan**, el servicio penitenciario provincial está regido por la ley 7453⁶⁰², que atribuye competencia a la Dirección de Personal en la aplicación y fiscalización del régimen de “servicio religioso” (art.38). También aquí, el personal penitenciario se reparte en los cuatro escalafones habituales, y dentro del Profesional, existe el Sub-escalafón Clero, que

“comprende a los capellanes afectados a los servicios de asistencia espiritual” (art.61).

En esta provincia, como requisito específico de ingreso a este sub escalafón, se prevé que

“se solicitará a la autoridad eclesiástica la presentación de una terna de candidatos, entre los que el Jefe del Servicio Penitenciario Provincial efectuará la correspondiente designación” (Art. 84).

También la ley prevé que los capellanes integrarán, con otros profesionales, el Gabinete Técnico Criminológico, que debe hacer un seguimiento de cada interno para recomendar su incorporación a las distintas fases del tratamiento progresivo que cada uno requiera (art.44).

En la provincia de **Santa Fe** el servicio penitenciario provincial está organizado por la ley 8183, del año 1978, que también cuenta con los cuatro escalafones habituales, y dentro del Profesional, existe el Sub-escalafón Clero, que

“comprende a los capellanes afectados a los servicios de asistencia espiritual” (art.17).

⁶⁰² BO 26/1/2004, ADLA LXIV-B-2617.

El grado máximo que pueden alcanzar los capellanes, es el de Adjutor (art. 25), y son solamente sacerdotes católicos. Los ministros de otros cultos, pueden acceder a las unidades carcelarias acreditando su condición de tales.

En **Tucumán**, según el Decreto 2207/88⁶⁰³ (arts.91, 92 y 93),

“los internos procesados que profesan la religión católica, apostólica romana, serán asistidos por el capellán de la unidad, quien atenderá a los internos que profesen otras creencias si lo solicitaren” pero “los internos procesados que hubieran manifestado pertenecer a una religión o culto distinto del católico apostólico romano podrán recibir asistencia espiritual y religiosa por medio de representantes de los cultos autorizados”, quienes “deberán acreditar su calidad a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y realizar la gestión por vía de la División Asistencia Espiritual. Determinarán el cometido y alcance de su misión. No se le permitirá el ingreso a los sectores de alojamiento, ni el contacto con los internos pertenecientes a otros cultos”.

Si bien -como corresponde a una legislación moderna en la materia- se reconoce el derecho de los internos a recibir asistencia de los ministros de culto de su preferencia, hay una distinción clara entre los ministros católicos y los demás, no solamente porque aquellos integran en forma estable el personal penitenciario, sino porque mientras el ministro católico también puede asistir a los fieles de otras confesiones que lo soliciten, el no católico lo tiene prohibido. Es una norma que seguramente mira a evitar el proselitismo indebido, pero que puede reputarse excesiva en su rigor. Una norma curiosa en el mismo decreto, es la que incluye al capellán (católico) en el equipo interdisciplinario que tiene a su cargo el tratamiento especial a los internos fármaco-dependientes (art.104).

En **Mendoza**, que inicialmente había adherido a la ley nacional 24660⁶⁰⁴, rige un moderno Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad⁶⁰⁵ que da cumplimiento a las exigencias de esa ley federal, y de las

⁶⁰³ Del 18/10/88, BO 4/11/88.

⁶⁰⁴ Ley 6513, BO 25/9/97. Derogada por Ley 8465 (BO 17.10.2012, ADLA LXXII-E-4776), art.271.

⁶⁰⁵ Ley 8465, citada en nota previa.

normas internacionales de derechos humanos. Expresamente determina que la normas de ejecución penal sean aplicadas

“sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de [...] religión” (art.10).

Los capellanes integran el servicio penitenciario provincial, donde el escalafón profesional y administrativo incluye un subescalafón clero, que *“comprende a los capellanes afectados a los servicios de asistencia espiritual”*⁶⁰⁶, que según la ley serán seleccionados *“mediante concurso de antecedentes y oposición”* (art.28). Pero ese cuerpo no está compuesto sólo por capellanes católicos.

Esta provincia es probablemente la que ha legislado con mayor cuidado en esta materia. Por medio de la ley provincial 7846⁶⁰⁷, ha implementado

“un programa destinado a garantizar el derecho de los internos en relación a su libertad de conciencia y de religión, facilitando la atención espiritual que requiera” (sic).

Para ello, la provincia creó una “Capellanía Mayor” (art.2)⁶⁰⁸,

“a cargo de un Capellán Mayor designado por el Obispo Diocesano [católico], que depende “operativa y administrativamente de la Dirección General del Sistema Penitenciario y eclesiásticamente de la autoridad respectiva”.

A su vez, en cada unidad penitenciaria existe un Capellán Auxiliar con estado penitenciario y propuesto por el Capellán Mayor, y un “cuerpo de voluntarios” dependiente de él. Pero estos capellanes auxiliares pueden ser tanto católicos como no católicos⁶⁰⁹, según prevé expresamente la norma (art.9). En ese último caso, para ser nombrados deberán acreditar

⁶⁰⁶ Ley 7493, BO 21/4/2006, art.19 (ADLA LXVI-B-2067), modificada –no en este punto– por la ley 7608.

⁶⁰⁷ BO 16/4/2008, ADLA LXVIII-B-2000.

⁶⁰⁸ El superior inmediato del Capellán Mayor es el Subdirector General (Decreto 1478/09, art.7. BO 23/7/09, ADLA LXIX-D-382).

⁶⁰⁹ Pertenecientes a una institución que cuente con “número de fichero de Culto” (aparentemente, referencia al Registro Nacional de Cultos, antiguamente denominado de ese modo). La reglamentación (Decreto 1478/09) aclara que el Capellán Mayor tiene grado de Alcaide Mayor (art.3), y los capellanes auxiliares deben ser oficiales con grado al momento de su nombramiento de alcaide o subalcaide (art.26).

“misión o estudios teológicos en nivel terciario o acreditación de competencia emitida por autoridad religiosa regional, nacional o internacional que –por nombramiento explícito- le asigne la tarea pastoral en Penitenciaría”.

Los capellanes, encargados de la asistencia espiritual tanto de los internos como del personal penitenciario (art.5) deben (art.4)

“desarrollar el trabajo ecuménico, garantizando la tarea religiosa de todas las confesiones en el respeto y cooperación excluyendo todo proselitismo y denigración de los demás”

Esos capellanes integran en cada unidad un “Consejo Ecuménico Pastoral con los pastores o ministros religiosos que estén asignados en dicha unidad” atendiendo a todos los cultos que se profesen en ella (art.10), pudiendo “solicitar la cooperación de sacerdotes, diáconos o ministros religiosos de otros cultos” (art.12). Son también los encargados de autorizar el ingreso de “voluntarios de los distintos credos” (art.14).

Los capellanes tienen reconocido en Mendoza el derecho a que las autoridades penitenciarias les faciliten “el cumplimiento de sus obligaciones sacerdotales a tenor de las reglas del Derecho Canónico de la Iglesia Católica y/u obligaciones ministeriales de otros credos” (art.6), y a contar “en cada unidad penitenciaria [con] un lugar adecuado para las celebraciones religiosas de todos los credos, u oficina”⁶¹⁰ para su labor administrativa (art.7) y personal administrativo a su disposición (art.8). A los capellanes les corresponde “la instrucción religiosa y moral y la orientación espiritual de los internos”⁶¹¹.

En **Salta**, en cambio, el Consejo Correccional de las unidades carcelarias no es integrado de pleno derecho por el capellán, pero el consejo

“puede convocar a sus asambleas, a título de miembro informante y sin derecho a voto, a [... un] representante de la religión a la que pertenece el interno”⁶¹².

⁶¹⁰ La ley 8465 prevé que “En cada establecimiento se habilitará un local adecuado para celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos.” (art.169), y que “En todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico, en forma adecuada a las posibilidades edilicias de que disponga. La concurrencia a estos actos será absolutamente voluntaria” (art.170).

⁶¹¹ Art.171 de la ley 8465, que aclara “incluso de los no católicos que la aceptaren”, olvidando que los capellanes ya no son sólo católicos.

⁶¹² Decreto 3075/98, BO 9/10/98, art.6.

Como se dijo antes, **Córdoba** ha adherido a la ley nacional (por ley 8878). El reglamento carcelario⁶¹³ remite a ella en lo referido a la asistencia espiritual de los encausados (art.44), y agrega que

"El capellán del establecimiento tendrá a su cargo la instrucción religiosa y moral así como la orientación espiritual de los encausados que lo requieran" (art.45).

El Decreto 344/88⁶¹⁴, ha aprobado sendos reglamentos de Disciplina y de Comunicaciones de los internos. El primer de ellos prevé la sanción de "aislamiento" (art.20), pero aún en ese caso, dispone que

"el interno será visitado diariamente... si lo solicitara, por el capellán o representante de un culto reconocido por el Estado".

Mientras tanto, el Reglamento de Comunicaciones (arts.56 y 57) dispone:

"El interno tiene derecho a recibir asistencia espiritual mediante la visita de miembros de la Iglesia Católica Apostólica romana, si esta fuere su religión, o de representantes del credo que profese, reconocido e inscripto en el Registro Nacional de Cultos. Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este derecho"

*"Para acceder a la visita se debe acreditar la identidad y el carácter que se invoca mediante: a) Comprobante extendido por la correspondiente autoridad eclesiástica para los miembros de la religión Católica Apostólica Romana; b) Comprobante extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para los representantes de otros credos"*⁶¹⁵.

Por su parte, la ley orgánica provincial del Servicio Penitenciario⁶¹⁶, prevé la existencia de "personal de religiosas", exceptuadas del régimen ordinario de ingreso, estabilidad y ascensos, que puede

⁶¹³ Aprobado por Decreto 3591/87 (BO 13/7/87).

⁶¹⁴ BO 22/5/88.

⁶¹⁵ Es de notar que no se habla en las normas de ministros de culto, sino de "representantes" de los credos, que podrán estar o no investidos de esa calidad; aunque razonablemente puede suponerse que en general tales representantes serán ministros religiosos. La otra nota llamativa (explicable por razones históricas y sociales) es la diferencia entre los "representantes" o ministros católicos, que son identificados como tales por la propia autoridad eclesiástica, y los de otros credos, cuya acreditación se requiere a la autoridad estatal (pero que por su parte debería estar a lo que las confesiones religiosas propongan).

⁶¹⁶ Ley 8231, BO 21/12/1992.

“ser designado en establecimientos carcelarios para mujeres. Este personal podrá ser nombrado, en forma directa, y con carácter accidental, en grados correspondientes a las funciones a ejercer y al nivel del establecimiento, en los que cesarán automáticamente al producirse su relevo, ello sin perjuicio de los beneficios previsionales que, en su caso, pudieran corresponderles” (art.121).

Entre los distintos Cuerpos y Escalafones (anexo III) prevé, en el cuerpo profesional, el “escalafón clero”, integrado por “sacerdotes” (sin otra especificación).

En **Tierra del Fuego**, la ley orgánica del Servicio Penitenciario⁶¹⁷ supone la existencia de un capellán, presumiblemente un sacerdote católico, a quien encomienda visitar diariamente a los reclusos en régimen de aislamiento (art.38), pero también autoriza a los internos a

“solicitar la asistencia de representantes de su culto, los que deberán pertenecer a cultos reconocidos oficialmente” (art.64).

En **Río Negro**, la ley⁶¹⁸, que reconoce a los internos y encausados el derecho a la “asistencia espiritual” (art.29), sin establecer privilegio para ninguna confesión religiosa en particular ni designar concretamente capellanes se limita a prever que

“los establecimientos deberán contar, al menos, con ... asistencia espiritual a cargo de los representantes de los cultos reconocidos” (art.30),.

El decreto reglamentario⁶¹⁹ prevé que

“El interno tiene derecho a recibir asistencia espiritual mediante la visita de miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, si ésta fuere su religión, o de representantes del credo que profese, reconocido e inscripto en el Registro Nacional de Cultos. Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este derecho” (art.58).

Es de señalar que no alude específicamente a sacerdotes o ministros de culto católicos, sino a “miembros” de la Iglesia, aunque

⁶¹⁷ Ley 192, BO 21/12/94.

⁶¹⁸ Ley 3008, promulgada el 6/8/96 por Decreto 1213/96.

⁶¹⁹ Decreto 1634/2004, BO 27/1/2005.

muchas veces ellos serán efectivamente ministros de culto. Como es habitual, la condición de tales es acreditada por los católicos mediante comprobante extendido por la autoridad eclesiástica, y los no católicos por comprobante suministrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (art.59).

En **Formosa** se ha previsto que la pena privativa de la libertad sea cumplida en cárceles o en alcaidías policiales⁶²⁰. En cada una de ellas debe existir un consejo correccional integrado, entre otros, por el “jefe de asistencia espiritual”, con voz y voto, que es un sacerdote católico, pero

“cuando el interno no profesare el Culto Católico Apostólico Romano se invitará a emitir opinión fundada al ministro de su respectivo culto autorizado y que lo asiste en forma habitual” (art.38 del Reglamento de Organización Interna de las Alcaidías Provinciales).

La Sección Asistencia Espiritual, contará con

“un capellán policial, quien tendrá a su cargo la instrucción religiosa y moral, como también la orientación espiritual de los internos, inclusive los no católicos que la aceptaren. En ausencia de éste, se podrá satisfacer dicha necesidad con un sacerdote del lugar. Previa consulta con el director de la Alcaidía, se autorizará el ingreso de representantes de otros credos, siempre que se encontraren reconocidos e inscriptos en el Registro nacional de Cultos” (art.56).

Los capellanes tienen también a su cargo la celebración del culto católico, de asistencia voluntaria (art. 67, Reglamento del régimen para procesados), así como *“la instrucción religiosa y moral y la ordenación (sic) espiritual de los internos, incluso de los no católicos que la aceptaren”* (art.68); pero en las alcaidías debe disponerse de un local adecuado para celebraciones y reuniones religiosas *“de los diversos cultos reconocidos”* (art.66). El representante del credo religioso profesado por el interno, deberá ser avisado del grave estado de salud o el fallecimiento de esa persona (art.83). Normas análogas existen en el Reglamento para condenados aprobado por el mismo decreto (artículos 125, 127, 128, 129 y 141).

Para acceder a las alcaidías policiales, en visitas semanales de dos horas de duración (art.83 del Reglamento de Disciplina para

⁶²⁰ Decreto 629/99, BO 23/8/99.

internos en alcaidías policiales), los ministros de culto deben acreditar su identidad con

“comprobante extendido por la autoridad eclesiástica para los miembros de la Religión Católica Apostólica Romana” o con “comprobante extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para los representantes de otros credos” (art.83).

También se debe dar aviso a ellos del fallecimiento o enfermedad o accidente grave de los internos a los que asisten (art.96).

En **Catamarca** las normas del decreto provincial que aprueba el régimen penitenciario⁶²¹, están prácticamente copiadas de la ley nacional. Para su ejecución se prevé que cada establecimiento penitenciario deberá contar obligatoriamente con un *“capellán, nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento”* (art. 97 inc.f), con las funciones habituales para estos casos.

En **Entre Ríos**, el Escalafón Profesional del Servicio Penitenciario de la provincia incluye un “subescalafón clero”, que *“comprende a los Capellanes afectados a los servicios de asistencia espiritual”*⁶²². La ley no requiere que sean católicos, ni aclara si están al servicio de personal penitenciario, de los internos, o de ambos.

Misiones ha creado un “Programa de Seguridad Humana Integral, destinado a la asistencia integral de personas privadas de su libertad, cualquiera fuese su situación procesal, sean mayores o menores”, que comprende el área de “espiritualidad”, entre otras⁶²³. El programa

“se implementará de manera permanente en el contexto de encierro”, entendido como el “que se desarrolla en todo establecimiento carcelario, hospitalario o lugares donde se cumplan arrestos destinados a personas privadas de su libertad” (art.2).

Uno de sus objetivos es *“garantizar el derecho a la atención espiritual”* (art.3); y para eso dispone que *“los establecimientos deben contar con lugares adecuados para celebraciones religiosas de todos los credos y una oficina de Administración de Capellanía”* (art.4), dotada de personal con preparación adecuada (art.13).

⁶²¹ Decreto 537/94, BO 22/4/94.

⁶²² Ley 5797, BO 15/1/76.

⁶²³ Ley XVIII Nº 35, ADLA LXXII-E-4817.

La misma ley, crea

“la Capellanía Mayor en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, con rango superior penitenciario, la que estará a cargo de dos Capellanes Mayores, uno designado por el Obispo Diocesano⁶²⁴, representando a la fe católica, y otro por el Consejo Pastoral representando a la fe evangélica”.

Estos capellanes mayores tienen una doble dependencia: administrativa y funcional de la autoridad pública, y eclesiástica “de su autoridad respectiva”. La ley prevé que *“en adelante se debe propiciar capellanías de otros credos”* (art.8).

En cada unidad penitenciaria se designa un capellán auxiliar católico y otro “por la fe evangélica”, *“quienes trabajarán de manera conjunta con la pastoral que asiste a los internos en calidad de voluntarios”* (sic, Art.9), cuya admisión (de los voluntarios) y remoción será resuelta por los capellanes junto con la autoridad administrativa.

Los capellanes son nombrados por la autoridad administrativa, y se requiere que tengan

“formación teológica en nivel terciario y acreditación de competencia emitida por autoridad religiosa provincial, regional, nacional o internacional; la acreditación de competencia deberá ser remitida por institución registrada en el Registro Nacional de Cultos”⁶²⁵ (art.10).

Los capellanes mayores y auxiliares deben dirigir su acción tanto a los internos como al personal de las unidades penitenciarias (art.12).

Cabe entender que este régimen modifica a la anterior ley de ejecución penal de la misma provincia de Misiones⁶²⁶, que dispone que en los establecimientos destinados a la ejecución de penas privativas de la libertad, haya un *“servicio espiritual, que estará a cargo de un capellán, nombrado por el*

⁶²⁴ Habrá que presumir que se hace referencia al obispo de la ciudad capital –Posadas-, porque en la provincia hay tres sedes episcopales católicas de rito latino, además de una importante presencia de la eparquía greco-católica de rito ucranio.

⁶²⁵ Así, la ley cae en el error frecuente de remitir genéricamente al Registro Nacional de Cultos, que no tiene ninguna competencia respecto de la Iglesia Católica. Debería haber definido qué autoridad de la Iglesia Católica acredita la competencia de los capellanes de ese credo, que debería ser el obispo del lugar del establecimiento de que se trata.

⁶²⁶ Ley 3595, BO 24/9/99.

Estado o adscripto honorariamente al establecimiento” (art.10), a cargo de un sacerdote católico encargado de celebrar el culto (al que la asistencia es libre, art.122) y de la instrucción religiosa, incluso de los no católicos que la acepten (art.124).

También **Chaco** ha establecido un Programa de Asistencia Integral para personas privadas de libertad, por medio de la Ley 6904⁶²⁷, que tiene entre sus objetivos garantizar la atención espiritual (art.3 inc.c). Para eso crea dentro del sistema penitenciario provincial

“una Capellanía Mayor, la que estará a cargo de un Capellán Mayor propuesto por el Obispo Arquidiocesano en caso de representar a la fe católica⁶²⁸ o por el Consejo Pastoral si representara a la fe evangélica”.

A diferencia de Misiones (donde hay dos capellanes mayores, uno católico y otro evangélico), aquí hay uno sólo, que puede ser de una u otra confesión.

“La autoridad penitenciaria designará Capellanes Auxiliares por la fe católica y evangélica, en cada unidad penitenciaria y trabajarán de manera conjunta con la pastoral que asiste a los internos en calidad de voluntarios” (art.6). “Para el nombramiento de Capellanes se requerirá que acrediten formación teológica y capacitación en la materia, emitida por autoridad religiosa de institución registrada en el Registro Nacional de Cultos” (art.7).

Los destinatarios de su acción son los internos, sus familias, y el personal penitenciario (art.10); y también los liberados (art.12). Las reglas que la ley impone a los capellanes incluyen la “consejería familiar” (art.12), y (art.8)

“Garantizar la asistencia espiritual y moral en un marco de respeto y cooperación excluyendo todo proselitismo y denigración de las demás religiones”, “La atención y el acompañamiento permanente del interno/a, aun cuando estuviere bajo sanción disciplinaria” y la “Mediación permanente entre internos/as y miembros del sistema penitenciario”

⁶²⁷ BO 2/1/12, ADLA LXXII-A-900.

⁶²⁸ Hay que notar que en la provincia del Chaco hay una arquidiócesis (Resistencia) y una diócesis (San Roque. Por alguna razón el legislador ha otorgado al arzobispo de Resistencia la representación de toda la Iglesia Católica en la provincia, lo que representa una intromisión inadmisible en su organización interna.

Es muy interesante la función de mediación asignada, porque a diferencia del lugar que muchas veces ha ocupado el capellán como un oficial más del cuerpo penitenciario⁶²⁹, se lo coloca en un rol equidistante entre los presos y los guardias, ciertamente más apropiado a su naturaleza.

La provincia de **Chubut** se ha ocupado especialmente de los menores. Su ley de protección de la niñez, adolescencia y familia⁶³⁰, como otras similares en otras provincias, reconoce a niños y adolescentes el derecho de "*pensar, creer y profesar cultos religiosos*" (art.16) pero añade que

"Las entidades del Estado y las organizaciones civiles que desarrollen programas o servicios de atención, y en especial aquellas que alberguen a niños y adolescentes, deberán ... asegurar asistencia religiosa a aquellos que lo deseen, de acuerdo a sus creencias" (art.54)⁶³¹.

Y especialmente en caso de menores privados de libertad, un anexo de esa ley, entre otras disposiciones, prevé (art.48):

*"Deberá autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones religiosas y satisfacer sus necesidades espirituales, permitiéndosele participar en los servicios o reuniones organizados en el establecimiento o celebrar sus propios servicios... Si en el centro de detención hay un número suficiente de menores que profesan una determinada religión, deberán nombrarse o admitirse a uno o más representantes autorizados de este culto que estarán autorizados para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar visitas pastorales particulares a los menores de su religión, previa solicitud de ellos. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas de un representante calificado de cualquier religión de su elección..."*⁶³².

⁶²⁹ La ley 6117 (BO 11/8/08) de la misma provincia del Chaco, incluye dentro del Servicio Penitenciario provincial (que es una fuerza policial) a la Dirección de Readaptación Social, que abarca el departamento de Asistencia Espiritual (art.18).

⁶³⁰ Ley 4347 (BO 5/1/98).

⁶³¹ El Decreto 191/2007 (BO 8/3/07, ADLA LXVII-B-2037), insiste en que los niños y adolescentes internados en hogares -no necesariamente de índole penal o penitenciaria- deberán tener garantizada la "*asistencia religiosa de acuerdo a sus creencias*".

⁶³² La misma regla, que está tomada de una recomendación de las Naciones Unidas, ha sido adoptada también por la provincia de **Misiones** en su ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 3820, BO 27/3/2002, Anexo).

La provincia de **La Rioja** se ha limitado a adherir a la ley nacional, y a establecer⁶³³ que

"la población penal tendrá derecho a la asistencia espiritual sin discriminar credo ni religión".

10.3 Bomberos voluntarios

Un caso particular y que no está previsto en la legislación argentina, pero sí existe en la realidad, es el de las capellanías de los cuerpos de bomberos voluntarios.

Estas son asociaciones privadas pero constituidas en un claro interés público, por lo que reciben un reconocimiento y apoyo económico de parte del Estado. Por el inestimable servicio que prestan, normalmente gozan de un alto prestigio en la comunidad. La actividad está regida por varias leyes, en particular la ley 25.054⁶³⁴.

Es frecuente que los cuerpos de bomberos voluntarios cuenten con capellanes, que en la Argentina normalmente son sacerdotes católicos. Eventualmente este servicio lo prestan quienes también son capellanes policiales⁶³⁵. La ley mencionada, no hace referencia a ellos.

Fuera de la Argentina, se ha hecho célebre el caso del capellán católico de los bomberos de New York, padre Mychal Jade, quien falleció el 11 de septiembre de 2001 al desplomarse la segunda de las torres del World Trade Center mientras estaba dando la extremaunción a otra de las víctimas del atentado⁶³⁶.

⁶³³ Decreto 624/98 (BO 20/11/98).

⁶³⁴ Del año 1998 (BO 16/12/1998), reformada en 2014 por ley 26987.

⁶³⁵ Como nota pintoresca, el 11 de junio de 2008 las noticias daban cuenta del exorcismo del cuartel de bomberos de Jujuy, por parte del capellán policial local, por la presunta existencia de "fantasmas" en ese lugar (http://pan.starmedia.com/noticias/html/247044_print.html). Menos llamativa es la noticia de la bendición de objetos por parte del capellán de los bomberos voluntarios de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires (<http://www.sanisidro.gov.ar/es/nota.vcn?id=2384>).

⁶³⁶ De este capellán, se pretende incluso promover la beatificación (<http://www.periodistadigital.com/religion/object.php?o=796>).

10.4 Lugares de enseñanza

En algunas ocasiones se ha asimilado a los supuestos de "especial sujeción", a la situación en que se encuentran los alumnos de establecimientos educativos.

Obviamente, todo lo referido a la enseñanza de la religión en el sistema escolar formal es un tema de enormes proporciones, que no podemos abordar acá ni siquiera en sus aspectos más elementales⁶³⁷.

Baste decir que en la Argentina, la educación escolar es competencia primordialmente de las provincias, y que en el marco de la organización federal cada una de ellas puede decidir si en los planes educativos se incluye la enseñanza de la religión y, en tal caso, con qué alcance y requisitos. Todas las provincias reconocen ampliamente la libertad de enseñanza en el sentido de posibilitar que las distintas confesiones religiosas y los particulares puedan organizar y dirigir sus propias escuelas con reconocimiento oficial y plenamente equiparadas a las estatales, pero la mayor parte de ellas han optado por dejar la enseñanza religiosa fuera de la educación escolar de gestión estatal.

Así las cosas, no hay en general previsiones legales actuales acerca de la participación de ministros de culto en la enseñanza escolar.

Sin embargo, es necesario traer a colación una de las leyes más citadas y emblemáticas de la Argentina, la ley 1420, conocida como "ley de enseñanza laica", a pesar de que su texto no menciona a la laicidad⁶³⁸.

En el año 1880, la Ciudad de Buenos Aires, que hasta ese momento era parte y capital de la provincia homónima, fue federalizada y convertida en Capital Federal. Sus escuelas, que hasta ese momento estaban naturalmente dirigidas por el gobierno de la provincia, requirieron un nuevo marco legal, y de ese modo el Congreso (en su rol de legislatura local para la Capital Federal) dictó la famosa ley 1420⁶³⁹, en principio con ese reducido

⁶³⁷ Sobre esta cuestión en general, y con un capítulo referido a la Argentina en particular (y otro a América Latina), ver DAVIS, Derek y MIROSHNIKOVA, Elena (editors), "The Routledge International Handbook of Religious Education", Routledge, New York, 2013.

⁶³⁸ La ley sólo dice que "*La instrucción primaria, debe ser "obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de higiene"* (art.2). Sobre el debate de esta ley, en particular en relación al tema de la enseñanza religiosa, ver TAUSSIG, Eduardo María, "Ley 1420 y libertad de conciencia", Ágape, Buenos Aires, 2006.

⁶³⁹ La ley fue aprobada el 26 de junio de 1884 y recogió muchos de los resultados del Congreso Pedagógico Nacional celebrado poco antes, donde tras un duro enfrentamiento el grupo liberal prevaleció sobre el grupo católico.

alcance geográfico. Sin embargo, con el tiempo y por diversas razones, el Estado Nacional comenzó a abrir y dirigir escuelas en las provincias⁶⁴⁰, y también en los entonces vastos “territorios nacionales” (zonas del país que recién se constituyeron con provincias décadas después, en particular toda la Patagonia y buena parte del Noreste nacional, que al tiempo de la independencia eran “tierras de indios” donde los españoles nunca llegaron a establecerse). De ese modo, la ley 1420 fue ampliamente aplicada a lo largo de todo el país.

Hasta su aprobación, y aún después de ella, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires se impartía enseñanza religiosa (católica) a cargo de los maestros. La ley 1420 no eliminó esa enseñanza, como erróneamente se cree en forma generalizada, sino que dispuso en su art.8:

“La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase.”

Se trata, probablemente, de la primera vez que en una ley nacional argentina se habló genéricamente de “ministros de culto”, y de ahí la relevancia para este estudio.

Esa previsión legal llevó de hecho a que la enseñanza religiosa (que ya no era obligatoria ni se podía dictar dentro del horario normal de clases) desapareciese de las escuelas estatales de la ciudad, y luego de las que en el interior del país quedaron regidas por la ley. No por estar prohibida, sino precisamente por estar autorizada únicamente a cargo de los ministros de culto. Ellos no eran tan numerosos como para poder hacerse cargo personalmente de la enseñanza en todas las escuelas.

La Ley 1420, por su naturaleza de ley local de la Capital, perdió vigencia cuando, luego de la autonomía alcanzada por la Ciudad de Buenos Aires en el año 1994, ella dictó su propia ley de educación⁶⁴¹. Y en lo que pudiera considerarse “nacional” de aquella ley, con el dictado de la Ley Federal

⁶⁴⁰ La ley 2737 del año 1890, conocida como “Ley Laínez”, impulsó la construcción de escuelas financiadas y dirigidas por el Gobierno nacional en lugares donde no había suficientes escuelas provinciales.

⁶⁴¹ Ley 898, del año 2002. Cabe señalar que la propia Constitución o Estatuto Fundamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, define en forma expresa que la enseñanza brindada en las escuelas públicas de gestión estatal debe ser “laica”, sin perjuicio de la existencia de escuelas de gestión privada que pueden tener orientación religiosa y recibir aportes del Estado para su funcionamiento (art. 24).

de Educación⁶⁴² que ocupó en todo caso su lugar. Por ese motivo, el Digesto Jurídico Argentino, con toda razón, declaró a la célebre ley 1420 como “no vigente”. Sin embargo, eso motivó una serie de quejas y de planteos de quienes la siguen sosteniendo como bandera de la “enseñanza laica”, a pesar de que como vimos ese término no aparece en ella.

En caso de darse la razón a quienes sostienen ese equívoco, se produciría una interesante paradoja, ya que reviviría el derecho de los ministros de culto a impartir enseñanza religiosa en las escuelas públicas a los niños cuyos padres lo deseen, fuera del horario escolar. Situación que por otra parte contaría hoy con un sólido apoyo en los tratados internacionales de derechos humanos, que reconocen claramente el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas (mandato que hoy en día la Argentina incumple, o cumple de modo deficiente)⁶⁴³.

⁶⁴² Ley 24.195 del año 1993 (BO 5/5/1993), hoy sustituida por la Ley Nacional de Educación, Ley 26206 del año 2006 (BO 28/12/2006).

⁶⁴³ El instrumento más importante de ese sistema es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969. El pacto dedica un artículo (el 12º) a garantizar el derecho a la “*libertad de conciencia y de religión*”, en términos muy semejantes al art.18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966. Ese artículo, además de enunciar como uno de los contenidos de la libertad religiosa que deben ser garantizados a la libertad de “divulgar” la religión y las creencias individual o colectivamente, dedica un párrafo a la educación diciendo: “4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Ese Pacto fue complementado en noviembre de 1988 por un Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, que establece que “4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos [...]”; y que “5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art.18.4). El artículo 13.3 del Pacto de Derechos Económicos y Sociales obliga a “respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Si bien el derecho a elegir una educación conforme a los valores de la familia debería poder ejercerse en cualquier escuela a la que asista un niño -incluso de gestión estatal-, la Argentina en general entiende cumplir su obligación permitiendo la existencia de escuelas confesionales, que puedan ser elegidas por los padres.

Es de notar que la ley 1420 hablaba de “ministros de cualquier culto” (aunque ciertamente sus autores tenían en mente a los católicos), lo que constituye una decisión innovadora para la época.

10.5 Conclusiones

Nuevamente en estas áreas del Derecho Administrativo nos enfrentamos a una enorme dispersión normativa, propia del régimen federal argentino. Sin embargo, el sobrevuelo de ese mosaico de disposiciones legales permite entrever algunas conclusiones.

El modelo tradicional, tanto para cárceles como para hospitales, ha sido en la Argentina la presencia institucional de un capellán católico mediante el sistema de integración orgánica. En las cárceles el capellán era (o sigue siendo) un oficial más del servicio penitenciario, y en los hospitales un funcionario jerárquico de ellos.

En esos casos, las normas habitualmente prevén un sistema de ingreso diferencial para los capellanes respecto del resto de los funcionarios penitenciarios u hospitalarios. Por una parte no están sometidos a algunas de las normas generales, y por otra, su designación por parte de la autoridad administrativa requiere de una presentación previa y aval de la autoridad eclesiástica, normalmente el obispo local. La posterior eventual pérdida de ese aval, determina normalmente la cesantía del capellán en cuestión.

Las normas más antiguas, atribuyen muchas veces a los capellanes católicos una suerte de supervisión, o "permiso de entrada", respecto de los ministros de otros credos. Ellos no forman parte del organigrama del establecimiento, pero se les concede el acceso para atender a sus propios fieles. A veces, con una expresa prohibición de realizar proselitismo o dirigirse a fieles de otras confesiones (mientras que a los capellanes católicos, se les encomendaba no solamente atender a los miembros de su grey, sino a cualquier otro que lo aceptase).

En cambio, en muchas de las normas más recientes se advierte la influencia de dos elementos novedosos, uno de hecho y otro si se quiere de derecho, o al menos de sensibilidad jurídica:

a) por una parte, la inocultable presencia de una población tanto hospitalaria como especialmente carcelaria, no católica. Cada vez más y en mayor número esa población requiere asistencia religiosa de sus propios ministros de culto. Esto obedece tanto a la mayor diversificación religiosa en el seno de la sociedad, como en el caso específico de las cárceles, a un trabajo deliberado, sistemático y eficaz de las iglesias evangélicas de trabajo proselitista entre los internos; y

b) por otra parte, el cambio de paradigma por el que se pasa de una cuasi confesionalidad del Estado, a una laicidad más acentuada y, en ese marco, a una creciente valoración de la libertad religiosa de las personas. Ya no se trata tanto de facilitar a la Iglesia mayoritaria la atención de sus fieles presos o internados en hospitales, sino de facilitar a esas personas el ejercicio de su libertad religiosa mediante el contacto sin trabas con los ministros religiosos de su propia fe. Quienes por lo tanto asumen un nuevo protagonismo, a menos compartido con el capellán católico, sino sustitutivo de él en algunos casos.

Estos cambios determinan una incipiente articulación de formas de integración orgánica de capellanes o ministros de culto no católicos, en paridad de condiciones con los católicos o cerca de ella. Esto ya es una realidad en algunas provincias, y parece ser una tendencia en aumento. Pero que al mismo tiempo presenta nuevos desafíos.

En efecto, en el caso de la Iglesia Católica es relativamente sencillo identificar a quien tiene la facultad de nominar a los capellanes: el obispo local. En el caso de las otras confesiones, y especialmente de las iglesias evangélicas que presentan una fragmentación casi infinita, ¿quién cumple ese rol? A veces se alude a "consejos de pastores". Otras veces, es el propio Estado, con el riesgo de arbitrariedad ínsito en esa atribución.

Generalmente hay al menos un primer "filtro": los capellanes que van a ser designados (y cuando no se llega a eso, los ministros de culto que van a ser autorizados a ingresar) deben contar con alguna acreditación emanada del Registro Nacional de Cultos. A veces se lo menciona en forma clara, a veces hay una alusión más ambigua a "cultos autorizados", o "cultos reconocidos". Cabe preguntarse sin embargo qué ocurrirá si, como es de prever, en algún momento se sustituye el régimen hoy vigente en la Argentina de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Cultos -que es de dudosa constitucionalidad, al sujetar el ejercicio de un derecho fundamental a una autorización administrativa- por otro de inscripción voluntaria o facultativa.

En todo caso, en esta materia en particular también se aprecia una interesante evolución hacia la conformación de un concepto genérico de "ministro de culto" o ministro religioso, que es indispensable para organizar un sistema de asistencia religiosa en cárceles o cuarteles que sea mínimamente respetuoso de la libertad religiosa, tal como es demandado por los tratados internacionales con jerarquía constitucional y, en última instancia, por la dignidad humana de los destinatarios de tal asistencia.

El análisis de la normativa tanto federal como provincial muestra que hasta ahora la principal cuestión ha sido el hecho mismo de la existencia de ministros de culto disponibles para presta asistencia religiosa en ámbitos de especial sujeción. En cambio, no hay todavía ni en las leyes y en la jurisprudencia desarrollos acerca del contenido mismo de esa asistencia, y de ciertos límites que podrían imponerse (por ejemplo, la vigilancia o escucha de las comunicaciones entre los presos y los ministros de culto que los asisten, con pretexto de razones de seguridad pública o investigación de posibles delitos, conducta que vulneraría el derecho al secreto ministerial y a la privacidad de las comunicaciones).

Capítulo 11. Los ministros de culto en relación a sus confesiones de pertenencia

Hasta aquí hemos pasado revista al modo en que diversas ramas del Derecho (civil, comercial, penal, laboral, previsional, fiscal, militar, administrativo) se refieren a los ministros de culto, y a lo que dicen de ellos.

En este capítulo procuraremos profundizar el modo en que el ordenamiento jurídico toma en consideración las relaciones entre los ministros de culto, y las confesiones religiosas a las que ellos pertenecen o sirven.

La naturaleza de esa relación es una cuestión extremadamente delicada y sobre la que posiblemente no puedan darse respuestas únicas que abarquen todos los supuestos, por la diversidad de estructuras y formas organizativas de las confesiones religiosas que apuntamos desde el comienzo.

Pero sí es necesario afirmar con carácter general, algo que ha sido ya insinuado más de una vez: que esta relación se desenvuelve en el marco de la indispensable autonomía de las confesiones religiosas. La selección, formación, designación y régimen de los ministros de culto pertenecen a esa esfera privativa de las propias confesiones, donde en principio no corresponde ninguna injerencia por parte del Estado. El principio de autonomía es uno de los principios cardinales del Derecho Eclesiástico, y es precisamente en relación con el tema que nos ocupa donde resplandece en toda su magnitud.

Ya la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981⁶⁴⁴, proclama entre los derechos derivados de la libertad religiosa (y que en rigor pertenecen a la dimensión colectiva de ésta, es decir, a las iglesias o comunidades religiosas), la libertad

"de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción" (art.6 inciso g).

La autonomía de las confesiones religiosas ha sido reconocida en el Derecho argentino en forma explícita a la Iglesia Católica. La

⁶⁴⁴ Resolución 36/1955.

proclama en forma expresa el Art. I del Acuerdo de 1966 entre la Santa Sede y la República Argentina. Adicionalmente, el Código Civil y Comercial reconoce a la Iglesia Católica como persona jurídica pública (art.146), y respecto de las personas jurídicas públicas dispone el art.147 que ellas

"se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución"

Pero lo dicho expresamente respecto de la Iglesia Católica, debe predicarse también de las restantes confesiones religiosas. Es una exigencia de la libertad religiosa reconocida constitucional e internacionalmente, y también de la igualdad.

Probablemente, una de las definiciones más relevantes que contienen los distintos proyectos de ley de libertad religiosa que se han venido discutiendo en Argentina, y que deberían cuajar en una ley aprobada en un futuro no lejano, es ésta: el reconocimiento de la autonomía de las confesiones religiosas.

Veamos de qué manera eso se concreta.

11.1 Selección y designación de ministros de culto

El primero y más evidente de los derechos de una iglesia o confesión religiosa en relación a sus ministros de culto es determinar quienes tienen esa calidad, establecer los requisitos para su acceso al ministerio, y designarlos libremente en ejercicio de su propia autonomía institucional. La contrapartida de este derecho es la obligación del Estado de abstenerse de intervenir en ese proceso de selección y designación, aunque veremos que no han faltado y no faltan intentos en contrario, violatorios de esa autonomía.

Precisamente y tal como se ha visto en el capítulo I, lo que en principio define quien es "ministro de culto" es su designación como tal por parte de la confesión o comunidad religiosa a la que pertenece, sin injerencia estatal en esa designación.

La libertad de designar los ministros de culto es una de las principales manifestaciones de la autonomía de las confesiones religiosas, y del ejercicio de la libertad religiosa colectiva⁶⁴⁵.

⁶⁴⁵ Ver sobre el tema, SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, Alex, "Autonomía confesional y designación de ministros de culto", en ADEE, vol. XXI (2005), p.106.

Ya el Concilio Vaticano II decía que

*"A las comunidades religiosas les compete igualmente el derecho de que no se les impida por medios legales o por acción administrativa de la autoridad civil la elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, la comunicación con las autoridades y comunidades religiosas que tienen su sede en otras partes del mundo"*⁶⁴⁶.

El concepto de autonomía de las confesiones religiosas es uno de los principios fundamentales en el Derecho Eclesiástico. Como explican DURHAM y MARTÍNEZ TORRÓN,

"Significativamente, la noción de autonomía religiosa antecede a las concepciones contemporáneas de los derechos. Es un aspecto clave de la idea, que el orden secular y el religioso están cualitativamente separados aunque sus esferas sociales se superpongan. La idea básica está implícita en la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, que los seres humanos deber "Dar al Cesar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios" (Mt.22-21). La idea de autonomía está implícita en la lucha por la independencia del papado en la tradición Católica romana, en la idea de la iglesia inconformista protestante, y en la moderna noción constitucional de separación de las instituciones de la iglesia y el Estado. En general, está vinculada con la idea -particularmente prominente en la tradición cristiana, pero evidente también en otras tradiciones- de que los asuntos espirituales y temporales están sujetos a jurisdicciones separadas"⁶⁴⁷.

La autonomía de las confesiones religiosas en la designación de sus ministros de culto tiene dos aspectos o momentos:

a) el derecho a establecer los requisitos para acceder al ministerio. Dentro de ellos, es lícito que una iglesia o comunidad religiosa requiera para sus ministros determinada edad, o formación previa, o que limite el ministerio o algunos de sus grados en función del sexo de la persona, o imponga condiciones tales como el compromiso del celibato o, a la inversa, la

⁶⁴⁶ *Dignitatis Humanae*, 4.

⁶⁴⁷ DURHAM, Cole y MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, "General Report", en "Religion and the Secular State: National Reports", Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2015, p.21.

exigencia del matrimonio previo, por ejemplo. Se trata de la determinación en abstracto de las condiciones para llegar a ser ministro de culto; y

b) la admisión o aceptación en concreto de la persona que aspira al ministerio, y el juicio acerca de su cumplimiento de las condiciones exigidas. Esto incluye la evaluación psicofísica de la persona, la apreciación de sus calidades morales o de la sinceridad de sus propósitos, el examen de sus conocimientos teológicos, etcétera. La regla es que nadie tiene derecho a acceder al ministerio religioso, en contra de la decisión de la autoridad o los cuerpos directivos de la iglesia o comunidad religiosa de que se trate.

No obstante la relevancia de esta libertad, el principio según el cual la designación de los ministros de culto corresponde a las propias confesiones religiosas no aparece de manera explícita hasta ahora en la legislación argentina, aunque sí ha sido implícitamente reconocido por la jurisprudencia, y es recordado de modo unánime por la doctrina, que afirma que la autonomía de las confesiones religiosas en la designación, traslado y remoción de sus ministros de culto, es un elemento esencial de la libertad religiosa.

Así se reconoció en un caso donde una persona reclamaba el “derecho” de actuar como pastor en una determinada comunidad, donde su padre había cumplido esa función⁶⁴⁸. El Tribunal recordó que

“la cuestión de la organización institucional, jerárquica, corresponde a la Iglesia en cuanto institución y por lo tanto la cuestión planteada por el amparista, no tiene que ver con el derecho a la libertad de cultos en su faz individual, sino con una cuestión organizativa interna de la religión a la que pertenece”; y que “el principio fundamental es que cada confesión determina los requisitos para ser “ministro religioso”, y que por lo tanto este derecho en principio pertenece a la Iglesia como institución y no a sus miembros en tanto individuos”.

Destacó también, recordando la doctrina de la Corte Suprema en el caso “Lopardo”, que

“según cada religión, la estructura jerárquica e institucional tendrá sus propias características que debe ser respetado por el Estado, dado que su desconocimiento puede constituir una severa

⁶⁴⁸ Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, 18.4.2013, “D. J., A. M. C/D. J. , R. P/acción de amparo”, inédito.

limitación de la libertad religiosa. Las iglesias, comunidades y confesiones religiosas tienen derechos, sin perjuicio de los de sus integrantes”, y en ese marco “El principio fundamental es que cada confesión determina los requisitos para ser ministro religioso, determinando las características de la formación”⁶⁴⁹,

En conclusión,

“si cada institución religiosa es autónoma para determinar los requisitos de formación necesaria que debe cumplir una persona para que sea investido como clérigo, religioso, ministro o pastor, es lógico que la Institución respectiva pueda ejercer el poder de policía para velar el cumplimiento de los mismos”, de manera que “no aparece como arbitrario ni ilegítimo, ni menos se ha menoscabado su libertad de culto, que se le hubiere prohibido [al demandante] ingresar al Templo para predicar, sin que ello significara que no pudiese participar como un feligrés más del servicio”.

El derecho de las comunidades religiosas a determinar los requisitos para acceder al ministerio, y luego de juzgar acerca de su cumplimiento por parte de los candidatos, jugando en ambos casos criterios teológicos o de fe, lleva a que en principio no sean aplicables en estos procesos de selección las normas generales prohibitivas de la discriminación. Dicho de otro modo: las categorías religiosas justifican distinciones que, en otro contexto, podrían resultar inaceptables. Esto se ve claramente en las restricciones impuestas por muchas iglesias y comunidades religiosas fundadas en el sexo o la orientación sexual de los candidatos al ministerio.

Este principio es generalmente aceptado en la doctrina, pero resulta periódicamente contestado. Por eso, sería oportuno que las normas antidiscriminatorias que se han hecho habituales, contemplen en forma expresa la excepción⁶⁵⁰.

⁶⁴⁹ Con cita de PADILLA, Norberto. "El Derecho de la libertad de culto". en SABSAY-MANILI. "Constitución de la Nación Argentina". Ed. Hammurabi, pág. 510/512 y GENTILE, Jorge H. "El derecho humano a la libertad religiosa", ABELEDO PERROT No. 0003/70067296-1.

⁶⁵⁰ El caso se presentó en Nueva Zelanda cuando un grupo homosexual demandó a la Iglesia Anglicana por la exclusión de personas homosexuales del ministerio sagrado. El Tribunal de Derechos Humanos advirtió que el artículo 39 de la New Zealand Human Rights Act 1993 provee una excepción a la discriminación *“where the authorization or qualification is needed for, or facilitates engagement in, a profession or calling for the purposes of an organized religion and is limited to one sex or to persons of that religious belief so as to comply with the doctrines or rules*

En el caso argentino, la ley antidiscriminatoria 23.592, del año 1988 (art.1), dice que

“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

Como se advierte, no establece ninguna excepción expresa para las distinciones realizadas por las iglesias o comunidades religiosas en función de su propia doctrina. Sin embargo, debe notarse que:

a) no cualquier diferenciación entre personas es sancionada, sino únicamente la hecha “arbitrariamente”. Si una iglesia establece un requisito para el acceso al ministerio sagrado (o a otra función en el seno de la comunidad, o a la recepción de sacramentos, o situaciones similares) por una razón justificada desde sus propios principios y doctrinas religiosas, la distinción dejaría en principio de ser arbitraria; y

b) lo que se sanciona es la discriminación estricta, es decir, la diferencia de trato que priva a alguien del goce de un derecho reconocido por la Constitución o las leyes sin causa justificada. Y nadie puede alegar un derecho subjetivo y abstracto a acceder a la condición de ministro de culto en el seno de una iglesia o comunidad religiosa determinada.

En una mirada histórica, es pertinente recordar que la Constitución de 1853, a la par que nada decía respecto de las restantes confesiones religiosas a las que otorgaba libertad plena, sí limitaba el derecho de la Iglesia Católica a designar a sus propios ministros de culto, o al menos a los más relevantes de ellos: los obispos. La adopción unilateral del régimen de

or established customs of that religion”; norma destinada a garantizar la autonomía de la iglesia, *“its right to be selective about those who will serve as the very embodiment of its message and its voice to the faithful”* (“The Gay and Lesbian Clergy Anti-Discrimination Society v. Bishop of Auckland”, New Zealand Human Rights Review Tribunal, 17/10/2013, en Oxford Journal of Law and Religion, Vol.3, nº 1 (2014), p.173.

Patronato, no reconocido por la Santa Sede, dejaba teóricamente en manos del Gobierno la selección de los obispos y su "presentación" al Papa para su "designación canónica". Ese mecanismo constitucional se sobrellevó gracias a la implementación de un "*modus vivendi*" que aludiremos más adelante, hasta desaparecer con la firma del Acuerdo de 1966 entre la República Argentina y la Santa Sede. Ese mismo instrumento, como sea acaba de decir, es el que reconoce la autonomía interna de la Iglesia Católica, también en la designación de sus propios ministros. Volveremos luego sobre esta cuestión.

En el derecho comparado, son frecuentes las previsiones legales que reconocen el derecho de las comunidades religiosas a designar libremente, de modo autónomo y sin injerencia estatal, a sus ministros de culto.

A título de ejemplo, la ley de libertad religiosa de **Portugal** reconoce a las iglesias y demás comunidades religiosas, dentro de su libertad de organización, el derecho a

“disponer con autonomía sobre... la designación, funciones y poderes de sus representantes, ministros, misioneros y auxiliares religiosos” (art. 21) y a *“designar y formar a sus ministros”* y *“fundar seminarios o cualquiera otros establecimientos de formación o cultura religiosa”* sin interferencia del Estado o de terceros (art.22).

En el ámbito europeo, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo es muy clara al afirmar, como elemento integral de la autonomía religiosa tutelada por el art.9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho de las confesiones y comunidades religiosas al nombramiento y selección de sus ministros y dirigentes, sin injerencias por parte del Estado⁶⁵¹.

11.2 Derechos y obligaciones de los ministros religiosos

Forma parte también de la autonomía de las confesiones religiosas, la delimitación de los derechos y deberes recíprocos entre ellas y sus ministros de culto, y entre ellos y los fieles en general. Ese conjunto de derechos y deberes debe suponerse conocido por los ministros religiosos, y aceptado por

⁶⁵¹ Cfr., por ejemplo, entre otros, los casos “Serif c. Grecia” y “Agga c. Grecia”, citados en otros lugares de este trabajo

ellos al momento de aceptar su designación, ordenación, consagración o incorporación al ministerio.

Las confesiones religiosas pueden imponer a sus ministros un régimen de vida y unas obligaciones que restrinjan algunos de sus derechos, y ello será válido en tanto haya sido libremente aceptado por el ministro. En este caso, la libertad de la persona consiste en aceptar o no aceptar el estatuto previsto por la confesión religiosa para el ejercicio del ministerio, pero no alcanza a la posibilidad de cuestionarlo invocando genéricamente “derechos humanos” o posibilidades que tienen quienes no acceden al ministerio.

Es decir: el *status* de ministro de culto, confiere una serie de derechos, y también una serie de obligaciones, normalmente interrelacionados y que no pueden ser elegidos selectivamente por el interesado.

La cuestión fue abordada por la minoría de la Corte Suprema al resolver el caso “*Rybar*”⁶⁵², en relación a la obligación del celibato impuesto a los sacerdotes católicos por la ley de la Iglesia.

En ese caso, el recurrente había argumentado que el art.531 del código civil por ese entonces vigente prohibía o repudiaba el celibato⁶⁵³, a lo que los jueces respondieron que esa norma sólo rige en el ámbito patrimonial, con el alcance de prohibir poner como condición para un negocio, el mantener el celibato; pero que al haberse sometido la persona voluntariamente a un régimen que lo impone al consentir su ordenación sacerdotal, no se había vulnerado ninguna garantía constitucional:

"el celibato sacerdotal importa un compromiso de carácter estrictamente personal que no contraría ninguna tendencia natural del hombre, bien que la contiene en aras de un bien considerado mayor por quienes libremente deciden ordenarse sacerdotes. No se observa, por tanto, colisión alguna entre el ordenamiento canónico y la Constitución Nacional”⁶⁵⁴.

Lo relevante de esa decisión, fue que la Corte Suprema, ratificando la decisión previa en el mismo sentido de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, dijo que la solución de un conflicto disciplinario

⁶⁵² “*Rybar*, Antonio c. García, Rómulo y/u Obispado de Mar del Plata y/o quien corresponda s/ juicio sumarísimo”, causa R-47.XXIII, 16/6/1992.

⁶⁵³ En verdad, lo que decía el artículo era que no podía ser puesto como condición de un acto jurídico el vivir célibe perpetuamente.

⁶⁵⁴ Voto de los Jueces Barra y Boggiano, considerando 4º.

planteado entre un sacerdote y su obispo era una cuestión deferida a la decisión de la jurisdicción eclesiástica, respecto de la que los tribunales del Estado resultan incompetentes.

11.3 Inexistencia de relación laboral: remisión

Al considerar el régimen laboral de los ministros de culto, hemos expuesto que su vínculo con las confesiones religiosas a las que pertenecen tiene una naturaleza *sui generis* que excluye en principio la aplicación del Derecho de Trabajo.

Esto es indudable en el caso de la Iglesia Católica, sus clérigos y religiosos⁶⁵⁵; y es también lo que ocurre en la generalidad de los casos respecto de otras confesiones religiosas.

Remitimos al capítulo 7 para ampliar este concepto.

11.4 Autonomía y jurisdicción interna de las confesiones. Régimen disciplinario.

Una de las formas más claras de expresión de la autonomía propia de las confesiones religiosas es la capacidad que ellas deben tener para establecer su régimen disciplinario interno, y particularmente en relación a los ministros de culto. Esa autonomía está expresamente reconocida en el Derecho Argentino respecto de la Iglesia Católica, como vimos, pero es perfectamente extrapolable a todas las confesiones religiosas.

El Art. I del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede, dice:

"El Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su

⁶⁵⁵ RODRIGUEZ BLANCO, Miguel, *Las actividades de los ministros de culto y de los religiosos ante los Tribunales*, en REDC, 59 (2002), p.207.

*jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de su fines específicos*⁶⁵⁶.

Esa norma reconoce la autonomía de la Iglesia Católica, que no constituye ningún privilegio indebido para ella, sino la garantía de la libertad religiosa en la faz colectiva, exigida por los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en la Argentina.

En efecto, la libertad religiosa reconocida a todas las personas por normas de esa jerarquía, como el art.12 del Pacto de San José de Costa Rica, el art.18 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art.18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y otras normas concordantes, no solamente exige garantizar a todas las personas su libertad religiosa individual, sino también su dimensión colectiva: el derecho a practicar la religión públicamente y asociados con otros. Esta dimensión colectiva de la libertad religiosa solamente es alcanzable si se reconoce a las iglesias y comunidades religiosas su plena autonomía.

Capítulo esencial de dicha autonomía es la posibilidad de que las iglesias y comunidades religiosas establezcan y apliquen sin ninguna interferencia estatal, su propio régimen disciplinario interno, y en particular sobre sus ministros sagrados.

En relación a esta cuestión, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dicho en un fallo reciente que sigue una doctrina ya establecida:

"La Corte reitera que el derecho de los creyentes a la libertad religiosa, que incluye el derecho de manifestar su religión en comunidad con otros, abarca la expectativa de que a los creyentes se les permita asociarse libremente, sin intervención arbitraria del Estado"⁶⁵⁷.

En otro caso también reciente⁶⁵⁸, interpretando el Art.9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es la norma equivalente al

⁶⁵⁶ En términos análogos a los del Artículo I del Acuerdo de 1966 con la Argentina, podemos mencionar entre otros los concordatos o acuerdos con Letonia del 8 de noviembre de 2000 (art.1, 4 y concordantes), con Lituania del 5 de mayo de 2000 (art.1, 5 y concordantes), con Eslovaquia del 24 de noviembre de 2000 (art.3 y concordantes), con Croacia del 19 de diciembre de 1996 (art.2 y concordantes), con Portugal del 18 de mayo de 2004 (art.2), entre muchos otros.

⁶⁵⁷ TEDH, "Biblical Centre of the Chuvash Republic vs. Rusia", 12 de junio de 2014, # 52, traducción nuestra.

⁶⁵⁸ TEDH, "Fernández Martínez c. España", 15/05/2014, [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145068#{%22itemid%22:\[%22001-](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145068#{%22itemid%22:[%22001-)

art.12 del Pacto de San José de Costa Rica vigente en la Argentina, el mismo Tribunal europeo dijo:

"En relación a la autonomía de los grupos de fe, la Corte nota que las comunidades religiosas tradicional y universalmente existen en forma de estructuras organizadas. Donde la organización de las comunidades religiosas es un tema, el Artículo 9 de la Convención debe ser interpretado a la luz del artículo 11, que salvaguarda la vida asociativa contra interferencias injustificadas del Estado. Visto en esta perspectiva, el derecho de los creyentes a la libertad religiosa comprende la expectativa de que les será permitido asociarse libremente, sin intervención arbitraria del Estado. La existencia autónoma de las comunidades religiosas es indispensable para el pluralismo en una sociedad democrática y es por lo tanto un asunto que está en el verdadero corazón de la protección que provee el Artículo 9 de la Convención. Tiene un interés directo, no solamente para la organización de hecho de aquellas comunidades, sino también para el goce efectivo por todos sus miembros activos del derecho a la libertad de religión. Donde la vida organizacional de la comunidad no es protegida por el Artículo 9 de la Convención, todos los demás aspectos de la libertad religiosa de los individuos se hacen vulnerables (...).

En lo concerniente más específicamente a la autonomía interna de los grupos religiosos, el Artículo 9 de la Convención no consagra el derecho al disenso en la comunidad religiosa; en el caso de cualquier desacuerdo doctrinal u organizacional entre una comunidad religiosa y uno de sus miembros, la libertad religiosa del individuo es ejercida mediante la opción de dejar libremente la comunidad (...).

[145068%221](#)] # 127 y 128. Una sentencia algo más reciente del TEDH ratificó estos criterios al rechazar la demanda de un pastor calvinista húngaro contra la decisión de su iglesia de despedirlo como consecuencia de expresiones suyas en contra de la iglesia, lo que había sido convalidado por los tribunales civiles al rechazar su propia competencia para revisar la decisión disciplinaria eclesiástica (caso "Károly Nagy c. Hungría", 1/12/2015, <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158946>, accedido 23/1/2017. Sobre el caso, ver SÁNCHEZ GÓMEZ, María Helena, "Ministros de culto y autonomía de las confesiones religiosas. A propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 1 de diciembre de 2015, Károly * Nagy c. Hungría", en RGDC EE 42 (2016); y JONES, Emma, "Fair Access Versus Religious Freedom: A Difficult Balance", OJLR, 2016, vol.5, pp.359-364; con cita de diversos precedentes jurisprudenciales ingleses).

Esta misma regla básica de la autonomía de las confesiones religiosas y la no interferencia del Estado en sus procedimientos y decisiones internas fue también reafirmada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso "Hosanna Tabor"⁶⁵⁹. Allí se transcribió otra sentencia anterior del mismo Alto Tribunal, que dijo que la constitución de ese país

"irradia... un espíritu de libertad para las organizaciones religiosas, una independencia del control o manipulación secular; en suma, el poder de decidir por sí mismas, libres de la interferencia del Estado, en asuntos de gobierno de la iglesia así como aquellos de fe y doctrina" (Kedroff v. Saint Nicholas Cathedral of Russian Orthodox Church in North America, 344 U. S. 94, 116 (1952))".

En el mismo fallo "Hosanna Tabor", la Corte norteamericana recordó otro precedente⁶⁶⁰, diciendo que:

"Esta Corte explicó que la Primera Enmienda "permite a las organizaciones religiosas jerárquicas establecer sus propias reglas y regulaciones para la disciplina interna y gobierno, y crear tribunales para resolver disputas sobre esas materias"... Cuando los tribunales eclesiásticos deciden sobre tales disputas, explicamos, "la Constitución requiere que los tribunales civiles acepten sus decisiones y su obligatoriedad... Sostenemos por tanto que indagando en cómo la Iglesia ha seguido sus propios procedimientos, la Suprema Corte estatal se ha inmiscuido inconstitucionalmente en controversias quintaesencialmente religiosas cuya resolución la Primera Enmienda encomienda exclusivamente a los más altos tribunales eclesiásticos".

La cita de estos precedentes de tribunales de altísimo prestigio (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Suprema de los Estados Unidos) demuestra que el reconocimiento de la autonomía interna de

⁶⁵⁹ "Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission et al." (resuelto el 11 de enero de 2012, <http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-553.pdf>). Se trataba del despido de una persona que cumplía funciones docentes en una escuela confesional, y era al mismo tiempo ministro de culto. La razón del despido fue que pretendió controvertir ante el tribunal estatal una sanción disciplinaria impuesta por la iglesia, lo que fue considerado por la Corte razón suficiente para la medida, por no ser aplicable al caso el derecho laboral sino el régimen disciplinario interno. Sobre los antecedentes del caso, ver ISAACSON, Scott, " "Hosana - Tabor": los límites de la autonomía de una organización religiosa frente a leyes laborales antidiscriminatorias", en RGDCEE, nº 27 (2011).

⁶⁶⁰ *Serbian Eastern Orthodox Diocese for United States and Canada v. Milivojevich*, 426 U. S. 696 (1976).

las iglesias es una exigencia ineludible de la libertad religiosa, tal como ella es garantizada por los tratados internacionales de derechos humanos. A la inversa, la pretensión de un tribunal estatal de inmiscuirse en los procedimientos disciplinarios internos de una confesión religiosa constituiría una violación de la libertad religiosa y sería por lo tanto claramente inconstitucional.

La Corte Suprema de la Argentina se ha referido a la autonomía interna de la Iglesia Católica en varios casos, entre ellos principalmente los casos "Lastra" y "Rybar" (este último, específicamente sobre el régimen ministerial).

En "Lastra"⁶⁶¹ dijo la Corte en relación al Art. I del Acuerdo de 1966:

"Que en virtud del referido tratado internacional, la República Argentina reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos (art.1º). Tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico..."

En "Rybar"⁶⁶², se dijo:

"Que no constituyen cuestión justiciable, que habilite la vía extraordinaria del art.14 de la ley 48, las sanciones impuestas por la Iglesia Católica en el ámbito de su competencia. La configuración de las faltas en que incurrió el apelante en su carácter de sacerdote católico y las sanciones disciplinarias -previstas en el Código de Derecho Canónico- aplicadas por el obispo de Mar del Plata, constituyen decisiones privativas de la jurisdicción de la Iglesia... (E)l Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina, aprobado por la ley 17032, garantiza a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia" (voto de los Dres. Belluscio y Petracchi).

"(E)l Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina, aprobado por ley 17032, garantiza a la Iglesia Católica el libre y pleno ejercicio de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para

⁶⁶¹ "Lastra, Juan c. Obispado de Venado Tuerto" (L-267.XXIII, 22/10/91, ED 145-495.

⁶⁶² "Rybar, Antonio c. García, Rómulo", CS 16/6/92, <http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do?usecase=mostrarHjFallos&fallood=62461>

la realización de sus fines específicos (art.1º). Tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para regir las faltas y sanciones disciplinarias previstas en el mismo" (voto de los Dres. Barra y Boggiano).

En ese mismo caso, en la sentencia previa de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires⁶⁶³, se había dicho:

"de la demanda no se desprende que exista materia justiciable ante la jurisdicción civil (o temporal) sino que la eventual controversia pertenece al ámbito de la jurisdicción eclesiástica. Caravantes recuerda que pertenecen a esta última por razón de su objeto -entre otras- "...las causas de fe, culto divino, ritos sagrados, de costumbres y de disciplina", señalando que "los clérigos están sujetos al juicio de la Iglesia ...como personas constituidas en una dignidad especial por la que se hacen dependientes de aquella autoridad y, por lo tanto, debiendo ser juzgados por ella y en ciertos casos castigados con penas particulares eclesiásticas, tales como la suspensión del orden u oficio eclesiástico" (Tratado Histórico, Crítico, Filosófico de los Procedimientos Judiciales en Materia Civil", Madrid, ed. Gaspar y Roig, 1856, t. I, pág. 127). Para Silgueira, dicha jurisdicción es "la potestad de conocer y fallar todas las causas que se refieran al dogma, culto y ministros de la Iglesia " ("Jurisdicción", ed. Lajouane, Bs.As. 1908, pág. 43)."

La doctrina de esos fallos, y específicamente la vigencia y alcance del Art .I del Acuerdo de 1966 que hace aplicable en la Argentina el Derecho Canónico, ha sido más recientemente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Peluffo"⁶⁶⁴, siguiendo el dictamen de la Procuradora General de la Nación⁶⁶⁵.

Esa misma autonomía de la Iglesia Católica, en los términos que se vienen analizando, ha sido recientemente reafirmada, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que respecto de las personas jurídicas públicas (entre las que enumera a la Iglesia Católica) dispone en el art.147:

⁶⁶³ CS Bs.As., "Rybar", (29/8/1989, LL 1991-C, 203 - ED 135, 775 - AyS 1989-III-139.

⁶⁶⁴ CS, "Peluffo Diego Pedro c. Colegio Santo Domingo de Guzman, Obispado de Quilmes y Otros s/ Ejecutivo", 29/10/2013, exp. Letra P Nro. 9 Año 2010 Tomo 46 Tipo REX.

⁶⁶⁵ http://www.mpf.gov.ar/dictámenes/2012/MBeiro/abril/Peluffo_Diego_P_9_L_XLVI.pdf.

"Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución".

Ahora bien, lo que ha sido reconocido expresamente por la Corte Suprema de Justicia en relación a la Iglesia Católica, conceptualmente puede predicarse respecto de las demás confesiones religiosas, dado que no es más que una derivación de la libertad religiosa que es reconocida constitucionalmente a todas por igual.

El principio según el cual el juzgamiento de los conflictos que se susciten entre un ministro de culto y la confesión religiosa a la que pertenece está reservado a la propia confesión religiosa y resulta ajeno a la competencia del Estado rige no solamente en relación a la Iglesia Católica. La jurisprudencia ha tenido ocasión de señalar que esas disputas

“son de tipo teológico y deben ser resueltas por la autoridad común y superior” de la institución religiosa, “pero no por un tribunal argentino, ya que las cuestiones religiosas, aun cuando se desarrollen en forma pública, pertenecen a aquello que, por ser de íntima convicción, totalmente subjetivo e inserto en la libertad de conciencia, no se encuentra sujeto a la Jurisdicción Ordinaria”⁶⁶⁶.

La jurisprudencia ha advertido también que

"según cada religión, la estructura jerárquica e institucional tendrá sus propias características, {lo} que debe ser respetado por el Estado, dado que su desconocimiento puede constituir una severa limitación de la libertad religiosa"; y que "las iglesias, comunidades y confesiones religiosas tiene derechos, sin perjuicio de los de sus integrantes; tales como ...designar, preparar, sostener y remover a los ministros de su culto, y enviar misioneros al exterior y sostenerlos espiritual y económicamente. {...} Ergo, si cada institución es autónoma para determinar los requisitos de formación necesaria que debe cumplir una persona para que sea investido como clérigo, religioso, ministro o

⁶⁶⁶ CNCiv, sala B, 29/10/97, "Iglesia Mesiánica Mundial en la Argentina c. Matsumoto, Yasushi y otro", JA 1998-II-356.

pastor, es lógico que la institución respectiva pueda ejercer el poder de policía para velar el cumplimiento de los mismos"⁶⁶⁷.

En el derecho comparado es frecuente el reconocimiento del derecho de las confesiones religiosas a juzgar a sus propios ministros, en materias o cuestiones internas y propias del ministerio, cosa bien distinta de la existencia de un "fuero eclesiástico" que los exima de someterse a los tribunales ordinarios en caso de violaciones a las reglas del derecho común del Estado.

Sin embargo, en nuestra región se registra un extraño y desafortunado antecedente de falta de respeto a la autonomía de una comunidad religiosa, no referido directamente a un ministro de culto sino a una religiosa. Es una sentencia del Tribunal Constitucional de **Colombia**⁶⁶⁸, que ordenó la readmisión de una religiosa católica que había sido exclaustrada, en el seno de su comunidad (y para mayor perplejidad, sobre la base de una interpretación del Código de Derecho Canónico muy particular hecha por el propio Tribunal). Esa sentencia quebró una línea jurisprudencial correcta del mismo tribunal, de respeto a la autonomía religiosa⁶⁶⁹.

11.5 Responsabilidad civil de las comunidades religiosas por actos de sus ministros de culto

Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, en tanto personas de existencia ideal, son por definición distintas de sus miembros. Hay entre ambos una neta distinción personal y patrimonial⁶⁷⁰.

Los ministros de culto también son personas distintas de la iglesia o comunidad a la que sirven, a la que están unidos por un vínculo jurídico, por más que sea también y ante todo de carácter religioso.

⁶⁶⁷ C.4ªCiv.Com., Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, 18/4/2013, "Di Julio, Abel c. Di Julio, Rubén s/acción de amparo".

⁶⁶⁸ Sentencia T-658, del 23 de septiembre de 2013.

⁶⁶⁹ Ver al respecto PRIETO, Vicente, "Reintegro de una religiosa a su monasterio. Sentencia T- 658 de 2013 de la Corte Constitucional de Colombia", en RGDCEE, nº 36 (2014).

⁶⁷⁰ Dice el art.143 del Código Civil y Comercial: "*La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial*".

Su condición de ministros de culto no los priva de su calidad de personas individuales y libres. Por lo tanto, cualquier acto ilícito que eventualmente cometan suscita en principio su responsabilidad personal y subjetiva (en tanto autores), sin que necesariamente se suscite la responsabilidad refleja de la comunidad religiosa. Esta responsabilidad refleja es excepcional, es decir, se presenta sólo si concurren determinadas condiciones.

Estamos hablando acá de responsabilidad civil, esto es, de la obligación de reparar los daños causados, de contenido eminentemente patrimonial (aunque el daño resarcible pueda ser también el daño espiritual). Ese ámbito de responsabilidad se diferencia del penal. La responsabilidad penal es necesariamente individual (en el caso que nos ocupa, propia y personal del ministro de culto), y no se traslada en principio a la institución religiosa⁶⁷¹. Sin embargo, no hay que perder de vista que un mismo hecho puede suscitar los dos tipos de responsabilidad (civil y penal), por lo que el juzgamiento de una surtirá efectos respecto de la otra.

Tradicionalmente, el Derecho argentino distinguía dos ámbitos de responsabilidad civil: contractual y extracontractual, lo que generó intensas discusiones en la doctrina acerca de la extensión y utilidad de esa distinción. Con la sanción del Código Civil y Comercial unificado, esa distinción, si bien se percibe en forma residual en algunas normas, en principio ha desaparecido. Por lo tanto no nos detendremos en ella.

La comisión de actos ilícitos por parte de ministros religiosos puede suscitar la responsabilidad civil de la iglesia o comunidad religiosa en la que cumplan funciones, en los términos del art.1753 y 1763 del Código Civil y Comercial⁶⁷².

⁶⁷¹ La discusión acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas está entre nosotros en estado todavía embrionario, por lo que evitamos entrar en esa interesante cuestión.

⁶⁷² Normas que en lo sustancial reproducen el régimen de los antiguos artículos 1113 y 43 del código civil derogado, en la redacción que les había dado la Ley 17.711 del año 1968. Las normas citadas dicen: "ARTÍCULO 1753.- Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente"; "ARTÍCULO 1763.- Responsabilidad de la persona jurídica. La persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones".

Esa responsabilidad importará la obligación de indemnizar el daño material y moral sufrido por la víctima del ilícito según un criterio de reparación integral o plena (arts. 1738, 1740 y concordantes del CCC⁶⁷³).

Pero antes que eso, y según enfatiza ahora el Código Civil y Comercial con un criterio que ha sido muy aplaudido, obliga a la prevención del daño, o de su agravamiento, en los términos del art.1710 y siguientes CCC⁶⁷⁴.

Como antes se dijo, la responsabilidad de la iglesia o comunidad religiosa por los actos ilícitos del ministro de culto es una responsabilidad indirecta o refleja, que no sustituye a la responsabilidad personal del autor del ilícito, sino que suma frente a la víctima a un responsable adicional o concurrente⁶⁷⁵.

La posibilidad de predicar esa responsabilidad refleja depende de cómo se encuadre la relación entre el ministro de culto y su confesión religiosa de pertenencia. Cabe distinguir aquí diversos supuestos:

a) Si se trata de ministros de culto que son al mismo tiempo la autoridad de la iglesia o comunidad religiosa (es decir, “quienes dirigen o administran” la persona jurídica), y han cometido el ilícito “en ejercicio u

⁶⁷³ “ARTÍCULO 1738.- Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”; “ARTÍCULO 1740.- Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho daño- so, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable”

⁶⁷⁴ “ARTÍCULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo”.

⁶⁷⁵ Esto significa que la víctima puede dirigir su acción resarcitoria contra el responsable directo (el ministro de culto), el indirecto (su iglesia o comunidad religiosa) o contra ambos, y que cualquiera de ellos está obligado a pagar la indemnización en su totalidad, más allá de las posteriores acciones de regreso que existan entre ellos.

ocasión de sus funciones”, la persona jurídica responderá por sus actos en los términos del art.1763 del CCC.

b) Si se trata de ministros de culto que tengan con la comunidad religiosa a la que sirven un vínculo de carácter laboral o similar (tal como ocurre con frecuencia con los rabinos en su relación con la sinagoga o comunidad a la que sirven, o en algunas iglesias evangélicas con los pastores en relación con la iglesia) se suscitará la responsabilidad en los términos del art. 1753 del CCC, tal como es prevista por el derecho para los casos de relación laboral o de empleo.

c) Pero si se trata de ministros de culto que no mantienen una relación laboral con su iglesia o comunidad, sino de otro tipo, será necesario desentrañar su alcance para determinar también el alcance de la eventual responsabilidad civil. Se trata en definitiva de determinar si el ministro de culto es un dependiente de la iglesia o comunidad religiosa a la que sirve.

La relación de dependencia no se agota en la relación laboral, y ni siquiera en la relación contractual, puesto que puede darse incluso en el caso de relaciones ocasionales o gratuitas, según han concluido la jurisprudencia y la doctrina⁶⁷⁶. La dependencia se produce cuando el autor del hecho ha requerido para obrar de una autorización dada por el principal; y se acentúa si el principal obtiene un provecho del obrar del dependiente, o tiene poder de dirección sobre él, o ambas circunstancias simultáneamente.

La responsabilidad refleja del principal por los hechos del dependiente requiere que éste haya obrado en calidad de tal. Para BORDA,

“la responsabilidad del principal debe admitirse siempre que haya una *razonable relación* entre las funciones y el daño”⁶⁷⁷.

Con mayor precisión, LLAMBÍAS considera que el principal sólo responde

“si el acto ilícito del dependiente es realizado con *motivo* de la función: y esto ocurre cuando hay *relación de medio a fin* entre la función y el daño, es decir, si el desempeño del cometido es lo que ha constituido el antecedente necesario o condición del perjuicio,

⁶⁷⁶ Ver BORDA, Guillermo, “Tratado de Derecho civil – Obligaciones”, Buenos Aires, La Ley, 2008, tº.II, § 1373 (y sus notas) y siguientes. También, KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Daños causados por los dependientes”, Buenos Aires, Hammurabi, p.64.

⁶⁷⁷ Op.cit.,, p.291, § 1375.

de tal manera que si no hubiese habido ese preciso encargo subordinado no habría habido tampoco daño”⁶⁷⁸.

Al igual que otros autores, procura una interpretación muy restrictiva a la adjudicación de responsabilidad a la persona jurídica por hechos que sus dependientes hubieran realizado únicamente “con ocasión” de su desempeño como tales.

En cualquier caso, la víctima debe invocar y probar la existencia del daño, pero su *quantum* será fijado prudencialmente por el juez. Hasta el presente las indemnizaciones de daños son fijadas en cifras a veces cuantiosas, pero en general razonables. Sin embargo, se advierte una tendencia alentada por la existencia de precedentes muy notorios en Estados Unidos y otros países, de abultar el reclamo a cifras astronómicas, enfatizando el carácter ejemplificador y sancionatorio de la indemnización a fijarse. Este tipo de indemnización es en principio extraño a nuestro ordenamiento jurídico.

Hay que insistir en que la responsabilidad de la que estamos hablando es una responsabilidad refleja. Esto quiere decir que:

a) la persona jurídica responde, eventualmente, en la medida en que haya un acto ilícito imputable al ministro de culto (y en tanto éste pueda ser calificado como dependiente), que genere la responsabilidad subjetiva de éste. Si no hay acto ilícito imputable al individuo a título personal, la persona jurídica tampoco responde.

b) la eventual responsabilidad de la iglesia o comunidad religiosa no exime de responsabilidad al ministro de culto personalmente. Es un caso de responsabilidades concurrentes, como antes se dijo, en el que ambos (ministro de culto y comunidad religiosa a la que sirve) responden, frente a la víctima, por el todo.

c) según la interpretación actualmente dominante, la responsabilidad de la persona jurídica es objetiva⁶⁷⁹, es decir, existe aunque no

⁶⁷⁸ LLAMBÍAS, Jorge J. “Código civil anotado”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1982, tº.I, art.43, § 6.

⁶⁷⁹ Esto es así en el derecho argentino, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos. En Chile, por ejemplo, la Corte Suprema ha negado la responsabilidad refleja de un arzobispado por ilícitos penales por los que fuera condenado un sacerdote de la diócesis, dejando sin efecto una decisión contraria sustentada por la Cámara de Apelaciones (ver DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen, “La responsabilidad civil en materia de daños causados por un clérigo en el derecho chileno: líneas de reflexión”; y PIMSTEIN S., María Elena, “Responsabilidad civil de la Iglesia por delitos cometidos por clérigos en Chile: un caso reciente”, ambos en “Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Anales Derecho UC, Santiago de Chile, 2005, p. 159 y 173).

medie culpa de su parte o de parte de sus autoridades. No puede eximirse probando la diligencia o la buena fe de sus autoridades.

d) si la persona jurídica debe responder frente a la víctima, en principio tiene acción frente al ministro de culto que ocasionó el daño, para el reintegro de cuanto debió pagar.

Merece traerse a colación una norma del nuevo Código Civil y Comercial, referida a los criterios de valoración de la conducta de los autores de actos generadores de responsabilidad, el art.1725, que expresa:

"Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente".

Parece poco discutible que en el caso de ministros de culto, suele existir entre ellos (cuando están ejerciendo sus funciones, que es cuando suscitan la responsabilidad de la comunidad a la que sirven) y los fieles una relación de "confianza especial".

Veremos ahora algunos casos particulares. No sin antes advertir que el Código Civil y Comercial no ha previsto ningún supuesto especial o concreto de responsabilidad de las iglesias y comunidades religiosas (a las que reconoce como personas jurídicas, arts.146 y 148) por los hechos de sus ministros de culto, tal como sí ha previsto en otros supuestos, como el de los establecimientos educativos (art.1767). Por lo tanto, habrán de aplicarse las normas generales de responsabilidad, sea de las personas jurídicas respecto de quienes las dirigen o administran, sea de cualquier persona respecto de los dependientes que tiene a su cargo y de los cuales se sirve⁶⁸⁰.

⁶⁸⁰ En los Estados Unidos existe una muy extensa y compleja jurisprudencia acerca de casos de responsabilidad refleja o derivada de las confesiones religiosas, por actos atribuibles a sus ministros de culto (entre otras causas). Ver al respecto CHOPKO, Mark, "Derivative Liability", en

11.5.1 Diócesis de la Iglesia Católica y sus clérigos

Está fuera de toda duda que la relación existente entre las diócesis (o circunscripciones equivalentes) de la Iglesia Católica y su clero no es de orden laboral, sino una relación especial regida por el Derecho Canónico a tenor de lo dispuesto por el art .I del Acuerdo entre la Argentina y la Santa Sede, el art.147 del CCC y normas concordantes.

Sin embargo, como antes se dijo, el concepto de “dependientes” que suscitan la responsabilidad de una persona jurídica excede en mucho al concepto de empleado o persona sujeta a una relación laboral.

Por otra parte, el hecho de que el vínculo entre la Iglesia y su clero sea de orden religioso-canónico, no quita que frente a terceros sea aplicable en su integridad el ordenamiento jurídico civil en materia de responsabilidad: la Iglesia es a esos efectos una persona jurídica más.

Ahora bien: no necesariamente la diócesis responde por todo acto ilícito de cualquier sacerdote diocesano, sino solamente en la medida en que sean cometidos en ocasión o ejercicio de funciones encomendadas por aquella, y al servicio directo de ella en tanto persona jurídica.

Vigente el Código Civil de 1871, con su reforma de 1968 (ley 17711), alguna jurisprudencia descartó la aplicación de su art.1113 a la relación entre un sacerdote (diocesano) y el obispado. Razonó así:

“No puede asimilarse la tarea efectuada por el sacerdote (entre otras, celebrar misa) con una actividad prestada en servicio o utilidad del principal, por cuanto es de la esencia de la función pastoral considerar a ella como de utilidad para aquellos que asisten al servicio religioso. Asimismo, no es posible medir solamente con términos jurídicos, un aspecto de la vida sacerdotal que está imbuido principalmente de contenido teológico, tal como lo es la ayuda espiritual de las personas, actividad que no es cubierta para satisfacer intereses del Obispado, sino constituye la razón misma de la Iglesia Católica, cual es la de santificar almas a través del Evangelio. Conforme el Canon 757 (Código de Derecho Canónico. Conferencia Episcopal Argentina, 1983), la relación entre los presbíteros y el Obispo es de cooperación en el anuncio del Evangelio de Jesucristo. En esa relación, si bien el sacerdote

SERRITELLA, James (ed), “Religious Organizations in the United States”, Durham, Carolina Academic Press, 2006, p-591 ss.

está bajo la autoridad del Obispo cuando ejerce funciones propias del presbiterio, esa autoridad debe interpretarse de la perspectiva de la fe cristiana y no de una visión civilista, pues la cooperación está destinada a favorecer a la comunidad por medio de la enseñanza y la santificación, actividad a la que el sacerdote no está obligado a desempeñar sino sobre la base de la doctrina de la fe católica”⁶⁸¹.

El mismo fallo agrega otro argumento, que es el siguiente:

“De acuerdo al art. 33 del Cód. Civil⁶⁸², es persona jurídica de carácter público la Iglesia Católica. Pero también son personas jurídicas todas y cada una de las divisiones territoriales, como las diócesis y parroquias que establezca la Iglesia, que mantienen el mismo carácter público de ella. Por lo que, si la demandante hubiera querido establecer una relación de dependencia, debería haberla analizado en relación a la parroquia donde el servicio sacerdotal fue solicitado, conforme se encuentra probado en autos.”

Es decir: la responsabilidad fue atribuida a la parroquia a la que estaba asignado el sacerdote, en tanto ella es de por sí persona jurídica pública. Y esa responsabilidad de la parroquia excluye la de la diócesis a la que la parroquia pertenezca.

En cambio, en otros casos, se ha derivado la responsabilidad civil del obispado de la mera relación de incardinación del sacerdote en la diócesis. Así, en un caso de abuso sexual cometido por un clérigo contra menores de edad⁶⁸³. Allí se consideró que por una parte existía por una parte culpa *in eligendo* del obispo, que no había tomado los recaudos necesarios previos a la ordenación e incardinación del clérigo a la postre abusador, y también culpa *in vigilando* por no haber atendido ciertas advertencias acerca de

⁶⁸¹ ST SantiagodelEstero, SalaCrimLabyMinas, 02/12/2002, “Hisse, Enrique B.”, LLNOA 2003 (agosto), 471.

⁶⁸² Se refiere al Código histórico.

⁶⁸³ CCivCom Quilmes, sala II, 09/04/2013, “V.B.C. c/Obispado de Quilmes”, LL 2013-E-303 con nota de MEDINA, Graciela, “Responsabilidad por abuso sexual de un religioso a un menor”, LL 2013-E-301. Ver también sobre el mismo fallo NAVARRO FLORIA, Juan G., “Responsabilidad de un Obispado por actos ilícitos de un sacerdote”, “Revista de Derecho de Familia y de las Personas”, Ed. La Ley, Año V, nº 8, septiembre de 2013, p.195; y BALIAN, Eduardo Néstor. “El abuso sexual y la responsabilidad civil de los obispos”, LL 2013-D-109.

su conducta⁶⁸⁴. En ese caso, se consideró que la responsabilidad era del obispado y no de la parroquia porque ésta también está bajo la autoridad y cuidado del obispo.

Hay en esa sentencia alguna vacilación acerca de si la responsabilidad, cuando existe, es objetiva y se suscita aunque no exista culpa personal del obispo (en cuyo caso, no tendría importancia que éste no conociera las actividades ilícitas del autor), o bien es subjetiva por la falta de cuidado de éste en la selección y vigilancia de los clérigos. Si el caso se encuadra en los artículos 43 y 1113 del antiguo Código Civil, que reglaban la responsabilidad civil de las personas jurídicas, pareciera que la responsabilidad debería ser objetiva, pero en tal caso no de la diócesis necesariamente, sino de la persona jurídica en la que concretamente el clérigo presta servicios.

La doctrina y la jurisprudencia han hecho fincar esta responsabilidad más que en la culpa de las autoridades de la Iglesia, en el hecho de presumirse que ésta es más solvente que el autor del daño, en la necesidad de prestar atención prevalente a las víctimas, y por tanto en una obligación tácita de garantía o seguridad, que sin embargo no aparece claramente en la ley⁶⁸⁵.

Como es comprensible, la interpretación jurídica que hace la propia Iglesia Católica del tema es más restrictiva que la habitual en la doctrina civilista y la jurisprudencia estatal⁶⁸⁶, rechazando la responsabilidad objetiva, que no existe en el Derecho Canónico.

⁶⁸⁴ Sin embargo, señala MEDINA (*op.cit.* en la nota anterior) que quien puede incurrir en culpa *in eligendo* o *in vigilando* no es la persona jurídica, sino en todo caso la persona física -el obispo a título personal-, por lo que el concepto está allí mal aplicado.

⁶⁸⁵ MEDINA, *op. y loc. cit.*

⁶⁸⁶ Así resulta de una Nota emanada del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, de fecha 12 de febrero de 2004 (publicada en "Comunicaciones", 36 [2004] 33-38), titulada "Elementos para configurar el ámbito de responsabilidad canónica del Obispo diocesano acerca de los presbíteros incardinados en la propia diócesis y que ejercen en ella su ministerio". En ella se explica que la relación entre el Obispo y los presbíteros "*es irreducible ya sea a la relación de subordinación jerárquica de derecho público en el sistema jurídico de los estados, o a la relación de trabajo dependiente*"; porque el "*vínculo de subordinación entre los Presbíteros y el Obispo está limitado al ámbito del ejercicio del ministerio propio*". La nota explica claramente que "*el Presbítero no "trabaja" para el Obispo*", sino que cumple un oficio en la Diócesis, por lo que el Obispo sólo puede tener responsabilidad personal por los actos del sacerdote si hubiera omitido los "*remedios pastorales adecuados*" en caso de haber conocido su conducta desviada. Los argumentos son atendibles en orden a eximir al Obispo de responsabilidad personal, pero son más endeble en relación a la Diócesis en tanto persona jurídica.

11.5.2 Parroquias de la Iglesia Católica

Como persona jurídica distinta de la diócesis (arts.146 del CCC y doctrina a su respecto)⁶⁸⁷, la parroquia puede tener responsabilidad civil propia en caso de actos ilícitos cometidos por un ministro de culto.

Esa responsabilidad en principio es excluyente de la que eventualmente corresponde a la Diócesis, si el autor del ilícito era dependiente de la parroquia o estaba al servicio de ella y no directamente de la diócesis. La distinción de personalidad jurídica entre la diócesis y la parroquia (salvando las distancias, y con cierta analogía, como la que existe entre las provincias y los municipios) obliga a asignar la responsabilidad refleja a una o a otra de manera excluyente, y no acumulativa.

11.5.3 Institutos de Vida Consagrada de la Iglesia Católica

Los religiosos católicos tampoco tienen una relación de naturaleza laboral con el instituto al que pertenecen, sino una relación *sui generis* exclusivamente regida por el derecho canónico⁶⁸⁸; pero esa relación importa una forma de dependencia jurídica y por lo tanto puede suscitar la responsabilidad civil del instituto.

Conviene advertir que la consagración religiosa, y el voto de obediencia en particular, que es el especialmente implicado en este asunto, de ninguna manera anulan la individualidad y la responsabilidad personal del religioso por sus propios actos, por lo que como regla no podría decirse que el instituto responde por cualquier acto de alguno de sus miembros. Por ejemplo, si un religioso causa un daño conduciendo un vehículo de su propiedad o de propiedad de un tercero que no sea el instituto; o en ejercicio de tareas o funciones que realiza a título personal -docencia, ejercicio profesional, vacaciones con su familia- aún con conocimiento o autorización de sus

⁶⁸⁷ Bajo el antiguo Código Civil, art.33, era interpretación unánime que las parroquias, que gozan de personalidad jurídico canónica sin duda alguna, son también personas jurídicas públicas en el orden civil (así, Ver por ejemplo, CNCiv. 2ª, 07/07/1942, en JA 1942-III-911; SCTucumán, 02/08/1937, "Obispado de Tucumán c. Municipalidad de Tucumán", LL 7-1135; CCivComMercedes, Sala I, 08/02/1990 (inédito); CCivCom Azul, 29/11/2005, "García c/ Obispado de Azul y otro", *El Dial*, 15/12/2005; NAVARRO FLORIA, Juan G., "¿Las parroquias son personas jurídicas?", ED 156-111). Lo mismo cabe decir ahora al amparo de los artículos 146 y 147 CCC.

⁶⁸⁸ Art. 2º de la ley 24483: "*Las relaciones entre los institutos o sociedades inscriptos y sus miembros se regirán por sus reglas propias y por el derecho canónico, y estarán sujetas a la jurisdicción eclesiástica*".

superiores, pero no bajo la dirección de estos. En tal caso, no habrá responsabilidad refleja.

Sin embargo, en caso de ocurrir un hecho ilícito obrado por un religioso en el ámbito de las obras de su instituto y en calidad de miembro del mismo (por ejemplo, en relación con alumnos de un colegio del instituto, o de niños que concurren a una parroquia confiada al instituto, o de personas internadas en un establecimiento asistencial atendido por el instituto) parecería que se suscita aquella responsabilidad.

Un criterio de distinción entonces, puede ser determinar si la tarea o función que ejerce el religioso y en ocasión de la cual produce un daño o comete un ilícito le ha sido asignada al instituto (y él la cumple en tanto miembro del mismo), o al religioso mismo pero en razón de o por su calidad de miembro del instituto. En ese caso, hay fundamento para la responsabilidad refleja del instituto. En cambio, si se trata de una actividad desarrollada o que le ha sido asignada a título personal e independientemente de su condición, en principio no se suscita aquella responsabilidad refleja.

Como sabemos, la responsabilidad refleja es excepcional, y es objetiva, es decir, es independiente de la existencia de culpa propia del principal que debe responde por su dependiente.

Hay que tener en cuenta que la relación entre un religioso y el instituto al que pertenece no solamente no es en sí misma de naturaleza laboral, sino que tampoco es directamente análoga a ella. Como se ha observado, las relaciones entre miembros de una orden o congregación religiosa pueden caracterizarse más claramente como semejantes a las relaciones familiares, que a las laborales⁶⁸⁹. Y un vínculo familiar no suscita responsabilidad indirecta o refleja. Tampoco los institutos de vida consagrada

⁶⁸⁹ HALL, Helen, "¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La responsabilidad colectiva de las órdenes religiosas por las acciones de los distintos miembros en Inglaterra y Gales", RGDCDEE 35 (2014), p.10. Esa circunstancia diferencia la relación sacerdote-diócesis (que tampoco es laboral, pero puede tener más cercanía con ese ámbito), de la relación religioso-instituto de vida consagrada. Dice agudamente esta autora: "Si los compromisos espirituales y promesas del matrimonio no convierten a los cónyuges en mutuamente responsables de sus ilícitos, ¿por qué los compromisos asumidos por los hermanos... {religiosos} deben ser tratados de manera diferente? En efecto, la Ley del Reino Unido está tratando a aquellos adultos que optan por entrar en una relación comprometida de toda la vida, como un miembro célibe de una comunidad, de una manera menos favorable que la que dispensa a los adultos que optan por casarse o constituir una pareja de hecho, imponiendo una mayor carga sobre aquellos en relación con la responsabilidad civil. A pesar de que todavía está pendiente de comprobación, se podría alegar que se trata de una violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar, consagrado en el artículo 8 del CEDH, y del derecho a la libertad de creencia y convicciones de su artículo 9".

son empresas comerciales o con fin de lucro, como para aplicarles una normativa que está pensada para éstas últimas.

11.5.4 Confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica

No debería existir ninguna diferencia sustancial entre el tratamiento jurídico dado a los clérigos católicos en relación a la Iglesia Católica, y el de los ministros de culto de otras confesiones religiosas en relación a ellas.

Solamente resulta necesario, por el defectuoso encuadre jurídico que por ahora presentan en la Argentina las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica, identificar al sujeto a quien imputar en forma refleja la responsabilidad civil por los actos del ministro de culto, cuando ella corresponda. Es que en la medida en que muchas iglesias o comunidades religiosas, incluso estando inscriptas en el Registro Nacional de Cultos creado por la ley 21.745, carecen de personalidad jurídica (o en el mejor de los casos, tienen la personalidad jurídica precaria y limitada que el artículo 46 del antiguo código civil reconocía a las simples asociaciones religiosas -actualmente, artículos 187 a 192, CCC), pueden generarse dudas.

En un caso jurisprudencial, se dispuso que la responsabilidad de un pastor evangélico bautista debía hacerse extensiva a la Confederación Evangélica Bautista a la que pertenecía la iglesia a cuyo servicio estaba dicho pastor⁶⁹⁰. Dijo entonces el Tribunal:

“La Confederación Evangélica Bautista como persona jurídica de derecho privado puede ser demandada por acciones civiles y responde por el hecho de las personas que están bajo su dependencia, en las condiciones establecidas por el título “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos” (art.42

⁶⁹⁰ La iglesia en cuanto tal (Iglesia de González Catán) no tenía personalidad jurídica formal autónoma –aunque el Tribunal debería haberle reconocido la calidad de sujeto de derecho en los términos del art.46 del código civil entonces vigente-, sino que estaba registrada en el Registro Nacional de Cultos como “filial” de la Convención Evangélica Bautista. Ésta a su vez reconoció cobrar a la iglesia local una cuota de afiliación, darle “cobertura legal” con su propia personalidad jurídica, y en tal carácter ser titular registral del inmueble donde funcionaba efectivamente la iglesia (CCivCom Morón, sala I, 17/11/2005, “Gerschman, Nancy c. Confederación Evangélica Bautista y otros”, LLBA 2006-377).

y 43 CC). Requiere el art.1113, 1er. Párrafo del Código Civil que exista, al momento de causarse un daño, una determinada relación entre el responsable indirecto y el agente del daño, que justifique el nacimiento de la obligación resarcitoria de aquel. No se exige [...] la existencia de un contrato de trabajo. El Código civil [...] expresa que el principal debe responder por el hecho de las personas que están bajo su dependencia, lo que no implica necesariamente una subordinación permanente, sino que abarca también la sujeción ocasional, temporaria o parcial para uno o varios asuntos determinados y [...] ésta última existía entre [el pastor] y la Confederación. Es que el vínculo de subordinación es sólo una condición puramente objetiva para atribuir o propagar la responsabilidad desde el agente autor material del daño, hacia el principal responsable, pudiéndose extender dicho vínculo a situaciones en que el agente directo del daño goza de una mayor independencia y autonomía en el ejercicio de su cometido”⁶⁹¹.

En el caso, se trataba del fallecimiento de un niño, ahogado en un río en el transcurso de una excursión organizada por la iglesia y puesto por la madre bajo el cuidado y responsabilidad del pastor que guiaba al grupo. El fallo hizo mérito de que la excursión había sido organizada por la iglesia y estaba a cargo del pastor, y se había invitado a “no creyentes” (como era el caso del niño fallecido), con el objeto de acercarlos a la iglesia, por lo que no había duda de que el pastor estaba ejerciendo una actividad en interés de su congregación.

Interés, cabe acotar, evidentemente no económico ni material, sino espiritual, pero suficiente para sustentar la responsabilidad endilgada.

11.6 Formación de los ministros religiosos: seminarios y seminaristas

Como hemos visto, uno de los derechos fundamentales de las confesiones religiosas, que hace a su autonomía como tales, es la selección y formación de sus futuros ministros de culto.

⁶⁹¹ Fallo citado en nota anterior, p.381.

En ese orden, compete en exclusividad a la iglesia o comunidad religiosa la definición de los requisitos para acceder a la formación ministerial, así como la forma, contenido y extensión de la formación requerida⁶⁹².

A las personas que están en proceso de formación para el acceso al ministerio religioso se las denomina en general “seminaristas”. En verdad, esta denominación es propia de la Iglesia Católica, que denomina “seminario” al lugar de formación de sus clérigos, tal como lo establece el derecho canónico (canon 235 y concordantes), y por extensión “seminaristas” a quienes en él se forman, normalmente por un período no menor de cuatro años y residiendo en común en el mismo seminario⁶⁹³.

Sin embargo, y de acuerdo con el fenómeno ya analizado según el cual la terminología propia de la iglesia tradicional y mayoritaria es comúnmente utilizado para designar a las realidades equivalentes en otras confesiones religiosas, otras iglesias y comunidades han adoptado también los términos “seminario” y “seminarista” para denominar a los lugares de formación de sus ministros de culto, y a quienes están en ese proceso de formación, respectivamente. Esto no solamente ocurre con iglesias cristianas, sino también con otras no cristianas⁶⁹⁴.

El Derecho Eclesiástico ha debido tomar en cuenta esta realidad, y referirse a los seminarios y seminaristas por diversas razones y en relación a distintas situaciones, como se puede ver a lo largo de este trabajo. Sin perjuicio de los desarrollos más extensos que se hacen en los lugares correspondientes, mencionemos ahora algunas de estas situaciones.

11.6.1. Concepto o definición de “seminarista”

La noción de seminarista (o de seminario) no ha sido objeto de definición legal, por lo que debe estarse a lo que las confesiones

⁶⁹² En el caso de la Iglesia Católica, así lo establece el Derecho Canónico: *“La Iglesia tiene el deber, y el derecho propio y exclusivo, de formar a aquellos que se destinan a los ministerios sagrados”* (c.232).

⁶⁹³ El seminario depende del obispo diocesano, pero es en sí mismo una persona jurídica pública (canon 238) representada por el rector, que es un sacerdote designado por el Obispo (c.239).

⁶⁹⁴ Así por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires funciona el Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall Meyer”, donde son formados los rabinos de orientación conservadora –que es la mayoritaria en el judaísmo latinoamericano- que han de servir a las comunidades de habla hispana de todo el mundo.

religiosas determinan o definen por tales. Sin embargo, la jurisprudencia si ha debido deslindar y acotar los conceptos en orden a la aplicación de determinadas normas. En particular, lo referido al servicio militar obligatorio.

Así, la Corte Suprema ha definido en los ya antes citados casos “Lopardo” y “Falcón” que no puede considerarse “seminarista” a quien únicamente asiste a una escuela dominical y realiza tareas esporádicas de predicación religiosa, sino únicamente a “quienes han iniciado ya una preparación que habrá de capacitarlos y destinarlos a aquella actividad” (el ejercicio del ministerio religioso, con las notas de formación específica, dedicación permanente, y goce de poderes o atribuciones distintas de las que corresponden al común de los fieles).

Antes de eso, la Corte había definido que por aplicación de los principios de igualdad ante la ley y de libertad de culto (hoy diríamos, libertad religiosa), y también en relación a la exención del servicio militar, corresponde equiparar a los seminaristas católicos a los de otras religiones (concretamente, seminaristas judíos). Fue lo resuelto en el caso “Glaser”, ya analizado más arriba.

11.6.2. Servicio militar de seminaristas

En relación al servicio militar obligatorio, existe una extensa legislación y jurisprudencia vinculada a los seminaristas, lo que es lógico, dado que la edad a la que debía prestarse el servicio de conscripción (18 años, y antes 20 años) coincide con la que normalmente tienen quienes se están formando para el ministerio sagrado.

Las normas vigentes que cabe analizar al respecto son varias y han sido expuestas en el Capítulo 9.

11.6.3. Registro de seminaristas por parte de la autoridad pública

Por distintas razones, el Estado ha pretendido en varias ocasiones llevar un registro de seminaristas. Pretensión no siempre justificada.

En el caso de los seminaristas católicos, esa exigencia se vincula con el aporte económico que el Estado realiza para la formación de los seminaristas mayores diocesanos y de algunas órdenes religiosas, en los

términos de la ley 22.950⁶⁹⁵, y que requiere conocer quiénes son los beneficiarios de fondos públicos. En este caso es una pretensión razonable, aunque hay que advertir que no son los seminaristas quienes reciben los subsidios sino los obispos diocesanos o superiores religiosos; por lo que no sería de suyo indispensable identificar a aquellos ante el Estado.

En el caso de las comunidades religiosas no católicas, la exigencia de identificar y registrar a sus seminaristas aparece en la reglamentación de la ley 21.745 (no en la ley misma)⁶⁹⁶, y obedece al propósito de esa norma de ejercer un férreo control sobre los grupos religiosos, en principio “sospechosos”. En este caso, la exigencia de informar los datos personales de los seminaristas no tiene ninguna justificación razonable.

11.6.4. Aporte económico estatal a la formación del clero

La financiación por parte del Estado Nacional (en verdad, apenas simbólica y parcial) de la formación del clero católico, reconoce antiguos antecedentes en la Argentina.

Ya en tiempo de la Confederación Argentina, se había establecido por ley que en cada diócesis hubiera un “seminario conciliar” (como entonces se los llamaba, por ser creación del Concilio de Trento), con becas pagadas por el tesoro para el rector, profesores y seminaristas y subsidios para la construcción de los edificios necesarios⁶⁹⁷.

La vigente ley 22950, establece que

“El Gobierno Nacional contribuirá a la formación del Clero Diocesano, para lo cual los Señores Obispos

⁶⁹⁵ BO 18/10/1983, reglamentada por decreto 3016/83 (BO 22/11/1983).

⁶⁹⁶ El art. 2º inciso c) del Decreto 2037/79 impone al Registro Nacional de Cultos “Registrar a los estudiantes y seminaristas de las entidades reconocidas”. Mientras que el art.3º inc.f) del mismo decreto obliga a las entidades que requieren su inscripción en el Registro a informar la “Ubicación de los seminarios, facultades o establecimientos de enseñanza habilitados para la preparación de personal religioso y sus respectivos programas de estudios”. A su turno, la Resolución 107/2014 de la Secretaría de Culto precisa que “Los administrados deberán informar los establecimientos propios o ajenos escogidos para la formación de sus ministros de culto. Se deberá adjuntar copia de los programas de estudio. En caso que sea la misma entidad la que forme a sus ministros de culto, deberá indicarlo y acompañar la curricula de estudios utilizada”,

⁶⁹⁷ Ley 186 del 7 de septiembre de 1858 (RN 1857/62, pág. 149).

residenciales o quienes hagan canónicamente sus veces percibirán en concepto de sostenimiento mensual por cada alumno de nacionalidad argentina del Seminario Mayor perteneciente a la propia jurisdicción eclesiástica, el equivalente al monto que corresponda a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional” (art.1)⁶⁹⁸.

El art.2 de la ley hace extensivo el beneficio

“con la misma finalidad y en las mismas condiciones a los Superiores Provinciales de las siguientes Ordenes preconstitucionales: Mercedarios, Dominicos, Orden de Frailes Menores (Franciscanos), Compañía de Jesús (Jesuitas); y a la Congregación Salesiana de San Juan Bosco”.

La congregación salesiana no es “orden” religiosa ni es preconstitucional, pero fue incluida en la nómina en agradecimiento a su extensa labor educativa especialmente en la Patagonia, que había sido objeto de reconocimiento por parte del Congreso. La posterior ley 24483 dispuso la equiparación de los restantes institutos de vida consagrada católicos a las “órdenes preconstitucionales”, pero en la práctica no se hizo extensivo este beneficio.

En el caso de diócesis o institutos de vida consagrada que recibieran un beneficio análogo de parte de gobiernos provinciales, según la ley (art.3) el obispo o superior debe optar por uno u otro de tales beneficios.

En la práctica el subsidio es pagado mensualmente a la diócesis por la Secretaría de Culto, a través de la Conferencia Episcopal Argentina. Anualmente y por el mismo conducto, cada diócesis o instituto beneficiario informa la norma de seminaristas mayores con que cuenta, y en función de ella se liquidan los pagos durante todo ese año⁶⁹⁹.

La provincia de Buenos Aires, que según su constitución “coopera” al sostenimiento del culto católico (art.9), también estableció un régimen de aportes a

⁶⁹⁸ Cuando el escalafón mencionado fue reemplazado por el correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) se estableció que la beca por seminarista sería el equivalente al salario del nivel “D” de ese escalafón (Decreto 628/94, BO 3/5/94).

⁶⁹⁹ El Decreto 3016/83 del 18 de noviembre de 1983 designa a la entonces Subsecretaría de Culto (hoy Secretaría) como autoridad de aplicación del régimen de la ley 22950, encargada de recibir la nómina de seminaristas antes del 30 de abril de cada año y de liquidar y abonar las becas a los obispos o superiores mayores respectivamente.

“los seminarios arquidiocesanos y diocesanos que se hallen establecidos dentro de su territorio en armonía con las prescripciones del Derecho Canónico, actuando la Secretaría General de la Gobernación” como órgano de aplicación⁷⁰⁰.

El régimen incluye becas ordinarias *“para sufragar los gastos que demanden los estudios en los Seminarios, de quienes desean consagrarse a los ministerios eclesiásticos, adquiriendo el estado clerical”⁷⁰¹*, becas extraordinarias para estudios de perfeccionamiento en el extranjero, y pago de otros gastos edilicios y de material para los seminarios.

El Estado Nacional ha contribuido decisivamente a la construcción de distintos seminarios católicos, que han sido luego donados a la Iglesia⁷⁰².

En el caso de las demás confesiones religiosas, no existe ningún aporte regular para los seminarios o lugares de formación, sin perjuicio de eventuales aportes o subsidios esporádicos de parte del Estado.

11.6.5. Seminaristas y régimen migratorio

Las normas migratorias no solamente contemplan en especial el ingreso de ministros de culto, sino también de seminaristas o estudiantes de ciencias religiosas que ingresan al país para realizar aquí su formación y eventualmente volver luego al país de origen. En este caso, están sujetos a un doble régimen especial: el de alumnos o estudiantes, y el de ministros de culto que les es aplicado por extensión.

En razón de este último, que se analiza en el capítulo 12, el trámite de ingreso es realizado por la iglesia o comunidad religiosa de la que se trata (católica o no) con intervención de la Secretaría de Culto en la legalización y visado de la documentación y solicitud correspondiente.

⁷⁰⁰ Decreto-Ley 9655/81, texto según Ley 12575.

⁷⁰¹ Son 60 becas para el seminario de La Plata, y 30 para cada uno de los demás seminarios, quedando a cargo del obispo asignarla a los seminaristas que las necesiten (art.3).

⁷⁰² A título de ejemplo, el Seminario de San Juan de Cuyo fue edificado por el Estado en un terreno que le fuera donado por el arzobispado, y posteriormente devuelto al mismo arzobispado (Decreto 1006/07, BO 1/8/07), procedimiento también utilizado con el Seminario de Resistencia. En otros casos el Estado donó terrenos con cargo de edificarse en ellos el seminario (por ejemplo, ley 26.210, BO 20/1/06, de donación a la diócesis de San Martín).

11.6.6 Los estudios de los seminaristas

El Decreto 368/83, del 16 de febrero de 1983⁷⁰³, autoriza al Ministerio de Educación de la Nación

"a reconocer como equivalentes a los del Bachillerato Oficial, y a los únicos efectos de proseguirlos en el nivel superior, los estudios realizados en los seminarios diocesanos y religiosos del país".

Es decir, se trata de una habilitación para acceder al nivel terciario o universitario. La norma es previa a la transferencia de los servicios educativos a las provincias, y probablemente haya tenido en mira a los llamados "seminarios menores", hoy prácticamente inexistentes, por lo que es de escasa aplicación práctica.

11.7. Sindicalización de ministros de culto

¿Es posible un sindicato de ministros de culto, que ejerza su representación frente a la iglesia o confesión religiosa a la que pertenecen? ¿Es deseable que exista?

En Europa la cuestión fue afrontada por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso *"Sindicatul Patorul cel bun c. Rumania"*⁷⁰⁴. Se trataba de un sindicato creado por sacerdotes ortodoxos (junto con trabajadores laicos de la iglesia), que el gobierno rumano no reconoció alegando que esa sindicalización no era admitida por el derecho canónico de la iglesia –que tenía reconocimiento estatal-, y que afectaba la autonomía de ésta (garantizada por la Constitución), y por tanto su libertad religiosa, prevaleciente frente a la libertad sindical.

El Tribunal, luego de examinar legislación nacional e internacional, y de reconocer la importancia del derecho a la sindicalización, reafirmó también el derecho "esencial" de las comunidades religiosas a la autonomía, que implica que

⁷⁰³ BO 18/2/83. Esta norma reemplaza a otras anteriores con el mismo objeto de los años 1967, 1968, 1971, 1974 y 1979.

⁷⁰⁴ <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-128397#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%222330/09%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-122763%22%5D%7D>

“el Estado no puede obligar a una comunidad religiosa a admitir nuevos miembros o a excluir aquellos que ya lo sean”; y que “en caso de discrepancia sobre materias doctrinales o de organización entre una comunidad religiosa y uno de sus miembros, el derecho individual a la libertad religiosa se expresa a través del derecho a abandonar la comunidad” (§137).

La Gran Sala consideró (en fallo dividido) que en ese marco, la protección de los derechos de la Iglesia Ortodoxa Rumana constituía una finalidad legítima para negar el reconocimiento al sindicato de sacerdotes. Sin embargo, se ha señalado que hay cierta contradicción interna en la sentencia, porque por otro lado afirma que la relación entre los clérigos ortodoxos y la iglesia a la que pertenecen, está regida por el derecho laboral⁷⁰⁵.

En la Argentina rige la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, del año 1988 (con diversas modificaciones parciales), que no prevé expresamente el caso⁷⁰⁶. Tampoco lo hacían las leyes anteriores en la materia.

Sin embargo, un grupo de pastores evangélicos intenta desde al año 2008 constituir el “Sindicato Único de Trabajadores Evangélicos y Afines”⁷⁰⁷, para “canalizar los reclamos no sólo de los pastores, sino también de otros “trabajadores espirituales” que se desempeñan en las iglesias”⁷⁰⁸. Pero este emprendimiento, que no es visto con simpatía por las iglesias evangélicas, no ha logrado el reconocimiento gubernamental.

11.8 Conclusiones

Este capítulo, el referido a las relaciones entre el ministro de culto y la confesión o comunidad religiosa a la que pertenece, es uno de los

⁷⁰⁵ Cfr. RADULETU, Sebastian, “The Right of Members of the Clergy to Form and Join Trade Unions and the Autonomy of Religious Organizations – a Recent Case of the European Court of Human Rights”, Oxford Journal of Law and Religion, Vol.3, n. 1 (2014), p.168.

⁷⁰⁶ La ley prevé que “Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados” (art.7).

⁷⁰⁷ <http://suteya.es.tl/Inicio.htm>

⁷⁰⁸ Así lo informa el principal diario de la capital de la provincia de Buenos Aires: <http://www.eldia.com.ar/edis/20080726/informaciongeneral0.htm>

más arduos para extraer conclusiones. Esto es consecuencia del concepto mismo de ministro de culto, que depende de lo que cada confesión religiosa determine.

En consecuencia, no es posible dar reglas generales y unívocas, salvo decir que corresponde a la autonomía de las distintas comunidades religiosas la definición de los requisitos de acceso al ministerio de culto, y también la definición del plexo de derechos y deberes recíprocos entre el ministro de culto y la comunidad a la que sirve.

Esa necesaria autonomía lleva implícita la incompetencia del Estado para determinar el alcance de los derechos y deberes recíprocos entre el ministro de culto y la confesión religiosa a la que adscribe, y por ende la incompetencia de sus tribunales, en principio, para dirimir los conflictos internos que se susciten al respecto.

La autoridad y los tribunales del Estado no pueden sustituir a la comunidad religiosa en la delimitación de las reglas acerca del acceso al ministerio, ni tampoco en el juicio acerca del cumplimiento de tales reglas o requisitos por parte del ministro de culto, sea en el momento de su selección, sea en el momento de juzgar acerca de su desempeño y mantenimiento de su idoneidad, sea en el momento de su despido o pérdida del estado ministerial.

Del mismo modo, tampoco corresponde al Estado establecer los requisitos o exigencia de formación de los ministros de culto, porque lo que cada comunidad valora en ellos a la hora de su selección no necesaria ni principalmente tiene que ver con requisitos de tipo académico, aunque ellos también puedan existir⁷⁰⁹.

Ahora bien: la contrapartida de esa libertad que tienen las confesiones religiosas para seleccionar, capacitar, formar, designar y mantener a sus ministros de culto, parece ser la necesaria responsabilidad que asumen por la conducta que ellos desarrollen, en el ejercicio de su ministerio. En cierta forma, la comunidad religiosa se erige en garante, frente a sus propios fieles y a los terceros de los actos de sus ministros en ejercicio de su ministerio. Es que la comunidad religiosa actúa en la vida social por medio de sus ministros, ellos son los instrumentos que elige para realizar su actividad específica, los somete a su autoridad, los coloca en posición eminente o relevante en el seno de

⁷⁰⁹ Imaginemos por un momento que la autoridad romana hubiera tenido atribuciones para determinar si los apóstoles de Jesucristo eran suficientemente idóneos y contaban con la formación académica necesaria para convertirse en ministros y dirigentes de la incipiente comunidad cristiana....

la comunidad, por lo que razonablemente debe asumir la responsabilidad correspondiente.

Capítulo 12. Los ministros de culto ante la Administración Pública.

Como resulta de todo lo expuesto hasta acá, lo esperable en un marco de libertad religiosa –que es exigida constitucional e internacionalmente en la Argentina, como en toda América Latina- es una relación entre el Estado y los ministros de culto que podría sintetizarse en la palabra “respeto”.

Ese respeto debe fundarse en el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de esas personas que cumplen roles singulares en el seno de las confesiones religiosas, a quienes hemos denominado genéricamente “ministros de culto”. Cuya selección, designación, formación y régimen disciplinario compete en exclusividad a las confesiones religiosas, sin que quepa una intervención al respecto por parte del Estado. Quien, por su parte, y en atención a su obligación de facilitar a todas las personas (y a las comunidades religiosas que ellas integran) el ejercicio de aquella libertad religiosa, debe facilitar y no obstaculizar el ejercicio del ministerio religioso.

Resultarían por lo tanto inadmisibles en la República Argentina restricciones como las que estuvieron vigentes, por ejemplo, en México hasta el año 1992, donde entre otras cosas se prohibía la emisión de votos religiosos, además de otras limitaciones al ejercicio del ministerio que ya hemos visto⁷¹⁰.

Examinaremos en este capítulo una serie de situaciones en las que el Estado puede o debe interactuar con ministros de culto, para ver de qué manera toma en cuenta esa condición y qué es lo que las normas o la jurisprudencia argentinas han previsto al respecto.

⁷¹⁰ El art.5 de la Constitución mexicana de 1917 decía: *“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa... de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea l denominación u objeto con que pretendan erigirse”*. El código penal definía como órdenes monásticas prohibidas a *“las sociedades religiosas cuyos individuos vivan bajo ciertas reglas peculiares a ellas, mediante promesas o votos temporales o perpetuos, con sujeción a uno o más superiores”*, con pena de prisión para sus integrantes (cfr. PATIÑO REYES, Alberto, *“Libertad religiosa y principio de cooperación en Hispanoamérica”*, UNAM, México, 2011, p.93).

12.1 Intervención del Estado en la designación o elección de los ministros de culto

Ya hemos dicho que la designación o nombramiento de ministros de culto, debe ser resorte exclusivo de cada confesión religiosa, sin intervención de ninguna especie por parte del Estado. Forma parte del derecho esencial de las confesiones religiosas a su propia autonomía.

Esta afirmación parece obvia, pero no siempre es considerada de ese modo. A menudo existe la tentación por parte de funcionarios públicos, de considerarse con derecho a intervenir en ese proceso interno de designación, o de formación, de los ministros de culto. A veces para asegurarse la unidad de interlocutores (tal como ha ocurrido en Francia en relación a los judíos y, más recientemente, los musulmanes), otras veces para procurar un liderazgo religioso afín a los gobiernos, o directamente para someter a las confesiones religiosas al poder político.

La Declaración sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación fundadas en la Religión y las Convicciones, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York el 25/11/81 afirma como ya hemos visto antes que *“el derecho a la libertad de religión comprenderá, en particular, las libertades siguientes: ...g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción”*.

Los distintos proyectos de ley de libertad religiosa, o ley de cultos, que se han sucedido en años recientes en la Argentina, reconocen expresamente este derecho de las comunidades religiosas a designar a sus propios ministros de culto sin intervención estatal.

En términos similares, la ley nº I-0002-2004 (5548)⁷¹¹ de la Provincia de San Luis –la primera ley provincial de libertad religiosa- reconoce entre los derechos de *“las iglesias, comunidades y confesiones religiosas”*, el de *“designar y formar a sus ministros”* (art.3º).

⁷¹¹ Ley que reemplaza y deroga a la anterior, e idéntica, ley 5316.

En el mismo sentido, y en el derecho comparado, son muchas las legislaciones nacionales que reconocen la libertad y autonomía de las confesiones religiosas en la designación de sus ministros de culto.

Por ejemplo la ley de **Colombia** 133 de 1994, muy similar a varios proyectos de ley argentinos conocidos desde 1991, reconoce entre los derechos de las iglesias y confesiones religiosas el de

“ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, designar para los cargos pastorales” (art.7 inc. b), “establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros libremente elegidos por ellas, con su particular forma de vinculación y permanencia según sus normas internas” (inc. c) y “tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios teológicos, en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos” (inc. d).

Pero también es cierto que en el derecho comparado regional no faltan los ejemplos de indebida injerencia del Estado en la designación de ministros de culto. Quizás el caso más notorio es el de la Constitución de **México** de 1917, cuyo artículo 130 (vigente con esa redacción hasta su reforma en 1992), entre otras normas limitativas de la libertad religiosa, establecía que

“Las legislaturas de los Estados únicamente tendrán la facultad de determinar según las necesidades locales, el número máximo de ministros de culto. Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento”.

Ante esa habilitación, no faltó la legislatura que añadió como requisito para ser ministro de culto el ser casado, lo que obviamente excluía a los sacerdotes católicos⁷¹².

En Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que la injerencia del Estado en la elección por parte de una comunidad religiosa de sus líderes o ministros, constituye una violación del art.9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y es incompatible con ese tratado, sin que pueda considerarse algo “necesario en una sociedad democrática para

⁷¹² Ley del 28 de febrero de 1925 del estado de Tabasco. Ver en PATIÑO REYES, Alberto, “Libertad religiosa y principio de cooperación en Hispanoamérica”, UNAM, México, 2011.

proteger el orden público”⁷¹³. El mismo Tribunal consideró en más de un caso, que no correspondía al Estado intervenir en la elección de las autoridades de comunidades religiosas, ni siquiera para asegurar que ellas permanezcan unidas bajo un liderazgo unificado⁷¹⁴.

12.1.2 El caso de las restantes confesiones religiosas

Puede afirmarse que en relación a las demás confesiones religiosas, distintas de la Iglesia Católica, nunca existió en la Argentina nada equivalente al Patronato, ni una inmisión del Estado en la designación, ni de sus autoridades, ni de sus ministros de culto.

Sin embargo, por diversas razones (mejores o peores) el Estado ha querido desde muy antiguo ejercer un cierto control en la materia.

a) Antecedentes remotos

Ya el 20 de diciembre de 1833, el entonces Gobernador de Buenos Aires dictó un decreto *"sobre reconocimiento de Pastores de las Iglesias disidentes"*, con el argumento de reglamentar sus facultades para celebrar matrimonios⁷¹⁵. El registro así creado continuó funcionando

⁷¹³ Caso “Serif v. Grecia”, resuelto el 14 de diciembre de 1999. Se trataba de la elección de un muftí hecha por la comunidad turco musulmana de Tracia Occidental (al amparo del Tratado de Paz de Atenas de 1913 entre Grecia y el Imperio Otomano, que había sido desconocida por el gobierno griego. Dijo el tribunal: “The Court does not consider it necessary to rule on the question whether the interference in issue was “prescribed by law” because, in any event, it is incompatible with Article 9 on other grounds”. Ver la sentencia en NAVARRO VALLS, Rafael y PALOMINO, Rafael, “Estado y Religión, textos para una reflexión crítica”, Ariel, Barcelona, 2003, p.323. Para un comentario sobre esa sentencia y otras que abordan cuestiones análogas, vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, y NAVARRO-VALLS, Rafael, The Protection of Religious Freedom in the System of the Council of Europe, en el volumen colectivo “Facilitating Freedom of Religion and Belief: A Deskbook” (ed. por T. Lindholm, C. Durham y B. Tahzib-Lie), Martinus Nijhoff, Leiden, 2004, pp.224-227.

⁷¹⁴ Caso “Agga v. Grecia”, resuelto el 17 de octubre de 2002: “The Court does not consider that, in democratic societies, the State needs to take measures to ensure that religious communities remain or are brought under a unified leadership”.

⁷¹⁵ El Decreto creó un “Registro de ministros del culto de las diferentes creencias religiosas existentes en la Provincia”, ante el que “*todos los ministros de creencias distintas de la Religión Católica, Apostólica, Romana que de presente existen y en adelante llegaren á esta ciudad, deberán presentar... los documentos que acrediten su carácter y destino que traigan*”, previendo el castigo y expulsión del país de quienes omitieran pedir esa habilitación (ver en “Antecedentes y resoluciones sobre el Culto”, publicado por la Sub-Secretaría de Justicia, Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 1899, p.511). Pero hay que notar que la condición de

erráticamente al menos hasta finales del siglo XIX⁷¹⁶; incluso luego de la introducción del matrimonio civil obligatorio, que hizo perder interés en el registro de los pastores como posibles celebrantes de uniones matrimoniales⁷¹⁷.

El registro, que en su origen era provincial, fue asumido por el Gobierno Nacional, aunque también se dijo en alguna oportunidad que llevarlo seguía siendo atribución de las provincias⁷¹⁸.

Un dictamen del Procurador General de la Nación, Antonio Bermejo, de fecha 7 de junio de 1895, intentó delimitar la cuestión. Tras recordar que

"en diversas ocasiones ha sido denegado el reconocimiento de los Pastores de las iglesias disidentes, en el sentido de autorizarlos para ejercer las funciones de su ministerio, estimándose que tal autorización era superflua en presencia del artículo 14 de la Constitución nacional, que garante a todos los habitantes de la República el derecho de profesar libremente su culto",
afirma que

ministro de culto no era otorgada sino reconocida, en función de los documentos que se supone emanados de la respectiva confesión religiosa.

⁷¹⁶ La misma recopilación de "Antecedentes y resoluciones sobre el culto", citada en la nota anterior, da cuenta de la licencia otorgada para ejercer su ministerio a un "cura" para las congregaciones evangélicas alemanas de la provincia de Santa Fe, otorgada por el presidente Sarmiento el 29 de marzo de 1873 (p.512), y otra análoga otorgada por el presidente Avellaneda el 24 de julio de 1879 (p.516). Pero en 1881 se negó la licencia a quien pedía ejercer como pastor de la iglesia reformada suiza, con el correcto argumento de que en virtud de la libertad de culto tal licencia no era requerida por ley alguna ("Antecedentes", cit., p.516).

⁷¹⁷ El 9 de octubre de 1890 el presidente Pellegrini, por Decreto, reconoció a pastores metodistas para Buenos Aires y Santa Fe. El dictamen previo del Procurador General de la Nación dijo que *"Nuestras leyes han reconocido y reconocen aún la existencia de los Ministros de las Iglesias disidentes. Así los artículos 55 y 57 de la Ley sobre Registro del Estado Civil, de noviembre de 1894, les imponía el deber de remitir al Registro, para su inscripción, copias de las actas de los matrimonios celebrados ante ellos; y aun cuando estas disposiciones han quedado derogadas por la Ley de matrimonio civil, de Noviembre de 1888, esta Ley reconoce también la existencia de los mismos Ministros ó Pastores, al imponerles en su art.118 una penalidad, si procediesen á la celebración de un matrimonio religioso, sin tener a la vista el acta á que se refiere el art.47 de la misma Ley. Creo por tanto, que, en vez de haber inconveniente, es útil se sepa por V.E. {se refiere al Ministro de Culto} y los Gobiernos Provinciales quienes son la personas que ejercen tales cargos"* ("Antecedentes...", cit., p.519). Curioso argumento: se debe registrar a los pastores, para poder sancionarlos.

⁷¹⁸ El 17 de noviembre de 1877 el presidente Avellaneda avaló un dictamen del Procurador General de la Nación desestimando el registro de quien se presentaba como presidente de la "Congregación Israelita" ("Antecedentes...", cit., p.515) por considerar que tal registro correspondía a las provincias y no a la Nación.

"lo único que se exige de esos Pastores es que acrediten su carácter á los efectos del registro de sus firmas en este Departamento, que es el llamado a legalizar partidas ó documentos emanados de sus Iglesias".

Recuerda que

"antes de dictarse la Ley del Registro Civil, dichos Pastores llevaban registros, inscribiendo en ellos nacimientos , matrimonios y defunciones. De sus asientos ó partidas otorgan testimonios que necesitan ser autenticados oficialmente; pero como no sería regular proceder al registro de firmas sin previa acreditación del carácter con que dichos Pastores aparecen suscribiendo tales documentos, se les exige la presentación oficial de sus nombramientos, y hallados en forma, se les anota en el Registro especial que este Ministerio lleva al efecto"⁷¹⁹.

Las conclusiones que pueden extraerse de estos antecedentes son varias.

En primer lugar, que el registro o reconocimiento de los ministros de culto no católicos tuvo una finalidad puramente instrumental, en tanto ellos cumplían funciones de oficiales del registro civil, y en cuanto tales registraban con valor legal nacimientos (en rigor, bautismos), matrimonios y defunciones (en rigor, sepulturas). Esas funciones dejaron de ser ejercidas a partir del establecimiento de los registros civiles provinciales por imperio de la ley 2393 del año 1888 (cuya implementación sin embargo demoró varios años en algunas provincias).

Todavía años después de ese cambio legal, como las antiguas partidas de bautismo, matrimonio y defunción seguían teniendo valor como documentos necesarios para acreditar el estado civil, siguió siendo necesario el registro de las firmas de los pastores, que expedían los correspondientes testimonios o copias de aquellos documentos. Cuando por el transcurso del tiempo se hizo poco habitual el uso de esas partidas, también perdió interés ese registro de firmas.

Pero en todo caso, lo relevante es que la designación de los ministros de culto, y la acreditación de su condición de tales, siempre fue

⁷¹⁹ "Antecedentes...", cit., p.521.

facultad propia de las mismas iglesias o comunidades religiosas, de acuerdo con sus propias reglas.

b) Legislación vigente

La ley *de facto* 21.745, todavía vigente, no menciona siquiera a los ministros de culto, y se limita a imponer la inscripción en el Registro Nacional de Cultos de las

“organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del Estado Nacional, que no integren la Iglesia Católica Apostólica Romana” (art.1).

Su reglamentación, Decreto 2037/79, tampoco menciona a los ministros de culto. Esta defectuosa norma apenas concibe a las iglesias o comunidades religiosas (a las que tampoco llama por su nombre) como “entidades” o “instituciones religiosas”; y por lo tanto únicamente habla de sus “autoridades” (artículos 2 incisos b y e, 3 inciso c y h, y 8). Sin embargo, exige el registro de “los estudiantes y seminaristas de las entidades reconocidas” (art.2 inc.c) y ordena a las “instituciones” presentar sus planes de estudios, como ya vimos en el capítulo 11.

En cambio, la norma de creación del antecesor del Registro (el “Fichero de Cultos”), sí obligaba al registro de los ministros religiosos.

Las normas de aplicación dictadas por la Secretaría de Culto, precisan que las entidades religiosas para inscribirse en el Registro Nacional de Cultos deben presentar

*“Original o copia autenticada de los certificados que acrediten la capacitación religiosa recibida por cada una de las autoridades religiosas, para el supuesto que éstas existiesen. En caso de no poseer el certificado se aceptará una carta de referencia otorgada por un ministro religioso con firma registrada en la Dirección General del Registro Nacional de Cultos o por la máxima autoridad religiosa de una organización religiosa inscripta. También, la mencionada capacitación podrá acreditarse por cualquier otro medio reconocido por la propia entidad religiosa peticionante de inscripción”*⁷²⁰.

También deben ser informadas las normas estatutarias de la institución religiosa de que se trate, que incluyan las referidas a

⁷²⁰ Resolución 2092/2005 de la Secretaría de Culto, art.2 (BO 7/10/05).

“autoridades religiosas —nombramiento, ordenación, funciones, duración del mandato, requisitos para ser ministros religiosos—”; y “Copia simple de los programas de estudio que se consideran aptos para la formación del personal religioso de la iglesia o comunidad religiosa”.

En los formularios de aplicación se exige informar las distintas “jerarquías” religiosas, y las condiciones para alcanzar cada una de ellas, informando también los datos de quienes ostentan tales jerarquías al momento de pedir la inscripción.

Estas obligaciones son meramente informativas, y no suponen ninguna intervención del Estado en la selección o designación de los ministros de culto, sino simplemente una toma de conocimiento de las normativas propias de cada grupo religioso para la determinación de quienes revisten esa calidad, aunque se advierte cierta confusión entre la calidad de ministro de culto, y la de autoridad o “jerarquía” de la institución religiosa.

Sin embargo, en la praxis administrativa, no han faltado conductas desorbitadas en esta materia, que demuestran la necesidad de contar con una legislación de mejor calidad que permita evitar los abusos por parte de los funcionarios.

En un caso se llegó a la prohibición de un grupo religioso (con la extrema consecuencia de prohibirle existir como sujeto de derecho, y de realizar actos de culto), por la “falta” consistente en no someter a la oficina administrativa encargada del registro de los cultos, los programas de estudio de sus monjes. El fundamento de una medida tan insólita y totalitaria, pese a haber sido tomada por un gobierno que se decía democrático, fue que

“un Estado no tiene más que una autoridad precaria cuando hay en su territorio personas que ejercen gran influencia en los espíritus y en las conciencias sin que ellos le estén subordinados, al menos bajo alguna relación, al Estado. [...] La tranquilidad pública no está ciertamente asegurada si se prescinde de saber quiénes son los ministros del culto, lo que les caracteriza y lo que los distingue de los simples ciudadanos o ministros de otros cultos, si se ignora bajo qué disciplina entienden ellos vivir, qué reglamentos prometen observar”⁷²¹.

⁷²¹ Resolución 18/2006 de la Secretaría de Culto (BO 24/1/06). En ella y con el único argumento de que “no ha presentado los programas de estudio de los seminarios, facultades o establecimientos de enseñanza habilitados para la preparación del personal religioso”, el Estado

Frente a semejante extravío, que no responde a una práctica habitual sino que fue una insólita excepción, conviene recordar lo dicho por la Corte Suprema, en referencia a la libertad religiosa:

“dicho derecho significa, en su faz negativa, la existencia de una esfera de inmunidad de coacción, tanto por parte de las personas particulares y los grupos, como de la autoridad pública. Ello excluye de un modo absoluto toda intromisión estatal de la que pueda resultar la elección forzada de una determinada creencia religiosa, coartando así la libre adhesión a los principios que en conciencia se consideran correctos o verdaderos. En su faz positiva, constituye un ámbito de autonomía jurídica que permite a los hombres actuar libremente en lo que se refiere a su religión, sin que exista interés estatal legítimo al respecto, mientras dicha actuación no ofenda, de modo apreciable, el bien común. Dicha autonomía se extiende a las agrupaciones religiosas, para las cuales importa también el derecho a regirse por sus propias normas y a no sufrir restricciones en la elección de sus autoridades ni prohibiciones en la profesión pública de su fe.”⁷²².

Huelga decir que, en el caso de confesiones religiosas que carecen de una autoridad central o única, que pueda definir o identificar a quienes se considera ministros religiosos, como es el caso por ejemplo del judaísmo, habrá que estar a lo que cada comunidad disponga en la materia, aunque no sea reconocido por otras comunidades pertenecientes a la misma religión.

Así por ejemplo, pese a que en la Argentina funciona el prestigioso Seminario Rabínico Latinoamericano, que forma candidatos al rabinato para todos los países y comunidades de habla hispana, existen también rabinos formados en otras instituciones, aunque no sean reconocidos unánimemente como tales, lo que ha llegado incluso a los estrados judiciales⁷²³.

Dicho en otros términos, no corresponde que el Estado privilegie un lugar de formación o acreditación de ministros de culto por sobre

Nacional prohibió la existencia y funcionamiento en la Argentina de un grupo religioso budista (Nichiren Shoshu) a pesar de su acreditada existencia desde hace varios siglos en el Japón y otros lugares. La resolución fue revocada meses después, previa acción judicial del grupo afectado.

⁷²² Voto de los Dres. Boggiano y Cavagna Martínez en: CSJN, 06/04/1993, “Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar” (B-605.XXII), ED 153-249 y LL 1993-D-126.

⁷²³ CS, 06/03/2001, “Horowitz, Israel c. Cuperstein, Peisah”, inédito.

otro, sino que es cada comunidad religiosa la que tiene competencia para hacerlo.

12.1.1 El caso de los obispos de la Iglesia Católica

Una notable y aparente excepción al principio según el cual el Estado debe abstenerse de intervenir en la designación de los ministros de culto, ocurre nada menos que en relación a los obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Al respecto, conviene recordar que bajo la Constitución de 1853, el Estado Nacional se había atribuido a sí mismo el ejercicio del Patronato Nacional, argumentando haberlo heredado de la Corona de España a partir de la independencia, por tratarse de un atributo de la soberanía y no, como entendía la Santa Sede, de una concesión personal a los soberanos⁷²⁴. De tal modo, la Constitución daba continuidad a una praxis abusiva que se había impuesto a partir de 1810, y señaladamente durante el gobierno dictatorial de Juan Manuel de Rosas (1835-1852), quien se había arrogado el derecho de desconocer designaciones de obispos, entre otras atribuciones⁷²⁵.

Bajo dicho régimen, la designación de "*obispos para las iglesias catedrales*" estaba sujeta a un trámite en el que intervenían los tres poderes del Estado⁷²⁶. Según el texto y la praxis constitucional, producida una vacante episcopal, el Senado de la Nación elaboraba una terna de candidatos al cargo, que era remitida al Poder Ejecutivo. De esa terna, el Presidente de la Nación seleccionaba a un candidato, y lo "presentaba" al Papa, mediante una carta autógrafa, requiriendo se le proveyera al elegido la "investidura canónica". Finalmente, recibida la bula de designación emanada de la Santa Sede, debía ser girada a la Corte Suprema para que le otorgase el correspondiente *exequátur*⁷²⁷.

⁷²⁴ Para una explicación amplia del tema, ver LEGÓN, Faustino, "Doctrina y ejercicio del Patronato Nacional", Buenos Aires, Lajouanne, 1920; y LAFUENTE, Ramiro, "Patronato y Concordato", Buenos Aires, Editorial RL, 1957.

⁷²⁵ Cfr. FRONZA, Javier, "Inspiraciones constitucionales con respecto al factor religioso en la Argentina (en torno al Bicentenario Patrio)", AADC XIX (2013), p.57.

⁷²⁶ Ver una explicación detallada y una exhaustiva presentación histórica del tema, en KAUFMANN, José Luis, "La presentación de obispos en el Patronato Regio y su aplicación en la legislación argentina", Buenos Aires, Dunken, 1996.

⁷²⁷ La Corte Suprema consideró que el *exequátur* era también exigible para el caso de designación de un Administrador Apostólico, en el caso "Boneo" del año 1925 (FALLOS 142-342), porque "La

Una vez obtenido, el obispo designado era “nombrado” por el Presidente, quien le tomaba juramento en un acto público y solemne, en la casa de Gobierno, de fidelidad a la Constitución y a las leyes⁷²⁸.

Ese procedimiento nunca fue formalmente aceptado por la Santa Sede. Sin embargo, en la práctica se alcanzó lo que se llamó el *modus vivendi*, que permitía a cada una de las partes obrar según su propia convicción y guardando la apariencia de cumplir los procedimientos establecidos por su propia legislación, sin que se produjese un conflicto.

Ello se lograba así: la confección de la terna de candidatos al episcopado (lo que ocurría muy de tanto en tanto, porque había muchas menos diócesis que las que hay hoy, y menos eclesiásticos destacados para cubrirlas, lo que reducía las posibilidades de elección) era precedida por una discreta consulta con la autoridad eclesiástica tendiente a acordar el nombre del candidato a designar. De tal modo, el candidato deseado por Roma estaba siempre en la terna, y resultaba ser el “elegido” por el Presidente. La carta de “presentación” era enviada a Roma, y en Roma era ignorada. El Papa designaba a quien quería designar (que “casualmente” era el propuesto por el Gobierno), y lo comunicaba como una decisión propia y sin hacer referencia a la presentación previa. El interesado se ocupaba de presentar la bula de designación al Gobierno, y éste a la Corte, que le daba el *exequátur*⁷²⁹, al comprobar que el designado era efectivamente el previamente presentado por el Presidente.

Constitución en los incisos 8º y 9º del artículo 86 y 19 del artículo 67 ha consagrado el derecho de Patronato en términos tan categóricos que no admiten discusión alguna sobre su existencia", "por lo que el nombramiento de Monseñor Boneo para el cargo de Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Buenos Aires, vacante por fallecimiento de su arzobispo titular... realizado por el Sumo Pontífice de propia autoridad, ... sin intervención ni conocimiento del Patrono, pugna con el artículo 86, inciso 8º de la Constitución y vulnera, consiguientemente, los derechos del Patronato Nacional". En el mismo fallo la Corte declaró inaplicable en la Argentina el Código de Derecho Canónico de 1917, "pues no existe ley alguna del Honorable Congreso que lo haya expresamente admitido, de acuerdo con lo dispuesto por la segunda parte del inciso 9º del artículo 86 de la Constitución", por lo que reputó aún vigentes a las Leyes de Indias en cuanto regulaban el ejercicio del Patronato. La norma constitucional invocada requería aprobación del Congreso para las "bulas, breves o rescriptos" del Papa o de los Concilios que fuesen a tener aplicación general en la República, pero nunca se aplicó a norma alguna.

⁷²⁸ Sobre el origen y antecedentes del juramento y su aplicación en España, ver el interesante trabajo de VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, Jose Maria, "Notas sobre el juramento de fidelidad de los obispos a la autoridad política en España", en VARIOS AUTORES, "Estudios en homenaje al profesor Martínez Valls", vol.II, Universidad de Alicante, Alicante, 2000, p.715-723.

⁷²⁹ La fórmula utilizada era: "Con las reservas que emanan de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas con arreglo a ella respecto del Patronato Nacional, corresponde que la Corte Suprema preste su acuerdo para que el Poder Ejecutivo conceda el pase a la Bula por la que el

La solemne ceremonia de juramento (que no estaba impuesta por el texto constitucional pero se mantenía como una costumbre impuesta desde las primeras décadas de la independencia) se prestaba con una fórmula ambigua, donde el obispo hacía formal protesta de respeto y acatamiento a las leyes del patronato, “salvas las leyes de Dios y de la Iglesia”.

El mecanismo resultó suficientemente aceitado para no generar inconvenientes, ni aún en los períodos de incomunicación formal entre Roma y Buenos Aires por la ruptura de relaciones diplomáticas. El único caso de conflicto, por cierto de relativa gravedad, se produjo en 1923, cuando al quedar vacante el arzobispado de Buenos Aires, el presidente Alvear se empeñó en proponer para el cargo a Mons. Miguel de Andrea (por ese entonces, y luego hasta su muerte, obispo de Temnos *in partibus infidelibus*), designación no aceptada por la Santa Sede. El conflicto se extendió muchos meses, hasta que finalmente Mons. De Andrea presentó su renuncia a la postulación (ante el Presidente que lo había propuesto) y se nombró a otro obispo siguiendo el *modus vivendi* habitual.

Respecto de otros ministros de culto católicos que no fueran los obispos, en 1886 y en una época de conflicto y ruptura de relaciones con la Santa Sede, el Poder Ejecutivo reglamentó la designación y remoción de curas párrocos, con fundamento en las Leyes de Indias que consideró subsistentes en esa materia⁷³⁰. El decreto dispuso que los curas párrocos nombrados en forma interina en la Capital se convirtieran en "curas propietarios", que ante alguna vacante el Arzobispo debiera dar cuenta al Gobierno y llamar a concurso para cubrirla, y que los gobernadores de provincia, en su carácter de "Agentes del Gobierno General", procedieran del mismo modo en sus jurisdicciones. Todo ello, en ejercicio del Patronato.

En el año 1906, el Gobierno Nacional intentó reglamentar el ejercicio del Derecho de Patronato, mediante un decreto, en el

Sumo Pontífice instituya Obispo de la Diócesis de... a su Excelencia Reverendísima Monseñor Doctor...”.

⁷³⁰ Es el Decreto del 31 de julio de 1886, firmado por el presidente Julio A. Roca y su ministro Eduardo Wilde, que dice aplicar la Ley 24, título 6º, libro 1º; y la Ley 35, título 8º, libro 1º de "la Recopilación de Indias", así como normas del Concilio de Trento.

que se pretendía extender la intervención del Estado a la designación de otros oficios eclesiásticos además de los obispos, iniciativa que no prosperó⁷³¹.

A partir de 1958, se fueron dando sucesivos pasos para flexibilizar el procedimiento de designación de obispos⁷³², hasta llegar a la firma del Acuerdo de 1966, que terminó con él y puso fin al Patronato⁷³³. Algunos de esos cambios fueron formales pero significativos, como modificar la fórmula del Decreto del Presidente de designación de los obispos (en lugar de decir “*nómbrese obispo...*”, decir “*S.E.R. NN revistará en el cargo de obispo de...*”; o reemplazar el juramento solemne y público por un acto privado ante el Presidente de la Nación.

Como vestigio del anterior sistema subsiste en el Acuerdo de 1966 el sistema llamado de “pre notificación oficiosa”, por el cual, antes de hacer público el nombramiento de un obispo, la Santa Sede realiza una consulta reservada (secreta) con el Gobierno, posibilitando que éste presente objeciones de “carácter político general” al candidato. Esa objeción no es vinculante para la Santa Sede, que puede de todos modos designarlo. Si bien se trata de una forma de injerencia estatal en el funcionamiento interno de la Iglesia, el sistema ha sido defendido como forma de reconocimiento del *status* preferencial que la Iglesia Católica tiene en el país⁷³⁴.

⁷³¹ Ver el texto completo del proyecto en KAUFMANN, op. cit., p.170. Se refería a la designación de “dignidades, canonicías, raciones y medias raciones de las iglesias catedrales”, y vicarios generales (que se proyectaba que fueran nombrados por los obispos pero comunicado el nombramiento al Poder Ejecutivo para su reconocimiento).

⁷³² Así, por decreto 1709/64 del 10 de marzo de 1964 se dispuso que “*a partir de la fecha no se exigirá de los señores arzobispos u obispos designados para gobernar arquidiócesis o diócesis de la República Argentina el juramento*” (art.1), al que se consideraba “*como todas las implícitas en el Derecho de Patronato, una facultad y no un deber, a cuyo ejercicio el Gobierno nacional puede renunciar en obsequio de la Iglesia, como prueba fehaciente del respeto que le inspira y de la confianza que le merecen las relevantes condiciones de quienes integran su jerarquía*” (ver en ADLA 1964-A-302). Ver CENTENO, Ángel M., “Cuatro años de una política religiosa”, Editorial Desarrollo, Buenos Aires, 1964.

⁷³³ Sobre el Acuerdo de 1966, aprobado por ley 17032 (BO22-12-66), ver FRÍAS, Pedro, “El Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina”, Córdoba, 1986; PADILLA, Norberto, “A treinta años del Acuerdo con la Santa Sede”, Buenos Aires, Secretaría de Culto, 1996; y las intervenciones del cardenal Agostino CASAROLI y los Dres. Ariel BUSSO, Pedro J. FRÍAS y Ángel CENTENO, en “El Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina del 10 de octubre de 1966” en Anuario Argentino de Derecho Canónico, Vol.III (1996) pp.354-409.

⁷³⁴ CASAROLI, Agostino, en su conferencia mencionada en la nota anterior. El sistema de pre notificación oficiosa aparece más o menos en los mismos términos en otros concordatos o acuerdos vigentes (Concordato con República Dominicana de 1954, art. V; con Colombia de 1973,

La norma del Acuerdo de 1966 (art.3), dice:

“El nombramiento de los arzobispos y obispos es de competencia de la Santa Sede. Antes de proceder al nombramiento de arzobispos y obispos residenciales, de prelados o de coadjutores con derechos a sucesión, la Santa Sede comunicará al Gobierno Argentino el nombre de la persona elegida para conocer si existen objeciones de carácter político general en contra de la misma. El Gobierno Argentino dará su contestación dentro de los 30 días. Transcurrido dicho término el silencio del Gobierno se interpretará en el sentido de que no tiene objeciones que oponer al nombramiento. Todas estas diligencias se cumplirán en el más estricto secreto. Todo lo relativo al Vicariato Castrense continuará rigiéndose por la Convención del 28 de junio de 1957. Los arzobispos, obispos residenciales y los coadjutores con derecho a sucesión serán ciudadanos argentinos.”

El “reconocimiento administrativo” se produce mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En el caso de los obispos auxiliares, el reconocimiento se realiza por resolución del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto⁷³⁵. En el caso de los administradores diocesanos que rigen las diócesis en caso de sede vacante⁷³⁶, esa facultad ha sido subdelegada en el Secretario de Culto⁷³⁷.

El régimen es enteramente aplicable a los obispos católicos de rito oriental (eparcas o exarcas), a pesar de que no hayan sido expresamente mencionados en el Acuerdo de 1966. Esa omisión era habitual en los concordatos de esa época y recién fue corregida en los más recientes, pero no puede de ninguna manera interpretarse en el sentido de que respecto de

art. XIV –requisito suprimido en el acuerdo no ratificado de 1992–; Modus Vivendi con Ecuador de 1937, art. VII; Convenio con Mónaco, 1981, art. II; Acuerdo con España de 1976, art. I; Modus vivendi con Túnez de 1964, art.10; Acuerdo con Venezuela de 1964, art.VI), aunque la tendencia en los más recientes es limitarse a una simple notificación de cortesía previa a la publicación (Acuerdo con Perú de 1980, art. VII; Polonia 1993, art.7; Albania 2002, art.5; Croacia 1996, art.6; Andorra 2008, art.2; Letonia 2000, art.5; Lituania 2000, art.6; Eslovaquia 2000, art.6; Estonia 1995, art.5; Gabón 1997, art.7), o incluso posterior (Portugal 2004, art.9; Kazajistán, 1998, art.5).

⁷³⁵ En virtud de la delegación de facultades realizada por Decreto 2109/90 (BO 17/10/90).

⁷³⁶ El Decreto 87/90 (BO 22/1/90), delegó esta facultad en el Ministro, pero utilizando una terminología canónica anticuada, ya que habla de “Vicarios Capitulares” (y de “Gobernadores eclesiásticos” en el caso de ausencia temporaria del obispo).

⁷³⁷ Resolución 3114/2000 del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, art. 5.

ellos siga siendo exigible el exequátur, a pesar de que así parece darlo a entender algún decreto del Poder Ejecutivo⁷³⁸.

Desde luego, la razón o interés para esta injerencia estatal no está vinculada a la condición de ministros de culto que poseen los obispos, sino a su condición de autoridades o cabeza de las iglesias locales. Sin embargo, en la medida en que ambas calidades coinciden en la misma persona, termina siendo una intromisión del Estado en la designación de los ministros de culto de la máxima jerarquía dentro de una confesión religiosa determinada.

Esa intervención es aún más intensa en un caso particular, que es el del obispo castrense⁷³⁹. Según el Art. IV del acuerdo específico entre la Argentina y la Santa Sede de 1957, el Vicario Castrense, que debía ser obispo, debía ser nombrado

*“por la Santa Sede previo acuerdo con el Señor
Presidente de la República Argentina”*

Cuando en 1966 se firmó el Acuerdo entre la Argentina y la Santa Sede que puso fin al régimen de Patronato, y que para la designación de obispos residenciales en general estableció el régimen de pre notificación oficiosa recién examinado (art. III), expresamente se mencionó que para todo lo relativo al Vicariato Castrense subsistía y se seguiría aplicando el régimen de 1957. Esta norma tampoco se modificó en la revisión de 1992, del Acuerdo de 1957.

12.2 Remoción de ministros religiosos

El caso simétrico al anterior (designación de los ministros) es el de la remoción de ellos de sus funciones.

⁷³⁸ Decreto 35/2007 (BO 26.1.07) referido al Exarcado Greco Melquita de la Argentina. Ver al respecto: NAVARRO FLORIA, Juan G., “Las circunscripciones eclesiásticas (católicas) de rito oriental en la Argentina, o la resurrección del exequátur” (LL 2007-D-814). También el Decreto 2614/90 del 10 de diciembre de 1990, referido a la erección de la Eparquía San Charbel en Buenos Aires de los Maronitas había expresado -erróneamente- que en caso de erección de una jurisdicción personal como esa, “las decisiones de la Santa Sede requieren el reconocimiento del Estado para poder cumplirse en el territorio de la Nación” (BO 21/1290, INFOJUS DN19900002614).

⁷³⁹ Sobre este particular, ver NAVARRO FLORIA, Juan G., “Precisiones jurídicas en torno al Obispado Castrense de Argentina”, LL Actualidad 2/6/05; PADILLA, Norberto y NAVARRO FLORIA, Juan G., “Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas”, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires, 1997.

Naturalmente, también en este caso debe ser materia privativa de las confesiones religiosas la decisión correspondiente y su ejecución, sin que quepa ninguna intervención estatal al respecto. Los tribunales estatales son incompetentes en esta materia⁷⁴⁰.

Ello no obstante, se ha dado en la historia la ocurrencia de casos en su momento graves, donde el Estado pretendió apropiarse de esa función.

Durante la vigencia del régimen del Patronato, del mismo modo que el Estado se creía con derecho a designar obispos católicos, se creyó también con derecho a decretar su cesantía. Así ocurrió durante el conflicto entre el primer gobierno del presidente Roca con la Iglesia Católica, cuando por decreto fue “destituido” el Vicario Capitular de la diócesis de Córdoba, Mons. Jerónimo Clara, y luego también el obispo de Salta, Mons. Risso Patrón.

En circunstancias totalmente diversas y en tiempo reciente, un episodio similar ocurrió en relación al entonces obispo castrense, Mons. Antonio Baseotto, también “dejado cesante” por el Presidente de la Nación, en una decisión claramente violatoria, al menos, del espíritu del Acuerdo de 1957 entre la República Argentina y la Santa Sede sobre jurisdicción castrense y atención religiosa a las Fuerzas Armadas⁷⁴¹. Una posterior sentencia judicial decretó la nulidad de ese acto administrativo⁷⁴², y otra posterior reconoció al obispo indebidamente cesantado el derecho a percibir la jubilación que le correspondía por su cargo⁷⁴³.

La sentencia de la Cámara Federal en este caso, fue clara:

"El Poder Ejecutivo Nacional, carecía de facultades unilaterales para disponer la remoción del Sr. Obispo Castrense, Mons. Antonio Juan Baseotto, por tratarse de un acto jurídico complejo que necesariamente hubiera requerido de un estudio o acuerdo previo con la Santa Sede, omisión que connota el

⁷⁴⁰ Así es también en los Estados Unidos: cfr. CELADOR ANGÓN, Óscar, “Estatuto jurídico de las confesiones religiosas en el ordenamiento jurídico estadounidense”, Dykinson, Madrid, 1998, p.157.

⁷⁴¹ El Decreto 220/05 (BO 21/3/05) formalmente “dejó sin efecto el acuerdo” que había sido prestado a la designación del obispo, derogó el decreto 2499/02 por el que se lo había designado en el cargo (pese a ser una norma que ya había agotado su efecto) y suspendió el pago de la remuneración asignada al cargo.

⁷⁴² JNCrim.Corr.Fed., Juzgado 1, "Baseotto Antonio s/apología del crimen", 08/07/2005 (Sentencia firme).

⁷⁴³ C.Fed.Seg.Soc, sala II, 12/9/2013. Exp.30185/2010, "Baseotto, Antonio c. Estado Nacional".

incumplimiento de lo previsto por el art.7º inciso a) de la ley 19.549⁷⁴⁴, al haber sido dictado por autoridad incompetente. {...} Por todo lo expuesto, se considera nulo el Decreto 220/2005"

En relación a las iglesias y comunidades religiosas no católicas, no se conocen antecedentes en los que el Gobierno hubiera pretendido disponer por sí la remoción de autoridades, o de ministros de culto.

12.3 Identificación de los ministros religiosos

Tal como ya se ha visto, hay lugares y circunstancias donde contar con una identificación es especialmente necesario, para que el ministro religioso pueda realizar actos propios de su ministerio, en ámbitos sujetos a control más o menos estricto de la autoridad pública. Fundamentalmente, cuando debe ejercer su ministerio respecto de personas internadas en cárceles, hospitales, asilos o lugares semejantes; o respecto de miembros de fuerzas armadas o de seguridad. Según los casos puede ser suficiente la identificación provista por su propia comunidad religiosa de pertenencia, o puede resultar conveniente (e incluso exigida por las normas) una identificación otorgada por la autoridad pública.

En la Argentina, las llamadas “credenciales eclesiásticas” fueron instituidas por el decreto 35.336/48 del entonces presidente Perón, como respuesta al pedido de tres obispos que pedían para sus sacerdotes algún documento estatal que certificara su investidura. Huelga decir que era la época de vigencia del llamado “Patronato nacional”, previa al Acuerdo de 1966 con la Santa Sede, al Concilio Vaticano II y a la reforma constitucional de 1994, entre otros acontecimientos posteriores. Eran tiempos en que el gobierno deseaba ejercer un férreo control sobre las confesiones religiosas, como demuestra la creación simultánea del Fichero de Cultos⁷⁴⁵.

La “credencial eclesiástica”, según aquel decreto, debían “poseerla con carácter obligatorio”,

⁷⁴⁴ Se trata de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.

⁷⁴⁵ Decreto 31814/48 (ADLA VIII-754). Sobre sus antecedentes, contenido y evolución posterior, ver Navarro Floria, Juan G., "Las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica en el derecho argentino" (El Derecho, 151-897).

“todos los Arzobispos, obispos, sacerdotes de las curias, personas del clero secular; del clero regular; las religiosas de todas las congregaciones, los hermanos y legos, del Culto Católico Apostólico Romano, que actúan en forma permanente en la República”.

Era extendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quien para ello debía confeccionar además una ficha, conteniendo la foto, datos personales, destinos y otras informaciones acerca de cada titular de la credencial. Es evidente que, por este medio, se buscaba tener “fichado” a todo el clero y personal religioso de la Iglesia Católica⁷⁴⁶ lo que demuestra, una vez más, la equívoca relación de favor/dominación establecida por los gobiernos de la época sobre la Iglesia⁷⁴⁷.

La norma mantuvo su vigencia formal durante décadas, manteniendo como organismo encargado de aplicarla a la actual Secretaría de Culto⁷⁴⁸. Curiosamente, no había una previsión análoga referida a los ministros religiosos de las iglesias y comunidades distintas de la católica⁷⁴⁹.

⁷⁴⁶ Un antecedente inmediato de esa norma fue el decreto 11576 del 26 de abril de 1946, firmado por el presidente Farrell, que con fundamento en el art.2 de la Constitución y en los derechos del Patronato, organizaba el "Fichero Oficial del Culto Católico Apostólico Romano", en el que debían constar datos completos de todos los integrantes del clero católico, y de las órdenes y congregaciones religiosas.

⁷⁴⁷ Refuerza esa idea el hecho de que, según el decreto original, era obligación de los obispos gestionar la credencial eclesiástica, y el consiguiente fichado, para *“todos los miembros del clero secular y regular incardinados en su jurisdicción y para las religiosas que actúen dentro de la misma”*; obligación que se extendía a los provinciales o superiores de *“las órdenes exentas de jurisdicción episcopal”*.

⁷⁴⁸ Así, el decreto 876/96 que aprobó la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, enuncia dentro de los “objetivos” de la Secretaría de Culto, *“el otorgamiento de las credenciales eclesiásticas”* (art. 4º). Del mismo modo, la Resolución Ministerial 4006/97, encomendó a la Dirección de Arzobispados y Obispados de la Dirección General de Culto Católico, entre sus “acciones”, *“confeccionar las credenciales eclesiásticas”*. Esas disposiciones se han venido manteniendo en todos los decretos y resoluciones posteriores que reglamentan las funciones de la Secretaría de Culto y la Dirección Nacional de Culto Católico que de ella depende. La última de esas normas es el Decreto 411/2016, que encomienda a la Secretaría de Culto *“el otorgamiento de las credenciales eclesiásticas”*.

⁷⁴⁹ El muy defectuoso decreto 2037/79 (BO4/9/79, ADLA XXXIX-C-2570) solamente manda fichar a las *“autoridades de las instituciones inscriptas”* en el Registro Nacional de Cultos (art.2 inc. b), y a *“los estudiantes y seminaristas”* (inc. c), pero no a los ministros, lo que genera no pocos problemas, sobre todo porque, como hemos visto, otras normas reclaman la presentación de una credencial o constancia de inscripción expedida por ese Registro. El “Fichero de Cultos” que fue el antecedente del actual Registro, sí mandaba identificar a los “ministros” (decreto 1.127/59, art.3 inc. b).

En la práctica, su aplicación se fue distorsionando. La finalidad de control fue abandonada, olvidándose la obligatoriedad formalmente impuesta por la norma, aunque los obispos católicos siguieron recibiendo –una vez reconocida su designación por el Estado- una credencial igual a la de los funcionarios de la Cancillería, como si fuesen funcionarios públicos, práctica que se mantuvo aún luego de extinguido el Patronato⁷⁵⁰. De manera que la credencial mutó en un privilegio para algunos.

Pero en el año 1998, el sistema fue vivificado mediante el dictado del decreto 1233/98⁷⁵¹, invocando curiosos fundamentos⁷⁵². Por una parte suprimió la obligatoriedad del fichado de todo el clero y personal religioso, manifiestamente abusiva e innecesaria, al derogar expresamente el decreto 35336/48; y por otra limitó la expedición de credenciales

“que acrediten su condición de tales a los arzobispos, obispos y preladados con jurisdicción equivalente en la Iglesia Católica Apostólica Romana y a los superiores mayores de los institutos de vida consagrada reconocidos con arreglo a las disposiciones de la ley nº 24483”.

Expedirlas es una obligación de la Secretaría de Culto (el art.1º del decreto es imperativo), y solicitarlas es una facultad de los interesados, que no pueden ser obligados a ello. Por otra parte, se suprimió también la exigencia de que la credencial sea presentada al momento de realizar cualquier trámite o gestión ante el Estado, así como la de citar su número en cualquier presentación que se hiciera, obligaciones ambas ya entonces en desuso.

El decreto se refiere también en los considerandos al *“resto del clero y a los miembros de los institutos de vida consagrada”*, para quienes prevé que sus propios superiores (se entiende: los obispos en un caso, y los superiores mayores en el otro) sean quienes expidan sus credenciales;

⁷⁵⁰ También unos pocos sacerdotes seculares o superiores religiosos, avisados de la existencia de las credenciales, pedían y obtenían una.

⁷⁵¹ De fecha 22 de octubre de 1998, publicado en el Boletín Oficial el 28 del mismo mes.

⁷⁵² Se dijo allí que “en la actualidad no resulta *imprescindible* que el Estado ejerza un control sobre el clero católico...”, cuando en verdad tal control resulta inadmisibile en un marco de libertad religiosa. El decreto dice que “*a pesar de no ser funcionarios estatales*” (lo que es cierto) “*resulta conveniente*” que esos dignatarios “*reciban una credencial que los acredite como tales, con fundamento en la norma del artículo 2º de la Constitución Nacional y la consiguiente obligación del Gobierno Federal de colaborar con la acción de la Iglesia Católica*”. Sobre este decreto, ver NAVARRO FLORIA, Juan G., “La identificación de los ministros religiosos católicos en la Argentina”, AADC vol.VI, 1999, p.183.

aunque al mismo tiempo, obliga a que sean legalizadas por la autoridad estatal (*"debiendo ser legalizadas"*, dice)⁷⁵³. Pero en la parte dispositiva, encomienda a la Secretaría de Culto tanto *"aprobar el diseño y demás características y condiciones en que serán extendidas"* las credenciales para el clero y los religiosos, cuanto *"establecer las autoridades que podrán expedirlas"*. No se entiende por qué esa intervención estatal respecto de una identificación que corre por cuenta de la propia autoridad eclesiástica.

La Secretaría de Culto ha reglamentado la forma de obtener las "credenciales eclesiásticas" (que ella misma expide) para arzobispos, obispos, clérigos y religiosos⁷⁵⁴.

Respecto de los ministros de culto no católico, subsiste la carencia de alguna identificación provista por el Estado, por lo que únicamente tendrán las que expida la propia iglesia o comunidad. Esto a pesar de que el decreto reglamentario de la Ley 24460 de ejecución de la pena privativa de la libertad⁷⁵⁵ prevé que quienes quieran ingresar a las cárceles para ejercer el derecho de asistencia religiosa a las personas allí encerradas, deberán comprobar su identidad y condición

"mediante: a) Comprobante extendido por la correspondiente autoridad eclesiástica para los miembros de la religión Católica Apostólica Romana; b) Comprobante extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para los representantes de otros credos".

Cabe recordar que en el derecho internacional humanitario, como se ha visto en el capítulo correspondiente, existen previsiones expresas para la identificación del personal religioso (capellanes y

⁷⁵³ En el derecho comparado encontramos el caso del **Ecuador**, donde el Decreto Ejecutivo 1682 de enero de 2000 (Reglamento de Cultos), establece que *"Por encargo de los ordinarios diocesanos y conforme a los datos proporcionados por ellos, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana conferirá un carácter, un carnet, cédula o documento, que certifique la calidad de diácono y sacerdote. Para los ministros de otros cultos, el representante legal del respectivo culto en el Ecuador conferirá dicho documento"* (art.16). No dice quién otorga las identificaciones a los obispos.

⁷⁵⁴ Resolución 133/2016, BO 6/7/2016).

⁷⁵⁵ Decreto 1136/97 (BO 30/10/97), art.99.

otros) en tiempo de guerra, en orden a la protección que les es debida y a las facilidades que les deben ser otorgadas para el ejercicio de su ministerio⁷⁵⁶.

Hay que señalar también, que la identificación obligatoria de los ministros de culto, previa certificación de su condición de tales por la confesión religiosa a la que pertenecen, ha sido propiciada por alguna doctrina, para dar publicidad a esa condición y también en razón de la especial protección que reciben⁷⁵⁷.

12.3.1 Pasaportes oficiales

Los cardenales, arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, tienen derecho a recibir (y de hecho habitualmente reciben) un “pasaporte oficial” de la República Argentina, expedido por la Cancillería (decreto 1636/2001)⁷⁵⁸. Les es otorgado por el plazo de cinco años, con obligación de devolverlo en caso de *“finalizar las circunstancias por las cuales fue otorgado”*.

Es otro resabio de la práctica patronatística, que consideraba a los obispos funcionarios del Estado. De hecho, el Decreto que regula la materia se refiere a

“documentación de viaje de los funcionarios nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad de Buenos Aires”, y su familiares, “para facilitar el cumplimiento de misiones oficiales en el exterior”.

Los obispos católicos (no hay previsión equivalente para ministros o dignatarios de otros credos) son los únicos que sin ser funcionarios públicos o familiares directos de funcionarios públicos en misión oficial tienen derecho a estos pasaportes oficiales. Huelga decir que los ministros de culto de otras confesiones religiosas (y aún los demás ministros de culto católico, que no son obispos) carecen de este beneficio.

⁷⁵⁶ Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), del 8/6/1977, aprobado por ley 23379 (BO 9/6/1988), al que adhirió la Argentina el 26/11/1986, art.18.

⁷⁵⁷ MOTILLA DE LA CALLE, Agustín, "Ley Orgánica de libertad religiosa y acuerdos con las confesiones: experiencia y sugerencias *de iure condendo*", en NAVARRO VALLS, Rafael, MANTECÓN SANCHO, Joaquín y MARTINEZ TORRÓN, Javier (coords.), "La libertad religiosa y su regulación legal", IUSTEL, Madrid, 2009, p.871.

⁷⁵⁸ BO 17/12/01. Anteriormente los cardenales recibían un pasaporte diplomático (decreto 1.131/59, art.4º inc.g), y el resto de los obispos pasaportes oficiales (art.7 inc.b)).

Un caso único es el del papa Francisco, ciudadano argentino. Ya en ejercicio de su oficio, solicitó al Gobierno argentino la renovación de su documentación (documento nacional de identidad, y pasaporte), iguales a los de cualquier ciudadano, aunque en su fotografía luce con las vestimentas propias de su dignidad.

12.4 Remuneraciones y otorgamiento de otras facilidades para el ministerio

No existe en la Argentina una remuneración a cargo del Estado para los ministros de culto en cuanto tales, con excepción de aquellos que desempeñan alguna función específica en la Administración pública, como es el caso de los capellanes militares, policiales, hospitalarios o penitenciarios según hemos visto.

12.4.1 Asignación para los obispos católicos

La excepción, que reconoce su fundamento en el mandato del art.2º de la Constitución Nacional dado al Gobierno Federal de "sostener el culto católico apostólico romano", es la asignación mensual que reciben los obispos católicos. Una segunda aparente excepción, es otra asignación que se otorga a algunos sacerdotes (católicos) por su condición de párrocos en zonas de frontera o zonas desfavorables. Pero decimos que esta excepción es aparente, porque en verdad la asignación no la reciben los párrocos, sino la diócesis a la que pertenecen las parroquias beneficiadas, y no necesariamente ese dinero llega al párroco en cuestión.

La asignación para los obispos, en su formato actual (porque cuenta con antecedentes más antiguos) está establecida por una ley dictada durante la última dictadura militar argentina, la Ley 21950⁷⁵⁹.

Según la norma,

⁷⁵⁹ BO 15/3/1979. El modo de cálculo del haber fue reglamentado por el decreto 1216/2003 (BO 21/05/2003). Cabe aclarar que si bien en su origen tanto ésta como las demás leyes que disponen asignaciones a favor de la Iglesia Católica fueron normas "de facto" dictadas por la dictadura militar, se han seguido aplicando sin dificultad durante los gobiernos democráticos sucesivos, y finalmente han sido ratificadas en su vigencia por el Congreso al incluirlas entre las normas vigentes en el Digesto Jurídico Argentino.

"Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos"; mientras que "Los obispos auxiliares de las jurisdicciones señaladas en el artículo 1º y el Secretario General del Episcopado tendrán una asignación mensual equivalente al 70 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia hasta que cesen en dichos cargos".

No se trata de un sueldo o salario, sino de una asignación graciable. Por lo tanto, no está sujeta a descuentos o aportes para la seguridad social u otros destinos, y tampoco origina prestaciones complementarias (como el sueldo anual complementario, o aguinaldo). La percepción es incompatible con cualquier otro sueldo o asignación por parte del Estado (pudiendo el beneficiario optar por la que le sea más favorable).

Cabe preguntarse si este ingreso, que más allá de que el beneficiario pueda destinarlo a gastos de la diócesis es en principio personal para el obispo, está sujeto al pago del impuesto a las ganancias (renta). Teniendo en cuenta su fundamento (la obligación constitucional del sostenimiento del culto) y el hecho de que los servicios religiosos están exentos del pago del impuesto, pareciera que se trata de un ingreso exento para el obispo.

En caso de vacancia de la diócesis, la asignación es pagada al administrador diocesano, según dispone la Ley 22552⁷⁶⁰, a quien la norma que con terminología antigua denomina vicario capitular.

Los pagos los hace la Secretaría de Culto por intermedio de la Conferencia Episcopal Argentina, quien los distribuye entre sus destinatarios.

12.4.2 Asignación para "párrocos de frontera"

La otra asignación mencionada antes, es la que establece la Ley 22162⁷⁶¹, reglamentada por el decreto 1928/80⁷⁶², y que autoriza el pago de

⁷⁶⁰ BO 22/3/1982.

⁷⁶¹ BO 25/02/1980.

una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en *“zonas que por sus características también requieran la promoción de su desarrollo”*. Se trata de una modesta asignación mensual que a lo largo del tiempo se ha ido reconociendo a pedido de las diócesis con destino a parroquias así categorizadas, que son unas quinientas en total en toda la Argentina.

Pero la reglamentación aclara, como se dijo, que el pago de esas sumas no se hace a los párrocos sino a las diócesis correspondientes para que sea el obispo quien les dé su destino final.

12.4.3 Otras asignaciones y facilidades

El Decreto 1991/80⁷⁶³, dispone el otorgamiento de *“órdenes de pasajes a todas las personas que participan y cooperan con el fin apostólico de la Iglesia”*, entendiendo que ello *“constituye una manera de sostenimiento del Estado a la Religión Católica Apostólica Romana”*. Es un régimen en beneficio exclusivo para esta confesión.

Quienes pueden recibir pasajes a cargo del Estado son

“los Señores Arquidiocesanos, Diocesanos, Obispos Auxiliares, Superiores de Órdenes y Congregaciones Religiosas, miembros del Clero Secular y Regular, religiosos y religiosas, que necesiten viajar al exterior o desde el exterior al país o dentro del territorio nacional, por razones de su ministerio” (art.1), pero también *“los laicos que se hallan investidos con los Sagrados Ministerios, catequistas, y los seglares dirigentes de Asociaciones y Movimientos de la Iglesia Católica Apostólica Romana”* (art.2).

El pedido fundado debe presentarse ante la Dirección Nacional de Culto (hoy, Secretaría de Culto), que autorizará las órdenes de pasaje dentro del país o requerirá la orden de pasajes internacionales al Ministro del área.

En la práctica la norma tiene muy poco uso, porque la propia Iglesia desde hace ya bastante tiempo prefiere no pedir este tipo de ayudas en orden a mantener una mayor independencia. La excepción son los

⁷⁶² BO 25/09/1980. La norma original hacía equivaler la asignación al salario de la “categoría 16” del escalafón vigente en esa época, luego transformado en el “nivel C” del establecido por decreto 993/91 (decreto 628/94, BO 03/05/1994).

⁷⁶³ BO 6/10/80. Reemplazó a otros anteriores con el mismo objeto, de los años 1973 y 1977.

pasajes para los obispos en ocasión de las visitas *ad limina*, para las que sí la Conferencia Episcopal sí suele solicitar los pasajes aéreos.

Sin ser una asignación monetaria, pero sí una ayuda para el cumplimiento de sus funciones ministeriales, en la Ciudad de Buenos Aires, se ha previsto especialmente dotar de facilidades para su labor al Servicio Sacerdotal de Urgencia (católico), y a sus similares de otros credos, si los hubiera⁷⁶⁴; y también un permiso especial de estacionamiento para

“la detención momentánea de vehículos conducidos por religiosos que realicen servicios de extremaunción, ayuda espiritual, etc.” (sic), *“por un período que no exceda de sesenta minutos en aquellos lugares [en los] que rija alguna prohibición de estacionamiento”*⁷⁶⁵.

Este beneficio, como se advierte, no es exclusivo para los ministros de culto católico sino extensivo a los de otros credos.

Finalmente, es posible que existan en las distintas provincias casos especiales donde el Estado haya asumido ciertas obligaciones a favor de determinados ministros de culto⁷⁶⁶.

12.5 Régimen migratorio de los ministros de culto

La República Argentina ha sido tradicionalmente e incluso por mandato constitucional (desde el mismo preámbulo de la constitución, pasando por los artículos 20, 25 y el actual art.75 inc.18, entre otros) un país

⁷⁶⁴ La ley 525 (promulgada por Decreto 2362/2000, BOCBA 27/12/2000) prevé la reserva de espacios en la vía pública para el establecimiento de vehículos, otorgadas a “las sedes de los Servicios Sacerdotales de Urgencia y servicios similares de otros credos” (art.2º inc.e). La reglamentación (Anexo I del Decreto 1248/2004, BOCBA 23/7/04) dispone que esas reservas deben ser requeridas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (art.2º inc. e).

⁷⁶⁵ Ordenanza 47136, del 9/9/1993 (Boletín Municipal nº 19552).

⁷⁶⁶ Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1286 del año 2004 (BOCBA 27/4/2004) aprobó un convenio firmado por el Jefe de Gobierno con el entonces arzobispo, Mons. Jorge Bergoglio, por el que la Ciudad asumía el pago del “sostenimiento” del Rector de una iglesia propiedad de la ciudad pero cuyo uso era cedido en forma gratuita al Arzobispado, con determinadas obligaciones recíprocas.

abierto a la inmigración y que la fomenta activamente⁷⁶⁷. El “proyecto de país” de los constituyentes de 1853 suponía la inmigración extranjera y la diversidad religiosa de los inmigrantes, y esa fue la razón para establecer desde fecha tan temprana (en el contexto latinoamericano y occidental), la libertad de culto⁷⁶⁸. Se seguía así la idea de ALBERDI en el mismo sentido.

Las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica estuvieron en un primer momento y en casi todos los casos formadas por inmigrantes. Y para su atención espiritual trajeron a sus propios ministros de culto, de sus países de origen.

Con el correr del tiempo, aunque las distintas confesiones comenzaron a tener ministros de culto argentinos, en muchos casos siguieron reclamando la presencia de otros extranjeros; y por supuesto, también la Iglesia Católica demandó y demanda de un importante aporte de clérigos extranjeros, así como religiosos y religiosas del más diverso origen.

La ley 25871⁷⁶⁹, es la ley migratoria vigente en la Argentina. Su reglamentación demoró más de seis años⁷⁷⁰, postergando así su entrada en vigencia efectiva, manteniéndose entre tanto la aplicación de la reglamentación anterior.

Según el artículo 23 de la ley,

“Se considerarán “residentes temporarios” todos aquellos extranjeros que, bajo la condición que establezca la reglamentación, ingresen al país en las siguientes subcategorías: ...g)

⁷⁶⁷ Sobre los antecedentes constitucionales y sobre este tema en general, ver DOCAMPO, Ricardo, “Derechos migratorios de los religiosos”, en NAVARRO FLORIA, Juan y BOSCA, Roberto, “La libertad religiosa...”, cit., p.433 y ss.

⁷⁶⁸ La sesión del 28 de abril de 1853 de la Asamblea Constituyente, que trató el artículo 14 de la Constitución, discutió larga y casi exclusivamente acerca de la libertad de culto. Una de las razones fundamentales dadas para su aceptación, fue aportada por el convencional Seguí: “que era indispensable la tolerancia para el progreso del país por la inmigración virtuosa que traería a nuestro suelo. Y que no debía temerse sin hacer injuria a Nuestra Santa Religión la competencia que se le ofrecería con las demás sectas disidentes; y que además sería una ocasión favorable para que los sacerdotes católicos ejercitasen su celo en la predicación evangélica obteniendo para el catolicismo los mismos triunfos que éste obtiene en otras partes del mundo, aprovechando además del ejemplo que pudieran recibir de los ministros protestantes para la mejora de su moral y costumbres” (RAVIGNIANI, Emilio, “Asambleas Constituyentes Argentinas”, Bs.As., Peuser, 1937, p.509). Otro argumento utilizado fue la vigencia previa del Tratado de Amistad con Gran Bretaña, de 1825, que establecía ya la libertad de cultos para los súbditos británicos.

⁷⁶⁹ Sancionada el 17/12/2003 y promulgada el 20/1/2004 (BO21.1.2004).

⁷⁷⁰ Decreto 616/2010, BO 6/5/10, p.6.

Religiosos de cultos reconocidos oficialmente, con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples.”⁷⁷¹.

De este modo se reitera una expresión errónea que ya contenía la norma anterior en la materia, el Decreto 1434/87⁷⁷², que enumeraba entre las personas que podrían obtener residencia permanente en la República a los “religiosos pertenecientes a cultos oficialmente reconocidos” (art.15 inc.c).

El término “religiosos” está aquí usado en un sentido impropio, ya que no se utiliza con el significado propio de ese sustantivo sino en sentido lato, sustantivando el adjetivo, y como sinónimo de “ministros religiosos”. Desde luego, podemos también tomar el término en sentido estricto y fundar en él la admisibilidad en el país de los religiosos (propiamente dichos) que deseen obtener en él su radicación. Advirtamos de paso que la nueva ley no incluye a los “religiosos” entre los candidatos admisibles para la residencia permanente, como hacía la norma anterior, sino solamente para la temporaria.

La impropia redacción de las normas anteriores a la ley vigente pero semejantes en su redacción a ésta fue reconocida y subsanada por una Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones⁷⁷³, según la cual se entenderá por “religiosos pertenecientes a cultos oficialmente reconocidos”,

“a los ministros religiosos, seminaristas o personal religioso, con dedicación exclusiva, de iglesias, confesiones o comunidades religiosas reconocidas. Se entenderá asimilable a religioso, a quienes soliciten su admisión a los efectos de realizar o seguir estudios religiosos o teológicos en el país”.

Un segundo error de la ley es hablar de “cultos reconocidos oficialmente, con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”. En rigor de verdad no

⁷⁷¹ La Disposición 1170/2010 de la Dirección Nacional de Migraciones (BO 6/7/10) permite conceder “residencia transitoria especial a tenor de lo normado por el artículo 24 inc.h) de la Ley Nº 25.871, por el término de hasta un mes prorrogable, a aquellos extranjeros que ingresen al Territorio Nacional con el objeto de realizar tareas remuneradas o no, en el campo... religioso” (art.1). No se refiere específicamente a los ministros de culto, pero puede incluirlos.

⁷⁷² Texto según Decreto 1023/94, art.2º (BO 5/7/94). Fue abrogado en 2010.

⁷⁷³ Disposición 1/1994, del 27/7/94 (BO 1/8/94).

existen en la Argentina “cultos reconocidos oficialmente”, fuera de la Iglesia Católica. Y ciertamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores no “expide personería jurídica” a nadie. Tampoco la reconoce siquiera. El defectuoso régimen de la ley 21.745, todavía vigente, obliga a las “organizaciones religiosas” a inscribirse en el Registro Nacional de Cultos, pero esa inscripción no implica reconocer, ni otorgar, personería jurídica.

Una tercera expresión llamativa de la ley, es restringir la categoría de “religiosos” (que en rigor debiera ser “ministros religiosos”, o “ministros de culto”), a quienes

“ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto”.

Como ya se ha dicho, la dedicación exclusiva no suele ser un requisito para el reconocimiento como ministro de culto, bastando una dedicación principal o preponderante. Es necesario tener en cuenta además que en muchas confesiones religiosas los ministros de culto son personas casadas y con hijos, que para la subsistencia propia y la de su familia realizan alguna actividad remunerada paralela al ministerio. Dicho sea de paso, la ley ha olvidado considerar la situación de las familias de los ministros de culto, cuando ellas existen, que razonablemente quisieran ingresar con ellos al país.

Ninguna de estas cuestiones ha sido aclarada por la reglamentación del año 2010, que dejó sin reglamentar al art.23 inc.g de la ley.

Finalmente, es problemático que se les asigne a los ministros de culto la calidad de residentes transitorios, y no permanentes, como puede ser necesario en muchos casos.

Según prevé el art. 62 de la ley,

“Los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes transitorios” no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia”, por lo que “será cancelada la residencia permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no se cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención”.

Esta norma ha sido cuestionada en relación a los seminaristas o estudiantes⁷⁷⁴, y no ha merecido reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

El anterior Reglamento de Migración, aprobado por decreto 1023/94, contenía otras precisiones a tener en cuenta. Además de la categoría de residente permanente, contemplaba las de “residente temporario” (por tres años renovables por otros tres, art.30) y de “residente transitorio” (por un máximo de seis meses, según los casos, art.31). Eran admisibles como “residentes temporarios” las personas que desearan realizar determinadas actividades, y entre otras (art.27 inc. c),

“religiosas, por personas pertenecientes a cultos oficialmente reconocidos”.

Es el antecedente inmediato de la norma actual, aunque menos restrictivo.

Para el reglamento anterior también eran admisibles como “residentes transitorios” (art.29 inc. e) quienes llegasen para

“desarrollar tareas remuneradas o no, ...religiosas... y sus servicios sean requeridos por personas de existencia ideal establecidas en la República”

La categoría de “residentes transitorios” ha sido contemplada en la ley vigente en su artículo 24, con varias sub-categorías, entre ellas los residentes transitorios

“Especiales: Extranjeros que invoquen razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial” (inciso h).

De acuerdo con la Disposición 1170/2010 de la Dirección Nacional de Migraciones⁷⁷⁵,

“se podrá conceder residencia transitoria especial... por el término de hasta un mes, prorrogable, a aquellos extranjeros que ingresen al Territorio Nacional con el objeto de realizar tareas remuneradas o no, en el campo científico, profesional, técnico, religioso o artístico”. Estos migrantes deberán presentar, además de la documentación ordinaria, una nota explicando “el objeto y plazo de permanencia”.

⁷⁷⁴ DOCAMPO, Ricardo, op. Cit., p.444.

⁷⁷⁵ Del 29 de junio de 2010, publicada en el BO del 6/7/10.

La radicación de ministros de culto, requiere de la intervención del organismo pertinente del Estado, esto es la Secretaría de Culto (a través de la Dirección General de Culto Católico en el caso de clérigos o religiosos católicos; y de la Dirección General del Registro Nacional de Cultos en el caso de los acatólicos). Así resulta de las normas reglamentarias de la ley de ministerios, que fijan la misión y funciones de estos organismos. La norma vigente encomienda a la Dirección General de Culto Católico

“Tramitar el ingreso en la República, prórroga de permanencia y radicación de clérigos y religiosos católicos”;

y a la Dirección General del Registro Nacional de Cultos,

“Tramitar el ingreso a la República, prórroga de permanencia y radicación de pastores, ministros religiosos o dirigentes pertenecientes a las iglesias o comunidades religiosas reconocidas”.

Como se ve el texto es equivalente en ambos casos. En el caso de los no católicos, se menciona a “pastores” y luego a “ministros religiosos”, es decir, a una especie del género que se indica inmediatamente a continuación, lo que implica una pequeña redundancia. Y se añade a los “dirigentes”, que pueden no ser “ministros”, según hemos visto ya.

Esta atribución específica de los órganos administrativos indicados es una concreción de la acción que también se les encomienda, de intervenir en cualquier petición que realicen a los poderes públicos la Iglesia Católica o *“las iglesias, confesiones y comunidades religiosas”*. Si tal petición consiste en el ingreso de un ministro de culto, debe ser presentada ante el organismo pertinente de la Secretaría de Culto, que es quien en primer lugar certifica la calidad del peticionante, y luego transmite el pedido al organismo migratorio para su trámite y resolución. En sentido coincidente, las reglamentaciones migratorias piden también esta intervención.

Así la condición de “religioso” (en el sentido de “ministro religioso”, según vimos), se acredita

“mediante la presentación de una certificación o carta de presentación del superior o representante habilitado de la Iglesia, Orden, congregación o culto reconocido en el país, de la que surja que se trata de un ministro religioso, seminarista o personal religioso con dedicación exclusiva o que solicita su admisión a efectos de realizar estudios religiosos o teológicos en el país. Deberá presentar también la conformidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la que surja el reconocimiento de la

Iglesia, Orden, Congregación o Culto y que el firmante de la certificación reviste el carácter invocado. Idéntica prueba se exigirá a quienes soliciten su admisión a efectos de seguir estudios religiosos o teológicos en el país”⁷⁷⁶.

Hay en la norma una cierta mescolanza entre “iglesias”, “cultos”, “órdenes” y “congregaciones”, pero el sentido último es que tanto en el caso de ministros de culto de la Iglesia Católica (y en este caso, sean clérigos seculares o religiosos o religiosas), cuanto en el de ministros de otras confesiones religiosas, es exigida:

a) una certificación o acreditación por parte de la autoridad religiosa que corresponda, de la calidad que el inmigrante reviste de ministro religioso (lo cual es respetuoso del principio según el cual es la propia confesión religiosa la que designa y acredita como tales a sus ministros), y

b) una doble certificación por parte de la Secretaría de Culto: que la iglesia, comunidad religiosa, y en el caso de los institutos de vida consagrada católicos, tales institutos, existen y están reconocidos como tales; y que la autoridad que firma la certificación o acreditación de la condición de ministro de culto del inmigrante, efectivamente lo es.

Es digna de ser destacada la equiparación que a los fines migratorios se da entre ministros de culto y seminaristas o estudiantes de religión o teología. Se trata de algo realmente importante, porque en la Argentina hay una gran cantidad de instituciones de enseñanza teológica de muy buen nivel, que sirven a estudiantes de muchos países⁷⁷⁷.

Una nueva certificación en los mismos términos, es exigible para renovar la residencia temporaria previamente otorgada, que en el caso de los estudiantes de religión o teología debe incluir la constancia documental de que continúan los estudios y el tiempo de duración de la carrera⁷⁷⁸.

⁷⁷⁶ Disposición 2/1994 de la Dirección Nacional de Migraciones (BO 1/8/94).

⁷⁷⁷ Por ejemplo, el ya mencionado Seminario Rabínico Latinoamericano; así como diversas facultades de teología católicas, evangélicas, y casas de formación de religiosos y religiosas.

⁷⁷⁸ Disposición 5/1994 de la Dirección Nacional de Migraciones (BO 1/8/1994).

12.5.1 Régimen migratorio de los ministros de culto católicos en particular

Obviamente, a los ministros de culto (y a los religiosos) católicos, les es aplicable todo lo dicho en el apartado anterior. Como se ha visto, las normas en la materia no hacen en general distinciones entre católicos y no católicos e imponen a todos los mismos requisitos y condiciones.

Sin embargo, y en relación con la Iglesia Católica, es necesario recordar que el Acuerdo de 1966 entre la República Argentina y la Santa Sede contiene una previsión expresa (Art. V) según la cual

“El Episcopado Argentino puede llamar al país a las órdenes, congregaciones religiosas masculinas y femeninas y sacerdotes seculares que estime útiles para el incremento de la asistencia espiritual y educación cristiana del pueblo. A pedido del Ordinario del lugar, el Gobierno Argentino, siempre en armonía con las leyes pertinentes, facilitará al personal eclesiástico y religioso extranjero el permiso de residencia y la carta de ciudadanía”.

Esta norma merece varias acotaciones.

En primer lugar, es evidente que ella tuvo su razón de ser principal en la necesidad de superar la restricción impuesta por el antiguo art.67 inc.20 de la Constitución, que condicionaba el ingreso al país de “nuevas órdenes religiosas” a su admisión por parte del Congreso⁷⁷⁹. Pero la norma del Acuerdo contempla otros casos y es por tanto más amplia, ya que alude también a los “sacerdotes seculares”, para los que no había ninguna restricción previa que necesitase ser subsanada.

En segundo lugar hay una curiosa atribución del derecho a “el Episcopado”. No es “el Episcopado” (hoy debería decirse: la Conferencia Episcopal) quien llama sacerdotes, religiosos o congregaciones, sino cada obispo singularmente, sin intervención alguna de la Conferencia. Así resulta correctamente del segundo párrafo del artículo, cuando menciona a “el Ordinario del lugar”.

⁷⁷⁹ Cfr. NAVARRO FLORIA, Juan G. y HEREDIA, Carlos, “Régimen Jurídico de los Religiosos y de los Institutos de Vida Consagrada”, Buenos Aires, EDUCA, 1997, p. 15 y ss. La norma no tuvo aplicación práctica, quedó superada con el Acuerdo de 1966 y desapareció del texto constitucional en la reforma de 1994. No obstante y como curiosidad, todavía hoy el Reglamento de la Cámara de Diputados atribuye en su art.64 a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto dictaminar sobre “*admisión de nuevas órdenes religiosas*”, lo mismo que el art.62 del Reglamento del Senado respecto de la comisión homóloga de esa cámara.

En tercer lugar, y esto es lo relevante, existe una obligación para el Estado de intervenir positivamente, facilitando la radicación (residencia) de los religiosos y clérigos, e incluso la obtención de la carta de ciudadanía. Esta es una de las formas que adquiere el “principio de cooperación” en la relación entre el Estado y la Iglesia, al demandar una participación activa del Estado (la norma dice, “el Gobierno Argentino”) en la solución de un posible problema y en el otorgamiento de una facilidad concreta al ministro de culto. Desde luego, dentro del marco legal, es decir, de la manera en que el derecho interno reglamente el modo de cumplir esa obligación. Pero esa reglamentación nunca podría ser tal que enerve o prive de virtualidad a la obligación de cooperación asumida.

Por decreto 2991/64⁷⁸⁰ (es decir, anterior al Acuerdo de 1966), se había eximido del pago de tasas de migraciones

“a las integrantes de las congregaciones religiosas católicas –profesas, novicias o aspirantes- que actúen en tareas hospitalarias, docentes o asistenciales”.

Esta norma no fue nunca derogada. Posteriormente, el Decreto 1207/89⁷⁸¹, artículo 5º, dispuso eximir de tasas migratorias a

“las solicitudes de: 1) Admisión como residentes permanentes o temporarios que formulen: a) Los integrantes de órdenes religiosas católicas reconocidas en el país”

Es llamativo que la franquicia se otorgase inicialmente sólo a religiosas mujeres, y no también a religiosos varones, lo que resultó corregido en 1989. Es también curioso que inicialmente se haya limitado a quienes fueran a realizar determinadas actividades (que se supone que aún no realizan, si todavía no han ingresado al país). La actividad “docente” coincide con la “educación cristiana del pueblo” que menciona el Acuerdo de 1966. A ella se sumaba la labor asistencial y hospitalaria. En el fondo, este tipo de normas parecen valorar a los religiosos –y en su caso a los ministros de culto- por alguna cosa que hacen, y no por lo que son. Es decir, por labores de tipo asistencial o altruista, y no por su labor o condición específica. Pero es el modo que muchas veces utiliza el Estado para justificar un auxilio que les presta, y que en el fondo redunda en una forma de reconocimiento y auxilio a su tarea integral.

⁷⁸⁰ Del 24/4/1964, BO 7/5/64, ADLA 1964-B.

⁷⁸¹ BO15/11/1989.

La norma de 1989, que no derogó a la anterior, contiene otros defectos, como limitarse a mencionar a las "órdenes religiosas" y no a los institutos de vida consagrada en su conjunto; aunque de hecho se aplica a todos.

El ya mencionado Decreto 1023/94, contenía varias previsiones referidas a los religiosos católicos. Así, decía (art.32) que

"cuando las solicitudes de admisión como residentes permanentes o temporarios se formulen por o en favor de miembros de órdenes religiosas, se requerirá la conformidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto".

Esta norma era criticable porque era el único caso en que se requería el "visto bueno" de una autoridad distinta de la propia Dirección de Migraciones, con lo que parece ser no una norma para favorecer la radicación, sino para dificultarla. Aunque de hecho, la intervención de la Secretaría de Culto permite agilizar y favorecer el trámite. Por ende debe interpretarse que el trámite de radicación debe gestionarse a través de la Secretaría de Culto, pero no como una exigencia de control, sino como una forma de hacerlo viable con más facilidad. Si así no fuera, la exigencia sería arbitraria.

El mismo decreto preveía también el caso de extranjeros *"pertenecientes a órdenes o congregaciones religiosas"* que estuviesen legalmente en el país como residentes transitorios y desearan obtener la residencia temporaria o permanente. En tal caso (art.38)

"deberán contar con la conformidad previa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto".

Esa norma ha sido reiterada –ya vigente la ley actual- por la Disposición 40164/2007 de la Dirección Nacional de Migraciones⁷⁸², referida a quienes encontrándose ya en el territorio nacional y proviniendo de países "extra-Mercosur", deseen tramitar su residencia como trabajadores en relación de dependencia. Deben obtener previamente esa conformidad de la Cancillería, y luego cumplir con las demás disposiciones que esa reglamentación establece (art.6º).

Finalmente (art.53),

*"Los extranjeros pertenecientes a órdenes o congregaciones religiosas reconocidas por la República"*⁷⁸³, *podrán ser*

⁷⁸² BO 23/8/07.

⁷⁸³ A partir de la sanción de la ley 24483, habrá que considerar tales a los institutos inscriptos en el Registro creado por ella.

eximidos de la presentación de los documentos que se mencionan en los artículos 39 inciso c) y 44 inciso d) de este Reglamento cuando soliciten su admisión como residentes permanentes o temporarios, los que serán sustituidos por el visto bueno de quien ejerza la superintendencia correspondiente” (sic).

Se trata de reemplazar el certificado de buena conducta y antecedentes policiales o judiciales en la Argentina o en el país donde hubiesen residido durante los anteriores cinco años.

Nos preguntamos quién es el que “*ejerce la superintendencia correspondiente*”. Como ciertamente no hay “superintendencia” alguna del Gobierno sobre los religiosos, ni debe haberla, la equívoca norma sólo puede interpretarse en el sentido de que ese certificado puede ser suplido por una certificación expedida por los propios superiores del religioso (que de ese modo admiten cierta responsabilidad sobre él) o, en todo caso, la autoridad eclesiástica (v.g. el obispo del lugar donde ha de radicarse, aunque no sea su ordinario)⁷⁸⁴.

Finalmente, es pertinente señalar que si bien los trámites ante la Dirección Nacional de Migraciones están como regla sujetos al pago de tasas retributivas de servicios, según otra norma están exentos del pago de tales tasas

“los miembros del clero secular y los ministros de cultos religiosos reconocidos por la autoridad competente”⁷⁸⁵.

Resulta curiosa la implícita y seguramente no consciente exclusión de los miembros del clero regular (religiosos), pero que como hemos visto antes gozan de una exención específicamente dictada para ellos.

12.5.2. Ministros de culto no católicos

Las iglesias y comunidades religiosas pueden gestionar el ingreso al país y radicación de ministros de culto extranjeros. Para tal fin, deben

⁷⁸⁴ Posiblemente sea razonable exigir que en todos los casos sea el obispo del lugar donde ha de radicarse o residir el religioso extranjero quien dé el “visto bueno” pedido por la norma. Un buen fundamento para esto es que el artículo V del Acuerdo de 1966 con la Santa Sede otorga a “el Episcopado” (debe leerse: cada obispo) la facultad de “llamar” al personar religioso extranjero que necesite, tal como hemos visto ya.

⁷⁸⁵ Decreto 231/2009 (BO 6/4/09), art.2º.

estar inscriptas en el “Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros”⁷⁸⁶ si se trata de migrantes provenientes de países ajenos al MERCOSUR y sus estados asociados, porque si pertenecen a alguno de ellos se aplican las normas específicas del MERCOSUR⁷⁸⁷. Para la tramitación, deben contar con un apoderado registrado ante la Dirección de Migraciones. La inscripción como requirente sólo es exigible

“cuando soliciten la admisión de un extranjero que se encuentre fuera del país”⁷⁸⁸.

Como en todo trámite que deban realizar las entidades religiosas ante el Estado, debe intervenir la Secretaría de Culto (art.7 del Decreto 2037/79). El pedido de radicación debe ser hecho por el representante legal de la iglesia o comunidad, conteniendo, a más de otros datos que requiera la autoridad migratoria.

“nombre, apellido, número de documento, nacionalidad, país de procedencia, domicilio en el país y ministerio o función desempeñada por el beneficiario del trámite, y responsabilidad que asume la persona jurídica peticionante por el alojamiento y manutención de tal beneficiario”⁷⁸⁹,

Estas normas no se aplican únicamente a ministros de culto, sino también a otras personas, como pueden ser estudiantes, seminaristas, voluntarios, etcétera.

Como ya hemos visto, los trámites ante la Dirección Nacional de Migraciones están exentos del pago de tasas cuando corresponden a

“los miembros del clero secular y los ministros de cultos religiosos reconocidos por la autoridad competente”⁷⁹⁰.

⁷⁸⁶ Creado por Disposición 56647/2005 de la Dirección Nacional de Migraciones (BO 29/12/05), modificada por Disposición 54618/08 (BO 1/8/08). Para inscribirse deben presentar “Constancia de su reconocimiento oficial y última designación de autoridades emitida por la Secretaría de Culto”, y “Denunciar domicilio legal en la República Argentina y constituir domicilio especial en el radio del asiento de la Sede Central o de la Delegación interviniente”, y manifestar como declaración jurada el conocimiento de las obligaciones y sanciones previstas en esta disposición (art.5).

⁷⁸⁷ Son miembros plenos del MERCOSUR la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y tienen distintos grados de asociación Venezuela, y Bolivia.

⁷⁸⁸ Disposición 54618/08, art.2 inc. b).

⁷⁸⁹ Art.2 inc. a), Resolución 1395/95 de la Secretaría de Culto, BO 23/6/95.

⁷⁹⁰ Decreto 231/2009 (BO 6/4/09), art.2º.

12.6 Ubicación protocolar de los ministros de culto

Es frecuente y tradicional la presencia de ministros de culto en actos a los que asisten por razones protocolares. Con frecuencia ellos son convocados a asistir a actos públicos, no a título individual, sino por lo que representan: como autoridades o caras visibles de las confesiones religiosas que presiden o a las que sirven.

Es un “cliché” habitual, en esos casos, hablar de las “autoridades civiles, militares y eclesiásticas” presentes en actos o ceremonias. Esto ocurre desde los más importantes en el orden nacional, hasta los más modestos: en un pueblo, el cura párroco muchas veces ocupa un lugar prominente entre las autoridades, del mismo modo que en actos solemnes del gobierno nacional se puede invitar al cardenal primado o a otras autoridades.

En la República Argentina el orden de precedencia protocolar para los “*actos, recepciones, y ceremonias de carácter público y oficial*” ha sido establecido en el orden nacional por el Decreto 2072/1993⁷⁹¹, que distingue según que tales actos se realicen con o sin la presencia del cuerpo diplomático extranjero.

En actos sin la presencia del cuerpo diplomático se menciona en los lugares 15º, 16º y 17º de precedencia (después de las autoridades más altas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y de los gobernadores de provincia, pero antes de los senadores y diputados, por ejemplo), respectivamente a los “*cardenales*”, al “*Presidente de la Conferencia Episcopal*” y al “*Arzobispo de Buenos Aires*” (que es primado de la Argentina⁷⁹², pero no necesariamente cardenal ni menos aún presidente de la CEA). Luego de ellos se ubican los senadores y diputados, a continuación (puesto 21º) los “*arzobispos*”, y más atrás, en el puesto 28º y todos entre sí al mismo nivel, los “*obispos católicos y dignatarios de iglesias, confesiones y comunidades religiosas*”.

Todos ellos ocupan el mismo orden relativo en los actos con presencia del cuerpo diplomático (puestos 17º, 18º, 19º, 23º y 30º), en los que sin embargo aparece el Nuncio Apostólico (que es decano del cuerpo

⁷⁹¹ BO 13/10/1993.

⁷⁹² Por Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial del 29 de enero de 1936.

diplomático) en el puesto 8º, después del Canciller y antes de los demás embajadores⁷⁹³.

Este orden de precedencia protocolar, reemplaza al anteriormente establecido por un decreto del año 1976⁷⁹⁴. En él los gobernadores de provincia estaban por detrás de los cardenales y del presidente de la Conferencia Episcopal, y antes del Arzobispo de Buenos Aires; pero tanto los arzobispos como los obispos figuraban bastante más relegados que ahora. Por su parte, no se mencionaba siquiera a los “dignatarios” de otros cultos, ahora equiparados protocolarmente a los obispos.

Los comentarios que estas normas merecen, son varios. En primer término, el sitio relevante que se asigna a los ministros de culto en los actos protocolares. No son los primeros, pero tampoco, ni mucho menos, los últimos.

En segundo lugar, el claro privilegio que entre ellos tienen los dignatarios católicos, al punto que la norma ni siquiera ha considerado necesario aclarar que se trata de ellos cuando habla de “cardenales”, “Presidente de la Conferencia Episcopal”, “Arzobispo de Buenos Aires” y “Arzobispos”. Sólo en el caso de los obispos se aclara que se trata de los “obispos católicos”, que son los únicos mencionados en forma diferenciada en el renglón genérico de los “dignatarios religiosos”.

En tercer lugar, cabe señalar la aparición recién en el año 1993 de los “*dignatarios de Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas*”, en el orden protocolar y al mismo nivel que los obispos católicos. Esto es un reflejo de la pluralidad religiosa creciente de la sociedad, y de un reconocimiento respetuoso a dichas confesiones. Al mismo tiempo, plantea otros problemas, ya que no se establece ningún orden de precedencia entre ellos, ni una pauta para fijarlo; y tampoco se establece un criterio para determinar quienes revisten esa calidad de “dignatarios”.

Esto último, más la ambigüedad del término “dignatarios”, provoca dificultades. En los actos públicos estos personajes no están llamados a cumplir una función como ministros de culto, sino a representar a sus iglesias y comunidades. Por lo tanto, en aquellas confesiones donde esté escindida la autoridad comunitaria del ministerio de culto, correspondería dar el lugar de

⁷⁹³ En los actos con presencia de varios jefes de Estado (art.3º del decreto), los “Enviados de la Santa Sede Apostólica” (sic) aparecen en noveno lugar de precedencia, antes de los demás embajadores en misión especial.

⁷⁹⁴ Decreto 510/76, BO 12/2/76, ADLA XXXVI-A-115.

precedencia a quien ejerce aquella autoridad, aunque no sea “ministro de culto”. Sin embargo, por la fuerte incidencia del paradigma católico, con frecuencia ocurre lo inverso (se ubica en lugar de preferencia al rabino, antes que al presidente –laico- de la comunidad judía).

Algunas provincias también han reglamentado estas cuestiones, alguna de modo muy detallado, como **Mendoza**⁷⁹⁵. Además de remitir al decreto nacional cuando participan autoridades nacionales, en los actos estrictamente provinciales hay un preciso orden protocolar en el que el “Arzobispo de Mendoza” ocupa el puesto 11 (inmediatamente después de las autoridades de las Cámaras Legislativas), y en el puesto 20 aparecen los “Obispos católicos y dignatarios de iglesias, confesiones o comunidades religiosas”. El decreto aclara también que

“en el caso de que la jerarquía religiosa de una persona sea menor de la generalmente prevista para el cargo público en que se desempeña, la precedencia que ocupará será la que corresponda a este último”.

En la provincia del **Chaco**, el orden de precedencia protocolar ha sido establecido por ley⁷⁹⁶, y ubica en el cuarto lugar (solamente después del Gobernador, el presidente de la legislatura y el presidente del Superior Tribunal –1º-, el vicegobernador y vicepresidentes de los otros poderes –2º- y los legisladores nacionales y provinciales, ministros del poder ejecutivo y rectores de universidades nacionales –3º-), a los

“Arzobispos de la ciudad de Resistencia, obispos invitados, autoridades religiosas y decanos de facultades de universidades nacionales”.

Cabe suponer que las “autoridades religiosas” no son solamente las católicas, sino también las de otras confesiones, aunque se destaca la preeminencia acordada al arzobispo católico local.

En la provincia de **Buenos Aires** el orden de precedencia protocolar está establecido por un Decreto⁷⁹⁷, que concede el séptimo lugar (entre setenta y cinco jerarquías previstas) a los “Arzobispos (en actos a realizarse en sus Arquidiócesis)”, mientras que fuera de ese caso relega al puesto

⁷⁹⁵ Decreto 1548/2005 del 16/8/2005, publicado el 22/9/2005.

⁷⁹⁶ Ley 4263, de 1996 (BO 10/5/96), modificatoria de la ley 3373.

⁷⁹⁷ Decreto 2708/2002.

veintidós a los “Arzobispos” (se supone que católicos, y fura de su sede) y reserva el puesto veintinueve a “*Obispos Católicos y Dignatarios de Iglesias, Confesiones o Comunidades Religiosas*”.

Como decimos, el orden de precedencia interno entre dignatarios de diferentes religiones, es un problema casi insoluble. En la Argentina es habitual que los obispos ortodoxos, y eventualmente los obispos anglicanos, se consideren con derecho a ocupar el mismo lugar que los obispos católicos (y que estos les reconozcan tal derecho) y se sitúen inmediatamente a continuación de ellos y como *primus inter pares* respecto del conjunto de los “dignatarios” religiosos no católicos. Esto es en general aceptado por los demás “dignatarios”, con apenas algún rezongo. A partir de allí, nada es claro, y pastores, rabinos, imames y demás ocupan el lugar que cada uno consigue.

En todos estos casos, la presencia de los ministros de culto es meramente simbólica, pero es indicativa de la relevancia que tiene para la sociedad el factor religioso.

Un capítulo especial es el que corresponde a los actos públicos de naturaleza específicamente religiosa, aunque no respondan a un mandato legal expreso, sino a una costumbre arraigada.

Desde 1810 y siguiendo la tradición hispánica, las fechas patrias son solemnizadas mediante una función litúrgica, genéricamente denominada “Te deum”, aunque no siempre sea estrictamente tal. Esa función se desarrolla habitualmente en la catedral católica y es presidida por el obispo católico, acompañado por los demás obispos y clérigos católicos. Los dignatarios no católicos, generalmente ocupan un lugar específico (en los últimos años, en el propio presbiterio), separados de las autoridades civiles, militares y demás dirigentes sociales, pero sin cumplir un rol activo en la celebración.

En tiempos recientes, en algunas provincias se ha hecho frecuente reemplazar o complementar el tradicional “Te deum” católico con una celebración interreligiosa, en la que ministros de culto de diversas confesiones asumen un rol activo.

12.7 Los ministros de culto al servicio de la Administración Pública

Existe una forma de presencia de ministros de culto en la Administración Pública, específicamente en cuanto tales, es decir, en orden a realizar actos propios de su ministerio, o actos de culto, en el ámbito oficial.

No se trata aquí del servicio de asistencia religiosa a personas reclusas en establecimientos públicos (cárceles u hospitales), donde lo público es el lugar pero el ministerio se dirige a terceros allí presentes (acaso contra su voluntad), sino a la presencia de ministros de culto al servicio mismo de instituciones oficiales.

12.7.1 Antecedente: el Patronato nacional

Durante la vigencia del régimen de Patronato, no solamente los obispos, sino también muchos clérigos católicos (especialmente, quienes tenían cargos en las curias) eran considerados por el Estado *funcionarios o empleados públicos*.

De hecho, desde antes de la Organización Nacional, y hasta finales del siglo XIX, los párrocos católicos (y luego, los ministros de las demás confesiones religiosas) tenían a su cargo el registro del estado civil de las personas, entre otras funciones públicas.

Todavía el código civil de 1871 estableció que la prueba del nacimiento de las personas se realizara mediante las partidas de bautismo hasta tanto las municipalidades crearan los registros pertinentes (art.75), y que la prueba del matrimonio fuera la del matrimonio religioso, y la de la defunción la de los asientos parroquiales correspondientes (art.104). Recién la ley 2393 mandó, en 1888, crear los registros provinciales de estado civil, lo que se hizo progresivamente hasta entrada el siglo XX.

Por esa razón, un decreto del 24 de octubre de 1857⁷⁹⁸, dispuso que

“Los curas católicos y los capellanes y pastores de los cultos reformados, son encargados de llevar los registros del estado civil de los habitantes del Estado, inscribiendo en ellos los

⁷⁹⁸ Transcripto en GOYENA, Juan, “Digesto eclesiástico argentino”, Buenos Aires, Imprenta Especial de Obras, 1880, p. 98.

bautismos, nacimientos, matrimonios y entierros sucedidos en cada parroquia, o en los individuos pertenecientes a la comunión religiosa”.

El decreto reglamentaba minuciosamente las obligaciones de “los párrocos o de los capellanes o pastores de comuniones de protestantes”, y aún de “los párrocos castrenses” dependientes del Ministerio de Guerra y de “los superiores y administradores de los conventos de religiosos”.

Cuando en 1866 el Arzobispo de Buenos Aires organizó los tribunales eclesiásticos de todo el país y fijó su competencia, el Poder Ejecutivo por decreto⁷⁹⁹ aprobó esa organización, tomándose la libertad de rectificar un aspecto confuso de la norma eclesial. Tanto el Presidente, como el propio Arzobispo, dijeron aplicar las Leyes de Indias, que ambos consideraron vigentes a ese efecto. Un decreto del Presidente Roca en 1886⁸⁰⁰, fundado también en las Leyes de Indias y considerando a los párrocos

“en el ejercicio de sus dobles funciones como empleados del Estado y como Ministros de la Iglesia”,

“confirmó” a los curas párrocos en ejercicio, y ordenó al Arzobispo de Buenos Aires (y a los obispos del interior, por medio de los gobernadores⁸⁰¹) la provisión por concurso –con intervención del Estado- de las vacantes que se produjesen.

Todavía en 1932, cuando se dictó por Decreto del Poder Ejecutivo un régimen de incompatibilidades en los empleos públicos⁸⁰², se consideró necesaria una norma complementaria⁸⁰³ que aclaró:

“Declárase exceptuados de las incompatibilidades que prescribe el Acuerdo general del 23 de marzo último, a los cargos eclesiásticos”.

Tales “cargos” seguían siendo considerados empleos públicos, pero por fuerza se les debió reconocer un régimen propio.

⁷⁹⁹ Decreto del 22 de abril de 1867, firmado por el Presidente Mitre y el ministro Eduardo Costa.

⁸⁰⁰ Decreto del 31 de julio de 1886.

⁸⁰¹ Previamente, un decreto del Vicepresidente de la Confederación Argentina (Salvador María del Carril), en ejercicio del Poder Ejecutivo, del 1º de marzo de 1855, había dispuesto que “los Gobernadores de las provincias son vice-patronos de las iglesias fundadas en el territorio de su mando, y en calidad de tales, ejercen en delegación del gobierno Nacional el patronato para la presentación y remoción de curas beneficiados menores de las iglesias catedrales, habilitación de capillas, erección y división de curatos y demás relativo al ejercicio de este derecho”.

⁸⁰² Decreto 1134/32 del 23/3/32 (ADLA 1920-1940, p.935).

⁸⁰³ Decreto 14793/32 del 23/12/32 (ADLA 1920-1940, p.946).

Estas pretensiones, contenidas en normas nunca abrogadas formalmente, cayeron en desuso⁸⁰⁴, aunque subsistieron mucho tiempo respecto de los obispos, a quienes también con fundamento en las Leyes de Indias se les exigía juramento de fidelidad al gobierno civil⁸⁰⁵. Y sobre todo, tuvieron vigencia práctica en materia presupuestaria.

El “presupuesto de culto”, aceptado no sin entusiasmo por los clérigos, convertía a estos en empleados del Estado. Ya en 1856, una ley fijó los “sueldos” que correspondía cobrar a los obispos y demás clérigos, hasta sacristanes y sochantres⁸⁰⁶; y esa escala de sueldos se mantuvo con sus actualizaciones en las leyes de presupuesto hasta la década de 1980. Los nombramientos en las curias eran replicados por decretos o resoluciones ministeriales de nombramiento de los mismos clérigos⁸⁰⁷; y hasta entrado el siglo XXI cada tanto ocurría que algún sacerdote pidiese y obtuviese un “certificado de servicios”, para jubilarse, idéntico al de los empleados públicos, expedido por la Secretaría de Culto.

A partir del Acuerdo de 1966 entre la Argentina y la Santa Sede todas esas anacrónicas previsiones legales perdieron sentido por completo y fueron desapareciendo. Hoy día es claro que ni los obispos ni los sacerdotes católicos son empleados públicos, del mismo modo que nunca fueron considerados tales los ministros de culto de otras confesiones religiosas. Sin embargo, la existencia de los clérigos como funcionarios aparece prevista de modo genérico en algunas normas (en particular las que organizan el servicio civil de la Nación) pero solamente para descartar que a ellos se les apliquen las normas generales referidas a los empleados públicos, sea para su contratación, sea para su régimen de trabajo.

La ley 25.164⁸⁰⁸, del año 1999, que regula el Empleo Público Nacional, todavía considera necesario excluir de ese Servicio Civil a “el clero” (art.3º inc. g).

⁸⁰⁴ ESTRADA, Santiago, “Nuestras relaciones con la Iglesia”, Bs.As., Ed. Teoría, 1963, p.119.

⁸⁰⁵ ESTRADA, Santiago, op. cit., p.112.

⁸⁰⁶ Ley 85 de la Confederación, de 18 de agosto de 1856 (ADLA 1852-80, p.145).

⁸⁰⁷ “Cada remoción o cada simple traslado de funcionarios o empleados eclesiásticos debe ser objeto de intervención del poder administrador” –decía ESTRADA (op. cit., p.89), agregando que el presupuesto en este rubro “resulta doblemente grotesco, ya que, además de absurdamente detallista, es evidentemente insuficiente para hacer frente a las necesidades de la Iglesia”.

⁸⁰⁸ BO 8/10/1999.

Su antecedente, la ley 22.140⁸⁰⁹ aludía a “*el clero oficial*”, locución que repite la vigente ley 24.185 referida a los convenios colectivos de trabajo en la Administración pública⁸¹⁰. La mención no implica que no se los considere empleados públicos, sino al contrario: se los considera tales, pero se los excluye de la aplicación de esos estatutos, suponiendo que se les aplica algún otro específico (como a los militares, los policías, etc.). El detalle es que obviamente tal estatuto específico no existe, ni son empleados públicos.

En el mismo sentido, en la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, “*el personal religioso*” está exceptuado y al margen del Sistema Municipal de la Profesión Administrativa, SIMUPA⁸¹¹.

También en la provincia de **San Luis**, el Estatuto del Empleado Público⁸¹² exceptúa de su aplicación a “*el clero oficial*” (art.2º inciso e), lo mismo que la provincia de **Santiago del Estero**⁸¹³.

Un caso singular y anómalo se produjo en el año 2005, cuando por Decreto del Poder Ejecutivo nacional, fue creada la “Representación Especial para Asuntos Eclesiásticos”, en la embajada de la República ante la Santa Sede, designando a un sacerdote en calidad de “Consejero Eclesiástico”, con rango protocolar de Consejero de Embajada y Cónsul General, y remuneración y pasajes a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores⁸¹⁴.

12.7.2 Los capellanes en la Administración Pública.

En el orden nacional no existe un cuerpo de capellanes o clérigos -como tales- al servicio del Estado, excepción hecha de los que sirven a las fuerzas armadas y de seguridad⁸¹⁵, que no dejan de ser un organismo estatal.

⁸⁰⁹ EDLA 1980-19.

⁸¹⁰ Ver NAVARRO FLORIA, Juan G., “¿El clero oficial?”, ED 152-983.

⁸¹¹ Decreto 3544/91, BM 19131, art.12 inc.7.

⁸¹² Ley Nº XV-0390-2004 (5618).

⁸¹³ Ley 5642, Estatuto del Personal Civil de la provincia, art.2.

⁸¹⁴ Decreto 539/2005 (BO 1/6/2005), que designó también al primer titular de ese novedoso oficio. Por Decreto 567/2008 (BO 4/4/08) se “*dio por finalizado el ejercicio de las funciones*” del sacerdote así nombrado, sin nombrar un reemplazante pero sin tampoco eliminar el cargo. El fundamento para esta original institución fue únicamente la “*voluntad del Gobierno Nacional*”, y que “*resulta oportuno disponer que un miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana ejerza dicha representación*” (sic).

⁸¹⁵ Curiosamente, el Estatuto para el Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires (aprobado por Resolución 1309/94 del Consejo Superior de esa Universidad) excluye de su

Esto no impide que puedan existir tales capellanes en algunas provincias, cada una de las cuales regula autónomamente estas cuestiones.

Así, en la provincia de **Buenos Aires** sigue vigente una ley del año 1977⁸¹⁶ que dispone (art.1) que

“el personal perteneciente al Clero Oficial que aspire al ingreso, o desempeñe sus tareas en los distintos cuadros de la Administración Pública Provincial, con excepción de aquel que preste servicios en la Policía o en el Servicio Correccional, queda exceptuado para su designación y/o tratamiento, de las modalidades que impone el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial”.

La norma fija su remuneración según sea “capellán” o “capellán mayor”.

Un caso peculiar ocurre en la provincia de **Chubut**, donde una ley provincial⁸¹⁷; faculta al Gobierno a

“asignar una retribución mensual a sacerdotes que presten asistencia en localidades del interior ajenas a su asiento, con sensible debilidad demográfica y deficientes comunicaciones o servicios”

A esos sacerdotes se les otorga la calidad de

“auxiliares de la Administración Pública a efectos de la celebración de matrimonios civiles, la inscripción de nacimientos y otros actos”.

En la **Ciudad de Buenos Aires**, un decreto de 1997 crea la “Capellanía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, y designa nominalmente al sacerdote (católico) que ejercería el cargo de capellán⁸¹⁸.

En la provincia de **Catamarca**, análogamente a lo que ocurre en el orden federal, se menciona a “el clero oficial” como excluido del

aplicación a “los capellanes, hermanas de caridad, y demás personal del clero que cumplan funciones especiales en la Universidad” (art. 1º B), de donde se deduce que tales capellanes existen, al menos nominalmente. Posiblemente se haya tenido en mente a quienes cumplen esas funciones en el hospital universitario, y no en la Universidad misma.

⁸¹⁶ Ley 8815 (de facto) del 28 de junio de 1977. Su texto en el sitio oficial de la Provincia, http://www.sme.gba.gov.ar/mapaestado/normasiap/digesto_rrhh/clero/l8815.doc; y en ADLA XXXVII-C-3016.

⁸¹⁷ Ley 1810 (BO 22/8/1980), art.1º. Esta ley ha sido mantenida en su vigencia al aprobarse el Digesto Jurídico provincial en el año 2009, renumerada como Ley III Nº 10.

⁸¹⁸ Decreto 634/1997 (BO 24/6/1997). El sacerdote así designado falleció años después, y hasta donde se sabe no se le nombró reemplazante, pero tampoco se suprimió el cargo.

Estatuto para el personal civil de la administración pública⁸¹⁹. Pero el mismo cuerpo legal incluye dentro del “personal no permanente” al “Personal Religioso” (art.5 inc. e), definido (art.11) como

“aquel que presta servicios en establecimientos u organismos que requieran la prestación de servicios espirituales o pastorales. Este personal será designado en cargos expresamente creados a tal fin”.

Entre los derechos reconocidos al “personal religioso” están los de retribución justa, menciones, asistencia social para él y su familia, renunciar al cargo (art.17) y licencias especiales para descanso anual y tratamiento de salud (art.11); y entre sus deberes y obligaciones (*“siempre de acuerdo con la autoridad eclesiástica del Ordinario del lugar”*), la prestación personal del servicio con eficiencia y dedicación en tiempo y forma, observar conducta decorosa, conducirse con tacto y cortesía, obedecer las órdenes del personal jerárquico, rehusar dádivas y obsequios, guardar secreto y denunciar delitos o actos perjudiciales al Estado (art.15). El incumplimiento de tales deberes

“dará lugar a la cesación de sus servicios con conocimiento del Ordinario de la diócesis” (art.11).

Estas normas generales parecen aplicables en general a capellanes de hospitales o de establecimientos similares, y acaso de establecimientos educativos. Están evidentemente pensadas sólo para clérigos católicos⁸²⁰.

⁸¹⁹ Decreto 1238/92 (BO 26/5/92), que ordena el texto de la ley 3276.

⁸²⁰ En la misma provincia, la Ordenanza 1368 del 3 de febrero de 1986 exceptúa de la aplicación del Estatuto para los empleados y obreros municipales, a *“los integrantes del Clero Oficial que presten funciones como agentes municipales”* (art.2 inciso a).

12.7.3 Capellanes policiales

Un caso particular, a “mitad de camino” entre los capellanes de la Administración, y los capellanes castrenses, es el de los capellanes policiales⁸²¹.

Las fuerzas policiales no son fuerzas militares, y dependen de los diversos gobiernos provinciales, excepción hecha de la Policía Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

No puede haber duda acerca de la calidad de funcionarios públicos que tienen los capellanes policiales. Así lo ha reconocido expresamente la jurisprudencia, en el deplorable “caso von Wernich” en el que se juzgó la conducta de un capellán policial católico que resultó condenado por delitos cometidos en esa función:

“En cuanto a la negación de que Von Wernich haya sido un funcionario público cabe sólo referir que es de toda obviedad que quien revista en un organismo como la Policía de la Provincia de Buenos Aires como oficial, cobrando por ello el salario respectivo y habiendo sido designado por autoridad competente, es funcionario público y está sujeto como tal a los reproches específicos del Código Penal (art. del 77 del C.P.). Dicha calidad entonces surge de todas las constancias de la causa y en especial de la documental agregada a fs 6446/6466 y Anexo I de causa 7/7768 en el que obra el Legajo Policial del imputado”⁸²².

En la **Provincia de Buenos Aires**, donde coexisten varias fuerzas policiales como consecuencia de sucesivas reestructuraciones, la ley 12.155⁸²³ (art.57) había creado

“la Capellanía General, con rango de Dirección, la que tendrá a su cargo el servicio religioso de las Policías Públicas y la asistencia espiritual que requiera su personal, sus familiares y detenidos. Asimismo, se crea una Capellanía Mayor con dependencia directa del

⁸²¹ En relación a **Chile**, se puede ver con provecho sobre este tema el Reglamento de Asistencia Religiosa de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por Orden General 2204 del 16 de septiembre de 2008, que regula detalladamente la composición y funciones del cuerpo de capellanes tanto católicos como no católicos. Para el caso de **España**, ver GONZÁLEZ, Marcos, “La asistencia religiosa católica en el Cuerpo Nacional de Policía en España”, en “Il Diritto Ecclesiastico”, CXV-2004-1102.

⁸²² TOC. Fed. nº 1 de La Plata, “Von Wernich”, causa 2506/07, noviembre de 2007.

⁸²³ Texto ordenado por Decreto 3206/04, con las modificaciones introducidas por las leyes 12.884 y 13.204.

Secretario de Seguridad, como así también las Capellanías Departamentales en cada una de las Policías Departamentales, las que tendrán el rango que la reglamentación determine”⁸²⁴.

La situación de los capellanes policiales ha quedado regida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1766/05⁸²⁵, que aprueba el “Estatuto del personal de apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Entre tal personal de apoyo, que goza de “estado policial limitado” (art.3) se encuentra el perteneciente al escalafón profesional (art.24 inc.a). A su vez,

“El agrupamiento profesional incluye los integrantes del Servicio Religioso, quienes revistarán de la siguiente forma: El Capellán General con el grado 11 – Comisionado Profesional-; el Capellán Mayor con el grado 10 –Inspector Profesional- y los demás Capellanes con hasta el grado 9 – Capitán Profesional-, de conformidad al detalle establecido que como Anexo 1. b) que forma parte del presente Decreto y su reglamentación. El límite máximo de edad para el ingreso de los Capellanes del Servicio Religioso será de hasta cuarenta y cinco (45) años.”⁸²⁶

No está dicho de ninguna manera que los capellanes sean solamente católicos, aunque de hecho así ocurre. Tampoco hay normas especiales que prevean (fuera del límite de edad más alto para el ingreso) particularidades para su designación, y especialmente, que exijan la intervención de la autoridad eclesiástica en el nombramiento, sanción, remoción o evaluación, tal como sería de esperar. Los capellanes tienen todos grado de oficial (entre subteniente y Comisionado).

En la provincia de **La Rioja**, la Ley Orgánica de la Policía Provincial⁸²⁷, crea Consejos de Seguridad Regionales para cada departamento de la provincia, en los que sorprendentemente pueden participar “*autoridades eclesiásticas*” (art.50). La misma ley crea la Capellanía Policial (art.55), que

⁸²⁴ Un texto muy similar mantuvo la Ley 13482 (ADLA LXVI-C-2816), art.213, que derogó a la Ley 12155 pero sin innovar en esta materia.

⁸²⁵ BO23/8/2005.

⁸²⁶ La ley 11961 (BO 10/6/97) había dispuesto que “*Los integrantes del Servicio Religioso serán considerados personal del Agrupamiento Servicios e incluidos en el escalafón Profesional. Dicho Servicio estará integrado por el Capellán General, Capellán Mayor y Capellanes que se designen.... El Capellán General revistará con el grado de Comisario Mayor, el Capellán Mayor con el grado de Comisario Inspector y los demás Capellanes con hasta el grado de Comisario*”.

⁸²⁷ Ley 6943, BO 26/9/2000.

“estará a cargo de un Sacerdote del Culto Católico Apostólico Romano y tendrá a su cargo la asistencia moral, espiritual y religiosa del personal de la institución”.

Es notorio que el personal no católico, a quien no se le puede imponer esa asistencia contraria a sus convicciones, se ve privado de obtenerla de sus propios ministros.

En **Misiones**, la ley orgánica de la policía local⁸²⁸ hace depender de la Dirección de Secretaría General de la fuerza, a la Capellanía, ejercida por un sacerdote católico, que

“tendrá a su cargo el servicio religioso de la Institución y la asistencia espiritual que requieran el personal policial y familiares de los mismos”.

En **Corrientes**, desde el año 2001, el “clero policial” ha dejado de tener estado policial, formando un escalafón autónomo dentro de la policía local. Está integrado por un capellán mayor que cobra haberes equivalentes a un comisario, y capellanes principales, auxiliares y ayudantes⁸²⁹. Los capellanes son sacerdotes católicos.

En **Entre Ríos** la policía provincial tiene como patrono a San Sebastián⁸³⁰, advocación que también recibe la capilla policial⁸³¹. Tiene una División Capellanía Policial, dependiente de la Dirección de Institutos Policiales⁸³², cuya misión es

“mantener, dentro del ámbito jurisdiccional de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, el servicio religioso de acuerdo al culto Católico, Apostólico y Romano; contribuyendo a la formación moral y religiosa y el mejoramiento integral del personal”.

El jefe de la División Capellanía es designado por el arzobispo católico de Paraná, y los capellanes de las distintas unidades y escuelas policiales por los respectivos obispos diocesanos.

En la escuela de policía de la provincia de **Formosa**,

⁸²⁸ Ley 3389, art.37 inc. e).

⁸²⁹ Decreto ley 169/2001 (BO 1/11/01) modificatorio de la ley 2987.

⁸³⁰ Decreto 5039/68.

⁸³¹ Resolución DAG 20/90 del Jefe de Policía, y Decreto 1242/90 del Gobernador.

⁸³² Resoluciones DAG 77 y 78 del 23/11/90; y reglamento aprobado por Resolución DAG 15 del 14/3/03.

"el cargo de capellán será ejercido por un sacerdote designado por la Jefatura de Policía a propuesta del Instituto Superior de Instrucción y Educación Policial" ⁸³³.

Es llamativo que no sea la autoridad eclesiástica, sino la propia escuela policial, quien lo proponga. Su misión es *"atender las necesidades espirituales y religiosas del personal dependiente del Instituto Superior"* (art.82), sin distinguir a los no católicos, y entre sus funciones están atender y orientar espiritualmente a los cursantes, *"organizar las actividades teniendo en cuenta su misión apostólica y las necesidades de orden profesional y moral de los alumnos"*, asesorar a las autoridades *"sobre problemas confidenciales que reciba en los alumnos"* (sic), realizar los oficios religiosos, e instruir a los alumnos *"en la formación de los conocimientos religiosos de los actos públicos de la Iglesia"* (art.83).

No solamente no se ha tenido en cuenta la existencia real o potencial de alumnos no católicos, sino que la curiosa tarea de asesoramiento asignada al capellán parece ponerlo en el trance de tener que violar el secreto religioso.

Como se ve, hay una cierta tradición en las provincias de dotar a las fuerzas policiales de capellanes católicos, mientras que no se han previsto cargos para capellanes de otros credos, aunque seguramente haya policías que los practican.

12.7.4 Ejercicio de funciones públicas por los capellanes: los testamentos militares

Como se ha visto en el capítulo correspondiente a los ministros de culto en tiempo de guerra, el derecho civil les otorga algunas atribuciones propias de los funcionarios públicos en esa emergencia.

El Código Civil de 1871 contenía un capítulo⁸³⁴, dedicado a "los testamentos especiales". Se trataba de formas extraordinarias de hacer testamento, en situaciones anómalas: en tiempo de guerra y en campaña, en alta mar, y en tiempo de peste o epidemia. El art.3672 decía que

⁸³³ Decreto 1332/2002 (BO 11/11/02), art.9.

⁸³⁴ Capítulo 4 del Título 12, del Libro IV.

*“en tiempo de guerra los militares que se hallen en una expedición militar, o en una plaza sitiada, o en un cuartel o guarnición fuera del territorio de la República, y asimismo los voluntarios, rehenes o prisioneros, los cirujanos militares, el cuerpo de intendencia, los capellanes, los vivanderos, los hombres de ciencia agregados a la expedición, y los demás individuos que van acompañando o sirviendo a dichas personas, podrán testar ante un oficial que tenga al menos el grado de capitán, o ante un intendente del ejército, o ante el auditor general y dos testigos. El testamento debe designar el lugar y fecha en que se hace”*⁸³⁵.

El llamado testamento militar, entonces, procedía solamente “en tiempo de guerra”, la que no requería declaración formal pero sí inicio de las hostilidades; y se equiparaba a esa situación según la doctrina, a la guerra civil en la que haya hostilidades u operaciones militares⁸³⁶. Podían recurrir a él quienes se hallasen en “un cuartel o guarnición fuera de la República”, o en una plaza sitiada, o en una “expedición militar”⁸³⁷; y tanto los militares, como quienes los acompañasen o colaborasen de cualquier modo con las operaciones de las Fuerzas Armadas, incluyendo expresamente entre ellos a los capellanes. Es decir que la primera mención que se hacía de ellos, es como posibles testadores.

Pero el art.3673 añadía:

*“Si el que desea testar estuviese enfermo o herido, podrá testar ante el capellán o médico o cirujano que lo asista. Si se hallase en un destacamento, ante el oficial que lo mande aunque sea de grado inferior a capitán”*⁸³⁸.

⁸³⁵ En la nota correspondiente Vélez Sarsfield cita entre sus fuentes al art. 1041, todavía vigente, del Código Civil de Chile, de notable parecido con el texto argentino. Ver sobre su historia, SALINAS ARANEDA, Carlos, “El influjo...”, cit., p.175.

⁸³⁶ BORDA, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil Argentino – Sucesiones”, t.II, § 1231 y ss. Algunos autores proponen que este tipo de testamento fuera previsto también para quienes cumplen funciones en destacamentos aislados, o en bases antárticas, aún en tiempo de paz (RÉBORA, Juan Carlos, “Derecho de las sucesiones”, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1952, t.I, § 511).

⁸³⁷ La doctrina consideraba que era aplicable también a quien se hallase en operaciones dentro del territorio nacional, pero no a quien en tiempo de guerra, estuviese de licencia o alejado del teatro de operaciones (BORDA, op. cit., § 1233).

⁸³⁸ Es copia casi textual del art.1041 del Código de Chile, citado por Vélez entre sus fuentes para este artículo. Los antecedentes de esa norma han sido estudiados por Carlos SALINAS ARANEDA (en “El influjo del Derecho Canónico en el Código Civil de la República de Chile”, Ediciones

De manera que los capellanes, en este caso (cuando el testador estuviese enfermo o herido, y en tiempo de guerra), actuaban como oficiales públicos receptores de la voluntad testamentaria. El código suponía que se trataba de capellanes católicos (los únicos existentes al tiempo de su sanción).

Según los artículos siguientes (3674 al 3677) los requisitos formales del testamento militar eran la escritura, la firma del "*funcionario ante quien se ha hecho*" (que podía ser el capellán), y la de dos testigos, uno de los cuales podía además suplir la firma del testador si éste no sabe o no puede firmar. El testador podía optar también por otorgar "testamento cerrado" con las formalidades de los artículos 3665 y siguientes de aquel código, en cuyo caso los mismos que podían recibirlo –actuar como "ministro de fe", decía el art.3678- eran los que podían actuar como oficial público en el otorgamiento del testamento militar, incluido el capellán.

En resumen entonces, el capellán militar, por una parte, podía testar bajo esa forma excepcional, si se daban a su respecto las condiciones (tiempo de guerra y demás circunstancias reseñadas). Pero por otra parte, podía actuar como oficial público receptor de la voluntad testamentaria y autorizante del acto, en caso de que el testador estuviese herido o enfermo (y se diesen, obviamente, también respecto de él las circunstancias que autorizan esta forma especial de testar).

Es interesante notar que el derecho internacional humanitario prevé expresamente que "*los testamentos de los prisioneros de guerra se redactarán de modo que reúnan las condiciones de validez requeridas por la legislación de su país de origen, el cuál tomará las medidas necesarias para poner dichas condiciones en conocimiento de la Potencia detenedora*"⁸³⁹. Por lo tanto, lo dicho respecto del testamento militar hubiera sido aplicable aún en campos de prisioneros en poder de un país enemigo.

El "testamento militar" ha desaparecido en el ahora vigente Código Civil y Comercial de la Nación.

Universitarias de Valparaíso, 2006, p.174), quien encuentra su fuente en el proyecto de Código Civil español de Florencio García Goyena.

⁸³⁹ Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a Prisioneros de Guerra, ley 14442, art.120.

12.8 Ejercicio de funciones públicas por parte de ministros de culto

No hemos de referirnos aquí a los cargos electivos que pueda ocupar un ministro de culto en el marco del sistema democrático (cosa que ya hemos analizado a la luz de las normas constitucionales y el ejercicio de derechos políticos), sino al ejercicio de funciones públicas en el seno de la Administración.

Como ya se ha mencionado varias veces, durante la vigencia del régimen del Patronato (tanto en la época española, como en la independiente, especialmente durante el siglo XIX), los ministros culto eran considerados funcionarios públicos. En particular los sacerdotes católicos (concretamente los párrocos), pero también y por extensión los ministros de otros credos.

Esto era especialmente notable en lo referido al registro del estado civil de las personas, que era llevado directamente por la Iglesia (y a partir de la introducción de las entonces llamadas "iglesias disidentes", también por ellas).

Como muestra de esta situación, resulta interesante un dictamen de don Dalmacio VÉLEZ SARSFIELD, futuro autor de los códigos civil y de comercio, en su rol de Asesor de Gobierno del estado de Buenos Aires, en el que afirma, citando diversas normas de las Leyes de Indias, pero también del Concilio de Trento, que regulaban los registros parroquiales:

"Podría decirse así que los Párrocos tienen en la materia el carácter de oficiales públicos, y que los actos que ante ellos pasen como exclusivos de su ministerio hacen plena fe del hecho". Agrega que *"sólo en la Francia, en Nápoles y en Holanda, los actos del estado civil son llevados por oficiales públicos, independientes de los párrocos"*, pero que *"en la Alemania y en todas las demás naciones, los registros de los actos civiles siguen hasta hoy siendo llevados por los párrocos. Aún en algunos reinos en que se aceptó el Código Civil francés tomaron el medio de declarar a los curas y a los pastores protestantes oficiales del estado civil"*⁸⁴⁰.

⁸⁴⁰ VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, "Dictámenes en la Asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires", Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1982, p.185.

Pero VÉLEZ también alegó acerca de la facultad del Gobierno de reglamentar el modo de cumplir esas funciones, y de hecho proyectó la norma respectiva.

Al redactar el Código Civil que entró en vigencia en 1871, VÉLEZ sostuvo esas ideas, y atribuyó a los ministros de culto (párrocos y pastores de iglesias disidentes) la función de llevar el registro civil. Pero como ya fue dicho, tal atribución y obligación se extinguió con el dictado de la ley de matrimonio civil 2393, en el año 1988, que creó los registros civiles provinciales.

Sin embargo, se dan casos singulares donde el ejercicio de determinadas funciones públicas, delegadas por el Estado ha vuelto a insertar a ministros de culto en la Administración, incluso con una remuneración.

Así por ejemplo, en **Chubut**, una ley provincial⁸⁴¹ faculta al Poder Ejecutivo a

"asignar una retribución mensual a sacerdotes que presten asistencia en localidades del interior, ajenas a su asiento, con sensible debilidad demográfica y deficientes comunicaciones o servicios" (art.1)

La misma ley prevé que

"Los sacerdotes beneficiarios actuarán como auxiliares de la Administración Pública a efectos de la celebración de matrimonios civiles, la inscripción de nacimientos y otros autorizados por el Decreto Ley Nº 8204/63 y las Leyes Nacionales Nº 16.478 y 17.671" (art.2), es decir, serán oficiales del Registro Civil.

Ocurre en varios países latinoamericanos que los ministros de culto, en particular los sacerdotes católicos, sean investidos de calidades propias de funcionarios públicos, especialmente en situaciones donde el Estado no ha logrado organizar debidamente sus estructuras.

Así por ejemplo, en **Guatemala**, entre los "funcionarios que pueden autorizar el matrimonio" (civil) se menciona a

⁸⁴¹ Ley III-10 (antes Ley 1810), BO 21/1/2010. La ley prevé que "Los sacerdotes beneficiarios de la retribución prevista en el artículo 1º serán propuestos por el Señor Ministro de Gobierno y Justicia y, previa autorización del Obispado de Comodoro Rivadavia, designados mediante un Decreto del Poder Ejecutivo". Al tiempo de su sanción era la única diócesis de la provincia. Obviamente, es un beneficio exclusivo para sacerdotes católicos.

*"el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde"*⁸⁴².

12.9 Integración de comisiones asesoras o consultivas.

Existe otra forma de participación de los ministros de culto en el ejercicio de la potestad civil, a veces en cuanto tales y a veces en representación de las confesiones religiosas a las que pertenecen: la que resulta de la integración en consejos consultivos o asesores en diversas áreas, donde su condición o representatividad es particularmente valorada.

Esto ha ocurrido en situaciones especialmente delicadas. Cabe traer a colación, como ejemplo, la designación como miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tuvo a su cargo la recolección de información y clarificación de lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura militar de 1976/1983 con los detenidos-desaparecidos, del obispo católico Jaime de Nevares, el obispo metodista Carlos Gattinoni y el rabino Marshall Meyer⁸⁴³.

La participación de ministros de culto en este tipo de comisiones ocurre normalmente en áreas donde tanto el Estado como las confesiones religiosas reivindican un derecho propio de actuación, y donde la experiencia y participación concreta de estas últimas es evidente, como son la educativa, cultural y social; y también la asistencial. Se ha dado en situaciones de emergencia, en las que se han constituido comisiones asesoras o ejecutivas de planes sociales, y también en situaciones ordinarias.

⁸⁴² Código Civil de Guatemala, Decreto Ley nº 106, artículo 92.

⁸⁴³ Un caso análogo ocurrió en **Chile**, donde se encomendó la presidencia de la "Comisión de la Verdad" al obispo católico Sergio Valech. La actuación de esa comisión dio lugar al dictado de la Ley 19.687, publicada el 6 de julio de 2000, que dispuso que *"Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B'nai B'rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos [...]"*.

Otro de los campos donde es frecuente convocar a ministros de culto, es en los comités de bioética, existentes a nivel provincial, municipal o simplemente hospitalario. Los temas vinculados a la bioética son en los tiempos actuales uno de los campos de encuentro (o de conflicto) más significativos entre el Estado y las confesiones religiosas. La existencia de los Comités Hospitalarios de Ética es requerida por la Ley nacional 24742, del año 1996⁸⁴⁴, que no menciona a los ministros de culto entre quienes deben o pueden integrarlos, aunque sí lo hacen varias normas provinciales de aplicación⁸⁴⁵. La ley invita a las provincias a legislar en la materia⁸⁴⁶.

La provincia de **Córdoba**, ha creado el Consejo de Bioética de Córdoba (Co.Bi.Cor), como organismo consultivo del Ministerio de Salud⁸⁴⁷. Ese consejo cuenta (art.3) con una

"Comisión Permanente Religiosa, integrada por representantes de los cultos debidamente reconocidos por autoridad competente, con facultad de emitir opinión ante el Consejo, en todos los asuntos expuestos a consideración del mismo, en aquellos aspectos vinculados con la fe y la conciencia religiosa de las personas".

También la Comisión Consultiva Interdisciplinaria constituida específicamente para reglamentar las declaraciones de voluntad anticipada para una muerte digna (ley 10058), está integrada por "representantes religiosos"⁸⁴⁸.

En la provincia de **Jujuy** existe un Comité Provincial de Bioética⁸⁴⁹, que entre varios otros está integrado por "*representantes de la*

⁸⁴⁴ BO 23/12/1996.

⁸⁴⁵ Dice la ley nacional que "Los Comités Hospitalarios de Ética funcionarán como equipos interdisciplinarios integrados por médicos, personal paramédico, abogados, filósofos y profesionales de las ciencias de la conducta humana, que podrán pertenecer o no a la dotación de personal del establecimiento. Desarrollarán su actividad dependiendo de la dirección del hospital, y quedarán fuera de su estructura jerárquica." (art.2). Entre los temas de su competencia figuran las tecnologías reproductivas, la eutanasia o el secreto profesional (art.3).

⁸⁴⁶ Algunas simplemente han adherido a la ley nacional, como **Neuquén** (ley 2327, BO1/9/2000).

⁸⁴⁷ Ley 9011, BO 16/5/2002.

⁸⁴⁸ Decreto 298/14 del 31 de marzo de 2014 (BO 16/4/14).

⁸⁴⁹ Creado por ley 5009, BO 19/1/98.

Iglesia” (art.2). Se da por supuesto que se trata de la Iglesia Católica⁸⁵⁰. También en cada hospital, debe formarse un comité hospitalario de bioética, compuesto por médicos, y por “un abogado, un teólogo⁸⁵¹, y miembros representantes de la comunidad y cuando se requiera, un representante por el paciente” (art.7). Es curiosa esta asignación de funciones, hecha por una ley positiva argentina a los teólogos, que no necesariamente deben ser ministros religiosos. Tampoco se especifica teólogos de qué religión, aunque cabe suponer que serán católicos.

En la provincia de **Entre Ríos**, los Comités Hospitalarios de Bioética que deben funcionar en todos los hospitales del sistema público de salud (y optativamente en los del sistema privado de salud), según el art.1º de la ley 9799⁸⁵², deberán estar integrados –entre otros- por “representantes de diversos cultos autorizados y filósofos” (art.3), quienes los integrarán *ad honorem*. No está dicho que los “representantes de los cultos” deban ser ministros religiosos, pero es natural que lo sean.

En **Misiones** también se ha previsto por ley⁸⁵³ la organización en los Hospitales más importantes dependientes del Ministerio de Salud Pública de un Comité Hospitalario de Ética (art.1), que funciona dependiendo del director del Hospital y estará integrado

“por un cuerpo colegiado que, en carácter ad honorem, se conforme con médicos, abogados, psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos y otras profesiones afines, representantes de las diversas confesiones religiosas, como así también de la etnia Guaraní”,

. Parece claro que no se trata de incluir en un comité con límites ya de por sí imprecisos, a representantes de “todas” las confesiones religiosas posibles, sino de más de una. Como en los demás casos analizados, no necesariamente serán clérigos o ministros ordenados, pero probablemente lo sean.

⁸⁵⁰ Significativamente, la reglamentación (Decreto 3815/05, BO 31/8/2005) ha variado ligeramente la redacción, y dice el Comité Provincial de Bioética estará integrado por “miembros representativos de Comunidad, de los Consejos y Colegios profesionales, las Iglesias...”, en plural. Es más inclusiva, pero sigue excluyendo al menos nominalmente a los grupos religiosos que no son iglesias.

⁸⁵¹ La reglamentación –de modo algo sorprendente- modifica la integración y prevé la presencia de “teólogos o profesionales de la Fiscalía”. Probablemente haya querido decir filosofía.

⁸⁵² Sancionada el 16/10/07, ADLA LXVII-E-5154.

⁸⁵³ Ley 4334, del 1/12/2006.

En **Catamarca** la ley que adhiere a la Ley nacional 24.742 prevé la existencia de Comités Hospitalarios de Ética de no menos de nueve miembros, integrados por

“médicos, personal paramédico, abogados, filósofos, trabajadores sociales, representantes de la comunidad, quedando la especificación de otras áreas –representantes de cultos mayoritarios, personal administrativo del hospital, etcétera- a criterio de la reglamentación interna. La tarea de los miembros será de carácter no rentado”⁸⁵⁴.

Los “cultos mayoritarios” deberían ser los de la localidad del hospital, aunque en esa provincia hay una amplísima mayoría católica en toda ella.

En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, la ley de creación y regulación de los Comités de Bioética en el Sistema de Salud de la Ciudad⁸⁵⁵ prevé que ellos estén integrados por un cuerpo colegiado ad-honorem que asegure

“la representación de la población de acuerdo a las características de género y rango etario equitativamente” (art.5),

Entre sus miembros no se menciona a ministros religiosos; pero también prevé que

“para la mejor resolución de las cuestiones los Comités de Bioética pueden convocar a participar en las actividades a profesionales del Derecho, sociólogos/as, filósofos/as, antropólogos/as, funcionarios/as públicos, representantes de la comunidad, como así también a pacientes o personas allegadas a ellos. Los representantes religiosos podrán ser convocados cuando el paciente o los familiares del mismo así lo requieran” (art.8).

Llama la atención y es de lamentar la desconfianza que trasunta esta restricción a la limitación de ministros de culto, y la negativa a reconocer a las confesiones religiosas una voz propia en estos asuntos.

La provincia de **Corrientes**, por su parte, adhirió a la Ley Nacional 24.742 de creación de comités hospitalarios de ética⁸⁵⁶ y dispuso que éstos funcionen como “*equipos transdisciplinarios*” integrados, entre otros, por

⁸⁵⁴ Ley 5057, del 27/12/01, BO 8/2/02.

⁸⁵⁵ Ley 3302 sancionada el 26/11/2009 (BOCBA 15/1/2010, ADLA LXX-A-413).

⁸⁵⁶ Ley 5896 del 14/10/09 (BO 13/11/09, ADLA LXX-A-746).

“representantes religiosos, que podrán pertenecer o no a la dotación de personal del establecimiento”, quienes actuarán sin dependencia jerárquica de las autoridades del hospital y sin remuneración (art.3º de la ley).

La provincia de **Chubut** no menciona a los ministros de culto entre quienes deben integrar los comités de bioética⁸⁵⁷, pero prevé que

“ante situaciones puntuales que así lo justifiquen, los Comités de Bioética podrán convocar temporalmente a otras personas consideradas expertas o idóneas en diferentes disciplinas, para obtener información o asesoramiento relacionados con los problemas en análisis, así como a funcionarios públicos, representantes religiosos, pacientes y personas allegados a ellos” (art.7).

La provincia del **Chaco** no incluye ministros de culto en su Consejo Provincial de Bioética⁸⁵⁸, pero sí *“filósofos y profesionales de las ciencias de la conducta humana”* (art.2). Tampoco los incluye nominalmente en los comités hospitalarios. La misma ausencia de ministros de culto se advierte en la ley de **Santa Fe**, que sí incluye en los comités a *“filósofos”*⁸⁵⁹.

En **Tucumán** existen en los principales hospitales *“Comités Hospitalarios de Ética”*⁸⁶⁰, cuyos miembros trabajan *ad honorem* y son la mitad médicos, y la otra mitad *“profesionales relacionados a la ética, tales como... ministros religiosos”* (art.3). La función es educativa, consultiva y de asesoramiento.

Es claro que la legislación procura tomar distancia de cualquier idea de "monopolio de la ética" reconocido a las confesiones religiosas, y mucho más a una confesión en particular; o identificar a los ministros de culto con "profesionales de la ética" o de la bioética. Hay muchas veces un deliberado y explícito propósito de convocar a diversidad de voces y puntos de vista. Sin embargo, ese propósito a veces parece llegar a una voluntad más o menos disimulada de excluir la voz de la religión de los debates bioéticos. Eso parece claramente excesivo, y aún contrario al sentir del común de la gente. Una cosa es evitar la imposición de una moral religiosa única, que es una exigencia de la laicidad. Otra cosa es prescindir del punto de vista religioso en el

⁸⁵⁷ Ley I-583 del 26/5/2016 (BO 29/6/2016).

⁸⁵⁸ Creado y reglado por ley 4781 del año 2000 (BO 13/10/2000).

⁸⁵⁹ Ley 12.391 (BO 3/1/2005).

⁸⁶⁰ Ley 6507, del 20/11/93.

debate bioético, que es algo bien distinto, incluso aceptando una diversidad de perspectivas religiosas.

También es frecuente que las leyes de organización de los tribunales especializados en asuntos de familia prevean la posibilidad de convocar o consultar a ministros religiosos.

Un ejemplo es el de la provincia de **Córdoba**⁸⁶¹, que establece en cada circunscripción judicial un Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario, que

“cuando alguna de las partes lo requiera, podrá integrarse con ministros de las religiones reconocidas por la Nación Argentina” (art.7).

De manera que no lo integran en forma permanente, pero pueden hacerlo, a pedido de alguna de las partes en juicio.

En **Jujuy**, la ley de Protección integral de la niñez, adolescencia y familia⁸⁶² crea un Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (art.36) como órgano destinado a

“desarrollar políticas para la promoción y protección integral de los derechos del niño, del adolescente y de su familia”

Ese Consejo está integrado entre otros por

“un representante de la Iglesia Católica que opere en organizaciones comunitarias-sociales para la niñez y la adolescencia” (art.38).

De modo similar, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de **Misiones**⁸⁶³, crea un Consejo Provincial de Garantías de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, que está integrado por *“un representante de la Iglesia Católica”*, y por *“un representante de las demás organizaciones religiosas”* (art.46). A su turno los municipios deben crear consejos locales equivalentes, integrados de modo honorario, entre otros, por representantes de *“comunidades religiosas”* (art.51).

⁸⁶¹ Ley 8400, BO 14/9/94.

⁸⁶² Ley 5288, BO 20/5/2002.

⁸⁶³ Ley 3820, BO 27/3/2002, aunque postergada en su entrada en vigencia por el art.1 de la ley 3883.

En la provincia de **Buenos Aires** el Consejo Provincial del Niño y del Joven tiene un Consejo Consultivo integrado, entre otros, por

*"un representante de la Iglesia Católica y dos representantes de las demás religiones y credos autorizados por la Secretaría de Culto de la Nación y con participación activa en la temática"*⁸⁶⁴.

Por su parte, **Corrientes** posee un "Consejo Participativo Provincial" creado por la ley de protección de los adultos mayores⁸⁶⁵, que está integrado entre otros, por

"un representante de las iglesias que desarrollen actividades con y/o para adultos mayores" (art.26).

En materia de atención de emergencias sociales podemos citar el caso de **Jujuy**, donde la ley 4995⁸⁶⁶ invitó especialmente a los obispos católicos con sede en la provincia (Obispo de Jujuy, y Obispo Prelado de Humahuaca) a integrar por sí o por medio de representantes una Comisión Provincial de Emergencia Social, para planificar, organizar y supervisar la labor de asistencia social en la provincia. Esa comisión está integrada exclusivamente por dichos obispos, y por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En la misma provincia, poco después y con carácter permanente, fue creado el Consejo Consultivo Provincial para la aplicación de programas sociales⁸⁶⁷, integrado entre otros por *"dos representantes de la Iglesia"* (art.1 inc. d), aunque no necesariamente ministros de culto. A su turno, en cada municipio se ha creado un consejo consultivo local, integrado entre otros por *"un representante de organizaciones confesionales"* (art.6 inc. d). En este caso, no necesariamente ministros de culto, y tampoco necesariamente católicos.

En **Misiones** existe un Consejo Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo Interior⁸⁶⁸, que entre los *"representantes no gubernamentales"* cuenta con *"representantes confesionales"*, a saber: dos

⁸⁶⁴ Ley 12607 (BO 26/1/01), art.18. Sin embargo, la norma no exige que tales representantes sean ministros de culto.

⁸⁶⁵ Ley 6243 del año 2013, ADLA LXXIV-A-734.

⁸⁶⁶ Aprobada el 22/5/1997.

⁸⁶⁷ Ley 5346, BO 23/1/2004.

⁸⁶⁸ Creado por Decreto 485/2004 BO 7/6/2004.

representantes de la Iglesia Católica (uno de la Diócesis de Iguazú y otro de la Diócesis de Posadas), y *“dos representantes por cada una de las demás confesiones religiosas, uno por la Capital y uno por el interior”*. Habida cuenta de la particular pluralidad religiosa de la provincia, esa forma de integración supondría una multitud. Sin embargo, el Consejo tiene una Mesa Ejecutiva, más restringida en número, que integran entre otros *“un miembro permanente representante de la Iglesia Católica, [y] un miembro permanente de otra representación confesional”*.

En **Buenos Aires**, la reglamentación de la ley 14.051 dictada para combatir el alcoholismo, creó el “Foro para la Prevención del Abuso del Alcohol”, presidido por el Ministro de Desarrollo Social e integrado entre otros por *“representantes de los Credos de las distintas confesiones locales”*⁸⁶⁹.

En materia de seguridad, curiosamente, cabe traer a colación el caso de **La Rioja**. Allí la ley 6943 organiza a la policía provincial, y crea en cada región de la provincia un consejo de seguridad, en el que junto a autoridades políticas y provinciales podrán participar “Autoridades eclesiásticas”, se supone que católicas.

Vinculada con esta temática está la conformación de las comisiones o comités de evaluación internos en los establecimientos penitenciarios, muchas veces integrados por capellanes o por ministros de otros cultos, según hemos visto al tratar el tema de la actuación de los ministros de culto en ese ámbito.

12.10 Conclusiones

En las cuestiones que hemos examinado en este capítulo se nota de modo particular el peso de la historia. Pero también, vista la enorme cantidad de normas que se refieren a los ministros de culto en relación a situaciones e instituciones muy diversas, la necesidad de afinar la consideración jurídica que ellos merecen en orden a una garantía más plena de la libertad religiosa.

⁸⁶⁹ Decreto 2590/09 del 20/11/09, art.8.

Subsisten en muchos casos reminiscencias del sistema Patronal, donde los ministros de culto católico eran considerados empleados del Estado. Esto lleva al Derecho Administrativo a producir soluciones inadecuadas, porque:

a) a veces mantiene un tratamiento injustificado a los ministros de culto católico como si fuesen efectivamente empleados públicos, cuando no lo son, introduciendo además diferencias de trato que no se justifican actualmente entre ellos y los no católicos. Diferencias que no necesariamente son de privilegio o ventaja, porque pueden ser también de sometimiento a reglas o controles contrarios a la libertad religiosa;

b) a veces se procura superar esa situación aplicando a todos, soluciones que en el pasado eran comprensibles para los ministros de culto católicos, aunque no lo sean hoy. Con el agravante de incurrirse con frecuencia en desaciertos terminológicos, por la falta de un concepto abstracto y general de "ministro de culto".

Ciertamente, no todo lo antiguo tiene que desaparecer. Hay situaciones que se vinculan con la historia y que merecen respeto. El tratamiento protocolar dispensado a las autoridades eclesiásticas, con los ajustes que sean necesarios para superar diferencias que sean innecesariamente irritantes (pero no todas ellas, porque es forzoso reconocer que no todas las confesiones religiosas tienen la misma relevancia social e histórica), puede estar justificado. Es un ejemplo.

c) En cambio, en otros ámbitos es necesario avanzar hacia soluciones más igualitarias y apropiadas para una sociedad plural y laica. Por ejemplo, en materia migratoria no se justifica un tratamiento desigual a los ministros de culto en función de la confesión religiosa a la que pertenezcan.

Como en tantos otros casos, sería importante que las soluciones legislativas y de la praxis administrativa fuesen elaboradas a partir de los principios que deben regir el tratamiento del factor religioso en una sociedad democrática. Comenzando, en los temas que aquí nos ocupan, por el más amplio respeto de la autonomía de las confesiones religiosas, y la búsqueda de aquellas soluciones que mejor contribuyan al pleno goce de la libertad religiosa, tanto en su faz individual, como especialmente colectiva.

Capítulo 13. Ministros de culto y medios de comunicación

En la Argentina, como hemos visto, no es frecuente que se restrinjan derechos a los ministros de culto por su condición de tales. Sin embargo, la ley 19.798, de 1972 (que estuvo vigente hasta 1981) al regular detalladamente el otorgamiento de licencias de radiodifusión a particulares dispuso que no podrían otorgarse tales licencias a “*dignatarios religiosos*” (art.86), quienes tampoco podían ejercer cargos directivos en emisoras pertenecientes al Estado.

La doctrina interpretó que se trataba

“de una incapacidad de derecho, destinada a evitar la acción de “eventuales influencias” que las personas enunciadas podrían ejercer —en razón de sus cargos— presentándose como aspirantes a una licencia de radiodifusión, ya sea a título personal o como integrantes de una sociedad”. Pero si esa era la razón de ser, vinculada al concurso de licencias, “nada impide que los “dignatarios religiosos” ejerzan la representación de la institución titular” cuando ésta fuera la Iglesia y hubiera accedido a la frecuencia no mediante licencia, sino por su condición de persona jurídica pública⁸⁷⁰.

De todos modos, la prohibición para los “dignatarios religiosos” desapareció con la ley 22.285, y no está vigente hoy. La misma norma prohibía otorgar licencias, a quienes “*no pueden ejercer el comercio*”. En esa categoría estaban incluidos los “*clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical*”, según el artículo 22 del código de comercio entonces vigente⁸⁷¹. Quedaban así inhabilitados los religiosos que fueran clérigos, pero no los clérigos seculares, ni las religiosas o los religiosos no clérigos.

El art.45 (inc. d) de la ley 22.285, extendió la prohibición a quien estuviera

“*incapacitado civil o penalmente para contratar o ejercer el comercio*”.

⁸⁷⁰ TAU ANZOÁTEGUI, Carlos, “El acceso a las licencias de radiodifusión”, en LL 1975-D-482.

⁸⁷¹ Esto independientemente de que, según la interpretación más extendida, la prohibición del art.22 del código de comercio no hacía inválidos los actos realizados en infracción a ella, sino que solamente impedía al eclesiástico que los realiza adquirir el estatuto de comerciante y prevalerse de las ventajas que el mismo pudiera conllevar, como ya se ha visto.

Ello implicaba extender la restricción para dirigir medios de comunicación no sólo a los clérigos regulares (que tenían prohibido ejercer el comercio), sino a todos *“los religiosos profesos de uno y otro sexo”*, según decía el art.1160 del código civil por entonces vigente, que les prohibía contratar. La misma norma se mantuvo, textualmente, en la redacción dada por la ley 26.053, y también en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (art.24), hoy vigente.

Por su incapacidad para contratar los religiosos tampoco podían integrar *“los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas no comerciales o sin fines de lucro”*, que accedieran a licencias de radiodifusión. Desde luego, el legislador no había pensado ni remotamente en los religiosos, entre otras razones porque la prohibición para contratar que pesaba sobre ellos era generalmente olvidada o ignorada, pero ese era un efecto sin duda no deseado de la anacrónica incapacidad impuesta por el Código Civil (y que como hemos visto, hoy ha desaparecido).

Como la realidad camina muchas veces por andariveles distintos de los que marca la letra de las normas, a pesar de las prohibiciones referidas existían frecuencias de radio otorgadas en forma directa a órdenes religiosas, obviamente dirigidas por religiosos profesos, lo que no suscitó ninguna observación ni dificultad por parte del organismo de control.

La ley 26.522⁸⁷² innovó algo en la cuestión, porque la prohibición recordada del art.24 es para ser titular directo de licencias como persona física, o *“socio de persona ideal con fines de lucro”* también licenciataria. La restricción parece no abarcar a integrantes de personas jurídicas sin fines de lucro, ni menos a la Iglesia Católica misma o sus órdenes religiosas, que no recibe las frecuencias por medio de licencias, sino de autorización directa (arts. 4 y 37).

De todos modos, con la supresión de la incapacidad para contratar que pesaba sobre los religiosos a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, no subsiste ya ninguna restricción directa o indirecta para que ellos (y menos aún, los ministros de culto en general) participen en la propiedad o administración de medios de comunicación audiovisual.

Ninguna restricción existe, por otra parte, a la actuación o intervención de ministros de culto en programas de radio o TV. Es habitual la presencia de sacerdotes o ministros de culto de diversos credos en tales

⁸⁷² BO 10/10/2009.

programas. Durante mucho tiempo, era frecuente que al cierre de la programación televisiva (cuando los canales de televisión abierta no transmitían en continuado durante todo el día y la noche), hubiera una invocación religiosa a cargo de un sacerdote o ministro de otro credo. Actualmente, en horarios de la noche hay largos tramos de la programación de los canales abiertos o “de aire”, que son alquilados por grupos religiosos.

El decreto 286/81, repitiendo reglamentaciones anteriores, preveía (art.1-n) que

“En los programas de carácter específicamente religioso o en aquellos donde se traten temas relativos a los dogmas sólo podrán actuar los representantes de los cultos reconocidos y aquellas personas de probada solvencia moral y cultural”.

Pero la norma, que había caído en desuso, fue derogada en 1991⁸⁷³.

Podemos afirmar en consecuencia que no subsiste ninguna limitación a la participación de ministros de culto, de cualquier confesión que fuese, en relación a los medios de comunicación audiovisual.

No hay ya ninguna restricción para que sean propietarios, o participen en la propiedad de tales medios. Tampoco para intervenir en su gestión o administración, y menos aún para participar en sus transmisiones en cualquier carácter.

⁸⁷³ Decreto 1771/91, art.13.

Capítulo 14. Conclusiones generales

El problema de la definición del concepto de "ministro de culto", ha sido sintetizado por una autora italiana⁸⁷⁴ en términos que resultan igualmente válidos para el Derecho argentino, y probablemente para cualquiera:

"La calificación de ministro de culto está reservada por el ordenamiento italiano a sujetos que en el interior de una confesión religiosa resultan investidos de funciones institucionales que los distingue de los demás fieles. A tales sujetos la legislación unilateral y las normas convencionales les confieren derechos y prerrogativas, o bien les atribuyen incompatibilidades. En términos concretos individualizar al ministro de culto, o mejor, la categoría de personas a las que atribuir la calificación de ministro de culto, no es sin embargo una obra interpretativa simple: los ordenamientos confesionales no presentan de hecho una homogeneidad de sujetos calificados que permita elaborar una figura abstracta a la que conferir la calificación civil de ministro de culto. Incluso en el modelo judeo cristiano la diferencia que existe entre un rabino y un sacerdote son evidentes, y se convierten en clamorosas si se coloca a su lado a un imam o un monje budista o se mira a los nuevos movimientos religiosos.

En ese contexto, la atribución a un individuo dado de la calificación de ministro de culto, es el punto de llegada de un proceso valorativo que combina el derecho del Estado de definir a los sujetos de su propio ordenamiento, y el principio de autonomía confesional. Por este último en el plano sustancial la calificación civil encuentra siempre una correspondencia con el ordenamiento de la confesión de referencia, asegurada procedimentalmente por una certificación en el sentido conforme por la confesión misma. La calificación interna actúa así como un *presupuesto de hecho* y es indispensable para definir al ministro de culto, pero no suficiente: el ordenamiento civil no está obligado a conferir automáticamente la "ministerialidad" a cada sujeto confesional calificado y certificado como

⁸⁷⁴ BENIGNI, Rita, "La qualifica di "ministro di culto" tra autoreferenzialità confessionale e discrezionalità amministrativa. Le intese del xxi secolo ed i recenti pareri del Consiglio di Stato, nn. 2748/2009 e 561/2012", en RGDCEE, n° 30 (2012). La traducción es del autor, prescindiendo de las múltiples y útiles citas que el párrafo contiene.

"ministro". El *status* de ministro de culto emana, al contrario, de una verificación del ordenamiento civil, dirigida a comprobar la subsistencia de los requisitos considerados indispensables y funcionales al otorgamiento de derechos, prerrogativas, límites y potestad, incluso de naturaleza pública como la celebración de matrimonios con efectos civiles, propios de la calificación ministerial. Tales requisitos no están sin embargo definidos en alguna norma y ni siquiera en una aproximación doctrinal consolidada. Por otra parte, la prescripción normativa de los atributos de la ministerialidad contradeciría la naturaliza de la calificación ministerial, que el legislador ha querido genérica, para que fuese referible "a ministros de cualquier confesión".

A lo largo de estas páginas, hemos examinado el tratamiento que el Derecho argentino vigente, en sus distintas ramas, da a los ministros de culto. Hemos visto la evolución que tuvo ese tratamiento, y eventualmente hemos confrontado esas soluciones con el derecho comparado, al menos de la región o del área cultural, así como con la jurisprudencia más destacada de tribunales internacionales. Hemos procurado ir extrayendo algunas conclusiones provisorias en cada uno de los temas, y es ahora el momento de ensayar una conclusión general, que sintéticamente podría exponerse así:

1. En el Derecho argentino vigente no existe todavía un concepto unívoco de ministro de culto. Se trata de un concepto "en construcción", que se va elaborando en la medida de la necesidad de cada una de las ramas del Derecho. Esa trabajosa elaboración en el caso argentino se ve aún más dificultada por el sistema federal adoptado por el país, dado que en muchas materias no es el Estado nacional sino cada una de las provincias quien está llamada a legislar, a veces con competencia exclusiva y otras con competencia concurrente con el Estado federal.

En las legislaciones provinciales, no sólo en esta materia sino en todas, se produce un efecto de imitación o "dominó": es frecuente que cuando una provincia legisla sobre un tema novedoso, o modifica su legislación de un modo original, otras la imiten copiando las nuevas normas textualmente, o con ligeras modificaciones. Ello lleva a la reproducción de los aciertos, pero también de los errores, como hemos comprobado. Por ejemplo, en materia de protección del secreto religioso guardado por los ministros de culto, se registra una involución por la imitación de reformas a los códigos procesales penales menos respetuosas de esa protección. Pero por otra parte cabe abrigar la

esperanza de que también una buena conceptualización del ministro de culto que logre alguna provincia, sea imitada por otras.

2. La dispersión y falta de organicidad de la legislación lleva a que no exista tampoco uniformidad terminológica, y a que haya a veces errores bastante evidentes. Se utilizan indiferentemente las expresiones "ministro de culto" o "ministro religioso"; pero también se utiliza el término "religioso" no en su acepción correcta, sino sustantivando el adjetivo y queriendo significar lo mismo que con las expresiones anteriores, lo que genera confusión. Es lo que sucede por ejemplo en las leyes migratorias, pero también en otras que hemos visto.

3. Se advierte una evolución en los conceptos utilizados por el Derecho en siglo XIX (época de la organización nacional y la codificación) y principios del siglo XX, que se ha hecho más intensa en el final del siglo XX y lo que va del XXI. En la primera etapa señalada, el Derecho argentino prestó atención prácticamente exclusiva a los ministros del culto católico, denominándolos con sus nombres específicos (obispos, sacerdotes, religiosos, eclesiásticos, clérigos) y haciéndolo con finalidades diversas:

a) en ocasiones, para conferirles o reconocerles una dignidad particular, especialmente a los obispos o autoridades eclesiásticas;

b) frecuentemente, en el marco del régimen de Patronato adoptado por la Constitución de 1853 (y no aceptado formalmente, pero sí en la práctica por la Iglesia Católica), para equipararlos a los funcionarios o empleados públicos tanto en materia de derechos como de obligaciones; y

c) en muchas ocasiones, para dar eficacia en el orden civil al estatuto propio de clérigos y religiosos previsto por el ordenamiento canónico. Pero en este caso, en general no por vía de remisión sino de imitación, incorporando a las leyes civiles normas pretendidamente equivalentes a las canónicas (por ejemplo, en materia de restricciones a la capacidad). Esta forma de legislar se mostró inadecuada con el correr del tiempo, porque por una parte cristalizó normas que luego no recogieron la evolución de sus equivalentes en el Derecho Canónico, y por la otra carecieron de la flexibilidad propia del ordenamiento canónico, que es rico en materia de dispensas y adaptaciones autorizadas a la autoridad eclesiástica (pero que no existían en el orden civil).

4. Las normas decimonónicas raramente consideraban a los ministros de culto no católicos. Eventualmente, hacían referencia los pastores

o "ministros protestantes", por asimilación a los anteriores. Una doble evolución, de hecho y de derecho, obligó a tomarlos en cuenta:

a) por una parte, la diversidad religiosa creciente en la Argentina, a partir de la notable apertura a la inmigración que fue consecuencia del mismo programa constitucional (el preámbulo de la Constitución abre el país a *"todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino"*), favorecida por la temprana adopción de la "libertad de culto" en la que la República Argentina fue pionera en América Latina. La consideración hacia los ministros de culto de otras confesiones comenzó en leyes especiales (como las referidas al servicio militar) y se fue ampliando progresivamente hasta ser hoy la regla.

b) por otra parte, el cambio de paradigma y consiguientemente de mentalidad jurídica operado a final del siglo XX, con la adopción plena de los tratados internacionales de derechos humanos y el otorgamiento a ellos de jerarquía constitucional obligó a un replanteo jurídico. De un modelo donde el análisis del factor religioso se centraba en la delimitación de la relación "Iglesia (Católica) - Estado" con "libertad de culto", se pasó a un modelo donde el eje central es la libertad religiosa ampliamente reconocida tanto en su faz individual como colectiva.

A ese cambio genérico, se suma en ciertas ramas del derecho la percepción de lo inadecuado de la terminología utilizada hasta el momento. Por ejemplo, en el Derecho penal, regido por el principio de tipicidad, la utilización del término "sacerdote" se mostró particularmente inadecuada por la imposibilidad jurídica de aplicar las normas que contenían ese concepto a ministros de culto que no se denominasen de ese modo. Por lo que fue necesario sustituirlo por el más genérico de "ministro de culto". En otras ramas del Derecho, como el Derecho civil, donde es posible la analogía o la aplicación extensiva de las normas, la evolución es más lenta y todavía no ha terminado de producirse.

5. En definitiva, se verifica una tendencia aún no del todo cristalizada a imponerse lentamente el uso de denominaciones genéricas como antes se ha dicho, con la pretensión de abarcar a los ministros de culto o religiosos de las diversas iglesias, confesiones y comunidades religiosas. Pero esa denominación genérica lleva, como ha ocurrido en todo el mundo, a la necesidad de precisar el significado de la expresión o, dicho en otros términos, entender qué se quiere decir con ella y quiénes son los comprendidos en el concepto. Esta

tarea corresponde principalmente a la jurisprudencia y a la doctrina, y es la que muestra un desarrollo todavía incipiente.

En esta tarea es donde resulta indispensable acudir a los principios que rigen la materia, y entre ellos señaladamente el de libertad religiosa y, en esta cuestión específica, el de respeto a la autonomía propia de las confesiones religiosas. Autonomía que en la Argentina está expresamente reconocida a la Iglesia Católica, e implícitamente a las demás confesiones por el principio de igualdad impuesto por la Constitución (art.16) y por el de no discriminación religiosa repetido en todos los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

6. Parece indudable que en primer lugar corresponde estar a lo que cada confesión religiosa disponga en su propio ordenamiento interno. Esta es la regla básica, que exige por lo tanto el conocimiento y la referencia a esos ordenamientos confesionales.

La dificultad que esto plantea es, en muchos casos, la carencia de un derecho confesional mínimamente ordenado y cognoscible. Esto ocurre en el mundo con las religiones no jerárquicas, y en la Argentina y en América Latina también ocurre de otro modo, por la multiplicación y fragmentación de pequeñas iglesias carente de una mínima estructuración jurídica.

7. La segunda dificultad, que se presenta también en otros países y no es propia de la Argentina, es la necesidad de determinar si el Estado está obligado a aceptar sin más lo que cada confesión religiosa manifieste, o si tiene algo que decir por sí mismo. Esto último parece especialmente necesario, cuando la consideración respecto de los ministros de culto consiste en otorgarles o reconocerles prerrogativas, derechos o un tratamiento más favorable en alguna materia en relación a los ciudadanos corrientes. En tal caso, ¿debería el Estado admitir que una confesión religiosa determinada, asigne la calidad de ministro de culto a todos sus miembros o a la gran mayoría de ellos? Porque si así fuese, se estaría configurando una situación de discriminación, según la cual todos los miembros de una confesión religiosa, por el hecho de su religión, tendrían una situación más ventajosa que el resto de sus conciudadanos. Lo que no parece compatible con un Estado democrático.

Por lo tanto, parece necesario tamizar la autodefinición que cada confesión religiosa realice respecto de quienes son sus ministros de

culto, con ciertos estándares puestos por el Estado. Pero tales estándares deben ser rigurosamente objetivos, para no incurrir en una discriminación en sentido contrario de la recién apuntada. Y en su determinación resulta necesario evitar el ceñirse al seguimiento de un paradigma establecido por la confesión religiosa mayoritaria, tradicional o más conocida: es imprescindible aceptar que hay una diversidad de estructuras religiosas que debe ser respetada.

En esta línea de pensamiento, los parámetros que hasta ahora ha marcado la jurisprudencia y que en principio compartimos, para definir quiénes son ministros de culto (siempre a partir de la autodefinición que proponga cada confesión religiosa) indican que debe tratarse de personas que:

a) tengan en el seno de la comunidad un rol diferenciado del común de los fieles, orientado en principio a la dirección del culto, a la enseñanza, a la conducción de la comunidad, o a varias de esas funciones simultáneamente;

b) reciban para esa función una formación específica, sin que quepa al Estado exigir que tenga esa formación una duración, contenido o forma determinados, por ser resorte de la propia confesión religiosa;

c) hayan sido investidos de la condición de ministros de culto por la comunidad a la que sirven, o por sus autoridades legítimas, mediante los procedimientos internos de selección y designación que prevean las normas confesionales. Esto lleva implícito que también es la misma comunidad, o sus autoridades, quien está legitimada para disponer el cese o pérdida del estado ministerial, en ejercicio de su propia autonomía y sin intervención ni posibilidad de revisión por parte del Estado (y mucho menos, de otra confesión religiosa); y

d) tengan una dedicación efectiva a la tarea ministerial, sin que sea necesario exigir una dedicación exclusiva pero sí al menos preferente o significativa, y sin que incida el hecho de que la labor sea o no remunerada y en su caso de qué forma.

8. El análisis del modo en que el Derecho argentino (sin que en esto difiera de otros ordenamientos) ha abordado la cuestión, muestra que de modo recurrente se hace referencia a ministros de "cultos reconocidos", "aprobados", o expresiones similares. Mientas que en otros casos (por ejemplo, en materia penal) se hace referencia a "cultos reconocidos o no", o expresiones similares.

Este modo de referirse remite a un problema más amplio y que excede el objeto de este trabajo, que es el modo de relacionamiento del

Estado con las confesiones religiosas. En efecto, esa expresión supone la existencia de algunas iglesias, comunidades o confesiones religiosas ("cultos")⁸⁷⁵ que han merecido alguna forma de reconocimiento por parte del Estado, y otros que no. Incluso, no faltan normas que hacen referencia a "cultos aprobados", o "admitidos", o expresiones semejantes.

En rigor de verdad no hay en la Argentina iglesias o religiones "reconocidas" ni menos aún "admitidas" o "aprobadas" por el Estado (excepción hecha, si se quiere, de la Iglesia Católica que cuenta con un expreso reconocimiento constitucional). El Registro Nacional de Cultos todavía existente impone una inscripción obligatoria de las "entidades" religiosas no católicas, pero se trata de una exigencia que pugna con el reconocimiento amplio de la libertad religiosa contenido en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y que está en vías de desaparecer. Si ese registro fuera reemplazado por otro de carácter voluntario, tal como todos los proyectos de ley de las últimas décadas propician, ¿los derechos y obligaciones que las distintas normas reconocen o asignan a los ministros de culto de "cultos reconocidos" corresponderán sólo al de las iglesias o comunidades que decidan inscribirse como tales? ¿O también a los de aquellas que por alguna razón no lo hagan? Es una cuestión que quedará abierta.

En suma, nos encontramos con un capítulo decisivo del Derecho Eclesiástico argentino, porque las definiciones legislativas y jurisprudenciales en esta materia serán un necesario indicador del respeto que logre la libertad religiosa en el país.

⁸⁷⁵ También aquí se aprecia la necesidad de una mayor precisión terminológica. Es frecuente el uso en la legislación del concepto de "culto", como forma sintética de referirse a las iglesias, confesiones, comunidades o agrupamientos religiosos. Raramente, pero ahora con mayor frecuencia, el Derecho utiliza ese otro conjunto de expresiones. Por ejemplo, el art.148 inc. c) del nuevo Código Civil y Comercial reconoce como personas jurídicas a "*las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas*"; pero el mismo Código en su art.744 habla de "*cualquier religión reconocida por el Estado*" (exhibiendo la dificultad que aquí mencionamos); y en su art.2482, como hemos visto, menciona a los "*ministros de cualquier culto*".

BIBLIOGRAFIA

- ALBERCA DE CASTRO, Juan Antonio, "Régimen jurídico del ministro de culto en España y Francia", Granada, Ed. Comares, 1999.
- ALBERDI, Juan Bautista, "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", Buenos Aires, Plus Ultra, 1991.
- ALUFFI BECK-PRECOZ, Roberta, "Il diritto islamico", en FERRARI, Silvio (a cura di), "Introduzione al diritto comparato delle religioni", Il Mulino, Bologna, 2008, p.203
- ÁLVAREZ CORTINA, Andrés-Corsino "Ministros de Culto", en "Tratado de Derecho Eclesiástico", Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona, EUNSA, 1994, pp.865-895.
- ANAYA, Jaime, "Código de Comercio y Leyes Complementarias", vol.I, Omeba, Buenos Aires, 1965.
- ARRIETA, Juan Ignacio, "La asistencia religiosa con particular referencia a los centros de especial sujeción: fuerzas armadas, centros de detención, centros sanitarios", en "La Libertad Religiosa" (Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995.
- , "Le circoscrizioni personali" en *Fidelium Iura*, 1994 (4), p.207-243.
- ASIAÍN PEREIRA, Carmen, "Chiesa e Stato in Uruguay", en *Quaderni di Diritto e Politica Eclesiastica*, 2007-1, p.101.
- BALIAN, Eduardo Néstor. "El abuso sexual y la responsabilidad civil de los obispos", LL 2013-D-109.
- BAQUERO DE LA CALLE RIVADENEIRA, Jaime, "Personas Jurídicas de Derecho Especial", Quito, 2004.
- BASDEVANT-GAUDEMET, Brigitte, "Lo statuto giuridico dell'Islam in Francia", QDPE 1996/1, p.89.
- BENIGNI, Rita, "La qualifica di "ministro di culto" tra autoreferenzialità confessionale e discrezionalità amministrativa. Le intese del xxi secolo ed i recenti pareri del Consiglio di Stato, nn. 2748/2009 e 561/2012", en *RGDCEE*, nº 30 (2012).
- BIDART CAMPOS, Germán J., "Las causas de jurisdicción eclesiástica y su detracción a la jurisdicción del Estado", ED 135-775.
- , "Manual de Derecho Constitucional Argentino", Ediar, Buenos Aires, 1979.

- BORDA, Guillermo, "Tratado de Derecho Civil Argentino", 9ª Edición Actualizada, La ley, Buenos Aires, 2008.
- BOTTA, Raffaele, "Dieci anni di giurisprudenza su fattore religioso e diritto del lavoro", QDPE 2001/3, p.729.
- BUSSO, Ariel, "La fidelidad del apóstol", segunda edición, Buenos Aires, Educa, 2014.
- BUSSO, Eduardo, "Código Civil Anotado", Buenos Aires, EDIAR.
- CALLIOLI, Eugenio, "O estado e o fator religioso no Brasil Republica", EDUSC, Roma, 2001.
- CALVI DEL RISCO, José Antonio, "Asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y policiales en el Perú", en "Fuerzas Armadas y factor religioso" (Silvia MESEGUER VELASCO, Santiago CAÑAMARES ARRIBAS y María DOMINGO GUTIERREZ, Coordinadores), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.
- CASTELOT SS, John J. "Instituciones religiosas en Israel", en "Comentario Bíblico "San Jerónimo" (dirigido por Raymond BROWN SS, Joseph FITZMYER SJ, y Ronland E. MURPHY o.carm, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1972, tº V, p. 528 y ss.
- CASTRO ESTRADA, Álvaro, "El marco jurídico mexicano en materia religiosa", en MEDINA GONZÁLEZ, M.C. (coordinadora), "Una puerta abierta a la libertad religiosa", México, SEGOB, 2007.
- CELADOR ANGÓN, Óscar, "Estatuto jurídico de las confesiones religiosas en el ordenamiento jurídico estadounidense", Dykinson, Madrid, 1998.
- CENTENO, Ángel M., "Cuatro años de una política religiosa", Editorial Desarrollo, Buenos Aires, 1964.
- COERTZEN, Pieter, "Church order or labor law. The position of ministers and others who work in the Dutch Reformed Church", en European Journal for Church and State Research, Vol. 9 (2002), p.397.
- CONTRERAS MAZARIO, José María, "El estatuto jurídico del personal religioso en el derecho internacional humanitario", en "La libertad religiosa – Memoria del IX congreso internacional de Derecho Canónico", México, UNAM, 1995, p.599.
- CHIAPPINI, Julio, "Ocho posibles defectos del Código Civil y Comercial", ED 2/3/2017.
- CHOPKO, Mark, "Derivative Liability", en SERRITELLA, James (ed), "Religious Organizations in the United States", Durham, Carolina Academic Press, 2006.
- DAVIS, Derek y MIROSHNIKOVA, Elena (editors), "The Routledge International Handbook of Religious Education", Routledge, New York, 2013.

- DELLAFERRERA, Nelson, "Normas acerca de los delitos más graves reservadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe", en *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, vol.IX (2002), p.61.
- DERICQUEBOURG, Régis, "La Christian Science", Elledici, Torino, 1999.
- DE WALL, Heirich, "Autorità religiose nelle chiese luterane tedesche", en *DAIMON* 3/2003, p.195.
- DIEZ HIDALGO, Eugenia del Carmen, "Desafíos de la libertad religiosa en México a la luz de los derechos humanos", en MEDINA GONZÁLEZ, M.C. (coordinadora), "Una puerta abierta a la libertad religiosa", México, SEGOB, 2007.
- DOCAMPO, Ricardo, "Derechos migratorios de los religiosos", en NAVARRO FLORIA, Juan y BOSCA, Roberto, "La libertad religiosa en el Derecho argentino", CALIR-KAS, Buenos Aires, 2007, p.433.
- DOE, Norman y OMBRES, Robert, "Il ministero sacro nel diritto Della Comunione anglicana e Della Chiesa di Roma", *DAIMON* 3/2003, p.67.
- DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen, "La responsabilidad civil en materia de daños causados por un clérigo en el derecho chileno: líneas de reflexión"; en "Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Anales Derecho UC, Santiago de Chile, 2005, p. 159.
- DONIGER, Wendy (editor), "Encyclopedia of World Religions", Merrian Webster, Springfield, 1999.
- DURHAM, Cole y MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, "General Report", en "Religion and the Secular State: National Reports", Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2015, p.21.
- ECHAPPÉ, Olivier, "Le secret 'professionnel' des clerics devant les juridictions françaises", *QDPE* 2001-3, p.992.
- ELIADE. Mircea (editor in chief), "The Encyclopedia of Religion", MacMillian, New York, 1987.
- ESTRADA, Santiago, "Nuestras relaciones con la Iglesia", Bs.As., Ed.Teoría, 1963.
- FAZIO, Mariano, "Evangelio y culturas en América Latina", ed. Promesa, Buenos Aires, 2010.
- FERRER ORTIZ, Javier (coordinador), "Derecho Eclesiástico del Estado Español", 6ª edición, EUNSA, Pamplona, 2007.
- FERRARI, Silvio, "El espíritu de los derechos religiosos", Herder, Barcelona, 2004.
- , "Ministri del culto", en *Digesto*, IV ed., vol.IX Pubblicistico, UTET, Torino, 1994.

- FERRER ORTIZ, Javier, "Los principios constitucionales del Derecho eclesiástico como sistema", en "Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en Memoria de Pedro Lombardía", Madrid, Edersa, 1989.
- FIORITA, Nicola, "L'Islam spiegato ai miei studenti", Firenze University Press, 2010.
- FIZZOTTI, Eugenio y SQUARCINI, Federico, "Gli Hare Krishna", Elledici, Torino, 2000.
- FONTÁN BALESTRA, Carlos, "Tratado de Derecho Penal, Parte General", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1977.
- FRANCAVILLA, Domenico, "Il diritto indú", en FERRARI, Silvio (a cura di), "Introduzione al diritto comparato delle religioni", Il Mulino, Bologna, 2008, p.67.
- FRÍAS, Pedro, "El Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina", Córdoba, 1986.
- , "El acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina", Córdoba, 1986 (separata del tomo XXV de "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba).
- FRONZA, Javier, "Inspiraciones constitucionales con respecto al factor religioso en la Argentina (en torno al Bicentenario Patrio)", AADC XIX (2013), p.57.
- GARCÍA DE LOYDI, Ludovico, "Los capellanes del ejército. Ensayo histórico", Secretaría de Guerra, Buenos Aires, 1965.
- GARCIA OLIVA, Javier, "Las consecuencias legales de la ordenación femenina en las iglesias de la comunión anglicana", RGDCEE, nº 36 (2014).
- GARCÍA PARDO, David, "Ministros de culto musulmanes", en "Los musulmanes en España", MOTILLA, Agustín (ed.), Madrid, Trotta, 2004, p.65.
- GARDELLA, Lorenzo, voz "Religiosos", en "Enciclopedia Jurídica Omeba", Omeba, Buenos Aires, 1961.
- GELLI, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina Comentada y concordada", 3ª Edición, La Ley, Bs.As., 2005.
- GENTILE, Jorge, "Derecho parlamentario argentino", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997.
- , "El derecho humano a la libertad religiosa", ABELEDO PERROT No. 0003/70067296-1.
- GIRA, Dennis, "Le Buddha et la naissance du Bouddhisme", en VV.AA., "Encyclopédie des religions", Bayard Editions, Paris, 1997, t.I, p.963
- GOLDSCHMIDT, Werner, "Derecho Internacional Privado", Buenos Aires, Depalma, 1995.

- GOMES, Evaldo Xavier, "Los acuerdos entre la Santa Sede y Brasil", en RGDCEE, nº 22 (2010).
- GÓMEZ ROSALES, Miguel, "Legislación eclesiástica boliviana ante la nueva constitución", Ed. Verbo Divino, Cochabamba, 2010
- GONZÁLEZ, Marcos, "Los Ministros de Culto en el ordenamiento jurídico español", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003.
- , "La asistencia religiosa católica en el Cuerpo Nacional de Policía en España", en "Il Diritto Ecclesiastico", CXV-2004-1102.
- GONZÁLEZ DEL VALLE, José María, "Ministros de culto", en FERRER ORTIZ, Javier (coordinador), "Derecho Eclesiástico del Estado Español", EUNSA, Pamplona, 2007 (6ª ed.).
- GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, Juan Ignacio, "Iglesia y Fuerzas Armadas – Estudio canónico y jurídico sobre la asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas en Chile", Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 1994.
- GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos y SÁNCHEZ-BAYÓN, Antonio: "El Derecho Eclesiástico de las Américas. Fundamentos socio-jurídicos y notas comparadas", Delta, Madrid, 2009.
- : "RIDE – Regulación Iberoamericana de Derecho Eclesiástico", Delta, Madrid, 2011.
- GONZÁLEZ SCHMAL, Raúl, "Derecho Eclesiástico Mexicano", México, Editorial Porrúa, 1997.
- , "Mutación y reforma de la Constitución de 1917 en materia religiosa", en "V Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa", México, SEGOB, 2005.
- GOYENA, Juan, "Digesto eclesiástico argentino", Buenos Aires, Imprenta Especial de Obras, 1880.
- GUEDES SORIANO, Aldir, "Direitos humanos e liberdade religiosa", Kit's, Sao Paulo, 2012
- HALL, Helen, "¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La responsabilidad colectiva de las órdenes religiosas por las acciones de los distintos miembros en Inglaterra y Gales", RGDCEE 35 (2014).
- HEDLUND, Richard, "Undue influence and the Religious Cases that Shaped the Law, OJLR, 2016, 5, pp.298-318.
- INTROVIGNE, Massimo, "I Mormoni", Interlogos, Vicenza, 1993.
- ISAACSON, Scott, " "Hosana - Tabor": los límites de la autonomía de una organización religiosa frente a leyes laborales antidiscriminatorias", en RGDCEE, nº 27 (2011).

- JONES, Emma, "Fair Access Versus Religious Freedom: A Difficult Balance", OJLR, 2016, vol.5, pp.359-364.
- KAUFMANN, José Luis, "La presentación de obispos en el Patronato Regio y su aplicación en la legislación argentina", Buenos Aires, Dunken, 1996.
- LAFAILLE, Héctor, "Derecho Civil", Buenos Aires, EDIAR, 1953.
- LAFUENTE, Ramiro, "Patronato y Concordato", Buenos Aires, Editorial RL, 1957.
- LEGÓN, Faustino, "Doctrina y ejercicio del Patronato Nacional", Buenos Aires, Lajouanne, 1920.
- LONG, Gianni, "Il buddhismo in Italia: note introduttive", DAIMON, 1/2001, P.227.
- LÓPEZ ALARCÓN, Mariano, "Tutela de la libertad religiosa", en FERRER ORTIZ, Javier (coordinador), "Derecho Eclesiástico del Estado Español", 6ª edición, EUNSA, Pamplona, 2007.
- LOPEZ MANCINI, Valeria, "Asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública en Chile", en "Fuerzas Armadas y factor religioso" (Silvia MESEGUER VELASCO, Santiago CAÑAMARES ARRIBAS y María DOMINGO GUTIERREZ, Coordinadores), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.
- LO PRETE, Octavio, "Una ley de libertad religiosa en la Argentina: asignatura pendiente", Derecho y Religión, vol. VIII (2013).
- LLAMBÍAS, Jorge "Código civil anotado", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1982.
- , "Tratado de Derecho Civil – Parte General", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 7ª Edición, 1978.
- MADLUNG, Wilfred, "Imamate", en Mircea Éliade (ed), "The Encyclopedia of Religión 7", New York, Macmillan, 1987, pp.118-119.
- MAGE, Diego Mariano, "El Derecho Canónico, una alternativa de solución para la incapacidad del Art.1160 del Código civil", en Sociedad Argentina de Derecho Canónico (SADEC), Jornadas Anuales 3, Buenos Aires, 2010, p.107.
- MAFFÍA, Jorge, "Manual de Derecho Sucesorio", t.II, Buenos Aires, Depalma, 1980.
- MANTECÓN SANCHO, Joaquín, "El derecho fundamental de libertad religiosa", Pamplona, EUNSA, 1996.
- , "Asistencia religiosa de las confesiones minoritarias", en "Fuerzas Armadas y factor religioso" (Silvia MESEGUER VELASCO, Santiago CAÑAMARES ARRIBAS y María DOMINGO GUTIERREZ, Coordinadores), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.

- MARTÍN DE AGAR, José T., "Raccolta di Concordati 1950-1999", Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2000.
- "I Concordati dal 2000 al 2009", Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 2010.
- MARTÍNEZ SISTACH, Luis, "Libertad religiosa y actividad de culto", en "La libertad religiosa (memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico)", México, UNAM, 1996, p.331.
- MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, "La objeción de conciencia a formar parte de un jurado en la nueva legislación española", en AA.VV., "La libertad religiosa. Memoria del IX Congreso Internacional de Derecho Canónico", México, UNAM, 1996, p.727.
- , "La ley española del jurado y la objeción de conciencia de clérigos y religiosos", IUS CANONICUM, XXXVII, Nº73, 1997, p.295.
- , "Religión, derecho y sociedad", Granada, Comares, 1999.
- , "La protección internacional de la libertad religiosa", en "Tratado de Derecho Eclesiástico del Estado", Pamplona, EUNSA, 1994.
- , "La convivencia entre religiones en la jurisprudencia de Estrasburgo", en Zuanazzi, I (a cura di), "Da Costantino ad oggi: la libera convivenza delle religioni", Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.
- MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, y NAVARRO-VALLS, Rafael, "The Protection of Religious Freedom in the System of the Council of Europe", en LINDHOLM, T., DURHAM, C. y TAHZIB-LIE, B. (editores), "Facilitating Freedom of Religion and Belief: A Deskbook", Leiden, Martinus Nijhoff, 2004.
- MAZZINGHI, Jorge, "Derecho de Familia", 3ª ed., Buenos Aires, Ábaco, 1999.
- MEDINA, Graciela, "Responsabilidad por abuso sexual de un religioso a un menor", LL 2013-E-301.
- MEDINA, Ricardo, "Algunas consideraciones acerca de las modificaciones de las normas de los delitos más graves", en Anuario Argentino de Derecho Canónico, vol. XVI (2009/10), p.121.
- , "Imputabilidad, eximentes, atenuantes y agravantes en los delitos sexuales de clérigos con menores (primera parte)" AADC XIX (2013), p.105
- MEDINA GONZÁLEZ, María Concepción, "Tendencias actuales del derecho religioso mexicano", en MEDINA GONZÁLEZ, M.C. (coordinadora), "Una puerta abierta a la libertad religiosa", México, SEGOB, 2007.
- MESSICK, Brinkley, "The Judge and the Mufti", en PETERS, Rudolph and BEARMAN, Peri (editors), "The Ashgate Research Companion to Islamic Law", Ashgate, Surrey, 2014, p72.

- MEZA, Jorge, "La responsabilidad profesional en el nuevo Código Civil", ED 269-702.
- MILANI, Daniela, "Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale: la protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele", Eupress, Lugano, 2008.
- MINKOWICZ, Gabriel y GARCHTROM, Lydia, "Los orígenes de la figura del juez y de la función judicial en el derecho hebreo", ED 242-817.
- MOLLA, Claude, "L'Islam, c'est quoi?", Labor et Fides, Genève, 1989.
- MONZÓN, José M. "Asesor espiritual", en ALTERINI, Atilio y LÓPEZ CABANA, Roberto, "Enciclopedia de la Responsabilidad Civil", t.I, p. 593, Buenos Aires, ed. Abeledo-Perrot.
- MORENO BOTELLA, Gloria, "Los ministros de culto", en MARTIN SANCHEZ, Isidoro y NAVARRO FLORIA, Juan G. (coordinadores), "La libertad religiosa en España y Argentina", Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006.
- , "Ministro de culto adventista y autonomía confesional", RGDCEE, 2003.
- MOSQUERA MONELOS, Susana, "El derecho de libertad de conciencia y de religión en el ordenamiento jurídico peruano", Piura, Universidad de Piura, 2005.
- MOTILLA, Agustín, "Ministros y lugares de culto", en IVÁN, Ibán, PRIETO SANCHIS, Luis y MOTILLA, Agustín, "Manual de Derecho Eclesiástico", Ed. Trotta, Madrid, 2004.
- , "Ley Orgánica de libertad religiosa y acuerdos con las confesiones: experiencia y sugerencias de iure condendo", en NAVARRO VALLS, Rafael, MANTECÓN SANCHO, Joaquín y MARTINEZ TORRÓN, Javier (coords.), "La libertad religiosa y su regulación legal", IUSTEL, Madrid, 2009.
- NAVARRO FLORIA, Juan G., "El derecho a la objeción de conciencia", Buenos Aires, Ábaco, 2004.
- , "Estado, Derecho y Religión en América Latina" (Coordinador), Buenos Aires, Marcial Pons, 2009.
- , "Acuerdos y concordatos entre la Santa Sede y los países americanos" (coordinador), Buenos Aires, EDUCA, 2011
- , "Los derechos personalísimos", Buenos Aires, El Derecho, 2016.
- , "El Derecho Eclesiástico en el Derecho procesal argentino", en NAVARRO FLORIA, Juan y BOSCA, Roberto, "La libertad religiosa en el Derecho argentino", CALIR-KAS, Buenos Aires, 2007, p.377.
- , "El reconocimiento de las confesiones religiosas en la Argentina", en Congreso Latinoamericano sobre Libertad Religiosa, IDEC, Lima, 2001.

----, "Presencia de los ministros de culto en actos o espacios públicos", en Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005, p.135.

----, "Las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica en el derecho argentino", ED 151-897

----, "¿El clero oficial?", ED 152-983.

----, "El tema religioso en el proyectado nuevo código penal", ED 140-887.

----, "La protección penal de la libertad religiosa y otras cuestiones conexas", ED 22/8/12.

----, "Argentina: un nuevo régimen legal para los religiosos", Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 1996/2, Milano, agosto 1996.

----, "El financiamiento de las confesiones religiosas en la República Argentina", en "Il Diritto Ecclesiastico", Anno CXVII (2006), p.277, Milano

----, "Jurisprudencia argentina reciente en materia de Derecho Eclesiástico" AADC 2004 (IX) p.257

----, "Las circunscripciones eclesíásticas (católicas) de rito oriental en la Argentina, o la resurrección del exequátur" (LL 2007-D-814).

----, "¿Las parroquias son personas jurídicas?", ED 156-111).

----, "Precisiones jurídicas en torno al Obispado Castrense de Argentina", LL Actualidad 2/6/05.

----, "La identificación de los ministros religiosos católicos en la Argentina", Anuario Argentino de Derecho Canónico, vol.VI, 1999, p.183.

----, "Los religiosos en el derecho civil argentino", Anuario Argentino de Derecho Canónico, vol.IX (2002), p.211.

----, "La singular situación de los capellanes militares", ED TySS, 2008, p.252.

----, "Aporte para la actualización del Código Civil en materia de derecho eclesiástico", ED 246-624.

----, "Responsabilidad de un Obispado por actos ilícitos de un sacerdote", "Revista de Derecho de Familia y de las Personas", Ed. La Ley, Año V, nº 8, septiembre de 2013, p.195.

----, "El Derecho Eclesiástico en el Nuevo Código Civil y Comercial argentino", ADEE, vol.XXXII (2016), p.501.

----, "La asistencia religiosa en los hospitales", Sup. Const. 2016 (agosto) , 11

• LA LEY 2016-E (22/8/2016).

----, "Digesto Jurídico y nuevo Código Civil y Comercial: algunas perplejidades", ED 261-837.

----, "El Derecho Eclesiástico en el Digesto Jurídico Argentino", ED 260-615 y EDLA 2014-B-951.

----, "Algunas observaciones a la nueva ley de mayoría de edad", DJ, año XXVI, nº 10, 10/3/10, p.607.

NAVARRO FLORIA, Juan G. y HEREDIA, Carlos, "Régimen Jurídico de los Religiosos y de los Institutos de Vida Consagrada", Buenos Aires, EDUCA, 1997.

NAVARRO FLORIA, Juan G. y BOSCA, Roberto (compiladores) "La libertad religiosa en el Derecho Argentino", CALIR-KAS, Buenos Aires, 2007.

NAVARRO FLORIA, Juan G., PADILLA, Norberto y LO PRETE, Octavio, "Derecho y Religión. Derecho Eclesiástico Argentino", Buenos Aires, EDUCA, 2014.

NAVARRO VALLS, Rafael y MARTÍNEZ TORRÓN, Javier, "Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia", IUSTEL, Madrid, 2011.

NAVARRO VALLS, Rafael y PALOMINO, Rafael, "Estado y Religión, textos para una reflexión crítica", Ariel, Barcelona, 2003.

NAVARRO VALLS, Rafael, MANTECÓN SANCHO, Joaquín y MARTINEZ TORRÓN, Javier (coords.), "La libertad religiosa y su regulación legal", IUSTEL, Madrid, 2009.

O'BRIEN, Edwin F., "El capellán militar católico en misión de paz: perspectivas ecuménicas e interreligiosas", en PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, "El Derecho Humanitario y las religiones", Librería Editrice Vaticana, Roma, 2009, p.107.

PADILLA, Norberto, "A treinta años del Acuerdo con la Santa Sede", Buenos Aires, Secretaría de Culto, 1996.

----, "El Derecho de la libertad de culto", en SABSAY-MANILI. "Constitución de la Nación Argentina". Ed. Hammurabi, pág. 510/512.

PADILLA, Norberto y NAVARRO FLORIA, Juan G., "Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas", Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Buenos Aires, 1997.

PALOMINO, Rafael, "Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso", Comares, Granada, 1999.

----, "Religión y Derecho Comparado", Madrid, Iustel, 2007.

PANCALLO D'AGOSTINO, Martín, "P.Obispo Joaquín Piña Batlle, SJ. Un líder social ejemplar y providencial", EDCO 2016 (diario del 16/6/2016).

PAPASTATHIS, Charalambos, "Le autorità ecclesiastiche secondo il Diritto della Chiesa ortodossa orientale", Daimon 5 (2005) p.178.

PATÍÑO REYES, Alberto, "Libertad religiosa y principio de cooperación en Hispanoamérica", UNAM, México, 2011.

- , "Una revisión crítica del modelo separatista mexicano desde la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento", *Derecho y Religión*, Vol.VIII (2013), p.217.
- PÉREZ-MADRID, Francisca, "Asistencia religiosa católica", en "Fuerzas Armadas y factor religioso" (Silvia MESEGUER VELASCO, Santiago CAÑAMARES ARRIBAS y María DOMINGO GUTIERREZ, Coordinadores), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.
- PERUGINI, Alejandro, "Relación de dependencia", Buenos Aires, Hammurabi, 2004.
- PIMSTEIN S., María Elena, "Responsabilidad civil de la Iglesia por delitos cometidos por clérigos en Chile: un caso reciente", en "Actas del IV Coloquio del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Anales Derecho UC, Santiago de Chile, 2005, p. 173.
- , "Ministers of Religion in Chilean Law", *Brigham Young University Law Review*, Vol 2008, nº 3, p.897.
- PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, "El Derecho Humanitario y los capellanes militares", Librería Editrice Vaticana, Roma, 2005.
- PRECHT PIZARRO, Jorge, "15 Estudios sobre Libertad Religiosa en Chile", Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005.
- , "Derecho eclesiástico del Estado de Chile", Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2000.
- PRESAS BARROSA, Concepción, "El Concordato de 2004 entre la Santa Sede y la República Portuguesa", en *ADEE* vol. XXI (2005), p.330.
- PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, "La Reforma de la Constitución Nacional", Buenos Aires, 1950.
- PRIETO, Vicente, "Libertad religiosa y confesiones, Derecho Eclesiástico del Estado colombiano", Bogotá, Ed. Temis, 2008.
- , "Reintegro de una religiosa a su monasterio. Sentencia T- 658 de 2013 de la Corte Constitucional de Colombia", en *RGDCEE*, nº 36 (2014).
- RABELLO, Alfredo Mordechai, "Il Rabbinate centrale di Erez Israel", *DAIMON*, 2003 (3), p.115.
- RADULETU, Sebastian, "The Right of Members of the Clergy to Form and Join Trade Unions and the Autonomy of Religious Organizations – a Recent Case of the European Court of Human Rights", *Oxford Journal of Law and Religion*, Vol.3, n. 1 (2014), p.168.
- RAMÍREZ NAVALÓN, R. M., Los ministros de culto, en: VARIOS AUTORES, "Acuerdos del estado español con los judíos, musulmanes y protestantes",

- Publicaciones Universidad Pontificia : Caja Salamanca y Soria, Salamanca, 1994, pp. 135-58.
- RAVIGNANI, Emilio, "Asambleas Constituyentes Argentinas", Bs.As., Peuser, 1937.
- RÉBORA, Juan Carlos, "Derecho de las Sucesiones", 2ª edición, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1952.
- REDWOOD FRENCH, Rebeca and NATHAM, Mark, "Buddhism and Law", Cambridge University Press, New York, 2014.
- RETAMAL, Fernando, "Ministerios, con especial referencia a los ministerios laicales y diaconales", en Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Canónico, universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1995, p.45.
- RIMOLDI, Tiziano, "I ministri di culto nella Chiesa avventista e nella Chiesa valdese", DAIMON 3/2003, p.171.
- RINCÓN-PÉREZ, Tomás, "El orden de los clérigos o ministros sagrados", EUNSA, Pamplona, 2009.
- RODRIGUEZ BLANCO, Miguel, "La relación entre el ministro de culto y su propia confesión. Paralelismos y diferencias entre la jurisprudencia española y la jurisprudencia inglesa", en ADEE, vol.XIX (2003), p.347.
- , "Las actividades de los ministros de culto y de los religiosos ante los Tribunales", en REDC, 59 (2002), pp. 197-246.
- RORÍGUEZ SAA, Rodolfo, "La actividad sacerdotal no configura un contrato laboral", ED 25-59.
- SALACHAS, Dimitrios y SABBARESE, Luigi, "Chierici e ministero sacro nel Codice Latino e Orientale", Urbaniana University Press, Vaticano, 2004.
- SALCEDO HERNÁNDEZ, José Ramón, "Los ministros de culto en el acuerdo de cooperación con la FERED y ante el derecho del Estado", en GARCÍA-GARCÍA, Ricardo y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Marcos (coordinadores), "Aplicación y desarrollo del Acuerdo entre el Estado español y la FERED", Fundación Universitaria Española, Madrid, 2008.
- SALINAS ARANEDA, Carlos, "El influjo del Derecho Canónico en el Código Civil de la República de Chile", Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2006.
- , "Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado de Chile", Valparaíso, Ediciones Universitarias, 2004.
- , "El régimen patrimonial y fiscal de las confesiones y entidades religiosas en el Derecho del Estado de Chile", en "La financiación de la libertad religiosa", Ministerio de Justicia de España, Madrid, 2002, p.128.

- , "La incapacidad de herencia y legado del último confesor: Desigualdad entre ministros de culto en el Derecho civil chileno contemporáneo", en Varios Autores, "Estudios de Derecho Civil VIII", Santiago de Chile, Thomson Reuters, 2013
- SÀNCHEZ GÓMEZ, María Helena, "Ministros de culto y autonomía de las confesiones religiosas. A propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 1 de diciembre de 2015, Károly * Nagy c. Hungría", en RGDCEE 42 (2016).
- SANZ, Carlos R: "A Dios lo que es de Dios: dos consideraciones sobre un acertado fallo", ED 148-517.
- SCHIFFRIN, Leopoldo, "La libertad religiosa y el derecho penal", en NAVARRO FLORIA, Juan y BOSCA, Roberto, "La libertad religiosa en el Derecho argentino", CALIR-KAS, Buenos Aires, 2007, p.309.
- SCHILTZ, Patrick y LAYCOCK, Douglas, "Employment in Religious Organizations", en SERRITELLA, James (ed), "Religious Organizations in the United States", Durham, Carolina Academic Press, 2006.
- SCHWARZFUCHS, Simon, "La formazione dei rabbini dopo la Rivoluzione francese", DAIMON 3/2003, p.139.
- SCHOPEN, Gregory, "On the legal and economic activities of Buddhist Nuns", en REDWOOD FRENCH, Rebeca and NATHAM, Mark, "Buddhism and Law", Cambridge University Press, New York, 2014, p.91.
- SECO, Ricardo, "Personal docente de institutos privados adscriptos, reconocidos o incorporados a la enseñanza oficial", en Infojus-Derecho del Trabajo, Año II, nº 4, p.206.
- SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, Alex, "Autonomía confesional y designación de ministros de culto", en ADEE, vol.XXI (2005), p.106.
- , "Prisiones y libertad religiosa", Thomson-Aranzadi, Pamplona (España), 2007.
- SERRITELLA, James (ed), "Religious Organizations in the United States", Durham, Carolina Academic Press, 2006.
- SIRKIN, Eduardo, "Diferencias entre "revelar" y "relevar" secretos en la prueba testimonial en el CPCCN", El Dial 2/12/2010.
- SOLER, Sebastián, "Derecho penal argentino", 1ª ed., Buenos Aires, TEA, 1953.
- SPOTA, Alberto G., "Instituciones de derecho civil. Contratos", Depalma, 1979.
- SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA, "Antecedentes y resoluciones sobre el Culto. Recopilación encomendada por el Excmo. Señor Ministro de Relaciones

- Exteriores y Culto", Taller tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 1899.
- TAU ANZOÁTEGUI, Carlos, "El acceso a las licencias de radiodifusión", en LL 1975-D-482.
- TAUSSIG, Eduardo María, "Ley 1420 y libertad de conciencia", Ágape, Buenos Aires, 2006.
- TIRAPU MARTÍNEZ, Daniel, "La incapacidad sucesoria del confesor; artículo 752 del código civil. Dos sentencias del Tribunal Supremo español relacionadas", en RGDCEE, 42 (2016).
- TIRAPU MARTÍNEZ, Daniel y VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José M^a, "La incapacidad sucesoria del confesor en el artículo 752 del Código Civil", Comares, Granada, 1996.
- VALOTTA, Marcelo Ricardo, "Incapacidad de los religiosos profesos", LL 115-915.
- VARIOS AUTORES: "Relaciones Estado-Iglesia, encuentros y desencuentros", Secretaría de Gobernación, México 2001.
- VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José María, "Los ministros de culto", en GARCÍA HERVÁS y otros, "Manual de Derecho Eclesiástico del Estado", Madrid, 1997.
- , "Notas sobre el juramento de fidelidad de los obispos a la autoridad política en España", en VARIOS AUTORES, "Estudios en homenaje al profesor Martínez Valls", vol.II, Universidad de Alicante, Alicante, 2000, p.715-723.
- VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, "Dictámenes en la Asesoría de Gobierno del Estado de Buenos Aires", Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1982
- VEUTHEY, Michel, "La protección del personal sanitario y religioso en el Derecho Internacional Humanitario", en PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, "El Derecho Humanitario y los capellanes militares", Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2005.
- VIDAL GALLARDO, Mercedes, „Comentarios a tres R.D. de 2007 sobre seguridad social de los ministros de culto“, en REDC, 64 (2007), pp. 819-44.
- VILADRICH, Pedro Juan, en su obra "Derecho Eclesiástico del Estado Español", Pamplona, Eunsa, 1980.
- WARE, Kallistos, "La Iglesia Ortodoxa" Ed. Ángela, Buenos Aires, 2006.
- WYNARCZYK, Hilario, "Ciudadanos de dos mundos", UNSAM, Buenos Aires, 2009.
- ZANNONI, Eduardo, "Manual de derecho de las sucesiones", 5^a ed., Astrea, 2010.
- ZUBACZ, Gregory, "Le secret sacramentel et le droit canadien", Wilson y Lafleur, Québec, 2010.

JURISPRUDENCIA CITADA⁸⁷⁶

I. TRIBUNALES INTERNACIONALES

I.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos

"Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay", sentencia del 17-6-2005, Serie C nº 125.

"Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Ecuador", sentencia del 31/8/2001.

I.2 Tribunal Europeo de Derechos Humanos

"Seyidzade c. Azerbaiján", 3/9/2009

"Agga v. Grecia", (no. 2), 17/10/2002

"Sindicatul "Păstorul Cel Bun" c. Rumanía, 9/7/2013

"Biblical Centre of the Chuvash Republic vs. Rusia", 12/6/2014

"Fernández Martínez c. España", 15/05/2014

"Károly Nagy c. Hungría", 1/12/2015

"Serif v. Grecia", 14/12/1999

II. TRIBUNALES NACIONALES

II.1 ARGENTINA

II.1.1 Tribunales federales y nacionales⁸⁷⁷

CS, "Correa, Jacinto", 29/7/1893.

CS, "Boneo", 6/2/1925.

CS, "Glaser, Benjamín Abel".

CS, "Barros", 6/3/79.

CS, "Carrizo Coito, Sergio v. Dirección Nacional de Migraciones", 26/6/1980.

CS, "Lopardo", 26/10/82.

CS, "Falcón", 21/6/1983.

CS, "Lastra, Juan c. Obispado de Venado Tuerto".

⁸⁷⁶ Se indican aquí los tribunales, denominación del caso y fecha de la sentencia. Los lugares de publicación y otros datos se consignan en el lugar del texto en que son citados.

⁸⁷⁷ Se llama "Tribunales Nacionales" a los tribunales existentes en la Ciudad de Buenos Aires, que forman parte del Poder Judicial de la Nación hasta tanto se concrete su traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como consecuencia de la autonomía ganada por dicha Ciudad en la reforma constitucional de 1994.

CS, "Rybar, Antonio c/ García, Rómulo", 16/06/1992.
 CS, "Bahamondez, Marcelo" (B-605.XXII).
 CS, "Horowitz, Israel c. Cuperstein, Peisah", 06/03/2001.
 CS, "Peluffo Diego Pedro c. Obispado de Quilmes", 29/10/2013.

CN Elec, 24/5/16, "Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/Estado Nacional".
 CNFed.Cont.Adm., "Glaser", 6/9/65.
 JNFedCont.Adm 7, 12/03/1982, "Hermmingesen, Enrique H. c. Registro Nacional de Cultos y otro".
 CNFed, sala Crim.y Corr., 16/12/70, "Maguid"
 CNFedCrimyCorr, Sala I, 23/03/1983, "Tapia, Lucas".
 CNFed.Crim.yCorr, Sala I, 30/4/09, causa 41557 "M., A.P".
 JNCrim.Corr.Fed., Juzgado 1, "Baseotto Antonio", 08/07/2005.
 CFed Bahía Blanca, 30/04/1984, "Peterseim, Gabriel A.".
 CFed La Plata, sala II, 19/07/2007, "FOLGUERAS, Ramón Carlos c/ Armada Argentina".
 C.Fed.Seg.Soc, sala II, 12/9/2013, "Baseotto, Antonio c. Estado Nacional".
 JFed.Seg.Soc. nº 4, "Luro Rivarola, Clelia Susana c/Estado Nacional", 29/3/06.
 TOC. Fed. nº 1 de La Plata, "Von Wernich", 11/2007.
 CNCiv, sala H, "Chelotti c. Ezquiaga y Laclau", 15/03/2010.
 CNCiv, sala B, "Iglesia Mesiánica Mundial en la Argentina c. Matsumoto, Yasushi y otro", 29/10/97.
 CNCiv, Sala A, "L., M. C. c. B., P.", 21/10/1982.
 CNCiv, sala A, 23-12-03, "D.C., M.L. y otro c. Spivak, G.J. s/ daños y perjuicios".
 CNCiv, Sala A, "P., J. M. c. P. de P., I. A.", 10/04/1979.
 CCiv de la Capital, "Esclavas del Corazón de Jesús".
 CCiv. 2ª, 07/07/1942.
 CNCrim.Corr., sala 4, "Guedes, Carlos", 22/2/95.
 CNTrab, sala IV, "Rivera, Juan J. c. Parroquia San Ignacio", 20/9/1968.
 CNTrab, sala IX, "Insfrán, Juan Carlos c. Asociación Civil Iglesia Jesús es mi Salvador", 30/7/2009.
 CNTrab, sala X, "Campos c. Asociación de Beneficencia Cristiana Promotora Desarrollo Integral", 17/9/2009.
 CNCtrab, sala VI, "Grigoryan c. Institución Administrativa de la Iglesia Armenia s/despido", 15/5/2008.
 CNTrab, sala IV, "Mantovani, Juan A.", 28.2.74.
 CNTrab, sala II, "Pasini, Alicia c. Misioneras del Sagrado Corazón", 15/9/87.
 CNTrab, sala IV, "Granata, Mafalda c. Instituto Religiosas de San José", 23/3/77.
 CNTrab, sala V, "Ojeda, Ricardo c. Stern, Desiderio", 23/4/64.
 CNTrab, sala III, "Lascurain", 30/8/73..
 CNTrab, sala II, "Lagrange, Zulaica", 31/10/1979.

CNTrab, sala IX, "Ortiz c. La Iglesia Universal del Reino de Dios", 24/4/12.
CNTrab, sala IV, "Guidizzi, Verónica", 16/2/76.
CNTrab, sala III, "Díaz, María", 24.12.75.
CNTrab, "Giudizzi, Verónica", 16/2/76.
CNTrab, sala I, "Quarato, Pabla c. Instituto María Auxiliadora", 31/12/63.
Juzgado del Trabajo 24 de la Ciudad de Buenos Aires, "Buffet de Molina, Juana c. Ejército de Salvación", 10/6/2009.
CNSegSoc., sala II, "Ferrari c. CNPICyAC", 20/2/92.

II.1.2 Tribunales provinciales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TSJ CABA, 13/6/2011, "Elecciones 2011 s/oficialización de boletas".
CCAyT, Sala I "Rachid, María c. GCBA", 9/5/2016.

Provincia de Buenos Aires

CSBs.As. "Á, F.D.", causa P 114.511, 26/12/12.
CSBs.As., "Rybar", 29/8/1989.
CSBs.As., "López de Miranda c. Benito", 16/8/94.
CCasPen, provincia de Buenos Aires, Sala I, 5/12/2002, "Safenreiter, Esteban Enrique s/Recurso de casación".
CCasPen Provincia de Buenos Aires, sala V, 30/12/14, "Olivera Jesús María".
Tribunal del Trabajo nº 2 de La Plata, "Milin, Simica c. Sociedad Protectora de Niños", 15/2/50.
CCivCom Quilmes, sala II, "V., B.C. c/Obispado de Quilmes", 09/04/2013.
CCivCom Azul, "García c/ Obispado de Azul y otro", 29/11/2005.
CCivCom. Morón, sala I, "Gerschman, Nancy c. Confederación Evangélica Bautista y otros", 17/11/2005.

Provincia de Mendoza

SCJMendoza, sala 2, "Fiscal c/Pavano Godoy", 13/5/97.
C.4ªCiv.Com.MinasPaz y Tributario de Mendoza, "Di Julio, Abel c.Di Julio, Rubén", 18/4/2013.

Provincia de Santa Fe

CS Santa Fe, "Cia. Argentina Financiera S. A. c/ Rosa Silvio", 22/6/2005.
CS Santa Fe "Giovine, Raúl Alejandro", 8/3/2066.
CS Santa Fe, "Storni, Edgardo Gabriel", Exp.367/03, 26/12/13.
CS Santa Fe, "Mateo, Marcelo", Expediente 366/03, 26/12/03.
CS Santa Fe, "Capello, Hugo Héctor", Exp.365/03, 26/12/03-

Provincia Entre Ríos

C1ªApCrimParaná, Sala I, "Ilarraz s/promoción de la corrupción agravada", 11/6/2014.

Provincia de Jujuy
Tribunal Criminal 2 de Jujuy, "T.N.", 5/9/14.

Provincia de Córdoba
Juzgado de Menores de 3ª Nominación, Córdoba, "B., O.L. ", 16/9/87.

Provincia de Santiago del Estero
STJ Santiago del Estero, 2/12/2002, "Hisse, Enrique".

Provincia de Corrientes
STJ Corrientes, "Gómez, Darío Alberto c. Asociación Evangélica Asamblea de Dios Filadelfia" 14/10/2011.

Provincia de Tucumán
SCTucumán, 02/08/1937, "Obispado de Tucumán c. Municipalidad de Tucumán".

III. BRASIL

Supremo Tribunal Federal, 28-VI-1988, STF-RE-97817-RJ, 1ª Turma

IV. COLOMBIA

Corte Constitucional, sentencia C-266 de 1994
Corte Constitucional, Sentencia C-027 de 1993
Corte Constitucional, Sentencia T-658, del 23 de septiembre de 2013

V. COSTA RICA

Tribunal Supremo de Elecciones, 25/10/2013, causa nº 4732-E1-2013.

VI. ESPAÑA

Tribunal Constitucional, Sala 1a., STC 63/1994, 28 de febrero de 1994

VII. ESTADOS UNIDOS

Corte Suprema, "Totten vs. United States", 92 US 105, 107 (1875)
Corte Suprema, "Trammel vs. United States", 445 US 40, 51 (1980)
Corte Suprema, Kedroff v. Saint Nicholas Cathedral of Russian Orthodox Church in North America, 344 U. S. 94, 116 (1952).
Corte Suprema, "Watson vs. Jones", 80 U.S. (13 Wall.) 679 (1871).
Corte Suprema, "Serbian Eastern Orthodox Diocese", 426 U.S. 696 (1976).

Corte Suprema, "Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commision et al." (resuelto el 11 de enero de 2012)

Corte Suprema, "Serbian Eastern Orthodox Diocese for United States and Canada v. Milivojevic", 426 U. S. 696 (1976)

Corte del Estado de Illinois, "Baumgartner c. First Church of Crhist, Scientist", 141 Ill. App. 3d 898, 96 Ill. Dec. 114, 490 N.E.2d 1319 (1986).

Corte Suprema del Estado de Nueva York, "El Pueblo v. Daniel Phillips", 1843, Western Law Journal, vol.I (1995), p.199

VIII. FRANCIA

Cour de Cassation française, Assemblée Plenaire, 8 de enero de 1993.

Tribunal de Grande Instance de Caen, 4/9/2001, "X.Y."

IX. NUEVA ZELANDA

"The Gay and Lesbian Clergy Anti-Discrimination Society v. Bishop of Auckland", New Zealand Human Rights Review Tribunal, 17/10/2013.

X. REINO UNIDO

Chamber of Lords, "Percy v. Board of National Mission of the Church of Scotland [2006] ICR 134.

ELENCO DE NORMAS LEGALES CITADAS

Las normas mencionadas a continuación son las que han sido citadas o referidas a lo largo del texto. Se las menciona por su número, y únicamente en el caso de las constituciones o los códigos, se especifica el número de artículo que ha sido considerado en la obra.

I. NORMAS NACIONALES

ARGENTINA - Normas vigentes

Constitución Nacional, Preámbulo, y 2, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 37, 73, 75 inc.12, 17, 18 y 22, 89, 111, 118.	127, 145bis, 145ter, 153 al 156, 222, 247, 277, 318
	Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 444, 455
	Ley de Contrato de Trabajo (ley 20744), 23
Código Civil y Comercial (ley 26944) 52, 146, 147, 148, 187/192, 409, 425, 531, 645, 599, 699, 774, 1710, 1723, 1725, 1738, 1740, 1753, 1763, 1779, 2482, 2485, 2561.	Código Procesal Penal (ley 23984), 177, 244, 250
	Código Procesal Penal (ley 27063), 151, 153
Código Penal, 20bis, 41ter, 67, 77, 119, 120, 122, 124, 125bis, 126,	
Ley 346	Ley 21745
Ley 12992	Ley 21965
Ley 14442	Ley 22140
Ley 17032	Ley 22162
Ley 17531	Ley 22241
Ley 19101	Ley 22400
Ley 19349	Ley 22430
Ley 19945	Ley 22552
Ley 19550	Ley 22950
Ley 20266	Ley 23379
Ley 20337	Ley 23551
Ley 20416	Ley 23554
Ley 21504	Ley 23592
Ley 21526	Ley 23966
Ley 21540	Ley 24019
Ley 21950	Ley 24032

Ley 24059	Decreto 6701/68
Ley 24185	Decreto 2113/73
Ley 24241	Decreto 2037/79
Ley 24429	Decreto 1928/80
Ley 24453	Decreto 1991/80
Ley 24483	Decreto 368/83
Ley 24660	Decreto 3016/83
Ley 24668	Decreto 3213/84
Ley 24742	Decreto 1434/87
Ley 24766	Decreto 1207/89
Ley 25054	Decreto 87/90
Ley 25087	Decreto 2109/90
Ley 25164	Decreto 614/90
Ley 25871	Decreto 1771/91
Ley 26053	Decreto 2719/91
Ley 26146	Decreto 5/92
Ley 26206	Decreto 1526/92
Ley 26210	Decreto 2072/1993
Ley 26356	Decreto 628/94
Ley 26364	Decreto 1023/94
Ley 26394	Decreto 1451/94
Ley 26425	Decreto 491/95
Ley 26522	Decreto 303/96
Ley 26579	Decreto 876/96
Ley 26813	Decreto 18/97
Ley 26842	Decreto 1136/97
Ley 26939	Decreto 1233/98
Ley 27206	Decreto 1636/01
Decreto-Ley 7823/57	Decreto 220/05
Decreto-Ley 12958/57	Decreto 539/05
Decreto-Ley 1285/58,	Decreto 35/07
Decreto-Ley 333/58	Decreto 1006/07
Decreto 5.924/58	Decreto 567/08
Decreto 1709/64	Decreto 231/09
Decreto 2991/64	Decreto 616/10
Res.209/05 del Ministro de	
Relaciones Exteriores y Culto	

Res.3114/00 del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
 Res.1170/92 del Ministro de Defensa
 Res. 1395/95 de la Secretaría de Culto
 Res.1661/00 de la Secretaría de Culto
 Res.2092/05 de la Secretaría de Culto
 Res.18/06 de la Secretaría de Culto
 Res.133/16 de la Secretaría de Culto
 Res.107/2014 de la Secretaría de Culto
 Res.142/1981 de la Subsecretaría de Seguridad Social
 Disposición 1/1994, de la Dirección Nacional de Migraciones

Disposición 2/1994 de la Dirección Nacional de Migraciones
 Disposición 5/1994 de la Dirección Nacional de Migraciones
 Disposición 56.647/2005 de la Dirección Nacional de Migraciones
 Disposición 40164/2007 de la Dirección Nacional de Migraciones
 Disposición 1170/2010 de la Dirección Nacional de Migraciones
 Disposición 54618/2008 de la Dirección Nacional de Migraciones
 Dictamen nº 24/2000 de la Dirección de Asesoría Técnica Tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 31 de marzo de 2000

Acordada de la Corte Suprema de Justicia del 20/12/1967

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Procesal Penal, 123
 Código Contencioso Administrativo y Tributario, 350, 361
 Código Contravencional
 Ley 404
 Ley 525
 Ley 898
 Ley 1236

Ley 2340
 Ley 3302
 Ordenanza 38397 Ordenanza 47136
 Decreto 3544/1991
 Decreto 634/1997
 Decreto 1248/2004
 Res.206/1998 del Secretario de Salud Pública

Provincia de Buenos Aires

Constitución de la Provincia, 9
 Código Procesal Penal, 236, 241, 338 bis, 338 quáter
 Código Procesal Civil, 442, 455
 Código de Faltas, 70, 92
 Ley 8183
 Ley 8815

Ley 9020
 Ley 9273
 Ley 9685
 Ley 10851
 Ley 12256
 Ley 12607
 Ley 14543

DNU 1766/05
Decreto 2708/2002
Decreto 2889 del 26/11/2004

Decreto 2590/09 del 20/11/09
Res.760/1968 de la Suprema Corte
de Justicia.

Provincia de Catamarca

Código Procesal Penal, 230, 238, 244
Código Procesal Civil y Comercial,
444, 457
Código de Faltas
Ley 3276

Ley 3843
Ley 5057
Decreto 1238/92
Decreto 537/94
Ordenanza 1368/86

Provincia de Córdoba

Constitución Provincial, 162
Código Procesal Penal, 221
Código Procesal Civil y Comercial,
308
Código de Convivencia Ciudadana
(ley 10326)
Ley 4183
Ley 8231

Ley 8400
Ley 8878.
Ley 9011
Ley 9182
Ley 9765
Decreto 3591/87
Decreto 344/08

Provincia de Corrientes

Código Procesal Penal, 245, 251
Código Procesal Civil y Comercial
444, 455
Ley 5896
Ley 6243

Decreto ley 169/2001

Provincia de Chaco

Constitución provincial, 99 y 104
Código de Faltas, 59
Código Procesal Penal, 220
Código Procesal Civil y Comercial,
422
Ley 2212
Ley 4263

Ley 4871
Ley 6075
Ley 6117
Ley 6904
Ley 7661
Decreto 1059/2011

Provincia de Chubut

Código Contravencional, 149
Código Procesal Penal, 189, 194
Código Procesal Civil y Comercial,
444
Ley 1810

Ley 4347
Ley 5055
Ley I-583
Decreto 191/2007

Provincia de Entre Ríos

Código Procesal Penal, 289, 294
Código Procesal Civil, 430, 443
Ley 5797
Ley 6200
Ley 9799

Decreto 5039/68
Decreto 1242/90
Res. DAG 77 y 78 del 23/11/90
Res. DAG 15 del 14/3/03.

Provincia de Formosa

Código Procesal Penal, 221, 227
Código Procesal Civil y Comercial,
441
Ley 961

Decreto 62919/99
Decreto 1332/2002

Provincia de Jujuy

Código Procesal Penal, 254, 259, 286
Código Procesal Civil y Comercial,
335, 344
Código Contravencional
Código de Faltas

Ley 4884
Ley 4995
Ley 5009
Ley 5288
Decreto 3815/05

Provincia de La Pampa

Constitución Provincial, 64, 78, 82,
84, 86
Código de Faltas, 84
Código Procesal Penal, 216

Código Procesal Civil y Comercial,
422, 433
Ley 49

Provincia de La Rioja

Código Procesal Civil y Comercial,
204, 212
Código Procesal Penal, 283
Código de Convivencia
Código de Faltas, 66

Ley 6071
Ley 6943
Decreto 624/98

Provincia de Mendoza

Constitución Provincial, 65, 75, 132

Código de Faltas, 79

Código Procesal Penal, 234, 241, 247

Código Procesal Civil y Comercial,
195, 199

Ley 3058

Ley 7493

Ley 7846

Ley 8173

Ley 8465

Decreto 1196/98

Decreto 1478/09

Decreto 1548/2005

Provincia de Misiones

Código Procesal Penal, 229

Código Procesal Civil y Comercial,
444

Ley 3389

Ley 3595

Ley 3820

Ley 4334

Ley I- nº 152

Ley XVIII Nº 35

Decreto 917/2003

Decreto 485/2004

Provincia de Neuquén

Código Procesal Penal, 44, 149, 190

Código Procesal Civil y Comercial,
444, 457

Ley 1033

Ley 2327

Ley 2611

Provincia de Río Negro

Constitución Provincial, 114, 126,
162, 172, 165, 192, 184, 198, 216,
234

Código Procesal Penal (ley 5020), 35,
144, 185

Código procesal Civil y Comercial,
444, 455

Código de Faltas

Ley 3008

Ley 4193

Ley 5020

Decreto 1634/2004

Provincia de Salta

Constitución Provincial, 97, 102, 148

Código Procesal Penal, 233, 239

Código Procesal Civil y Comercial,
444, 457

Ley 6486

Ley 7629

Decreto 3075/98

Provincia de San Juan

Constitución provincial

Código de Faltas, 168, 169, 170

Código Procesal Penal, 245, 297

Código Procesal Civil y Comercial,
407, 418

Ley 3718

Ley 7453

Provincia de San Luis

Constitución Provincial, 34, 105, 110,
160

Código Contravencional, 88

Código Procesal Penal, 176, 177

Código Procesal Civil y Comercial,
444, 456

Ley I - 0650 - 2008

Ley nº I-0002-2004 (5548)

Ley nº XIV-0360-2004 (5721)

Ley XV-0390-2004 (5618)

Ley 5664

Provincia de Santa Cruz

Constitución provincial

Código de Faltas, 94

Código Procesal Penal, 228

Código Procesal Civil y Comercial,
422, 433

Ley 1749

Provincia de Santa Fe

Constitución provincial

Código de Faltas, 79, 81

Código Procesal Penal, 175, 178, 179

Código Procesal Civil y Comercial,
215, 216

Ley 3456

Ley 6898

Ley 8183

Ley 9286

Ley 12391

Ordenanza 7730 del 2/9/2004 de la
Ciudad de Rosario

Decreto 27151 del 3/3/2006 de la
Ciudad de Rosario

Provincia de Santiago del Estero

Constitución Provincial, 18, 53, 75

Código de Faltas, 79, 80, 81

Código Procesal Penal, 209, 216, 224

Código procesal Civil y Comercial,
448, 461

Ley 3662

Ley 5642

Decreto 159/1959

Reglamento interno del Poder
Judicial

Provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Constitución Provincial, 204

Código Procesal Penal, 219

Código Procesal Civil, Comercial,
Laboral, Rural y Minero, 392

Ley 192

Ley 285

Provincia de Tucumán

Constitución

Ley 5732

Código Procesal civil y Comercial,
316, 368

Ley 6507

Código Procesal Penal, 221

Decreto 2207/88

ARGENTINA - Normas no vigentes

Normas nacionales

Constitución Nacional (artículos
derogados): 67 inc.11 y 20, 99.

Código de Procedimiento Penal ley
2372, 275, 290

Código Civil de 1869 (ley 340), 18,
33, 43, 46, 75, 90, 103, 14, 168, 175,
264quater, 275, 306, 398, 475, 805,
833, 869, 990, 902, 1043, 1113,
1160, 1442, 2011, 3648, 3665, 3672,
3673/78, 3722 3739, 3740

Ley sobre reforma del clero del 21
de diciembre de 1822

Ley 85 de la Confederación, de 18 de
agosto de 1856

Código de Comercio (ley 15), 22, 23.

Ley 140 de la Confederación del 16
de septiembre de 1857

Código Penal de 1886 (Ley 1920), 44,
84,131, 147, 180

Ley 207 de la Confederación del 1º
de julio de 1859

Código de Justicia Militar Ley 14029,
105, 213, 259, 474, 746, 871

Ley 75

Ley 12990

Ley 186

Ley 13.966

Ley 623

Ley 14032

Ley 893

Ley 14.777

Ley 1420

Ley 18038

Ley 2393

Ley 19134

Ley 3318

Ley 19798

Ley 4031

Ley 22285

Ley 4161

Ley 23515

Ley 4707

Ley 24195

Ley 8871

Decreto Ley 29.375/44

Ley 11387

Decreto Ley 333/58

Ley 11738

Decreto Ley 412/58

Ley 12913

Decreto Ley 5044/63

Decreto del 24/10/1857
Decreto del 22/4/1867
Decreto del 31/7/1886
Decreto 1134/32
Decreto 14793/32
Decreto 11.576/46
Decreto 35.336/48

Decreto 1131/59
Decreto 510/76
Decreto 2037/79
Decreto 286/81
Decreto 146/95

Normas Provinciales

Provincia de Buenos Aires

Código Procesal Penal (LEY 3.589),
147
Ley 3619
Ley 5619
Ley 11961

Ley 12155
Decreto del 20/12/1833

Provincia de Entre Ríos

Código Procesal Penal (ley 4843),
244

Provincia de Mendoza

Ley 6513

Provincia del Neuquén

Constitución provincial (texto de
1957), 34, 69, 74 y 126

Provincia de Río Negro

Código Procesal Penal (ley 2107),
234

Provincia de San Luis

Código Contravencional (Ley VI-
0155-2004), 121/125

Provincia de Santiago del Estero

Constitución Provincial (texto anterior), 118, 136, 147, 152, 206,

207, 226

BOLIVIA

Constitución del Estado Plurinacional, arts. 4, 21, 30, 238
Constitución no vigente, art.50
Código Civil, arts. 1122

Resolución Suprema 219172 del 21 de julio de 2000
Decreto Supremo Nº 26.712 del 24 de julio de 2002

BRASIL

Constitución Federal, 5
Ley 6923 del 29 de junio de 1981
Ley 9982 del 14 de julio del 2000

COLOMBIA

Código Civil, arts.1022, 1068.
Código Penal, 104, 166, 170, 179, 180
Código de Procedimientos Civiles, 222
Código de Procedimientos Penal, 271
Ley 133 del 23 de mayo de 1994
Ley 270 de 1996
Ley 6696 del 8 de octubre de 1979

Convenio de Derecho Público nº I de 1997 (Decreto 354 de 1998)
Decreto 782 del 12 de mayo de 1995
Decreto 1445 del 30 de mayo de 1997
Decreto 1319 del 13 de julio de 1998
Resolución Nº 03074 del 06 de agosto de 1998 del Ministro de Defensa

COSTA RICA

Constitución Nacional, art.28
Código Penal, arts.201 al 208

CHILE

Código Civil, arts.514, 965, 1312, 1447, 2342

Código Penal, arts. 139, 140

Código Orgánico de los Tribunales, arts.256 y 332.

Ley 7612

Ley 19.638

Ley 19687

Decreto 155/2008 del 26 de mayo de 2008

Reglamento de Asistencia Religiosa de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por Orden General 2204 del 16/9/2008

ECUADOR

Constitución Nacional, art.157

Código Penal, arts. 133, 134, 171

Decreto Ejecutivo 1682 del año 2000

EL SALVADOR

Constitución Nacional, arts. 82

ESPAÑA

Código Civil, art.752

Ley de Enjuiciamiento Criminal, 417

Ley Orgánica 7/1980

Ley 24/1992

Ley 25/1992

Ley 26/1992

Real Decreto 2398/1977

Real Decreto 822/2005

Real Decreto 176/2006

Real Decreto 710/2006

Real Decreto 1613/2007

Ley 40/1991 de Cataluña

Ley 10/2008 de Cataluña

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Oregon Evidence Code

FRANCIA

Decreto 64-498 del 1 de junio de 1964

Decreto 247 del 15 de marzo de 2005;

Decisión del 16/3/2005 del Ministro de Defensa

GRECIA

Código Penal, 175, 176

GUATEMALA

Constitución Nacional, 186

Código Civil, 92, 926

Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (Decreto del Congreso 72-90)

HONDURAS

Constitución Nacional, 77, 198, 238, 249

ITALIA

Código Penal, 403

Ley nº 85 del 24 de febrero de 2006

Acuerdo firmado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con la República Italiana, el 4/4/2007

MÉXICO

Constitución Federal, 5, 130

Código Penal Federal, 404

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25 y 77.

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Decreto del 6/11/2003

Ley del 28 de febrero de 1925 del estado de Tabasco (no vigente)

NICARAGUA

Constitución Nacional, 134 y 149

PANAMÁ

Constitución Nacional, 42.

PARAGUAY

Constitución Nacional, 121, 197, 235

PORTUGAL

Ley de libertad religiosa 16/2001

URUGUAY

Código Civil, arts.29, 839

Código Penal, art.306

Ley 9943

VENEZUELA

Constitución de la República, arts. 227

II. NORMAS INTERNACIONALES

TRATADOS MULTILATERALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Convención sobre los Derechos del Niño.

Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR.

Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra.

Convenio de Ginebra relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra.

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra Relativo a la Protección de las

Víctimas de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II).

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).

Declaración Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones.

Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional.

"Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)" (Resolución 70/175 de la Asamblea ONU).

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas AG/RES.2088 (XLVI-O/16)

CONCORDATOS Y ACUERDOS CON LA SANTA SEDE

Argentina (1966)

Argentina sobre Jurisdicción Castrense (1957 y 1992)

Albania (2002)

Andorra (2008)

Bolivia (castrense)

Bosnia-Herzegovina (2006)

Brasil (1989)(2008)

Colombia (1973) (1992)

Croacia (1996)

Ecuador (Modus Vivendi 1937)(1978)

Eslovaquia (2002)

Estonia (1995)

España (1953) (1976) (1979)

Gabón (1997)

Haití (1984)

Italia (1984)(2006 notas reversales)

Letonia (2000)

Lituania (2000)

Mónaco (1981)

Paraguay (2002)

Perú (1980)

Polonia (1993)

Portugal (2004)

República Dominicana (1954)

Túnez (1964)

Venezuela (1964) (1994)

DIRECTIVAS DE LA U.E.

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000

III. NORMAS DE ORDENAMIENTOS CONFESIONALES

Iglesia Católica

Código de Derecho Canónico, cánones 207, 230, 232-264, 266, 267, 271, 281, 283, 285, 287/292, 370, 371,402, 538, 588, 607,643, 656, 657, 668, 671, 672, 688, 707, 723, 726, 735, 736, 742,759, 766, 910, 976, 983/984, 1008, 1009, 1024, 1035, 1087, 1088, 1333, 1350, 1388, 1050, 1274, 1458,1550.

Código de Cánones de las Iglesias Orientales, c.371, 385

Catecismo de la Iglesia Católica.

Constitución Apostólica *Spirituali Militum Curae*

"Normae de Gravioribus Delictus", 15/7/2010

Decreto general acerca del delito de atentada ordenación sagrada de una mujer, Congregación para la Doctrina de la Fe, 19/12/2007

Instrucción *Sollemne semper* de la Sagrada Congregación Consistorial, 23/4/1951.

Carta *Ad exsequendam ecclesiasticam legem* de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 18/5/2001.

Decreto 638/87 de la Congregación para los Obispos, 21/9/1989

Decreto General de la Congregación de la Doctrina de la Fe de fecha 23 /11/1988

“Carta circular” de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 3/5/2011

Decreto General aprobado en la 58ª Asamblea Plenaria de la CEA, 6/3/1990.

Otras confesiones religiosas

Reglamento de la Iglesia Metodista Argentina, arts.701 y 702